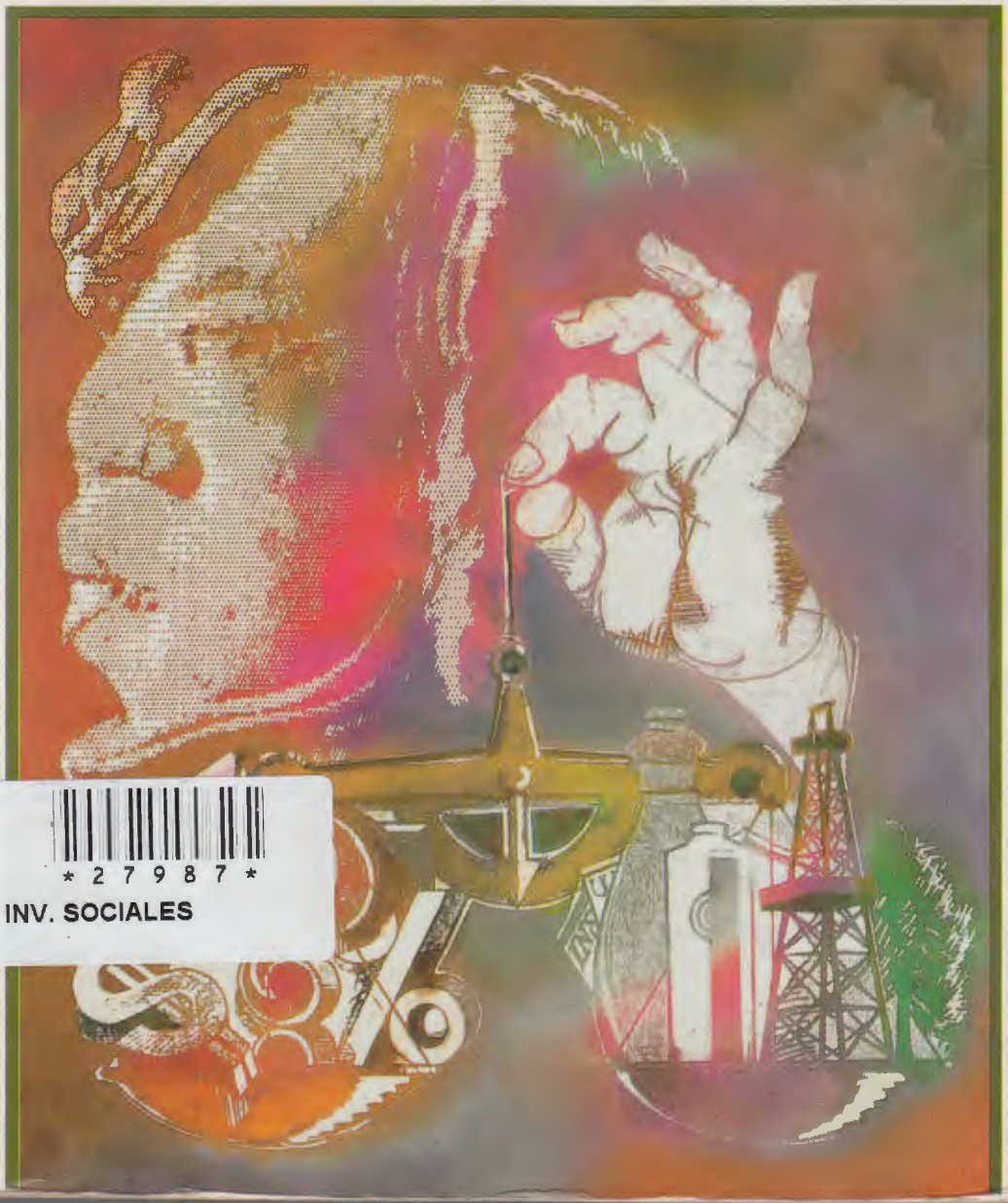
Espasa → Mañana

Alain Touraine

América Latina
Política y sociedad



* 2 7 9 8 7 *
INST. INV. SOCIALES

N.C. 8428

Ensayo

Alain
Touraine

América Latina
Política y sociedad

Traducción:
Mauro Armiño

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Espasa Calpe

Diseño colección: Alberto Corazón
Dibujo cubierta: Ariette Imbert

Título original: *La parole et le sang*
Politique et société en Amérique Latine
© Editions Odile Jacob, marzo 1988
© De la ed. cast.: Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1989
Depósito legal: M-20.105-1989
ISBN: 84-239-2446-7

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Impreso en España
Printed in Spain

Talleres gráficos de la Editorial Espasa-Calpe, S. A.
Carretera de Irún, km. 12,200. 28049 Madrid

Índice

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

PRESENTACIÓN A LOS LECTORES DE LENGUA ESPAÑOLA 15
INTRODUCCIÓN 19
1. Entre el orgullo de la razón y las identidades ciegas 19
2. A riesgo de decepcionar 24
3. Entre el temor y la esperanza 28
Agradecimientos 29

PRIMERA PARTE

LOS ACTORES DEL DESARROLLO

1.—EL DESARROLLO DE LA AMÉRICA LATINA 35
1. Fuerzas y debilidades 35
Elementos negativos 35
Elementos positivos 39
Construcción de un esquema de análisis 43
2. Los modos de desarrollo 46
Los modos nacionales civiles 48
Los modos estatales 49
Los modos poscolonial y dependiente 50
3. De la situación a la acción 51
Debilidad de los actores de clase 51

DS-27987

Privilegiados y excluidos 52
Movilidad 52
Predominio de las categorías políticas 53
2.—¿EXISTEN CLASES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA? 56
1. Los trabajadores agrícolas 56
2. El sector informal urbano 63
3. Los obreros 71
4. La oligarquía 77
5. La clase media 85
6. Los sistemas de estratificación 90

SEGUNDA PARTE

LAS FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA

1.—VIDA PRIVADA, VIDA PÚBLICA 101
1. Entre la tradición y la modernidad 101
Los caciques 101
Las mujeres y la modernización 104
2. Las Iglesias y la política 108
Secularización y religiones populares 108
La teología de la liberación 112
Juan Pablo II 122
3. Masa y movilidad 125
Jóvenes ciudadanos y jóvenes excluidos 125
Debilidad de la opinión pública 128
2.—DE LAS DEMANDAS SOCIALES A LA ACCIÓN POLÍTICA 131
1. Las tres dimensiones de la acción colectiva 131
2. La desarticulación 136
La hiperautonomía de los actores políticos 137
El partido intelectual 139
3. Violencia y «convivencia» 151
Conclusión 156

TERCERA PARTE

INTERVENCIONES DEL ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

INTRODUCCIÓN 161
Características generales de los movimientos sociales 161
1.—LAS POLÍTICAS NACIONAL-POPULARES 165
1. El populismo 165

BIBLIOTECA
IISUNAM

La experiencia populista 165
Los elementos del populismo 166
El Estado domina la sociedad 167
Masa, pueblo, nación 169
2. Partidos y Estados nacional-populares 171
Los partidos de tendencia populista 171
Los Estados nacional-populares 180
El populismo militar 184
3. México y Brasil: burguesía de Estado y política nacional-popular 187
4. Estados y movimientos antipopulares 193
Los Estados antipopulistas 193
Los fascismos 195
Los movimientos de clases dirigentes 195
5. La acción y el discurso 196
El poder nacional-popular 196
¿Acción política o situación de clase? 198
Revolucionarios sin revolución 200
El discurso populista 201

2.—LAS LUCHAS CAMPESINAS 205
1. La comunidad en crisis 206
Los mesianismos 206
Los Cristeros 208
Las Ligas Campesinas 209
Indianidad e indianismo 210
El katarismo 212
2. La defensa de la tierra 214
El zapatismo 215
Los campesinos sin tierra 216
El valle de la Convención 220
3. Un sindicalismo dependiente 222
4. La modernización inducida 226
Bolivia 228
La reforma agraria chilena 230

3.—¿EXISTEN MOVIMIENTOS URBANOS? 235
1. La ilusión revolucionaria 235
Las «clases peligrosas» 235
Los «campamentos» 236
Las luchas urbanas 238
Defensa comunitaria y dependencia política 240
2. ¿Nuevos movimientos sociales? 243
El «movimentismo» 244
La defensa de la identidad 245
3. Protesta moral y movimiento histórico 247

BIBLIOTECA

4.—El sindicalismo obrero 253
1. Sindicalismo y políticas nacional-populares 254
Nudos y enclaves 254
«Pelegos» y «charros» 257
Sindicalismo y gobiernos «populares» 263
2. ¿Hacia la independencia sindical? 265
Estados autoritarios y autonomía sindical 265
Los sindicatos y la democratización 270
3. La doble función del sindicalismo 275
4. Las formas de acción sindical 277
Reivindicaciones y negociaciones 277
El pacto social 280
La orientación política 281
Conclusiones de la tercera parte 285

CUARTA PARTE

LAS FRONTERAS DEL SISTEMA NACIONAL-POPULAR

Introducción a las partes cuarta y quinta 293
1. Una democracia limitada 297
Subdesarrollo y sobredesarrollo políticos 297
Las tres funciones de los partidos políticos 297
Las tres funciones de los partidos políticos 299
2. Sistema político y fuerzas sociales 303
La democracia oligárquica 303
La democracia antioligárquica 306
El gobierno de las clases medias 307
Del populismo al parlamentarismo 309
3. Rupturas del sistema político 312
La crisis del Estado de compromiso 312
La destrucción de la democracia chilena 315
2.—De las guerrillas al poder revolucionario 320
1. La violencia política 320
2. Las guerras de liberación nacional 322
Guatemala 324
La Nicaragua sandinista 325
Lucha social revolucionaria en El Salvador 332
3. Fidel Castro y el foquismo 333
Fidel Castro y Régis Debray 333
El poder revolucionario cubano 335
Las guerrillas castristas 343
4. El comunitarismo revolucionario 346

BIBLIOTECA
IIS UNAM

Colombia 346
Perú 348
5. El nacionalismo revolucionario 350
Tupamaros y Montoneros 350
La descomposición del populismo revolucionario 351
3.—El Estado antipopular 354
1. Dos falsas interpretaciones 354
2. Las formas de la intervención militar 356
La unidad nacional y la oligarquía 358
El Estado patrimonial 360
La represión en América central 361
3. Las dictaduras antipopulares 363
Las teorías del Estado autoritario 366
¿Más allá de la represión? 369
¿Un proyecto económico y social? 372
Vigilar y castigar 375
Conclusiones 377

QUINTA PARTE

CRISIS Y DEMOCRATIZACIÓN

1.—La crisis financiera y económica 381
Introducción: frente a la crisis 381
1. Los factores externos 382
2. Los factores internos 385
3. La deuda externa 387
4. Los efectos de la crisis 393
El choque 393
La capacidad de respuesta 397
La crisis como mutación político-económica 398
2.—La democratización 404
Introducción: una idea nueva 404
1. La caída de las dictaduras 407
Misión cumplida 408
Los mecanismos externos de derrocamiento de las dictaduras 408
Los mecanismos internos 412
Los obstáculos a la democratización 415
Apertura y reacción autoritaria 416
2. Las posibilidades de la democracia en América Latina . 419
La formación del espacio público 421
La separación del Estado y del sistema político 424
Un principio de igualdad 427

BIBLIOTECA
IISUNAM

La autonomía de los actores sociales 428
El futuro de la democracia 431
3. La crisis y las transformaciones del sistema político 434
Entre dos aguas 434
¿Hacia unas políticas de clase? 437
La resistencia del Estado nacional-popular 439
El desbordamiento sin revolución 441
Cambio de modelo 443
CONCLUSIÓN ¿Puede desarrollarse América Latina? 447
REFERENCIAS CRONOLÓGICAS 457
BIBLIOGRAFÍA 467
ÍNDICE ALFABÉTICO 503
ÍNDICE TEMÁTICO 511
ÍNDICE DE PAÍSES 515

INVESTIGACIONES SOCIALES
BIBLIOTECA NACIONAL DE MEXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

Para Adriana
este libro que no habría sido posible sin ella;
para ella está escrito.

Presentación a los lectores de lengua española

Este libro no es la traducción al español de un libro francés. En primer lugar porque éste fue escrito en América Latina y, en una primera versión, en español, antes de ser transformado y aumentado para su publicación en francés. Luego, y sobre todo, porque su objeto es comprender los actores y las formas de acción colectiva en la América Latina del siglo XX, y porque semejante objetivo no pudo alcanzarse si el autor se considera completamente extraño a aquellos a los que estudia y mira, por así decir, desde fuera.

Esta obra no es sólo el resultado de mi trabajo en América Latina; es la expresión de mi progresiva entrada, hace más de treinta años, en el universo social, cultural y político de América Latina. Me ha aportado una segunda vida, paralela a la que me ha proporcionado Francia, donde he nacido, vivido y trabajado. Mientra mi mujer, natural de Chile, se volvía francesa, yo pretendía, en un movimiento complementario, hacerme latinoamericano, y ese movimiento de vaivén entre dos continentes me ha ayudado también a descubrir la doble riqueza de España, europea y americana.

Algunos europeos han ido a América Latina para encontrar allí lo que les faltaba en su país. No ha sido ése mi caso, y de buen grado he abordado la América Latina por sus lugares menos folclóricos, los menos «calientes», de suerte que nunca he tenido que convertirme a una civilización que en muchos aspectos encontraba cercana de aquella en la que había crecido. Dado que no buscaba el extrañamiento, he compren-

dido mejor las intenciones y los modos de pensar y de obrar que fui encontrando. Lo que he hallado en América Latina es la disociación de mi experiencia vivida y de mi reflexión intelectual, el reconocimiento de la multiplicidad de los sistemas sociales y políticos, y, por tanto, la visión del mundo como un teatro de actores múltiples, ni completamente diferentes unos de otros ni sometidos a las mismas reglas universales.

Es más difícil ser sociólogo que historiador o etnólogo: quien mira su misma sociedad ¿no ve su propio rostro en el espejo? ¿No es prisionero de la posición que ocupa en el mundo que, en teoría, mira objetivamente? ¿No es a la vez juez y parte? La única respuesta a esta dificultad, que en principio parece insoluble, es saltar fuera del círculo. Es bueno ser historiador y colocar de nuevo la sociedad propia en el conjunto más amplio y en una duración más larga que la de la experiencia vivida; pero n se vuelve auténticamente sociólogo de otra forma que adquiriendo un conocimiento profundo de una sociedad viva distinta a la suya. Deseo que cada sociólogo pueda estudiar realidades que pertenezcan unas al primer mundo, al de los países industrializados democráticos, otras al segundo, el de los países comunistas, otras también a ese conjunto cada vez más diversificado que todavía se llama el Tercer Mundo. He dedicado una investigación a *Solidarnosc* estudiando, en mucha ciudades y fábricas, ese gran movimiento social, nacional y democrático que sublevó a Polonia en 1980-81 y que está de nuevo, en 1989, en el centro de las transformaciones de ese país. Pero, sobre todo, he encontrado a la América Latina y he construido con ella una parte de mi vida y de mi trabajo. Espero que este desdoblamiento de mi experiencia vivida me haya vuelto mejor sociólogo.

La meta principal de este libro no es dar a conocer mejor la América Latina, a mí mismo y a mis lectores, aunque esté consagrado por entero a comprender la lógica de los actores y de los sistemas de acción propios de ese continente y de sus diversas partes; la meta principal es enseñar a cada uno de nosotros a dialogar con un mundo diferente al suyo y, por consiguiente, a comprender mejor a un tiempo los caracteres particulares de cada parte del mundo y la naturaleza del sistema que forman todos estos actores, a pesar de la diversidad de sus lenguas y de sus gestos.

Una de la tareas más urgentes de nuestra vida intelectual es elaborar categorías e ideas que no corresponden solamente a la experiencia de los países que fueron los primeros en entrar en eso que se ha denominado la modernidad, sino que son lo suficientemente amplios para comprender realidades muy diversas. Hoy no es posible ya presentar una teoría de la revolución que compare solamente las experiencias americanas y francesas; hay que reflexionar otro tanto sobre las revoluciones mexicana, boliviana o nicaragüense. No podemos quedar satisfechos con una concepción del Estado que da cuenta casi únicamente de las realidades inglesa, francesa y alemana; debemos reflexionar otro tanto sobre la experiencia

de Brasil o de México. Es imposible hablar de clases sociales en términos que corresponden únicamente a los países europeos industrializados. ¿Tiene esa noción el mismo sentido en Argentina o en Guatemala? Este libro busca por tanto, ante todo, introducir las realidades latinoamericanas en el campo general de las ciencias sociales, y, para conseguirlo, modificar muchas nociones que utilizan esas ciencias. Si esta obra se dirigiera sobre todo a los europeos, habría sido menester que tuviese un poco de ese encanto descentrado de los libros de viajes; de hecho, se dirige sobre todo a los latinoamericanos mismos, como atestigua su bibliografía, llena de trabajos suyos, que participan de su esfuerzo por relacionar de forma más estrecha su historia particular con los análisis generales del mundo contemporáneo.

Me alegro que sea España el camino por el que este libro vuelva a su tierra de origen. Mi mejor recompensa sería que fuera considerado, al menos por algunos, como un libro latinoamericano.

ALAIN TOURAINE*

* Junto a este prólogo para la traducción española, con fecha 3 de mayo de 1989, Alaine Touraine envió algunas *addendas* finales firmadas por él y por Gilbero Duras, que incluimos sin más referencia. *[N. del T.]*

Introducción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
BIBLIOTECA
INVESTIGACIONES SOCIALES

1. Entre el orgullo de la razón y las identidades ciegas

Durante demasiado tiempo se ha definido a los países por su nivel de desarrollo o de subdesarrollo, sobrentendiendo de este modo que todos los caminos llevan, si no a Roma, al menos a Londres o a Nueva York. Esa candidez ya no es de recibo. Ya no cree nadie que la Razón haya encarnado en un modelo social único y triunfante. Los Estados Unidos se han debilitado en Vietnam y se ven seriamente amenazados por la competencia de Japón; incluso las mismas naciones europeas dudan, y los conflictos que se han desarrollado a uno y otro lado del Atlántico han venido a recordar, precisamente, que ninguna nación es hija de la Razón, como tampoco ninguna es la preferida de los dioses.

La imagen de la larga caravana de naciones, a cuya cabeza marcharían los Estados Unidos y que cerrarían las naciones más pobres de África y de Asia, ha sido sustituida por la imagen de la divergencia creciente de tres mundos: el primero, el del Occidente denominado capitalista, aparece cada vez más dominado por las leyes del mercado y las demandas de los consumidores, pero también por la búsqueda del poder; el segundo, el del Este comunista, es el mundo de los Estados que han devorado su sociedad y que combinan un autoritarismo modernizador con una burocracia represiva; el tercero no es ya el de los países en desarrollo, sino el de la defensa angustiada o agresiva de una identidad y de una comunidad que líderes nacionalistas, laicos o religiosos, juzgan amena-

zadas por la penetración de Occidente y, más raramente, por la del comunismo. El Este y el Oeste se oponen menos ideológica o políticamente que militarmente, pero el Sur contempla el ascenso de lo que se denomina integrismo o fundamentalismo y del que el islamismo no es más que una de las formas. En un tercio del mundo, la economía parece mandar en todo; en otro reina la política; en una parte de este último, un orden nacionalista o religioso crea una forma de totalitarismo más completa y más intolerante que el poder soviético. Tales imágenes están simplificadas y resulta fácil mostrar que esos tres modelos de sociedad coexisten en gran número de países combinándose o combatiéndose. Pero son lo bastante sorprendentes para convencernos a cada uno de nosotros que el mundo no posee la unidad que le prestaban los orgullosos ideólogos de la modernización. No dudaban en hablar en nombre de lo universal demostrando la superioridad de su país o de su régimen sobre el resto del planeta, y, por consiguiente, su derecho a servir a éste de guía y protector; su imagen de la unidad del mundo se ha hecho añicos.

El optimismo precedente de la filosofía de las Luces se había visto sacudido por la crisis del capitalismo, por la extraña derrota de las democracias frente al ascenso de las dictaduras y por el atractivo que el régimen soviético ejerció sobre muchos. Sin embargo, los puentes no habían quedado nunca completamente rotos entre quienes hablaban de modernidad o de racionalización y los que eran más sensibles a las luchas de clases, al ejercicio del poder y a los movimientos sociales. Pero ¿existe en la actualidad todavía un lenguaje que pueda ser comprendido a un tiempo en Nueva York, en Moscú y en Teherán? En el Oeste se dejan oír muchos discursos que intentan eliminar a los actores de la sociedad y moldear las ciencias del hombre según el modelo de las ciencias de la naturaleza; además la búsqueda de la especificidad nacional y la afirmación voluntarista de una convicción son portadoras de guerra santa; del otro lado se sigue evocando una revolución científica y técnica que permitiría superar las contradicciones sociales. La distancia, todavía reducida, que separaba en el siglo pasado el economismo inglés del voluntarismo alemán o japonés, igual que la distancia, mayor, que enfrentaba los populismos al liberalismo, se vuelve infranqueable cuando separa las teorías occidentales de las organizaciones, de las decisiones y de las estrategias, de la búsqueda de la integración social y de la especificidad cultural que fascina a tantos intelectuales de los países antaño colonizados.

El modelo occidental se define él mismo no como una forma de modernización, sino como la modernidad misma; y su orgullo consiste en afirmar que la modernidad puede imponerse por su propia fuerza, por la irresistible corriente que lleva hacia la racionalización, la secularización y una mayor eficacia. Las corrientes dominantes del pensamiento occidental siempre han supuesto que los cambios fundamentales eran endógenos. El modelo comunista, sobre todo soviético, acepta en principio la misma definición de la modernidad y reivindica la herencia de la filoso-

fía de las Luces, pero apela al Estado y a la Revolución para vencer los obstáculos internos y externos al triunfo de la modernidad, construyendo así una sociedad que se caracteriza más por la empresa del Estado-partido que por la modernidad misma. Finalmente, una parte del mundo aparece dominada por una apelación a la identidad que rechaza no sólo las dominaciones exteriores e interiores, sino el tema mismo de la racionalización.

No acepto la pretensión de Occidente de identificarse con la modernidad. No es de recibo después de tantas guerras intraeuropeas o coloniales, después de la gran crisis de los años treinta y los horrores del nazismo. El éxito económico del Japón ha demostrado con brillantez que modernidad y modernización no eran las dos caras de la misma moneda, puesto que ese país ha construido su modernización apoyándose en sus tradiciones y recurriendo a formas de organización y de motivación que no están consideradas como modernas por los expertos de las *business schools* americanas. Y, sobre todo, ¿cómo no oír las inquietudes de los mejores sociólogos y de los grandes escritores ante el carácter destructor de una sociedad de «consumo» que sacrifica todo al dinero, que destruye toda imagen del Sujeto, que reduce la vida social al enfrentamiento de los intereses y de las estrategias? Y a la inversa, son poquísimos los que, hablando con toda libertad, renuncian a la idea de desarrollo y la someten por entero a la de identidad cultural, es decir, al nacionalismo. Los intelectuales reunidos por la Universidad de las Naciones Unidas bajo la dirección de Anuar Abdel-Malek han llevado lejos la defensa de la especificidad cultural de cada nación o zona del mundo, pero les ha sido difícil rechazar cualquier definición del crecimiento o del subdesarrollo. Ese mismo problema se plantea en todas las partes del mundo: ¿cómo se combinan los atributos de la sociedad moderna y las fuerzas culturales y políticas de modernización —de maneras desde luego diferentes en las diversas partes del mundo— para formar lo que puede llamarse modos de desarrollo?

Esta pregunta nos lleva de forma casi natural hacia América Latina. ¿No está, en cierto modo, en el centro del mundo, a la misma distancia del Oeste, del Este y del Sur, o, para hablar de otro modo, no es la zona más débilmente definida del planeta, aquella en que se combinan de la forma más cambiante los tres modelos con que cada uno tiende a dominar una vasta zona geopolítica? Que la América Latina sea la «clase media» de los continentes o una zona frágil debido a su misma complejidad, parece un terreno ideal para el análisis y la reflexión: la idea de modernidad está en ella por todas partes presente, junto a la voluntad de crecimiento económico, la confianza en la educación y la búsqueda de la participación política y social. Pero, por su parte, la idea de revolución se halla tan difundida que la historia del continente parece dominada por revoluciones, desde la de México en 1910 a las de Bolivia en 1952, de Cuba en 1959 y de Nicaragua en 1979. Por último, el nacionalismo, la

búsqueda de la identidad cultural y la lucha contra la dominación extranjera, ¿no han sublevado de forma constante este continente, desde México, orgulloso de sus cimientos prehispánicos, a los países andinos, donde el tema de la indianidad se mezcla a reivindicaciones campesinas? En las clasificaciones de los organismos internacionales, América Latina pertenece a lo que Alfred Sauvy llamó, en 1952, el Tercer Mundo, pero también pertenece al mundo occidental de donde le llegaron sus lenguas principales, sus conquistadores y la gran mayoría de sus inmigrantes, y está unida al mundo comunista no sólo por los gobiernos de Cuba y de Nicaragua, sino también por la acción y el pensamiento de muchos grupos, de movimientos, de partidos y de líderes revolucionarios. ¿No es mirando este continente tan diverso y tan cambiante como se puede comprender mejor las relaciones que unen y oponen el crecimiento económico, el poder político y las ideologías culturales?

Los modos de acción social y política en América Latina casi nunca han estado dominados por un principio único: ¿cómo defender un liberalismo económico absoluto y remitirse a las leyes del mercado cuando la dependencia respecto del exterior entraña distorsiones tan evidentes en el desarrollo económico? ¿Cómo apelar al enfrentamiento de clases cuando una gran parte de la población pobre está más excluida que explotada, y cuando las clases medias, importantes en todas partes, apelan más a una participación amplia que a la violencia política? ¿Cómo ser integrista en un continente que no posee casi ninguna homogeneidad cultural, ni étnica, ni religiosa, ni ideológica? Como revancha, la gran tentación latinoamericana ha sido siempre el *populismo,* es decir, el deseo del cambio en la continuidad, sin la ruptura violenta que conocieron las industrializaciones capitalista y socialista. Ilusión, claro, porque no hay desarrollo sin discontinuidad y sin desgarramiento, pero la idea, cara a la sociología clásica, del paso cuasinatural de la irracionalidad a la racionalidad, de la comunidad a la sociedad, ¿no es también completamente ilusoria? La América Latina nunca ha rechazado ni la idea de la racionalización ni la de movilización política y cultural, que apela forzosamente a la nación más que a la razón, a la independencia más que al crecimiento. Está aferrada al mismo tiempo a los tres mundos.

Inmediatamente surge la objeción: al negarse a escoger entre el racionalismo capitalista y el voluntarismo socialista o neocomunitario, ¿no se condena la América Latina a la confusión de las terceras fuerzas —*terceristas*— que favorecen a las clases medias y su deseo de participación y de consumo, en detrimento, a la vez, de la inversión productiva y de la lucha contra la miseria? Objeción fuerte cuya terrible pertinencia podrá medirse a lo largo de estas páginas, pero que no puede impedirnos plantear la cuestión central, la que proporciona al estudio de la América Latina un interés más que regional, dado que nos conduce hacia la comprensión del desarrollo, es decir, de los mecanismos de paso de un tipo de organización económica y social a otro marcado por un nivel más

elevado de productividad y de capacidad de acción de la sociedad sobre ella misma: ese desarrollo ¿es triunfo de la racionalidad, voluntad de independencia, o todavía resulta una búsquea de identidad? O más bien, ¿cómo es posible combinar ese fin, la racionalización, y ese medio de llegar a él: la movilización de una cultura, de una sociedad y de un poder?

Este libro partirá de la hipótesis de que existe un *modo latinoamericano de desarrollo,* es decir, una combinación, propia de ese continente, de racionalismo económico y de movilización política y social.

Acepta, por tanto, como punto de partida la idea, rechazada de forma tan constante, de que la *América Latina* constituye un conjunto y posee cierta unidad. Nadie ignora que hay tantas diferencias entre Uruguay y El Salvador como entre Suecia y Grecia, lo cual ha llevado a muchos a ver en la idea de América Latina una construcción europea. Juicio que, materialmente, es exacto, porque la expresión apareció primero en París, debida a la pluma, cierto, de autores colombianos, en la primera mitad del siglo XIX, y para dejar a un lado la idea de *Hispano-América.* Pero no trataremos de hacer revivir un culturalismo peligroso al salir en busca del espíritu de la América Latina o incluso de su cultura. Es por su modo de desarrollo, por su forma de combinar la economía, la política y la ideología, como definiremos la especificidad y la unidad de la América Latina. Lo cual nos llevará a ver cómo se refuerza esa unidad a veces y cómo en otros momentos, en particular en los años ochenta, se disuelve. Los límites geográficos de nuestro estudio están, por tanto, más o menos claro: se extienden al conjunto de países independientes de América Latina y del Caribe. Sus límites históricos son más borrosos, pero apuntan al conjunto del período que comenzó con las primeras formas de reivindicaciones sociales y de transformaciones políticas que rompían con la dominación de una oligarquía dueña de las exportaciones y, por consiguiente, del Estado. La revolución mexicana inicia esta historia moderna del continente, pero el movimiento de Reforma universitaria, nacido en 1918 en el otro extremo del continente, tiene casi la misma importancia, dado que es contemporáneo de la victoria de Yrigoyen en Argentina y de la de Alessandri en Chile; es decir, es contemporáneo del desbordamiento de las oligarquías exportadoras y entrañó el nacimiento del APRA en el Perú. El corte significativo resulta más tardío en Brasil, donde la llegada de Getúlio Vargas al poder en 1934 marca el fin de la *República Velha;* en Colombia, donde Alfonso López fue elegido presidente por primera vez en 1930; en Venezuela, donde la larga dictadura de Gómez no acaba sino en 1935; en Bolivia, donde la guerra del Chaco (1932-1935) entraña cambios políticos profundos, y más todavía en Guatemala, donde no será hasta la llegada al poder del presidente Arévalo en 1945 cuando se inicien las grandes transformaciones sociales y políticas. Por tanto, es más de medio siglo de historia de un continente entero lo que debe servir de apoyo a nuestro análisis de las *categorías de la acción social y política* y del modo de desarrollo de la América Latina.

Al final del libro el lector encontrará algunas referencias cronológicas, pero el conjunto del texto permanecerá cerca de los acontecimientos y deseo que pueda ser utilizado tanto por historiadores como por sociólogos y politólogos.

Este libro no aporta ni un relato de los acontecimientos ni un análisis de las instituciones; pretende aclarar *las formas de la acción social y política, las maneras de hacer política* en América Latina. Tarea primordial, en mi opinión, porque, de no aceptar esa carga, corremos el riesgo de trasladar al continente latinoamericano unas nociones elaboradas y utilizadas en Europa, en América del Norte o en la Unión Soviética y multiplicar los contrasentidos.

2. A riesgo de decepcionar

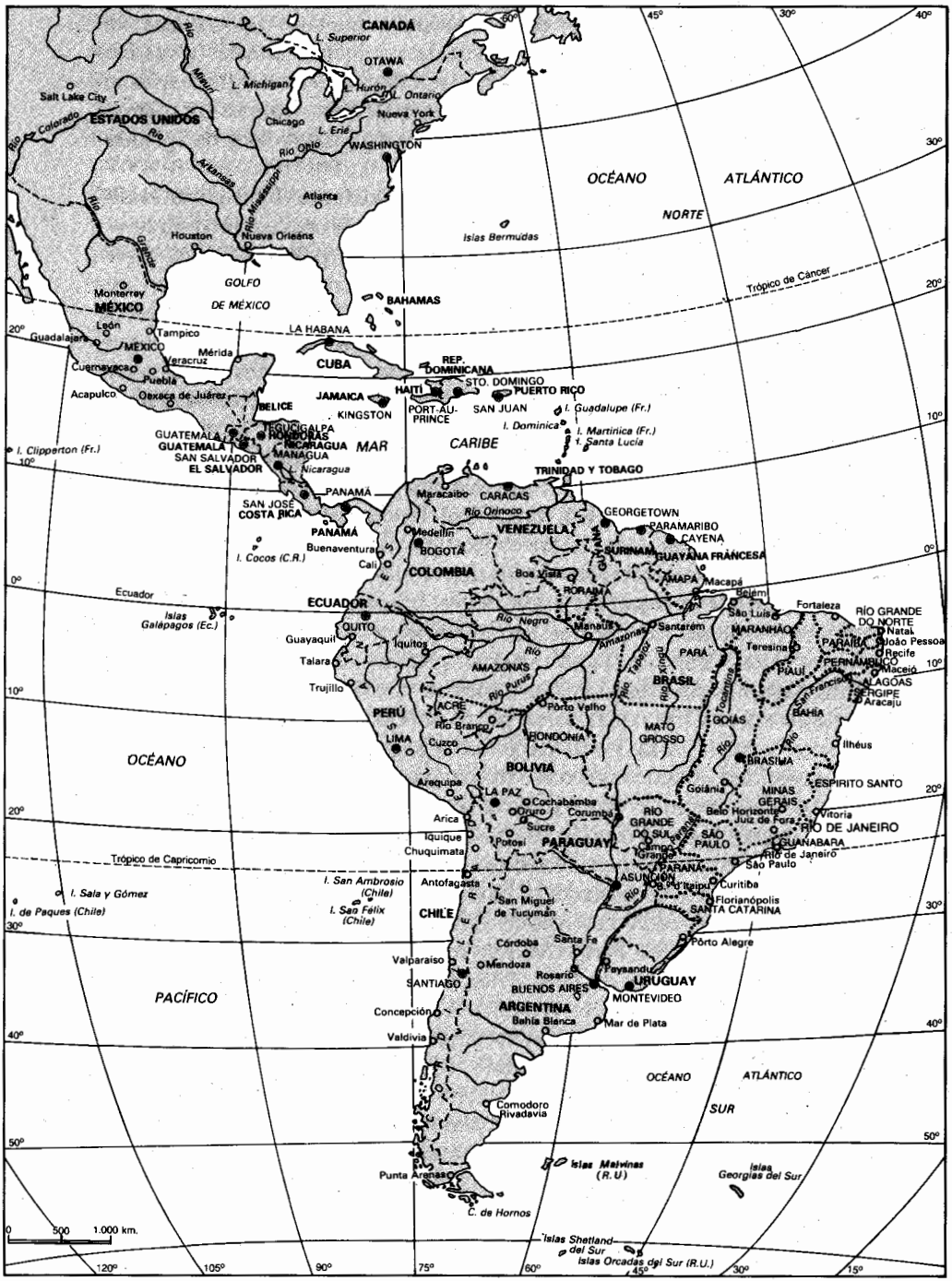
Antes de seguir adelante, el autor debe volverse hacia su lector, sobre todo si éste es francés o vive en Europa occidental o en América del Norte, para advertirle que la imagen de América que este libro va a aportarle es distinta de aquellas a las que está acostumbrado y que tal vez le hayan impulsado a abrir este libro. Existen dos imágenes principales de la América Latina. Para muchos es el continente de la miseria y de la represión, simbolizadas por las dos imágenes más fuertes que de ella nos llegan: de un lado, los campesinos pobres del *Sertão* del Nordeste brasileño o los habitantes de los barrios de Recife, *flagelados,* heridos por el hambre y la enfermedad; del otro, el general Pinochet, autor de uno de los golpes de Estado más sangrientos del siglo, que llegó al poder pasando por encima del cuerpo de Salvador Allende y las ruinas de la más sólida democracia del continente. Para otros, por el contrario, es la tierra de los orígenes, continente desbordante de una vida que nutre tanto la poesía de Pablo Neruda como la de Octavio Paz, tanto las novelas de Gabriel García Márquez como las de Ernesto Sábato o Mario Vargas Llosa, pero también, de forma más cotidiana, las danzas y los cantos que ponen en movimiento a las escuelas de samba o a los grupos de *reggae.* Continente de tanta vida y de tanta muerte que atrae y repele a la vez, que fascina a los ciudadanos bien protegidos pero cansados de los viejos países industriales.

Tales ideas no son falsas y se deben bien a la voluntad de denunciar la injusticia, bien al deseo de encontrar, lejos del control represivo de las emociones, el lenguaje ardiente de los tambores afro-brasileños o cubanos que ha impulsado a muchos investigadores y visitantes hacia América Latina. Sin embargo, este libro se resistirá constantemente a esas apelaciones. Hasta el punto, quizá, de ocultar demasiado, a veces, la cara «tropical» de la América Latina. Es que, desde mis primeras estancias en América Latina, en Santiago de Chile o en São Paulo —opciones así no pueden deberse al puro azar—, he querido luchar contra esa América

Latina construida por extranjeros para proyectar en ella sus miedos y sus esperanzas. Mi intento consiste en mostrar la América Latina tal cual existe para ella misma, mejor dicho, tal cual actúa sobre ella misma, tal como se produce y se destruye a través de sus luchas sociales y sus formas de poder político, el papel de sus notables y de sus Iglesias, la influencia de sus mujeres y de sus jóvenes; también tal como se transforma a través de crecimiento y crisis, de urbanización galopante y desigualdades crecientes.

Semejante elección supone una distancia bastante débil entre el observador y aquellos a quienes observa, porque retroceder demasiado no permitiría comprender a los actores observados, ponerse en su lugar. Pero se ha exagerado la distancia que separa Europa de la América Latina: la renta media de un latinoamericano está más cerca de la renta de un europeo que de la de un africano y, al menos durante medio siglo, hemos conocido el reverso de una deriva de los continentes: la distancia de nuestro Viejo Mundo con esa parte meridional del Nuevo Mundo no cesaba de disminuir. Aunque sea falso situar los países en una escala graduada del desarrollo económico, los economistas tienen razón cuando recuerdan los grandes parecidos que existen entre la América Latina del último medio siglo y los Estados Unidos o el Japón de finales del siglo XIX y de principios del nuestro. Europa y la América Latina parecen soldadas una a otra por el sur de los dos continentes, y no debemos olvidar que muchos inmigrantes partieron en busca de fortuna —*a hacer las Américas*— desde los puertos del Atlántico y del Pacífico Sur, tantos como a Nueva York o a San Francisco. ¿No era en otro tiempo Argentina un país más rico que España e incluso que Italia? Yo mismo he encontrado en el Chile anterior al golpe de Estado muchas huellas de la Francia de mi infancia en vísperas de la segunda guerra mundial. Con toda seguridad, cuanto más nos remontamos hacia el norte de cada uno de los dos continentes, tanto más aumentan las distancias sociales y culturales, hasta llegar al mundo caribe que remite a los países europeos la imagen mediocre de los efectos de su colonización. Mas prefiero correr el riesgo de insistir demasiado en la proximidad de los dos continentes a ceder ante la imagen de la América Latina como región subdesarrollada, formando parte de ese Tercer Mundo que inspira con tanta facilidad una mezcla de compasión y de desprecio. Además, con excesiva frecuencia se cultiva la imagen de una América Latina rural, cuando desde hace tiempo su población es muy mayoritariamente urbana y cuando algunas de las mayores metrópolis del mundo, México, São Paulo y Buenos Aires, están en América Latina. También con demasiada frecuencia no se ve en ese continente más que una pequeña oligarquía reinando sobre masas de peones en las *haciendas* y plantaciones, o sobre los marginados amontonados en las *favelas,* cuando las realidades y los mitos de las clases medias dominan desde hace mucho la política latinoamericana. Por último, a veces se cree ver reinar por todas partes una Iglesia excesiva-

AMÉRICA LATINA



mente engalanada, conservadora y muy preocupada por contentar a los militares, cuando en muchos casos la Iglesia católica misma ha impulsado la secularización y es, en más de un país, la principal fuerza de resistencia a la dictadura.

Este libro podría titularse simplemente: la América Latina en movimiento. No se encontrará en él ninguna referencia al alma latinoamericana o a los efectos de la colonización española; no creo que se pueda explicar una historia tan diversa y cambiante por factores tan macizos —y tan mal definidos—. Los dramas que aquí se evocarán son menos los de una miseria intemporal que los de los actores de una historia acelerada, cruzada por migraciones masivas, sublevaciones populares, represiones sangrientas, debates intelectuales, el paso de la esperanza revolucionaria al poder militar y a la idea democrática. Espero que acercando la América Latina a nosotros, y sobre todo acercándonos más a ella para verla no ya como un espectáculo, sino tal como ella se vive y se transforma, convenceré al lector de que la historia real de América Latina es más apasionante que los estereotipos que halagan nuestra buena o nuestra mala conciencia.

Mas si no he querido que este libro presente una América Latina en movimiento o en desarrollo es porque hemos perdido las ingenuas certidumbres de antaño, de la época en que no se trataba de otra cosa que de señalar los obstáculos a un desarrollo que parecía natural, casi tanto como el crecimiento de los individuos. Comparación tan seria que una parte de nuestra fascinación por los países en desarrollo procedía de la conciencia difusa de nuestro propio envejecimiento. Si este libro se centra en los actores de la América Latina es porque el futuro del continente es incierto, porque puede orientarse hacia la crisis y la descomposición tanto como hacia un crecimiento asociado a una reducción progresiva de las desigualdades y de las distancias. El autor no necesita ninguna habilidad especial para crear en su libro un largo suspense. ¿Puedo incluso confesar aquí, antes de empezar, que en el transcurso de los largos años de preparación de este libro, a veces me ha asaltado la idea de cambiar de pronóstico? Durante mucho tiempo creí en la modernidad conquistadora de la América Latina, luego el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile me hirió personalmente; me he sentido exiliado de ese país, enn el que durante diez años no he vuelto a poner los pies, como me he sentido herido por las torturas y el exilio infligidos a mis amigos brasileños y más tarde uruguayos y argentinos.

Pese a sus resultados económicos aparentemente brillantes durante este período, dudé entonces del futuro de América Latina. Pero, de modo en apariencia paradójico, cuando la crisis se desencadenó a partir de 1981 sobre el continente, he seguido esperando al ver la extraordinaria capacidad de respuesta de los países de América Latina y sobre todo el retorno de las democracias, cuando en Europa estábamos acostumbrados a asociar crisis económica y pérdida de libertades. Mas el último

capítulo de este libro, aunque explica esa divina sorpresa, es más inquieto que los textos que, para prepararlo, escribí en 1984-1985. Y es porque la crisis se ha agravado, porque la deuda exterior y la baja del precio de muchas de las materias primas se han convertido en una roca de Sísifo que las frágiles democracias sociales y políticas se afanan hasta el agotamiento por hacer rodar. Los mejores observadores anuncian hoy la desgracia; ven cómo se debilita la producción, cómo el paro y los empleos precarios desbordan a los empleos «formales», cómo se difunde la violencia, cómo los militares salen nuevamente de sus cuarteles. Tienen motivos para inquietarse; sin embargo, me resisto a ese desaliento y deseo que, a lo largo de un libro que no es más épico que frío, el lector encuentre razones para compartir mi confianza y, sobre todo, espere conmigo que este análisis pueda ayudar a los latinoamericanos a cruzar las tempestades convenciéndolos de que su historia depende, ante todo, de ellos mismos.

3. Entre el temor y la esperanza

Hay dos grandes actitudes que se oponen, pero que también se completan, en el estudio de las realidades latinoamericanas. La tendencia dominante ha sido, a buen seguro, la más pesimista. No sólo ha insistido sobre la miseria, la injusticia y la violencia, cosas que ningún estudio puede dispensarse de situar en primera fila de sus preocupaciones, sino que ha mostrado, sobre todo, que la capacidad de acción de los países latinoamericanos y del continente en su totalidad tendía a disminuir más que a aumentar. ¿No es un símbolo que el siglo XX se haya abierto en América Latina con una de las revoluciones más profundas de la historia, la revolución mexicana, que modificó toda la organización y la vida del país entre 1910 y 1920, y que acabe con los efectos, al parecer insuperables, de una crisis financiera y económica cuyas causas son en gran parte exteriores al continente mismo? Para muchos observadores, las ilusiones creadas por los regímenes nacionalistas y populistas desaparecían poco a poco, dejando aparecer las coacciones de la dependencia, o también las exigencias brutales de un modo de industrialización basado en una extremada concentración de las rentas, sobre la formación y el mantenimiento de una burguesía más atenta a conservar para sí misma un nivel de vida análogo al de las clases dirigentes norteamericanas y europeas que a desarrollar la industrialización del país.

Mas esta visión dramática, justificada por tantos aspectos, ¿no choca con la ausencia de las secuelas sociales y políticas que anuncia como ineluctables? La desaparición de ciertas ilusiones, el agravamiento de las desigualdades, los efectos de la transnacionalización de la economía deberían hacer entrar a la América Latina en la era de las tempestades. Situaciones cada vez más explosivas deberían conducir a revoluciones o a

contrarrevoluciones. El choque de los intereses debería ser cada vez más desnudo y brutal... Si este libro se aleja deliberadamente de esa visión dominante durante tanto tiempo es, en primer lugar y ante todo, porque los hechos sociales y políticos observables no permiten mantener una interpretación semejante; porque, durante el transcurso del medio siglo pasado, el hecho principal es más bien el aumento, desde luego incierto e irregular, pero en resumidas cuentas poderoso, de la capacidad de intervención de los actores sociales latinoamericanos sobre su historia. De ningún modo puede remitirse esto a la imagen caduca de una América Latina que sigue con cierto retraso la vía abierta por los países de Europa occidental o de América del Norte. La especificidad de los procesos sociales y políticos latinoamericanos sigue estando tan marcada hoy como lo estaba hace medio siglo, e incluso se ha reforzado por muchos lados. Pero vemos cómo se constituye o se desarrolla un poder de Estado, cómo se organizan grupos dirigentes y sindicatos, incluso mientras el papel de los ideólogos disminuye y mientras la creencia en el progreso y la educación pierde su poder mágico. Y eso impone la necesidad de modificar la imagen pesimista que se ha tenido la mayoría de las veces de ese continente, de igual forma que los resultados de un largo período de crecimiento obligan, incluso en el corazón de un período de extremas dificultades económicas, a abandonar la idea, peligrosamente falsa, de una espiral del subdesarrollo que haría descender a los países latinoamericanos de un círculo a otro del infierno. Algunos se han preguntado por la modernización de la América Latina, por su retraso y sus formas peculiares; otros han pretendido hacer sentir, sobre todo, el peso de la dependencia exterior sobre la vida económica, social y política de los países del continente. Es un tipo distinto de interrogación el que guiará este libro: ¿en qué condiciones y bajo qué formas son capaces los países latinoamericanos de elaborar unas políticas económicas y sociales? ¿A través de qué dramas, de qué debates de ideas y de intereses los países de América Latina han dejado de no constituir otra cosa que una región del mundo para construirse una historia, para aumentar su capacidad de responder de manera original a cambios que a menudo se imponen a ellos desde fuera? Aquí no se trata solamente de una elección de principio, sino también de la búsqueda concreta de las condiciones de supervivencia y de recuperación de países heridos por una crisis profunda y que, si no aumentan su capacidad de iniciativa política, corren el riesgo de verse arrastrados a la descomposición. Este libro no depende de las ideas o los intereses de ningún grupo social o político en América Latina, pero tiene un punto de partida adoptado a conciencia: contribuir, mediante sus análisis, a aumentar la capacidad política de la América Latina y, por consiguiente, las posibilidades de la democracia, que se debilitan cuando las situaciones se conciben como determinadas desde el exterior, y que se refuerzan cuando se extiende el número y la actividad de quienes participan en el proceso de decisión colectiva. La orientación de este libro

está cerca de aquella de los economistas y de los sociólogos latinoamericanos que, asumiendo hoy, y transformándolas, las grandes ambiciones de la Comisión económica para la América Latina en los años cincuenta, se esfuerzan por unir de nuevo análisis económicos, sociales y políticos para ayudar a la formación de lo que F. Fajnzylber ha denominado núcleos endógenos de dinamización económica, agentes colectivos de desarrollo que no pueden estar separados de nuevas formas de movilización política y social.

Por ello, este libro partirá de una definición del modo latinoamericano de desarrollo, es decir, de la forma específica en que han intervenido actores sociales y factores económicos para meter al continente en su gran mutación económica y social. Después de haber definido a los actores mismos, las categorías sociales pertinentes para el análisis, consagrará ampliamente su atención a las formas específicas de la acción colectiva y en particular de los movimientos sociales en América Latina, antes de estudiar más directamente los regímenes políticos y las formas de movilización campesina u obrera. Una cuarta parte definirá los límites de este modelo clásico y sus formas de descomposición, antes de que una quinta, más cercana a la actualidad, analice la crisis económica actual y la transformación del modelo político y social latinoamericano que entraña. Al terminar esta última parte podremos plantearnos la cuestión central de las posibilidades de la democracia y del desarrollo económico en América Latina.

AGRADECIMIENTOS

Una primera versión de las tres primeras partes de este libro se publicó en español gracias a los cuidados de PREALC (Programa Latinoamericano para el Empleo en América Latina y en el Caribe), organismo regional de la Organización Internacional del Trabajo, que en 1983, 1984 y 1985 me acogió durante estancias de estudio de casi un año en total. Agradezco al PREALC su ayuda, sin la que este libro se habría retrasado varios años. Su director, Victor Tokman, y Ricardo Lagos, que era uno de sus principales investigadores durante mi primera estancia, me dieron su apoyo constante y amistoso, por el que les estoy agradecido, más profundamente aún de lo que ellos mismos pueden suponer.

La versión actual no sólo comporta dos partes nuevas, sino que ha sido refundida y reescrita por entero.

Entre los numerosos investigadores cuyo trabajo y amistad me han ayudado más, quiero citar por lo menos a: Aspasia Alcántara, Óscar Altimir, José Blanes, Vinicius Brant, Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Fernando Calderón, Guillermo Campero, Manuel Castells, Francisco Delich, Michel Debrun, François Dubet, Boris Falaha, Fernando Fajnzylber, Enzo Faletto, Alejandro Foxley, Celso Furtado, Nor-

berto García, Manuel Antonio Garretón, José Artur Gianotti, Enrique Iglesias, Moises Ikonicof, Elisabeth Jelín, Emilio Klein, Lúcio Kowarick, Julio Labastida, Luciano Martíns, Francisco León, José Nún, Daniel Pecaut, Carlos Bresser Pereira, Luis Ramallo, Liliana de Riz, Leôncio M. Rodrigues, Germán Rama, José Serra, Silvia Sigal, Juan Somavía, Sergio Spoerer, Denis Sulmont, Osvaldo Sunkel, María Luisa Tarres, Eugenio Tironi, Juan Carlos Torre, Pilar Vergara, Francisco Weffort, Michel Wieviorka, Francisco Zapata, Sergio Zermeño.

También tengo una deuda de gratitud con Alberto Arenas *(in mem.),* Rafael Bayce, Carmen Bernand, José Joaquín Brunner, Elisabeth Burgos, Marcelo Cavarozzi, Jacques Chonchol, Julio Cortázar *(in mem.),* Julio Cotler, Mário dos Santos, el presidente Echeverría, Florestan Fernandes, Raúl Fernández, Ricardo French Davis, Nicolás Flaño, Ángel Flisfisch, Georges Friedmann *(in mem.),* el presidente Alan García, Gino Germani *(in mem.),* Pablo González Casanova, Hernán Godoy, Roelfiem Hack, Eduardo Hamuy, Albert Hirschman, el presidente Hurtado, Octávio Ianni, Roberto Laserna, Iraci Poletti, Yvon Le Bot, el embajador Lennuyeux Comnène, Jorge León, Javier Martínez, José Matos Mar, José Medina Echavarría *(in mem.),* Cándido Mendes, Iván Menéndez *(in mem.),* Sergio Miceli, Sergio Molina, Tomás Moulian, Guillermo Mundt, Teresa Ore, Simón Pachano, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Luis Ramallo, José Luis Reyna, el embajador Robert Richard, Guillermo Rochabrun, Salvador Romero, Ernesto Sábato, Jorge Sábato, Ignaci Sachs, el presidente Sanguinetti, Heinz Sonntag, Rodolfo Stavenhagen, Helgio Trindade, Gabriel Valdés, Eduardo Valenzuela.

También quiero dar las gracias a Jacqueline Longérionas, Christine François y Jacqueline Blayat, que han trabajado de forma tan activa en la presentación de este texto.

Primera parte

Los actores del desarrollo

1.—El desarrollo de la América Latina

1. Fuerzas y debilidades

Elementos negativos

Suele centrarse la atención más a menudo en los aspectos negativos que en los aspectos positivos del desarrollo de la América Latina. El más visible de ellos es la dependencia económica respecto al exterior. Durante largos períodos, el flujo neto de capitales fue altamente negativo para el conjunto del continente. Desde 1981, la importancia de la deuda exterior y la crisis del comercio internacional han hecho reaparecer una salida de capitales, de amplitud mucho más considerable que en el período de posguerra.

Pero los efectos más negativos de la dependencia no dependen de ese riesgo de empobrecimiento del continente. Residen, sobre todo, en la prioridad dada a un tipo de desarrollo que corresponde mal a las necesidades de sus habitantes. Los capitales procedentes del extranjero contribuyen a instalar industrias con fuerte intensidad de capital, que producen bienes de consumo duraderos destinados a una población limitada, en cuyas manos se concentran los capitales y que pretende, sobre todo, imitar los modos de consumo de los países más ricos. Estas nuevas industrias crean pocos empleos y contribuyen a incrementar la desigualdad social. En el terreno cultural, la dependencia se traduce también por la penetración acelerada de modos de consumo importados, desde los pro-

gramas de radio y de televisión hasta los programas escolares y los libros infantiles. Así se crea ese *capitalismo limitado y dependiente,* tan a menudo analizado por los economistas y que con toda seguridad constituye uno de los aspectos fundamentales del modo de desarrollo latinoamericano.

Este capitalismo limitado significa también que el sector «informal», sector de producción a base de productividad, no se reabsorbe en el continente, mientras que su disminución fue rapidísima en los Estados Unidos lo mismo que en Japón. En un estudio clásico, N. García ha definido el mercado del trabajo en América Latina por la asociación de una fuerte capacidad de absorción de la mano de obra y de la persistencia de un subempleo y de un paro masivos. En resumen, la participación de la población activa «formal» en la población activa no agrícola total sólo aumenta muy lentamente entre 1950 y 1980 y disminuye luego.

Además, los servicios se desarrollan con mayor rapidez que la producción de bienes y los bancos prosperan más que las empresas industriales. Los servicios administrativos, por un lado, y los financieros, por otro, son demasiado pesados para países cuya industrialización sigue siendo débil, dejando a un lado México y Brasil. El caso del Perú muestra de manera extrema de qué forma la reducción del empleo agrícola beneficia al crecimiento de los servicios y no de la industria.

Evolución de la población activa en Perú
(en porcentaje)

	1940	1961	1972	1981
Agricultura	62,4	49,8	40,8	37,4
Industria	15,4	13,2	12,5	10,9
Comercio	4,5	9,0	10,4	12,5
Servicios	10,3	15,3	19,1	22,8
Otros	7,4	12,7	17,2	16,4
	100	100	100	100

FUENTE: J. Iguiñiz E., *Proyecto nacional, situación económica y políticas de ingresos en el Perú,* Lima, DESCO, mimeografiado, 1986, pág. 50.

El crecimiento económico no implica ni la integración social ni la disminución de las desigualdades. Al contrario, la América Latina está cada vez más marcada por la desigualdad y el mantenimiento de vastas zonas de subdesarrollo o de miseria. En Brasil, país que conoce un desarrollo acelerado de la industria y de los servicios, el analfabetismo rural aumenta. La desigualdad social es particularmente visible en los dos grandes países que aseguran la mayor parte de la producción industrial

del continente, Brasil y México, pero es también visible en la mayoría de los demás países.

En Brasil, donde la concentración de las rentas ha alcanzado un nivel extremo, el 1 por 100 de la población activa recibía, en 1960, el 11,9 por 100 de las rentas, proporción que se elevaba al 14,7 por 100 en 1970 y al 16,9 por 100 en 1980.

Durante su campaña presidencial de 1984, Alan García difundió la «pirámide» de las rentas en el Perú: en este país, decía, el 2 por 100 de la población reciben el 28 por 100 de la renta nacional; el 8 por 100 siguiente reciben el 24 por 100; el 15 siguiente, el 25 por 100, y el 7,5 que queda no reciben más que un 23 por 100.

Ricos y pobres

Países	Años	40 por 100 más pobres	10 por 100 más ricos	5 por 100 más ricos
Bolivia	1968 (H)	17,7	—	35,7
Bolivia	1975 (H)	14,0	41,7	—
Brasil	1950	13,1	45,5	25,1
Brasil	1963	10,5	41,6	28,6
Brasil	1970	11,8	39,2	27,7
Brasil	1977	11,0	38,0	25,5
Perú	1961 (A)	8,0	49,2	39,0
Perú	1972 (H)	7,0	42,9	—
Cuba	1953 (A)	6,2	38,5	28,0
Cuba	1962	17,2	23,0	12,7
Cuba	1973	20,3	19,9	9,5
México	1950	13,3	49,0	40,2
México	1958	12,1	49,3	38,6
México	1963	11,2	49,9	38,3

(H) Hogares. (A) Población económicamente activa.
FUENTE: CEPAL, 1980.

En el conjunto del continente, y con la notable excepción de Cuba, los pobres reciben al final de los años setenta una parte de la renta nacional más débil que veinte años antes.

Incluso cuando el continente ha conocido un progreso importante de su producción y dispone de una cantidad de alimentos suficiente para alimentar a su población, en 1970, de una población de 264 millones, 115 eran *pobres,* es decir, no podían adquirir en el mercado la «cesta» de víveres y de servicios considerados esenciales, y, de ellos, 50 millones no podían asegurar sus necesidades alimenticias mínimas y entraban en la categoría de *indigentes.* Pobreza e indigencia se hallan repartidas de forma muy desigual según los países; raras en Argentina, son masivas en Honduras y en Haití. Pero en todas partes son mucho más frecuentes en

el campo que en la ciudad, lo que explica en parte las emigraciones. En Brasil, casi las tres cuartas partes de los habitantes de las zonas rurales están por debajo de la línea de pobreza. Ésta se halla fuertemente asociada al paro y al subempleo por un lado, a un bajo índice de calidad material de la vida por otro, es decir, a una débil esperanza de vida, a una fuerte mortalidad infantil y a un analfabetismo elevado.

Pobres e indigentes

Países	Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza			Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia		
	Urbanos	Rurales	Total	Urbanos	Rurales	Total
Argentina	5	19	8	1	1	1
Brasil	35	73	49	15	42	25
Colombia	38	54	45	14	23	18
Costa Rica	15	30	24	5	7	6
Chile	12	25	17	3	11	6
Honduras	40	75	65	15	57	45
México	20	49	34	6	18	12
Perú	28	68	50	8	39	25
Uruguay	10	—	—	4	—	—
Venezuela	20	36	25	6	19	10
América Latina ..	26	62	49	10	34	19

FUENTE: CEPAL, 1980.

Los ricos no invierten sus capitales de manera productiva. La construcción de viviendas privadas representa un 23,3 por 100 de la inversión total y el sector de la construcción en su conjunto alcanza el 62 por 100. En el transcurso de estos últimos treinta años, las ciudades latinoamericanas han visto desarrollarse los barrios ricos y la urbanización se ha adaptado a lo que los economistas denominan el complejo urbano-automóvil. En Santiago, por ejemplo, entre 1972 y 1985, mientras bajaban el nivel de vida general y la producción industrial, la ciudad se ha extendido por los contrafuertes de la cordillera de los Andes, creando inmensos barrios admirablemente instalados, con avenidas plantadas de árboles, con casas rodeadas de amenos jardines, con escuelas de las que los niños vuelven a su casa en automóvil, mientras que al otro lado de los barrios centrales, a menudo degradados, se extienden zonas de construcción sumaria, que sin embargo no pueden calificarse de chabolas pero que la mayoría de las veces carecen de los equipamientos más elementales. El contraste de la riqueza y de la miseria, de los barrios pobres, donde se amontona una población mal alojada y a menudo en paro o empleada en actividades marginales, y de los barrios ricos, cuyo equivalente no ofrece casi ninguna ciudad europea, muestra que la evolución económica ha re-

forzado la desigualdad más de lo que la ha disminuido. Y ello se debe, en parte, a que la riqueza tiene muchos otros usos distintos a la inversión productiva. En muchos países, la tasa de beneficio en el sector productivo está por debajo de la tasa de interés, lo cual retrasa la inversión y crea una crisis del sector productivo. El sector financiero domina sobre el sector industrial y, en éste, los costes salariales no representan, para un conjunto de ocho países, más que el 15 por 100 de los precios.

De este modo se descubre la *dualización* del continente, noción evocada y criticada tan a menudo, pero de la que es imposible desprenderse. Esta dualización no opone sólo un enclave costero y otro interior, lo que en el Perú o en Ecuador se denomina la *costa* y la *sierra;* opone más profundamente a los que están en el interior de un sector de producción moderna, dependiente y a la búsqueda de modelos de consumo importados, y a los que, tanto en la ciudad como en el campo, pero sobre todo en el campo, están situados al margen, excluidos, al mismo tiempo que constantemente atraídos, si no hacia el sector moderno, al menos hacia la ciudad donde siempre existen posibilidades de empleo, de educación y de cuidados médicos mejores que en el campo.

La dualización no quiere decir que vivan codo con codo un país moderno y un país arcaico, hipótesis indefendible porque los dos países son interdependientes; significa que la capacidad de integración económica y social del país moderno está limitada, en parte, cierto, porque la presión demográfica y otras causas de emigración impulsan hacia las ciudades a masas constantemente renovadas de nuevos recién venidos, pero también porque la extrema concentración de las rentas no conduce más que a inversiones económicas y sociales insuficientes, mientras el dinero huye al extranjero o se derrocha en gastos suntuarios cuya espectacular riqueza es un insulto para la miseria completamente cercana.

Elementos positivos

Esta dualización y sus consecuencias sociales y políticas serán exploradas a lo largo de este libro. Pero en América Latina no habría que ver sólo los obstáculos al crecimiento y al incremento de las desigualdades sociales. Con demasiada frecuencia se olvida una cosa: que América Latina ha conocido, durante un largo período, una tasa de crecimiento superior al conjunto de países de la OCDE.

	1970-1973 (porcentaje)	1967-1979 (porcentaje)	1980-1981 (porcentaje)
OCDE	5,0	4,2	1,3
América Latina	7,2	5,5	4,6

V. Tokman y N. García observan incluso que el crecimiento de la América Latina después de la guerra ha sido más rápido que el de los Estados Unidos durante su despegue.

Crecimiento comparado de los Estados Unidos y de América Latina					
América Latina			Estados Unidos		
Años	Crecimiento del producto	Coeficiente de inversión	Años	Crecimiento del producto	Coeficiente de inversión
1950-60	5,1	20,5	De 1869-73 a 1877-81	6,5	18,9
1960-70	5,7	20,0	De 1882-86 a 1892-96	3,3	22,3
1970-80	5,5	24,0	De 1891-1901 a 1902-06	4,5	23,0
1950-80	5,5	21,5	De 1869-73 a 1902-06	4,8	21,4

FUENTE: V. Tokman y N. García, *Acumulación, empleo y crisis*. PREALC.

Cierto que América Latina ha sido golpeada con mucha mayor violencia que América del Norte, Europa occidental o los países del sudeste asiático por la crisis económica y financiera que estalló en 1981. Sin embargo, en la última parte de este libro se verá cuál ha sido la extraordinaria capacidad de adaptación y de recuperación de la mayoría de los países del continente, a pesar del precio extremadamente elevado con que debieron pagar ese esfuerzo. Durante un período de treinta años, América Latina alcanzó una tasa de crecimiento del 6,7 por 100 anual, mientras el mundo, en su conjunto, no llegaba más que al 5,9 por 100. Durante ese mismo período, la industria latinoamericana se elevó del 4 al 5 por 100 de la producción mundial.

Ese crecimiento, concentrado en la industria y los servicios, ha entrañado una disminución de la población activa agrícola tan rápida que la imagen tradicional de América Latina como un continente rural no corresponde ya a la realidad.

El aumento del empleo urbano moderno en el empleo total es particularmente rápido en ciertos países entre 1970 y 1980. En Venezuela pasa del 40,9 al 60,9 por 100; en Brasil, del 38,6 al 51,6 por 100; en Costa Rica, del 44,1 al 54,2 por 100; en Ecuador, del 17,2 al 23,6 por 100; en Colombia, del 38,7 al 42,6 por 100, y en México, del 33,9 al 39,5 por 100 (cf. PREALC, *Más allá de la crisis*, 1985, pág. 24). La única excepción es Argentina, donde las cifras correspondientes son 66,0 y 63,5 por

100, retroceso que traduce los efectos de la política de desindustrialización seguida desde 1976 por el Gobierno militar.

Evolución de la población activa en América Latina (1950-1980)

	En porcentaje anual
Crecimiento de la población	2,5
Crecimiento de la población activa	2,5
Crecimiento de la población activa no agrícola	4,0
Crecimiento de los sectores no agrícolas modernos	4,1
Crecimiento de las industrias de transformación	3,5
La población activa no agrícola ha pasado del 44,1 al 67,1 por 100 de la población activa total.	

FUENTE: V. Tokman y N. García, *op. cit.*, pág. 8.

En total, el empleo agrícola está en 1980 en un nivel ya bajísimo en Uruguay (11 por 100), en Argentina (13 por 100) y en Chile (20 por 100). Está bastante bajo en Colombia (27 por 100), en Costa Rica (30 por 100), en México (37 por 100) e incluso en Perú (38 por 100), en Panamá, en Nicaragua y en Brasil (40 por 100). Sólo se mantiene a un nivel muy elevado en Bolivia, en Paraguay y en la República Dominicana (50 por 100), en Ecuador (52 por 100), en El Salvador (51 por 100), en Guatemala (56 por 100), en Honduras (63 por 100) y en Haití (74 por 100).

Si bien es cierto que la producción manufacturera ha progresado lentamente, lentitud que oculta en realidad la desaparición progresiva de las industrias artesanales y un desarrollo más rápido de las industrias modernas, la producción industrial representa ya una parte importante del PIB en ciertos países: el 27,4 por 100 en Argentina, el 31 por 100 en Brasil, el 25,9 por 100 en Uruguay, el 22,3 por 100 en México, en 1979-1980. Incluso en América central, donde sigue estando todavía a un nivel bajo, ha progresado rápidamente entre 1950 y 1980, pasando del 11,8 al 23,1 por 100 en Nicaragua, del 15,6 al 21,4 por 100 en Panamá, del 10,5 al 16,9 por 100 en Costa Rica. La imagen tradicional de una América central campesina y ampliamente ocupada por comunidades indígenas no se corresponde ya con la realidad, y la violencia política que se ha desarrollado en esos países no puede ser comprendida sin una referencia a su rápida transformación económica. El Mercado Común Centroamericano explica en gran parte el paso de las culturas de exportación al crecimiento de la industria y, sobre todo, al desarrollo más reciente y más rápido del sector público.

Es cierto que una gran parte del crecimiento de la producción ha sido absorbido por el incremento de la población; sin embargo, también en este terreno la América Latina se ha «modernizado». La tasa bruta de

natalidad disminuye fuertemente en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Cuba.

La tasa de natalidad baja		
Países	1960	1980
Argentina	24	21
Bolivia	46	43
Brasil	43	30
Colombia	46	30
Costa Rica	47	29
Cuba	32	18
Chile	37	22
Rep. Dominicana	50	36
Ecuador	47	40
Guatemala	48	40
México	45	37
Nicaragua	51	45
Panamá	41	31
Perú	47	36
Uruguay	22	20
Venezuela	46	35

Por otro lado, la mortalidad infantil disminuye y ha alcanzado ya un nivel que puede considerarse bajo, a escala mundial: Cuba, 19 por 1.000; Panamá, 22; Costa Rica, 24; República Dominicana, 31; Uruguay, 34; Chile, 38 (e incluso 20 en 1985). Las tasas siguen siendo mucho más elevadas en Bolivia (151 por 1.000), en Haití (149), en Honduras (117), en Nicaragua (102) y en Perú (100). Los progresos realizados se explican, ante todo, por un mejor abastecimiento de agua potable, por la construcción de alcantarillado y por una mejor organización de los servicios de salud pública, en particular en Cuba y en Chile.

Ninguno de los resultados positivos que acabamos de mencionar disminuye o suprime la importancia de los elementos negativos del modo latinoamericano de desarrollo, pero recuerdan que, a través de la dependencia y la desigualdad, América Latina ha entrado en un movimiento acelerado de industrialización y de urbanización. Si las empresas multinacionales se han consagrado ante todo a la exportación de productos agrícolas o mineros, luego han instalado fábricas. La política proteccionista de los gobiernos, el débil costo de la mano de obra, pero también el desarrollo rápido de los mercados nacionales, han contribuido al desarrollo de las inversiones extranjeras en las actividades productivas. En este terreno, el Brasil de Kubitschek ha dado ejemplo a todo el continente. Las inversiones extranjeras no representan más que el 10 por 100 del total, pero si no tenemos en cuenta la construcción de viviendas, en la que el papel del Estado y de los capitales privados nacionales es predo-

minante y que representa más de la mitad de la inversión total, vemos que esas inversiones extranjeras han tenido una importancia mucho más considerable, lo cual no significa que sólo hayan tenido efectos positivos.

En total, la inversión aumenta de 1950 a 1980 en la gran mayoría de los países. Uruguay, Chile, Colombia y Perú son las principales excepciones a esta tendencia general. Y a la inversa, el impulso de la inversión en Venezuela es excepcional, dado que este país ha dispuesto de recursos petroleros considerables. Hay que observar el neto crecimiento de la tasa de inversión en ciertos países de América Central, en Ecuador y en Bolivia.

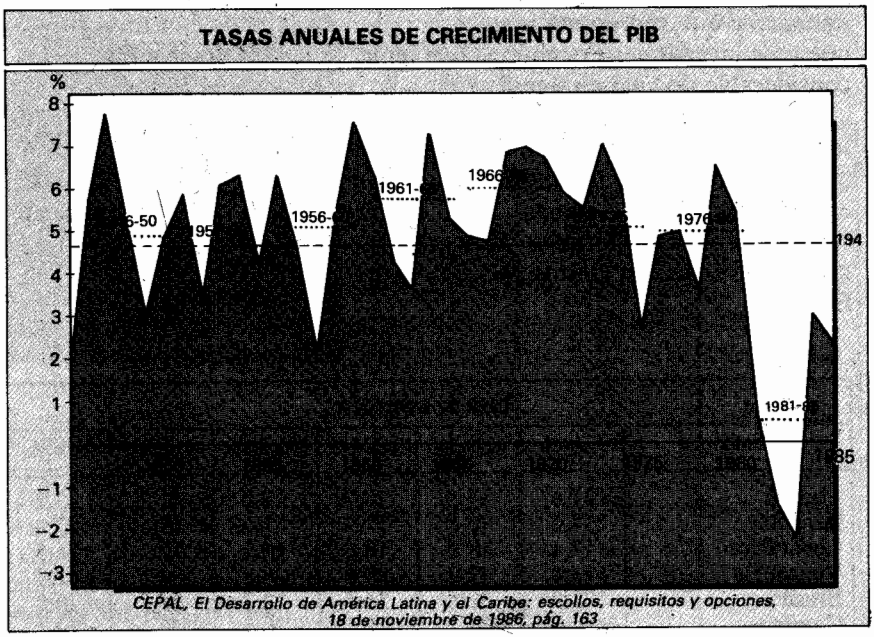
Tasa de inversión						
Países	1950-1954	1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979
México	17,6	17,8	18,7	21,0	21,3	22,2
Panamá	14,0	16,6	17,9	21,6	27,5	22,4
Costa Rica	17,4	18,8	18,6	20,2	22,1	26,5
Venezuela	47,0	42,9	26,1	26,8	30,6	41,4
Brasil	23,9	22,8	21,9	22,7	26,8	29,8
Colombia	24,2	24,2	21,5	20,5	20,5	19,1
Guatemala	10,2	15,6	11,3	12,8	13,1	16,5
Perú	24,2	22,6	19,6	18,4	15,6	15,4
Ecuador	11,3	13,6	12,6	12,5	21,4	22,8
Bolivia	10,1	13,4	14,2	17,3	17,7	20,5
El Salvador	11,3	12,2	14,7	15,4	15,6	15,9
Argentina	15,2	14,8	18,7	17,9	20,2	20,6
Chile	15,1	14,4	15,4	15,1	13,1	10,1
Uruguay	17,5	13,3	12,5	9,8	11,0	14,8

FUENTE: V. Tokman y N. García, *op. cit.*, pág. 80.

Estas inversiones han sido pagadas, en buena parte, por el crecimiento de la deuda exterior, pero durante un largo período, como observa E. Iglesias, ese crecimiento de la deuda no fue pagado por una proporción creciente de las exportaciones, sino por nuevos préstamos, fáciles de obtener en un período de grandes liquideces internacionales. Sólo al final de los años setenta es cuando concluye ese desarrollo fácil, en parte artificial, y cuando América Latina se ve ante la imperiosa necesidad de asegurar su desarrollo por sus propios medios, e incluso de hacer frente a fuertes salidas de capitales.

Construcción de un esquema de análisis

Los factores negativos y positivos que rápidamente acabamos de mencionar se han combinado para crear un modo específico de desarrollo que puede definirse a la vez por la formación de una sociedad indus-



CEPAL, El Desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requisitos y opciones, 18 de noviembre de 1986, pág. 163

trial y por los límites impuestos a esa formación por el capitalismo dependiente.

La expresión clásica de *capitalismo limitado y dependiente* señala con toda claridad los límites económicos de la industrialización. R. Prebisch ha hablado de capitalismo periférico. La expresión tiene el doble mérito de subrayar la dependencia económica de la América Latina, pero también su incorporación parcial a la economía y a la sociedad de los países centrales. Lo cual protege de los excesos inversos del optimismo liberal y del pesimismo de quienes denuncian la situación colonial del continente.

En el plano social, a esta situación económica corresponde la *segmentación* de las categorías sociales que manifiesta la dualización de la sociedad, y más ampliamente su *heterogeneidad estructural,* según la expresión de A. Pinto, la oposición de un sector moderno y de un sector tradicional, de las empresas nacionales y de las empresas extranjeras y, más ampliamente, de quienes participan en la producción y en el consumo moderno y de quienes están excluidos de ellos.

Frente a esta limitación del capitalismo y a la segmentación de las categorías sociales, el elemento económico más «positivo» del modelo de desarrollo latinoamericano es una fuerte capacidad de inversión. El crecimiento del sector industrial fue más rápido en América Latina de 1950 a 1980 de lo que lo fue en los Estados Unidos de 1870 a 1900. Crecimiento industrial que parece más fuerte si dejamos a un lado el particu-

larísimo caso de Argentina, país industrial importante pero que no ha participado, en el transcurso de los últimos decenios, en el progreso industrial general del continente.

Por último, en el terreno social, a esa fuerte inversión corresponde una fortísima movilización, que se manifiesta, ante todo, por la intensidad de las migraciones interiores y una urbanización acelerada por las intervenciones del Estado. La América Latina conoce vastas zonas de exclusión, pero también, si nos atrevemos a decirlo, una fuerte participación político-cultural mayor aún en la que se encuentra implicada gran parte de la población urbana. En muchos países, la mayoría de los ciudadanos han recibido derechos políticos en una etapa de la industrialización mucho más precoz que en los países llamados centrales.

Estos cuatro elementos, tan opuestos los unos a los otros, son, sin embargo, inseparables unos de otros y forman por sí solos el *modo de desarrollo latinoamericano*. Es inútil y peligroso insistir sólo en uno de ellos, no ver en la América Latina del último medio siglo otra cosa que miseria e injusticia, o, por el contrario, no ver más que desarrollo rápido de la producción y del consumo de masas. La América Latina está hecha de tensiones y de contradicciones entre los elementos de su modo de desarrollo, como Europa fue hecha de tensiones y de complementariedades entre el espíritu racionalizador de la filosofía de las Luces, la construcción de los imperios financieros, la conquista de los océanos y de los continentes y las creencias o las convicciones que limitaban el consumo y favorecían la inversión.

El modo de desarrollo latinoamericano		
	Economía	Sociedad
Límites de la industrialización ..	Capitalismo limitado y dependiente (1)	Heterogeneidad estructural (2)
Elementos de una sociedad industrial	Tasa elevada de inversión (3)	Fuerte participación político-cultural urbana (4)

Esta descripción general del modo de desarrollo latinoamericano no ignora que entre los países y entre los períodos existen unas diferencias tan grandes que un esquema general no puede tener más que una utilidad descriptiva limitada; responde a otra necesidad: la de descubrir y comprender las categorías de la acción colectiva, social y política, categorías de las que puede pensarse que se modifican relativamente poco de un país a otro y de una coyuntura económica a otra. La idea de que

existe un modo de desarrollo latinoamericano no constituye una generalización histórica, un resumen de la historia contemporánea de América Latina; expresa una hipótesis general: las conductas de los actores sociales no pueden explicarse ni por una lógica externa, ni por unos valores culturales, ni tampoco por las leyes de la evolución histórica y menos todavía por un carácter nacional; estas conductas manifiestan las orientaciones y las tensiones internas de un tipo específico de desarrollo, de un modelo definido por la interacción de características sociales y económicas, de las cuales unas son favorables y otras desfavorables al desarrollo. El punto de vista adoptado en este libro será, por tanto, distinto del punto de vista de la historia comparativa de los países del continente, porque este método, aunque muestra con claridad las diferencias entre regiones y períodos, no llega a definir la relación existente entre las diferentes orientaciones de la acción colectiva, aparentemente opuestas entre sí, y, más precisamente, cómo se vinculan entre sí los efectos de la dependencia, de las relaciones de clases y de la modernización. Hemos de repetirlo: el objeto de este libro es el estudio de las *categorías de la acción social en América Latina,* y la hipótesis presentada es que la naturaleza del modo de desarrollo latinoamericano explica el sentido particularísimo que adoptan en este continente categorías como obreros, campesinos, clases medias, o incluso nociones como clase, partido, sindicato, y también como dictadura o democracia.

2. Los modos de desarrollo

Hemos introducido la noción de modo de desarrollo de manera concreta, para superar la estéril oposición del determinismo económico y del voluntarismo cultural, y para insistir en la interdependencia de los aspectos económicos, políticos y culturales del desarrollo; ahora hay que definirla de manera más elaborada y justificar la hipótesis de un modo de desarrollo latinoamericano.

Distingamos, ante todo, la noción de desarrollo, tal como aquí la emplearemos, de la idea de modernización. Esta última se refiere a unas tendencias que conducen de la sociedad tradicional a la sociedad moderna y que transforman la organización social, diferenciándola, racionalizándola, secularizándola. Por el contrario, nosotros definiremos el desarrollo como el paso de un tipo de sociedad a otro, lo cual supone que cada uno de estos tipos sea definido no por un nivel de modernización, sino por un conjunto de características específicas que nos hacen hablar, por ejemplo, de sociedad industrial o de sociedad mercantil. Lo que nos lleva a separar, de un lado, los caracteres propios de cada una de estas sociedades y sus problemas internos, y de otro, los mecanismos de paso, de mutación, de una sociedad a otra. El estudio del desarrollo consiste, por tanto, en primer lugar en identificar la elite que hace pasar un país o

una región de un tipo de sociedad a otro. Confundir modernización y desarrollo sería volver al mito de una evolución puramente endógena, que ya hemos descartado.

Esta *elite dirigente* no puede ser solamente una clase social; sólo existe si controla el poder de Estado, porque sólo el Estado asegura la permanencia de una colectividad en el curso de sus mutaciones y debe ser, por tanto, bajo una forma o bajo otra, el agente central de esta mutación. Una clase social, por el contrario, pertenece a un tipo de sociedad y, por consiguiente, no puede ser, por definición, el agente principal de creación del sistema en cuyo interior existe: ¡no son los capitalistas industriales los que pueden crear el capitalismo industrial! Es menester, por tanto, que un Estado y también otros agentes de innovación y de crítica aseguren las rupturas, las inversiones, las formas de participación económica y social, cuya combinación da nacimiento a un nuevo tipo de sociedad.

Los actores principales del desarrollo, que por tanto llamaremos la elite dirigente, pueden estar muy cerca o muy lejos de los grupos dirigentes que existen en el interior de un tipo de sociedad, es decir, de su clase dirigente. En ciertos casos, el Estado parece no ser más que el consejo de administración de la burguesía nacional, aunque semejante identificación sea siempre excesiva. En otros casos, la elite dirigente, nacionalista o revolucionaria, se halla en ruptura con una burguesía nacional, o está sometida a intereses extranjeros. Pero nunca existe ni fusión completa ni separación total entre elite dirigente y clase dirigente. Así, todo proceso de desarrollo puede ser definido por cierta combinación de acción de la clase dirigente —y de resistencia de las clases dominadas— y de intervención de una elite dirigente, es decir, ante todo de un Estado.

Si la elite dirigente está muy cerca de la *burguesía nacional,* como ocurrió en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, el proceso de modernización resulta fuertemente endógeno, de suerte que la acción de la burguesía queda asociada a la de los cambios culturales que pueden haber comenzado antes. Por el contrario, si es un *Estado* voluntarista el que asume la dirección del desarrollo, son las relaciones de los ciudadanos con el Estado y de éste con el sistema internacional las que juegan el papel central en el funcionamiento de ese proceso de desarrollo. Por último, si la elite dirigente es una *burguesía extranjera,* como ocurre en las sociedades que se denominan dependientes o colonizadas, la dominación exterior que se ejerce sobre el país considerado puede bien privar de toda autonomía a los actores sociales y políticos, bien, por el contrario, dar a las clases, partidos y movimientos una gran autonomía, incluso una autonomía extrema, puesto que éstos no asumen las responsabilidades de la gestión económica. Es entonces cuando asistimos a las movilizaciones sociopolíticas más fuertes y cuando se forman numerosos actores que se oponen a la hegemonía de un Estado vinculado a la oligarquía o, por el contrario, se incorporan a un Estado «desarrollista».

Así se encuentran definidos tres tipos principales de desarrollo, según que la elite dirigente esté formada por una burguesía nacional, por un Estado nacional o, finalmente, por fuerzas económicas y políticas extranjeras. Pero cada uno de estos tres modelos principales se subdivide en dos, como indica claramente el siguiente cuadro, que presenta el conjunto de los modos de desarrollo.

Modos de desarrollo						
Elementos	Pos-colonial 6	Depen-diente 5	Central [1] 1	Jacobino [2] 2	Bismar-ckiano 3	Posrevo-lucionario [3] 4
Dominante	Actores sociales	Actores sociales	Moder-nización	Moder-nización	Estado	Estado
Intermediario ...	Estado	Moder-nización	Actores sociales	Estado	Moder-nización	Actores sociales
Subordinado	Moder-nización	Estado	Estado	Actores sociales	Actores sociales	Moder-nización

[1] Gran Bretaña/Estados Unidos.
[2] Francia.
[3] Leninista.

Se trata aquí de tipos, no de casos históricos concretos, y es fácil mostrar que en cada país se combinan más o menos varios tipos. No obstante, éstos se hallan definidos con claridad suficiente para que en la mayoría de los casos históricos observables aparezca el predominio de uno de los tipos.

Los modos nacionales civiles

La primera industrialización se desarrolló en ciertos países europeos, y ante todo en Gran Bretaña, como un proceso en primera instancia endógeno y civil. El modo europeo de desarrollo fue, por tanto, materialista, identificando la modernización al triunfo de la razón y de la ciencia. Fue la destrucción de las barreras tradicionales y la apertura hacia mar adentro lo que, para él, constituyeron los factores principales de una modernización en cuyo seno hallaron cabida conflictos entre clases opuestas, pero que manifestaron bien una resistencia a la modernización, bien, por el contrario, el ascenso de los intereses modernos frente a los intereses tradicionales. En el modo europeo, que podemos llamar *central,* debido a su importancia histórica, el Estado se identificó en gran parte con la clase dirigente, dejando al mismo tiempo una amplia autonomía a las instituciones representativas. Sin embargo, ese Estado con-

servó un papel autónomo, sobre todo como agente de hegemonía exterior. Los Estados Unidos son hoy la expresión principal de ese primer modo de industrilización. En ese país hay una frontera abierta, emprendedores dinámicos, inmigrantes numerosos que produjeron una modernización apoyada en instituciones políticas y jurídicas que definían las reglas del juego, que favorecían la integración social y limitaban el desvío.

El segundo modo se diferencia del primero en un hecho: en él, el Estado juega un papel más importante, más independiente de la clase dirigente. Francia es el ejemplo clásico de este modo de desarrollo que podemos llamar *jacobino*. En Francia, los conflictos políticos, las relaciones con el Estado han ocupado constantemente un lugar más importante que los conflictos propiamente sociales, como puede verse comparando la fuerza de los partidos que se llaman obreros con la debilidad tradicional de los sindicatos y de las negociaciones colectivas en este país.

Lo que acerca estos dos modelos civiles nacionales es que uno y otro identifican fuertemente el análisis de la sociedad *moderna* con el análisis de la *modernización*. En ellos, la palabra capitalismo significa a la vez modernización económica y poder de una clase dirigente. En América Latina, estos modos de desarrollo tienen una importancia sobre todo ideológica: la mayor parte de los grupos económicos o políticos dirigentes apelan a esos modelos que proceden de los países centrales.

Los modos estatales

En los países donde el desarrollo no puede ser endógeno, el Estado debe transformarse de instrumento de reproducción de un orden cultural y social tradicional en agente voluntarista de cambio, por razones ante todo nacionales. Siguiendo el modo *bismarckiano,* el Estado interviene para crear una clase dirigente modernizadora, capaz de tomar el relevo de una antigua clase dirigente, como los *junkers* en Alemania o los *daimios* y los *samurais* en Japón, de suerte que la modernización es menos la condición que el resultado de la industrialización. Alemania, Italia, Japón, pero también la Turquía kemalista, son los ejemplos más importantes de este modelo.

Si la resistencia a la descomposición del antiguo régimen es demasiado fuerte, la industrialización debe ser impuesta por el Estado, que entonces juega el papel de un déspota ilustrado, pero que también debe apoyarse en una movilización de masas capaz de derribar las defensas levantadas por las antiguas clases dirigentes. Movilización que no impide a los actores sociales, y en particular a las clases sociales, ejercer en ese modo de desarrollo un papel secundario, incluso ser eliminados. En Rusia, ejemplo principal de este cuarto modo de desarrollo, la *revolución* soviética fue la victoria de una vanguardia revolucionaria sobre un Estado en descomposición, mucho más que el resultado de un movimiento

obrero, que tenía otras orientaciones, o de un movimiento campesino, que era muy débil.

Estos modos de desarrollo, más todavía el cuarto que el tercero, dan un papel central al Estado y, por consiguiente, sustituyen el universalismo de tipo inglés por un culturalismo de tipo alemán y tratan de subordinar la sociedad civil al Estado.

Mientras que en los modelos centrales, en el europeo y en el norteamericano, los diversos actores sociales se mantienen separados, en los modelos estatales se hallan fusionados. Lo mismo en el Japón que en la Unión Soviética, la empresa industrial, por ejemplo, es más un agente político y cultural que un actor exclusivamente económico. De igual modo, el Estado tiende a identificarse en esos modos de desarrollo con una colectividad histórica más que con intereses sociales específicos. La organización social está directamente mandada por una ideología o una cultura nacionales, mientras que, en los modelos europeos centrales, es la referencia a la ciencia y a la racionalidad la que ocupa un lugar central.

Los modos poscolonial y dependiente

Junto a países cuyas transformaciones económicas principales fueron introducidas por una burguesía nacional, y junto a aquellos otros cuyo Estado dirige de forma directa la industrialización, existen países en los que es una burguesía extranjera o un Estado extranjero los que han introducido los principales cambios económicos y sociales. Sociedades *coloniales* son aquellas en que los países colonizadores ejercen una dominación política y cultural, al mismo tiempo que económica. En los países que han sido colonizados, los actores que defienden una cultura nacional o regional e intereses económicos y sociales intervienen en el plano del Estado, en nombre de la liberación nacional más que de la modernización, de suerte que los movimientos nacionalistas pueden mezclar elementos modernizadores y antimodernizadores. En esos países, movimientos mesiánicos o proféticos, de renovación religiosa y de defensa comunitaria, se mezclan a reivindicaciones económicas y pronto quedan englobados en una acción dirigida por un Estado tanto menos autónomo cuanto que son raros en el tercer mundo colonizado los países que, como Egipto, poseen una tradición de Estado nacional.

Las sociedades *dependientes,* por el contrario, están sometidas a una dominación más económica que política. Es, pues, en estos países donde existe la separación más fuerte de la economía y de la política y donde los actores sociopolíticos o incluso ideológicos juegan el papel más central. Situación muy alejada de la de la Europa precozmente industrializada, donde la economía parecía dirigir directamente la política, que a su vez determinaba las ideologías. Aquí, por el contrario, son los actores

y el juego de sus relaciones políticas e ideológicas los que parecen determinar la modernización del país, que a su vez parece permitir la creación o el reforzamiento del Estado nacional.

América Latina puede considerarse como el principal conjunto, en el mundo actual, de sociedades dependientes. Es, pues, el modo de desarrollo *dependiente* el que debe ocupar un puesto central en su análisis. Sin embargo, está formada por países bastante diversos para que no pueda encontrarse en todos un solo modo de desarrollo. Si la referencia a los modelos central y jacobino es sobre todo ideológica, salvo en cierta medida en los países del Plata a principios del siglo XX, si el modelo posrevolucionario ha quedado, en última instancia, como relativamente marginal en un continente donde las tradiciones estatales y autocráticas eran débiles, el modo dependiente puede transformarse en modo poscolonial o, de manera opuesta, en modo bismarckiano de desarrollo. La primera tendencia es más visible en América central y en el Caribe, zonas de fuerte penetración del sistema colonial; la segunda es visible en México y, sobre todo, en Brasil, países en los que desde el principio de la era poscolonial existe un Estado nacional fuerte. Pero reconocer la importancia de estos diversos modos de desarrollo no hace más que subrayar la importancia central del modo dependiente en el análisis de los países latinoamericanos.

3. De la situación a la acción

Un modo de desarrollo puede ser transformado directamente en sistema de formas de acción colectiva. A cada una de las dimensiones principales del modo de desarrollo corresponde una característica de la acción social y política.

Debilidad de los actores de clase

La segmentación de las categorías tiene efectos políticos y sociales directos: las confederaciones sindicales son, con frecuencia, más débiles que las federaciones y, sobre todo, que los sindicatos de grandes empresas. Asimismo, en el seno de las profesiones independientes, en Chile, por ejemplo, es preciso definir la posición de cada grupo profesional *(gremio)* antes de hablar en general de las clases medias. Las grandes categorías socioprofesionales están dualizadas. La oposición de la gran industria y de la pequeña industria, o, de manera más extrema, del sector formal y del sector informal, tiene la mayor importancia en todos los países, lo mismo, por otra parte, que en otros países industriales, Japón o Corea, por ejemplo. La agricultura moderna, aunque ve la progresiva eliminación de categorías como los *inquilinos, arrendires* o *caipiras,* trabajadores dependientes, no por eso resulta dominada por un modelo ca-

pitalista, por el empleo de trabajadores agrícolas asalariados; sigue estando marcada por la coexistencia, en proporciones variables, de asalariados y de minifundistas. Esta segmentación de las clases sociales se traduce, en el plano de las conductas colectivas, por la ausencia de correspondencia entre situación objetiva y capacidad de acción, es decir, por la debilidad de las clases sociales, puesto que los sociólogos dan importancia a esta noción sólo porque implica esa correspondencia, que precisamente no existe en América Latina. Las clases sociales tienen una débil «capacidad política», para hablar como Proudhon. Y semejante conclusión se aplica tanto a los jefes de empresa estudiados en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil en los años sesenta, como a las clases populares. F. H. Cardoso ha estudiado en Brasil los «anillos burocráticos» que unen a grupos de intereses económicos con ciertos sectores de la administración pública; por medio de esa noción ha indicado que no existen vínculos generales entre el Estado y la clase capitalista, sino, a consecuencia de la heterogeneidad estructural de la clase capitalista, vínculos segmentados entre empresarios y administradores. Esa segmentación proporciona una gran autonomía de acción a los líderes. Casi no existe líder de clase, e, incluso en el caso del movimiento que más se acerca a una especie de lucha de clases, la acción de los mineros bolivianos, Juan Lechín es más un líder político, cuyo poder es el de un caudillo nacional, que un líder de clase.

Privilegiados y excluidos

Estamos demasiado acostumbrados a considerar nuestros países como empresas cuyos dirigentes serían los ricos y cuya mano de obra serían los pobres. Los países de América Latina, por el contrario, no son sino parcialmente sociedades nacionales: arriba, los privilegiados pertenecen más a un sistema económico cuyo centro no está en América Latina; abajo, los excluidos, las ciudades y sobre todo los campos, casi no participan en los intercambios económicos y en el sistema político nacionales. La existencia de categorías sociales que no se definen por un nivel relativo de participación, sino por privilegios o subprivilegios, tiene consecuencias políticas directas.

Movilidad

Incluso si hay que matizar los resultados de unos primeros estudios, hechos sobre todo en Brasil, que subrayan que los obreros de origen rural se comportan menos como obreros que como emigrantes, y que están más unidos a su medio de partida y a su proyecto de futuro que a su situación presente, América Latina es, en gran parte, un continente de desarraigados que dejaron el campo o el pequeño pueblo para escapar a la miseria o a la explotación, pero también, la mayoría de las veces, con

la esperanza de encontrar un empleo en la ciudad, cierta protección social y, tal vez más que cualquier otra cosa, oportunidades de educación para sus hijos. También aquí América Latina se parece más a los Estados Unidos que a Europa. Tanto al norte como al sur, los individuos se sitúan más por su trayecto que por su estatuto, por su origen y por su devenir que por su pertenencia social y profesional. Es cierto, sobre todo, en el caso de los jóvenes, en este continente del que forman una parte tan grande; jóvenes desgarrados entre una marginalidad frecuente y una confianza, difundida casi por todas partes, en sus posibilidades de acceso al consumo y de movilidad. De ahí la extrema sensibilidad de esa juventud a los cambios de coyuntura económica.

Situación colectiva y vida personal están disociadas más a menudo que unidas. De ahí un individualismo contrario al que conoció Europa y que se apoyaba en una gran estabilidad. Individualismo que se traduce por la frecuencia de los sobrenombres, por el papel de los pequeños grupos, bandas y redes, casi siempre unidos a la personalidad de un jefe. De ahí también la personalización de la vida política en unos países donde los programas importan menos que el símbolo de apertura o de cierre que representan un candidato o un partido.

Predominio de las categorías políticas

El elevado nivel de participación sociocultural, al menos en las ciudades, tiene como principal consecuencia el predominio de las categorías políticas sobre las categorías sociales. Los militantes sindicales se definen, ante todo, por el partido al que pertenecen antes de referirse a su afiliación sindical. De igual modo, la separación de los liberales y de los conservadores divide profundamente a la burguesía colombiana.

El conjunto de estas cuatro características principales de la acción colectiva vuelve difícil e incluso peligroso identificar a los actores sociopolíticos con grandes categorías socioprofesionales. Ni los trabajadores agrícolas, ni las clases medias, ni siquiera los obreros industriales forman unas categorías que posean cierta homogeneidad cultural y política, no constituyen actores históricos reales.

Otra consecuencia de esta heterogeneidad social y de esa *ausencia de correspondencia entre situaciones y conductas* es la simultaneidad de etapas sucesivas de la evolución, lo cual hace difícil caracterizar de una sola manera a los países latinoamericanos. Sociedad rural, sociedad mercantil, sociedad industrial o incluso posindustrial coexisten ahí histórica y geográficamente. Las categorías que definen un tipo de sociedad nunca son suficientes para describir las conductas de los actores porque éstos, repitámoslo, se comprenden mejor mediante el proceso de desarrollo del que son actores que por las situaciones sociales y el nivel de modernidad de los que serían los representantes. Sigue siendo imposible separar estructura social y proceso de desarrollo en América Latina, de suer-

te que las categorías de análisis de la acción social han de seguir siendo *mixtas,* han de combinar las referencias con una estructura social y con un proceso de cambio histórico.

Un segundo cuadro —tras el que figura en la página 43— nos permite presentar el modo de desarrollo latinoamericano en términos que no analizan ya las características de una situación, sino las formaciones de acción colectiva. Es el siguiente:

Los actores del desarrollo		
	Economía	Sociedad
Límites de la industrialización	Privilegios y exclusión	Debilidad de las clases
Componentes de una sociedad industrial	Separación de la situación colectiva y de la experiencia personal	Predominio de las categorías políticas sobre las categorías sociales

Reunamos ahora, antes de entrar más directamente en el análisis de los actores y de las formas de acción social, los primeros resultados que hemos obtenido:

— En primer lugar, existe un modo latinoamericano de acción social definido por una interdependencia estructural de las categorías vinculadas a la industrialización, a la dependencia y a la modernización.

— Actores y modos de acción siguen perteneciendo, a la vez, a un tipo de sociedad, en particular a la sociedad industrial, y a un proceso de desarrollo y sobre todo de industrialización. El análisis *sincrónico* y el análisis *diacrónico* son inseparables, y todas las categorías útiles para el análisis son categorías mixtas.

— En general no existe relación de representatividad entre grupos sociales, fuerzas políticas y expresiones ideológicas, sino más bien la mezcla de una fusión entre esos diversos órdenes de hechos y de una desarticulación que destruye cualquier correspondencia directa entre ellos.

— Lo más importante de todo tal vez: en América Latina nunca existe separación clara entre la *sociedad civil* y el *Estado.* El Estado interviene constantemente como actor político, cultural, social y económico, y, por su parte, los actores sociales responden de forma más directa a las intervenciones del Estado que a las iniciativas de otros sectores sociales.

De este modo queda señalada la particularidad del modo latinoamericano de desarrollo. Es diferente de los modos que dominan los países

centrales y que dan una importancia predominante a unas categorías civiles, como el interés, la racionalización, las clases, la representatividad. Es más diferente aún, tal vez, de los modos de desarrollo estatales en los que el Estado posee una capacidad hegemónica, es decir, se identifica con un proyecto que a un tiempo es social y nacional.

El modo latinoamericano de desarrollo no tiene principio central, no tiene actor hegemónico; combina, sin integrarlas por completo, diversas dimensiones y componentes de la acción social.

Debido a ello es frágil, está constantemente bajo el peso de la amenaza de romperse dejando campo libre a una dualización que tiende a oponer núcleos modernos y zonas cada vez más marginadas, empobrecidas y en crisis. El hecho de que no se descomponga supone la existencia de poderosas fuerzas centrípetas: la intervención del Estado, asociado a unas clases medias en rápido desarrollo y que poseen una fuerte capacidad de movilización de sectores populares, es probablemente la principal de esas fuerzas. La historia de América Latina es la del enfrentamiento entre unas fuerzas de integración político-sociales y las fuerzas centrífugas que representan, de un lado, el mantenimiento de un importante sector marginado y excluido, y, de otro, la existencia de una categoría privilegiada asociada a un capitalismo dependiente y limitado.

2. ¿Existen clases sociales en América Latina?

El sociólogo define las categorías sociales por las conductas colectivas que les corresponden. Emplear palabras tan sencillas como obreros, campesinos o burguesía, supone una correspondencia entre situaciones sociales y conductas políticas o modos de consumo. De ahí la necesidad de no emplear sin precauciones, en América Latina, categorías que introducen una referencia demasiado directa a la experiencia histórica de Europa o de la América del Norte. Un primer análisis de la situación latinoamericana nos ha enseñado ya la desconfianza, señalándonos la segmentación de los actores de clase o la importancia mayor de la posición de los individuos en el proceso de desarrollo que en un sistema de producción. Por tanto, antes de estudiar de forma más directa las formas de acción colectiva, los monumentos sociales y las intervenciones del Estado, hay que examinar con el mayor cuidado las categorías socioprofesionales a las que debe apelar todo análisis sociológico.

1. Los trabajadores agrícolas

América Latina no ha sido dominada por la separación de una agricultura de subsistencia en el interior y de una agricultura fuertemente capitalizada y exportadora concentrada en unos enclaves costeros. La forma más importante de explotación de la tierra fue la *hacienda* —*fazenda* en Brasil—, orientada hacia el mercado internacional, pero apoyada en el trabajo de *colonos* organizados según formas no capitalis-

tas de trabajo. La forma extrema del colonato fue la esclavitud, tanto más dura cuanto que la producción se incorporaba de forma más directa al mercado internacional, como ha mostrado E. Genovese para los Estados Unidos. Este sistema de *plantación* no es, por tanto, diferente, en sus rasgos fundamentales, de la asociación latifundio-minifundio que también combina una producción para el mercado y unas relaciones no capitalistas de trabajo. Los *inquilinos* chilenos, los *yanaconas* del alto Perú o los *huasipongos* ecuatorianos van a trabajar a unos *fundos* o *haciendas* que producen, en gran parte, para el mercado nacional o internacional, pero dividen su tiempo entre los trabajos necesarios para la *hacienda* y las parcelas en que producen para ellos mismos o para el mercado local. Su vida no está lejos de la servidumbre, pero tampoco es muy diferente del minifundista independiente que debe alquilar su trabajo para subsistir. Como la mayoría de los minifundistas, los colonos no constituyen ni un campesinado ni un proletariado agrícola. Todos pertenecen a un sistema mixto dominado por la no correspondencia de una producción para el mercado y de relaciones sociales de producción no capitalista. En el seno de este tipo general dominante existen grandes diferencias regionales. En Ecuador, por ejemplo, la hacienda de la *sierra* es a menudo vastísima, y está dominada por relaciones tradicionales, de «estados» más que de clases, mientras que la hacienda de la *costa,* más reciente, donde trabajan colonos procedentes de la sierra y que poseen pequeñas tierras personales, participa de forma más directa del ascenso de las exportaciones, lo cual permite a los propietarios aparecer como los protectores de la región y de todos sus habitantes frente al poder central. Asimismo, en Perú, las grandes *haciendas* de cría de ganado de las altas planicies andinas de la *puna* y muchos de los grandes dominios agrícolas pertenecen a propietarios rentistas, que no intervienen ni en las inversiones ni en la producción, mientras que, en la *costa,* la agricultura de exportación se halla fuertemente capitalizada; oposición que volvemos a encontrar en muchos países de América central. Pero estas diferencias no impiden que la asociación, a la vez capitalista y no capitalista, del latifundio y del minifundio, represente la forma principal de la explotación agrícola. Fue cuando ciertas *haciendas* perdieron sus salidas comerciales, por ejemplo en el momento de la regresión de la caña de azúcar en el Nordeste brasileño, a partir de mediados del siglo XVII, cuando se desarrolló una agricultura de subsistencia; en la actualidad, ese sistema mixto se halla en vías de desaparición, pero, cuando se anunciaba el triunfo de las relaciones capitalistas de trabajo, asistimos, de hecho, a una dualización cada vez más visible de la economía agrícola.

La crisis del sistema tradicional es antigua. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en México, la desamortización permitió la formación de una agricultura capitalista al apoderarse de las tierras de la Iglesia, pero, sobre todo, de las tierras no cultivadas que en gran parte pertenecían a las comunidades indígenas.

Recientemente, en diversos países, lo que se ha llamado la *pecuarización* del campo, es decir, la sustitución de una agricultura, la mayoría de las veces extensiva, por una ganadería extensiva, ha destruido las antiguas relaciones de producción y ha creado un subproletariado agrícola que también se encuentra en las zonas de desarrollo de la industria forestal. En el estado de São Paulo y en los demás estados de *Brasil,* el desarrollo de la caña de azúcar y el plan Alcohol han unido sus efectos a los del desarrollo general de las relaciones capitalistas de trabajo para crear una población de *boías frias,* proletarios contratados para los trabajos agrícolas por empresarios de mano de obra que los reclutan en la ciudad y los transportan a los terrenos agrícolas durante la duración, siempre limitada, del contrato de trabajo. En otras regiones de Brasil, los grupos económicos han invertido en la compra de tierras, no para cultivarlas, sino con un fin especulativo, pensando que la escasez de las tierras haría subir su precio. De igual modo, en la costa norte del *Perú,* y en particular en la producción azucarera, aunque también en la zona del algodón, asistimos a la incorporación de la mano de obra en las relaciones capitalistas de trabajo y a la desaparición progresiva del *yanaconaje.* En *Paraguay,* empresas agrícolas medianas o grandes, a menudo en manos de extranjeros, se han apoderado de una parte creciente de las tierras. Ciertos grupos religiosos como los mennonitas han instalado en el Chaco grandes empresas agrícolas que abastecen a la capital. En Améri-

Crecimiento comparado del empleo «campesino» y del empleo asalariado en la agricultura
(las cifras positivas indican una diferencia a favor de los campesinos independientes)

Países	1950-1960	1960-1970
Argentina	+ 3,5	− 1,2
Bolivia	s.d.	+ 2,9
Brasil	+ 2,2	+ 0,5
Colombia	+ 0,5	− 2,3
Costa Rica	+ 2,2	− 2,4
Chile	+ 0,2	− 3,3
Ecuador	+ 1,7	+ 0,3
El Salvador	− 5,8	+ 5,7
Guatemala	s.d.	+ 8,3
Honduras	− 1,9	− 1,4
México	− 5,5	− 1,9
Nicaragua	− 0,3	0,0
Panamá	− 5,2	− 3,4
Perú	s.d.	+ 3,3
Rep. Dominicana	s.d.	− 5,7
Uruguay	s.d.	+ 1,7
Venezuela	+ 2,1	+ 2,3

FUENTE: PREALC, *Economía campesina y empleos,* 1981, pág. 17.

ca central, y en particular en *El Salvador,* los grupos indígenas fueron privados de sus tierras y de su cultura y transformados en trabajadores temporeros en los dominios de una agricultura de exportación que pertenece a las «catorce familias» protegidas por el poder militar.

Pero el proceso de desarrollo de la economía de mercado, debido a la incorporación de los campesinos a las relaciones capitalistas de trabajo, y debido también a las reformas agrarias, no ha desembocado en modo alguno en un triunfo progresista de la agricultura capitalista. Como ha demostrado E. Klein, la pequeña explotación agrícola se ha mantenido en muchas regiones.

En el caso del *Brasil,* que se halla en el centro de las discusiones, C. Filgueira, en un informe a la CEPAL, demuestra que la parte de los asalariados agrícolas en la población activa ha disminuido con más fuerza que la de los trabajadores independientes y los miembros de su familia.

	En porcentaje		
	1950	1960	1970
Asalariados agrícolas	21,4	13,7	11,6
Trabajadores independientes y miembros de su familia	39,1	35,5	32,5

La pequeña explotación agrícola se mantiene en Brasil y no sólo en el Nordeste. En el Paraná, el 32,7 por 100 de la tierra está ocupada por explotaciones de menos de 50 hectáreas en 1960 y esa proporción sube al 41,8 por 100 en 1970, para bajar de nuevo, pero sólo hasta el 34,5 por 100 en 1975. Al mismo tiempo, el valor neto anual por cabeza de la producción se eleva, de 1970 a 1975, de 2.155 a 3.139 cruzeiros (de 1975) en las empresas de menos de 10 hectáreas, y de 2.991 a 5.142 cruzeiros en las empresas de 10 a 20 hectáreas. En cuanto al Nordeste, aunque es cierto que su población urbana ha aumentado en más de 9 millones de habitantes desde 1950 a 1980, su población rural ha crecido durante el mismo período en 8 millones. Para el conjunto del Brasil, las explotaciones de menos de 50 hectáreas, que en 1960 representaban el 13 por 100 de la población agrícola, representan en 1975 el 13,7 por 100. Esta resistencia del minifundio es tradicional en Brasil. Entre 1872 y 1920, pese a las migraciones hacia las nuevas regiones de la producción del café, la población del Nordeste se duplicó, demostrando así la capacidad de una agricultura no exportadora para retener una mano de obra importante (cf. V. Faria, en *Cuadernos* CEBRAP, julio-septiembre de 1974, páginas. 131-151). M.-I. Pereira de Queiroz ha recordado también que la oposición, clásica desde G. Freire, entre la *casa grande* de los amos y

las *senzalas* de los esclavos y de los *moradores,* no debe ocultar la importancia de los pequeños productores independientes, los *sitiantes,* que siempre han abastecido al mercado urbano y que han formado una sociedad rural fuerte, organizada en *bairros,* en unidades de vecindad.

Este mantenimiento del minifundio ha sido explicado por muchos autores marxistas por las necesidades del desarrollo capitalista, industrial y urbano, porque el minifundio permitiría rebajar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo urbano. R. Bartra habla de una «acumulación primitiva permanente», y C. Meillassoux y R. Stavenhagen han insistido en la necesidad que tiene el capitalismo de mantener el minifundio. Tal tesis parece verificarse en ciertos casos. Se observa, por ejemplo, que los campesinos bolivianos que van a trabajar a la zona minera de Potosí aceptan, debido a su doble actividad, salarios particularmente bajos. Asimismo, L. Llambi ha observado en Venezuela que la actividad agrícola de muchos obreros, sin frenar su proletarización, permite a las empresas no pagarles más que bajos salarios (PREALC, *Economía campesina y empleo).* Sin embargo, es difícil aportar pruebas de la funcionalidad directa del minifundio para la acumulación capitalista. Si en el caso boliviano podemos considerar a los minifundistas como una reserva de mano de obra, resulta difícil considerar a los veinte millones de campesinos pobres del Nordeste brasileño como el ejército de reserva del proletariado paulista. De cualquier modo, el aumento en cifras absolutas de la población de los pequeños campesinos no puede explicarse por la presión ejercida sobre los salarios. Parece más racional reconocer que el mantenimiento de una población rural con rentas mucho más bajas que las del sector informal urbano manifiesta ante todo la insuficiente capacidad de absorción de la mano de obra de origen rural por la economía urbana. Lo cual nos dispensa de recurrir a la idea arbitraria de una «lógica» central del sistema económico y afirma, por el contrario, que se mantiene la autonomía relativa de los dos sectores, autonomía reforzada por la presión demográfica particularmente fuerte en el campo. Algunos no creen en el mantenimiento definitivo de dos sectores en la agricultura. En el Nordeste brasileño, el tamaño de las pequeñas explotaciones agrícolas ha disminuido nítidamente de 1960 a 1970, de 3,46 a 2,71 hectáreas para las explotaciones de menos de 5 hectáreas y de 4,18 a 3,61 para las de menos de 10 hectáreas. En todas partes se refuerza la pobreza de los minifundistas. Alcanza un grado extremo en *Haití,* país dominado por el minifundio desde el siglo XIX y en el que dos tercios de la población explotan menos de un cuadro. Sin embargo, esa disminución no es general. Aunque es importante en Brasil, en Nicaragua, en Jamaica, en Perú, en Ecuador y en Panamá, E. Klein observa que no se produce en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia y en México, y que el tamaño de la pequeña explotación aumenta incluso en Chile, en Venezuela, en México, en la República Dominicana y en Uruguay, entre 1960 y 1970. Las cifras no permiten concluir, por tanto, que el minifundio no

sería más que una forma de transición entre la antigua hacienda y una agricultura capitalista, interpretación que sólo puede aplicarse en casos limitados, por ejemplo en las regiones del Nordeste brasileño, donde la crisis de los *engenhos,* frente al ascenso de las *usinas,* ha llevado a los *senhores* de los primeros a distribuir parcelas de tierra —los *roçados*— a los *moradores,* a los colonos que venden su producción en los mercados locales.

Esta sociedad de minifundistas no es residual; esos pequeños campesinos llevan de forma activa una estrategia de supervivencia en la que entran, como elementos importantes, la diversificación de los cultivos y sobre todo la emigración hacia la ciudad. Percibimos a los emigrantes como aquellas personas que han dejado el campo por la ciudad. Ahora bien, la realidad es muy a menudo diferente; el que se ha ido permanece vinculado a su familia de origen y el dinero que envía ayuda a ésta a sobrevivir. En el libro ya citado de PREALC, L. Arizpe ha descrito de modo muy preciso esa migración por etapas en el caso mexicano: «El padre intensifica su trabajo en las dos primeras etapas del ciclo combinando su trabajo agrícola con su actividad de emigrante. Pero a partir de la tercera etapa, los hijos o las hijas mayores empiezan a sustituirle en el trabajo migratorio. Cuando a su vez empiezan a separarse del grupo familiar, a partir de la cuarta etapa del ciclo doméstico, cuando la madre tiene cuarenta años o más, son los hijos y las hijas menores los que ocupan su puesto en el trabajo migratorio. La migración *por relevos* constituye una estrategia para asegurar a un grupo familiar una renta asalariada en cada una de las etapas del ciclo.» Análisis notable, tan alejado de un culturalismo vago como de la apelación arbitraria a una lógica todopoderosa del sistema capitalista. Los minifundistas no viven por completo al margen de la agricultura y de la economía capitalistas; tampoco están totalmente integrados en ella. Esa es también la razón por la que en el Nordeste brasileño han constituido la base de las ligas campesinas, dirigidas por Julião, mientras que los trabajadores agrícolas asalariados organizaban sindicatos.

No existe frontera clara entre esos pequeños campesinos independientes o las comunidades campesinas, de un lado, y la economía de mercado, de otro. M. F. Morizot (cf. Bibl., I, 2) ha descrito para el *Perú* la oposición de dos secciones, *gollana* y *wanaco,* en una comunidad campesina. La primera es superior a la segunda, tanto geográfica como socialmente, y es ella la que asegura las actividades comerciantes, mientras que la segunda sección está en situación dominada y no gestiona las relaciones con el exterior. Podríamos por tanto concluir que la comunidad se descompone; sin embargo, conserva su unidad cultural, sus fiestas pagadas por los *mayordomos,* y las formas de control social y cultural ejercidas sobre sus miembros. La penetración parcial del capitalismo mercantil no significa la destrucción de la comunidad. Eso es también lo que observa en Yucay, en el departamento del Cuzco, A. Molinié-Fio-

BIBLIOTECA UNAM

ravanti (cf. Bibl., II, 1): los minifundistas se empobrecen mientras que se enriquecen los comerciantes y los camioneros, pero también ahí el mundo campesino conserva su autonomía y su cohesión.

Mas, en conjunto, la combinación de producción capitalista y de relaciones no capitalistas de trabajo, que existía en la hacienda tradicional, queda reemplazada por la separación de minifundistas que se mantienen gracias al trabajo de una familia extensa, y de una agricultura capitalista que utiliza asalariados permanentes o temporales. Nada indica que una de esas formas de explotación y de sociedad rurales tienda a desaparecer. Habría que añadir que, al margen de estos dos tipos principales, se desarrolla a veces una categoría de campesinos ricos, de *farmers,* por ejemplo en el valle de Putaendo en Chile o en el de Mantoro en Perú, de igual modo que en México ciertos miembros de las comunidades campesinas, los *ejidos,* se han transformado en empresarios agrícolas, o que los *arrendires* del valle de la Convención en el alto Perú se hayan vuelto campesinos ricos contra los que se sublevaron los trabajadores más desfavorecidos en el momento del movimiento campesino dirigido por Hugo Blanco.

De manera inversa se mantienen bien comunidades, bien aldeas, casi al margen de las relaciones mercantiles. Pero viven una decadencia que es, no el agotamiento de una cultura antiquísima, original, sino más bien el de formas coloniales de producción, como lo subraya C. Bernard al estudiar en el sur de Ecuador, en Pindilig, aldea de montaña, a los que se llaman a sí mismos los «renacientes», lo cual quiere decir de hecho los decadentes.

Concluyamos: el sector agrícola no se unifica, no se incorpora por entero a la economía de mercado. Se mantiene un importante sector de minifundistas; su productividad es baja y su subempleo importante. E. Klein concluye: «Puede afirmarse categóricamente que la "lógica de funcionamiento del sistema" impone la reproducción o el desarrollo de uno u otro tipo de "relaciones sociales de producción".» La afirmación de que el desarrollo del capitalismo en la agricultura necesita minifundistas, lo mismo que su opuesta, según la cual crea masas crecientes de proletarios, no parecen justificadas por los datos disponibles.

La dualización permanente de la sociedad rural indica la presencia de una economía capitalista limitada que mantiene a los minifundistas en una situación a la vez de dependencia y de autonomía. Al mismo tiempo, la disminución rápida del número de asalariados agrícolas permanentes y la supervivencia de un importante sector de minifundistas no impiden la incorporación de las luchas agrícolas a movimientos que estarían dirigidos por los asalariados urbanos. Los minifundistas defienden su tierra e intentan instalarse en tierras libres, como ocurre en el caso de los *posseiros* de la Amazonia brasileña. En Colombia, en Perú y en Brasil, esas luchas son, incluso, las más importantes del mundo rural, pero

siguen conservando su independencia y permanecen alejadas del sindicalismo obrero. Consecuencia directa de la autonomía mantenida por el sector no capitalista de la producción agrícola.

2. El sector informal urbano

Tanto en el campo como en la ciudad existe una cantidad importante de pobres que viven en malas condiciones de alojamiento o de alimentación, que están subempleados o en paro, que participan poco, o de manera sólo ocasional e indirecta, en la vida política. La importancia de esta categoría ha llevado a menudo a describirla por su *marginalidad* misma. Pero ¿de dónde procede esa marginalidad? A buen seguro, son los menos calificados y los menos instruidos los que con mayor frecuencia encontramos en la categoría de los marginados o de los pobres; pero una definición como ésa es peligrosa: en primer lugar, porque supone que el medio así estudiado es homogéneo, cuando con mucha frecuencia encontramos en los tugurios o en las chabolas hombres y mujeres que ejercen una actividad profesional completamente normal; por otro lado, y sobre todo, porque una descripción en términos de géneros de vida y de conductas no nos informa sobre las causas del fenómeno observado. Así pues, hay que reorientar el análisis y explicar la importancia de la pobreza y de la marginalidad por las características del modo de desarrollo latinoamericano.

El viajero que descubre América Latina conoce, ante todo, sus ciudades y su impresión más fuerte es la de los inmensos barrios de chabolas o de construcciones de mala calidad que ocupan una gran parte, a veces la mayor parte, del territorio urbano. Esta importancia de los alojamientos precarios se encuentra en casi todas las ciudades del Tercer Mundo. Pero todavía hay que distinguir entre los tugurios de las chabolas y otros alojamientos de los barrios. Los tugurios —*conventillos* del sur o *mesones* de América central— se hallan en el centro de las ciudades. Según C. Bourdé, en Buenos Aires acogían al 18 por 100 de la población en 1881, el 26 por 100 en 1887 y todavía el 14 por 100 en 1904. En Santiago, ciudad menos rica, en los años treinta casi la mitad de los habitantes, 250.000 de 540.000, vivían en los *conventillos,* con un bajísimo nivel de vida y una mortalidad infantil que se eleva al 212 por 1.000 en 1928, al 258 por 1.000 en 1933 y al 241 por 1.000 al final de los años treinta. Una gran parte de esos pobres vivía en dependencia muy directa de los ricos; la mayoría de ellos carecía de empleo estable, pero realizaba trabajos precarios de mano de obra *(peones).* Sin embargo, el crecimiento urbano, que se aceleró después de la segunda guerra mundial, ha otorgado una importancia cada vez mayor a los barrios que se han creado sin plan de urbanización, o a las chabolas que han brotado bien en el centro mismo de la ciudad, como fue el caso de las favelas de Río, bien, lo más a

menudo, en su periferia. Casi cada país da un nombre diferente a esos barrios precarios periféricos: *villas miseria* en Argentina, *poblaciones callampas* en Chile, *barriadas* luego *pueblos jóvenes* en Perú, *ranchitos* en Venezuela, *tugurios* en Colombia y América central. En Asunción, el barrio de chabolas se llama la *chacarera.* Estos alojamientos marginales representaban el 38 por 100 de la población de Río en 1961, el 14 por 100 de Santiago en 1960, el 30 por 100 de Caracas en 1958, el 10 por 100 solamente de Buenos Aires en la misma fecha, pero el 43 por 100 en Arequipa, en el sur del Perú; el 70 por 100 en Chimbote, en el norte de ese mismo país, e incluso el 80 por 100 en Buenaventura, en Colombia. A estos barrios precarios, constituidos de forma progresiva, sin plan ni voluntad de conjunto, hay que añadir la creación de nuevos barrios por ocupación de terrenos, siguiendo la iniciativa de grupos políticos. Adquiere una gran importancia en Chile durante la Unidad popular y da lugar a *campamentos.* Numerosos estudios, en particular los de Desal, dirigidos por R. Vekemans, a principios de los años sesenta, han descrito esa marginalidad urbana. Los citados más a menudo carecen de equipamientos suficientes: el agua sólo se encuentra en las fuentes, faltan las alcantarillas, la electricidad se roba más a menudo de líneas próximas de lo que se instala. Pero de estas malas condiciones de alojamiento no hay que concluir en la marginalidad general de quienes las sufren. En una época de crecimiento económico, en los años sesenta, se notaba en Santiago una proporción de obreros industriales con pleno empleo en las *poblaciones callampas* más fuerte que en el resto de la ciudad. Cierto que las malas condiciones de alojamiento y de vida en general entrañan formas de desorganización social, de estallido de las familias, del aumento del alcoholismo y de la prostitución, pero hacer de los habitantes de estas amplias zonas urbanas marginales, incluso *biffins,* sería a la vez falso y escandaloso. Por el contrario, podemos sorprendernos de la capacidad de resistencia de los habitantes de estos extrarradios pobres, que se explica en parte por el mantenimiento de vínculos familiares extensos, y también por la capacidad de ayuda mutua que se desarrolla en esos barrios.

Esta primera imagen, que describe la pobreza en términos de malas condiciones de alojamiento y de crisis urbana, se inscribe, de hecho, en una visión optimista del desarrollo. El gran movimiento de urbanización y de emigración, asociado a un fuerte crecimiento económico, no deja de tener su lado dramático, desde luego, pero los recién venidos saben, incluso aunque vivan en malas condiciones, que la ciudad les aporta mejores posibilidades de trabajo, un mínimo de servicios sociales y colectivos y, sobre todo, perspectivas de educación para sus hijos. Los habitantes de los tugurios y de las chabolas o trabajan en la industria, en el comercio y en la administración, o, cuando no están lejos del centro, reciben las migajas de la opulencia de los ricos. A menudo se denuncia la insuficiencia de la construcción de viviendas sociales, por ejemplo en Caracas, en Bogotá o en Buenos Aires, pero quienes denuncian las ma-

las condiciones de vida de una parte de la población consideran que se trata de una etapa penosa aunque transitoria, que debe ser superada por el progreso de la economía urbana.

Este optimismo se borra poco a poco, a medida, sobre todo, que se agotan los efectos del período fácil de sustitución de las importaciones. Se empieza a considerar entonces que la pobreza no es una situación provisional, el purgatorio que conduce al paraíso urbano, sino un estado duradero del que es difícil salir.

Las cifras reunidas por PREALC muestran que la pobreza es, más a menudo, rural que urbana, cosa que aparece con mayor nitidez todavía si, en lugar de considerar la pobreza, se describe la *indigencia,* que corresponde a un nivel de vida más bajo todavía: sólo el 10 por 100 de los hogares urbanos, frente al 34 por 100 de los hogares rurales, están por debajo del nivel de indigencia. La pobreza está naturalmente más difundida en los países en que la renta correspondiente al nivel de pobreza es más bajo, nivel que varía de los 142 dólares en Honduras a los 252 en Venezuela en 1970. La pobreza y, sobre todo, la indigencia definen cierto tipo de vida, marcado por una alimentación y cuidados médicos insuficientes; existe también una fuerte correlación entre el analfabetismo y la pobreza, aunque, en ciertos países, en particular en Brasil, el analfabetismo se mantenga en un nivel elevado a pesar de un crecimiento económico importante (el 26 por 100 en la población de más de trece años en 1980 frente al 3,9 en Cuba, el 6,7 en Argentina, el 7,5 en Chile, el 16,0 en México y el 18,5 en Perú, pero también el 33,5 en Nicaragua, el 36,7 en Bolivia y sobre todo el 71,3 en Haití).

La pobreza, a su vez, se explica en gran parte por el *subempleo* y el *paro.* La primera de estas realidades es menos visible y se conoce peor que la segunda; sin embargo, su importancia es más grande todavía,

Subempleo y paro

Países	Años	Tasa de subempleo	Equivalente paro
Buenos Aires	1970	27,8	12,0
Brasil (población no agrícola)	1970	43,5	21,8
Colombia (población no agrícola)	1970	39,2	20,2
Chile (población no agrícola)	1967-1968	37,9	17,3
México (población urbana)	1968	27,9	11,8
Uruguay (población total)	1968	32,3	14,2
Venezuela (población no agrícola)	1971	42,9	20,5
		36,9	17,5

FUENTE: PREALC, *Employment in Latin America,* 1978, pág. 19.

En la última parte de este libro se verá que el subempleo ha aumentado mucho en el curso de la crisis de los años ochenta.

como vemos cuando se transforma el subempleo en equivalente del paro, utilizando el método elaborado por PREALC.

El subempleo afecta más a ciertas categorías: a los emigrantes que acaban de llegar del campo, a los individuos que tienen un nivel bajo de educación, a los jóvenes y a las mujeres que entran por vez primera en el mercado de trabajo. La distancia que separa los parados o a aquellos que están subempleados de aquellos otros que tienen una actividad profesional normal tiende a reforzarse con el tiempo, por la acumulación de las consecuencias negativas de la pérdida de empleo.

Todas las categorías que acabamos de presentar tienen el inconveniente de ser únicamente descriptivas e, incluso en ese plano, no poseen sino un valor limitado, dado que la población de los marginados, de los pobres o de los subempleados está lejos de ser homogénea. De ahí la importancia del paso de categorías descriptivas a una noción explicativa, que no designa ya un conjunto de personas o de condiciones de vida, sino un elemento importante del sistema económico y social.

Este paso ha sido realizado por todos aquellos que han subrayado los límites del desarrollo capitalista en América Latina, la debilidad del mercado interior y la extrema desigualdad de las rentas. Algunos han querido ir más lejos y ver en la marginalidad urbana una forma extrema de ejército de reserva industrial que pesa sobre los salarios. Los largos debates ideológicos sobre el tema han permitido ver al menos que la marginalidad y el subempleo desbordan ampliamente la reserva de paro, de la que puede pensarse que permite mantener los salarios a nivel bajo. PREALC ha adoptado una posición más prudente, subrayando a un tiempo la fuerte capacidad de integración de las sociedades latinoamericanas y el mantenimiento permanente, incluso el reforzamiento de amplias categorías de excluidos. PREALC ha adoptado la noción de *sector informal* para designar a los asalariados que están empleados en pequeñas empresas no modernas y a los trabajadores independientes, excluyendo a los profesionales de nivel universitario y a los empleados domésticos. Definición, a decir verdad, insuficiente, porque el interés principal de los trabajos de PREALC consiste en demostrar la permanencia de los mecanismos de dualización estructural de la producción y del consumo. La capacidad insuficiente de absorción de la mano de obra por el sector moderno tiene causas diversas, pero lo esencial es reconocer que la economía latinoamericana, que tiene una fuerte capacidad de integración, posee al mismo tiempo una fuerte capacidad de exclusión. V. Tokman y N. García, en trabajos ya citados, han recordado que la principal diferencia entre la América Latina actual y los Estados Unidos en el momento de su despegue industrial, a finales del siglo XX, estriba en que en los Estados Unidos el sector informal se ha reabsorbido con bastante rapidez, mientras que un crecimiento económico importante no ha impedido el mantenimiento e incluso a veces la expansión del sector informal en América Latina.

La importancia de este sector es considerable. En el comercio, la pequeña tienda sin empleados asalariados ocupa un lugar predominante. En Lima, los vendedores ambulantes representan el 35 por 100 de todas las ventas; en Santiago, el 81 por 100 de las frutas y verduras se distribuyen en los mercados o a través de vendedores ambulantes. Incluso en las pequeñas empresas que emplean asalariados, una parte importante de éstos recibe una remuneración inferior al salario mínimo. La oposición del sector informal y del sector formal es, por tanto, la traducción exacta de una dualización que indica los límites de la capacidad de absorción de la mano de obra por el sector moderno.

La crisis de los años ochenta ha aumentado la importancia del sector informal y la distancia que lo separa del sector formal, haciendo descansar así el peso principal de la recesión sobre los hombros menos cualificados y más pobres. En Chile, por ejemplo, donde la caída del nivel de vida general ha sido de un 20 por 100, la baja ha sido de más de un 40 por 100 en el sector informal, mientras que las categorías altamente cualificadas y con remuneraciones elevadas no registraban casi ninguna pérdida. La situación de las *poblaciones* chilenas se ha visto más agravada aún por la política de supresión de las chabolas o de las zonas de alojamiento más pobres, porque unas 130.000 personas expulsadas han ido a buscar refugio en casas de padres o de amigos en las *poblaciones*. El paro, la superpoblación, así como una represión policial y militar particularmente brutal, han terminado separando a ricos y pobres de Santiago como si fueran dos naciones, cuando Chile, a pesar de grandes desigualdades sociales, había alcanzado un elevado grado de integración nacional, al menos si lo comparamos con otros países de América Latina al margen del cono Sur (véase el cuadro de las páginas siguientes).

Ocurre que el sector informal se vuelve el más importante. En este caso debe abandonarse la noción de marginalidad. Es la tesis que defiende J. Matos Mar para el Perú de los años ochenta. Cierto que, en el pasado, la ciudad de Lima había creado una cultura mestiza, *chola,* y había ofrecido a los inmigrantes una sociedad abierta y una situación de marginalidad que no excluía posibilidades de ascenso profesional o de integración social. Pero hoy, con la crisis general de la economía, observa Matos Mar, la capacidad de absorción de la economía y las perspectivas de ascenso social han disminuido, han desaparecido casi. Tanto en Lima como en Bogotá, el sector formal no absorbe más que a una minoría de la población activa, y la cultura de aquellos que no pertenecen a este sector ya no es marginal; es la que mejor define la vida urbana. En Lima se ha creado una cultura *chicha,* bautizada con el nombre de la música que la caracteriza, mezcla de música del altiplano andino y de salsa. Esa cultura se manifiesta en todos los campos, en la educación, donde aparecen numerosas escuelas de formación profesional rápida, al margen por completo del sistema académico clásico, pero también en la religión, donde se ven proliferar las comunidades y las sectas a expensas de las

«Sector» formal y «sector» informal

Países	Fecha	Población no agrícola			Población agrícola			Sub-empleo
		Sector formal	Sector informal	Total	Moderna	Tradi-cional	Total	
América Latina	1950	30,6	13,5	44,1	22,1	32,6	54,7	46,1
	1980	47,7	19,4	67,1	13,2	18,9	32,1	38,3
Brasil	1950	28,5	10,7	39,2	22,5	37,6	60,1	48,3
	1980	51,6	16,5	68,1	12,4	18,9	31,3	35,4
Colombia	1950	23,9	15,3	39,2	26,2	33,0	59,2	48,3
	1980	42,6	22,3	64,9	15,8	18,7	34,5	41,0
Costa Rica	1950	29,7	12,3	42,0	37,3	20,4	57,7	32,7
	1980	54,2	15,3	69,5	20,5	9,8	30,3	25,1
México	1950	21,6	12,9	34,5	20,4	44,0	64,4	56,9
	1980	39,5	22,0	61,5	19,2	18,4	37,6	40,4
Panamá	1950	34,9	11,8	46,7	6,2	47,0	53,	58,8
	1980	51,6	14,8	66,4	11,4	22,0	33,4	36,8
Venezuela	1950	34,7	16,4	51,1	23,3	22,5	45,8	38,9
	1980	60,9	18,5	79,4	6,5	12,6	19,1	31,1
Bolivia	1950	9,1	15,0	24,1	19,0	53,7	72,7	68,7
	1980	17,9	23,2	41,1	5,2	50,9	56,1	74,1
Ecuador	1950	21,5	11,7	33,2	27,4	39,0	66,4	50,7
	1980	25,6	28,6	54,2	12,1	33,4	45,5	62,0
El Salvador	1950	18,5	13,7	32,2	32,5	35,0	67,5	48,7
	1980	28,6	18,9	47,5	22,3	30,1	52,4	49,0

Guatemala	**1950**	**16,6**	**14,0**	**30,6**	**20,6**	**48,7**	**69,3**	**62,7**
	1980	**23,8**	**18,9**	**42,7**	**19,4**	**37,8**	**57,2**	**56,7**
Perú	1950	19,1	16,9	36,0	21,9	39,4	61,3	56,3
	1980	37,7	19,8	57,5	8,9	31,8	40,7	51,6
Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile).	1950	54,0	16,6	70,6	20,4	7,6	28,0	24,2
	1980	61,5	21,4	82,9	9,2	7,0	16,2	29,4
Argentina	1950	56,8	15,2	72,0	19,9	7,6	27,5	22,8
	1980	63,5	21,4	84,9	7,8	6,8	14,6	28,2
Chile	1950	40,8	22,1	62,9	23,1	8,9	32,0	31,0
	1980	55,5	21,7	77,2	13,2	7,4	20,6	29,1
Uruguay	1950	63,3	14,5	77,8	17,3	4,7	22,0	19,2
	1980	63,3	19,0	82,3	9,5	8,0	17,5	27,0

FUENTE: PREALC, *Necesidades esenciales y políticas de empleo en América Latina.*

Iglesias organizadas. Nada justifica mejor la noción de sector informal que la transformación de la marginalidad en una situación mayoritaria. Grompone, autor de un excelente estudio sobre los vendedores ambulantes de Lima, se equivoca al criticar los trabajos de PREALC: no se da cuenta de que el progreso que éstos representan consiste precisamente en pasar de la descripción de una categoría al análisis de ciertos mecanismos económicos y sociales generales.

Se han propuesto explicaciones muy variadas de la marginalidad y del subempleo; completan el análisis «estructural» de PREALC y de la CEPAL. Hay que recordar, ante todo, que la situación actual de los países latinoamericanos recuerda la de Europa occidental o de América del Norte al comienzo de su industrialización, cuando el capitalismo era más mercantil que industrial. Londres, París o Nueva York fueron semejantes a lo que son Río, Lima o Santiago. Los novelistas y los cronistas de los siglos XVIIII y XIX describieron París y Londres como ciudades dominadas por una rica burguesía rodeada de servidores, de artesanos, de modistas y de comerciantes que trabajaban para ella. Por debajo de esa burguesía sólo existía una clase media muy limitada, pero bajo ésta había un número muy elevado de pobres o de marginados: mendigos, prostitutas, ladrones, formando lo que a veces se ha denominado la clase peligrosa. Hasta la primera guerra mundial y el gran desarrollo industrial de los años veinte, la capacidad de absorción del sector moderno de los países de Europa occidental ha seguido siendo muy limitada. Fue al formarse mercados de masa cuando muchos pobres y marginados fueron integrados en una clase obrera que mejoró rápidamente su situación, en particular en los Estados Unidos.

De forma casi opuesta podemos insistir en el carácter «moderno» del empleo marginal. ¿No fue en la época de pleno empleo cuando los grandes países industriales se asustaron de este tipo de empleo? Hoy, sin embargo, se habla de manera mucho más positiva de la economía «sumergida», que explicaría el vigor de la economía italiana, la mayoría de cuyos parados oficiales ejercían, de hecho, tareas productivas aunque a espaldas de la legislación social. Estudios recientes han mostrado que muchos jóvenes se alejan, en diversas metrópolis latinoamericanas, de empleos asalariados mal pagados y expuestos al paro y eligen empleos considerados precarios, que abandonan con gran facilidad y que les aportan una renta muy superior. La distancia entre Europa y América Latina sería, por tanto, mucho más pequeña de lo que parece, sobre todo en el momento en que varios países europeos alcanzan tasas de paro abierto más elevadas que los de muchos países de América Latina. El desarrollo del subempleo en Chile o en Argentina, por ejemplo, explicaría la baja o el nivel bastante bajo del paro declarado en esos países, tras los años negros de 1982-1985.

Sin embargo, esta interpretación no puede considerarse suficiente, dado que el subempleo es mucho más que el margen del empleo «for-

mal». Hay, por tanto, que volver al tema de la dualización, es decir, ante todo al desequilibrio que se crea entre una capacidad de absorción limitada del sector moderno y la importancia de las corrientes migratorias procedentes del campo, corrientes que se explican, en primer lugar, aunque no únicamente, por la tasa de natalidad muy elevada de los campos, salvo en los países del Plata. Impulsadas por esa fuerte natalidad, tales corrientes se agrandan debido a la superioridad de los bajos salarios urbanos en relación a las bajas remuneraciones rurales y por las posibilidades que ofrece la ciudad como mercado de trabajo y, sobre todo, como lugar donde los hijos pueden recibir una educación mejor. Hay que combinar los límites propios de un desarrollo dependiente, la supervivencia de una sociedad rural superpoblada y también el efecto de las intervenciones del Estado, que se ejercen, sobre todo, en favor de las masas urbanas, para explicar el fuerte desfase que se crea entre la oferta y la demanda de trabajo.

A estos efectos de la crisis del mundo rural, acentuados por los de las políticas populistas en favor de los habitantes de las ciudades, se añaden los de un capitalismo dependiente y limitado. Las demandas de integración son inmensas; la capacidad de absorción de la economía urbana, limitada; se crea, por tanto, un amplio sector marginal, formado por individuos y familias de escasos recursos, que constituyen un mercado estancado o incluso en regresión, al margen de la industria y del comercio modernos. El sector industrial proporciona productos de calidad corriente o inferior, permite compras en pequeña cantidad, concede un crédito personalizado, ofrece servicios artesanales menos costosos que la sustitución de los objetos usados. Mientras muchos regímenes políticos exaltan a la clase media, la economía de los países latinoamericanos sigue basándose en la oposición de los ricos —con sus proveedores y su personal de servicio— y de los pobres que no tienen acceso a la producción y al comercio industrializados. El agravamiento de las desigualdades sociales entraña directamente la extensión del sector informal de la economía.

3. Los obreros

Hay muchas razones que impulsan a prever la creación progresiva de un poderoso movimiento obrero en América Latina. Esta región se halla en vías de industrialización y ya hemos visto formarse grandes concentraciones obreras en Buenos Aires, en São Paulo y en México-Puebla. El nivel de vida de los obreros ha bajado en muchos países durante largos períodos; finalmente, los sindicatos han tenido y todavía tienen una gran influencia política, al menos allí donde su existencia no está prohibida. Todas estas razones hacen previsibles no sólo el desarrollo del sindicalismo, sino incluso la formación de un movimiento obrero revolucionario, es decir, la asociación de las reivindicaciones sindicales y de la vo-

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

luntad política e ideológica de destruir un antiguo régimen dominado por la oligarquía o el capital extranjero y caracterizado por grandes desigualdades económicas y sociales. Por otro lado, han sido numerosos los intelectuales que, en todos los países, han querido acelerar la formación, a sus ojos necesaria e inevitable, de semejante movimiento obrero revolucionario. La realidad es muy diferente: el movimiento obrero no ha jugado más que un papel secundario, subordinado, y los partidos obreros, socialistas o comunistas, no tienen sino una importancia limitada en América Latina, con excepción de Chile. Los partidos socialistas han sido particularmente débiles y han reclutado más bien intelectuales y empleados que obreros. Los partidos comunistas, cuya importancia ha sido muy desigual según los países y casi nula en muchos, han dado casi siempre prioridad a la alianza con la burguesía nacional y con el Estado contra el capitalismo extranjero. No hay movimiento sindical fuerte y revolucionario más que en los países de enclaves mineros, como Perú, Bolivia y Chile. Pero con la excepción parcial, una vez más, de Chile, en ninguna parte la política nacional ha sido dominada por la acción autónoma del movimiento obrero. En la tercera parte de este libro buscaremos la explicación principal de esta debilidad del movimiento obrero en la dependencia general de los movimientos sociales respecto a la acción política; pero esa debilidad se explica también por la situación obrera misma.

Al final de los años sesenta, las estadísticas parecían mostrar un retroceso de la importancia relativa de la clase obrera en la población activa, pero no agrícola. De hecho no era más que una ilusión que abarcaba el desarrollo de las actividades modernas, asociado al retroceso de los sectores tradicionales, que pasaban del 82 por 100 de los efectivos a las industrias de transformación en Brasil en 1960 al 51 por 100 en 1970 y al 42 por 100 en 1980. De 1960 a 1980, la población obrera ha adquirido un peso creciente en la mayoría de los países, pero éste ha permanecido relativamente débil. Si los obreros representan el 27,5 por 100 de la población activa en Argentina y el 25 por 100 en Chile, no llegan más que al 19 por 100 en Panamá y en Venezuela, al 17,5 por 100 en México, al 16 por 100 en Colombia, al 15 por 100 en Brasil y a menos del 15 por 100 en Perú. En la República Dominicana forman incluso menos del 10 por 100 de la población activa.

Esta debilidad de la clase obrera se ve acentuada por su dualización y, en sentido más amplio, por la heterogeneidad estructural de la economía. En muchos países pueden distinguirse cuatro niveles de organización industrial:

— las industrias dominantes, que a veces representan más de la mitad de las exportaciones del país, como el cobre en Chile, el estaño en Bolivia o el petróleo en Venezuela y en Ecuador, al menos durante largos períodos;

— la gran industria moderna, cuyo capital la mayoría de las veces es público o extranjero;

— la industria tradicional y de la construcción dominada por el capital nacional privado;

— finalmente, como hemos visto, el sector informal, formado por pequeñas unidades de baja productividad.

Evolución de los salarios
(porcentaje)

Países	Años	Salarios mínimos urbanos	Salarios en la industria	Salarios en la construcción
México	1973-81	15,5	14,0	17,3
Venezuela	1973-81	– 14,2	14,2	n.d.
Brasil	1973-81	2,3	37,3	17,4
Argentina	1974-81	– 52,0	– 20,6	43,1
Chile	1970-81	– 24,7	15,9	8,1
Colombia	1973-81	49,7	11,7	32,6
Costa Rica	1973-81	6,3	4,9	12,7

FUENTE: PREALC, *Empleo y salarios.*

John Wells ha mostrado que en São Paulo, en Brasil, mientras los obreros no cualificados no mejoraban su nivel de vida, los obreros cualificados veían mejorar su salario real y también su nivel de vida, si tomamos en cuenta el aumento del número medio de salarios por hogar. J. Serra (en Collier; cf. Bibl., I, 1, pág. 106), comparando año por año el salario mínimo y el índice de los salarios publicado por dieciocho sindicatos, muestra que, de 1962 a 1974, la progresión del salario de los obreros sindicados, que en su mayoría pertenecen a la gran industria, fue positivo o menos negativo que la del salario mínimo. Si se comparan las categorías de asalariados en el seno de industrias más precisas, la heterogeneidad de los salarios resulta mayor todavía. Recientemente, el debate que en Brasil enfrenta a M. Tavares de Almeida y J. Humphrey (cf. Bibl., III, 4), y que presentaremos en nuestro análisis del sindicalismo, ha subrayado de nuevo el desarrollo en São Paulo de un sector moderno, en rápida expansión —representaría el 8,9 por 100 de la industria en 1949 y el 26,7 por 100 en 1970— y donde los salarios aumentan, mientras que bajan en los sectores más tradicionales. Humphrey indica que durante los períodos 1961-1966, 1966-1971 y 1971-1976, el salario de los obreros de la metalurgia, después de haber bajado un 22 por 100, aumentó un 0,5 por 100 y luego un 9. Cifras que se transforman para los obreros cualificados en una baja del 8,3 por 100 y luego en un aumento del 4,5 y del 14,8 por 100. Los dos autores se enfrentan sobre las consecuencias sociales y políticas de esta heterogeneidad creciente del

mundo obrero. Al menos puede reconocerse que hace más difícil una acción de masas. De igual modo, en México la remuneración media del sector industrial pasa, de 1965 a 1975, del 377 al 432 por 100 de las remuneraciones del sector no industrial. La segmentación del mundo obrero alcanza a menudo formas extremas, como han demostrado numerosas encuestas, por ejemplo la que nosotros realizamos en 1956-1958 entre los obreros del carbón y del acero *chilenos*. Comparación más interesante, sobre todo, porque las dos industrias se encuentran cerca una de otra, en la región industrial de Concepción. En Lota, los obreros del carbón seguían estando cerca del mundo rural, de donde todavía seguían llegando miembros más o menos alejados de la familia para vivir a su cargo. En este grupo obrero eran los menos cualificados los que estaban más sindicados y los que más se identificaban con la comunidad. El sindicato industrial de Lota ha sido dirigido durante mucho tiempo por comunistas, que después de 1970 fueron desplazados por el FTR, sindicato revolucionario ligado al MIR, lo cual no ha impedido al sindicalismo oficialista conseguir en las minas ciertos éxitos durante el período de la dictadura. El mundo obrero de Lota está fuertemente integrado. Los obreros viven en una ciudad separada de la de los empleados y de los cuadros, y que está estrechamente controlada por la compañía. La ciudad obrera está separada de la ciudad baja, donde se encuentran el comercio y la municipalidad, que está subequipada en servicios generales y donde se desarrolla una importante prostitución. Mundo obrero que vive en un aislamiento casi comparable al que conocen los obreros del cobre y del salitre, aislados en el desierto al norte del país. Si es cierto que son los obreros del cobre, del salitre y del carbón los que han jugado el papel principal en el desarrollo del sindicalismo en Chile, el aislamiento de esos obreros es grande y no les resulta fácil integrar su acción en la de una clase obrera muy diversificada.

Es nítido el contraste entre los mineros de Lota y los obreros siderúrgicos de Huachipato, que en gran número se identifican con la clase media; ahí están precisamente los más cualificados y los que más se identifican con la clase media; son éstos los que ejercen la mayor influencia en el sindicato, cuya dirección estuvo con frecuencia en manos de grupos moderados u oficialistas. En la época de la encuesta, los obreros de Huachipato recibían por término medio un salario cuatro veces superior al de los mineros de Lota. Así se comprende la distancia que separa a los dos grupos y lo debilitada que está la noción de clase obrera debido a una heterogeneidad que impulsa a algunos a considerarse más como pueblo que como clase obrera, y a otros a incorporarse, gracias a su alto nivel de salario y a la estabilidad de su empleo, en una clase media en rápida expansión. En el caso chileno, sólo en las grandes empresas del textil, en Santiago o en Tomé, hubo grupos obreros que se definían ante todo por su pertenencia a la clase obrera.

También es grande el contraste entre los obreros del cobre y los del

salitre, porque, en el momento de esa encuesta, los primeros recibían salarios mucho más elevados que los segundos. También es grande en *Bolivia,* entre los mineros del estaño y los obreros de las industrias de transformación o de transportes. En gran parte, porque los mineros bolivianos pertenecen a una cultura india. Aunque proceden de grupos muy diversos, los unos de lengua quechua, los otros de lengua aymará, e incluso otros de poblaciones hispanizadas del Altiplano o del valle de Cochabamba, y aunque muchas familias están ya instaladas desde hace tres generaciones en las minas, los mineros conservan una fuerte identidad cultural y no forman en modo alguno un grupo en transición, como los *rotos* chilenos o los *cholos* peruanos. Sus luchas sindicales son luchas de clase, pero también de defensa comunitaria contra enemigos —cuadros, jefes de empresas, fuerzas económicas internacionales— que son rechazados no sólo por su acción económica, sino porque destruyen la cultura de los trabajadores. La fuerza de la dimensión comunitaria de estos grupos obreros queda puesta de manifiesto por la importancia de las mujeres en las huelgas y las demás formas de lucha social.

A este factor de debilitamiento de la clase obrera se añaden los efectos de las migraciones interiores. La fuerte natalidad, el crecimiento económico, la crisis parcial del sistema agrario tradicional y la capacidad de atracción de las ciudades se han conjugado para crear un movimiento migratorio tan fuerte que la conciencia de pertenecer a una clase ha sido debilitada en gran medida por la conciencia de su movilidad individual. Este tema ha sido uno de los núcleos centrales de la sociología latinoamericana, desde que G. Germani interpretó el voto de los obreros argentinos a favor de Perón por los efectos de la movilidad geográfica y una voluntad obrera de integración social y nacional que predominaba con fuerza sobre la conciencia de pertenecer a una clase. Un gran número de estudios hechos en *Brasil,* por R. Hutchinson, J. R. Brandão Lopes, L. Martins Rodrigues y Aziz Simão en particular, ha descrito un comportamiento obrero dominado por la conciencia de movilidad y por la identificación con el grupo primario antes que con una categoría social general. Estos obreros en migración mantienen a menudo vínculos con su medio de origen, pero consideran sobre todo su presencia en la industria como provisional y tienen la esperanza de salir de la condición obrera estableciéndose por su cuenta. Cuando estudia una huelga en São Paulo, J. R. Brandão Lopes observa que los obreros en huelga no atraviesan el piquete de huelga, por respeto hacia sus camaradas, para no romper la unidad del grupo, pero que, en el momento en que la empresa ha logrado eliminar el piquete, vuelven al trabajo sin dificultad, provocando de este modo el fracaso de la huelga.

Ciertos estudios, como el de A. Ríos Loyola, han criticado esta imagen de los emigrantes. En primer lugar porque la mayoría de los nuevos obreros no proceden del campo y no han llegado a las metrópolis industriales sino por etapas, procedentes, por lo tanto, la mayoría de las ve-

ces, de las ciudades del interior; luego, porque toda empresa tiene una relativa estabilidad, que permite la formación de la consciencia de una situación colectiva. No obstante, la importancia de la movilidad es un obstáculo para la identificación de muchos obreros con su grupo socio-profesional, lo cual favorece una vida política dominada por líderes populistas más que una actividad sindical autogestionada. El objetivo principal del sindicalismo latinoamericano es, incluso, la apertura del sistema político y el aumento de la influencia de los sindicatos en ese sistema antes que una movilización de clase. Al generalizar la situación de México y de Chile, R. Stavenhagen y F. Zapata llegan a la conclusión de que los sindicatos «representan más un mecanismo de regulación de las presiones políticas en el plano nacional que un mecanismo de negociación de las reivindicaciones de los trabajadores». Es el Estado, más que la empresa o la clase dirigente, el interlocutor o el adversario principal de los sindicatos. Sobre todo cuando la industria está en crisis y las empresas parecen impotentes para encontrar una solución. Es lo que observa S. Sigal cuando estudia la industria azucarera de Tucumán, en Argentina: «Bajo la presión de la crisis, el recurso creciente al Estado debilita las luchas propiamente sindicales y priva al poder capitalista de su papel de agente dominante de la economía y de interlocutor válido en los conflictos sociales.» Cuanto más se desarrolla lo que F. Weffort ha llamado el Estado de compromiso, que se aparta de la defensa de intereses particulares y trata de dominar el conjunto de la sociedad haciéndose apoyar por las masas urbanas, más se incorpora el sindicalismo al sistema política. A veces, incluso, está directamente controlado por el poder político y se convierte en un instrumento de control político de los trabajadores.

Esta fusión de categorías sociales y de categorías políticas no conduce a una situación revolucionaria, sino que debilita la noción de clase obrera en provecho de la de pueblo. El «pueblo» —*povo*— es una noción importante en el discurso político, en el que se confunde con la de nación, dada la importancia de la dependencia exterior. Pero ese pueblo al que se refieren los dirigentes políticos no es un actor social real; está diferenciado y dividido, y a menudo las referencias al pueblo y a su unidad son más míticas que reales. Los chilenos de la Unidad Popular cantaban: *«El pueblo unido jamás será vencido»*, lo cual recuerda amargamente que el pueblo no está unido en América Latina y que una característica central del poder popular es, junto a la fusión de las categorías sociales y políticas, la segmentación de la clase obrera en una sociedad dominada por su heterogeneidad estructural. La separación del sector formal y del sector informal, de aquellos que tiene un empleo y los parados, de los obreros y de los marginados, no sólo indica la diversidad de situaciones que existen en el seno del pueblo; hace pasar a su interior la frontera que separa la participación de la marginalidad. La noción de pueblo manifiesta el esfuerzo de los países latinoamericanos por constituir Estados nacionales; pero casi nunca existe un personaje real al que

se pueda llamar pueblo, tal como ha existido en Francia en la tradición revolucionaria y en la obra de Michelet. Las grandes creaciones de la sociedad americana no son actores sociales, sino formas de intervención política.

4. La oligarquía

La industrialización y la urbanización han disminuido, en la mayor parte del continente, la importancia social y política de los amos de los dominios tradicionales, *gamonales* peruanos o *senhores de engenhos* del Nordeste brasileño en particular. Pero ¿cuál es la naturaleza del grupo que dirige la nueva economía mercantil e industrial? ¿Es una clase dirigente, la de los jefes de empresa, definida por su papel en la producción, o es una élite dirigente, es decir, un grupo más complejo, de poder más diversificado, que se extiende a todos los aspectos del proceso de desarrollo? En favor de la primera definición se inscribe, sobre todo, la elevadísima tasa de beneficio de las empresas y también su gran capacidad para conservar el control de los beneficios recogidos sin redistribuirlos al público en forma de baja de precios. Según PREALC, el beneficio de explotación en 1970 era, por término medio, del 23,1 por 100 en Argentina, del 30,3 en Brasil y del 21 en México, aunque sólo de un 15,4 por 100 en Colombia y del 12,8 en Chile. Aunque los márgenes de beneficio hayan disminuido entre 1960 y 1970, siguen siendo superiores a los márgenes que en esa misma época se daban en los países industrializados. De manera opuesta, los salarios representan una débil parte de los costos de producción: el 11,9 por 100 en Argentina en 1970, el 14,2 en Brasil ese mismo año, el 13,3 en Chile en 1977 y el 15,2 en México en 1975.

Sin embargo, resulta difícil hablar de una clase dirigente en América Latina. Ante todo, porque una gran parte de las inversiones y, sobre todo, de las inversiones importantes está asegurada bien por el capital extranjero, bien por el Estado.

Un caso extremo es el de *América central.* C. Guzmán Böckler y J. L. Herbert sostienen que esa región sigue estando dominada por la situación colonial y por la dominación de los blancos sobre los indios, reforzada por el paternalismo de la ideología indigenista y por la política de *ladinización,* no haciendo la noción de *ladino* otra cosa que abarcar la dominación de clase y étnica a un tiempo de los blancos. Concepción interesante por su confusión misma. Estos autores sostienen que la dominación de los blancos, dueños de la tierra, es una dominación de clase, pero al mismo tiempo afirman que son los indios, como grupo étnico, los que son explotados por los blancos, llamados ahora *ladinos.* Citan de buena gana a F. Fanon, lo cual refuerza la confusión: ¿se trata de una dominación de clase o de una dominación colonial? Los *ladinos* se hallan cada vez más diversificados, dicen ellos, lo cual explica el desarrollo de

luchas propiamente sociales en el seno del mundo *ladino,* pero esas luchas siguen estando subordinadas a las luchas, más fundamentales, que oponen indios a *ladinos.* La posición de J. L. Herbert y de C. Guzmán Böckler (cf. Bibl., III, 2) supone, en realidad, que no hay verdadera clase dirigente en Guatemala, que los dueños de la tierra no son más que los servidores del capitalismo internacional, de suerte que la dominación que ejercen en el interior del país es, en efecto, más racista que propiamente capitalista. Cosa a todas luces excesiva. Si bien es cierto que los grandes propietarios, a menudo extranjeros, no ejercen hegemonía política y están divididos entre sí, no es menos cierto que dominan ampliamente la vida económica y política. Menos que en el vecino El Salvador, donde se ha hablado, con cierta desmesura, del poder de las catorce familias; menos que en la Costa Rica de finales del siglo XIX, donde el poder estaba en manos de tres familias. Pero la historia reciente ha demostrado que tanto en Guatemala como en El Salvador, los grandes propietarios eran capaces de reunir a su alrededor suficientes industriales y comerciantes para dar un apoyo social sólido a fuerzas políticas de extrema derecha y, sobre todo, a la represión militar y paramilitar.

Lo que hay que reconocer para el conjunto del continente es la imposibilidad de reducir la oligarquía a su papel de clase dirigente. Incluso en el caso de la oligarquía terrateniente de la pampa argentina, cuyo poder y prestigio no atrajo a ningún grupo económico dirigente. Estos patricios crearon y modernizaron la ganadería y la agricultura, completándolas mediante la instalación de frigoríficos; formaron un grupo fuertemente constituido, desconfiando e incluso despreciando a los inmigrantes que a finales de siglo acudieron en tropel al país, pero en modo alguno fue conservador y tradicionalista. Por el contrario, fue cientificista y modernizador, la mayoría de las veces anticlerical, y se sintió atraído por el darvinismo social. El poder de us actividades agroexportadoras fue durante mucho tiempo tan predominante que la Argentina no se adentró por la vía de la gran producción industrial sino de forma débil y lenta.

Salvo en Argentina, vemos constituirse más bien elites dirigentes que gestionan intereses muy diversificados. Casi en ninguna parte vemos que se formen burguesías propiamente industriales que consagren su actividad a la gestión de sus empresas, y la proporción de extranjeros e hijos de extranjeros es grandísima entre los industriales. La actividad industrial no es exclusiva de los medios dirigentes, que combinan la actividad industrial con la banca, la propiedad rural y el comercio nacional e internacional. Si es preferible hablar de *oligarquía,* es para subrayar los caracteres particularísimos de estos medios económicos dirigentes. Ante todo, la integración de actividades económicas muy diversas. Tras estudiar a los empresarios brasileños, F. H. Cardoso concluye: «La oligarquía no quiere decir la dominación de los amos de esclavos o de los potentados del interior sobre la economía, sino, por el contrario, el acuerdo político fundamental de los grupos exportadores con las nuevas

empresas urbanas, comerciales o financieras, ligadas a los sectores extranjeros, y que utilizan a los coroneles o "gamonales" del interior de forma política más que económica» (en ILPES, *Las elites urbanas en América Latina,* 1966). Llamar feudal a esta alianza de los grupos dirigentes, como todavía lo hace E. Guevara (cf. Bibl., I, 2, págs. 151-152), es un error. F. Bourricaud ha dado la mejor y más breve definición de la oligarquía a mediados del siglo XX: «El oligarca es un especulador.» No se identifica con ningún sector de la producción porque desplaza constantemente sus inversiones. De la política espera que garantice sus especulaciones y que reprima a la oposición popular, pero no que elabore una política económica. La oligarquía no es, por tanto, una clase social, capaz de actuar de forma coherente en el plano del conjunto de la sociedad, sino una serie de individuos interesados ante todo en el aumento de su fortuna y en la defensa de su clan familiar. La segunda gran característica de la oligarquía es que integra en sus conductas elementos capitalistas y elementos no capitalistas. F. H. Cardoso y E. Faletto han observado que «se forma así una alianza entre lo que podría llamarse sociológicamente la plantación o la *hacienda* moderna, con sus expresiones urbanas y sus grupos comerciales y financieros, con la *hacienda* tradicional» (cf. Bibl., I, 1, *Dependencia y desarrollo...,* pág. 47). Esta alianza ha podido llevar a la oligarquía, en cierta época, más allá de sus intereses personales, hasta una concepción general de la modernidad que le ha dado un papel de elite dirigente. Este papel de la oligarquía corresponde, sobre todo, a finales del siglo XIX y a principios del XX, período de fuerte aumento de las exportaciones, no sólo en los países del Plata —Argentina y Uruguay— sino también en Chile y en particular en Perú, donde la expansión no se apoya solamente en el *boom* del guano sino también en la formación de las grandes plantaciones costeras del Norte. Esta oligarquía ya no es una aristocracia y las viejas familias se quejan de la llegada de los nuevos ricos, a menudo de inmigración reciente. La historiografía, dominada por el ascenso de las clases medias y populares protegidas por el Estado nacionalista, ha caricaturizado a esta elite que a menudo tuvo conciencia de dirigir un país nuevo y no una sociedad tradicional, que acogió el cientificismo y el positivismo y no se encerró en su dominación de forma tan estrecha como se cree, en particular en el caso de Chile, donde el radicalismo aseguró cierta continuidad entre la oligarquía tradicional, que contribuyó a reforzar, y las clases medias urbanas. En *Perú,* aunque el civilismo estuvo al servicio de esta oligarquía, no hubo ruptura entre él y la acción de Piérola, que tomó el poder por la fuerza en 1895, pero estableció un régimen civil y se retiró voluntariamente en 1899.

La oligarquía es impulsada en dos direcciones opuestas. De un lado, la cooptación de los nuevos ricos creados por el desarrollo de la industria y del comercio urbano, tendencia que continúa mucho más recientemente en ciertos países de América central como Guatemala; de otro, la

BIBL. ☆ SIDAC
INVESTIGACIONES SOCIALES

conquista, en el interior, de las tierras de los pequeños campesinos, de las comunidades o de otras *haciendas,* para aumentar en particular la producción de carne, en respuesta a la demanda del mercado urbano. Conquista cuya brutalidad provocó uno de los grandes dramas sociales de este siglo, la desposesión de los campesinos, en particular indígenas, que los escritores peruanos, de Arguedas a Scorza, han evocado en potentes obras.

En pleno siglo XX, la mezcla de los elementos tradicionales y modernos sigue siendo el hecho predominante. En *Brasil,* L. Martins ha criticado la idea de burguesía nacional mostrando la fusión de los intereses industriales y financieros de un lado, agrícolas de otro, en la elite dirigente. Ha dejado a un lado, así, análisis inspirados en un marxismo alejado de los hechos y que oponían la burguesía nacional a la oligarquía, para justificar la alianza de las fuerzas populares con esta burguesía nacional contra la oligarquía tradicional y los intereses extranjeros. Al analizar el caso argentino, brasileño y peruano de mediados del siglo XX, C. Furtado concluye que la oligarquía no es un agente central de industrialización porque es, ante todo, consumidora y sólo anima la industrialización nacional para procurarse los bienes que le son necesarios en una coyuntura de crisis del mercado internacional. La misma ausencia de oposición entre intereses rurales e intereses industriales y financieros vuelve a encontrarse en Argentina, donde V. Tokman ha mostrado que los treinta y dos principales grupos económicos argentinos son, todos ellos, miembros de la *Sociedad rural,* al tiempo que tienen intereses industriales y financieros. La única excepción es el grupo Di Tella, que, sin embargo, también posee tierras e intereses bancarios. La misma ausencia de segmentación en el seno de la oligarquía es constatada en Chile por R. Lagos.

Pero aunque tiene intereses diversificados, la oligarquía es un grupo social cerrado. Son poco numerosos los nuevos jefes de empresa hijos de artesanos o de comerciantes, como muestra el siguiente cuadro estable-

Origen social de los jefes de empresa
(porcentaje)

Sectores	Chile	Colombia	Argentina	Estados Unidos
Industrial	38	45	24	69
Comerciante	17	20	36	—
Empleado	12	7	20	3
Profesional	28	15	12	11
Propietario agrícola	5	—	4	5
Campesino	—	—	—	4
Obrero	—	10	4	9

FUENTE: S. M. Lipset, A. Solari, ed.: *Elites in Latin America,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.

cido por F. H. Cardoso a partir de estudios realizados en los años cincuenta y sesenta.

Pero, como vemos, el origen social de los jefes de empresa no se halla más diversificado en los Estados Unidos que en América Latina.

En la segunda mitad del siglo XX, esta oligarquía no es tanto una elite dirigente como una clase dirigente; no ejerce ninguna hegemonía sobre el proceso de desarrollo y no controla el Estado, ni siquiera aunque los gobiernos hagan con frecuencia una política que les resulta favorable. El grupo económico más poderoso del continente fue durante mucho tiempo, como hemos dicho, la burguesía agroexportadora argentina. Ahora bien, A. Rouquié y G. O'Donnell subrayan que esa burguesía no tuvo nunca de forma estable el poder político después de la primera guerra mundial. Al contrario, la política argentina fue dominada por la oposición de los consumidores urbanos y de los agroexportadores. Los dirigentes políticos, apoyados en los sectores populares y en una parte de las clases medias, intentaron asegurarles una alimentación barata, cosa que resultaba desfavorable para los propietarios rurales. El peronismo, sobre todo a partir de 1955, representó esa presión popular, más preocupada del consumo que de la producción nacional, mientras que la oligarquía nunca consiguió constituir un partido conservador que le permitiera gobernar en el marco parlamentario y recurrió al golpe de Estado. La debilidad política de la oligarquía es más nítida aún en Brasil, donde la burguesía paulista perdió la guerra contra el Estado en 1932, y en México, donde la subrepresentación política del mundo capitalista está muy acentuada, dado que incluso el PAN, partido de derecha, no se identifica con el mundo de los jefes de empresa.

En casi ninguna parte de América Latina existe correspondencia directa entre intereses económicos y fuerzas políticas. Cuando la oligarquía posee el poder, como en el caso colombiano, los principales partidos, conservador y liberal, lejos de representar intereses económicos diferentes son, por su oposición misma, la expresión del control de la oligarquía sobre el sistema político. Eso ocurrió en Ecuador, donde la lucha entre conservadores y liberales alcanzó, como en Colombia, el nivel de una guerra civil en la época de Alfaro: propietarios de bienes raíces, importadores, exportadores e industriales no constituyen grupos sociales y políticos separados, y nuevos ricos y viejas familias se han mezclado de forma constante. En resumidas cuentas, el proceso de industrialización no está dirigido por los industriales; éstos deben incorporarse a una coalición política cuyo principio de unidad es el reforzamiento del Estado antes que la defensa de intereses de clase, lo cual explica la heterogeneidad de las fuerzas sociales que apoyan los regímenes nacional-populares.

Vemos, sin embargo, que cada vez se constituyen más grupos de empresarios industriales. Esta tendencia ha existido casi siempre, pero era de importancia reducida. En Cuenca, Ecuador, la crisis del sombrero

de paja, del panamá, provocó una reacción de los dirigentes y la formación de una política de industrialización que corrió a cargo del nuevo partido conservador progresista. Mucho antes, en Puebla, según indica F. Chevalier, Esteban de Antuñano había sido partidario, desde 1840, del proteccionismo y de la industrialización nacional. En este mismo país, a partir de 1840, los inmigrantes franceses que procedían de Barcelonnette invirtieron en unos grandes almacenes y en fábricas textiles con un espíritu típicamente empresarial. En Brasil, la importancia de la sustitución de las importaciones, en la época de la gran crisis de los años treinta, ocultó, según Dean, las iniciativas de la aristocracia del café, en busca, antes de 1929, de beneficios elevados. Medellín, Monterrey y São Paulo fueron centros de desarrollo industrial, núcleos endógenos de desarrollo, que crearon empresas, escuelas técnicas y bancos. Pero hasta una fecha reciente esos grupos tuvieron una importancia limitada y fue el Estado quien adoptó las principales iniciativas en favor de la industrialización, con un espíritu que fue, ante todo, el de los *científicos,* modernizadores positivistas que pusieron en práctica la obra de Porfirio Díaz en el período prerrevolucionario en México. En Chile fue la CORFO, creada y animada por profesionales modernizadores a partir de la época del Frente Popular, la que se convirtió en agente principal de la industrialización. Casi en todas partes es el Estado quien toma la iniciativa de crear una industria siderúrgica, y ese Estado rara vez estuvo asociado con la sola oligarquía. Hay que reconocer, por tanto, cierta autonomía de los grupos industriales, al tiempo que reconocemos el carácter limitado de su influencia. Dejando a un lado el caso colombiano, parece importante el de *Bolivia* bajo Banzer, cuando el grupo de empresarios de Santa Cruz se puso resueltamente de parte de un gobierno que había puesto fin de modo violento a un régimen nacional-popular que se iba volviendo revolucionario. Incluso en *Perú,* A. Ferner ha demostrado la existencia de una burguesía industrial autónoma que se enfrentó a los exportadores durante el primer gobierno de Belaúnde y se acercó, a partir de 1968, al gobierno militar de Velasco Alvarado, y ha subrayado la oposición entre esa burguesía industrial y la oligarquía descrita por F. Bourricaud. Pero, en resumidas cuentas, durante la mayor parte de este siglo ha sido la oligarquía la que ha controlado lo esencial del poder económico.

Sólo en un período reciente se han constituido grupos económicos dirigentes que tienen funciones menos diversas y orientaciones más coherentes que la oligarquía tradicional, en la que se basaban los propietarios de bienes raíces, banqueros e industriales. Brasil y el cono sur han visto formarse grupos dirigentes muy distintos que ya no constituyen, ni unos ni otros, una oligarquía. En *Brasil,* después del debilitamiento y la desaparición del régimen autoritario, los jefes de empresa paulistas han jugado un papel político cada vez más marcado. La importancia del mercado interior, a pesar de la extremada concentración de las rentas, les ha im-

pulsado a apartarse de la política demasiado clásica, propuesta por Dornelles, y, sobre todo, a aprender a negociar con unos sindicatos que se liberaban de la tutela estatal. En Brasil, pero sólo en Brasil, puede hablarse hoy día de una clase económica dirigente y de sindicatos, actores principales de una sociedad, que entran en conflicto o en negociación directamente, sin verse controlados ni unos ni otros por un Estado nacional-popular. En São Paulo, el gran partido de oposición democrática al régimen militar, el PMDB, dominado por unos objetivos democráticos y sociales, ha recibido también el apoyo, de forma cada vez más nítida entre 1983 y 1986, de grupos económicos modernizadores.

En Argentina y en Chile, la evolución fue exactamente inversa. *Argentina* siempre había sido un país más desarrollado que industrializado, cuya capacidad de exportación industrial había permanecido débil. De igual modo, *Chile,* a pesar de los esfuerzos del Estado y la formación de algunas grandes empresas textiles, era un país donde las industrias de transformación no tenían la misma importancia que la producción minera destinada a la exportación. Tanto en Chile como en Argentina, una política neoliberal extremada implicó la baja de la capacidad industrial del país, redujo las inversiones y creó, sobre todo en Chile, un paro elevado, mucho antes de que la gran crisis financiera y económica, en 1982, agravara las condiciones generales de la vida económica. R. Lagos describe a esta nueva burguesía «como más interesada en adquirir el capital de empresas existentes que en crear nuevas empresas». En Chile, los dirigentes de los nuevos grupos financieros, Vial o Cruzat, pertenecían a familias oligárquicas y reforzaron de manera casi exclusiva los aspectos especulativos del antiguo modelo en relación a sus aspectos industrializadores. En Argentina, la política de Martínez de Hoz fue el esfuerzo más voluntario y más coherente por volver a dar a la oligarquía exportadora el papel central que había ocupado durante el largo período dorado que concluyó políticamente en 1943 con los inicios del peronismo. Pero este paso atrás no era posible, y la nueva política se tradujo más por una incorporación creciente de la economía nacional al sistema económico mundial que por un desarrollo económico nacional. Vemos así separarse dos objetivos: el desarrollo de la producción nacional y la defensa de intereses financieros por la incorporación de sectores claves de la economía nacional al sistema internacional. La situación creada por la crisis que estalla a partir de 1981-1982 señala también el final del poder de la oligarquía. El Estado debe intervenir masivamente y se esfuerza por dar más dinamismo a la producción industrial, al mismo tiempo que, en los países que han vuelto a un régimen democrático, debe tener en cuenta las demandas sindicales.

A partir de ese momento, ningún grupo económico particular puede perseguir sus intereses con independencia de una política nacional coherente. Por tanto, se puede esperar que, por primera vez en la historia del continente, los grupos económicos dirigentes sean capaces de aumentar,

a veces de manera decisiva, su influencia política. Se ha dicho que en Brasil esa influencia se ejerce, en parte al menos, en el sentido de un desarrollo «hacia el interior». Por el contrario, en pequeños países donde a veces el mercado interior se ha visto reducido por una política ultraliberal, tanto en Chile como en Ecuador y en Bolivia, los medios económicos dirigentes imponen una política exportadora que tiene como contrapartida la disminución de los salarios reales y por lo tanto del mercado interior, política que con frecuencia recibe el apoyo del FMI, porque éste cuenta con el desarrollo de las exportaciones para asegurar el pago de los intereses de la deuda exterior. El futuro de la mayoría de los países dependerá de su capacidad para adoptar una política de desarrollo o, por el contrario, del bloqueo del mercado interior. Pero en todos los casos nos alejamos de la situación que fue la de la oligarquía, es decir, de la capacidad de acción política de un grupo de dirigentes económicos que tenían una mira más clara de sus intereses personales y familiares que del tipo de sociedad y de gobierno que pretendían establecer. No encontramos en América Latina la alianza sólida y duradera entre el Estado y los grupos capitalistas que caracteriza al Japón o a Corea del Sur. Uno de los caracteres principales de las sociedades latinoamericanas es *la ausencia de una categoría social y económica hegemónica.* Una tasa relativamente elevada de crecimiento económico está asociada a un bajo nivel de formación de los actores de clase, tanto en el caso de la burguesía como en el de la clase obrera.

La disociación de los dirigentes económicos privados y del poder político es uno de los rasgos más visibles de *México.* Los jefes de empresa no pertenecen a la «familia revolucionaria»; su origen social es más elevado y se forman en el Instituto Tecnológico de Monterrey o en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y no en la UNAM o en el Colegio de México. La crisis política y económica no ha reducido esa disociación; el presidente De la Madrid ha intentado desprenderse del clientelismo y del populismo del PRI, pero lo ha hecho desplazando el poder de los *políticos* hacia los *técnicos,* no hacia los empresarios privados. Hasta el punto de que México parece dividirse cada vez más entre dos países, el del Norte, dominado por un capitalismo agrario e industrial que actúa en el marco de la América del Norte más que en el marco nacional, y el del Sur, gobernado por la pirámide de caudillos, de clientelas y de camarillas cuya punta es el poder presidencial. Y México, en vez de verse sometido cada vez más a un «poder de clase», ve cómo se ahonda el foso entre una lógica de acción económica y una lógica de acción política, obligado por la crisis a mantener el sistema tradicional de encuadramiento de las masas populares, rurales y, sobre todo, urbanas, lo que debilita la tentativa de reformas «tecnocráticas» de De la Madrid.

La ausencia de una clase dirigente hegemónica es particularmente nítida en *América central,* a pesar del poder de los intereses del café a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ello se debe a veces, sobre todo

en Guatemala, a la importancia de los extranjeros, de los alemanes en ese caso, en la agricultura de exportación, pero más ampliamente al carácter colonial de la economía y de la sociedad, que no conocieron un fuerte movimiento de integración y también de crisis, sino con el gran período de crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX. Esta impotencia de los ricos para actuar como clase dirigente, y, en particular, para conseguir para ellos mismos un instrumento directo de acción política, explica la presencia casi constante de dictaduras que llevan una acción antipopular pero que también se presentan como agentes de reformas, de integración nacional e, incluso, a veces, de defensa de los intereses «plebeyos». Sólo en Costa Rica se forma una clase dirigente hegemónica, muy concentrada en torno a tres familias principales, de las que salen la mayoría de los presidentes de la República, y que conservará un control del sistema político que permita la apertura de éste.

5. La clase media

Esta categoría se define en todas partes de forma más vaga que la de los obreros o la de los campesinos; su contenido se modifica, por tanto, de modo más directo en función de los caracteres generales de la sociedad. En Francia, la clase media apareció hace mucho tiempo, al menos para el pensamiento influido por el marxismo, como una categoría residual, una especie de pantano situado entre los capitalistas y los obreros. Para algunos, incluso, se reduce casi por completo a la de pequeña burguesía, designando unas categorías que no participan de modo directo en las relaciones sociales de producción, pero que juegan un papel en la reproducción de la dominación de la clase capitalista. De modo completamente opuesto, en los Estados Unidos la *middle class* queda definida en términos de participación económica, social y cultural, y designa un conjunto cada vez más vasto, tan vasto, incluso, que la imagen piramidal de la sociedad ha sido sustituida por la de una amplia categoría central, enmarcada por una pequeña elite dirigente y una categoría relativamente reducida de pobres y de no-cualificados. Imagen que poco a poco se ha difundido en Europa occidental e incluso en Francia, donde, en la actualidad, la mayoría de los obreros se identifican, al menos parcialmente, con esa clase media. En América Latina, la *clase media* ocupa también un lugar central en la descripción de la vida social y en los debates políticos. En América Latina, lo mismo que en los Estados Unidos, la sociedad mira hacia el centro. Porque, como acabamos de ver, la existencia de una clase dirigente o capitalista es reemplazada por la de una oligarquía percibida como el mundo de los privilegios y como el de la influencia extranjera, y también porque, en el otro extremo de la sociedad, se perfila la masa importante de los marginados y de los excluidos. Pero la clase media realmente no está en América Latina en el centro de

la sociedad; designa más bien las categorías que se esfuerzan por ser las más dinámicas, las más modernas y, al menos en parte, las categorías dirigentes, en una sociedad que trata de aumentar su integración y, por tanto, disminuir la importancia relativa tanto de los privilegiados como de los subprivilegiados. Es decir, que lo que se denomina clase media no es ni una clase ni un estrato social, sino más bien una categoría definida por su papel central en el proceso de desarrollo. La clase media latinoamericana recuerda más bien a la *intelligentsia* rusa del siglo XIX, compuesta por los que habían realizado estudios secundarios o superiores y que se definían como los elementos ilustrados de la sociedad. También en América Latina esa clase media se define más por su puesto en la vida política y cultural que por su papel económico. Pero la característica principal de la clase media latinoamericana, al menos durante la parte esencial del siglo XX, es su estrecho vínculo con el *Estado* como agente de formación, de integración y de control de un modelo nacional de desarrollo.

Durante la primera etapa de la evolución económica de la América Latina, dominada por el desarrollo hacia afuera, la clase media estuvo formada, sobre todo, por abogados y, de manera menos importante, por comerciantes y empleados de banca. Es entonces cuando ocupan el proscenio de la escena política y cultural los *licenciados,* o, en Brasil, los *bacharéis,* agentes de control social al servicio directo o indirecto de la oligarquía y del Estado. Esta imagen de una clase media al servicio de la oligarquía o tratando de imitarla ha sido durante mucho tiempo la que ha quedado como dominante en Argentina, donde Jauretche se ha burlado, en un libro célebre, de los *medios pelos,* de esa clase media pretenciosa y confiada en su ascenso social. Pero a medida que se refuerza el modelo de desarrollo hacia adentro, el desarrollo del papel económico, social y cultural del Estado implica un crecimiento rápido del sector público de la clase media. En Chile, de 1925 a 1967, el número de funcionarios se ha multiplicado por cuatro. De 1950 a 1973, en Brasil los funcionarios pasan del 6 al 8,5 por 100 de la población activa. En casi todos los países los gastos del Gobierno central y las inversiones públicas aumentan de 1959-1960 a 1967-1968, como observa R. Echeverría.

Países	Porcentaje del PIB
Argentina	20,3 al 27
Brasil	25,0 al 27,1
Chile	31,2 al 36,1
Colombia	10,4 al 14,7
México	14,4 al 16,6
Honduras	11,9 al 15,1

(Venezuela es la única excepción, con una ligera baja del 23,4 al 22,4 por 100).

En muchos países latinoamericanos, el sector público representa una parte mayor del empleo que en los países industrializados, lo cual indica un peso todavía más grave del sector público sobre el empleo urbano formal. Así puede verse en el siguiente cuadro:

Sector público		
Países	Años	Empleo total (porcentaje)
Argentina	1980	22,2
Bolivia	1980	11,2
Colombia	1982	9,6
Costa Rica	1980	19,5
Panamá	1980	21,3
Perú	1981	17,2
Uruguay	1975	23,1
Venezuela	1980	21,4
Francia	1978	14,6
Reino Unido	1979	21,5
Suecia	1979	29,8
Estados Unidos	1979	16,7

FUENTE: R. Echeverría, págs. 39 y 42.

En el seno del sector público, el grupo de profesionales asalariados y, sobre todo, de los enseñantes es el que aumenta con mayor rapidez. La atracción del sector público queda reforzada por la creación de sistemas de seguridad social mucho más favorables que para las demás categorías de la población. Esa seguridad, añadida a la estabilidad del empleo, pero también a la conciencia de participar en la afirmación de la identidad nacional contra la segmentación de una sociedad tradicional dominada por los caudillos o los «coroneles» locales, da a esta clase media una fuerte conciencia de su importancia. Pero es en términos nacionales más que de clase o de nivel de renta como se define a sí misma.

Esta definición *política* de la clase media está asociada a una definición *cultural*. Cuando en la mayor parte de los países europeos la alfabetización fue rápidamente general, mientras la enseñanza media y superior progresaba lentamente, en América Latina la evolución se hizo a la inversa. Por un lado en numerosos países se ha mantenido una proporción elevada de analfabetos, mientras que el porcentaje de jóvenes que entran en la enseñanza media y superior se acerca al de los países europeos, que sin embargo han alcanzado un nivel de vida y de industrialización más elevado. A. Solari (cf. Bibl., I, 1) presenta el caso extremo de Brasil: «En 1975, Brasil tenía una proporción de analfabetos mucho más elevada que Francia en 1905, una tasa de escolarización pri-

maria mucho más baja, una tasa de enseñanza secundaria que Francia no alcanzó sino en 1950 y una tasa de enseñanza superior a la que los Estados Unidos no llegaron sino en 1930.» En América Latina, la selección social se opera menos en el ingreso de la enseñanza secundaria, como en Europa, que en el de la enseñanza primaria. La clase media se define, por tanto, como educada, porque sus miembros han recibido una educación primaria completa y, en el caso de la mayoría de ellos, una educación media y superior. La escuela secundaria, que no tiene que proceder a una selección social ya hecha, constituye por tanto un mundo socialmente homogéneo, sobre todo en los países donde domina la escuela pública, como en Argentina y en Uruguay. A. Solari presenta los resultados de un estudio realizado en Montevideo, según el cual la correlación entre los resultados escolares y el origen social, fuerte durante el primer año de la enseñanza secundaria, desaparece en los años siguientes, lo cual subraya la importancia de la escuela como medio de socialización para una clase media que se define directamente por su cultura y de modo más concreto por su educación.

Esta clase media ha permanecido dominada, en ocasiones, por la oligarquía; en particular en Colombia; a la inversa, en Argentina, la fuerza de la movilización peronista identificó más a la clase media con el Partido Radical que con una imagen general de la identidad nacional. Es en *Uruguay* y en *Chile* donde la clase media ha tomado conciencia de sí misma de modo más directo y ha tenido la imagen más alta de su misión histórica. Es en esas naciones donde se ha identificado con el país y con su modernización. La clase media es racionalista, anticlerical de buen grado, como en la III República francesa, o bien está dividida, sin ruptura profunda, entre católicos y masones. Considera sobre todo al Estado y a la escuela pública como los instrumentos indispensables de la liberación de un país todavía dominado por la oligarquía y sus apoyos políticos y religiosos. Pero esta clase media es también una categoría de notables, preocupados de su dignidad y de su seguridad, que aprovecha con total buena conciencia las ventajas que representa la existencia de un vasto mundo popular de bajas rentas y utiliza al Estado para obtener préstamos muy ventajosos, en particular para la construcción de casas confortables. Esta clase media tradicional del cono sur se interesa poco por los negocios, menos todavía por la industria; las profesiones liberales, el servicio del Estado y la enseñanza logran sus preferencias. Se siente profundamente ligada a las tradiciones culturales de Occidente, al principio las de Europa, las de Estados Unidos en época más reciente.

El caso de *México* es distinto. La revolución perturbó el país, eliminó las elites dirigentes del período de Porfirio Díaz y creó una burguesía posrevolucionaria que combina la fidelidad a la revolución con la persecución de su propio enriquecimiento, con la misma codicia que la burguesía francesa durante la monarquía de Julio. La clase media está absorbida por el PRI, el partido-Estado, las empresas públicas y el clientelismo,

mientras que la vida intelectual está más marcada, sobre todo tras la llegada de los republicanos españoles refugiados, por el pensamiento de izquierda.

En resumidas cuentas, en el conjunto del continente, la fuerza de la clase media sorprende a quienes reducen América Latina a la dominación ejercida por la oligarquía nacional y los capitalismos extranjeros sobre una masa de peones y de proletarios. La clase media ha sido muy a menudo la más abierta, en los países del cono sur y en México en particular, como lo muestra casi por todas partes el reclutamiento de las universidades, más abierto socialmente que en Europa o en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, y hasta un período reciente, ha conservado una confianza en sí misma extraordinaria, que llegaba incluso hasta la ceguera en cuanto a la situación real del país y a la existencia de inmensas zonas de pobreza y de miseria.

La América Latina está hecha a la vez de *ciudadanos* y de *excluidos*. Los primeros han creído que la modernización ampliaría su categoría y absorbería progresiva y prudentemente a los excluidos, pero se han guardado mucho de poner en peligro su seguridad y sus ventajas; los segundos han tratado muy a menudo de entrar en la ciudadela mediante la acción de un líder populista o mediante el éxito personal. De suerte que la dualización tan visible de la sociedad latinoamericana no ha llevado casi nunca a guerras civiles o a explosiones revolucionarias, pese a dar a la desigualdad social formas extremas.

Los decenios recientes tal vez hayan marcado el apogeo de la clase media, porque la concentración creciente de las rentas, especialmente en países como Brasil y México, ha incrementado la distancia entre los ciudadanos y los excluidos, a la vez que asociaba de forma más directa la clase media a los ricos. Lo cual anuncia la caída de esas categorías que sólo habían prosperado con la política distributivista del Estado y con el reforzamiento del sector público. Ese apogeo entra en crisis con el agotamiento o la destrucción del Estado intervencionista y sobre todo nacional-popular. Aunque las tareas de la administración tradicional no disminuyan y aunque la función de asistencia del Estado se mantenga, las intervenciones económicas y culturales de éste tienden a reducirse. En el caso chileno, de forma muy fuerte. Lo cual provoca, en grados diversos, según los países, una ruptura de la clase media en dos sectores, que ya existían en el período anterior pero que estaban dominados, ambos, por la clase media burocrática. Vemos que, por un lado, se forma una nueva clase media de directores y de técnicos, vinculados a las grandes empresas industriales y financieras, y, por otro, una clase media independiente en vías de empobrecimiento: pequeños comerciantes, taxistas, que a veces caen en el sector informal. La primera categoría crece en importancia, lo cual es interpretado como un indicio de modernización de la economía, que indica con más seguridad la dualización de una sociedad con fuerte concentración de las rentas. Esta clase media superior adopta los

comportamientos de consumo importados de los países más industrializado y principalmente de los Estados Unidos. La segunda sufre las consecuencias, en el momento en que estalla la crisis del modelo neoliberal de desarrollo, a finales de los años ochenta, de la extremada insuficiencia de absorción de la mano de obra en el sector moderno. Entre estos dos sectores, muy alejados uno de otro, la clase media administrativa y, en particular, los profesionales asalariados, cuyo componente principal son los enseñantes, pierde influencia y sufre a menudo una fuerte caída de su renta. En muchos países, esta caída es más fuerte para los funcionarios que para los obreros, lo cual provoca grandes movimientos reivindicativos. En Bolivia, después de 1982, los funcionarios desencadenan más conflictos que los mineros; en Brasil, los empleados de banca lanzan con éxito una huelga nacional en 1985 y de nuevo en 1987. En Colombia y en Perú, los profesionales de la enseñanza primaria y secundaria, cuya remuneración es extremadamente baja e irregularmente pagada, se sindican, se radicalizan y lanzan movimientos de importancia nacional. Tal estallido de la clase media acompaña a la formación de clases sociales más cercanas al modelo de los países industrializados, pero traduce sobre todo la profundidad de la crisis económica de los años ochenta y la descomposición del modelo sociopolítico anterior.

6. Los sistemas de estratificación

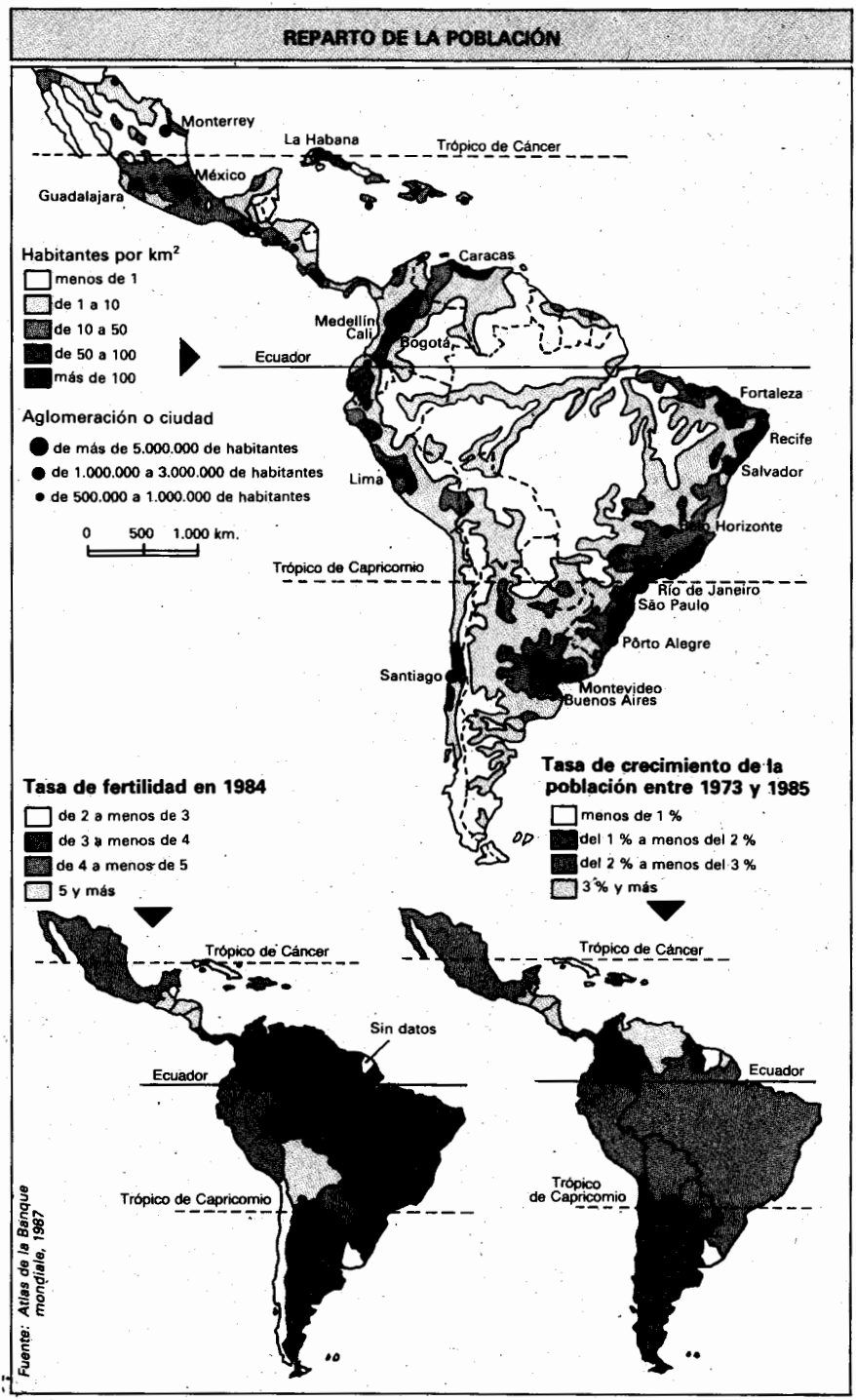
Vemos que no se puede aceptar, en América Latina, la idea demasiado simple de que existe un sistema de estratificación, es decir, que las categorías socioprofesionales pueden ser definidas por su posición relativa en una escala de participación económica y social. Pero igual de extraña a la realidad latinoamericana es la idea de que existe una polarización de la sociedad entre clases antagónicas. Por un lado, debido a la heterogeneidad de cada una de las principales categorías socioprofesionales, y, por otro, porque a una definición económica de cada una de las categorías hay que añadirle una definición sociopolítica. Si hablamos de obreros, ante todo nos referimos a una categoría socioprofesional definida por su puesto en la producción industrial, pero esa definición no permite comprender un gran número de comportamientos de aquellos a los que se llama obreros y que hay que definir más por sus relaciones con un Estado que interviene directamente en la vida económica y social: esos obreros son también, y a menudo ante todo, *ciudadanos,* habitantes de la ciudad, que reciben o dejan de recibir ciertas ventajas distribuidas por el Estado. De igual manera, la situación de ciertas categorías populares se define más por la marginalidad o la *exclusión* que por un papel profesional. La misma observación sirve para la categoría más elevada, que a menudo es menos la de los jefes de empresa que la de los privilegiados, de suerte que la noción de oligarquía es a menudo más útil que la de clase capitalista.

Pero hay que ir más lejos y distinguir no solamente dos, sino cuatro sistemas de estratificación, dado que la idea de estratificación implica que el conjunto de las unidades consideradas pueden situarse en una escala que define un apecto de su participación social, por ejemplo su nivel de renta, de cualificación o de educación. Dos escalas de estratificación son de naturaleza socioprofesional: la primera se refiere a la sociedad mercantil; la segunda, a la sociedad industrial. Las otras dos están dominadas por las características del modo de desarrollo: la tercera es la más directamente sociopolítica y sitúa las categorías por su participación en la acción de desarrollo «hacia dentro»; la cuarta traduce los efectos de un capitalismo dependiente y limitado, y la componen por tanto categorías definidas por el privilegio o el subprivilegio más que por la renta o la función profesional. A buen seguro estas cuatro escalas no son independientes unas de otra y se recubren más o menos ampliamente según los momentos, los países y las categorías. Pero ninguna domina a las otras, lo cual generaliza una conclusión ya introducida: no existe ninguna categoría *hegemónica,* no existe ninguna cuyo lugar sea central en todos los tipos de análisis, como ocurrió a menudo, en Europa al menos, con categorías como obreros o jefes de empresa, o, más exactamente, clase obrera y clase capitalista, categorías que se suponían de alcance general y que permitían situar y comprender formas de consumo tanto como elecciones políticas. Esas categorías generales son particularmente débiles en América Latina.

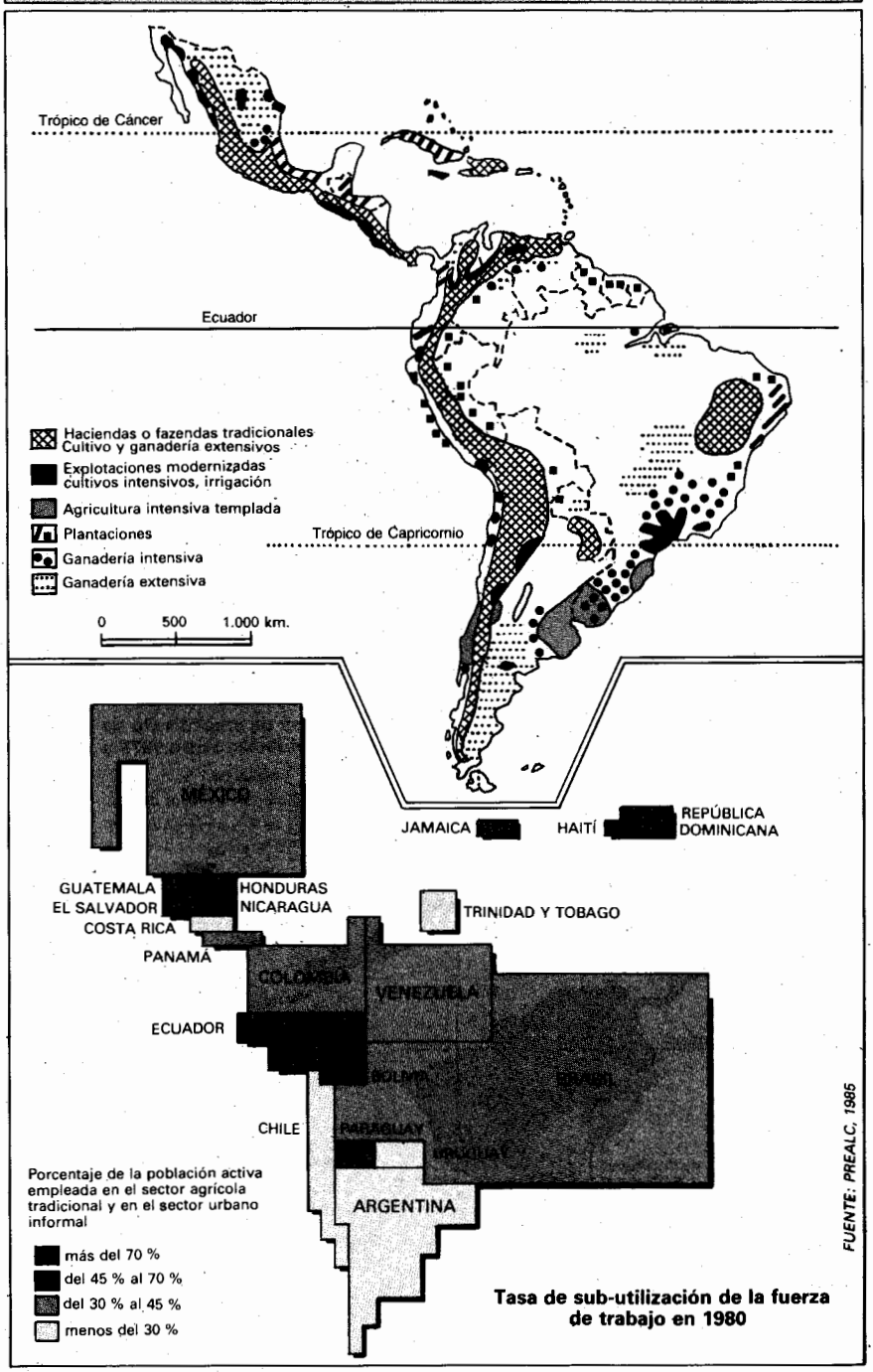
Los sistemas de estratificación

Sistema de referencia	Categoría dominante	Sub-elite	Categoría popular principal	Excluidos
I. Sociedad mercantil	Oligarquía	Burocracia	Pueblo	Pobres
II. Desarrollo hacia dentro ...	Elite «desarrollista»	Subsectoriales	Ciudadanos	Marginados
III. Sociedad industrial	Jefes de empresa	Técnicos	Obreros	Parados
IV. Capitalismo dependiente	Financieros	Consumidores «internacionalizados»	Asalariados	Sector informal

De modo más sencillo: lo que nosotros llamamos clases sociales, en la acepción europea clásica de este término, queda desbordado de modo constante por otras categorías. De un lado, los «estados» —en el sentido en que hablamos del tercer estado—, definidos por privilegios o por subprivilegios más que por relaciones de producción, y que oponen las gentes de bien, la *gente decente,* a los pobres, a la plebe, a la *chusma.* De otro, a la inversa, unas categorías definidas por su movilidad más que por su estatuto. La América Latina es una sociedad a la vez más rígida y más fluida que Europa y se compara con América del Norte por la importancia de las esperanzas que empujan a inmensas masas venidas del extranjero o del campo hacia las ciudades, el comercio y la industria. Las distancias sociales son tan grandes que a menudo parecen insoportables, pero muchos de los que se encuentran reclamados tan fuertemente por su inferioridad social esperan salir de su condición o incluso se sienten ante todo en movilidad.

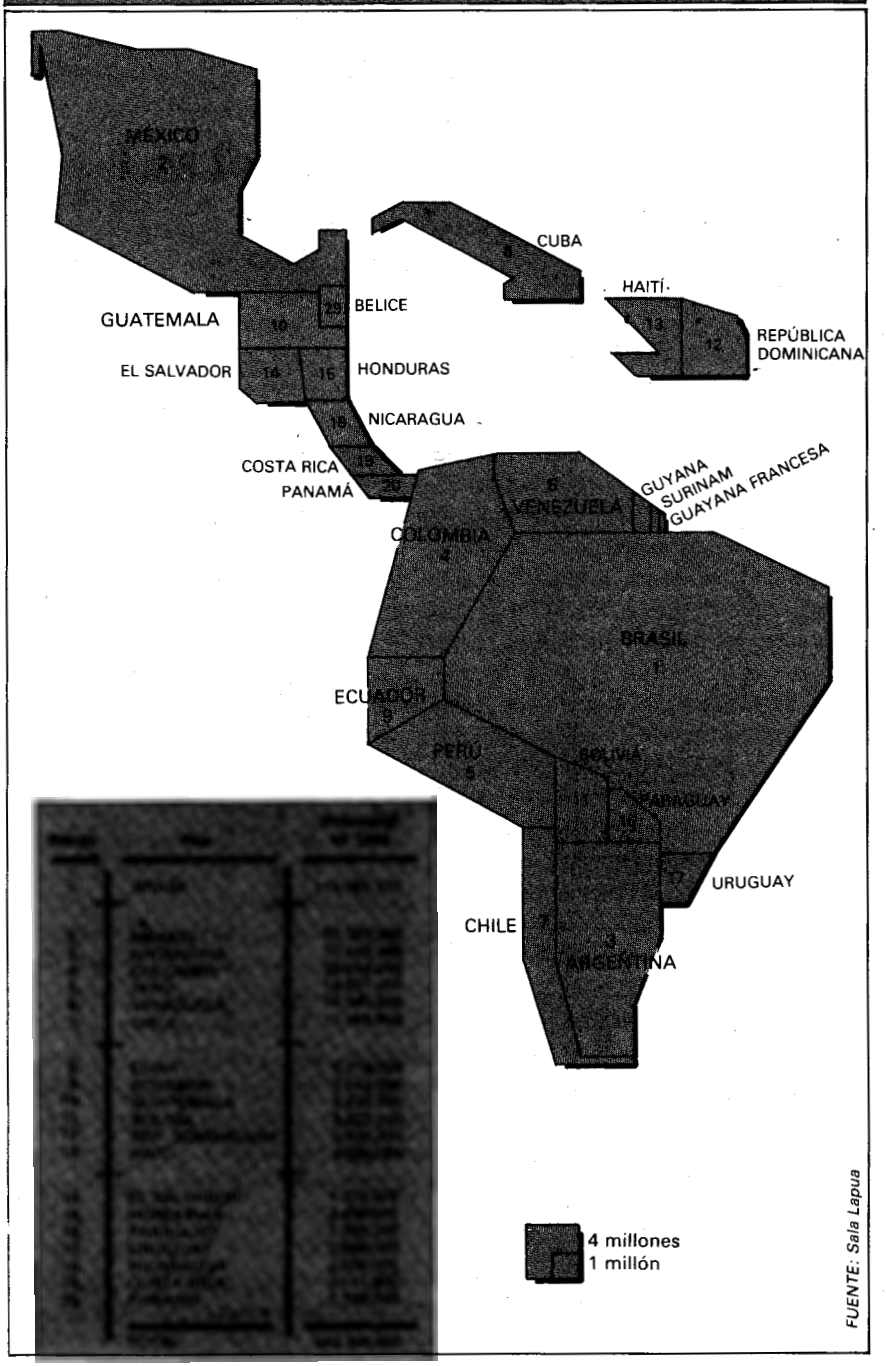

REPARTO DE LA POBLACIÓN
Monterrey
La Habana
Trópico de Cáncer
México
Guadalajara
Habitantes por km²
menos de 1
de 1 a 10
de 10 a 50
de 50 a 100
más de 100
Caracas
Medellín
Cali
Bogotá
Ecuador
Fortaleza
Recife
Salvador
Aglomeración o ciudad
de más de 5.000.000 de habitantes
de 1.000.000 a 3.000.000 de habitantes
de 500.000 a 1.000.000 de habitantes
Lima
0 500 1.000 km.
Horizonte
Trópico de Capricornio
Río de Janeiro
São Paulo
Pôrto Alegre
Santiago
Montevideo
Buenos Aires
Tasa de fertilidad en 1984
de 2 a menos de 3
de 3 a menos de 4
de 4 a menos de 5
5 y más
Tasa de crecimiento de la población entre 1973 y 1985
menos de 1 %
del 1 % a menos del 2 %
del 2 % a menos del 3 %
3 % y más
Trópico de Cáncer
Sin datos
Ecuador
Trópico de Capricornio
Trópico de Cáncer
Ecuador
Trópico de Capricornio
Fuente: Atlas de la Banque mondiale, 1987

SISTEMAS DE CULTIVO DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES



Tasa de sub-utilización de la fuerza de trabajo en 1980

POBLACIÓN DE LA AMÉRICA LATINA EN 1980



FUENTE: Sala Lapua

Segunda parte

Las formas de acción colectiva

¿Cómo se pasa de lo vivido personal a la acción colectiva? El pensamiento occidental afirma de modo espontáneo que es el interés lo que une a los individuos y que desprende a cada cual de la particularidad de su experiencia profesional o familiar. De liberales a marxistas, son muchos los que reducen los movimientos sociales a la defensa colectiva de intereses ante todo individuales. La realidad está muy lejos de esas afirmaciones simplificadoras. No sólo la búsqueda del interés individual es contradictoria —es una interpretación de Mancur Olson— con una acción colectiva, puesto que el interés de cada cual consiste en aprovechar los resultados obtenidos por una acción organizada sin asumir sus riesgos, sino que, sobre todo, la movilización de los actores sólo es fuerte cuando se dirige a sus valores, a su solidaridad, a sus representaciones, al mismo tiempo que a intereses a menudos difíciles o imposibles de definir en sí mismos. Es más fácil saber contra quién o con quién se enfrenta uno que por qué objetivos materiales. En América Latina en particular, la separación de la vida privada y de la vida pública, de las pertenencias colectivas y del interés individual, nunca es completa, y ¿con qué derecho llegaríamos a la conclusión de que es un elemento de debilitamiento de la acción colectiva? La solidaridad familiar, la conciencia religiosa, el nacionalismo tienen más fuerza movilizadora que la búsqueda de ventajas materiales, a menudo difíciles de definir en unas situaciones económicas muy sensibles en la coyuntura internacional y perturbadas por la inflación o simplemente por las fuertes oscilaciones de la tasa de crecimiento. Sigamos pues, paso a paso, la formación de la acción colectiva, en sus fuerzas y sus debilidades, a partir de la experiencia privada y hasta la definición de sus objetivos y de sus formas de organización.

1.—Vida privada, vida pública

1. Entre la tradición y la modernidad

Los caciques

La acción colectiva queda limitada por las formas tradicionales de dominación social. Los señores de la tierra, lo mismo que las sociedades mineras, manipulan a los trabajadores que de ellos dependen, en particular obligándoles a hacer sus compras en los almacenes que les pertenecen *(tiendas de raya* o *pulperías),* proporcionándoles un crédito que no pueden devolver y que los reduce a la esclavitud, pero también concediéndoles protección y apoyo en su vida familiar. Los pobres desean que sus hijos tengan como padrino a un hombre rico y poderoso que pueda ayudarles; aceptan formar parte de su clientela. Muchas novelas latinoamericanas han presentado estas figuras de patriarcas, de señores de la tierra, a un tiempo represivos y protectores, brutales y gozadores.

Pero esas imágenes corresponden cada vez menos a la realidad latinoamericana. Los grandes dominios y la vida local no son ni independientes de la política nacional ni se han incorporado a ella del todo. De ahí la importancia de un fenómeno propio de América Latina, el papel de los caciques, que controlan las relaciones entre el centro político y económico del país y una sociedad local que sólo parcialmente se halla integrada en el espacio nacional. Según los países, el caciquismo adopta dos significaciones diferentes. En aquellos en los que el sistema político

central es débil, como Ecuador, el cacique es un jefe local que impone su autoridad política a través de la sucesión de gobiernos de diferentes colores políticos. O. Hurtado escribe: «El jefe local o cacique aparece cuando ciertos propietarios de bienes raíces, gracias a la importancia de su riqueza en tierras, adquieren una preponderancia económica y social que les permite elevarse por encima de los demás propietarios y ejercer un poder político que no puede ser detenido siquiera por la autoridad del gobierno central [...]. Se prevale de éste, del Parlamento, de las municipalidades, para repartir funciones entre los que de él dependen y para conceder favores a su clientela electoral; utiliza su poder para arruinar a sus adversarios y para aumentar su poder y su fortuna empleando en ello el dinero público, repartiendo los impuestos, obteniendo ventajas fiscales y exoneraciones» (cf. Bibl., III, 1).

Por el contrario, en los países en que el Estado central es fuerte, el cacique es menos un propietario local que se apodera del poder político que un representante local del poder central. Ése es el caso de Brasil, donde al estado de creado una red de *coronéis,* bautizados así por el nombre de la función de coroneles que ocupan en la Guardia Nacional, red a través de la cual establece su control político, como ha demostrado N. Leal en un libro clásico. Esta definición del caciquismo se adecua particularmente bien al estado de Minas Gerais. S. Schwartzman subraya la particularidad del caso brasileño: «La influencia política es valorada menos como instrumento para alcanzar unos objetivos económicos que como forma de movilidad social y profesional en sí misma.» Toda la organización política de la *República Velha,* antes de 1930, estaba dirigida desde arriba; los *coronéis* dependían del gobierno, en lugar de representar un poder local capaz de resistir al poder central o de imponerle los intereses de los propietarios de tierras.

Lo mismo ocurre en México. Al estudiar el *munícipe* de Zacapoaxtl, L. Paré concluye: «El cacique aparece como el mediador político *(political broker)* que pone en relación a la población local con la estructura nacional a través de los marcos institucionales.» Si el cacique debe obtener, como observa R. Bartra, el apoyo de la comunidad a la que representa, L. Paré subraya que «es el control político lo que permite al cacique llevar a buen término unas actividades económicas que a menudo se oponen a los intereses de la comunidad». En México, el caciquismo ha adquirido un sentido particular después de la revolución, cuando los jefes militares se convierten en grandes propietarios al mismo tiempo que en dirigentes políticos regionales. A pesar de los esfuerzos de los presidentes Calles y Cárdenas, el caciquismo se mantuvo hasta tal punto que el cacique principal de la región de Puebla, Ávila Camacho, llegó a la presidencia de la República. Así pues, el caciquismo parece corresponder a un período de transición definido por una incorporación limitada de la sociedad local a la sociedad nacional, de los actores económicos y sociales al sistema político. L. Paré define como «la forma de control po-

lítico [...] que corresponde a un corto período de desarrollo durante el que el poder tradicional que se moderniza no llega a institucionalizarse, cuando existe una centralización excesiva del poder político y cuando no hay participación real de los diversos grupos sociales en la vida política». La debilidad de la participación social y la concentración del poder político limitan la capacidad de movilización autónoma de los grupos sociales y dan un control central a intermediarios que son menos mediadores que agentes de control político de la comunidad, al mismo tiempo que defensores de sus intereses. S. Pachano aplica este análisis general al caso de la Sierra Ecuatoriana: cuando los propietarios de bienes inmuebles dejan de ser sólo notables locales y se incorporan a una clase dirigente nacional y al Estado es cuando se forma una burguesía rural compuesta por comerciantes y por otros intermediarios, que sustituye a los grandes propietarios en su papel de control de los campesinos, pero dentro de las normas fijadas por la clase dirigente nacional. Por tanto, el caciquismo es un mecanismo político que demuestra la ausencia de integración del espacio político, social y económico nacional. Cuanto más débil es el centro, más tiende a identificarse el cacique con una comunidad frente a otra y a consagrarse a la lucha contra la influencia de otros caciques. Es frecuente que él mismo sea de origen popular, al mismo tiempo que está subordinado a los intereses dominantes y al poder central. Esta segmentación de la vida política y social es un poderoso obstáculo para la formación de movimientos sociales integrados. En México, por ejemplo, los esfuerzos por organizar un movimiento campesino en la época de Cárdenas, dirigidos en particular por las instituciones, fueron combatidos con éxito por los caciques. Puede ocurrir incluso que un movimiento social nacional se descomponga y que sus dirigentes se conviertan en caciques. Ése fue el caso del movimiento campesino boliviano, algunos años después de la revolución de 1952: sus dirigentes, convertidos en caciques del Altiplano y del valle de Cochabamba, iniciaron un período de luchas sangrientas entre sí. Esta segmentación alcanza un grado extremo cuando el espacio nacional está integrado de forma muy débil y es poco homogéneo. Tal fue el caso, durante mucho tiempo, de Venezuela, donde J. Ahumada ha mostrado que la diversidad regional, al reforzar el poder de los caciques, hacía imposible la formación de un movimiento campesino a escala nacional. El papel de los caciques indica, pues, los efectos de la inmovilidad relativa de una sociedad rural que, sin estar encerrada en sí misma, como a veces parece decirlo una forma muy simplificada de la teoría de la dualización, no se integra sino de modo muy parcial al espacio nacional.

Lo que separa a una gran parte del continente del modelo liberal europeo, que supone que el sistema político representa individuos o al menos categorías definidas por su situación en el mercado de trabajo y de bienes, porque aquí es la comunidad local, y no el individuo, lo que constituye la unidad de base. El caciquismo no refuerza el aislamiento

de las comunidades; facilita, por el contrario, el acceso de éstas al poder central, porque el número de intermediarios no pasa por regla general de tres o cuatro, ni siquiera en un gran país como México, donde el presidente tiene un conocimiento detallado y un control muy directo de la red de caciques locales y de grandes notables nacionales sobre la que se apoya su poder en el país y en el seno del partido-Estado. Pero es más un medio de control de la población que un agente de expresión de las demandas de ésta, incapaz de manifestarse directamente por el canal de «representantes» elegidos.

Las mujeres y la modernización

La separación de la experiencia social y de la acción política tiene como contrapartida un vínculo constantemente fuerte entre vida privada y vida pública. Característica es, a este respecto, la forma de intervención de las mujeres en la vida pública. Su interés es tanto mayor cuanto que los medios feministas de América del Norte y de Europa occidental se han contentado a menudo con una imagen muy superficial de la condición de las mujeres latinoamericanas. Éstas se hallarían subordinadas a la dominación «patriarcal» del hombre, estarían encerradas en las tareas familiares y la vida privada, y por lo tanto se encontrarían al margen de la vida pública. Imagen muy alejada de la realidad que podemos observar.

Desde luego, las formas de feminismo más características de los países industrializados nunca han adquirido una gran importancia en América Latina. Este feminismo de los países centrales se halla dividido en tres tendencias principales, asociadas a menudo entre sí: un feminismo liberal que lucha por la igualdad en derecho de las mujeres, por su emancipación de las tareas familiares tradicionales, en resumen, combatiendo a la sociedad llamada patriarcal; un feminismo radical, que trata de integrar su acción en un programa más general de transformación social, cuyo agente central debería ser el movimiento obrero y socialista; por último, un movimiento de liberación de las mujeres centrado en la lucha contra la dominación cultural, y más precisamente sexual, ejercida por el hombre sobre la mujer. En el interior de esta tercera tendencia, las lesbianas han jugado a menudo un papel importante. Ahora bien, esta tendencia, que puede considerarse como la más innovadora aunque jamás haya recibido un apoyo masivo, no ha ejercido verdadera influencia en América Latina. Las feministas latinoamericanas han condenado lo que han percibido como una disociación de los problemas personales y culturales de una categoría particular de mujeres en relación al conjunto de las necesidades de transformación económica, social y política de los países latinoamericanos. Por su lado, el feminismo radical no ha ejercido sino una influencia marginal, limitada a menudo a mujeres que el exilio o el viaje habían puesto en contacto con feministas europeas o

norteamericanas. Así fue como las feministas radicales brasileñas se organizaron en París, en 1976, a la salida de un mitin organizado por la tendencia «lucha de clases» del *Circulo de Mulheres*. En México es la influencia de los grupos norteamericanos la que se deja sentir más a menudo. En ninguna parte se establecieron vínculos con los partidos socialistas o revolucionarios y las organizaciones sindicales. Z. Hernández reconoce incluso que en Perú (cf. Bibl., II, 1) los partidos de izquierda no están lejos de considerar a las mujeres como el «eslabón más débil» de las luchas sociales. El análisis de la situación de las mujeres como un efecto de la sociedad de clases, inaugurada en Brasil por el libro pionero de H. Saffiotti, apenas ha tenido más que una influencia puramente intelectual. Como en Europa, muchas feministas latinoamericanas se formaron ante todo en la acción política, en partidos de izquierda, pero buscaron rápidamente formas más autónomas de acción. En uno de sus últimos textos (publicado en *Nueva Sociedad,* Caracas, 1984), J. Kirkwood ha analizado muy bien la oposición entre las feministas y la política. No se trata en modo alguno de un conflicto entre problemas privados o culturales y problemas políticos, sino de la oposición entre dos concepciones del poder. El pensamiento político, dice, tiene una imagen centralizadora del poder y en general propone la instauración de un poder todavía más centralizado. Las feministas, por el contrario, encuentran el poder en cada lugar de su vida cotidiana, de suerte que el feminismo es «negación del autoritarismo». Por esta razón, no pueden separarse los dos principios: no hay feminismo sin democracia y no hay democracia sin feminismo. Lo que indica con claridad que si en América Latina, lo mismo que en cualquier otra prte, el feminismo relaciona problemas privados y vida pública, problemas de cultura o de personalidad y situación económica social y política, no hay, en América Latina menos todavía que en otras partes, continuidad directa entre las reivindicaciones femeninas y las fuerzas clásicas de acción política.

En América Latina el feminismo liberal no tiene más importancia que las otras dos tendencias. Se ha difundido sobre todo entre las mujeres de clases medias que han adquirido un nivel superior de educación. Las luchas de estas mujeres han sido a menudo menos duras que en los países más industrializados. En Chile, las mujeres han tenido, antes y de forma más amplia que en Estados Unidos, por ejemplo, acceso bastante grande al ejercicio de las profesiones más cualificadas. Por otro lado, estas mujeres latinoamericanas han vivido mucho menos que las de Europa o las de América del Norte la carga de una doble jornada de trabajo, profesional y familiar, puesto que la mayoría de las veces podían ser descargadas por empleadas de hogar de lo esencial de las tareas domésticas. En resumidas cuentas, el feminismo procedente del Norte ha ejercido una influencia muy limitada y no se ha difundido en los medios populares. Todos los esfuerzos hechos por las feministas más politizadas para difundir sus temas en los barrios populares han fracasado, lo cual con-

dujo a escisiones en el seno de las asociaciones de mujeres, en particular en Brasil, de *Nós Mulheres* y también de *Brasil Mulher.*

Así pues, de acuerdo con las imágenes tradicionales, ¿hemos de concluir que las mujeres apenas participan en la vida pública en América Latina y siguen estando encerradas en su papel tradicional? Lo contrario es lo verdadero. Cuando más débil es la influencia de los movimientos feministas en América Latina con referencia a Estados Unidos y a Europa occidental, la participación de las mujeres y de los temas feministas en el proceso general de cambio social y político en América Latina es mucho más importante que en Europa y más aún que en Estados Unidos. En particular en Brasil, en Argentina y en Chile, grupos de mujeres han participado, con sus temas propios, en las luchas democráticas, con la conciencia de oponerse a un sistema de dominación global que se extiende del militarismo al sexismo masculino. La amalgama, ya analizada, de elementos modernos y tradicionales en el sistema de dominación económica y social en América Latina explica la alianza de temas modernizadores y de temas críticos en esas mujeres que ocupan un lugar tan importante en la vida pública. Esta participación femenina en el movimiento de democratización no se aísla en movimientos propiamente feministas y ha obtenido una influencia que permite rechazar la imagen demasiado clásica del tradicionalismo cultural latinoamericano. La acción de estas mujeres ha penetrado ampliamente los *mass media,* que han apoyado más que frenado la transformación de los papeles femeninos. En particular, la televisión brasileña, una de las más importantes del mundo, ha contribuido a la evolución de las actitudes y de las costumbres, mostrando situaciones que antaño habrían sido consideradas escandalosas: no sólo el aborto, sino las relaciones homosexuales o también las relaciones heterosexuales entre parejas de edades muy diferentes. La acción de las mujeres se inscribe en una acción más general de democratización modernizadora.

Pero, más allá incluso de esta acción llevada sobre todo por mujeres de clases medias, el aspecto más interesante de la participación social y política de las mujeres concierne a las habitantes de las *poblaciones.* Aquí, tradicionalismo y democratización modernizadora se unen con más fuerza que en cualquier otra parte. En primer lugar porque, en esos medios subprivilegiados, la mujer es el centro de la familia, y cría a menudo hijos de padres distintos que han desaparecido sucesivamente. De suerte que, frente a la miseria o la pobreza, la preocupación maternal de alimentar a los hijos es la motivación más fuerte para la organización de protestas y de acciones políticas. Estas mujeres no corresponden para nada a la imagen superficial de la mujer en el hogar. Claro que están hundidas por los problemas de su vida familiar, pero en modo alguno están sometidas a una autoridad masculina. En una encuesta realizada entre esas *pobladoras* en Chile, D. Raczynski y C. Serrano han mostrado que casi siempre tienen expectativas muy bajas respecto a su marido o

compañero. Cuando mantienen buenas relaciones con él, dicen en el mejor de los casos: «no me da mala vida». Lo consideran ante todo como aquel que abastece las necesidades familiares, pero son ellas las que toman las principales iniciativas. Esa investigación ha demostrado, como otras, que estas mujeres fácilmente lograban, a un tiempo, cuidarse de su cuerpo y de su sexualidad y organizar acciones que superan incluso la defensa comunitaria. Mientras que el paro tiene efectos destructores sobre el hombre, identificado con su trabajo y que rehúye el hogar empobrecido o zozobra en el alcoholismo, son las mujeres las que toman todas las iniciativas. También son ellas las que animan, en lo esencial, las comunidades religiosas de base, tan numerosas sobre todo en Brasil. Su acción demuestra que vida privada y vida pública no están separadas en América Latina. Esa separación parece característica del modelo occidental, y, en particular, de desarrollo. La vida del hombre aparece separada entre una vida pública, sobre todo profesional, y una vida privada, que se ampara en las casas individuales que constituyen las inmensas barriadas de las ciudades norteamericanas. Semejante separación apenas es concebible en América Latina. Cierto que se traduce por cierta privatización de la vida pública en la que las relaciones de familia, de amistad, de compadrazgo juegan un papel importante; pero más notable todavía es la continuidad entre las reivindicaciones que afectan a la vida privada y la capacidad de acción colectiva.

No hay nada contradictorio entre esta conclusión y la de las páginas anteriores, que insistía en la separación de la acción social y de la representación política. La acción de las mujeres establece un vínculo fuerte entre vida privada y acción social, pero penetra poco en el mundo de las fuerzas políticas organizadas, ya se trate de partidos o de sindicatos. La importancia de la familia, de la casa, de las fiestas y de las amistades no actúa, sin embargo, como un factor de privatización conservadora o despolitizante. Podemos pensar, por el contrario, que la importancia de la vida familiar y de las relaciones interpersonales proporciona a la vida pública una componente cultural y ética que influye sobre la movilización social y política pero que no la debilita. La presencia constante de temas como la honestidad o la limpieza en los discursos políticos corresponde a una forma de participación social en la que las referencias a las leyes de la historia o de la sociedad son menos importantes que el compromiso moral. Es esa comunicación entre vida privada y vida pública, entre moral y política, lo que ha protegido a la América Latina contra las formas cuasimilitares de movilización social y política que tuvieron tanta importancia en la Europa del siglo XIX y sobre todo en la Asia del siglo XX. Es ella la que presta su peso político al tema del niño, del *pibe*. Las mujeres de los barrios pobres de Buenos Aires, interrogadas y fotografiadas por E. Jelin y P. Vila, lo mismo que las *pobladoras* de Santiago o las *faveladas* de Recife, saben con toda claridad que para ellas la política empieza por la dificultad de alimentar a sus hijos, pero también por la

esperanza de educarlos. Hablar de política en Francia es criticar la inflación, la situación del comercio exterior o la tasa de crecimiento; en América Latina es protestar contra el subequipamiento de los barrios pobres y la insuficiencia de los programas de viviendas populares o contra el aumento del precio del pan y de los autobuses. Es también, y quizá sobre todo, esperar para los hijos una vida mejor y dejarse arrastrar por las campañas de los políticos. Si la política en América Latina no es representativa, al menos es simbólica, cargada de apelaciones a los sufrimientos y a las demandas vividas de la forma más personal. La apelación orgullosa a la grandeza del Estado o a la fuerza liberadora de una ideología se agota en seguida en una población más centrada en su esperanza vivida que en una visión de la historia.

2. Las Iglesias y la política

Secularización y religiones populares

Durante mucho tiempo, el positivismo laico fue la ideología de los modernizadores en América Latina. Igual que en la Francia de la III República, ese progresismo, heredado de la filosofía de las Luces, designaba como a su mayor enemigo al clericalismo y, en sentido lato, a la religión. Era preciso que las luces de la Razón, de la Ciencia y del Progreso económico destruyesen las creencias tradicionales y las formas antiguas de control social y cultural. Esto era cierto en la época de la colonia; lo fue más todavía en el momento de la independencia, porque muchos obispos defendieron a España contra el espíritu liberal y republicano de ciertos movimientos de independencia. En México ya no quedaba ningún obispo en 1829, y en Lima el arzobispado quedó vacante hasta 1834, como nos recuerda F. Chevalier. El clero regular también disminuyó. La reconstrucción de la Iglesia fue lenta y fue puesta en peligro por nuevas crisis, sobre todo en México, donde, al día siguiente de la revolución, se desencadenaron grandes campañas anticlericales, en particular en los estados del Golfo. Fue sobre todo en el estado de Tabasco, bajo el gobernador T. Garrido, donde el anticlericalismo adoptó una forma extrema y violenta. Ello provocó una reacción campesina y la formación, sobre todo en el Bajío, de una *Vendée,* el movimiento de los *Cristeros,* que analizaremos en la tercera parte. Por otra parte, el tema religioso dividió a la oligarquía. Conservadores y liberales que defendían los mismos intereses económicos combatieron entre sí, en ocasiones de forma sangrienta, porque los conservadores daban prioridad a la defensa de la Iglesia, es decir, de un sistema de control social y cultural, mientras los liberales daban más importancia a la modernización y al enriquecimiento económico. De este modo la Iglesia fue identificada con los que defendían de modo más directo el orden establecido. En Colombia, una

gran parte de la Iglesia apoyó directamente a los conservadores en el momento de la *violencia,* verdadera guerra civil que desgarró el país, oponiendo poblaciones conservadoras y poblaciones liberales, sobre todo al día siguiente del asesinato del líder populista Gaitán, en 1948. La situación de la Iglesia fue muy diferente de un país a otro. Uruguay fue, desde hora temprana, laico, mientras que en Perú la Iglesia mantuvo sus vínculos con la oligarquía hasta los inicios de los años sesenta y el Concilio Vaticano II. No obstante, la urbanización y el triunfo de las políticas nacionales populares obligaron a la Iglesia a entrar también en un proceso de secularización. Comprendió que seguir estando identificada con el sistema de control social propio de la sociedad rural era condenarse a desaparecer, cuando el continente se hallaba en un período de plena urbanización: para ella se volvía esencial reforzar su presencia en el mundo obrero y en las clases medias. En ciertos países al menos, como Brasil, Chile y Venezuela, la Iglesia se acercó a esos grupos urbanos en crecimiento, separándose de la religión popular tradicional. Por el contrario, en otros casos siguió apegada a ritos ancestrales. El «guadalupismo», derivado del nombre de la Virgen negra que se había aparecido en un santuario que había sido el de la diosa Tanantzin antes de los españoles, fue un elemento central de la vida religiosa, no sólo en México sino sobre todo un continente donde el culto mariano, la devoción a los santos, las peregrinaciones y los votos arrastraban a grandes masas de fieles. En México, los estandartes de la Virgen de Guadalupe habían sido llevados por los campesinos revolucionarios de Zapata, como también lo habían sido un siglo antes por los independentistas del cura Hidalgo. Sin embargo, en muchos países, la Iglesia se aleja del «guadalupismo» porque le parece más urgente luchar contra la penetración del socialismo y del comunismo en las clases populares. Crea sindicatos cristianos, sobre todo entre los empleados, y trata de encontrar un puesto en el juego de las fuerzas políticas. Obtiene algunos éxitos, por ejemplo en Venezuela, donde el anticlericalismo tradicional se debilita, donde la Iglesia negocia con *Acción Democrática* y donde el partido COPEI se diferencia de ella. De igual modo, en Chile los padres Hurtado y Vives actúan en los barrios pobres, mientras la *Falange,* formada ante todo desde la base del partido conservador, se transforma en una democracia cristiana que pronto gana terreno y debilita el anticristianismo de los radicales y de los socialistas. Los movimientos juveniles ganan importancia, en particular entre los jóvenes obreros (JOC) y en las universidades. Esta transformación y esta ruptura, en muchos países, de la Iglesia con la religiosidad popular traen también un desarrollo cada vez más autónomo de ésta, a medida que sale de la organización clerical. La ruptura de la sociedad cristiana, de lo que J. Delumeau ha llamado la cristiandad por oposición al cristianismo, definido como creencia propiamente religiosa, no entraña sólo un acercamiento de la Iglesia y de las fuerzas de cambio político y social, sino también el desarrollo rápido de corrientes religiosas que

expresan resistencias a la descomposición de la sociedad tradicional o tentativas de formación de nuevas comunidades.

Christian Lalive d'Épinay ha analizado el desarrollo de las Iglesias pentecostales como la búsqueda de un refugio para las masas urbanas pobres. Los marginados y los desarraigados buscan en una comunidad un asidero que los proteja de la anomia y de su propio desvío, tanto como de las dificultades materiales. La religión aparece aquí como un opio del pueblo porque la búsqueda de un refugio conduce a posiciones conservadoras. Sólo una integración democrática, dicen los críticos de esta renovación religiosa, puede conducir a una participación más activa y a conductas más racionales. Pero ¿compartimos nosotros todavía ese hermoso optimismo y esa condena de las formas «primitivas» de comportamiento que deberían dejar sitio a conductas a la vez racionales y modeladas en los marcos institucionales de una democracia al estilo occidental? Lo que aquí molesta, como en todos los aspectos de esa sociología heredada de las Luces, es la identificación del progreso con el triunfo del racionalismo y de la acción instrumental. Ahora bien, los actores de las sociedades más modernas no se reducen a la persecución racional de sus intereses; viven, por el contrario, entre un pasado y un futuro, con unas raíces y unas esperanzas o unos miedos. El ascenso del pacifismo y del movimiento ecologista en los países modernos, como Alemania, Holanda o los Estados Unidos, ¿no muestra lo que hay de ingenuamente peligroso en la afirmación de que las creencias deben ceder el paso a los cálculos y que esa religiosidad popular no es más que una forma marginal y en última instancia arcaica de conductas en una sociedad moderna?

El análisis de Lalive d'Épinay, que cito aquí porque es el mejor, se encuentra con muchos hechos y comportamientos, pero también puede pensarse que el desarrollo de las Iglesias protestantes y de las comunidades católicas de base entre las categorías más pobres de la población, lejos de tener un solo sentido, va al encuentro de varios tipos de conductas. Partamos de un análisis de las religiones populares como defensa neoconservadora contra la anomia. Aquí cuenta ante todo la moralización y la apelación a la responsabilidad individual. La Iglesia es igualitaria, apenas está organizada: colección de individuos que, en su conjunto, afirman su dignidad luchando contra el alcoholismo y todos los efectos de la desorganización social. La vida religiosa está hecha, sobre todo, de testimonios en los que el pecador cuenta su caída y su conversión. Porque la caída social sólo puede ser compensada por una victoria moral sobre uno mismo. Los *canutos* chilenos, muy abundantes en la región minera, predican la abstinencia y el miedo a la condenación en una comunidad que ha estallado. Cierto que muy a menudo las Iglesias pentecostales son conservadoras. Lo son en particular en Chile, donde se han acercado al general Pinochet en el momento en que la Iglesia católica se oponía de la forma más directa a su dictadura y a sus ataques a la persona humana. Pero, al lado de estas conductas defensivas y mezclada a

ellas, aparece pronto una religión propiamente popular cuya inspiración es totalmente distinta. Aquí se trata no de moralización, sino de integración de una comunidad en un orden cósmico, lo que da ocasión al nacimiento, a la vez, de la afirmación festiva de la comunidad y las prácticas mágicas: votos *(mandas)*, culto de los santos, culto de los muertos *(animitas)*, peregrinaciones por las que los fieles apartan los peligros que les rodean al mismo tiempo que refuerzan la familia y la colectividad local. Esta religión popular no apela a ninguna trascendencia y se acerca a la imagen que Durkheim ha dado de la religión. Finalmente, al lado de lo que podemos llamar sectas en el primer caso y comunidades en el segundo, existen movimientos religiosos y más precisamente escatológicos, cuyo ejemplo más importante lo han dado los *mesiasanismos* brasileños, y que en todas partes se encuentran bajo formas menos organizadas. Aquí, la movilización religiosa intenta crear una Iglesia o una ciudad liberada del pecado que invade un mundo cercano a la catástrofe final, apela a una liberación que no es ni política ni social en sí misma, pero que designa una opresión vivida. Tanto la mujer, que pide a Dios transformar las costumbres de su compañero alcohólico y librarla de él, como los *pobladores* de La Victoria de Santiago, que acompañan hasta la catedral el cuerpo de su cura André Jarland, asesinado por la policía, después de haberlo velado toda la noche, protestan contra una dominación y una represión que no siempre identifican socialmente, pero a la que oponen la vida como fuerza de resistencia a la muerte.

Estos tres tipos de conductas religiosas —la primera de las cuales responde a la desorganización social presente, la segunda arraiga en una cultura particular y su pasado, y la tercera se vuelve hacia el futuro— corresponden raramente a grupos religiosos separados; al contrario, se mezclan constantemente, de suerte que siempre es artificial reducir una manifestación de la religión popular a uno de estos tres sentidos: secta, religión comunitaria o movimiento profético. Los que mediante la moralización y el conservadurismo social se defienden de su caída, también viven experiencias de conversión y de fe propias de la religión propiamente popular, y también pueden ser arrastrados por movimientos proféticos. El ejemplo dado por F. Dubet en sus análisis de los jóvenes marginados que «van a galeras» en Francia debe subrayarse. Estas conductas, fundadas en la privación, la marginalidad o la exclusión, no pueden comprenderse más que por la complementariedad relajada de significaciones diferentes. Lo propio de la religión popular es su débil institucionalización, que le permite pasar de un registro a otro y, con más frecuencia todavía, mezclarlos y hacer prácticas que amalgaman moralidad individual, fiesta colectiva y esperanza de una inversión del orden social en que los ricos queden arruinados y los pobres saciados.

Estas observaciones valen tanto para comunidades católicas como para Iglesias pentecostales protestantes. Por su lado, la *umbanda* brasileña no es, la mayoría de las veces, una transformación urbana del *can-*

domblé afro-brasileño. D. Brown ha demostrado, incluso, que puede servir para recrear vínculos tradicionales de clientelismo. Mientras el *candomblé* mantiene las relaciones sociales jerárquicas propias de un mundo de esclavos o del subproletariado tradicional, la *umbanda* es individualista e incluso conservadora. Como el movimiento de Father Divine, activo entre la población negra de los Estados Unidos, y en particular en Philadelphia, a partir de los años cuarenta la *umbanda* acepta temas nacionalistas. A esta orientación se oponen grupos minoritarios que se apoyan bien en un nuevo subproletariado, bien en grupos intelectuales que, por lo que a ellos se refiere, apelan a las tradiciones africanas para combatir regímenes autoritarios y una modernización que aumenta la desigualdad social.

Por otro lado, aparentemente opuesto, la evolución de la Iglesia se acelera y se radicaliza a partir del Concilio Vaticano II, y, principalmente, a partir de las conferencias episcopales de Medellín en 1968 y de Puebla en 1979. La Iglesia ya no defiende de forma incondicional la propiedad privada y, sobre todo, abandona una separación demasiado cómoda entre lo religioso y lo secular, que le permitiría mantenerse apartada de los grandes problemas sociales. En muchos países, la Iglesia apoya la reforma agraria, en Ecuador y en Brasil en particular; en Chile, el papel de la Democracia Cristiana fue central en la primera reforma agraria, realizada por el Gobierno del demócrata-cristiano E. Frei. En Perú, por el contrario, la influencia del APRA en las clases medias y en el mundo obrero contribuyó a mantener la vinculación de las clases dominantes tradicionales con la Iglesia. Situación muy distinta de la de Brasil o de Chile, donde, durante los años setenta, el cardenal Arns de São Paulo y el cardenal Silva Henríquez de Santiago aparecen como las grandes figuras progresistas de la Iglesia latinoamericana. Esta evolución lleva a la Iglesia a tomar sus distancias con partidos abiertamente cristianos e incluso con la Democracia Cristiana. La Iglesia trata de intervenir de una manera específica, no directamente política, en los problemas sociales.

La teología de la liberación

Es en el seno de esa evolución general, de la separación de la Iglesia y de la religiosidad popular, de un lado, del acercamiento entre la Iglesia y las fuerzas de transformación económicas y sociales del continente, de otro, donde aparece una tendencia más radical, manifestada en Chile durante la Unidad Popular, por el grupo de Cristianos por el Socialismo de G. Arroyo; en Ecuador, por el Movimiento nacional de cristianos por la liberación; en Brasil, por las campañas de P. Freire por la «concienciación». Estas corrientes y otras preparan y apoyan la formación de la *teología de la liberación.* Ésta corresponde a un movimiento económico e ideológico preciso. Gustavo Gutiérrez, cura peruano, y muchos otros critican el «desarrollismo» de la CEPAL, y sobre todo critican el a-his-

toricismo del pensamiento cristiano tradicional. Piden a los cristianos que piensen en términos de praxis sociopolítica y apoyan su reflexión sobre el conjunto de las ciencias sociales y sobre el marxismo en particular. La liberación se identifica, de manera creciente, con la revolución, pensamiento que atrae a jóvenes intelectuales radicales que viven la ruptura con el sistema social tradicional, denuncian la dominación extranjera y se sienten atraídos por el espíritu revolucionario del *Che* Guevara y de los revolucionarios cubanos. La teología de la liberación se asocia, sobre todo, a la sociología de la dependencia. Si, en efecto, se identificase la salvación con objetivos enteramente económicos y sociales, y por tanto con la acción de los partidos políticos, resultaría imposible mantener una formulación propiamente religiosa de los problemas. La teoría de la dependencia ofrece un análisis más receptivo que el marxismo tradicional a una teología de la liberación, porque insiste poco en las fuerzas de producción y la movilización de masas; denuncia ante todo el imperialismo, la dominación del capitalismo, que se ejerce a través de los Estados nacionales corruptos o represivos, en lucha con su propio pueblo y al servicio del imperialismo. Visión que lleva a dudar de la capacidad de acción de las masas y a situarse, más bien, en las vanguardias revolucionarias cuya acción va dirigida más contra el Estado que contra la burguesía nacional, y que se acerca a la de la impotencia del ser humano pecador. Un pensamiento a la vez político y religioso puede entonces apelar más al tema de la exclusión que al de la explotación, más a la protesta global que a la organización de la sociedad socialista, que debería recoger la sucesión de la sociedad capitalista cuando ésta haya acabado su tarea histórica de desarrollar las fuerzas de producción.

La teología de la liberación está, pues, muy lejos de una teología de la revolución, tal como la elabora J. Comblin. Gutiérrez está más cerca de Jean-Paul Sartre que de los partidos comunistas clásicos. Además, su marxismo está influido por el freudo-marxismo que E. Fromm había introducido a partir de Alemania en México y en toda la América Latina. Los teólogos de la liberación, como los sociólogos que defienden una teoría radical de la dependencia, apelan al pueblo como agente de su liberación, y a los intelectuales como agentes de movilización del pueblo, pero, al mismo tiempo, denuncian una dominación que destruye la capacidad de acción del pueblo, que aliena a las víctimas, y dan a los intelectuales un papel de denuncia más que de organización. En el seno de los movimientos radicales y revolucionarios, el pensamiento cristiano siempre estuvo más cerca de la tendencia «foquista» que de los esfuerzos de movilización de las masas. Muchos intelectuales fueron atraídos por análisis que valoraban su sacrificio y su papel profético y que abrían nuevos espacios de acción junto a movimientos de masas que eran ampliamente dominados por líderes nacionalistas o populistas. Este aspecto de la teología de la liberación pertenece más al izquierdismo que al universo marxista-leninista. De ahí también la tendencia de Gutiérrez y de

otros teólogos a introducir en el tema de la liberación una dimensión universalista que no podía venirle del solo razonamiento de tipo económico. No obstante, a Gutiérrez le resulta difícil precisar las relaciones entre la salvación, definida en términos religiosos, y la liberación, definida en términos económicos y políticos. Dice que la teología de la liberación es una teología de la salvación en unas condiciones concretas, históricas y políticas. Semejante fórmula parece dejar la prioridad a unos conceptos religiosos, pero el mismo autor escribe (cf. Bibl., II, 1, pág. 109) que esta teología «es una reflexión a partir de la *praxis* del hombre; intenta pensar la fe a partir de esa praxis histórica y a partir de la manera en que es vivida la fe en el compromiso liberador. De suerte que la teología viene después de ese compromiso, y de suerte también que la teología es un "acto segundo"». Esta segunda orientación es la central. Se trata de «una relectura del Evangelio a partir de la solidaridad con los pobres y los oprimidos». Esta teología se nutre de pensamiento alemán, en particular del pensamiento de E. Bloch, el autor del *Principio esperanza,* y de la teología de la esperanza de Moltman. Adopta una forma, si no más radical, al menos que entra en conflicto más directo con la Iglesia católica misma, a partir del momento en que da una importancia central a la afirmación del pueblo de Dios. Así se forma un historicismo, que precisamente se ha llamado *neojudaísmo:* los pobres son el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios es la encarnación de la Iglesia. De igual forma que el Verbo se hizo carne, la Iglesia se hace pueblo. Es, sobre todo, el franciscano brasileño Leonardo Boff quien ha desarrollado esta idea. Su tema central es el de la eclesiogénesis, ligada a la experiencia de las comunidades de base que se desarrollaron rápidamente en Brasil a partir de diversas corrientes, la de los catequistas y populares en Río, la del movimiento de educación de base en Natal, y a partir de los planes de pastoral global elaborados por la Conferencia Episcopal Brasileña. Las ideas de Boff no están lejos de las de Gutiérrez, pero mientras el peruano, muy directamente comprometido en la vida política y muy vinculado a la corriente marxista, tenía cuidado de no chocar con la Iglesia como institución, Boff denunciaba la lucha de clases en el seno de la Iglesia y exaltaba el nacimiento de una nueva Iglesia opuesta al estilo «romano y feudal» de la Iglesia de Roma. ¿Cómo no iba a sentirse ésta amenazada, en su organización, por lo que le parecía un riesgo de cisma? Además, a partir de 1979 y del derrocamiento de Somoza, en Nicaragua se desarrolló un movimiento más extremado todavía. Llamaba a los cristianos a abrazar la causa revolucionaria y el marxismo, subordinando claramente la religión a la acción política. El chileno P. Richard escribe (cf. Bibl., II, 1): «No se trata de buscar en el Evangelio una justificación a nuestro compromiso, sino al revés, a partir de un compromiso asumido por él mismo y en nombre de su racionalidad propia, queremos volver a pensar toda nuestra fe.» Los grupos de cristianos revolucionarios atacaron al arzobispo y su clero, poniendo en práctica una ac-

ción que se acercaba al cisma, hasta el punto de que el Papa, durante su viaje a Nicaragua en marzo de 1983, entró en conflicto abierto con el movimiento de la *Iglesia Popular,* que se oponía a la *Iglesia Institucional.* Los cristianos revolucionarios apelaban al Dios de los pobres, mientras que la mayoría de los católicos, agrupados en torno del arzobispo —luego cardenal— Obando y Bravo, apelaban a un solo Dios. El ministro de Asuntos Extranjeros, Miguel de Escoto; el ministro de Asuntos Culturales y poeta conocido, Ernesto Cardenal, y su hermano Fernando Cardenal, ministro de Educación, los tres sacerdotes, se convirtieron en las figuras principales de un movimiento, casi de una Iglesia, estrechamente asociado al poder sandinista, y alentado incluso por una de sus fracciones y en particular por Daniel Ortega. De Escoto intentó crear un gran movimiento popular, la «insurrección evangélica», a partir de un largo ayuno por la paz y a través de un viacrucis por la paz, que recorrió en febrero de 1986. El Papa se opuso con el mayor vigor a lo que le parecía una subordinación de la religión a una fuerza política e incluso a un gobierno revolucionario. Apoyó al cardenal Obando, que había estado asociado, en una oposición bastante tardía a Somoza, al sector de la burguesía liberal y que, opuesto al poder revolucionario, se acercó en parte a los contrarrevolucionarios. Pero sería un error pensar que el apoyo del Papa fue a una fuerza política contra otra. La razón principal de su intervención era afirmar y mantener la unidad de la Iglesia. Es la razón por la que comprometió a la Iglesia a reconocer un interés privilegiado, pero no exclusivo, por los pobres. Por su parte, la *Iglesia Popular* puso pronto de manifiesto su debilidad frente a la acción del arzobispo, apoyado por la gran mayoría de fieles. Sólo una vez reunió veinte mil personas, y por regla general mucho menos, mientras que setecientas mil personas se habían apiñado para recibir al Papa en Managua. La *Iglesia Popular* no se organizó, sobre todo, en un verdadero clero, como lo habían hecho los sacerdotes constitucionales durante la Revolución francesa. Tras un período de fuerte tensión y de amenazas que pesaron en particular sobre Leonardo Boff, Roma, a iniciativa de los obispos brasileños principalmente, pero también del clero peruano, adoptó una posición más moderada. El sínodo de obispos latinoamericanos reunido en Roma a finales de 1985, mostró con toda claridad que los obispos del continente no estaban dispuestos a condenar de modo global la teología de la liberación.

Pero hay que ir más allá de estos problemas políticos e institucionales y de las declaraciones de los teólogos. La teología de la liberación no puede separarse de ese movimiento comunitario que Boff reconoció como la formación del pueblo de Dios. Ahora bien, este movimiento comunitario, que puede llevar en sí mismo protestas radicales y parece cerca de acciones revolucionarias, está al mismo tiempo lo más lejos posible de un pensamiento y de una organización política alimentados por un marxismo que, por lo que a él se refiere, habría salido de la filosofía de las Luces europea. Además de que ese movimiento comunitario no se

apoya en los núcleos, centrales, «conscientes y organizados» de la clase obrera, sino en las categorías menos integradas en el proceso de cambio económico, social y político. Las comunidades religiosas de base *(communidades eclesiais de base)* se formaron ante todo en el Nordeste del Brasil, donde monseñor Hélder Câmara, arzobispo de Recife y de Olinda, les dio una orientación muy espiritual. Es después de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín cuando el movimiento se amplía. A principios de los años ochenta existían más de cincuenta mil comunidades de base, a veces controladas por sacerdotes, a veces muy autónomas. Las más cercanas a la Iglesia se reunían entonando cánticos y leyendo la Biblia antes de elaborar unos programas de acción, pasando de este modo, como lo deseaba Boff, de la religión a la política. Los más autónomos se convertían en lugares de discusión de temas a veces muy alejados de las posiciones de la Iglesia, como el aborto y la contracepción, porque estas comunidades estuvieron masivamente animadas por mujeres para quienes las transformaciones de su vida privada no eran disociables de su lucha contra la miseria o el régimen militar. Estas comunidades de base están muy lejos de la inspiración modernista que había dominado los movimientos de acción católica, en particular en los medios estudiantiles. Su orientación es más bien antimodernista y antirracionalista, pero no de la misma manera que los grupos protestantes y umbandistas que se vinculan a un individualismo conservador. Las comunidades resisten a la pobreza y a la dominación sufridas; en su acción, la supervivencia material, la protesta social y la vida espiritual son inseparables. Los vínculos de solidaridad heredados del campo y de la pequeña población son movilizados para organizar actividades religiosas lo mismo que cooperativas de compra y campañas para la mejora del medio urbano.

En Brasil no existe separación nítida entre los dos tipos de comunidades, más religiosas o más secularizadas. Esa división es más visible en Chile, donde las comunidades eclesiales de base están más directamente relacionadas con la Iglesia, mientras que las comunidades «cristianas populares» tienen una conciencia política más fuerte, muy visible en ciertas *poblaciones* de Santiago, como Pudahuel. El desarrollo de estas comunidades es tanto mayor cuanto que los partidos y los sindicatos penetran menos y más difícilmente el mundo de los *pobladores* o *moradores*. Es también la razón por la que los grupos cristianos populares se desarrollan de manera más limitada en Venezuela, donde partidos, sindicatos y grupos de vecinos controlados por los partidos conservan una influencia predominante. En Brasil incluso, cuando se reorganizó la vida política, las comunidades perdieron importancia, porque no podían cumplir durante mucho tiempo funciones tan diferentes como la vida religiosa, la defensa de los intereses locales y las reivindicaciones sociales. Su importancia ha sido mayor como cuestionamiento de la Iglesia institucional que como fuerza de movilización social. La teología de la liberación no

corresponde, por tanto, a una orientación única. Al contrario, sociológicamente no puede ser definida más que por la presencia conexa de dos movimientos que parecen complementarios pero que de hecho están profundamente enfrentados uno a otro. De un lado, grupos políticos, formados sobre todo por intelectuales, directamente influidos por el marxismo y por las formas más radicales de la teoría de la dependencia. Esta acción llevada en la cumbre es modernizadora, denuncia la dependencia y la autocracia como obstáculos al progreso, y quiere asegurar la mejora de las condiciones de vida del pueblo mediante una política de transformaciones económicas y políticas. De otro lado, el movmiento comunitario se apoya en aquellos que están menos integrados en el desarrollo, incluso en Brasil, país que ha conocido el movimiento de desarrollo económico más considerable en el curso de los veinte últimos años. ¿Hay que denunciar la contradicción que opondría racionalismo y antirracionalismo, modernización y comunidad? Cuanto hemos dicho hasta ahora debe desechar esa respuesta superficial. Si América Latina es, a la vez, un continente de crecimiento y de integración y una sociedad de exclusión, los pensamientos y las acciones más cercanas a la realidad ¿no son aquellos que combinan, sin caer en síntesis superficiales, las dos caras opuestas, la cara de luz y la cara de sombra, de un continente donde no puede prevalecer ni la protesta de la desesperación ni la esperanza en el progreso económico?

Esta doble orientación de los grupos cristianos más asociados a los movimientos nacional-populares y nacional-revolucionarios les da, a pesar de su masa en conjunto reducida, una importancia central. Si los intelectuales, en virtud de su papel de vanguardia, han impuesto a menudo al pueblo, en cuyo nombre pretendían hablar, una visión elitista y, sobre todo, estatalista, esos grupos cristianos se han esforzado por asociar el análisis de las situaciones sociales, de la explotación y de la dependencia, con la voluntad de aumentar la capacidad de acción autónoma de los individuos y de los grupos, con la voluntad de hacer de ellos los actores de su propia historia. Mucho tiempo antes de la teología de la liberación nació en Recife, en 1960, en torno a Paulo Freire, y con el apoyo de Miguel Arraes, alcalde de Recife y luego gobernador de Pernambuco, el *Movimento de Cultura Popular,* que lanzó un programa de alfabetización asociado a una toma de conciencia política. La Iglesia brasileña misma lanzó en una escala más amplia el *Movimento de Educação de Base,* que ejerció fuerte influjo entre los estudiantes, algunos de los cuales formaron la Acción Popular *(Ação Popular),* que, desde su formación, en 1962, hizo que su líder, Vinicius Caldeira Brant —que más tarde debía ser torturado por el régimen militar—, fuera elegido al frente de la Unión Nacional de Estudiantes. En estos movimientos volvemos a encontrar la misma influencia del marxismo y del nacionalismo revolucionario, pero se siente en ellos una voluntad cada vez mayor de no someter el hombre al Estado y a los aparatos de control político e

ideológico antiguos y nuevos. Movimientos frágiles, y que tendieron a descomponerse antes incluso de que una parte de sus miembros se lanzara con el AP, cercano del *Partido Comunista do Brasil,* maoísta, a la acción armada contra la dictadura militar. Su papel fue, por tanto, menor, aunque importante: mientras el tercermundismo aceptaba, en nombre de la alienación colonial, la impotencia para liberarse y otorgaba, por tanto, un papel dirigente a nuevas élites apelando a teorías científicas de la historia que justifican todos los autoritarismos, estas corrientes, a la vez muy populistas y muy occidentalizadas, encontraron en la creencia religiosa un principio fuerte de resistencia al poder temporal. Así, son las precursoras de un espíritu democrático que no se reduce a crear, en el orden político, el equivalente de lo que es el mercado en el orden económico. Su acción y sus contradicciones recuerdan también la necesidad permanente, en América Latina, de pensar y de actuar a un tiempo en nombre de una imagen voluntarista de la dependencia y del desarrollo y en nombre de actores sociales apoyados no sólo en su conciencia de la dominación sufrida, sino también en la defensa de su vida comunitaria. Los progresos de la acción democrática, apoyados de modo especial sobre las clases medias en sociedades donde los excluidos siguen siendo numerosos, han tenido como contrapartida la reducción de éstos al estatuto de marginados o de población informal, cosa que parece descartar toda esperanza de que puedan ser los actores de su propia liberación. Es a ellos a quienes se dirigen los movimientos cristianos, lo cual representa una toma de conciencia profunda de los problemas de la acción social en una sociedad dominada por su dualización, y donde el espacio político está controlado, de un lado, por un poder económico cuyo centro es el extranjero, y, de otro, por grupos y comunidades que están menos comprometidos en unas relaciones sociales de producción que excluidos o encerrados en sus mecanismos de reproducción económica y cultural. La teología de la liberación ha ejercido una gran influencia, bajo las formas más diversas, en la amplia zona que separa y une sistemas políticos y realidades sociales, y en particular los partidos y los marginados. En Perú, Gutiérrez inspira mucho a los que apoyan al antiguo alcalde de Lima. A. Barrantes, dirigente de la *Izquierda Unida.* No sólo a través de la influencia de su enseñanza en la Universidad católica, sino, también, porque este intelectual vive y trabaja en una parroquia del barrio popular del Rimac. En Brasil, mientras el cardenal de São Paulo, Evaristo Arns, ha elegido un camino más político porque se apoya en la población de la ciudad más «movilizada», es decir, modernizada del Brasil, la enseñanza de Boff ha encontrado apoyo sólido en el cardenal Lorscheider de Fortaleza, metrópolis del Brasil pobre y que también es presidente de la comisión episcopal brasileña. Igual que en Brasil, más aún qu en el resto de la América Latina, la teología de la liberación asociada al movimiento de las comunidades de base es un movimiento intelectual y social doble, de movilización al mismo tiempo que de rechazo de la inte-

gración. El movimiento de las comunidades de base ha encontrado de este modo un aliado privilegiado en el *Partido dos Trabalhadores,* formado a partir de 1978 sobre todo en São Paulo, y en el que los cristianos de izquierda han jugado, desde el principio, un papel central. Como las comunidades y como la teología de la liberación, ese partido no constituye realmente una fuerza política, pero tampoco es la expresión de una marginalidad social y cultural. Las comunidades de base son, así, un elemento esencial de ese mundo parapolítico o infrapolítico que a veces ejerce una presión sobre el Estado, en ocasiones se vuelve hacia los partidos políticos, y, a veces, por último, se repliega sobre una vida comunitaria amenazada por la miseria o la represión.

Este mundo infrapolítico se ha reforzado durante los períodos de crisis económica y de inestabilidad política, pero la fragilidad de las tentativas para hacer de él la base de un partido político se puso de manifiesto en seguida. La reconstrucción de la vida política y de partidos de masa —bajo formas muy diferentes en Brasil y en Perú— ha llevado al retroceso tanto del *Partido dos Trabalhadores* como de la *Izquierda Unida* peruana y al debilitamiento de las comunidades de base.

La necesidad de luchar contra las dictaduras y contra la represión que ejercían de forma particularmente brutal contra los *pobladores* había mantenido, a menudo, la unidad de acciones que corrían el riesgo de dividirse entre una rama puramente comunitaria y una exclusivamente política. Por eso es principalmente en *Chile* donde, en los años ochenta, pervive una de las últimas dictaduras de América del Sur, donde se ha desarrollado una tercera tendencia, más antirrepresiva que comunitaria o progresista. Ante todo, en torno a la *Vicaría de la Solidaridad,* organizada por el cardenal Silva Henríquez en Santiago, y también en torno a varios sacerdotes, el más conocido de los cuales es el padre Dubois, sacerdote en la *población* La Victoria, expulsado de Chile en 1986. El padre Dubois y otros parecen estar más cerca de los curas obreros franceses que de los teólogos de la liberación. Su acción religiosa y su acción de defensa social, llevadas con el mayor coraje, se asocian fácilmente entre sí frente a una situación de extrema exclusión y represión. La situación es parecida en Bolivia y en Haití, donde el movimiento comunitario ha recibido el apoyo notable de los obispos.

En Chile, la Iglesia no se ha identificado ni con el tema de la liberación popular ni con las comunidades de base politizadas, pero ha aparecido como protectora de los perseguidos y como espacio de libertad. La *Vicaría de la Solidaridad* ha defendido material y jurídicamente a las víctimas de la represión, y la Academia del Humanismo Cristiano ha permitido a intelectuales de oposición proseguir sus actividades profesionales después de haber sido expulsados de la universidad. En resumen, la Iglesia se ha identificado, más que cualquier otra institución chilena, con la lucha por la democracia, entrando en conflicto abierto con el poder político en tiempos del cardenal Silva, buscando luego una solución ne-

gociada a través de las iniciativas del cardenal Fresno y de la firma, a iniciativa suya, de un acuerdo nacional aceptado por los partidos de derecha, de centro y de izquierda. La línea directriz de la Iglesia en Chile, y tal vez en el conjunto del continente, aparece, pues, como la defensa de la sociedad, de los derechos del hombre y de la organización comunitaria contra un poder político que tiende a convertirse en totalitario, bien en nombre de una ideología antipopular represiva, bien en nombre de una ideología revolucionaria.

No olvidemos, sin embargo, que no toda la Iglesia católica está implicada en las comunidades de base y en la teología de la liberación. Para la Iglesia como organización, es esencial preservar su unidad y atenuar los conflictos que se desarrollan en su seno, porque también existe una Iglesia conservadora o reaccionaria, o simplemente alejada de los problemas sociales y políticos. Frente a la teología de la liberación se han desarrollado movimientos como el Opus Dei, el Movimiento de Schoenstatt, pero también comunidades de vida cristiana y un gran número de grupos de sacerdotes y de laicos que, al margen de sus diferencias ideológicas y de su origen social, quieren ante todo reforzar la vida religiosa y eclesial del mundo católico. Estas tendencias, bien contrarrevolucionarias, bien puramente eclesiales, tienen una fuerza particular en las clases medias y ricas que constituyen el medio principal de actividad de muchos sacerdotes. En el transcurso de los últimos años, los encuentros de novios y matrimonios jóvenes, inspirados en una preocupación por la vida privada más habitual en los medios protestantes, han adquirido una importancia creciente. La Iglesia trata de preservar su unidad y su integración buscando, en una combinación de democracia y de modernización, un equilibrio entre, por un lado, unas fuerzas revolucionarias que escapan a su control y, por otro, unos movimientos comunitarios que con la misma facilidad pueden sustraerse a su influencia. Y lo consigue porque, lo mismo que en América Latina no existe separación absoluta entre vida privada y vida pública, tampoco la hay entre religión y política. Esto no significa que deban interpretarse de manera puramente política conductas religiosas, o que no haya que ver en unas conductas políticas otra cosa que una forma indirecta de búsqueda de la salvación; una de las virtudes de la teología de la liberación es haber formulado, tal vez por vez primera, la necesaria búsqueda de formas de combinación entre dos exigencias: el hambre de Dios y el hambre de pan, como dice Boff. Las formas de movilización popular más profundas son las que combinan elementos de modernización económica y de crítica social y política con una defensa comunitaria que apela a los derechos del hombre y a la vida. Una teoría renovada de la moderniad trata de combinar universalismo y particularismos, de integrar, por consiguiente, experiencias comunitarias y religiosas de una parte y demandas de justicia social de otra. Pero puede interpretarse de manera opuesta la evolución de la Iglesia, cosa que hace con profundidad P. Morandé. Para él, cuanto más deja la Iglesia de ser

una institución fuertemente ligada a la oligarquía, y cuanto más se vuelve Iglesia de los pobres y del pueblo, tanto más se aleja de una secularización que ya había comenzado en el siglo XVIII, porque se hace cargo de una cultura y de una sociedad en su especificidad, pero situando ante ella el universalismo de un discurso propiamente religioso. E indica que la Iglesia de Juan Pablo II empieza apenas a salir de su relación privilegiada con Europa occidental y, por tanto, a volverse realmente universal, pero sólo a través de la reflexión sobre los problemas particulares de cada cultura y de cada sociedad. Estas dos reflexiones corresponden a orientaciones a la vez opuestas y complementarias de la Iglesia. De un lado, la domina la preocupación por la identidad y por la comunidad, con sus raíces históricas, pero completada, para no caer en el integrismo, por un universalismo que halla sus fundamentos en la conciencia de la transcendencia divina; de otro, predomina una noción lata de la modernidad, pero que sigue fiel a los principios de la filosofía de las Luces, es decir, a la destrucción de los particularismos tanto como de las esencias por las conquistas de la razón práctica, y a la importancia creciente de las relaciones sociales constituidas en torno a la apropiación social de los cambios técnicos y culturales.

Del primer caso, nos encontramos remitidos a los jesuitas de la época colonial, respetuosos con las realidades sociales y culturales de los pueblos colonizados, aunque les aportaban las luces del Evangelio y apoyaban sobre éste su propio poder; del otro, se vincula a un compromiso más social de la Iglesia, que puede llevar tanto a la formación de partidos o de sindicatos cristianos como a la defensa social de los más desprovistos y de las víctimas de la represión. ¿Cómo no ver que el mundo de los excluidos entiende, de modo más fácil, una visión a la vez culturalista y propiamente religiosa, mientras que el mundo de los ciudadanos espera más de la Iglesia que participa en la lucha por la libertad y por la justicia social cortando los lazos que la asociaban al orden conservador?

Juan Pablo II

El papa Juan Pablo II se inclina hacia la concepción culturalista al mismo tiempo que universalista de la acción religiosa. Aunque su figura es impugnada por los elementos más «progresistas» de la Iglesia, no puede negarse su importancia central. Ninguna personalidad ha reunido en torno a sí muchedumbres comparables. En Perú, en 1984, ocho millones de personas participaron en las grandes concentraciones religiosas que acompañaron la vista del Papa, que concluyó en un *pueblo joven,* en la villa El Salvador, con un discurso improvisado que lanzó como respuesta a las palabras de una pareja de *pobladores.* En México, país oficialmente laico y que conoció fuertes luchas antirreligiosas después de la revolución, la presencia del Papa reveló el poder de la religión popular. En

Chile, en 1987, la llegada del Papa ha sido saludada tanto por la oposición como por el Gobierno.

En las palabras y los gestos del Papa se encuentran yuxtapuestos más que integrados todos los temas que agitan a la Iglesia. Rechaza la separación del mundo religioso y del mundo laico; admite que el pueblo tiene hambre de Dios y hambre de pan; proclama una opción preferencial para los pobres; pero, al mismo tiempo, moviliza la religión popular rechazada en el transcurso de los decenios precedentes dando más importancia a la restauración de la familia y de la comunidad de vecindad que a la lucha contra la dictadura y la represión. Condena la violencia tanto como las injusticias y la desigualdad más de lo que las combate, y ha quedado profundamente sorprendido por las maniobras de los sandinistas contra él en Nicaragua, de las que ha conservado un profundo temor al cisma y una constante desconfianza respecto a la politización de la acción de la Iglesia. Sus temores, y su voluntad de reformar la Iglesia misma, le han llevado a mantener distancias respecto a las demandas propiamente políticas que se han expresado masivamente durante su viaje a Chile en 1987. En resumidas cuentas, la acción del Papa corresponde más a las necesidades defensivas de los pobres que a la voluntad de justicia y de liberación de quienes se sienten menos pobres que oprimidos y reprimidos. La ruptura con el gran movimiento de secularización de los decenios anteriores, aunque apoyada en fuertes demandas culturales, corre el riesgo de impulsar a la Iglesia a retirarse, en parte, de los problemas políticos y sociales en los que había intervenido de forma muy activa, sobre todo en los regímenes autoritarios. Este peligro, muy real, no debe llevarnos, sin embargo, a quedar satisfechos con una conclusión superficial: el Papa arrastraría a la Iglesia a un nuevo conservadurismo. Hay que ver, ante todo, en este nuevo fervor religioso el signo del agotamiento del modernismo. Mucho más allá de una crisis económica, del paro y de la miseria, la América Latina, como casi todo el mundo, vive el declive de la filosofía del progreso y de sus discursos sobre la historia universal. La muerte de los dioses, la dislocación de las comunidades, el triunfo de la tecnología han conducido al reino del interés, de la competencia y del poder. Las inquietudes de Durkheim, de Weber y de Tönnies, casi en los inicios de la gran industrialización, se han convertido en angustias y dudas. De un lado, la excitación del consumo sobre un fondo de anomia y de depresión; de otro, los dioses reemplazados por los príncipes guerreros y sus aparatos de gestión, de represión y de propaganda. América Latina no está ni del lado de las máquinas ni del lado de los guerreros; no se ve arrastrada por ninguna ideología ni fascinada por ningún discurso. Gira, por tanto, sobre sí misma, refluye hacia lo que se llama tanto el pueblo como la comunidad, tanto la tradición como la liberación. En este torbellino se mezclan el refugio que buscan las masas, la vuelta a las religiones populares y el ascenso del culto a la Virgen y los santos, así como la expresión religiosa o moral de la conciencia de

la opresión sufrida. ¿Es una vuelta hacia atrás o una anticipación del futuro? Ambas cosas a la vez; en cualquier caso, es el signo más visible de que nuestra historia no franquea una nueva etapa, de que cambia de dirección. Es precisamente porque lo que parecía nuevo parece usado, porque la modernidad se ha vuelto un concepto arcaico y porque a la confianza en la razón le ha sucedido el miedo a la violencia que lleva en sí el poder de las máquinas y de las armas, por lo que el viento religioso gira en una tormenta que desgaja muchas ideas recibidas, sin abrir perspectivas, sin crear esperanzas en ese continente donde la vida pública nunca se ha separado completamente de la vida privada.

La América Latina no es barrida por un integrismo agresivo porque no se siente colonizada, incluso aunque se sepa dependiente, porque no ha conocido autocracia desde hace mucho tiempo y porque medio siglo de regímenes nacional-populares ha elevado masivamente el nivel de participación social. Pero rompe casi tan completamente como otras partes del mundo con el modernismo y sus modelos políticos, sociales y culturales.

Pérdida de sentido más que movimiento cultural, que saca mayores beneficios del orden establecido que de las fuerzas de cambio, pero que obliga, y eso es lo esencial, a reconocer el agotamiento del modelo racionalizador de los dos últimos siglos. En este sentido más que en cualquier otro, debemos aprender de América Latina. Porque la filosofía de las Luces y del progreso era allí menos conquistadora e incluso más débil que en Europa y en América del Norte, su crisis se ha sentido más profunda, más emocionalmente que en los países «desarrollados».

En un período de dudas políticas y de crisis de las expectativas sociales, el discurso comunitario cristiano, en el que se mezclan la desconfianza hacia la política y la compasión por el sufrimiento de los pobres, tiene una fuerza perturbadora. La esperanza revolucionaria ha desaparecido y las ideas políticas de la teología de la liberación agitan más al clero y a los intelectuales que a las masas rurales o urbanas. En cambio, el espíritu de peregrinación empuja a los caminos y hacia las iglesias a quienes dan testimonio con tanta más fuerza cuanto que se sienten menos defendidos e interpretados. La gran movilización nacional-popular había ampliado inmensamente el espacio político; su reflujo, el ascenso de la pobreza, el poder de las dictaduras han puesto de manifiesto también sus límites y sus debiliddes. Inmensas son las demandas, las aspiraciones, las necesidades que no hallan expresión pública; la alianza del crecimiento económico y de las políticas sociales se ha revelado muy débil para responder a tanta pobreza y exclusión. Y hoy es hacia la vida privada y hacia sus expresiones religiosas y morales hacia donde se vuelven las expectativas. ¿Es diferente de nuestro continente rico ese continente pobre? La diferencia consiste en que el retorno de los ricos a la vida privada está dominado por una mezcla de goce y de angustia, de placer

y de presión, mientras que en los continentes pobres las demandas de los individuos adoptan una fuerza comunitaria. La *pobladora* que se dirigió al Papa en la *población* La Bandera, al sur de Santiago, le habló de sus dificultades para alimentar y criar a sus hijos, de la falta de trabajo, de la injusticia sobre todo. Los problemas sociales seguían estando presentes, de manera obsesiva, pero sin adoptar nunca una forma política.

Podría verse en estas demandas populares el ascenso de un gran movimiento a la vez social y moral, en el que los sufrimientos y las esperanzas personales se unirían a una concepción colectiva del cambio económico y social. Yo veo más bien la expresión de una distancia creciente entre las demandas de una población empobrecida y desesperada y unos modelos sociales y políticos en retroceso o en descomposición. A pesar de la vuelta de las democracias a muchos países, ¡qué lejos está hoy el ideal de la ciudadanía! ¡Qué alta la muralla que separa a los ciudadanos, convertidos con frecuencia en desprovistos, en excluidos que pierden la esperanza y la confianza que los habían conducido en su larga marcha hacia las puertas de la ciudad! Ni integración nacional-popular ni revolución social y política: el continente se resiste con dificultad a su desgarramiento, a la segregación social, a la crisis de las aspiraciones decepcionadas y a las expectativas decrecientes, al repliegue de unos sobre sus ventajas y de otros sobre su moralidad. La fuerza de la nueva religión popular recuerda, más que la presencia de *poblaciones* en torno a los barrios ricos, los límites de la modernización económica y de la integración política. La violencia pudo aparecer como liberadora en la época de la revolución mexicana, o incluso en los tiempos de la revolución boliviana; ahora cada vez es más rechazada en América Latina, salvo para resistir ante una dominación exterior o ante una descomposición interior amenazadora. La Iglesia se ha identificado, ante todo, con la resistencia a la violencia, violencia que también ha alcanzado a muchos sacerdotes o religiosos, como monseñor Romero, asesinado en 1980 por un comando de extrema derecha en su catedral de El Salvador, cuando este moderado se había visto impulsado por el asesinato de curas a tomar posiciones contra la violencia militar. La Iglesia se opone a la violencia como a cualquier forma de ruptura, porque rechaza elegir entre modernización y tradición, entre comunidad y racionalización. Papel que comparte con los regímenes populares que, también ellos, aunque de otro modo, han intentado unir lo que parece opuesto, la integración y la modernización. América Latina ha rechazado cada vez más las ilusiones racionalistas; ha evitado al mismo tiempo casi siempre caer en las tentaciones del voluntarismo y del culturalismo. La creciente influencia de la Iglesia le ha venido de que es el reverso del optimismo político y social de los regímenes nacional-populares: éstos han sido arrastrados por el crecimiento; ella vuelve con la crisis, con la pobreza, con la ausencia de perspectivas y de modelos de acción.

3. Masa y movilidad

Jóvenes ciudadanos y jóvenes excluidos

Todos los rasgos característicos de la acción colectiva en América Latina se observan bajo una forma acentuada en los jóvenes. De suerte que es casi imposible hablar de la juventud como si ésta formara una categoría aparte. Observación trivial porque, en las sociedades modernas, las categorías de edad forman conjuntos muy débiles, muy heterogéneos, poco capaces de generar acciones colectivas. ¿Qué tiene en común en Francia un estudiante y un joven sin empleo, o un jornalero en retiro y un médico o un profesor de edad que prosiguen su actividad profesional y su tipo habitual de vida social? Sin embargo, esta comparación con un país industrializado subraya la particularidad de la situación latinoamericana. Aquí lo que manda no es la pertenencia profesional, sino el puesto ocupado en la *movilidad,* las posibilidades de seguir siendo o de convertirse en ciudadano, o, por el contrario, seguir siendo e incluso convertirse en excluido. Los jóvenes no actúan sólo en tanto que obreros o estudiantes, que entran en unas profesiones que exigen unos conocimientos generales o profesionales, sino más bien, unos y otros, como actores políticos, unos defendiendo o transformando el orden social, otros manifestando, a través de su marginalidad, su violencia o su defensa comunitaria, la presencia de los excluidos a las puertas de la ciudad. La escuela o la universidad son objeto de expectativas extremadamente fuertes de parte de los padres, porque les parece que es la puerta casi única del éxito de sus hijos. Para los emigrantes, la ida a la ciudad tiene por objetivo primero dar mejores oportunidades de educación a los hijos. La América Latina, todavía hoy y a pesar de la calidad con frecuencia deplorable de las escuelas primarias y del mantenimiento masivo del analfabetismo, en particular en Brasil, tiene en la educación una confianza tal vez sin igual en el mundo. Los niños y adolescentes en uniforme escolar dan a los latinoamericanos una imagen ideal de su sociedad, a un tiempo arraigada en la vida familiar y comprometida en un inmenso movimiento hacia el progreso y la mejora de las condiciones de vida. Algunos desconfiarán de esa imagen demasiado bien-pensante; desde luego, sólo corresponde de forma muy parcial a la realidad económica, pero la impulsan convicciones profundas, emocionantes. La confianza en la educación es la expresión de un continente que se siente en movimiento y que, incluso en los peores momentos, no duda del futuro. Se impone una comparación: los estudiantes franceses de 1968 se sentían vivir en una sociedad sólida, dinámica, tan fuerte que se la podía criticar sin límites, imaginarle un futuro distinto al de la producción y el consumo de masas. También en América Latina los que están en la escuela y en la universidad se sienten comprometidos con una sociedad que posee una formidable capacidad de integración y de cambio. De ahí su volun-

tad, apoyada por su familia, de adquirir los signos culturales de pertenencia a la clase media, pero también su sensibilidad cívica y política, que era rara de encontrar en Francia antes del movimiento de mayo de 1968 al que los alumnos de instituto aportaron una participación masiva. Las federaciones de estudiantes fueron en casi todas partes la principal escuela de la vida política.

Pero si la escuela es el principal canal de movilidad ascendente —y no de selección social como en Europa—, es porque la selección se opera, sobre todo, al entrar en el sistema escolar y en el curso de todos los primeros años, lo cual crea una categoría de iletrados que desborda con mucho los límites del analfabetismo. Estos jóvenes, en su mayoría rurales pero también urbanos, siguen estando a veces en su medio de origen, al margen de las grandes corrientes de cambios, pero con frecuencia sufren en toda su violencia los efectos de la marginalización y de la exclusión. *Niños vagos* obligados a ganarse la vida, a veces mediante el robo, como los célebres chiquillos de Bogotá, o simplemente educados en una familia sin padre o gracias a la ayuda de un *compadre,* han adquirido una visibilidad creciente a medida que se reforzaban las desigualdades y las distancias sociales. Cuanto más se han reunido los pobres en las *poblaciones* o en ciudades al margen de los grandes centros urbanos, y, sobre todo, cuanto más se abate sobre ellos la represión policial, tanto más activos colectivamente se vuelven los jóvenes en esos barrios o esas chabolas donde los hombres reducidos al paro abandonan a menudo su papel familiar y donde son los muy jóvenes y las mujeres los que se esfuerzan por poner en funcionamiento las redes de ayuda mutua sin las que resulta imposible la supervivencia, por enfrentarse a las fuerzas de represión y por buscar en el centro de las ciudades, mediante pequeños trabajos, el servicio doméstico, la prostitución o el robo, los recursos indispensables. E. Valenzuela ha trazado la tipología de las conductas de los jóvenes excluidos, divididos entre la retirada y la agresividad vivida como transgresión de la exclusión y del interdicto.

El rasgo más común a todos los jóvenes, estén integrados o estén excluidos, es que la afirmación de su identidad se opera en la familia, que de este modo se convierte en un lugar de participación y de conflicto a un tiempo. Los jóvenes negocian con su familia mucho más de lo que rompen con ella, o más de que transmitan únicamente los valores de la generación anterior. Materialmente, muchos jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo, y, cuando trabajan, su aportación contribuye a la supervivencia y a la estabilidad de la familia. ¿Cómo olvidar que la vida personal en América Latina está dominada por la figura de la madre, siempre más fuerte que la del padre? La madre protege y domina, pero también empuja a sus hijos a estudiar y a conquistar una vida mejor que la suya. De ahí, tanto en los conformistas como en aquellos que han roto con su familia, la fuerza emocional extrema que domina a los jóvenes. La juventud en América Latina no es la etapa de la libertad entre el con-

trol familiar y el control profesional; tal separación entre vida privada y vida pública no existe. La juventud es, a la vez, infancia y vida adulta, dependencia prolongada y responsabilidad precoz. No hay, menos todavía para los jóvenes que para los adultos, frontera infranqueable entre esos dos mundos. De los barrios más pobres salen también millares de niños que llevan un uniforme cuya compra ha representado sacrificios extremos para su familia. Y, a su vez, la escuela asegura a menudo a los niños una alimentación sin la que las tasas de mortandad crecientes habrían acompañado la elevación del paro y de la miseria. Continente de la dualización y de los contrastes sociales, América Latina no está hecha de dos sociedades, la de los ricos y la de los pobres, una de las cuales viviría encima de la otra sin comunicación. Semejante imagen corresponde mejor a la Europa industrial del siglo XIX, en la que podía decirse que «la clase obrera acampa en la nación». Las metrópolis de América Latina son más semejantes al Londres del siglo XVIII o incluso al París de los *Miserables* de Víctor Hugo, en los que inmensas distancias sociales no excluían ni las mezclas ni la movilidad.

Participación o incluso hiperparticipación y exclusión se mezclan a veces de manera extremada, por ejemplo en las Antillas de lengua inglesa, y en particular en *Trinidad* y *Tobago*. En esta región, a la que el petróleo y el turismo han aportado grandes cantidades de dinero pero también una extrema desorganización social, la droga se consume de manera masiva y a partir de una jovencísima edad, la prostitución femenina y masculina está muy difundida y la imitación de las modas americanas aparece en todas partes, a pesar de la diferencia de climas. Pero este ejemplo muestra una vez más que, en esta parte del continente, entramos en una sociedad colonial o ex colonial, y que se aparta de los rasgos propios de las sociedades dependientes de la América Latina propiamente dicha. En la medida en que progresa la industrialización y en que la marginalidad se vuelve menos un hecho urbano que un hecho profesional asociado al paro, las fronteras sociales se vuelven más difíciles de franquear y la juventud se reparte de manera más rígida entre los que realizan el aprendizaje de la participación social y los que ya son lanzados a la exclusión. Las posibilidades de un joven *poblador* de Santiago, y más todavía del Bogotá o la Lima de los años ochenta, de encontrar un empleo «formal», regular y garantizado por un contrato y un mínimo de disposiciones legales, están con frecuencia por debajo del 20 por 100. Ya no se trata de marginalidad, si ese término sigue indicando una situación minoritaria transitoria, sino de exclusión y de encierro en un mundo donde la descomposición social está mezclada al reforzamiento de los grupos primarios, de la familia y del vecindario, como la violencia colectiva lo está a la desenvoltura individual. El retroceso relativo de las clases medias debilita la confianza en la educación; las barreras sociales se refuerzan y la función de reproducción social de la escuela vuelve a adquirir importancia, mientras se debilita su papel de «movilización».

Debilidad de la opinión pública

El aislamiento rural, el analfabetismo, la marginalidad urbana, la fuerza de las redes de relaciones personales y familiares limitan la participación en la vida pública. A principios de los años ochenta, en Brasil lee un diario menos del 4 por 100 de la población. En Chile, donde el nivel medio de educación es claramente más elevado, esa proporción no pasa del doble. El periódico y el libro apenas circulan fuera de las clases medias y, cuando alcanzan a los medios populares urbanos, es cargándose de contenidos privados más que públicos. Los diarios de mayor circulación popular multiplican los relatos y las fotos sensacionalistas sobre crímenes. Bajo los regímenes autoritarios, la influencia de los *media* disminuye más todavía, al no tener el público confianza en las noticias difundidas y por desconfiar de todas las formas de propaganda, como ha demostrado una encuesta brasileña.

Por regla general, la prensa ha ido por detrás de la evolución política, defendiendo a menudo los intereses de la oligarquía, en Perú y en Colombia en particular, pero también en Argentina y en Chile. Los mejores periódicos han estado destinados, con frecuencia, a una clase dirigente lo bastante poderosa y lo bastante segura de ella misma y de su control de la vida política para interesarse por la información, como demuestra el ejemplo de *O Estado,* de São Paulo, fundado por Julio Mesquita en 1890. Los grandes movimientos nacional-populares raramente han dispuesto de una prensa poderosa. En el Chile de la Unidad Popular, *Clarín* y *Puro Chile,* por su violencia, contribuyeron más a reducir la lucha política a la eliminación de los *momios,* de los burgueses, que a desarrollar la conciencia política.

En general, la prensa se ha difundido a partir de centros políticos bien de derecha, bien de izquierda, pero que, tanto unos como otros, han tratado de imponer a un público amplio cierta imagen del pueblo. Para la izquierda, particularmente en Chile, el modelo impuesto fue marxista, obrerista y didáctico. Se trataba de mostrar con ejemplos concretos cómo actúan las leyes generales del sistema capitalista. A este modelo que G. Sunkel llama «racional iluminista» se opone aquel al que denomina «simbólico dramático», muy cercano a la tradición religiosa española y a lo que se denomina cultura popular en un sentido etnográfico. Esta imagen es concreta, emocionante, sensacionalista; conviene a una prensa oligárquica que define al pueblo por su especificidad, su esencia o sus privaciones y no por su acción y su capacidad de cambiar el orden social. Estas dos imágenes opuestas tienen un rasgo común: tratan al público como una masa, sin iniciativa y sin autonomía. De suerte que por ambos lados aparece como complemento la inquietante imagen de la violencia, de la desorganización y del crimen.

Los estudios sociológicos han reforzado con frecuencia esa ruptura entre los emisores y los receptores. A. Mattelart (cf. Bibl., II, 1, *La*

Comunicación...) en particular ha dirigido un conjunto de estudios de inspiración althusseriana, haciendo de la prensa una parte del aparato de dominación ideológica al servicio de la clase dirigente y del imperialismo extranjero. Otros, de manera más realista, han visto en la gran prensa el sustituto de los partidos políticos que la derecha no ha creado en la mayoría de los países y en particular en Perú, Argentina y México. Todo esto suponía —de manera implícita más que explícita— que existiese, frente a esta clase o a este partido dirigente, un partido y una clase popular reducidos al silencio. Esa imagen simplificadora e incluso arbitraria sólo ha sido cuestionada cuando por fin han empezado a preguntarse sobre la comunicación cultural y política y, por tanto, a dejar de separar los dos cabos de la cadena. Es lo que hace ese estudio chileno pionero que acabamos de citar.

La radio, politizada o no, ha empezado a cubrir esa distancia entre las imágenes del pueblo y las expectativas populares. Pero es sobre todo la televisión la que lo consigue y la que ejerce un atractivo excepcional. La tasa de equipamiento de las grandes ciudades latinoamericanas es más elevada que las de Europa con nivel de renta comparable. En São Paulo la televisión es omnipresente y los economistas han observado que los hogares más pobres se preocupaban de adquirir la televisión antes incluso que de asegurar su alimentación. En los barrios de chabolas, sin equipamiento eléctrico, se utilizan pilas o incluso se roba la corriente de las líneas próximas. El éxito de la televisión ha implicado el declive rápido de todas las imágenes del pueblo, tanto la imagen folclórica cara a la aristocracia como la representación obrerista de la izquierda o los discursos populistas.

¿No se trata de un nuevo populismo, es decir, de un mecanismo de participación acelerada pero dependiente, incluso manipulada? No faltan intelectuales que desprecian, tanto aquí como en otras partes, la cultura de masas. Pero la realidad está lejos de estos prejuicios. Las masas urbanas de América Latina están ampliamente en situación de anomia, en el sentido en que R. Merton emplea esa palabra: se adhieren a valores de modernidad y de consumo pero no respetan los medios considerados legítimos para acceder a esos valores y a los bienes que los representan. La televisión tiende una primera red de relaciones entre unas expresiones culturales y una realidad social masiva de la que los antiguos productores culturales estaban muy alejados. Van mucho más allá de la prensa «alternativa», que sólo tiene importancia durante las dictaduras y para denunciar los silencios y las mentiras de la propaganda oficial. La televisión, frente a los reproches que se le hacen, es un instrumento de retorno a la realidad social, a partir de demandas demasido fuertes y demasiado conformistas, orientadas hacia la participación. Situación inversa de la de los viejos países europeos donde los progresos sociales están tan profundamente trazados y son tan difíciles de modificar que la televisión puede aparecer, sobre todo, como una apertura hacia la imagina-

ción y la anticipación. Por el contrario, en América Latina esboza senderos en un espacio cruzado por unas aspiraciones ilimitadas y socialmente indeterminadas.

Frente a esta acción nueva de los *mass media,* la actividad política sigue siendo sorprendentemente tradicional. Incluso cuando es democrática, es elitista y se apoya en una clase política restringida, alejada de los medios populares. No son ni la vida parlamentaria ni la prensa lo que alcanza a la mayoría de la población, sino las intervenciones del Estado populista que crea «centros de madres» y todo tipo de organismos de asistencia y de participación social. De ahí el tono moral y sentimental de la vida política, la apelación a los grandes principios que rayan en la evocación de casos personales dolorosos, y la debilidad del contenido ideológico de la política de masas, que contrasta con la extrema ideologización de la clase media instruida y sobre todo de los estudiantes universitarios. Finalmente, la estrechez del espacio público se debe a que se identifica casi por entero con las mayores metrópolis, no teniendo las ciudades de provincia, ni siquiera las importantes, más que una prensa reducida y localista.

Todo demuestra, por tanto, un fuerte contraste entre una política de masas centrada en la acción del Estado, y que a menudo implica una fuerte participación electoral y una opinión pública reducida, poco informada, y que durante mucho tiempo se limitó al mundo de los intelectuales y de las profesiones liberales, antes que el progreso de los sindicatos y de las asociaciones patronales empezase a organizar sólidamente el espacio público.

2.—De las demandas sociales a la acción política

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

1. Las tres dimensiones de la acción colectiva

El sueño de las sociedades occidentales modernas ha sido, durante mucho tiempo, considerarse ellas mismas como organizadas en torno a la racionalidad, hasta el punto de que sus debates internos, e incluso sus luchas de clases, parecían ordenados por la defensa racional de intereses individuales o colectivos. Estas sociedades estarían movidas por la economía, la búsqueda de la eficacia y de la riqueza, la lucha por el control del poder económico. Pero es excepcional que la modernidad se produzca ella misma, se imponga por su propia fuerza, como la Razón triunfante del Error o el Progreso liberando tradiciones en el imaginario de los siglos XVIII y XIX europeos. La modernización supone que queden rotos los obstáculos a la modernidad, los privilegios, las formas tradicionales de poder, pero también la dominación extranjera y la separación, en las sociedades dominadas, de enclaves modernizados y de sectores marginalizados. Por tanto, hay que preguntarse por los actores de la modernización. Desde el principio de este libro hemos visto que el personaje central del desarrollo, es decir, de la modernización, no puede ser más que el *Estado,* dado que los actores definidos en términos económicos y profesionales no pueden crear el sistema en cuyo seno son definidos. Desde finales del siglo XIX, el tema del Estado y aquel que directamente le corresponde, el de la nación, han adquirido una importancia creciente en la historia social y política, hasta el punto de que ésta aparece como do-

minada, de un lado, por los movimientos de clase y, de otro, por los movimientos de liberación nacional; en otros términos, de una parte, por la modernización económica y, de otra, por la transformación del Estado. La misma Europa, herida por dos guerras mundiales, por una gran crisis económica, por los fascismos y el estalinismo, no cree ya posible reducir la vida social al funcionamiento de un sistema social que sólo esté definido por su racionalidad, por su diferenciación interna, por su capacidad de someter todo a las reglas de la razón instrumental. En el siglo XX, la nación es, en el planeta entero, el actor colectivo más potente, aquel que entraña los mayores entusiasmos y el que puede imponer los mayores sacrificios. ¿No es el choque de rechazo de la dominación ejercida por los países occidentales que se identificaban con la Razón, pero que también dominaban el resto del mundo por las iniciativas de sus comerciantes, la fuerza de sus armas y la influencia de sus enseñantes y de sus misioneros? Las naciones dominadas han rechazado una concepción de la modernidad que amenazaba su identidad y, frente a minorías que elegían el extranjero como símbolo de la modernidad, se han levantado en nombre de la independencia nacional, de la cultura tradicional, de la defensa de la comunidad local. *La clase y la nación no son actores colectivos del mismo tipo. La primera se refiere al funcionamiento interno de un sistema socioeconómico; la segunda es el actor principal del cambio histórico,* del paso de un tipo de sociedad a otro, porque ese paso pone en cuestión la identidad colectiva de un país, amenazando con romper sus tradiciones culturales tanto como con suprimir su independencia política. Es en el Imperio austro-húngaro, allí donde una sociedad industrial perfectamente formada, sobre todo en Austria y en Bohemia, suscitaba la formación de conflictos de clase, pero también en que la dominación germánica sobre las nacionalidades de la Europa danubiana producía conflictos nacionales, donde, por primera vez, se buscó una conciliación doctrinal entre lucha de clases y lucha por la identidad y la independencia políticas y culturales. Solución más teórica que real. Fue el leninismo el que aportó rápidamente la respuesta que debía transformar el mundo. Mientras el marxismo era, ante todo, el análisis de las relaciones y conflictos de clase en las sociedades capitalistas e industriales, el marxismo-leninismo trató de unificar las luchas anticapitalistas y las luchas antiimperialistas, se apoyó en un proletariado todavía débil y movilizó una nación dominada por la penetración extranjera. El marxismo-leninismo ha constituido durante todo el siglo XX la fuerza más potente de transformación política y social. A su lado, los nacionalismos han dado, por el contrario, a la lucha nacional un predominio tan completo como el que los países occidentales daban a los grupos de interés y a las luchas de clases.

Ante todo, uno se siente tentado de buscar en América Latina la huella de estos tres modelos principales de acción colectiva: el predominio de los conflictos sociales internos, el nacionalismo anticolonial y la

acción revolucionaria marxista-leninista. En el cono sur, en Argentina, en Uruguay y en Chile, parecía que, a menudo, las luchas sociales internas iban por delante de las luchas contra la dependencia externa. En América central, y sobre todo en el Caribe, por el contrario, la situación de dependencia está cerca, a menudo, de una situación colonial y las luchas contra las dictaduras se han encontrado asociadas a luchas antiimperialistas. Fue el modelo marxista el que tuvo menos impacto sobre el continente, al menos en el plano de las fuerzas que dominaron la vida política, incluso aunque haya estado constantemente presente en los movimientos de guerrillas, urbanas o rurales, que han agitado el continente desde la revolución cubana que apeló a ese modelo marxista-leninista.

Pero, al margen de la influencia de tal o cual modelo de acción colectiva, el continente latinoamericano ha producido una forma específica de acción política y social que combina luchas o reivindicaciones sociales de un lado y protestas o luchas antiimperialistas de otro. no las ha asociado, como en la zona de influencia del marxismo-leninismo, en torno al papel central de un partido revolucionario que crea, tras su victoria, un Estado posrevolucionario, porque sólo los ha combinado manteniendo cada cual su autonomía, gracias a la aparición de un tercer objetivo político que sirve de intermediario entre los dos primeros. Los latinoamericanos han combinado *luchas de clases* y *luchas nacionales* asociándolas a la construcción de la *integración* social, cultural y política de cada país. El tema nacional abarca, en efecto, dos tipos de objetivos completamente diferentes: de un lado, la acción anticolonial o antiimperialista, dirigida contra la metrópoli extranjera y contra el Estado, los grupos sociales y las ideologías que sirven a sus intereses; de otro, la apelación a la formación o al fortalecimiento de un Estado nacional y, más simplemente, de la integración del espacio nacional, gracias a la vez al desarrollo económico y a la intervención política y administrativa del Estado. El tema de la integración es una respuesta a la dualización general de las sociedades latinoamericanas, a su segmentación y a su heterogeneidad estructural. Este tema es tanto más fuerte cuanto que la distancia entre la costa y el interior, entre la *costa* y la *sierra,* es mayor, como ocurre en el caso del Perú o en Ecuador. De suerte que las luchas sociales y políticas se sitúan la mayoría de las veces simultáneamente en tres planos: el de las luchas económicas y sociales, que se refieren más o menos directamente a luchas de clases; el del combate por la independencia nacional contra una dominación extranjera; el de la integración nacional y de la formación del Estado nacional, contra la segmentación de la economía y el poder de las oligarquías. A veces, estas tres dimensiones de la acción se hallan fuertemente integradas unas en otras. Eso fue lo que ocurrió, sobre todo, en *México,* tal como lo modeló Cárdenas en vísperas de la segunda guerra mundial: una política al servicio de los campesinos y de los obreros se apoyó en un nacionalismo económico y político dirigido contra la dominación americana y hacia una voluntad de integración de un país di-

vidido no sólo en regiones muy diferentes unas de otras, sino, principalmente, desde la revolución, en zonas de influencia de caudillos militares convertidos en grandes propietarios. En otros países donde el Estado es más débil, como Colombia, Venezuela y Perú, ese modelo de movilización tiende a descomponerse de forma constante: luchas sociales, luchas de integración nacional y luchas antiimperialistas tienden a separarse y, en un grado más avanzado de descomposición, el modelo occidental, el modelo nacionalista anticolonial y el modelo marxista-leninista tienden a sustituir el modelo propio de la América Latina, lo cual agrava la descomposición de la escena nacional. Ciertos países han conocido una integración parcial de estas diversas orientaciones de la acción: es el caso de Brasil y de Argentina. En Chile, durante la Unidad Popular (1970-1973), la multidimensionalidad de la acción colectiva fue un factor de debilidad del Gobierno de Salvador Allende. La mayoría del Partido Socialista —el de Allende mismo— daba prioridad, desde sus congresos de Chillán y de La Serena, a la lucha antiimperialista, y el secretario general de este partido, Carlos Altamirano, defendía posiciones antiimperialistas radicales que le pusieron frente a Allende. La acción de clase, sobre todo a partir de la primavera de 1972, adoptó formas basistas, sobre todo mediante ocupaciones de fábricas y la formación de «cordones industriales» que paulatinamente fueron escapando al control del Gobierno de la Unidad Popular. La tendencia más moderada, cuyo objetivo principal era la apertura del espacio político, social y nacional, fue desbordada de forma progresiva. El golpe de Estado militar de 1973 derribó un régimen que conservaba un apoyo popular importante, pero que no sólo se veía ahogado por la crisis económica que había desencadenado, sino que había perdido, además, casi toda su capacidad de obrar, por hallarse desgarrado por las luchas internas.

Esta tridimensionalidad de la acción política y social parece, pues, ante todo, un factor de debilidad, que podría explicar la impotencia de los movimientos sociales y políticos para organizarse fuerte y duraderamente y para conquistar el poder. Pero, a la inversa, podemos pensar que es ella la que permite, con bastante frecuencia, la conjunción de fuerzas de oposición capaces de transformar profundamente, a veces revolucionariamente, la vida nacional. Con Madero, la revolución mexicana fue una acción dirigida hacia una mayor integración nacional, pero se vio considerablemente reforzada por la acción de movimientos campesinos, de los que el zapatismo fue el principal componente, y por la fuerza de un antiimperialismo exacerbado por la intervención directa de los Estados Unidos en el territorio mexicano. De igual modo, la revolución boliviana de 1952 sólo fue posible gracias a la combinación de un programa de integración nacional, el de las clases medias modernizadoras del MNR, de luchas obreras llevadas a menudo por partidos que apelaban directamente a la lucha de clases y por un movimiento antiimperialista dirigido en particular contra los propietarios de las minas de estaño.

Puede incluso afirmarse que en América Latina los movimientos unidimensionales nunca han logrado una gran eficacia. Los partidos de clase, socialista y comunista, apenas han prosperado, al menos fuera de Chile. Los movimientos de liberación nacional no han jugado un papel dominante más que en Nicaragua, dado que, en Cuba, Fidel Castro eligió dar prioridad a la acción de la guerrilla sobre la movilización de las masas urbanas. Ningún principio de análisis tiene tal vez una importancia más central que éste: la acción colectiva sólo es eficaz en América Latina *cuando combina varias dimensiones,* cuando tiene objetivos de clase al mismo tiempo que antiimperialistas y de integración nacional. Aquello que constituye la debilidad de los movimientos políticos es también lo que forma su fuerza; ahí está la especificidad de la América Latina.

La discusión más importante de la historia de las ideas en América Latina es la que en Perú opuso a Haya de la Torre con Mariátegui. Pero lo más interesante es que ambos adversarios aceptaban asociar en su pensamiento y en su acción lucha de clases y defensa de la nación, y reconocían la pluridimensionalidad de la acción política, cosa que pocos pensadores europeos habían aceptado. Mariátegui daba prioridad a la lucha de clases, pero consideraba necesario pasar por una revolución democrática y nacional para abrir la vía al socialismo. Si en el plano intelectual los análisis de Mariátegui son superiores, Haya de la Torre ha ejercido una influencia política más central, porque ha insistido en la importancia de los factores internos, nacionales, de movilización. Pero si su debate tuvo tanta resonancia en el conjunto del continente fue porque la mayoría de los ideólogos y dirigentes políticos de todos los países también estaban espontáneamente convencidos de la necesidad de combinar luchas sociales y luchas nacionales, y estaban buscando una solución diferente de la del marxismo-leninismo, porque los países latinoamericanos no otorgan al Estado ni a la lucha por su conquista la misma importancia que los países cuya experiencia histórica se ha organizado durante siglos en torno a un Estado autocrático. No parece, por tanto, artificial situar a la América Latina en el centro del mundo. No porque haya producido modelos políticos o sociales cuya influencia se haya difundido sobre el conjunto del planeta. El centro en que se encuentra América Latina es también un entre-dos, o mejor dicho, en entre-tres, situado entre el modelo occidental que da prioridad a las luchas sociales internas, el modelo comunista y el modelo nacionalista anticolonial. La América Latina, y más ampliamente el conjunto de los movimientos y países que se acercan a su modelo de acción colectiva, constituye una zona débil que siempre parece a punto de estallar. Pero hay que reconocer que, en el transcurso de medio siglo, ese estallido, siempre posible, a menudo amenazador, sólo raras veces se ha realizado. No existe todavía país latinoamericano que dé prioridad absoluta a las luchas sociales internas; no existe en América Latina nacionalismo triunfante que reclame la defensa o la restauración de una homogeneidad cultural, como lo ha-

cen antiguos países colonizados y los países que se han integrado al espacio marxista-leninista. Cuba y Nicaragua, por importante que sea su papel, no son o ya no están reconocidos como una vanguardia continental por la grandísima mayoría de las fuerzas políticas y sociales que actúan en los demás países. Pese a sus evidentes debilidades, ese modelo de movilización colectiva ha podido mantenerse. Ya veremos que define un tipo particular de relaciones entre el Estado y los actores sociales.

2. La desarticulación

Entiendo por desarticulación la ausencia de correspondencia directa entre los niveles económico, político e ideológico de la acción colectiva. Este nuevo tema parece en contradicción con el de la tridimensionalidad de la acción, puesto que ésta implica una ausencia de separación entre la sociedad civil y el Estado, entre las reivindicaciones sociales y los movimientos de liberación nacional. En realidad, estos dos temas son complementarios. Es, en efecto, la amalgama de diversas dimensiones de la acción colectiva lo que vuelve imposible la correspondencia directa entre las conductas económicas, políticas e ideológicas. Si esa correspondencia se ha afirmado con tanta fuerza en Europa ha sido porque, en esta parte del mundo, se afirmaba con una fuerza igual la existencia de un principio único de orientación de la acción colectiva: la defensa de los intereses económicos y la lucha contra un adversario definido en términos igualmente económicos. De ahí, la imagen de la sociedad como una casa cuyos cimientos son económicos, los pisos políticos o institucionales y el techo ideológico. Por el contrario, a partir del momento en que se renuncia a la existencia de un principio central de orientación de las conductas es inevitable que, por ejemplo, unas conductas de clase aparezcan como predominantes en el orden económico, mientras que la voluntad de integración nacional domina las conductas políticas y mientras el antiimperialismo se expresa con una fuerza particular en el orden ideológico. Hay otras combinaciones que son naturalmente posibles. Aquí, la América Latina aparece mucho más cerca de los Estados Unidos que de Europa. En Estados Unidos, los actores sociales tampoco se definen únicamente por su situación económica, sino más bien por su puesto en un proceso de integración social y cultural, tan importante en un país que se ha formado a partir de una inmigración masiva y que también se apoya en la creación de instituciones nacidas durante una guerra de liberación nacional. Ni en Estados Unidos ni en América Latina existen partidos políticos de clase, y la ideología que afirma la correspondencia directa de los intereses económicos y de la acción política nunca ha conseguido una gran influencia en este país. Como en América Latina, en Estados Unidos existen desfases constantes e importantes entre los diferentes niveles de la acción social y política.

La hiperautonomía de los actores políticos

En los países democráticos, los actores políticos aparecen como intermediarios entre fuerzas sociales constituidas de modo independiente de ellos y un Estado que depende de la elección. De este modo, el Estado aparece vinculado a intereses sociales, de una forma o de otra, y los actores políticos disponen de una autonomía limitada. Particularmente en los países socialdemócratas, donde los partidos aparecen como la expresión política, bien del movimiento obrero, bien de la burguesía. En Francia, la autonomía de los partidos políticos siempre ha sido mayor, y la opinión pública ha respondido con un antiparlamentarismo cargado de desconfianza hacia los políticos. En América Latina, la autonomía de los actores políticos es mayor todavía que en Francia. Se explica, ante todo, por la disociación de la vida política y de un poder económico que está, en buena medida, en manos extranjeras, que depende del estado del mercado mundial, de un lado, y de las decisiones de gobiernos extranjeros y de empresas transnacionales, de otro. Esta dependencia económica exterior podría entrañar una dependencia política y cultural paralela. Pero si ésta es la situación de las sociedades colonizadas, no es la de los países solamente dependientes. Éstos, por el contrario, combinan una fuerte dependencia económica con una independencia política real desde las guerras de independencia. El otro factor de autonomía de los actores políticos es la debilidad de organización de los actores sociales, ya largamente analizada. Así, resulta que los actores políticos ocupan un vasto espacio que, en otros países, estaría ocupado, de un lado, por una clase dirigente nacional y, de otro, por fuerzas sindicales o de otro tipo, representando los intereses populares. Pero este *hiperdesarrollo del espacio político* no aprovecha a todas las formas de acción política. De una parte, la debilidad de los actores sociales representables vuelve difícil la constitución de grandes partidos de masa y la importancia de sectores marginados o excluidos agrava la debilidad de los partidos que a duras penas logran ser algo más que máquinas al servicio de un líder o de un grupo de elegidos. Por otro lado, en América Latina el Estado es débil, ante todo porque muchas de las principales decisiones económicas están tomadas fuera de su control. De suerte que el hiperdesarrollo político favorece el papel de los líderes o de las personalidades más que el de las organizaciones, y, al mismo tiempo, entraña cierta indiferenciación entre el *Estado* y el *sistema político*. A un latinoamericano le resulta muy difícil comprender la separación de estos dos niveles de la vida política; la noción de Estado a la francesa está particularmente alejada de la experiencia de los argentinos o de los colombianos. Sólo los brasileños y, en cierta media, los mexicanos conciben el Estado como soberano y como animador principal del desarrollo económico y de las transformaciones sociales. Los políticos penetran, casi en todas partes, en el terreno que es el del Estado y en el terreno que, por lo demás, pertenece a

organizaciones sociales autónomas, sindicatos o asociaciones. El papel de estos políticos es tanto mayor cuanto que los partidos políticos son más multiclasistas, y, sobre todo, cuanto que la movilización política es más limitada y está más controlada por los dirigentes, que a menudo son a un mismo tiempo grandes notables locales, jefes de partido y los amos del Estado, sin merecer con frecuencia el nombre de hombres de Estado. La hiperpolitización de la América Latina se opone directamente a la debilidad de la clase política del Japón o incluso de los Estados Unidos, país donde, por el contrario, existen, de un lado, una fuerte capacidad estatal y, de otro, una fuerte capacidad de organización autónoma de los actores sociales, en particular del patronato industrial y financiero y, en medida más débil, de los sindicatos de asalariados. Esta desarticulación del sistema político en relación a la organización económica se observa en todos los tipos de sistema político, desde el sistema bipartidista colombiano, en el que los dos grandes partidos, conservador y liberal, no corresponden a categorías sociales o profesionales netamente diferenciadas, hasta los regímenes muy personalizados, como fue el de Velasco Ibarra en Ecuador, y hasta el sistema mexicano del partido dominante. La excepción más notable es el sistema político chileno. Particularmente durante la Unidad Popular (1970-1973), los partidos o coaliciones de partidos aparecieron fuertemente identificados con categorías sociales, sobre todo después del reflujo del populismo demócrata-cristiano, la derrota de R. Tomic, y la unificación política de la derecha en el Partido Nacional. Pero la debilidad del sistema político chileno, que no fue capaz de gestionar la crisis económica y social, muestra perfectamente que la desarticulación es más potente sobre el conjunto del continente que las tentativas para crear una política representativa. Pues ésa es la contrapartida de la hiperpolitización latinoamericana: los dirigentes y las fuerzas políticas, que poseen tanta influencia, no tienen más que una *representatividad* limitada. De ahí, el personalismo de la vida política, los cambios de orientación política de ciertos líderes y la ausencia de movilización política de la población. Sobre todo de la parte que está empleada en el sector informal, porque, atomizada y frágil, es más sensible a relaciones de tipo clientelista que a ideologías o a programas políticos.

En resumen, en América Latina la política se define más en términos de *participación* —o de no participación— que de *representación*. Los dirigentes políticos quieren aparecer bien como aquellos que han ampliado el acceso a la influencia y al consumo políticos, bien, por el contrario, como aquellos que han reaccionado contra la desmembración del Estado por los intereses particulares. Raramente se presentan como los representantes de una categoría o de una clase social y casi siempre como los defensores de la nación, por tanto de un programa de integración y de participación todavía más político que social. La tradición europea ha identificado tan fuertemente democracia y representatividad que siente repugnancia a llamar democrática a una política de participación. Con

motivo, porque una de las debilidades de la política de participación es no poder contar con el apoyo de la mayoría cuando su capacidad distributiva disminuye. Los dirigentes políticos son plebiscitados cuando tienen las manos llenas; rechazados, cuando tienen las manos vacías.

La oposición que ha dominado la vida política del continente, sobre todo durante los treinta últimos años, es la de los regímenes de participación ampliada, que en América Latina se llaman democracias, y regímenes que restringen la participación política, pero también económica, de las masas populares. Oposición muy diferente de la oposición de las democracias y de los fascismos en los años veinte, treinta y cuarenta en Europa. Cosa que subraya el peligro que existe de transportar a América Latina categorías de análisis que corresponden a otras experiencias históricas.

El partido intelectual

La autonomía de la producción ideológica en relación a los intereses económicos y a las fuerzas políticas es más visible aún que la de los actores políticos en relación a los grupos sociales de los que no son sino muy parcial y muy indirectamente los representantes. Las ideas, dice O. Paz (cf. Bibl., I, 1), cumplen una función de máscaras; de este modo se transforman en ideologías, en el mal sentido del término, es decir, en velos que interceptan y desfiguran la percepción de la realidad. La ideología convierte las ideas en pantalla; ocultan los proyectos y al mismo tiempo impiden ver lo real. Tan grande es el desfase entre representaciones y realidades, que la noción de ideología está incluso mal adaptada, porque la ideología es la representación de una situación social por uno de los actores en función de sus intereses propios, lo cual supone una relación de representación entre el ideólogo y una categoría social. Antes que de ideología, conviene hablar aquí de *doctrina:* los intelectuales latinoamericanos tienen una gran capacidad para crear sistemas interpretativos que no están al servicio de ningún actor social específico. A Hirschman (en D. Collier; cf. Bibl., I, 1) ha subrayado de manera crítica el papel de los intelectuales. En su opinión, contribuyen a impedir la formación de actores de clase y de relaciones conflictivas o negociadas entre actores sociales. Los intelectuales pasan de un tema ideológico a otro con la mayor facilidad, de la modernización a la dependencia, del autoritarismo a la democracia, sin permitir que las ideas se transformen en prácticas y en formas de acción. Hirschman observa incluso que la democracia se ha debilitado más allí donde los intelectuales han ejercido un papel más autónomo, en Brasil, en Argentina y en Chile más que en Colombia y en Venezuela, donde los actores económicos y políticos habían conservado el control de la vida pública. Las modas sucesivas permiten la creación de grupos numerosos, pero frágiles, de intelectuales

semiprofesionales, que intervienen a un tiempo en un plano muy general y en dominios que exigirían profesionales más especializados. Estos intelectuales doctrinarios han producido pocos análisis políticos originales o de trabajo profesional sólido. La idea de la desarticulación de los intelectuales en relación a la organización económica y social se opone directamente a la idea de la dependencia de los intelectuales respecto de una clase dirigente oligárquica, es decir, que dirige tanto la vida política y cultural como la economía. Imagen más tradicional y de hecho más limitada, porque no se aplica realmente a los intelectuales sino más bien a los agentes directos de la clase dirigente, *licenciados* o *bacharéis*. Desde el momento en que consideramos la producción de bienes culturales, la explicación por los intereses de la oligarquía se desvanece. En primer lugar, porque la oligarquía latinoamericana ha buscado durante mucho tiempo la cultura fuera de sus fronteras, en Francia en particular, luego en Estados Unidos; además, porque, en la época oligárquica, la producción intelectual se quiere ella misma separada de las realidades nacionales a menudo: su modernismo también se ha vuelto más —en Osvaldo de Andrade, brasileño, lo mismo que en Rubén Darío, nicaragüense que vivió mucho tiempo en Chile y en Argentina— hacia los espacios dejados vacíos entre la oligarquía en declive y el poder en ascenso del Estado y porque adoptan dos posiciones principales: la de profesionales, en particular en el dominio de la educación y de las ciencias sociales, y la de los radicales de extrema derecha o de extrema izquierda cuyas ideas tienen una capacidad de movilización muy débil. En el caso del Brasil de los años veinte y treinta, S. Miceli ha querido mostrar que la producción intelectual se inscribía en una estrategia de dominación de la oligarquía, pero los resultados de su estudio llevan a una conclusión opuesta: parientes pobres de las grandes familias o salidos de la clase media provinciana, los principales intelectuales brasileños no son los ideólogos ni de la oligarquía paulista ni del *Estado Novo*. Aquí podemos pensar en la Francia de la misma época donde se multiplican los grupos intelectuales preocupados de reformas, inquietos por la crisis del capitalismo y del ascenso de los fascismos, pero combinando, de manera a menudo confusa, reacciones opuestas, de suerte que los miembros de un mismo grupo se han visto arrastrados rápidamente a veces en direcciones opuestas. Las ambigüedades de estos intelectuales impiden afirmar que su producción se inscriba en un proyecto hegemónico de la burguesía. Proyecto que no ha existido en ninguna parte; todos los estudios ya citados sobre la debilidad de las clases dirigentes y su incapacidad para convertirse en hegemónicos reducen a la nada los intentos por volver a situar la vida intelectual en el gran proyecto reformador o conquistador de una clase dirigente. La debilidad de los intelectuales doctrinarios es tanto más visible cuanto que, recientemente, y en particular bajo las dictaduras militares, frente a la persecución se ha constituido una categoría de intelectuales completamente distinta a la anterior, cuya calidad profesional se eleva

rápidamente y a menudo alcanza el mejor nivel internacional. Estos intelectuales proponen análisis generales que van mucho más allá de las interpretaciones doctrinarias.

La dependencia económica del continente respecto del exterior ha llevado a los intelectuales doctrinarios a oponer a esa dependencia una esencia nacional, lo cual ha creado un bies antieconómico visible en el pensamiento social latinoamericano. Lo que, por contra, realza el talento y la influencia de algunos grandes economistas, como Celso Furtado o Raúl Prebisch, que han sabido elevarse a una panorámica de conjunto del desarrollo económico, social y político del continente. Esta hiperautonomía de los intelectuales doctrinarios se explica ante todo, de manera clásica, por la importancia de los sectores marginales o excluidos. J. A. Silva Michelena, en Venezuela, ha analizado el papel positivo que juegan los intelectuales como mediadores entre el aparato del Estado y unas categorías excluidas o reducidas al nivel más bajo de participación social. Situación que define tradicionalmente a los intelectuales populistas, según el modelo ruso del siglo XIX, cuando los intelectuales hablaban en nombre de un mundo campesino completamente excluido de la vida pública por su aislamiento cultural y su sumisión a un poder económico tradicional. La vida política latinoamericana parece dividida a veces en tres sectores: el de las gentes de abajo y el de las gentes de fuera, que se oponen, tanto el uno como el otro, a la elite dirigente, pero de maneras opuestas. Los políticos y los sindicalistas representan el sector bastante limitado de las reivindicaciones institucionalizadas, mientras que los intelectuales hablan la mayoría de las veces en nombre de aquellos que no pertenecen al sistema político. En *Ecuador,* por ejemplo, los intelectuales influyentes fueron en principio los escritores críticos del grupo de Guayaquil y los pintores influidos por los fresquistas mexicanos. Otros intelectuales defendieron, sobre todo, la cultura indígena, rechazando las influencias extranjeras y luchando por un renacimiento de una cultura consciente de sus raíces étnicas. Estos intelectuales combaten con mayor facilidad a los caudillos tradicionales, como lo hicieron los estudiantes en 1907 contra Alfaro en Ecuador, de lo que se integran en el juego político institucional. De igual manera, un grupo de intelectuales latinoamericanos apoyó y animó la movilización ideológica al servicio del Gobierno del general Velasco en Perú, a través de SINAMOS.

Una consecuencia de esa extrema autonomía de los intelectuales es la ausencia casi general en América Latina de lo que los pensadores marxistas han llamado la ideología dominante, porque ésta supone la presencia de una clase hegemónica, capaz de extender su dominio de la economía hacia la vida política y el control de la vida cultural. La ausencia de una clase dirigente hegemónica es casi general en la América Latina contemporánea. Hay que volver a principios de siglo, al período de oro de la oligarquía rural exportadora argentina, antes de la victoria de los radicales, para encontrar un grupo dirigente realmente hegemónico.

La autonomía de los ideólogos es mayor todavía debido al hecho de que los regímenes políticos, sean autoritarios o democratizantes, no recurren a una movilización ideológica. Los regímenes de inspiración populista se contentan con apelar a la Nación, a veces a sus raíces étnicas, y a la necesidad de acoger a los nuevos ciudadanos. Las dictaduras militares nunca han intentado una movilización política de masas, como en los regímenes fascistas europeos, limitándose a reprimir los actos de oposición y a apelar a las virtudes de la integración de la economía nacional en el mercado internacional. Sólo los regímenes de inspiración leninista, en Cuba y en Nicaragua, han organizado un fuerte encuadramiento de la población y creado partidos que tienen, a un tiempo, tareas de inculcación ideológica y de control policial, lo cual les asegura el monopolio del poder. En el conjunto del continente, ni la clase dirigente ni el Estado producen ideas; son los intelectuales quienes producen y difunden las ideologías. Lo cual no quiere decir que éstas no tengan efectos, sino sólo que existe una gran distancia entre los debates ideológicos de un lado y la vida política y económica del otro. E. Faletto explica esta autonomía de la vida intelectual e ideológica por la ausencia, en los decenios recientes, de una cultura aristocratizante fuerte y estable: «En América Latina, el largo ciclo de conflictos que ha precedido a la constitución del Estado y a la sucesión de cambios económicos que implicaban una transformación parcial o total de los grupos superiores, impidió, con unas pocas excepciones, la permanencia de un grupo portador de una cultura superior, transmitida por la familia. Por el contrario, la cultura ha sido una creación del sistema de educación, y, por eso mismo, se ha considerado como accesible en teoría a todos» (cf. Bibl., II, 2).

Pero la razón principal de la debilidad de la producción ideológica del Estado y de los partidos es la dificultad que encuentran para combinar orientaciones tan diferentes como la modernización, la lucha de clases y el nacionalismo. La tridimensionalidad de la acción colectiva en América Latina manda directamente la disociación de la vida política o sindical y de la producción ideológica. En efecto, para integrar unos en otros temas tan diferentes, es preciso recurrir a *mitos* integradores. El primero unifica las orientaciones de la acción en torno al mito central de la nacionalidad: unos ideólogos exaltan la *peruanidad,* la *argentinidad* o la *brasilianidade.* Tal ideología populista tiene efectos de exclusión tanto como de integración, y puede ser movilizada fácilmente por regímenes autoritarios. El mito opuesto es el mito *desarrollista:* es la modernización la que creará la unidad de la nación si el Estado incrementa su capacidad de integración y de iniciativa. Ha encontrado su expresión más fuerte en Brasil, con H. Jaguaribe.

A su vez, estos dos mitos particulares se hallan integrados en un mito central, el *mito nacional-revolucionario,* que ha atraído con una fuerza excepcional a tantos intelectuales latinoamericanos. Según este mito, la integración nacional debe formarse a través de la lucha antiimperialista,

lucha que a su vez se identifica con la lucha de clases anticapitalista. Ya lo hemos dicho: la integración débil de las luchas sociales y de las luchas nacionales en América Latina se opone a la fusión fuerte, total, de estos dos tipos de luchas en la ideología marxista-leninista y en los regímenes posrevolucionarios que se inspiran en esa ideología. Por eso el mito nacional-revolucionario, nutrido a menudo de un marxismo-leninismo reinterpretado en términos latinoamericanos, ejerce tanta atracción sobre los intelectuales. Clase y nación no aparecen ya entonces más que como las dos caras de un mismo actor de las luchas de liberación. Pero, dado que esa fusión no se ha realizado en la práctica, se la proclama ideológicamente, o, más bien, míticamente. Este mito nacional-revolucionario es tanto más fuerte cuanto que es utilizado más por intelectuales en ascenso social y que hablan en nombre de categorías populares que son excluidas o reprimidas de forma más masiva. El ejemplo del *Instituto Superior de Estudos Brasileiros* (ISEB), el mayor centro de producción ideológica del Brasil e incluso del continente, muestra la función unificadora del mito nacional-revolucionario. La idea de nación se afirma de manera voluntarista y a través de la denuncia de las alienaciones sufridas por la cultura brasileña, e identificada con la existencia y la conciencia de las masas populares o de todas las fuerzas vivas del país. El razonamiento salta fácilmente de una definición a otra gracias a la afirmación, demasiado evidente para que deba ser justificada, de que los intelectuales son la expresión directa, casi natural, del pueblo y, por tanto, de la unidad de la nación. Integración ideológica que no es posible más que a un precio elevado, la eliminación fuera del discurso de las diferencias entre las clases, de los procesos políticos e incluso de un juicio sobre la penetración de los capitales extranjeros, dado que el ISEB fue patrocinado por Kubitschek en el momento en que el *Plano de Metas* abría la puerta a esos capitales. La fuerza doctrinal de ese mito tiene como contrapartida su extrema fragilidad, porque la integración de elementos tan opuestos o dispares es más obra de talento que de demostración, y las oposiciones que se han eliminado reaparecen en forma de luchas internas. En Brasil entre 1960 y 1964, o en Chile de 1968 a 1973, un gran número de intelectuales explicaban todo por la acción del imperialismo americano y apelaban a la defensa y a la movilización del pueblo, pero esa posición era tan excesiva que los dividía entre sí y disminuía su capacidad de acción política y de movilización de las masas. Los golpes de Estado revelaron el grado extremo de desarticulación de estas ideologías en relación con la realidad social y política de su país.

Ha habido pensadores liberales brasileños que han ido más lejos en su crítica: ¿no tiende el mito nacionalista a ser la ideología de un poder autoritario, que trata de constituirse en el olvido o en el rechazo de las realidades de luchas sociales concretas? Cierto que muchos miembros del ISEB —en particular entre los más radicales— habían sido integralistas antes de la guerra, y sobre todo que una concepción tan voluntarista

como la suya no puede dirigirse más que al Estado. Pero esta crítica va demasiado lejos: esos doctrinarios no son estrategas; habrían querido ser los consejeros del Príncipe; han sido más bien la expresión extrema de la desarticulación de las sociedades latinoamericanas. Lo confirma un hecho: si los actores sociales llegan a darse una organización autónoma, el papel de los intelectuales se debilita y se vuelve incluso marginal. El movimiento campesino *colombiano* ha demostrado, mejor que cualquier otro ejemplo, la oposición entre la producción mítica de los intelectuales y la capacidad de acción de un movimiento social. Cuando el ANUC, expresión principal del sindicalismo campesino colombiano, fue arrastrado y dominado por los ideólogos, esa situación llevó a un grave debilitamiento del sindicalismo campesino, en 1974-1975. En muchos casos, los intelectuales aparecen incluso como desfasados respecto a la vida política nacional. Es el caso, sobre todo, de Perú, porque la vida política de este país estuvo dominada por un gran partido de masas, el APRA, mientras que los estudiantes de San Marcos, en Lima, y más tarde de universidades del interior, eran atraídos por ideologías y organizaciones revolucionarias que, desde el principio de los años sesenta a los años ochenta, los arrastraron a guerrillas o a luchas armadas en ruptura profunda con las tendencias dominantes de la vida política nacional. Hay que añadir, además, que, en ocasiones, pero más bien a principios del siglo, ha resultado que los estudiantes y los intelectuales son más conservadores que las fuerzas sociales y políticas movilizadas y no tan revolucionarios como ellas. Así ocurrió en el *México* posrevolucionario, donde la Universidad de México fue considerada como un centro de conservadurismo hasta el punto de que el gobernador revolucionario del Estado de Tabasco, T. Garrido, envió una expedición armada contra la universidad. De igual modo, en Perú, en 1920, Haya de la Torre y V. A. Belaúnde denunciaban a las universidades como refugio del espíritu aristocrático.

En general, las tendencias más extremas han estado sobrerrepresentadas en los medios intelectuales y universitarios. Ése fue el caso de *Chile* en los años de gran movilización popular, entre 1964 y 1973: de un lado, el MIR, partido político revolucionario de extrema izquierda, encontró en las universidades, y sobre todo en Concepción, lo esencial de sus fuerzas, mientras la Universidad Católica de Santiago, una extrema derecha «gremialista», es decir, que apelaba de manera paradójica a un sindicalismo más profesional que político, adquirió una importancia mayor que los representantes directos de los partidos de derecha.

Ya hemos escrito varias veces la palabra universidad. Porque el lugar principal de la producción ideológica en América Latina es la *universidad.* En los países capitalistas centrales, las universidades han combinado un papel de formación científica y profesional con una función de preparación de una elite dirigente. De manera opuesta, en los países dominados por un partido-Estado, como la Unión Soviética, la autonomía

de los intelectuales y de las universidades ha sido tan reducida que sólo se manifiesta en la formación de movimientos disidentes. En los países de régimen nacionalista y antioccidental, los intelectuales juegan un papel más importante, de control cultural, pero que no les deja ninguna autonomía, como han podido experimentar los intelectuales iraníes en particular. En América Latina, como en algunos otros países, Turquía y Tailandia en particular, el papel de los estudiantes y de los enseñantes universitarios ha sido de la mayor importancia.

El papel central de las universidades se debe, ante todo, a su importancia material. La América Latina, en su conjunto, ha dado una clara prioridad al desarrollo de la enseñanza universitaria sobre la enseñanza secundaria y, sobre todo, primaria. El papel de las universidades consistía en reforzar la clase media, siempre definida como clase media superior y relativamente abierta, es decir, en la que podían penetrar los hijos de la pequeña clase media urbana, empleados y funcionarios. Ciertos países —Argentina, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Chile, Ecuador— habían alcanzado en 1975 una tasa de escolaridad universitaria de más del 16 por 100 para la población de veinte a veinticuatro años; Uruguay, Perú y Bolivia se encontraban entre el 10 y el 16 por 100. La progresión de esa tasa de escolaridad de 1950 a 1975 había sido explosiva en todas partes, superando incluso el 3.000 por 100 en Venezuela y en Nicaragua, y el 2.000 por 100 en Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Brasil y República Dominicana.

Pero ha sido el movimiento estudiantil el que ha dado a las universidades su importancia política. El movimiento estudiantil moderno nació en Córdoba, Argentina, en 1918. La Federación Universitaria Argentina aprobó ahí, durante su congreso de julio de 1918, los siguientes objetivos: coparticipación de los estudiantes con los enseñantes y los antiguos alumnos de las universidades en el gobierno de éstas; libertad de aprender y de enseñar, para los estudiantes y profesores, según los principios planteados por las universidades alemanas en el siglo XIX; renovación periódica de los titulares de cátedra; publicidad de los actos y de las discusiones de los consejos universitarios; difusión de la enseñanza superior; apoyo económico a los estudiantes sin recursos suficientes; autonomía de las universidades; apertura al pueblo de universidades sociales. Este programa indicaba la convergencia de una elite modernizadora en ascenso social con una afirmación nacional y una voluntad de ruptura con la oligarquía tradicional. Indicaba también la competencia entre varias tendencias, siendo las principales la tendencia marxista y la tendencia llamada arielista, influida por el pensamiento del uruguayo Rodó, más modernizante que libertaria. La influencia de la reforma de Córdoba fue importante en todo el continente: en Chile, donde la generación de los años veinte se inspiró en sus ideas y contribuyó a renovar la vida política; en Perú sobre todo, donde el joven Haya de la Torre se inspiró directamente en el programa de Córdoba para crear el APRA; también

en el México posrevolucionario, donde las ideas de Vasconcelos se acercaban a una parte de los temas lanzados en Argentina.

Pero al lado del movimiento de Córdoba, propio de sociedades a la búsqueda de una integración social mayor, las universidades también han conocido movimientos estudiantiles más revolucionarios, que se han desarrollado, sobre todo, bajo regímenes autoritarios y en situaciones de crisis económica. La Universidad de La Habana en Cuba, durante el régimen de Batista, fue un ejemplo extremo de formación de grupos revolucionarios, intelectuales y políticos que disponían en el seno de la universidad de cierta capacidad de expresión, pero que estaban amenazados por una violenta represión en cuanto intentaban extender su acción fuera de la universidad. Fue en ese clima a la vez exaltado y frustrante en el que Fidel Castro empezó su carrera política, antes de elegir abandonar esa falsa libertad de expresión y dar preferencia a la lucha política directa contra la dictadura. La historia universitaria de la América Latina siempre ha estado dividida entre esas dos tendencias. En el transcurso del largo período de crecimiento económico, marcado por una integración social que iba acompañada de una fuerte exclusión, la oposición de las dos tendencias, una modernizadora e integradora, otra crítica y revolucionaria, no ha dejado de incrementarse y de cortar en dos clanes opuestos el mundo de los ideólogos. En Brasil, donde las universidades no han aparecido sino tardíamente, es en el seno del ISEB donde el conflicto entre modernizadores y nacionalistas alcanza su forma más aguda. Los primeros, llevados por Cândido Mendes y Hélio Jaguaribe, fueron atacados como colaboradores, *entreguistas,* por sus adversarios, como Vieira Pinto, Guerreiro Ramos o Inácio Rangel, que apelaban a la movilización de las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas, mientras que los modernizadores insistían más en la necesidad de la democracia y de la formación de actores sociales y políticos autónomos.

En el transcurso de este largo período, la ruptura entre las dos tendencias se hizo cada vez más inevitable. De un lado, un número creciente de intelectuales se hallaban integrados en las instituciones, a la vez por la capacidad de cooptación política de ciertos regímenes como el de México, y por la apelación creciente al sector económico de profesionales cualificados, ingenieros, economistas o administradores. De otra parte, el establecimiento de dictaduras militares en muchos países radicalizaba a numerosos intelectuales y, en el curso de los años setenta, es ese tipo de intelectuales el que logra la mayor importancia y visibilidad, en el momento mismo en que se difundían las formas más extremas de la teoría de la dependencia. Típico de esta generación de intelectuales fue René Zavaleta (cf. Bibl., III, 1), brillante intelectual y político boliviano, marxista, a veces incluso de la forma más doctrinaria, pero convencido de que el nacionalismo revolucionario representaba antes que la lucha de clases la «ideología general». Su entusiasmo por la Asamblea Popular de 1971 y más tarde por el papel de las «masas», en noviembre de

1978, fue característico de esta prioridad que daba a un nacionalismo revolucionario. Zavaleta fue un jovencísimo ministro durante la segunda presidencia de Paz Estenssoro (1960-1964), pero en realidad su acción estuvo siempre alejada de la acción de la potente Federación de Menores y también de las tendencias dominantes del gran partido de Gobierno, el MNR. Este tipo de intelectuales se sintió poderosamente atraído por la revolución cubana y por las guerrillas que la sostuvieron. Jugó un papel muy importante en movimientos como los Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina. Por eso las universidades, que durante varios decenios habían ocupado un lugar central en la vida política, entraron a partir de los años sesenta en una crisis profunda, creada por la disociación, cada vez más honda, entre el espíritu revolucionario y el profesionalismo modernizador. La crisis fue violenta y prolongada en Chile. En *Argentina,* la Universidad de Buenos Aires, que había conseguido una altísima reputación, fue destruida por los regímenes sucesivos, tanto militares como peronista.

Esta crisis de la universidad que había sido la más importante de América del Sur, antes del potente ascenso de la Universidad de São Paulo, da una imagen extrema a la vez de la importancia central de la universidad en la mayoría de los países latinoamericanos y de la desarticulación de la ideología en relación a la vida social y política. Porque la inspiración central de la reforma, cuyos efectos se dejaron sentir al menos hasta 1958 e incluso hasta 1966, fue asociar estrechamente una idea de universidad a una concepción del desarrollo nacional. Esta asociación se realizó en el marco del ascenso de las clases medias urbanas, amplias y enriquecidas por el prodigioso éxito económico del país. Pero en Argentina nunca existió la integración de los diversos temas de la acción política en las manos de un Estado que asegurase a la vez la modernización económica, la incorporación de las categorías populares y la integración nacional. La sociedad argentina siempre estuvo cortada en dos por la oposición de una elite agroexportadora más que industrializadora y de consumidores urbanos, obreros o clases medias. De suerte que el movimiento de la reforma, apoyado y prolongado por las expectativas de las clases medias en ascenso, no logró, a pesar del crecimiento de la universidad, que ya en 1960 reunía a 18.000 estudiantes, darse una expresión política. Con una excepción: el mundo universitario apoyó con pasión la candidatura a la presidencia de Frondizi en 1958, con la misma pasión con que era apoyada por Frigerio, el líder de los peronistas modernizadores. Pero, apenas elegido, Frondizi hizo lo contrario de lo que se esperaba de él, rompiendo con la idea de la reforma al apoyar las universidades privadas y las inversiones extranjeras (cf. A. Rouquié, Bibl., III, 1). A partir de ese momento, los ideólogos universitarios partieron a la deriva. El nacionalismo revolucionario, exaltado por la revolución cubana, condujo a unos hacia un peronismo revolucionario, a otros hacia la idea de una lucha de clases asociada a la acción armada

contra el imperialismo, mientras la profesionalización de los estudios universitarios, que había alcanzado un alto nivel, en particular en las ciencias de la naturaleza, resultaba arruinado por las campañas desde todos los frentes en favor de una ciencia comprometida, que hicieron sucederse una universidad peronista y una universidad marxista hasta que los militares, en 1966, sustituyeron el discurso por las armas y provocaron la dimisión o el exilio de casi todos los grandes nombres de la universidad. El mundo intelectual de Buenos Aires, brillante, cosmopolita, no era ya ni una fuerza política motriz ni un medio de búsqueda fecundo; se agotó en un aislamiento social que aumentaba a medida que se radicalizaba su voluntad de compromiso. El resultado fue un movimiento masivo de partidas, forzadas o inevitables, de las que se aprovecharon las universidades de otros países de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa. Destrucción dramática de lo que había sido el mayor centro intelectual del continente.

La Universidad de la República en Montevideo, en *Uruguay,* como su vecina de Buenos Aires, ha dado un ejemplo de desarticulación creciente entre la vida universitaria y las necesidades del país. Si, cada vez más, ha representado un lugar de pensamiento crítico y de oposición a las tendencias autoritarias, en particular a la dictadura de Terra, entre las dos guerras, al convertirse en una república universitaria cada vez más autónoma, raramente ha puesto esa autonomía al servicio de la investigación científica o de la aplicación de los conocimientos al resurgimiento del país. ¿No resulta dramático que la defensa de la democracia se haya asociado a una concepción de la universidad que contribuía a debilitar el país y, por consiguiente, su régimen democrático?

En ciertos países, la universidad supo modernizarse. Tal fue el caso de *Chile,* gracias sobre todo al rector J. Gómez Millas, que quiso dar a la investigación fundamental un lugar central. La universidad de Chile creó también en provincias, a partir de 1960, colegios universitarios que organizaron sobre todo carreras técnicas. Algunos de ellos, como el de La Serena, creado por A. Arenas, se convirtieron en centros activos de desarrollo regional. La Universidad de Concepción se transformó a partir de 1959. Pero es en *Brasil* donde se formó la universidad más notable. Creada en los años treinta, la Universidad de São Paulo conoció un desarrollo tan rápido que en la actualidad constituye, junto cona cercana Universidad de Campinas, un polo de importancia internacional y asegura por sí solo cerca de la mitad de la producción científica del país.

Pero incluso allí donde la universidad había logrado superar la primitiva oposición entre un profesionalismo estricto y una politización indiferente a la calidad científica, la crisis de la universidad fue profunda y las luchas políticas llevadas por una clase media radicalizada pesaron mucho más que los esfuerzos por estrechar los vínculos entre educación general, investigación científica y formación profesional superior. Ése fue el caso

de *Chile.* En la Universidad Católica primero, después en la Universidad de Chile en 1967, el tema de la universidad crítica y científica se vio desbordado por el de la universidad comprometida. Los estudiantes de izquierda ocuparon varias facultades, lo que llevó a la dimisión del rector. Estas crisis desembocaron en una represión brutal, en el momento en que la Universidad de Buenos Aires se hallaba sometida a una brutal intervención del régimen militar.

Hoy parece poco probable que la joven clase media radicalizada pueda jugar de nuevo el papel que desempeñó desde 1918 a 1966-1967. J. J. Brunner (cf. Bibl., II, 2) insiste en las dos tendencias que han debilitado el movimiento estudiantil. Por un lado, se forman grupos que tienen intereses cada vez más corporativos; por otro, los estudiantes actúan cada vez más a través de los partidos políticos cuya juventud y futuros dirigentes representan. Estas dos tendencias destruyen la capacidad de acción autónoma y general del movimiento estudiantil. G. Rama (en *Revista de la CEPAL,* diciembre de 1983) añade que el tema de la educación, asociado durante tanto tiempo a la acción de una elite política en ascenso social, cambia progresivamente de papel. Es más utilizado por una clase dirigente en busca de símbolos de modernización. En otros casos, está asociado a grupos de presión en el seno de la clase media. Casi siempre pierde su capacidad para integrar los objetivos de una clase media en ascenso y las protestas de intelectuales contra la oligarquía y la exclusión social. Desde finales del siglo XIX, la educación había tenido, como ha señalado C. Tedesco para el caso de Argentina, «una función política y no una función económica, porque los cambios económicos ocurridos durante ese período no incrementaban la necesidad de recurrir a la formación local de un personal cualificado» (cf. Bibl. II, 2). Una formación literaria, no técnica, correspondía a esta concepción política de la educación. Pero a partir del momento en que la economía reclama profesionales, esa orientación a la vez política y literaria pierde su importancia y el mundo universitario se fracciona en formaciones especializadas: ingenieros, médicos, arquitectos o abogados, ampliamente al servicio de los medios económicos dirigentes.

Pierde más profundamente aún su unidad. Las universidades habían sido arrastradas por el ascenso de las clases medias. Su creciente descomposición tiende a separar el reclutamiento de las elites dirigentes, asegurado por universidades extranjeras o por universidades privadas de costosos estudios, y la preparación de un gran número de estudiantes para empleos de nivel cada vez más bajo. La rebelión de esos estudiantes, en 1986-1987, en Francia y en España, la radicalización de las luchas estudiantiles en *México,* tienen causas paralelas. Se habla cada vez más en México de una universidad del pueblo, acentuando de este modo una tendencia espontánea a la caída social de la universidad y acelerando la dualización de la enseñanza superior. Después de haber conocido un sistema universitario fuertemente integrado, la América Latina parece en-

caminarse hacia la enseñanza superior «a dos velocidades», tan característica de Francia, donde desde hace veinte años no ha dejado de crecer la distancia entre las grandes escuelas y el conjunto del sector selectivo, por un lado, y, por otro, un sector no selectivo que acoge un número creciente de estudiantes a los que ofrece un número decreciente de empleos, de nivel cada vez más bajo. La investigación, que nunca ha sido bien tratada en las universidades latinoamericanas, sale cada vez más de ellas, no sólo en los dominios científicos y técnicos, sino también en las ciencias sociales donde lo esencial de la producción queda asegurado por institutos privados, creados a menudo por intelectuales excluidos de las universidades por las dictaduras o apartados de ellas por salarios cada vez más bajos, y que viven en parte con la ayuda de fundaciones, de universidades y de gobiernos extranjeros.

Pero la vida intelectual, y en particular el medio de las ciencias sociales, no ha pasado de la ideología desarrollista a una profesionalización separada de las elecciones políticas. El derrumbe de esa ideología a finales del período de sustitución de las exportaciones y en el momento de la instauración de las dictaduras militares en Brasil en 1964, en Bolivia ese mismo año y en Argentina en 1966, condujo a tres posiciones diferentes. La más difundida fue, en primer lugar, la teoría extrema de la dependencia, que negaba cualquier puesto a los actores sociales y no podía desembocar más que en la pasividad o en la lucha armada. El éxito fulminante de las ideas de Poulantzas y de Althusser, de las que M. Harnecker fue el principal agente de difusión, ha correspondido al éxito del estructural-marxismo en Europa. La idea del desarrollo del subdesarrollo, popularizada por A. Gunder Frank (cf. Bibl., intr.), o al menos el tema de las causas estructurales del estancamiento económico, condujeron a un estudio de las causas económicas internacionales de la crisis social y política. En América Latina se dedicaron, con tanta pasión como en Francia, a la caza del motivo. Una segunda tendencia fue, como en la vida religiosa, un retorno a la comunidad y a sus raíces, como atestigua el éxito del tropicalismo en Brasil y de los movimientos indianistas en México o en Bolivia. La tercera tendencia buscó, por el contrario, descubrir a los actores sociales concretos en el lugar de esa entidad vaga o arbitrariamente definida que se llamaba el pueblo. Estudios sobre la clase obrera, sobre el empresariado, sobre el ejército y sobre los intelectuales mismos comenzaron a trazar una tercera vía que se alejaba tanto del holismo culturalista como del economicismo de los que reducían las conductas a estrategias de intereses o al efecto de las manipulaciones ejercidas por los poseedores de la riqueza y del poder.

Esta última tendencia es la más cercana a un trabajo profesional, la que más asociada está también a una reflexión sobre las condiciones propiamente políticas de la democracia; ganó importancia a partir del momento en que se reorganizaron la vida política y la actividad de los partidos. La vida intelectual del continente se ha ido liberando casi completa-

mente de los discursos nacionalistas y de un desarrollismo puramente voluntarista; le cuesta más trabajo, sin embargo, liberarse de las posiciones suicidas que le impone la teoría de la dependencia cuando rechaza la existencia de los actores sociales.

3. Violencia y «convivencia»

La desarticulación de la actividad económica, de la acción política y de la ideología no es el único efecto —ni el más extremo— de la dualización de la sociedad. Por encima de un espacio político más agitado que potente se extiende el mundo de los privilegios, que se defiende no sólo por la influencia, las alianzas o la corrupción, sino también por la violencia. La América Latina ha conocido poco, al menos desde el final de la revolución mexicana, la violencia revolucionaria, e incluso las guerrillas no han representado nunca más que manchas muy pequeñas sobre el mapa del continente. En cambio, su historia está cubierta con la sangre de los campesinos masacrados y de los obreros fusilados, a veces en grandes masas, más a menudo en la semioscuridad de las relaciones cotidianas de trabajo. Los dueños de la tierra apenas se han visto molestados por los representantes de la ley, sometidos la mayoría de las veces a su buena voluntad, para librarse de aquellos que se revolvían o que actuaban como apoyos de un adversario. La violencia está en todas partes donde el poder es local, donde el poder central no penetra y donde las reglas generales del derecho no se aplican. Es más visible y más masiva a partir del momento en que se organizan sindicatos y otras formas de resistencia. Matanzas de mineros en Chile y en Bolivia, matanzas de *comuneros* en Perú, matanzas de campesinos en El Salvador. Entonces la sangre corre por todas partes. Violencia social, ejercida por los dueños del suelo y del capital o por autoridades políticas y militares puestas directamente a su servicio. A la que se añade una violencia propiamente política, cuando el Estado centralizado se ha descompuesto y ha caído en las manos de grupos militares o paramilitares, de los Escuadrones de la Muerte de Brasil o de América central hasta las 3 A de Argentina. Guatemala y El Salvador han alcanzado un excepcional nivel de violencia oficial, sobre todo durante el período en que los regímenes militares, después de haber derrocado gobiernos civiles, se descompusieron a su vez. El testimonio de Rigoberta Menchu, campesina guatemalteca, recogido por E. Burgos (cf. Bibl., IV, 3), es la letanía de los asesinatos que eliminaron, uno tras otro, a los miembros de una familia del Quiché que resistía a la violencia sufrida. En el otro extremo del continente, la violenta represión que acompañó el golpe de Estado de 1973 en Chile no respondió siquiera a un levantamiento de masas; esa violencia fue preventiva, aterrorizadora, para impedir cualquier tipo de resistencia.

Todo ocurre como si la violencia, asociada en primer lugar a la represión de clase, se volviese cada vez más directamente política, manifes-

tando y acentuando la descomposición del Estado y del sistema político, al mismo tiempo que los militares sustituían, sobre todo en América central, a una oligarquía y a una clase dirigente incapaces de imponer su hegemonía.

La violencia, incluso, se sale por completo del campo social cuando se asocia a la presión o a la intervención extranjera. Fue con el apoyo directo de los Estados Unidos como Castillo Armas invadió Guatemala y derribó a Arbenz, matando inmediatamente a millares de campesinos. ¿Puede comprenderse la historia de Nicaragua, la de Haití y de la República Dominicana, y naturalmente la de Cuba, sin hablar de largas ocupaciones de esos países por los marines? En el Sur, las relaciones entre la intervención extranjera y la represión política y social es más indirecta. Los *Estados Unidos* alentaron el golpe de Estado en Brasil y sobre todo en Chile, pero A. Rouquié (cf. Bibl., IV, 3) tiene razón cuando llega, con prudencia, a la conclusión de que los golpes de Estado y las contrarrevoluciones se explican más por causas internas que por la intervención americana o la formación de oficiales en la zona del canal. Lo cierto es que la dependencia económica del continente entraña siempre, aunque en grados diversos, una dependencia política, afirmada por los Estados Unidos desde Teodoro Roosevelt con tanta fuerza que no puede ser disimulada. La influencia americana se ha ejercido también en otras direcciones, más favorables al desarrollo económico del continente, sobre todo en el momento de la Alianza para el Progreso, desde Kennedy a Nixon, que puso fin a esta política. Pero la violencia policial y militar ejercida contra los pueblos del continente ha sido a menudo la secuela de una dominación tan directa y tan completa que impedía la construcción de Estados nacionales, protegía las tiranías, preparaba oficiales para la represión, intervenía en la vida política de los países, y el pasado sigue hasta el presente. Ahí está el límite principal del modo de desarrollo dependiente; en América central, en el Caribe y en otras partes, se transforma en situación colonial. Si en todos los países de América Latina existe una frontera entre ciudadanos y excluidos, una parte del continente parece más marcada por la exclusión social, la intervención extranjera y las autocracias corrompidas que por los esfuerzos de integración, siempre limitados pero reales, de los regímenes nacional-populares. La violencia social y militar es la principal frontera del modo de desarrollo dependiente. De igual modo que las clases sociales están limitadas de un lado por los «estados», definidos por privilegios o subprivilegios, y del otro por una fuerte movilidad geográfica y social, así los conflictos de clase están limitados de una parte por la violencia y de otra por negociaciones y la cooptación política.

Al lado de los conflictos sociales, característicos de un modo de producción, se desarrollan, de una parte, negociaciones que fácilmente llegan hasta una incorporación de tipo corporativista en el aparato de Estado y de otra, a la violencia. La presencia, primero, de privilegiados y

de grupos militares que desmembran el Estado, y, después, de un subproletariado que no tiene ni capacidad de negociación ni influencia política, explica la presencia constante de la violencia en los márgenes inmensos del sistema político. Cuanto más controlado está éste por grupos dirigentes, tanto más se desarrolla junto a él un espacio de violencia. *Colombia* es el único país donde la oligarquía ha logrado mantener su control político de manera casi continua, pero tal estabilidad tiene por contrapartida la exclusión de una gran parte de la población, y también de las formas más abiertas de violencia: las guerras civiles, y en particular la guerra de los Mil Días a principios de siglo, y sobre todo, durante un largo período, y de manera aguda entre 1948 y 1953, lo que simplemente se ha llamado la *violencia,* que causó más de 150.000 muertos y opuso partidarios, poblaciones y dirigentes conservadores y liberales en una lucha de una crueldad extrema (cf. Bibl., III, 1). Esta violencia rural estuvo lejos de constituir un movimiento revolucionario: después de 1953, la situación agraria no ha sido transformada y, durante los años mismos de la *violencia,* la lucha dividió al mundo campesino en lugar de unirlo. Es falso en este caso, como en casi todos los demás, creer que la política en América Latina es representativa de intereses sociales. Los regímenes nacional-populares, repitámoslo, mezclan actores sociales y agentes políticos y son máquinas de participación social y política y no sistemas de representación de clases o de categorías sociales. No basta, por tanto, con decir que siempre existe una zona de exclusión en torno del núcleo central, a menudo muy extenso, de participación. La *violencia* proporciona un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la bomba que aspira pasa a expeler o simplemente sufre una avería, que fue lo que ocurrió en Colombia, donde L. Gámez, jefe del Partido Conservador, elegido presidente, impuso un verdadero régimen de terror en nombre de un corporativismo cristiano que evocaba a Salazar y rechazó la participación urbana, que había sido desencadenada por A. López y luego por J. E. Gaitán. Vemos entonces que la sociedad, que no estaba estructurada en clases, se desintegra, se segmenta cuando no está ya unificada por la acción del Estado. Los conflictos sociales no pueden remontar ya hasta un poder central capaz de arbitraje o de compromiso: se vuelven entonces contra el vecino, contra el otro. La débil definición de los actores y de sus adversarios transforma a éstos en enemigos. El conflicto es reemplazado por la crisis, por la guerra. Sobre todo no conviene olvidar que, en efecto, existe un conflicto social, pero que éste no encuentra expresión política. El conflicto social, en el caso colombiano, corresponde en lo esencial a los problemas económicos y sociales del café y a las luchas que entrañaban desde hacía mucho tiempo y que se refuerzan en el momento en que la colonización, que sobre todo partía de Antioquia, la región de Medellín, alcanza sus límites provocando la resistencia de grupos indígenas, de pequeños explotadores con título de propiedad o sin él, amenazados por el incremento de los grandes dominios o por la

llegada de los colonos. Estas reacciones de crisis y de defensa producen conflictos sangrientos pero no forman un movimiento social. Éste es el conflicto de un actor y de un adversario por la dirección de los recursos culturales y en particular de las «fuerzas productivas» y que se sitúa en un marco político que da una expresión institucional a estos tres componentes. Su contrario, un antimovimiento social, actúa de modo inverso: no reconoce ya ningún marco común a unos adversarios que entonces se convierten en enemigos, comprometidos en una guerra civil que puede disolverse en un conjunto cada vez más descompuesto de luchas locales, particulares, e incluso de estrategias individuales.

Así como la violencia social es la contrapartida de las políticas de integración social, la *violencia* colombiana, pero también las luchas entre líderes campesinos en Bolivia después de 1960, son imágenes invertidas de la política nacional-popular.

La violencia, que rodea o que reemplaza a la integración política, no es sólo guerrera; también es más difusa. No puede separarse el conflicto político de las revueltas de las calles, cuando los jóvenes queman autobuses o coches para protestar contra el alza del precio de los transportes. De manera paralela, en muchos regímenes el control de las poblaciones llamadas marginales se lleva de forma represiva y violenta. Es el caso, en concreto, del Chile de la dictadura militar, donde el ejército y la policía realizan en las *poblaciones* actos de intimidación que con mucha frecuencia comportan descargas de fusil y causan numerosas víctimas. Es también el caso en América central e incluso en Brasil, donde se asesina a campesinos que ocupan tierras o a abogados y curas que los apoyan. Por su parte, la protesta popular, que no dispone de ningún canal institucional de expresión, se transforma en violencia urbana: se hacen barricadas con neumáticos que se prenden, se lanzan piedras contra la policía de uniforme o de paisano. De igual modo, en la vida sindical se combinan a menudo violencia en la base y negociaciones, incluso participación en el Gobierno, en la cumbre, como lo muestra el caso extremo del sindicalismo de los mineros bolivianos. La misma vida universitaria está cruzada a veces por la violencia desencadenada, en México en particular. Si en los márgenes reina la violencia, en el centro del espacio político se producen, por el contrario, los vínculos de amistad, de clientela y de relaciones familiares, que impiden o limitan los conflictos. A menudo, la noción de *cultura* se emplea para trazar la frontera entre los que están dentro del sistema y los que se hallan excluidos de él. No se trata aquí de un nivel de conocimientos o de buenos modales, sino de un comportamiento *culto,* que no tolera la violencia, porque es la señal de la pertenencia a un sistema relativamente abierto de influencias, de negociaciones y de movilidad. Frente a los *cultos* o *decentes* están los que no participan en la vida de la ciudad y viven y trabajan en los suburbios periféricos. La vida política y social muestra un contraste constante entre un exceso de «civilidad» y una fuerte marginalización que produce la violencia.

Los mayores acontecimientos históricos del continente estuvieron marcados por la coexistencia de estos dos climas políticos. La revolución *mexicana* fue durante un decenio un movimiento constitucionalista, el de Madero y de Carranza, pero también un mundo de violencia en el que participaron tanto Huerta como Pancho Villa. Violencia y civilidad, participación y exclusión no son dos mundos separados por una barrera infranqueable. Muy a menudo la misma reivindicación se defiende simultáneamente dentro y fuera de las instituciones políticas, mediante la negociación y mediante la violencia. R. Fernández ha descrito esa extraña situación en el caso de los movimientos reivindicativos de la Costa Grande, en el estado de Guerrero, al norte de Acapulco, en México. En muchos casos, las guerrillas mantuvieron una capacidad de negociación al mismo tiempo que ponían en práctica una acción violenta. Eso ocurrió en Guatemala o en Venezuela a principios de los años setenta. *Sendero Luminoso,* el movimiento de lucha armada revolucionaria que se formó en Perú a finales de los años setenta, es tal vez el primer ejemplo de un movimiento de acción violenta que elimina toda posibilidad de negociación. No ejerce presión sobre el sistema político; entra en guerra contra un sistema social y no tiene otro objetivo que su destrucción, porque lo considera como un instrumento al servicio de la dominación de intereses imperialistas y antipopulares. La violencia de *Sendero* es de tipo militar y provoca una respuesta militar que emplea la misma violencia. Aquí ya no se trata de reivindicaciones sociales o de movimientos de masas, sino de militantes movilizados en defensa de territorios liberados. Salimos aquí del tema de la desarticulación del espacio político, porque éste implica la presencia simultánea de una fuerte capacidad de integración y de una fuerte exclusión, tanto en el dominio político como en el orden social. Mientras estemos dentro del modelo político central en América Latina, integración y exclusión son inseparables; por eso los países que han conocido la mayor violencia política son también aquellos en los que más se ha hablado de *convivencia,* como en Perú, o de *conversaciones de caballeros,* de acuerdos en la cumbre entre dirigentes políticos, como en Colombia. El ejemplo de *Sendero Luminoso* recuerda, lo mismo que la existencia de los gobiernos posrevolucionarios de Cuba y de Nicaragua, los límites de ese sistema político; una gran parte de la historia del continente se ha visto dominada por la complementariedad de la violencia y de la cooptación, al mismo tiempo que por la desarticulación de los intereses económicos, de las fuerzas políticas y de las expresiones ideológicas.

La política de tipo populista es, al mismo tiempo que un incremento de la capacidad de integración del sistema político, un exorcismo de la violencia. Con tal éxito que las categorías incorporadas tienen una débil capacidad de lucha, son heterónomas, porque conocen bien la distancia que las separa de las personas del exterior. Perder su trabajo significa, para la mayoría, mucho más que el paro; es la caída en el mundo de fuera, en la espiral de la pobreza y de la marginalización. Los políticos que

se apoyan en las categorías populares tienen una viva conciencia de hallarse en la frontera de dos mundos: el de la participación y el de la violencia, el de la palabra y el de la sangre. Los dirigentes conservadores, por su parte, hablan de intereses económicos, pero también defienden unos privilegios, y dan la prioridad a la incorporación de su país a un sistema internacional. Puede ocurrir que un país conozca simultáneamente una viva actividad política dentro y fuera de los límites del sistema institucional. Pero la mayoría de las veces estos dos tipos de acción se combinan mal. El Chile de la Democracia Cristiana (1964-1970), luego el de la Unidad Popular (1970-1973), vivió la ruptura, primero limitada, luego completa, del sistema político, cuando la crisis económica y social se agravó y todo el país fue invadido por la violencia que procedía de las dos extremos de la sociedad. En el Perú de los años sesenta es el mundo de fuera el que parece invadir el mundo de dentro; en el extremo opuesto, Uruguay tuvo tal capacidad de integración política y social que los elementos de fuera fueron incorporándose poco a poco, pero al precio de una parálisis económica.

El vigor, a menudo retórico, de las luchas políticas «del interior» no debe engañarnos. Si esas luchas son las más visibles, dado que las categorías en presencia tratan de obtener del Estado una redistribución del producto nacional a su favor, se calman o se disgregan en el momento en que los excluidos parecen amenazadores. De ahí el gran vigor de la vida política en Colombia; y es porque la frontera es muy neta en ese país entre los de dentro y los de fuera. La movilización social realizada por los partidos políticos sigue siendo limitada en todas partes. Muy particularmente del lado de los conservadores, donde los individuos y los grupos más poderosos se sienten con frecuencia, tanto en Argentina como en México, pero con la excepción de Brasil, relativamente externos a la vida política nacional. También en las categorías populares, donde una gran parte de los trabajadores urbanos y la mayoría de los campesinos permanecen fuera de la movilización política. Repitámoslo una vez más: el modelo latinoamericano se caracteriza a la vez por una gran capacidad de integración social y política y por la existencia estable de grandes masas rurales y urbanas de no integrados, de excluidos, que no se manifiestan sino de tarde en tarde por levantamientos, motines, ocupación de dominios agrícolas o de terrenos urbanos. En América Latina, tanto la vida política como la vida económica están profundamente marcadas por esta dualización.

Conclusión

El observador procedente de Europa o de América del Norte debe guardarse, ante todo, de transportar a América Latina la concepción de la vida política a la que está habituado. La noción americana de política de los grupos de intereses *(interest groups politics),* según la cual existe

un mercado político sobre el que entran en competencia fuerzas que defienden unos intereses sociales y económicos específicos, se aplica mal a la América Latina. Lo que, por el contrario, sorprende es cuántos grupos económicos, incluso entre los más poderosos, ejercen una influencia política muy inferior a la que parece corresponder a su papel en la economía. De igual manera, la América Latina está muy lejos de la situación socialdemócrata, en la que el movimiento sindical crea sus propios instrumentos de acción política; aquí los sindicatos obreros están casi siempre subordinados a unos partidos o a unos líderes políticos.

Los sistemas políticos o económicos latinoamericanos no son formas imperfectas del modelo clásico europeo o norteamericano, combinando éste con los restos de una organización social y política llamada tradicional. Tal imagen, que corresponde a las formas más simples de la teoría de la modernización, sufre un etnocentrismo peligroso, porque implica que todos los países deben seguir, con mayor o menor velocidad, las huellas de los países más avanzados. Las formas de movilización y de acción colectiva en América Latina tienen características propias, que les prestan cierta coherencia y permiten definir sus condiciones de funcionamiento o de descomposición interna. Hay que rechazar simultáneamente la idea de que la acción política y social en América Latina se organiza y se desarrolla de la misma manera que en los países europeos y la idea inversa que niega la existencia de un espacio político autónomo en nombre de la omnipotencia de la dependencia exterior. Entre estas dos posiciones opuestas e igualmente alejadas de la realidad, hay que mantener el lugar central de los tres principios de análisis que acaban de ser extraídos: la subordinación de la acción social a la intervención del Estado, la combinación, en toda acción política, de la defensa de los intereses económicos, de la lucha contra la dominación exterior y de la voluntad de integración nacional, y de la desarticulación de la acción económica, de la organización política y de las expresiones ideológicas.

La combinación de estos caracteres generales de la acción colectiva da a ésta un tono particular. El lenguaje de la racionalidad económica, sea liberal o marxista, queda constantemente cubierto a la vez por los ornamentos retóricos de la ideología y por el calor de la experiencia vivida. La política habla menos de clases que de comunidades concretas o de la humanidad. De ahí esa mezcla de dulzura y de violencia que se opone de forma tan constante a la frialdad o a la pesadez didáctica de la política europea. En América Latina la política es menos asunto de interés que de pasión. El racionalismo occidental dirá, desde lo alto de sus certidumbres, que esa ética de la convicción debe ser sustituida por una ética de la responsabilidad, para emplear los términos de Max Weber. Pienso, por el contrario, que la modernidad no se confunde con la racionalidad, sino más bien con una imagen cada vez más compleja y más completa de la persona humana, que es a la vez razón y sentimiento, individualidad y comunidad, pasado y futuro, y que frente a un Occidente obnubilado

por sus intereses y sus placeres y un Oriente encerrado bien en el totalitarismo político, bien en el integrismo religioso, la América Latina vive, con más fuerza e imaginación que cualquier otra parte del mundo, la búsqueda de una nueva modernidad, de un nuevo renacimiento.

Esta amalgama de moral y de política, de economía y de religión, de personalización de las relaciones sociales y de defensa comunitaria es de una gran fragilidad. Crea más bien actores que acción y la teatralidad de la acción colectiva tiene como contrapartida su discontinuidad, como si las pasiones pudieran producir dramas breves y violentos con más facilidad que acciones organizadas a largo plazo. El sufrimiento, la esperanza y el testimonio son más visibles que la organización y el cálculo. La escena política de la América Latina se parece a los calvarios esculpidos por Aleijadinho en las viejas ciudades coloniales del estado brasileño de Minas Gerais. Esta política barroca parece agotarse en sus gestos; produce más movimientos que estrategias, más protestas que programas, pero ¿con qué derecho se considera que esa amalgama de vida privada y vida pública es más «primitiva» que su separación, producida por la filosofía de las Luces y el racionalismo progresista? La «blandura» de la política latinoamericana ¿no ha protegido, en lo esencial, el continente de las violencias de la industrialización, capitalista o socialista? La masa inmensa de los excluidos no ha impedido la ampliación, desde hora temprana, del mundo de los ciudadanos, mientras que nuestra modernización se ha basado en una proletarización brutal y duradera de los trabajadores de la industria, que no ha impedido que la miseria campesina se mantenga durante mucho tiempo, y mientras que el poder y la economía soviéticos se han construido sobre el infierno inmenso del Gulag y el país más identificado con la modernización acelerada, Alemania, ha basculado entre el nazismo y sus campos de concentración. ¿Dónde está el subdesarrollo, dónde las formas más primitivas de industrialización y de modernización? Mucha sangre y muchas lágrimas se han derramado en América Latina, pero quizá menos que en nuestra Europa, tanto en la del Oeste como en la del Este, tan orgullosa de su razón, de su ciencia y de su riqueza.

Tercera parte

Intervenciones del Estado y movimientos sociales

Introducción

Características generales de los movimientos sociales

No entraremos aquí en un análisis general de los movimientos sociales, sino que elegiremos claramente entre los tres sentidos principales que se han dado a esta noción. Para algunos, un movimiento social es la defensa racional de *intereses* colectivos. Este sentido supone que pueden defenderse esos intereses en sí mismos y defenderlos en un mercado económico o incluso político. Situación que corresponde, a menudo, a las negociaciones salariales o a la acción de grupos de presión en los países industrializados o incluso en América Latina, pero que abarca sólo una débil parte de las formas de movilización colectiva porque éstas, como hemos visto, no se reducen casi nunca a la defensa de intereses categoriales o de clase y siempre dan una gran importancia a objetivos de integración nacional o de lucha contra la dependencia exterior. Para otros, los movimientos sociales serían reacciones ante la sacudida de uno de los aspectos principales del sistema social cuando las instituciones políticas no tienen capacidad para operar los ajustes necesarios. El interés de esta concepción es subrayar el aspecto «salvaje», «inorganizado», de muchas luchas sociales y también su carácter defensivo, conservador incluso en el caso, por ejemplo, de las luchas obreras o campesinas para la defensa del empleo o del nivel de vida. Pero hay que recordar que el tema del desarrollo, de la mutación histórica, es más importante en América Latina que el del orden social, y que la mayoría de las acciones colectivas

que tratan de derribar ahí las barreras, de abrir y transformar el sistema social y político. Por lo tanto, hay que adoptar el tercer sentido dado a la noción de movimiento social: un conflicto colectivo que enfrenta formas sociales opuestas de utilización de los recursos y de los valores culturales, pertenezcan éstos al orden del conocimiento, de la economía o de la ética. Hemos de añadir, acto seguido, que existen dos órdenes complementarios de movimientos sociales: los que se sitúan en un tipo de sociedad, por ejemplo la sociedad industrial, y los que cuestionan el modo de paso de una sociedad a otra, la gestión del desarrollo. En ambos casos, el problema principal estriba en saber cómo pueden constituirse movimientos colectivos de importancia central, superando la defensa de intereses particulares y afirmando la capacidad de una categoría específica para intervenir en la formación de políticas generales de organización o de transformación de la vida social.

¿Puede concluirse de las observaciones precedentes una fuerte o una débil capacidad de la América Latina para producir movimientos sociales centrales? La Europa occidental industrializada ha difundido en el mundo la idea de que la vida de una sociedad estaba dominada por el conflicto de las clases, es decir, por conflictos y negociaciones entre fuerzas sociales organizadas de manera autónoma. Del Tercer Mundo ha llegado la idea del papel dominante de los movimientos de liberación nacional en la descolonización y en la creación de nuevos Estados nacionales. Entre estas dos situaciones opuestas, ¿muestra América Latina la suma de esos dos tipos de movimientos sociales o su debilidad conjunta?

Una primera respuesta a esta interrogación es que, en América Latina, los tres tipos de conductas colectivas que acabamos de evocar: la defensa de intereses colectivos, la presión extra-institucional, los movimientos sociales, es decir, los conflictos que afectan a la gestión de los principales recursos económicos y culturales, son más interdependientes que en otra parte. En casi ninguna parte aparece una acción puramente económica o, a la inversa, un movimiento de liberación nacional, o incluso simples motivos, que se desarrollarían sin relaciones con otros tipos de acción, lo cual es una consecuencia directa de las ideas de tridimensionalidad y de desarticulación de la acción colectiva. Pero, sobre todo, la *subordinación de los movimientos sociales a la acción del Estado* constituye la limitación más grave de su capacidad de acción colectiva autónoma. Este tema será el hilo conductor de esta tercera parte. El análisis de las luchas campesinas y obreras mostrará, desde luego, numerosas tentativas para crear movimientos sociales, en el sentido preciso que daremos a partir de ahora a esa noción, pero cada vez se impondrá la misma conclusión: los movimientos sociales siguen estando subordinados a las intervenciones políticas y, principalmente, a la acción del Estado. Esa subordinación no llega hasta la absorción, como en las inmensas zonas conquistadas por regímenes comunistas o nacionalistas, pero se

opone de forma eficaz a la formación de movimientos sociales autónomos, de tipo occidental.

En los países que se definen más por su proceso de cambio histórico, por su desarrollo, que por su participación en un tipo social, el Estado es el actor social principal, porque el papel propio del Estado es mantener la continuidad de la sociedad nacional a través de sus cambios económicos y sociales y frente a otros Estados, amigos o enemigos. Pero el Estado, actor central del desarrollo, no actúa sólo en su esfera propia, regaliana: no se preocupa únicamente de la soberanía nacional y de la supervivencia económica del país. Interviene en la sociedad civil, y de forma tan profunda, incluso, que, en las sociedades dependientes, no existe separación clara entre el Estado y la sociedad civil, aunque ésta no se encuentre completamente absorbida por aquél, como en otros regímenes. Las sociedades dependientes están, como ha indicado la tipología general de los modos de desarrollo, en una situación a la vez paralela y opuesta a la de los regímenes que se han llamado bismarckianos. En éstos, el Estado sirve de agente a la formación de actores sociales y en particular de una clase dirigente capitalista. En las sociedades dependientes, por el contrario, es el Estado el que se convierte en el agente principal del desarrollo económico e, incluso, a menudo, de la organización de las reivindicaciones sociales. El Estado controla las empresas lo mismo que moviliza a la clase obrera. Lo que, en otra parte, serían movimientos sociales no aparecen aquí sino como respuestas, positivas o negativas, a las intervenciones del Estado. Los elementos más modernizadores de la burguesía se apoyan directamente en el Estado y en las empresas públicas que, sobre todo en el sector energético, representan la voluntad de industrialización nacional. De otro lado, el sindicalismo se halla o controlado por el Estado, como en México o en la Argentina de Perón, o, incluso, directamente creado por el Estado, como en Brasil durante el largo período dominado por Getúlio Vargas.

Esta fusión parcial de las fuerzas sociales y del gobierno puede conducir a dos regímenes opuestos. De un lado, a la integración, de tipo corporativista, de intereses sectoriales en el aparato de Estado y a la subordinación de los actores sociales a una lógica política. Semejante integración puede llegar hasta un modelo fascista. Pero el modelo latinoamericano deja una parte demasiado importante a la acción autónoma de los capitalistas extranjeros y del juego político nacional para que el Estado emprenda una movilización ideológica de los actores sociales. Frente a las clases populares el Estado interviene mediante medidas, bien de represión, bien de integración y de redistribución, raramente mediante campañas de movilización ideológica. Las mismas dictaduras militares nunca han sido totalitarias, nunca han creado aparatos de movilización popular, salvo, en parte, en el caso del régimen militar de Velasco en Perú, régimen que se quería progresista. De otro lado, la interpenetración de fuerzas sociales y del Estado puede conducir a la colonización

del Estado por grupos de interés, incluso a lo que se ha denominado el *poder dual* en Bolivia y, de manera más limitada, en el Chile de la Unidad Popular, situación en la que los sindicatos en particular controlan una parte de la autoridad del Estado. El resultado ineluctable de semejante combinación es la doble descomposición del Estado, debilitado por el «sectarismo», y de las fuerzas sociales que pierden toda capacidad de movilización autónoma, dada su subordinación a unas estrategias propiamente políticas. La complejidad de la movilización social y la debilidad de los vínculos de representatividad entre actores sociales y fuerzas políticas, subordinan los movimientos sociales a unos partidos políticos que, a su vez, están más orientados hacia el Estado que hacia la sociedad civil. Pocos partidos políticos aceptan, en América Latina, ser partidos de oposición durante un largo período, como ocurrió con los partidos obreros y en particular con los partidos comunistas en muchos países capitalistas centrales. Todos los partidos se forman y actúan como partidos de gobierno, lo cual supone que conservan una gran disponibilidad para organizar las alianzas que les permitirán llegar al poder. Lejos de la imagen occidental de movimientos sociales que dirigen unas formas de intervención política, que se traducen ellas mismas por una acción del Estado, en América Latina es la intervención del Estado lo que determina unos actores políticos que, a su vez, dirigen la acción de movimientos sociales débilmente integrados y la mayoría de las veces heterónomos.

1.—Las políticas nacional-populares

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

1. El populismo

La experiencia populista

En los países donde la modernización es, en gran parte, importada, nace el deseo de un desarrollo que sería lo contrario de una modernización dependiente y que preservaría, o incluso restablecería, los aspectos fundamentales de la identidad nacional. Contra la prioridad dada a las inversiones, aparece la insistencia en la participación social y la integración de la sociedad nacional. El *populismo* es esa reacción, de tipo nacional, a una modernización que está dirigida desde el exterior. Su tema central es rechazar las rupturas impuestas por la acumulación capitalista o socialista, compensar la modernización inducida mediante un incremento el control colectivo de los cambios económicos y técnicos; en resumen, mantener o recrear una identiad colectiva a través de transformaciones económicas que son a la vez aceptadas y rechazadas. El populismo es una tentativa de control antielitista del cambio social. La industrialización capitalista, dice, ¿no ha sido pagada al precio trágicamente elevado de la proletarización de millares de trabajadores, explotados o reprimidos? ¿Y la industrialización soviética no se obtuvo por el sacrificio de generaciones enteras? Incluso si esos regímenes, capitalista o socialista, muestran, frente a costos humanos elevados, resultados económicos impresionantes, los partidos y los regímenes populistas prefieren

un desarrollo continuo, sin ruptura, que sea capaz de combinar unas transformaciones reconocidas como necesarias con el mantenimiento de formas tradicionales, revivificadas, de organización económica y social. Puede pensarse que el populismo es una ilusión, que no hay transformación sin ruptura, que no puede construirse el futuro conservando o reconstruyendo el pasado. Pero esta crítica, por justificada que esté históricamente, no puede llevarnos a un juicio puramente negativo sobre el populismo. En tal caso, también podríamos condenar sumariamente el capitalismo occidental denunciando el desarraigo y la pauperización que ha impuesto a millones de trabajadores. El populismo no puede, sobre todo, ser identificado con la demagogia de ciertos regímenes. Si a principios del siglo XX todavía parecía imposible considerar la racionalización capitalista como el único camino posible hacia la modernización, al final de nuestro siglo ¿cómo no reconocer que la mayor parte del mundo ha sido profundamente marcada por movimientos de tipo populista? A partir de la revolución mexicana de 1910-1920, pero también de ciertos aspectos del comunismo chino, y sobre todo frente a muchos movimientos políticos del Tercer Mundo, ¿cómo no reconocer la inmensa importancia de esa reacción que puede ser antirracionalista e incluso conducir a dictaduras antimodernistas, pero que puede apelar también, de forma más equilibrada, contra el universalismo de la modernidad elaborada por los ingleses y los franceses en los siglos XVIII y XIX, a la especificidad de una cultura nacional y a un Estado que se identifique con un pueblo? ¿No es la América Latina uno de los lugares donde modernización económica y nacionalismo cultural han buscado la mayoría de las veces combinarse antes que combatirse?

Los elementos del populismo

— Esta defensa de la continuidad de la organización sociocultural frente a la penetración de capitales, de técnicas y de ideas de origen extranjero es el elemento central de todos los populismos. En la Rusia del siglo XIX, los populistas fueron eslavófilos contra los occidentalistas. El populismo opone a la filosofía de las Luces y al carácter natural, cuasicientífico, del proceso de modernización, una voluntad popular, es decir, la apelación a un actor colectivo definido en su particularidad y, en primer lugar, en su historia.

— Esta apelación directa al *pueblo* elimina las formas de representación política habituales de Occidente. Y como el pueblo no se organiza espontáneamente por sí mismo, se da a los intelectuales y a una parte de las clases medias un papel central. Estos intelectuales no juegan aquí el mismo papel que en la filosofía de las Luces, donde eran mediadores entre poblaciones y unos principios impersonales, científicos. Los intelectuales populistas no hablan en nombre del pueblo, sino de *su* pueblo, y

son agentes de formación de una conciencia nacional. La relación de los intelectuales y del pueblo es tan central en los movimientos populistas como el de las clases sociales y de los partidos políticos en el modelo occidental o como el de la clase y de la vanguardia revolucionaria en el modelo comunista.

Estos dos elementos del populismo conducen, ambos, a dar un papel central al Estado, porque sólo el Estado puede ser la expresión del pueblo y de la historia nacional. El poder político no puede constituir un sistema de instituciones reguladas por unos principios generales. El conjunto del sistema político debe ser controlado por el Estado, que recibe su legitimidad menos de mecanismos electorales que de su correspondencia, proclamada por él mismo y ratificada por manifestaciones de masas, con los intereses fundamentales de la nación.

El populismo se opone a toda idea de conflicto social interno, en particular a la lucha de clases. El pueblo al que se refiere el populismo no es una clase sino una comunidad. Emplea un lenguaje antielitista pero que no debemos confundir con la ideología anticapitalista de los movimientos de clase occidentales. De ahí las difíciles relaciones entre el populismo y los partidos marxistas: tienen en común, en la mayor parte del mundo, el antioccidentalismo y el antiimperialismo, pero mientras que los primeros apelan a la especificidad nacional, los otros hablan en nombre de clases populares, de hecho poco constituidas, y, cada vez más, de los intereses de la Unión Soviética, identificados con los de las clases populares a nivel mundial. Los regímenes populistas son antioligárquicos, antielitistas e igualitarios, pero apuntan más a la integración de una colectividad nacional, a la identificación del pueblo y del poder, que al desarrollo y a la superación de luchas sociales estructurales.

El Estado domina la sociedad

Un régimen nacional-popular se define por la interdependencia de tres componentes: el Estado como defensor de la identidad nacional frente a una dominación extranjera; mecanismos políticos y sociales de integración; la defensa de la cultura nacional y popular. Estos elementos son complementarios; pueden, sin embargo, oponerse unos a otros. El papel central del Estado puede entrar en conflicto con la defensa de una cultura popular o también con mecanismos políticos de integración social, que pueden poner en peligro el papel central del Estado. Pero lo esencial es el predominio de las categorías políticas sobre las categorías sociales y su corolario, la ausencia de diferenciación entre el sistema político y el Estado. Un régimen nacional-popular sólo puede existir si Estado, sistema político y actores sociales no están separados unos de otros, si no son actores que tendrían que negociar sus relaciones. No se

pueden aceptar los análisis que reducen el populismo bien a un movimiento social, bien incluso a la ideología de un Estado, porque el populismo es precisamente la identificación de un movimiento con un Estado y se define mejor como una política.

F. Weffort ha definido el Estado nacional-popular como un «Estado de compromiso», noción que inmediatamente conoció un éxito merecido. Designa perfectamente el puesto central del Estado que no se identifica con ninguna fuerza social; puede conducir, sin embargo, en una dirección peligrosa, si la interpretamos como la definición de un Estado que intervendría en clases sociales constituidas y que actúa al margen de él, como si existiera un equilibrio entre clases de las que ninguna de ellas ocuparía una posición hegemónica. Tal situación corresponde a lo que Engels analizó como el cesarismo. Por el contrario, el Estado populista no interviene más que en una situación social cuyos actores de clase mismos no son definidos independientemente de las intervenciones del Estado. No podemos contentarnos ya con llamar populista a un sistema político abierto, que posee una gran capacidad de integración de nuevos actores. La política de los Estados Unidos, en particular, ha tenido y sigue teniendo esa capacidad, sin que por ello tengamos que incluir a los Estados Unidos en la categoría de los Estados nacional-populares, porque el Estado norteamericano, fuertemente marcado por sus orígenes jurídicos, apela más a principios universales del derecho que a la especificidad de una nación, además de que no se han constituido sino progresivamente y a través de una sucesión de olas inmigratorias. Tal vez este modelo político pueda ser aplicado de manera igual de útil en otros países, pero es poco probable que pueda definirse otra zona, tan vasta como América Latina, en la que ese modelo ocupe un lugar central.

Por eso —y sin olvidar las diferencias que separan a los países y los períodos—, defenderé aquí una posición que puede parecer extrema: en lugar de tratar de definir ciertos regímenes como típicamente populistas, me esforzaré por demostrar que en América Latina existe una forma dominante de intervención social del Estado, que, con otros, denominaré la *política nacional-popular,* y que corresponde a la naturaleza política de una sociedad dependiente. Semejante afirmación no implica en modo alguno que todos los sistemas políticos o todos los aspectos de cada uno de ellos pertenezcan al modelo nacional-popular, sino sólo que éste constituye un centro de referencia necesario para comprenderlos todos. Esta hipótesis es difícil de defender, puesto que se trata de incluir en un mismo modelo situaciones políticas evidentemente diferentes unas de otras. El riesgo corrido es privar de todo contenido preciso a la noción de régimen nacional-popular. Pero la apuesta estriba en demostrar que, al margen de las diferencias entre los países, existe un modelo político central, que constituye uno de los aspectos principales del modelo latinoamericano de desarrollo. En el modelo político nacional-popular, el Estado no está ni por encima de la sociedad civil ni es el poder ejecutivo

de una democracia representativa. D. Pécaut ha insistido en la autonomía de las «esferas» de su acción. De un lado, está vuelto hacia el exterior, sobre todo allí donde la economía se halla orientada por la exportación, o cuando la crisis de la balanza de pagos enfrenta al país a un problema fundamental de supervivencia; de otro, toma la iniciativa de la industrialización, tanto por sus inversiones como por sus leyes sociales destinadas a reforzar las nuevas categorías de trabajadores. La separación, más que la complementariedad, de sus funciones le deja una gran autonomía, que refuerza mediante una política de clientela cuyos agentes de transmisión son los caciques de la América hispánica o los *coronéis* brasileños. El Estado no da su unidad a una sociedad que, sin él, se disolvería en los particularismos y la violencia; no es un soberano, porque es más una fuerza social frente a otras fuerzas sociales que un árbitro. Su papel es central, pero menos por su fuerza propia que porque el conjunto de los actores sociales responde a unas intervenciones más que a sus relaciones entre sí.

Masa, pueblo, nación

J. C. Portantiero ha opuesto dos formas de construcción de la nación, bien a través de su identificación con un Estado, lo cual corresponde a la acción de las clases dominantes, bien a través del tema nacional-popular, lo cual corresponde, según el autor argentino, a la vía seguida por las clases populares latinoamericanas hacia la acción política y a lo que, con Gramsci, denomina la hegemonía. Esta concepción puede llevar en sí misma los mismos peligros que la de Weffort. Repitámoslo una vez más, la política aparece como representativa de grupos sociales de intereses, mientras que en América Latina los actores de clase no tienen más que una autonomía, una organización y una capacidad de acción limitadas. Es difícil pasar de los obreros a la clase obrera o de los campesinos al movimiento campesino, y las formas moderadas del nacionalismo se apoyan allí sobre un conjunto muy diversificado de categorías sociales. La relación entre clases sociales y acción política no es siquiera más estrecha en el caso del nacionalismo revolucionario. La idea marxista de revolución social no se aplica fácilmente ni a la revolución mexicana, ni a la revolución boliviana, ni a la revolución nicaragüense. *Bolivia* aparece, sin embargo, como el país en el que una clase social, o mejor su núcleo central, los mineros del estaño, ha jugado un papel político central, y R. Zavaleta habla, refiriéndose a él, de «doble poder». Sin embargo, la situación boliviana, incluso en 1970-1971, en la época de la Asamblea Popular, no corresponde a la experiencia descrita por Lenin y Trotski, la del soviet de obreros y soldados en Petrogrado. En el seno del sindicato existe, en efecto, una tendencia a la acción de clase; está representada por el POR y por su principal dirigente, Lora; pero su influencia sigue siendo limitada. En el momento de la revolución de 1952,

fue la acción de los obreros y de los campesinos lo que transformó un golpe de Estado en revolución, pero rápidamente el partido que había dirigido ese golpe de Estado, el MNR, recuperó el control del proceso político. De igual manera, la Asamblea Popular estuvo ampliamente subordinada a la estrategia del general Torres, que se apoyó en el movimiento popular para triunfar de Miranda en el seno del ejército. Del otro lado, esa asamblea fue orientada por J. Lechín y el MNR, que también tenían miras esencialmente políticas. En cuanto a sus componentes obreros, se dividieron entre el Partido Comunista, que consideraba la Asamblea como una escuela de poder revolucionario, y la tendencia trotskista, que fue la única que pretendía construir un auténtico doble poder, un soviet capaz de tomar decisiones y distribuir armas. Cuanto más incrementaban las tendencias más revolucionarias su influencia, más se acercaba el golpe de Estado que finalmente llegó en agosto de 1971, cuando la fracción del ejército que apoyaba a Torres tomó conciencia de que perdía el control del proceso y cuando el mismo MNR se dividió. La historia de Bolivia, país donde la clase obrera parece hallarse más cercana que la de cualquier otro país a dirigir una revolución de clase, muestra la debilidad de toda acción de clase: ésta sólo tiene fuerza si se sitúa en el interior de un movimiento nacionalista popular. La excepción aparente a esta afirmación general es *Chile*. En este país, la acción de clase aparece independiente y poderosa, tal vez porque su sistema político se organizó sobre unas bases representativas, análogas a las de Francia o Italia, a comienzos del siglo XX. Pero aún hay que hacer una observación: el Partido Socialista —fuerza política central de la izquierda chilena— siempre fue un partido multiclasista, en el que, por un lado, la voluntad de integración social y política de la pequeña clase media y, por otro, la lucha antiimperialista, jugaron un papel más importante que la ideología marxista. Paralelamente, la Democracia Cristiana fue más un partido populista que una fuerza de derecha.

En el conjunto del continente, la noción de *pueblo,* tal como la emplearon los populistas rusos del siglo XIX, aparece débil, y los intelectuales no se califican de populistas, observa D. Pécaut. Y es porque las categorías populares no forman un mundo nítidamente excluido del sistema político, como ocurría en Rusia, y tampoco constituyen clases sociales definidas por su lugar en un modo de producción. El pensamiento latinoamericano está dominado por la separación y la complementariedad del tema fuerte de la *nación,* más político que social, y del tema débil de la *masa,* que indica más la exclusión y la alienación que una condición social. El pensamiento social europeo se ha organizado durante mucho tiempo en torno al tema central de las clases; en América Latina, la dualización de la economía y de la sociedad introduce una dualidad de nociones: la nación es el espacio de los ciudadanos; la masa es el modo de existencia de los excluidos. El pueblo es la imagen mítica de una reunificación, deseada, pero lejana, de la sociedad.

2. Partidos y Estados nacional-populares

No existen, por tanto, movimientos «populistas» definidos al margen del ejercicio del poder. Pero podemos distinguir —al menos de manera relativa— unas fuerzas nacional-populares apoyadas en un partido o una corriente política y unos Estados, identificados o no identificados con unos líderes, que suscitan de forma más directa una movilización nacional-popular.

Los partidos de tendencia populista

El régimen *colombiano* ha permanecido casi constantemente muy lejos de las orientaciones nacional-populares. Colombia es el único país en el que nunca han desaparecido las instituciones representativas, salvo el breve y frágil Gobierno del general Rojas Pinilla. El sistema político, dirigido por la oligarquía repartida entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, siempre ha conservado una gran capacidad de integración, incluso durante los gobiernos de López y a pesar de los esfuerzos de transformación del Partido Liberal llevados a cabo por Gaitán. De ahí el carácter particularísimo de la acción de este último, que fue a la vez un miembro activo del sistema político, esforzándose por tomar la dirección del Partido Liberal, y el organizador o el defensor de movimientos populares, desde el principio de su vida política, en 1929, cuando defendió a los obreros de la United Food, y en 1934, cuando creó la *Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria,* buscando apoyos en los barrios obreros de las ciudades. Gaitán fue la figura más directamente populista de la política latinoamericana. Decía: «Yo no soy un invididuo, sino el pueblo», y su asesinato, el 9 de abril de 1948, desencadenó un gran levantamiento popular, el *bogotazo,* cargado de odio de clase, y que fue reprimido sangrientamente.

El carácter extremo del gaitanismo se explica, en gran parte, por la apertura del sistema político colombiano en el transcurso de los años treinta, gracias a la «revolución en marcha» de López. Lo mismo que Gaitán, López mantuvo un discurso nacionalista y populista, al menos entre 1934 y 1936. Logró la reunión de los comunistas y del propio Gaitán sin por ello hablar de frente popular. De suerte que los temas de la independencia nacional, de la integración social y de la defensa de los intereses populares estuvieron presentes de forma simultánea en ese presidente, que pertenecía a una de las grandes familias de la oligarquía financiera y que supo a un tiempo proteger por la ley 200 de 1936 a los pequeños campesinos, desarrollar la industrialización y mantener la orientación exportadora de la economía colombiana. El caso de A. López es más interesante todavía debido a que, antes de 1934, y sobre todo después de su segunda elección a la presidencia, en 1942, no llevó para nada la política que había sido la suya durante la revolución en marcha.

Pero Gaitán quiso ir más allá de los límites de un sistema ya abierto, salir de la oposición de los dos partidos tradicionales, apelar al país real contra el país político. Tentativa de desbordamiento que fue imitada, del otro lado, por el fundamentalismo conservador de L. Gómez, que apeló a la tradición religiosa y a la unidad nacional. Gaitán no se apoyó en los marginados sino más bien en las categorías que se habían reconocido durante la Revolución francesa en los *sans-culottes,* los artesanos y los comerciantes en particular, y combatía el liberalismo oficial y a la CTC. Su movimiento tuvo aspectos nacionalistas y xenófobos, que se vieron en el momento del *bogotazo,* cuando en particular fueron saqueados los almacenes que pertenecían a comerciantes de origen árabe.

No obstante, Gaitán no trató de hacer estallar el sistema político, sino más bien de combinar el funcionamiento de las instituciones con el desarrollo de movimientos populares gracias a un programa de integración social, en particular de leyes sociales, y a una ideología moralizadora que apelaba ante todo al orden, a la unidad y a la integración nacional. Cuando se desencadenó la huelga general del 13 de mayo de 1947, no se puso a su cabeza. Gaitán fue un personaje populista en una situación que lo era poco; su ejemplo muestra que no hay contradicción entre el mantenimiento del control de la oligarquía sobre la sociedad, la abertura del sistema político y la formación de movimientos populares urbanos.

Otro ejemplo de un partido no populista pero arrastrado hacia el modelo nacional-popular es el del argentino Partido Radical. En *Argentina,* el radicalismo ha sido tanto tiempo el adversario principal del peronismo, que se le identifica con la política de clases medias que aceptan la hegemonía de la oligarquía. Pero esa imagen, que corresponde a la acción de R. Balbín, descuida aspectos dominantes durante mucho tiempo del radicalismo. La creación de la Unión Cívica Radical por H. Yrigoyen en 1891 tenía una orientación populista y nacionalista bastante cercana a la llamada de Gambetta a las «nuevas capas», e Yrigoyen había combatido el materialismo norteamericano en nombre de un espiritualismo por otra parte bastante vago. Fue el componente social lo que estaba peor definido en el radicalismo, porque su oposición a la oligarquía no le impidió, tras la elección de Yrigoyen a la presidencia en 1911, chocar con un movimiento obrero muy activo y poner en práctica una represión sangrienta, en particular en 1919. De hecho, Yrigoyen se vio arrastrado, sobre todo, por la voluntad de participación política de las nuevas clases medias y de los emigrantes. Tras su eliminación en 1930 por el general Uriburu, los renovadores del radicalismo volvieron a hallar una inspiración nacional-popular a través de FORJA, que agrupaba sobre todo a los intelectuales, luego el Movimiento Intransigente y Reformador, el MIR, que se apoderó de la Unión Cívica en 1948. A. Frondizi, líder de los intransigentes, se convirtió en jefe del partido en 1954 y fue elegido presidente en 1958. Desplegó un programa desarrollista y nacionalista que

atrajo a los intelectuales de izquierda y a los «marxistas nacionales» como R. Puiggros. El movimiento frondizista estuvo, por tanto, cerca de los temas del peronismo, aunque dando más importancia a la creación por el Estado de una infraestructura industrial, lo que acerca a Frondizi a las ideas de J. Kubitschek y de H. Jaguaribe en Brasil. Frondizi logró el apoyo de Perón, cuyo Partido Justicialista estaba proscrito, pero, después de haber resistido a un gran número de presiones y de sublevaciones militares, cayó en 1962. Los elementos nacionalistas y moderados del ejército, los *azules,* obtuvieron que fuera reemplazado por otro radical, Guido, hasta las elecciones de 1963, en las que, mediante la abstención de peronistas y frondizistas, triunfó R. Balbín, radical conservador.

El radicalismo argentino ha estado, por tanto, constantemente dividido entre dos tendencias que han terminado por separarse en dos formaciones rivales, la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín. A buen seguro que éste no es populista y Frondizi es más un intelectual de izquierda, cercano a Kennedy, que un caudillo nacional-popular. Pero la historia del radicalismo muestra que las tendencias populistas estuvieron presentes en Argentina al margen del peronismo, tanto antes como después del primer Gobierno de Perón y en el seno del Partido Radical mismo.

Frente a estas dos figuras marginales, Gaitán y Frondizi, hay que situar, lo más lejos posible de regímenes oligárquicos como Colombia antes de 1948 y la Argentina de principios del siglo, a los grandes partidos populistas y, ante todo, al APRA peruano, el más importante de ellos. La *Alianza Popular Revolucionaria Americana* nació bajo la doble influencia de la reforma universitaria de Córdoba y de la revolución mexicana. Al principio su ideología estuvo dominada por un violento antiimperialismo y la apelación a la defensa de *Indo-América.* Sus primeros apoyos fueron estudiantes, jóvenes profesionales, pero también trabajadores de la caña de azúcar de la costa norte y los mineros de Cerro de Pasco. Víctor Raúl Haya de la Torre es, al principio de su larga carrera política, más antiimperilista que nacional-popular. En 1928 escribe: «El Estado es, en potencia, un instrumento de defensa de las clases campesinas, trabajadoras y medias, unidas contra el imperialismo.» Ese antiimperialismo le lleva a defender un Estado fuerte, creador de un capitalismo de Estado. Pero en el transcurso de la segunda fase de su existencia, y a partir de sus conflictos sangrientos con los militares, el APRA se transforma cada vez más en agente central de integración política, hasta buscar una alianza con Prado y con Odría. Durante el largo período de proscripción que siguió al levantamiento de Trujillo en 1932, el APRA es a la vez revolucionario e institucionalizante. Se vuelve cada vez más populista a medida también que se agrava su conflicto con el Partido Comunista dirigido por Ravines. El APRA combina una voluntad de integración nacional con la defensa de los trabajadores organizados y un programa antiimperialista, uniéndolos en la figura de su líder, Haya de

la Torre, que se convierte en el único vínculo real entre los miembros del partido y los ciudadanos. El APRA no se define por una línea política, sino por la búsqueda constante de la integración de temas sociales, políticos y nacionales, que tienden naturalmente a discrepar en la situación peruana. En 1931, Haya de la Torre decía: «Tenemos que luchar por la peruanización del Estado y por la incorporación económica y política de las fuerzas mayoritarias que constituyen la energía principal de la Nación, y que también son las que, por su número y su calidad, tienen democráticamente el derecho a intervenir en la dirección del destino nacional.» Semejante declaración combina el antiimperialismo, la llamada a las fuerzas populares y la voluntad de apertura del sistema político.

El APRA es el modelo de los partidos populistas. Ha sabido movilizar mejor que cualquier otro unas demandas tan globales que H. Neira lo consiera como una religión política. Entre los líderes que no han llegado al poder, ninguno ha ejercido el ascendiente de Haya de la Torre, cuya palabra y figura dominan medio siglo de vida política peruana y no han cesado de concitar una devoción casi indiferente a los cambios de línea política del partido. Este verdadero culto se alimentó hasta la muerte del líder de la experiencia dolorosa, primero del exilio bajo Leguía, luego de la persecución y de las «catacumbas» tras la matanza de Trujillo. En este caso más que en cualquier otro se impone la idea de la desarticulación de la acción colectiva: las reivindicaciones sociales, obreras y campesinas, están constantemente presentes —desde el principio, en la región de Trujillo, donde la insurrección urbana se extendió a una sublevación de los campesinos de las plantaciones de caña de azúcar—, pero se han incorporado a una acción política que, por lo que a ella misma se refiere, está subordinada a un discurso y a una figura, los del jefe. Las formas de movilización política del APRA evocan, en ocasiones, las de los fascismos europeos, pero su contenido social y la orientación política del partido —como en el caso del peronismo— son radicalmente diferentes de los de la Italia musoliniana o los de la Falange española.

Ningún partido populista puede ser definido como «representativo» de una o de varias clases sociales. Extrae su fuerza de su movilización misma, del vínculo de *hermandad* que une a sus miembros, y de su devoción por el *jefe*. Pero el necesario rechazo de una concepción parlamentaria de los partidos políticos no debe inducirnos a no ver en ellos otra cosa que los instrumentos de una ambición o de un culto personal. La fuerza del líder procede de que sólo él consigue unir demandas muy diversas y que no se unen más que por la prioridad dada a las fuerzas fundamentales de la vida pública: primero la Nación, afirmada en sus luchas contra el imperialismo yanqui y contra la oligarquía nacional al servicio de los mercados extranjeros; y también la ciudad, en el momento en que aparecen las grandes metrópolis; por último, y siempre, el Pueblo. Estos caracteres que encontramos en tantos partidos están más acusados en el caso del APRA, porque este partido es el único que, hasta la reciente

victoria de Alan García, nunca había llegado al poder, pese a que haya estado muy cerca de él en varias ocasiones. Con razón se ha podido hablar, en América Latina, de un modelo aprista cuya influencia se deja sentir en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela e incluso en Colombia.

El caso más importante de un partido extendido a un movimiento populista es el de la *revolución boliviana,* en la que la presión popular de los mineros, de los obreros y de los campesinos se mezcló a un programa de lucha antiimperialista y de una apertura del sistema político defendido por el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario. La oligarquía boliviana, la *rosca,* ya había perdido el poder político cuando el Estado abandonó la vieja ciudad de Sucre para instalarse en La Paz, pero había conservado el control de la vida económica, a pesar de una sucesión de golpes de Estado, civiles o militares. La revolución de 1952 marcó el triunfo de un movimiento más que el de un Estado nuevo, porque éste no logró imponerse al conjunto del país y porque Bolivia fue dirigida, de forma inestable y cambiante, por una especie de co-gobierno entre el Estado y la central sindical, la COB. Así se mantuvo un clima populista en el que ni las reivindicaciones de clase del PC o del POR trotskista, ni la acción modernizadora de las clases medias del MNR, ni los temas antiimperialistas llegaron a imponerse a los demás, como tampoco a integrarse con ellos en el seno de un Estado nacional-popular capaz de controlar el proceso político y social. El MNR no se convirtió en un partido-Estado, como el PRI mexicano; al contrario, se descompuso progresivamente hasta que su debilitamiento extremo abrió el camino a un Estado militar antipopulista. Después de la dictadura de Barrientos (1964-1970), los gobiernos militares de Ovando y de Torres conocieron un grado también bajo la integración, sobre todo cuando se creó la Asamblea Popular, dominada por el sindicato de mineros y el Partido Comunista; fragilidad que condujo en 1971 a la llegada al poder de un nuevo dictador, el coronel Banzer. Entre 1952 y 1964, el MNR fue a la vez un partido, un Estado y un movimiento, sin llegar a unificar esas diferentes funciones ni a asegurar su propia unidad. En su seno se combatieron los izquierdistas fieles a las tesis de Pulacayo, los centristas próximos a V. Paz Estenssoro, de orientación «desarrollista», y la tendencia de derecha, en torno a Guevara, nacionalista y a veces xenófobo y antisemita, por ejemplo en los *grupos de honor.* La derecha fue la primera en ser eliminada por la COB, e intentó un golpe de Estado que fracasó en 1953. V. Paz hubo de aliarse entonces al dirigente de la COB, J. Lechín, para llegar a la presidencia en 1960, y siguió una política opuesta a la de Siles Suazo (1956-1960), considerado por los sindicalistas como favorable al imperialismo. La disgregación del MNR aclara la debilidad de los regímenes nacionales-populares, que sólo pueden mantenerse cuando existen tendencias bastante fuertes para la integración nacional, gracias a la urbanización, a la industrialización y, más generalmente, a una coyuntura económica favorable.

Como veremos, Brasil no ha conocido apenas régimen nacional-popular. En cambio, en este país se han formado, en el plano regional, partidos y movimientos nacional-populares. Si, en 1963-1964, João Goulart representó el Estado populista, en el *Nordeste,* Miguel Arraes se puso al frente de un verdadero movimiento populista. Alcalde de Recife en 1959, gobernador del estado de Pernambuco en 1962, se apoyó en los sectores pobres de la ciudad, hacia la que huían los campesinos sin tierra, *flagelados* vencidos por unas condiciones climáticas y sociales insoportables. Arraes desarrolló un programa de modernización económica al mismo tiempo que de justicia social, opuesto a la política de Cid Sampaio, que se apoyaba en los dueños de la producción azucarera. Sostuvo también el movimiento campesino y los programas de educación de P. Freire, pero su movimiento fue sobre todo urbano y su tema central el de la participación comunitaria. Sus relaciones con el Gobierno central, que nunca fueron buenas, se deterioraron a partir de 1963. El golpe de Estado de 1964 eliminó naturalmente a M. Arraes, al mismo tiempo que a J. Goulart y a L. Brizola.

Más complejo fue el laborismo *gaúcho,* es decir, del estado de Rio Grande do Sul, cuya historia, entre 1945 y 1954, pone de manifiesto las contradicciones internas de un movimiento populista. El líder regional Pascualini quiso que el Partido de los Trabajadores Brasileños (PTB) actuase en su región como un partido popular, en lucha con el otro partido del gobierno, el PSD, apoyado en los terratenientes, a fin de crear una socialdemocracia a la brasileña. El PTB *gaúcho* se apoyó en una ideología que combinaba ideas procedentes del pensador argentino Ingenieros, de los temas positivistas y de las ideas marxistas. Mientras Getúlio Vargas tuvo siempre un proyecto más nacional que social, lo que le llevó a organizar la alianza del PTB y del PSD, que se apoyaba en bases sociales opuestas, Pascualini y el PTB *gaúcho* quisieron un movimiento social más que una fuerza política. El resultado fue que el movimiento tendió a dividirse, de un lado a incorporarse a un nacionalismo poco populista, y de otro a organizarse como partido independiente. Después de Vargas se mantuvo la misma oposición entre J. Goulart, que siguió dando prioridad a la organización de una coalición nacional-popular, y L. Brizola, que ante todo quiso formar un movimiento popular. Este ejemplo, lo mismo que el de Bolivia, parece mostrar que la noción de movimiento populista es contradictoria; supone, en efecto, la formación de un actor social autónomo, independiente del Estado, cosa que en ocasiones parece posible en el plano regional y que casi nunca lo es en el plano nacional, porque lo propio de los movimientos nacional-populares es apoyarse en la interpenetración del Estado, de las fuerzas políticas y de los actores sociales. No hay movimientos populistas de la misma forma que no hay movimientos de clase en América Latina, continente donde no existe la separación, inventada por Inglaterra, del Estado y de la sociedad civil.

Aunque Gaitán y Haya de la Torre no llegaron al poder, al menos representaron unas tendencias profundas de su país. Por el contrario, allí donde la capacidad de integración social y política es débil, los partidos nacional-populares juegan un papel menos duradero y son menos sólidos. Tal es el caso de la *República Dominicana.* Este país estuvo sometido durante mucho tiempo a la dominación patrimonial de Trujillo, pero la clase media liberal, pro americana la mayoría de las veces, y el pueblo urbano se unieron para librarse de esa dictadura. Su unión fue, sin embargo, superficial y breve, lo cual permitió al antiguo régimen volver rápidamente al poder. Pero el 20 de diciembre de 1962, el PRD, dirigido por J. Bosch, ganó las elecciones. Bosch estaba muy cerca de los dirigentes moderados del continente, de J. Figueres en Costa Rica y de R. Betancourt en Venezuela. Su programa era de democratización antioligárquica y comportaba elementos populistas. No obstante, fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 por el general Wessin y Wessin, y su caída no provocó ninguna resistencia inmediata. Fue en abril de 1965 cuando estalló una insurrección, primero militar y luego popular. Pero no es Bosch, refugiado en Puerto Rico, donde firma una alianza con el Partido Socialcristiano, quien la dirige; es el coronel Francisco Caamaño, que se convierte en su comandante militar. Esta insurrección es aplastada por los marines norteamericanos y, tras un período de transición, Balaguer, que había sido el brazo derecho de Trujillo, vuelve al poder en 1966. Caamaño, que participa en el movimiento de guerrillas inspirado por el ejemplo cubano, muere en 1973 en el transcurso de un intento de desembarco, mientras Bosch negocia con Balaguer bajo los auspicios de la Embajada norteamericana. El PRD acentúa su populismo, Bosch se separa de él e intenta crear una fuerza política orientada hacia las clases medias «ilustradas». El PRD mismo se aleja rápidamente de su orientación populista. Esta historia confusa muestra los límites de un movimiento nacional-popular en una situación a la vez colonial y dominada por el poder personal de Trujillo, que se había apoderado de una buena parte de las tierras y de las empresas del país. El populismo muy moderado de Bosch estalla: una parte de las fuerzas que lo apoyaban se unen al castrismo, mientras la clase media se refugia bajo la protección militar de los Estados Unidos. A partir de 1973 se creó una situación más radical en *Granada,* cuando el *Joint for Welfare Education and Liberation* (JEWEL) y el *Movement for People Assembly* (MAP) se fusionaron para formar el *New Movement Jewel,* que luchó contra la dictadura de Gairy, obtuvo un semiéxito electoral en 1976, y dirigió la insurrección victoriosa de 1979 que llevó al poder a Maurice Bishop. Este movimiento tenía aspectos nacional-populares, pero su acercamiento a Cuba y su rápida radicalización lo transformaron en un régimen revolucionario, hasta que se debilitó por la crisis interna que llevó a la eliminación de Bishop tras la intervención militar norteamericana. La debilidad de los movimientos nacional-populares en el istmo centroamericano y en el Caribe

se explica por la debilidad del mercado interior, que entraña una capacidad de integración social y política limitada, y por la importancia cuasi dominante del sector informal urbano que, asociado al sector rural de baja productividad, representa por lo menos el 50 por 100 de la población activa.

Una fragilidad análoga se observa en el movimiento nacional-popular en *Ecuador.* Si los gobiernos de Velasco Ibarra, sobre todo los primeros, no fueron en modo alguno populistas, la *Concentración de Fuerzas Populares* fue un movimiento populista. Su líder, Hassad Bucaram, comerciante de Guayaquil, movilizó los suburbios de la gran ciudad costera, con una población hinchada por los emigrantes procedentes de la Sierra. Pero ese movimiento poderoso se dividió rápidamente, al día siguiente de la muerte del presidente Roldós, que había resultado elegido con el apoyo de la CFP. De los elementos moderados se separó un populismo revolucionario, apoyado por los sindicatos y una coalición de extrema izquierda, el FUT. Esta división condujo al triunfo en 1984 de L. Febres Cordero, representante de la oligarquía mercantil de Guayaquil, y de su política antipopular.

Los partidos nacional-populares nunca se han organizado en torno a un tema dominante, sea éste la defensa de los trabajadores o el antiimperialismo. Combinan siempre los tres grandes temas cuya presencia simultánea define el campo político en América Latina. De ahí el poder central del líder, el único capaz de integrar estos temas. De ahí también la gran distancia que separa a los partidos nacional-populares de los partidos *comunistas,* aunque éstos también combinen en su acción diversas orientaciones. La oposición con los partidos comunistas de tipo europeo, y, *a fortiori,* con los que se sitúan en el área de dominación soviética, es evidente, porque esos partidos comunistas establecen un vínculo directo entre una acción de clase y la conquista del Estado. Lo cual supone a un tiempo la existencia de una clase obrera que tiene una organización autónoma poderosa, de una vanguardia revolucionaria y de un poder de Estado absoluto. Esta concepción clásica de la acción comunista revolucionaria se ha manifestado de forma bastante rara en América Latina. Es sobre todo en las tesis de Pucalayo de 1946, redactadas por el movimiento revolucionario *boliviano,* donde se encuentra su expresión directa. En efecto, son sobre todo los partidos trotskistas, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, y de forma diferente en Argentina, los que representan en América Latina ese comunismo de inspiración europea. Por el contrario, la importancia de la lucha antiimperialista ha llevado a la mayoría de los partidos comunistas a dar prioridad a un amplio frente multiclasista y a apoyar al Estado nacional-popular, superando las luchas de clases. Ese fue, en particular, el caso del Partido Comunista Brasileño después de 1945, cuyas dudas y decisiones han sido particularmente bien analizadas por F. Weffort. De tal modo, que los partidos comunistas han sido más influidos por el modelo populista de lo que ellos han modifica-

do a éste. La ruptura de los partidos comunistas y la creación de partidos pro chinos no han modificado profundamente esta situación. La construcción de coaliciones nacional-populares ha seguido siendo constantemente un objetivo central de todas las fuerzas de oposición. Sólo cuando el sistema político se aleja del modelo populista y se acerca a la democracia representativa, como en *Chile,* el partido comunista puede mantener su autonomía, resistir la represión, desencadenada por la Ley de defensa de la democracia de González Videla en 1947, o, más recientemente, por la dictadura militar del general Pinochet. Pero incluso en este caso, el partido comunista sigue dividido entre el deseo de integrarse en una coalición política y la tendencia a elegir una acción más revolucionaria que desemboca incluso en la acción clandestina y la lucha armada. En Brasil, lo mismo que en México o en Argentina, los partidos comunistas no llegan a dominar sus contradicciones internas, mientras que los movimientos populistas consiguen integrar más fácilmente la pluralidad de sus objetivos.

Esta debilidad de los partidos comunistas no les impide, sin embargo, ejercer una amplia influencia entre los intelectuales y a veces en la vida política. ¿No decía L. C. Prestes, secretario general del Partido Comunista Brasileño, poco antes del golpe de Estado de 1964, que el pueblo estaba en el poder? De hecho, en el seno del PTB y de la nueva organización sindical, la CGT, los comunistas ejercían una influencia creciente. En la mayor parte de estos países, los comunistas han conseguido en los sindicatos una influencia que no tiene relación con su peso electoral, como también se ve en el Brasil de los años ochenta, donde la principal confederación, la CGT, se halla influida por los comunistas, mientras que está asociada al PMDB, donde los comunistas tienen pocos elegidos. Este peso de los comunistas se explica, tanto aquí como en otras partes, por su fuerte organización y su militantismo. Pero, por regla general, la influencia comunista es fuerte allí donde la confianza en el Estado es predominante, mientras que en el conjunto del continente latinoamericano el Estado es generalmente débil. Si la influencia del partido comunista fue tan fuerte sobre los intelectuales en Brasil, ¿no fue porque este país está constituido como nación alrededor de un Estado fuerte, que dirige una sociedad muy segmentada y poco integrada, la que dirigía la acción política hacia el Estado más que hacia tal o cual clase social? La teoría de la dependencia, en sus formas extremas, conducía a acciones de tipo leninista, puesto que concluía en la impotencia de las masas y en la necesidad de concentrar la acción sobre el Estado. De igual modo, en Chile el Estado tuvo un papel tan central que muchos intelectuales dirigieron su acción hacia la toma del poder. Paralelamente, durante las fases de represión, tanto después de 1947 como después de 1973, el derrocamiento del poder, más que la movilización popular, aparecía con mucho como el objetivo prioritario de la acción. A la inversa, la influencia comunista es marginal en Argentina y limitada en Colom-

bia, dos países donde el Estado es débil. La América Latina está doblemente alejada de las situaciones favorables al leninismo. Ante todo, porque el Estado autocrático «oriental» está ausente; luego, porque en América Latina el espíritu revolucionario nunca se ha separado de la voluntad radical de apertura de un espacio político mucho menos cerrado que en la mayoría de los países, a excepción de una parte del Occidente precozmente industrializado. De suerte que los partidos comunistas que a menudo han creído servirse de los regímenes nacional-populares como estribo hacia el poder casi siempre han sido incorporados a la acción de esos regímenes y de los movimientos que los sostienen.

Los Estados nacional-populares

La obra de José Battle y Ordóñez en *Uruguay,* de 1903 a 1933, representa a la vez una forma acabada de Estado nacional-popular y una acción política que posee tal capacidad de integración económica y social que el caso uruguayo constituye más bien un intermediario entre el Estado nacional-popular latinoamericano y las políticas «republicanas» de los países europeos. La obra principal de Battle es, sobre todo, haber creado verdaderamente un Estado nacional, Uruguay, hasta entonces apenas integrado y que difícilmente escapaba a la artificialidad de su creación bajo influencia inglesa a principios del siglo XIX. En un país que conocía a un tiempo una extraordinaria prosperidad económica debida a la exportación de los productos de la ganadería y un enorme movimiento de inmigración, Battle logró combinar una afirmación nacional antibritánica, un programa acelerado de secularización que condujo incluso, a partir de 1911, a un violento anticlericalismo, y un conjunto de medidas sociales pioneras, en particular en favor de las mujeres. Esta acción se llevó a cabo sin ruptura institucional a partir de la victoria del Partido *Colorado.* Caso excepcional, subraya G. Rama, de la simultaneidad de la creación de un Estado nacional y de profundas transformaciones sociales.

El ejemplo más conocido de Estado nacional-popular procede de *Argentina.* Ningún jefe de Estado latinoamericano se ha identificado de forma tan completa como Juan Domingo Perón con un Gobierno a la vez populista y personalista. Ante todo porque llega al poder impulsado por un amplio movimiento popular que había exigido el retorno al Gobierno del joven secretario de Estado de Trabajo eliminado por los demás militares. El 27 de octubre de 1945 ha quedado como ejemplo perfecto de una jornada popular que lleva a un líder al poder. Cierto que los nuevos obreros procedentes del interior no fueron los únicos en exigir el retorno de Perón, pero más cierto es todavía que el nuevo presidente elegido en 1946 por temas nacionalistas y populistas supo identificarse con la integración social y política del mundo obrero en rápida expansión. Su mujer Eva dio un giro más popular y más reivindicativo a este populis-

mo, que quiso utilizar una coyuntura económica excepcionalmente favorable para crear una industria nacional mediante la acción del Gobierno, apoyado de un lado en los sindicatos de la CGT, y del otro en los jefes de empresa nacionalistas reunidos en la CGE. Tentativa artificial de hecho, porque Perón no pudo dar a la industria el papel central que habían tenido las exportaciones agrícolas. El peronismo estuvo menos al servicio del desarrollo de la producción que de un fuerte incremento del consumo popular y de la influencia política de los sindicatos. A partir de 1950, la coyuntura se deteriora, la política de Perón se hace más conservadora y la muerte de Eva le priva de su voz más popular. Perón cae en 1955 bajo los golpes de la «revolución liberadora», pero el peronismo sigue identificado con el mundo obrero y el voto peronista o el voto en blanco, cuando el Partido Justicialista fue proscrito, domina los suburbios obreros de Buenos Aires. El segundo período peronista de 1973 a 1976 con Cámpora primero, luego con el propio Perón y, después de su muerte, con su segunda mujer, Isabel, manipulada por López Rega, no será más que una larga crisis: el peronismo estalla entre sindicalistas moderados y jóvenes *Montoneros* partidarios de la lucha revolucionaria; se desencadena la inflación; el Gobierno parte a la deriva, y casi nadie protesta cuando un golpe de Estado militar elimina en 1976 ese régimen descompuesto. Pero de 1943 a 1976, durante más de treinta años, el peronismo, como fuerza política y sindical, a menudo puesto fuera de la ley, ha seguido siendo el eje de la política argentina, dando testimonio de la fuerza excepcional de la política nacional-popular en un país enriquecido por sus exportaciones agrícolas y arrastrado en un poderoso movimiento de integración económica, social y política.

La otra figura más célebre de dirigente nacional-popular es la de José Figueres, que dirigió *Costa Rica* tras la revolución de 1948 y hasta 1953, luego de nuevo entre 1970 y 1974, sobre todo porque se opuso violentamente a Somoza, dictador de la vecina Nicaragua. La realidad es más compleja y es más bien Calderón Guardia, presidente de Costa Rica de 1940 a 1944, quien podría aparecer como un caudillo populista, puesto que conquistó un fuerte apoyo popular que se desarrolló incluso a expensas del Partido Comunista. La lucha de Calderón Guardia y de Ulate en la elección presidencial de 1948 enfrentó a dos candidatos que querían incrementar la intervención económica del Estado y mejorar la legislación social. Figueres se apoyó en una fuerza centrista y recurrió a la conspiración, más que a la movilización popular, para sostener a Ulate. Al frente de un ejército de liberación nacional, y en particular de la *Legión Caribe,* se apoderó de San José y estableció su poder. Se había apoyado en los pequeños agricultores del llano central, mientras la principal fuerza militar de sus adversarios estaba constituida por los trabajadores agrícolas de la United Fruit, organizados por los comunistas.

La Constitución de 1949 suprimió el ejército permanente, lo cual dio a Figueres una celebridad algo artificial en una región militarizada. Las

medidas sociales tomadas en los años siguientes fueron más limitadas de lo que se ha dicho, porque Costa Rica tenía ya una larga tradición de leyes sociales. Fue, más bien, el intervencionismo económico del Estado el rasgo más notable de Costa Rica en el curso de los decenios siguientes. Figueres fue mucho menos un líder popular que un liberal, enemigo a la vez de Somoza, al que combatió vigorosamente, y de Fidel Castro y las guerrillas pro cubanas, que hicieron de él uno de sus adversarios principales. Costa Rica conoció, por tanto, un Estado en parte populista a partir de 1940 y no de 1948, en cuyo seno conservadores y liberales se opusieron de forma más tradicional. A partir de 1950, el Estado es más desarrollista que populista, diversifica la economía, crea infraestructuras, nacionaliza el sector bancario y sobre todo apoya el desarrollo de la mediana propiedad en agricultura. La elevación del precio del café, en los años setenta, proporciona medios más importantes a ese voluntarismo.

El Gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei en *Chile* (1964-1970) es también un ejemplo de gobierno nacional-popular cuya acción se desarrolla en el seno del marco institucional anterior. No obstante, los aspectos populistas de este Gobierno están mucho más marcados que en el caso de Costa Rica. Los demócrata-cristianos se esfuerzan por abrir la vía política sobre todo a dos grandes categorías nuevas: de un lado, a las mujeres de los barrios populares, que son organizadas en unos «centros de madres»; del otro, y sobre todo, a los campesinos, para los que se prepara una primera ley de reforma agraria y que empiezan a organizarse masivamente en torno a la Democracia Cristiana, por una parte y en torno al Partido Comunista y del Partido Socialista, por otra. Este Gobierno sigue siendo, al mismo tiempo, más bien conservador. Precede a una «chilenización» del cobre, que pertenecía hasta entonces, en lo esencial, a compañías extranjeras, pero no se trata de una nacionalización brutal. Con bastante rapidez, y sobre todo durante la segunda parte de su presidencia, Frei, ante el debilitamiento del crecimiento económico, choca con dificultades sociales que van en aumento. Lo cual prepara la victoria de la Unidad Popular, durante la cual la participación popular se extiende, se radicaliza y desborda ampliamente el control gubernamental. El período demócrata-cristiano aparece, sobre todo mirándolo retrospectivamente, como el del equilibrio dinámico pero inestable entre un sistema institucional reputado como sólido y abierto y el aumento rápido de las demandas sociales.

Bastante cercana a la situación chilena es la de *Ecuador* durante las presidencias de Roldós y, tras su muerte, tal vez accidental, la de su vicepresidente, O. Hurtado. Está marcada, principalmente, por una apertura del sistema político que continúa el populismo militar de Rodríguez Lara y que choca, mucho más rápidamente que en Chile, con la viva presión ejercida por un frente de fuerzas sindicales y urbanas, cuyo vigor está vinculado a los cambios rápidos de una sociedad hasta ese momento

muy tradicional y que bruscamente se ve transformada por la economía petrolera.

Más análogo todavía al caso chileno, pero mucho más radical, es el gobierno de *Acción Democrática* en *Venezuela,* sobre todo en su primer período, el *Trienio* 1948-1950, cuando Rómulo Betancourt sustituye al dictador Pérez Jiménez. La característica principal del Gobierno AD, que también tiene la difícil tarea de integrar en el sistema político a las masas urbanas multiplicadas por el *boom* petrolero y por la capacidad de intervención del Estado redistribuidor, es la estrecha asociación que se establece entre el Gobierno y la central sindical. Coalición que no se da en Chile, donde la poderosa central sindical estaba dirigida por el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Muy diferentes de estos regímenes nacional-populares moderados, es decir, aquellos cuya acción se ha desarrollado en el marco institucional anterior, son los de ciertos países de América central y del Caribe, mucho más personalizados, y donde el líder llega al poder bien a través de unas elecciones, bien mediante un golpe de Estado, pero de cualquier modo transformando profundamente el sistema político. Ése fue el caso, sobre todo, de Guatemala, con Arévalo y Arbenz, que rompieron con el régimen dictatorial al servicio de la oligarquía y emprendieron una reforma agraria. Pero el Gobierno de Arbenz, hasta la invasión del país en 1954 por Castillo Armas apoyado por la CIA, fue menos un régimen popular que una tentativa muy estatal de modernización dirigida por un capitalismo de Estado. Los movimientos populares siguieron estando subordinados constantemente a la acción del Estado, apoyado por el Partido Comunista. Los grandes proyectos de desarrollo —creación del puerto de Santo Tomás, construcción de la fábrica hidroeléctrica de Jurun y de la ruta del Atlántico— fueron lanzados directamente por el Estado apoyado en intelectuales de las clases medias. Eso implicó un aislamiento creciente del régimen y la rápida desorganización del *Frente Democrático* en el momento de la invasión.

Más extremo es el caso de Manley, que llega al poder en *Jamaica* en 1971. Establece un régimen socialista, pero ante todo se trata de un régimen clientelista al servicio del presidente y de su partido, el PPNP. El Ministerio de la Movilización Nacional es dirigido por el secretario general del partido; los proyectos agrícolas que se ponen en marcha, en particular los *Project Food Farms,* son organismos políticos sin base técnica y fracasan, como las *Community Enterprise Organizations.* Este régimen, que gobierna sobre todo mediante la retórica, provoca un deterioro rápido de los servicios públicos. Como en ese mismo momento las exportaciones de bauxita, cargadas con nuevos impuestos, y de plátanos disminuyen, la situación económica de Jamaica se vuelve crítica. De este régimen quedan importantes logros sociales: la mortalidad infantil fue reducida al 12 por 1.000 y se pusieron en marcha programas de viviendas

populares. Pero, en lo esencial, la retórica anticapitalista y antiimperialista de Manley y del PNP no moviliza a la población y aumenta rápidamente el aislamiento del aparato de gobierno.

El populismo militar

La naturaleza general de las políticas nacional-populares no depende del carácter civil o militar de sus líderes. Además, ¿cómo hay que considerar al coronel Perón tras su elección en 1946? No es más puramente militar de lo que es puramente civil el general Cárdenas en México. La presencia de regímenes nacional-populares militares parece ligada únicamente bien a una penetración más fuerte del capital extranjero, bien a la debilidad de la integración social y nacional de un país dominado por los terratenientes *(hacendados)* tradicionales, bien incluso a la presencia de guerrillas o de otras amenazas contra la unidad del país. Hay que presentar aquí regímenes o movimientos que, en algunos casos, evocaremos de nuevo como ejemplos de intervención política de los militares en la cuarta parte de este libro.

Son muy numerosas las intervenciones de militares contra un régimen oligárquico en crisis. La acción de los *tenentes* brasileños o de los jóvenes oficiales que desencadenaron un golpe de Estado en 1924 en Chile fue guiada por la voluntad de romper la oligarquía y de construir un Estado más abierto socialmente o más fuerte nacionalmente. En *Brasil,* los *tenentes* se sublevaron primero en el fuerte de Copacabana en 1924, luego en São Pulo y por último en Rio Grande do Sul, de donde partió la columna Prestes a la que se agregaron los restos de la insurrección de São Paulo y que recorrió el país hasta terminar su cruzada en Bolivia, sin haber logrado despertar ni sublevar a las masas populares del Brasil. Nacionalistas, antioligárquicos, se dispersaron pronto, incorporándose unos al régimen getulista, acercándose otros a la oligarquía, mientras L. C. Prestes se convertía en el dirigente del Partido Comunista. En *Chile,* la primera presidencia del general Ibáñez, de 1926 a 1932, se inspiró al principio en ese populismo antioligárquico e incluso pro obrero, pero su acción real estuvo dominada, a la inversa, por la sustitución del capitalismo inglés por el capitalismo americano como fuerza central de la economía chilena. La gravedad de la crisis económica destruyó toda intención de reformas sociales hasta que la clase media se libra de Ibáñez. Pero la república socialista instalada por un oficial, Marmaduke Grove, en 1932, y que no duró más que unos pocos días, fue también un ejemplo de populismo, e incluso de populismo revolucionario militar. En *Perú,* en 1962-1963, la dualización persistente del país, dividido entre la Costa y la Sierra, y la guerrilla de los años 1958-1962 explican una intervención militar que vaciló de forma constante, según F. Bourricaud, entre una *criollización* conservadora y una radicalización que seguía el estilo nasseriano. La eliminación del general Pérez Godoy,

en mayo de 1963, significó el triunfo de la criollización y el apoyo del ejército a Belaúnde. En *Bolivia,* los populismos militares de Busch y de Villarroel respondieron a la crisis nacional abierta por la derrota en la guerra del Chaco contra Paraguay (1932-1935), a la segmentación de la sociedad boliviana y a su economía de enclave minero. Estos diversos populismos militares pertenecen mucho más a la categoría general de regímenes nacional-populares que a la categoría de regímenes autoritarios, lo que indica el peligro que habría considerando a todos los regímenes militares como si formasen un conjunto. Unos son claramente populistas; los otros, antipopulistas.

El más importante de los regímenes militares de orientación nacional-popular es el que creó en *Perú* el general Velasco Alvarado en 1968, que dirigió hasta 1975, y que fue reorientado en un sentido más tradicional por el general Morales Bermúdez, de 1975 a 1980, hasta el regreso de Belaúnde al poder. Este régimen realizó las grandes transformaciones que demandan, en general, los regímenes nacional-populares. La reforma agraria peruana fue la más amplia del continente, dejando a un lado Cuba; el petróleo fue nacionalizado, y, yendo más lejos, la oligarquía fue destruida. Los tres temas centrales del Estado nacional-popular —la integración nacional por el desarrollo económico, la lucha contra la dominación extranjera, la participación popular— estuvieron en el corazón de la política de Velasco. Pero el régimen militar no obtuvo el apoyo que esperaba. El sistema de movilización popular, SINAMOS, perdió rápidamente su capacidad de acción y se redujo a ser un organismo de propaganda política. La política económica, por su parte, condujo a una fuerte baja de las inversiones privadas, que no compensó el aumento de la participación del Estado en la vida económica, que pasó del 24,7 por 100 en 1968 al 49,9 en 1977. El presupuesto del Estado aumentó el 246 por 100 de 1970 a 1976 y la participación de la industria en el PIB creció del 22 al 26 por 100 de 1964 a 1975, pero en resumidas cuentas la voluntad de lucha antioligárquica del Gobierno militar destruyó el complejo equilibrio, tan hábilmente mantenido en Brasil, en Chile e incluso en México, entre la industrialización, el aumento de la participación social y el mantenimiento, en lo esencial, del poder de la oligarquía. A partir de 1973, el régimen chocó con una doble oposición, burguesa y popular, y Morales Bermúdez, frente a una crisis económica desencadenada por la caída de las inversiones, un déficit presupuestario elevado y un endeudamiento interior y exterior importante, no pudo hallar apoyos suficientes para mantener la política nacionalista de su predecesor y volvió a un liberalismo extremo; en última instancia, hubo de devolver el poder a los civiles. Es que, al tiempo que el régimen militar era de inspiración nacional-popular, conservaba una profunda desconfianza respecto a la sociedad civil, protegía a una elite cerrada y recurría a métodos de control policíaco y político de casi todos los sectores de la opinión. Sólo una fracción reducida del mundo obrero, organizada en comunidades de trabajo, dado que las cooperativas agrarias tenían la mejor rentabilidad, y,

mayormente, el mundo de los funcionarios se aprovecharon del nuevo régimen, componiendo una especie de nueva clase media, que apoyó al Gobierno militar. Pero la unión entre esa clase media, protegida por el Gobierno, y los sectores populares no se realizó y el régimen se encerró en un extremo aislamiento político, en torno a una ideología comunitaria de origen cristiano. Naturaleza contradictoria de un régimen que llevó una política nacional-popular por medios antipopulistas, autoritarios, contradicción que se explica, en parte, por la naturaleza de la sociedad peruana, cuya capacidad de integración social es limitada. Hipótesis verificada por la evolución de la otra fuerza principal de la política peruana, el APRA, que, entre 1956 y 1968, había abandonado también su populismo y había buscado una alianza, una *convivencia,* primero con Prado y luego con Odría, representante militar de la oligarquía. Perú es un país donde la interpenetración del Estado y de las fuerzas sociales, que caracteriza al régimen nacional-popular, choca con una dualización extremada del país y con la debilidad del desarrollo industrial nacional.

Muy diferentes fueron los gobiernos militares *ecuatorianos.* A partir de la revolución juliana de 1925, cuyo objetivo principal fue transformar la organización militar, el Estado logró un control importante sobre la actividad económica. La junta militar de 1963-1966 promulgó, en 1964, una ley de reforma agraria y tuvo objetivos de desarrollo económico. Su plan general de desarrollo y su reforma fiscal provocaron fuertes reacciones entre los comerciantes y los terratenientes. Pero, sobre todo, el Gobierno militar de Rodríguez Lara en 1972, que se inspiraba en el ejemplo peruano, se opuso a los grupos privilegiados y realizó una política petrolera nacionalista. Su acción fue de corta duración porque fue derrocado por una junta militar formada en el espíritu de defensa continental difundido entre los militares latinoamericanos por el ejército americano en la escuela militar de Panamá. Los temas nacional-populares fueron sustituidos entonces por el de la lucha contra la subversión. Sin embargo, durante los tres años de Gobierno del General Rodríguez Lara, el Gobierno militar había logrado una apertura social que no había conseguido Velasco en el Perú. En gran parte porque el desarrollo rápido de la producción petrolera llamaba en Ecuador a la superación de la oposición tradicional del campo y de la ciudad, de la costa y del interior, reforzando de este modo la capacidad de acción del Estado nacional.

En *Panamá,* el general Omar Torrijos se hizo con el poder en 1969, apoyado en la Guardia Nacional, tras el período de confusión política que siguió a las elecciones de 1968. Desde hacía tiempo Panamá había conocido un populismo nacionalista animado por Arnulfo Arias, que ya había llegado al poder en 1931, en 1941 y en 1949, antes de conseguir el triunfo en las elecciones de 1968, acercándose en esta ocasión a la oligarquía y a los Estados Unidos. Fue su ruptura con la Guardia Nacional lo que provocó su caída. La oligarquía intentó volver a tomar el poder y eliminar a Torrijos. Éste, sin embargo, realizó una rápida marcha victo-

riosa sobre la capital, apoyado no sólo por los jóvenes oficiales, sino también por los campesinos. De este modo, desde el principio quedó señalada la alianza del nacionalismo y de las reformas sociales que iba a caracterizar el régimen de Torrijos, que coincidió con el ascenso en América Latina de regímenes socialistas o socializantes, en particular en Chile, en Perú e, incluso, en Argentina. Pero Torrijos se negó a dejarse arrastrar por la extrema izquierda y puso fin a la acción de los comunistas en Chiriqui. Puso sus objetivos nacionalistas por encima de su desconfianza respecto a una oligarquía que no cesó de preparar conspiraciones contra él. Se hizo popular combinando nacionalismo, desarrollo económico y transformaciones sociales, no sin visibles contradicciones. En efecto, al mismo tiempo que llevaba una viva campaña contra los Estados Unidos por la recuperación del canal y de su zona, transformó su país en un gran centro bancario y comercial ampliamente utilizado por las empresas americanas. Más interesante fue su acción sobre la agricultura. En el curso de los años sesenta se habían formado ligas campesinas; el Gobierno las transformó en centros de reforma agraria *(asentamientos)* cuyo número él aumentó rápidamente. El sindicato campesino, el CONAC, fue su principal apoyo. De forma paralela, el Estado construyó grandes fábricas de azúcar. En la ciudad, Torrijos llevó una política clásicamente populista, ayudando a las categorías más desfavorecidas y transformando en 1972 el Código del trabajo. Su régimen fue claramente autoritario y estableció una relación directa entre el líder y el pueblo. Los diputados, en su mayoría campesinos, eran simples intermediarios entre unos grupos sociales y el poder político. Tras la desaparición de su jefe y a pesar de las numerosas transformaciones políticas del país, el régimen de Torrijos sigue siendo el eje central de la vida política y social de Panamá.

En *Honduras,* tras la derrota frente a El Salvador, el general López Arellano, al frente de un gobierno militar, lanzó un programa de integración nacional para dar una unidad verdadera a este país dividido entre el enclave bananero del norte, la zona de ganadería extensiva del sur y la zona urbana de Tegucigalpa en el centro. Pero el fracaso fue rápido porque, a pesar de la ayuda de la CEPAL y de las financiaciones externas, López Arellano no disponía de los medios necesarios para vencer la resistencia de los grupos dominantes tradicionales, evitar la corrupción y organizar la movilización popular. Al menos, tanto en Honduras como en Perú y en Ecuador, en ciertas épocas, los militares se esforzaron por luchar contra la dualización o la segmentación de su país.

3. México y Brasil: burguesía de Estado y política nacional-popular

Junto a los partidos y a los Estados nacional-populares de los demás países, las dos mayores potencias del continente, México y Brasil, han conocido políticas que no pueden ser calificadas de nacional-populares,

porque fueron mucho más nacionalistas, «desarrollistas», y por tanto estuvieron al servicio de nuevas elites dirigentes formadas y reforzadas a través de la acción del Estado.

Sin embargo, *México* asocia con toda claridad un gobierno al servicio de una burguesía de Estado con una política nacional-popular, cosa que le sitúa a medio camino entre Venezuela o el Chile demócrata-cristiano, y el Brasil, mucho más alejado del modelo nacional-popular.

Después de la revolución, la principal tarea para México es darse un Estado capaz de imponer su autoridad a los caudillos militares. Cuando Calles crea un partido oficialista, el PNM, para él se trata, ante todo, de imponer un poder central por encima de las luchas entre los caudillos. El paso del PNM al PRI indicó, según el análisis de P. González Casanova, la incorporación de fuerzas populares, campesinas, y sobre todo obreras, organizadas por la confederación sindical CTM, en el sistema político. El líder sindical Lombardo Toledano desempeñó un importante papel en el proceso dirigido por Cárdenas y que internacionalmente corresponde al período de frentes populares. Cuando finalmente, en 1946, el PRM (Partido de la Revolución Mexicana) se transforma en PRI (Partido Revolucionario Institucional), bajo el presidente Ávila Camacho, el poder central dispone de la herramienta que le permite controlar la vida política y social del país y dirigir su transformación económica. El PRI es, por tanto, más una forma de Estado que un partido político. Pero este papel del partido-Estado no puede separarse de los otros dos datos principales de la situación mexicana. Ante todo la sombra dejada sobre todo un siglo por una revolución que no fue sólo una perturbación social y una guerra civil, sino una inmensa movilización política reforzada aún por los efectos de la revolución soviética, que hizo ondear la bandera roja sobre los estados del golfo de México. Mientras el Partido Agrarista, nacido del zapatismo, exigía una reforma agraria, comunistas y sindicalistas revolucionarios se disputaban el control de los sindicatos antes que éstos pasasen —y para siempre— a los dirigentes vinculados al poder, y en primer lugar a L. Morones, dirigente de la CROM y gran animador de campañas anticlericales. ¿Cómo no oponer el México revolucionario al Brasil, donde las estructuras tradicionales del poder, en particular en el campo, nunca se han visto sacudidas, y a la Argentina, donde todas las fuerzas de las demandas populares se orientaron hacia la participación, no hacia la ruptura? El partido-Estado fue siempre más que un estado mayor político, fue el instrumento de integración y de control de fuerzas sociales, campesinas y sindicales sobre todo, puestas en movimiento por la revolución. También fue, y cada vez más, un instrumento de cooptación de los intelectuales y de todos los que aspiraban a una carrera política. Este Estado posrevolucionario fue creado por Cárdenas; alcanza su más alto nivel durante la presidencia (1934-1940) de quien puede ser considerado como el mayor hombre de Estado de la América Latina en el siglo XX. La nacionalización del petróleo, la reforma

agraria, el desarrollo de la acción sindical y de las leyes sociales han hecho de Cárdenas, hasta nuestros días, el símbolo del progresismo mexicano.

En el orden económico, el Estado jugó el papel principal en la industrialización, sobre todo a partir de 1940. Si las empresas públicas ocuparon una plaza más limitada que en Brasil, la *Nacional Financiera* fue un poderoso instrumento de desarrollo económico. Pero la acción del Estado fue limitada, menos por la resistencia del grupo de Monterrey, paladín de la empresa privada, como por la presencia, tan cercana, de la inmensa potencia económica de los Estados Unidos, país que absorbe millones de trabajadores emigrantes, sirve de refugio a los capitales que huyen, suscita la creación en la frontera de empresas de subcontratación *(maquiladoras)* que utilizan la mano de obra mexicana muy barata para servir al mercado americano.

Ningún otro país ha conocido fuerzas sociales centrífugas tan potentes como México y, por consiguiente, ninguno ha construido un partido-Estado tan fuerte ni que cumpla unas funciones tan contradictorias. Porque el PRI es un camino obligatorio hacia el poder y muy recomendado hacia la riqueza. A su través se forma una burguesía de Estado cuyo poder no cesa de crecer desde que el presidente Miguel Alemán inauguró una fase de intensa industrialización, de concentración de las rentas y de baja de los salarios reales; pero también es una máquina de transmisión y de gestión de las demandas populares, tan eficaz que los partidos de extrema izquierda nunca han logrado sacudir su cuasi monopolio político. De este modo, la política nacional-popular se ha aliado, a un tiempo, al mercantilismo y a su populismo fuertemente teñido de antiimperialismo. Y a menudo son los mismos hombres los que llevan una carrera basada, ante todo, en la vinculación a un patrón político y los que multiplican los discursos izquierdistas y tercermundistas. Pero ¿no está en la definición misma de la política nacional-popular asociar esas orientaciones contrarias y, más concretamente todavía, servir a una nueva burguesía tan antioligárquica y anticolonialista como es, de hecho, antiobrera y anticampesina? Dualidad de orientación clásica en la burguesía posrevolucionaria de la Francia del siglo XIX, que se sitúa en México en el seno de un poder que no es el de la burguesía ni el del Estado, porque la política nacional-popular no separa el Estado, las instituciones representativas y las fuerzas sociales.

La evolución del sistema mexicano lo aleja de sus orígenes revolucionarios y nacional-populares; las tentativas para crear unos sindicatos independientes fueron uno de los signos más visibles de la creciente prioridad dada a la industrialización, reforzada por las inversiones extranjeras. Lo cual condujo a la crisis política de 1968 que, dejando a un lado sus aspectos universitarios, sólo tuvo una salida tan dramática y una importancia tan grande porque ponía de manifiesto el deterioro del sistema político mexicano. Cuando en 1970 llegó al poder Luis Echeverría, me-

tió a México en lo que él mismo ha llamado un neopopulismo que, en realidad, fue una política más compleja. El nuevo presidente trató de reforzar el sistema político, en particular mediante hábiles medidas de cooptación de intelectuales a través de la Universidad Nacional, a cuyo frente colocó como rector a un notorio hombre de izquierdas, Pablo González Casanova, y sobre todo ayudando, al menos al principio, a las luchas obreras y campesinas opuestas a los controles ejercidos sobre ellas por el sindicalismo oficial. Pero también quiso, de manera mucho más innovadora, organizar un sistema de representación política dando más autonomía a la sociedad civil frente al Estado, lo que llevó, bajo su sucesor, López Portillo, a una reforma electoral que dio a unos partidos de oposición derechos que hasta entonces se les habían negado. A partir de finales de 1982, tras el brutal estallido de la crisis financiera y económica, Miguel de la Madrid trató de acelerar la disociación del Estado y del partido, pero las tensiones económicas se habían vuelto tan fuertes que el PRI no podía renunciar a su papel de encuadramiento de las demandas populares sin poner al Gobierno ante una situación explosiva. De suerte que la política mexicana sigue siendo nacional-popular a pesar de su voluntad de no serlo.

En *Brasil* la situación fue durante mucho tiempo la inversa. El Estado se ha desarrollado protegiendo unas oligarquías regionales. A. Alcántara escribe: «La permanencia de las oligarquías participa en la política de transformación del poder central garantizando sus bases políticas indispensables a la burocracia desarrollista. El apoyo de ésta se volvió de manera paradójica más seguro que el de las clases medias urbanas, a menudo antidesarrollista y antinacionalistas» (cf. Bibl., II, 2, página 22). El poder *moderador* del emperador reposaba sobre un equilibrio entre las oligarquías locales y el desarrollo del Estado burocrático, *cartorial,* que iba de consuno con la capacidad de gestionar las relaciones con los poderes locales. El poder central y su presupuesto se desarrollaron bajo el imperio: el ejército alcanzó los 83.000 hombres en 1869. Lo cual subraya el predominio del poder político central sobre una clase dirigente que nunca se unificó en el plano nacional. Brasil no fue nunca un Estado oligárquico, en gran parte porque la orientación hacia la exportación de la economía azucarera del Nordeste daba a la oligarquía de esta región un papel limitado en el plano nacinal, favoreciendo de este modo la influencia del Estado central. El clientelismo mismo fue un instrumento de control político en las manos del poder central. A. Alcántara insiste en ello: «Dejemos de ver en el clientelismo una característica específica de la política brasileña y menos todavía una etapa de su desarrollo, para considerarlo como una modalidad de control sobre los recursos políticos y de subutilización de éstos por las organizaciones políticas.» Este control político local pasa a menudo a través de los partidos, pero en el caso brasileño está en manos del Estado porque los partidos no son otra cosa que caminos de acceso al poder estatal. Caio Prado Jr. ha ha-

blado, con razón, de «capitalismo burocrático». El conjunto de la política económica se dirige a partir del centro, y la extrema importancia del papel de los *gobernadores* estriba en que son agentes de subordinación de los dirigentes locales al poder central. Éste utiliza las luchas locales de las regiones en decadencia para desgajarse de éstas y orientar mejor su acción hacia las regiones en desarrollo. La revolución de 1930 y la acción de Getúlio Vargas no señalan ninguna ruptura desde ese punto de vista. Algunos han querido ver en la revolución de 1930 la expresión de una lucha entre fracciones de la clase dirigente. Vargas habría sido el representante de la burguesía en su lucha contra la oligarquía. B. Fausto, en un libro que se ha vuelto clásico, ha demostrado que semejante tesis carecía de cualquier fundamento. Los industriales tenían poca importancia y estaban aliados a los productores de café. La revolución de 1930 fue, ante todo, resultado de luchas en el seno de la oligarquía. Vargas fue apoyado por los grupos dirigentes *gaúchos,* es decir, de Rio Grande do Sul, y por los dirigentes políticos del estado de Minas Gerais, que no representaban a los industriales de Juiz de Fora, sino a los grupos dirigentes tradicionales. Su análisis lo resume de esta forma: «La crisis de hegemonía de la burguesía del café permite la coalición rápida de las oligarquías no ligadas al café y de diversos sectores militares en los que la oposición antioligárquica tiene características muy específicas» (cf. Bibl., III, 1). Estas fuerzas reciben el apoyo de las clases medias y este, más difuso, de las clases populares. Es, por tanto, en nombre de sus objetivos propios y no como representante de una clase social como el Estado interviene como agente principal de la industrialización. L. Martins ha demostrado que la industrialización brasileña no era sólo el resultado casi involuntario de medidas tomadas para paliar la crisis del café, como pensaba C. Furtado, sino que, desde Vargas a Kubitschek, el Estado brasileño había construido de manera voluntarista las bases de la industrialización nacional. Durante todo este período, el Estado obra a la vez como defensor de unas formas tradicionales de dominación social, como agente de integración nacional y como el protagonistta de la industrialización. Las relaciones entre estas funciones del Estado son complejas. L. Martins concluye su estudio: «El nacionalismo contribuye, como práctica de movilización populista, a permitir que el sistema productivo realice un máximo de inversiones con un mínimo de tensiones sociales» (cf. Bibl., I, 1, pág. 593). Una vez más, el papel nacionalista del Estado no parece separable de su papel nacional-popular. L. W. Vianna, en uno de los mejores libros sobre Brasil, relaciona a Vargas con Luis-Napoleón Bonaparte. Después de haberse apoyado en unas fuerzas antiindustriales, Vargas se une a la burguesía paulista, principal agente de la industrialización, y dirige de manera autoritaria la incorporación a la vida pública de nuevas categorías sociales. Este papel del Estado procede de que las oligarquías brasileñas nunca fueron capaces de construir un sistema liberal, es decir, de abrir progresivamente la escena política a

nuevas categorías, como fue el caso, en gran medida, de Chile. La exclusión política de las categorías medias y obreras en la *República Velha* no lleva a una revolución sino al desarrollo de un Estado que no fue en modo alguno el representante de esas fuerzas excluidas, sino que dirigió en su provecho su integración en la vida política, de forma que podía acelerar un proceso de crecimiento económico que no podía continuarse en una vida sociopolítica vuelta insoportable. En Brasil, la fundación del Estado nacional no se asoció a una movilización autónoma de las fuerzas populares. Lo cual explica que tantos intelectuales de derecha y de izquierda hayan podido mezclarse en movimientos que se lanzaron a tentativas de toma armada del poder y fracasaron, porque el Gobierno de Vargas, antes y después de la proclamación del *Estado Novo,* respondía de manera eficaz a la creación de una nación integrada. Tras Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek no transformó profundamente el sistema político brasileño, que siguió dominado por el poder del Estado, apoyado en una coalición compleja, la del PSD, que defendía a ciertos sectores de la oligarquía, y la del PTB, que canalizaba la participación política de los trabajadores urbanos. De este modo se combinaron el desarrollo de las intervenciones estatales, la permanencia del sistema de dominación social y la ampliación de la participación política. El «Estado de compromiso» hace compatible una inversión elevada y unas tensiones sociales reducidas, el nacionalismo y una apertura creciente a los capitales extranjeros; es a la vez un Estado nacional-popular y un Estado defensor de sus propios intereses. Weffort escribe en *Sindicato e Política:* «La figura de Vargas, jefe del Estado, al que estaban subordinados todos los grupos económicos y políticos [...] se transforma así en punto de encuentro de todas las fuerzas sociales y en árbitro supremo del juego político. Vargas fue capaz [...] de establecer la soberanía del Estado sobre el conjunto de las clases económicamente dominantes» (cf. Bibl., II, 2, 4,3). El Estado no es, pues, ni una fuerza política hegemónica, ni el representante de las clases dirigentes. Es el agente central del proceso de transformación del país. Pero, al mismo tiempo, ese Estado nacionalista y autoritario no elimina nunca la capacidad de apertura y de control político que caracteriza al Estado nacional-popular. Por eso no puede seguirse a los que, después de 1964, pensaron que existía una gran continuidad en la historia brasileña, la del Estado autoritario, presente bajo Vargas lo mismo que después del Estado militar, y que no habría sido interrumpido, brevísimamente, sino entre 1961 y 1964. Al contrario, si es cierto que el Estado nacionalista brasileño desborda ampliamente el modelo nacional-popular, sigue combinándose con él, mientras que la dictadura militar se definirá, ante todo, por su antipopulismo y su voluntad de rechazo de las demandas sociales y mayormente políticas.

4. Estados y movimientos antipopulares

Los Estados antipopulistas

Acerquémonos ahora a países en los que se abre con mayor nitidez el espacio económico y político. Se ha hablado a menudo de *populismo oligárquico* para designar la acción de líderes, civiles o militares, que han buscado el apoyo de las masas urbanas, gracias a una política a la vez de control político y de distribución, para ampliar el apoyo político de un sistema económico que seguía dominado por una oligarquía, pero en la que los intereses mobiliarios empezaban a llevarse la palma sobre los intereses de bienes raíces. Sin embargo, esa expresión parece peligrosa porque el populismo no puede ser reducido a la manipulación de las masas populares. Lo hemos visto: una política populista implica a tiempo la extensión de un sistema político en el que las clases medias ocupan un lugar preponderante, una política nacionalista o antiimperialista y la apelación a una cultura o a unos intereses populares. Conviene, por tanto, hablar aquí de regímenes antipopulistas más que de populismos oligárquicos, sin olvidar que éstos también tienen aspectos «progresistas» de movilización popular, pero que no deben ocultar que su papel esencial es asegurar la modernización de la oligarquía gracias a una alianza entre los capitalistas extranjeros y los señores de la tierra. El ejemplo más interesante de populismo oligárquico o de antipopulismo es el de Leguía, que gobernó Perú durante los años veinte. Inauguró un indigenismo más paternalista que movilizador e introdujo leyes sociales, destinadas sobre todo a evitar la formación de un sindicalismo reivindicativo, pero se opuso a las formas más extremas de represión del naciente sindicalismo campesino. Lo que parece mostrar el carácter no populista de su política es la formación del APRA, en 1924, y el impacto del pensamiento de Mariátegui, por tanto de las dos fuerzas políticas e ideológicas a partir de las cuales iban a desarrollarse los principales movimientos sociales y políticos del Perú en el curso de ulteriores decenios. Fue el APRA y no Leguía el que supo unir a los intelectuales de clases medias y de los grupos obreros o campesinos organizados. Es sobre todo Haya de la Torre quien, en esa época, insiste en los objetivos antiimperialistas a los que Leguía es particularmente extraño. Porque, mientras se forma el APRA, que es también «Frente Unido de Trabajadores Manuales e Intelectuales», Leguía acentúa su política económica y cultural pro americana, hasta el punto de encargar a una agencia norteamericana su programa de educación. Cuando el 23 de mayo de 1923 consagra Perú al Sagrado Corazón, la contramanifestación en la que participan estudiantes, campesinos y obreros indica el carácter antipopulista de su régimen. Sin embargo, para algunos, como H. Neira, ese juicio es demasiado negativo. Ven en Leguía un dictador bonapartista, por tanto modernizador, cercano a Napoleón III en Francia y a Porfirio Díaz en México. Insisten en el aumento de los medios financieros del Estado, enriquecido por la

expansión económica, y su voluntad de modernizar la capital. Cierto que durante una primera fase, hasta 1923-1924, la acción de Leguía va dirigida sobre todo contra los «civilistas», que representan a la oligarquía; cierto también que sólo después de 1924 evoluciona su régimen hacia el autoritarismo. Cierto es, igualmente, que la imagen negativa de Leguía ha sido creada, sobre todo, por el naciente APRA, cuyos fundadores compartían el exilio de Haya de la Torre y que denunciaron al dictador. No deja de ser, sin embargo, cierto que ese Estado *contratista* se apoya principalmente en los créditos extranjeros y es combatido por tods las formas de alianza entre fuerzas populares urbanas y clases medias nacionalistas. Se pueden matizar las condenas dirigidas contra la dictadura, pero no se puede situar su acción en el seno del modelo nacional-popular.

En Ecuador, la prolongada influencia de Velasco Ibarra, elegido presidente por primera vez en 1933, ha sido explicada a menudo por la política populista de este caudillo, que habría expresado las demandas sociales y políticas de las masas urbanas y en particular de los suburbios de Guayaquil. El análisis hecho por R. Quintero de la elección de 1933 destruye esa explicación. Velasco, candidato del Partido Conservador, obtuvo la mayor parte de sus votos en la Sierra; además, en Quito y en Guayaquil su apoyo principal no procedía de los barrios populares. Por otro lado, en 1933, el cuerpo electoral no representaba, sobre una población de 2.100.000 habitantes, sino a menos de 65.000 personas. Quintero considera que la victoria de Velasco —al menos en esa época— «significó no sólo el reforzamiento neto del sector *serrano* de los propietarios de tierras y de sus partidos, sino además [...] puso a la clase de los propietarios de bienes raíces al frente de una alianza política con los sectores costeros (es decir, de Guayaquil) de la clase dominante».

El caso de Pérez Jiménez, dictador de *Venezuela* hasta 1948, es diferente, porque el apoyo principal de su régimen no procedía de los propietarios de bienes raíces, sino de los *royalties* del petróleo, que proprocionaron al Estado el medio de intervenir en todos los aspectos de una sociedad todavía poco «movilizada». Pérez Jiménez es un caudillo que moviliza masas urbanas inorganizadas más que un agente de reorganización de una dominación oligárquica amenazada por la urbanización. Su predecesor, de 1908 a 1935, Juan Vicente Gómez, había sido un dictador tradicional, patrimonial, que se apoyaba en su familia de propietarios de bienes raíces y sus gentes del Tachiera, para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. Política que fue combatida por la generación de 1928 y por Rómulo Betancourt, representante de las nuevas clases medias urbanas que iban formándose lentamente. Pérez Jiménez, por el contrario, domina una sociedad arrastrada por un rápido movimiento de urbanización, pero no busca establecer alianza entre las nuevas clases urbanas y las masas populares y, debido a ello, no pertenece, como tampoco Velasco Ibarra, a la categoría de los dirigentes nacional-populares.

Los fascismos

La fuerza de los regímenes nacional-populares en América Latina es más visible todavía cuando se la compara con la debilidad de movimientos «populares» autoritarios, en el sentido de la definición que daba de sí mismo el partido nazi en Alemania, que se declaraba popular, *völkisch.* Los *integralistas brasileños* de Plinio Salgado querían recrear al hombre completo mutilado a la vez por el capitalismo y el comunismo, y sobre todo restablecer, en una sociedad desarraigada, el orden, la disciplina y el respeto al Estado nacional. Tiene razón H. Trindade cuando considera el integralismo como un *fascismo.* No lo es sólo por el culto al jefe, el saludo brazo en alto, las milicias de camisas verdes; lo es más profundamente por su amalgama de anticomunismo y de crítica antisemita de la plutocracia; lo es, sobre todo, porque somete todos los problemas de la sociedad a la imperiosa necesidad de reforzar un Estado a la vez nacionalista y corporativista. Como el futurismo italiano, que con frecuencia condujo al fascismo, y en sentido opuesto del surrealismo francés, que se abrió hacia la extrema izquierda, el integralismo de Salgado, formado con el movimiento modernista que estalla en 1922 en São Paulo, apela a la integración de la sociedad por el Estado más que a la conquista de los derechos políticos y sociales por las categorías desfavorecidas; lo cual corresponde a su reclutamiento a la vez poco popular y alejado de la gran burguesía, hecho, por el contrario, entre las profesiones liberales y en el conjunto de las capas medias intelectuales que, como ha dicho J. Nun, expresan sus reivindicaciones en el seno de la dominación oligárquica y no contra ella. Otros movimientos de inspiración fascista se formaron en Brasil en esa época, la Acción Social Brasileña, la Legión del Trabajo de Ceará, el Partido Sindicalista, la Acción Imperial *Patrionovista* Brasileña, pero fue sólo el integralismo el que se dotó de una fuerte organización en el plano nacional. Después de haber sido utilizado por Vargas, Salgado fue eliminado tras una tentativa de alzamiento en 1938. El mismo año se liquidaba de manera sangrienta, en Santiago, *Chile,* el movimiento dirigido por Von Marrées, más integralista que nazi. Esos movimientos recuerdan que una sociedad en movimiento no está enteramente en ascenso social, que las transformaciones aceleradas implican también rupturas, movilidades descendentes y desarraigos, y que ciertas categorías sociales, en particular en las clases medias, se sienten tentadas a dar prioridad a la búsqueda de una seguridad y de una estabilidad que sólo un Estado fuerte les parece capaz de asegurar. Así se crean movimientos que defienden el orden contra las transformaciones incontroladas que conducen al caos y a la pérdida de la identidad nacional.

Los movimientos de clases dirigentes

No pueden confundirse tales movimientos, que siguen perteneciendo al espacio populista, incluso por su antipopulismo, con ciertos movi-

mientos que se oponen a las fuerzas populistas o nacional-populares, pero en nombre de un grupo *dirigente.* Un caso particularmente claro de tales movimientos es el del Comité Cívico de Santa Cruz, en *Bolivia,* movimiento regional, apoyado principalmente por profesionales e intelectuales, y que se opuso al nacionalismo revolucionario del MNR y de la COB a partir de 1952, y sobre todo en el momento de la Asamblea Popular de 1970-1971. Este movimiento defendía ante todo unos intereses regionales; exigía el desarrollo de su región, en particular gracias a la construcción de medios de comunicación y a la inversión de recursos públicos en la región de Santa Cruz; pero, especialmente, se oponía a la alianza del MNR y de la COB, y se convirtió por ese motivo en el apoyo principal del golpe de Estado de Banzer en agosto de 1971. Tal movimiento regional no es, por tanto, más que en apariencia un movimiento populista. Otros casos de movimientos regionales son de la misma naturaleza, es decir, representan la oposición de una burguesía o de una clase dirigente a la acción del Estado popular. Tal fue el caso, sobre todo, del movimiento político que condujo al estado de *São Paulo,* en 1932, a la guerra contra el Estado federal, que, sin embargo, en esa fecha no era un Estado populista. La burguesía de São Paulo se apoyó en una conciencia regional para defender sus intereses de polo de desarrollo económico contra una política cuyo objetivo principal era la integración nacional por la incorporación y la subordinación de las elites regionales. Pero ¿cómo no ver la debilidd política de las burguesías más dinámicas, su impotencia para crear grandes partidos liberales conservadores antipopulistas? En todo el continente es el Estado nacional-popular el que conduce la transformación de la sociedad.

5. La acción y el discurso

El poder nacional-popular

Las políticas nacional-populares, que asocian tantos objetivos diferentes unos de otros, son frágiles e incluso aparecen como contradictorias. La afirmación apasionada de objetivos prioritarios, de importancia vital, se combina fácilmente con una extrema flexibilidad en la búsqueda de alianzas y de compromiso. El pensamiento y la acción política nunca son coherentes, porque deben asociar elementos que pertenecen a modos de acción distintos. El populismo busca a la vez legitimar las fuerzas que dirigen el crecimiento económico y aumentar el consumo y la distribución de una manera que reduce la capacidad de inversión. Otra contradicción: es en nombre de un pueblo particular, de su historia y de su cultura, como se opone, no a otro pueblo, sino a principios impersonales: el dinero, el poder, las armas; de suerte que le es difícil definir una estrategia para combatir a un adversario tan omnipresente.

Más clásica todavía pero más sorprendente es la mezcla del espíritu revolucionario y del espíritu de reforma. Es que, para la acción nacional-popular, el Estado es a la vez un agente de apertura del sistema político y un poder absoluto que se moviliza, bien en favor del imperialismo, bien contra él. De suerte que, cuando se habla del Estado, nunca se sabe si se evoca la acción de políticos locales que se forman una clientela o la fuerza central que resiste a la penetración del extranjero.

Esta complejidad, estas contradicciones llevan a la siguiente pregunta: ¿cómo aseguran tales regímenes su unidad, más allá de la diversidad de sus acciones? La respuesta más simple es que la unidad del régimen se basa en la persona del *líder* principal. Se habla de política de masas y de líder carismático. Pero tales expresiones explican poco, en particular no dan cuenta de la extremada diversidad de los regímenes nacional-populares, militares o civiles, autoritarios o democratizantes, de orientación de clase o nacional-revolucionarios. Por otro lado, si se admite el papel central de la personalidad del líder, no se hace otra cosa que desplazar el problema. Porque es una ilusión creer que existe, en los regímenes nacional-populares, un líder todopoderoso, que impondría su voluntad, y con el que se identificaría cada uno de aquellos a los que se dirige, en las plazas públicas o por radio y televisión. En realidad el poder nacional-popular es tan complejo y está tan dividido como los otros. Existen coaliciones en el seno del círculo del poder, que luchan entre sí, no para obtener la mayoría en una asamblea, sino para influir en las decisiones tomadas por el líder nacional. De ahí la discontinuidad, a menudo muy grande, de los políticos. El régimen peronista, por ejemplo, que dura de 1945 a 1955, no constituye en modo alguno un conjunto histórico. Alrededor de 1950, todos los aspectos de la situación y de la política argentinas se transforman y el régimen peronista, en el momento en que cae, no tiene ya los mismos objetivos que en el momento en que Perón había sido elegido presidente, en 1946. De la misma manera, y en un contexto completamente distinto, el período de la Unidad Popular en Chile no tiene unidad. Hasta la primavera de 1972 podemos hablar de una extensión de la apertura política y social inaugurada por el Gobierno demócrata-cristiano. A partir de la primavera de 1972, la movilización social entra en conflicto con las reglas del juego institucional y con los acuerdos pactados entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana en el momento de la elección de Allende. El régimen chileno bascula en una fase nueva, que conduce bastante rápidamente a su fracaso y al golpe de Estado militar. Ya hemos visto cómo Haya de la Torre y el APRA habían pasado de un programa revolucionario antiimperialista a la alianza con Odría, jefe de una derecha socialmente represiva. El régimen mexicano, en el que el presidente parece omnipotente, muestra una discontinuidad extremada e incluso una especie de alternancia entre presidentes que podría llamarse de derecha y de izquierda, lo cual prueba, cuando menos, que los presidentes no tienen en general capacidad para

escoger a un sucesor que se les parezca. Si, en efecto, los regímenes populares están débilmente institucionalizados, si el proceso político no se desarrolla en ellos más que en débil parte en unas asambleas y a plena luz, el presidente o el líder del partido no por ello son soberanos autocráticos, déspotas, ilustrados o no, arrastrando por fuerza a su país hacia la modernización o hacia el retorno a la identidad nacional. Una insistencia excesiva en el papel del líder introduce un contrasentido sobre los regímenes nacional-populares, porque supone que el Estado es en ellos independiente del sistema político y de los actores sociales, lo cual contradice la definición, dada aquí, del régimen nacional-popular.

¿Acción política o situación de clase?

Mucho más interesantes son las interpretaciones sociales de las políticas nacional-populares; pero también deben ser criticadas. El populismo ha sido presentado, a menudo, como un accidente resultante de un desequilibrio interno del sistema social, arrastrado de un lado por una fuerte movilización, paralizado de otro por una débil capacidad para responder a las demandas. Así analizado, el populismo sería una expresión más general de los regímenes *pretorianos* de masas. Dicho de forma más concreta: durante el período de sustitución de las importaciones y de crecimiento del mercado interno se formarían movimientos de masas que desbordan a la oligarquía exportadora. Los líderes populistas llenarían el vacío así creado.

Ha sido G. Germani (cf. Bibl., I, 1) quien ha introducido este análisis al explicar el triunfo de Perón en 1945 por la llegada a Buenos Aires, en el curso de los diez años precedentes, de un millón de nuevos trabajadores, poco o nada integrados en las organizaciones políticas. M. Murmis y J. C. Portantiero (cf. Bibl., III, 4), críticos de la tesis de Germani, no han dejado de buscar, como él, una explicación del peronismo a partir de la situación de la clase obrera y del sindicalismo. Torcuato Di Tella, por su parte, ha dado más importancia al papel de los líderes, viendo una masa disponible arrastrada por una elite política cuya oposición al sistema político establecido explica la «incongruencia de estatuto». Sin embargo, estos análisis siguen siendo muy generales; explican mejor la crisis del régimen político anterior que el triunfo de regímenes nacional-populares, definidos por las características que nosotros les hemos atribuido, o de cualquier otra manera.

Más precisa es la tesis de quienes ven en el populismo un instrumento al servicio de la oligarquía en crisis, tratando a un tiempo de extender su base de apoyo y de controlar o apartar la presión popular. O. Ianni encuentra en la debilidad y la heterogeneidad de la clase obrera la explicación de un hecho: que «el proletariado acepta una coalición con otras fuerzas sociales y políticas, y en particular con la burguesía nacional. Acepta el nacionalismo, el desarrollismo y la industrialización, en los

términos que proponen la burguesía nacional y sus ideólogos» (cf. Bibl., III, 1, pág. 108). La debilidad de esta tesis es que supone la existencia de actores de clase «conscientes y organizados», lo cual, repitámoslo, no corresponde a la situación latinoamericana. La interpretación de Ianni es útil para comprender las opciones del Partido Comunista Brasileño y en particular su apoyo a Getúlio Vargas después de 1945 y su negativa al enfrentamiento de clase. Pero siempre es muy arbitrario hablar de una decisión del proletariado; más todavía, referirse a una burguesía nacional que dirija un proceso de sustitución de las importaciones. No existe en ninguna parte, y menos aún en Brasil, separación entre una oligarquía tradicional y una burguesía nacional que sería modernizadora. Considerar el populismo como un ardid de la oligarquía sólo puede tener sentido si nos referimos a regímenes que no deben ser calificados de populistas. Tal vez sea posible aplicar una idea tan extrema al caso de Velasco Ibarra en Ecuador, pero añadiendo también que a éste no lo podemos considerar en modo alguno como un líder populista, y es totalmente arbitrario aplicar una explicación semejante a Frei en Chile, a Kubitschek en Brasil, o a Velasco Alvarado en Perú. Por la misma razón que subrayamos la importancia de las críticas de J. Serra y A. Hirschman contra la explicación de los regímenes autoritarios por la coyuntura económica, hay que rechazar aquí con más fuerza todavía la explicación de los regímenes nacional-populares en términos de estrategia de clase, es decir, a partir de la presuposición de que existen actores sociales organizados que elaboran estrategias políticas y que constituyen un sistema político que sigue dependiendo directamente de intereses de clases. Semejante interpretación no hace más que subrayar la peligrosa dependencia intelectual de demasiados analistas latinoamericanos respecto a categorías procedentes de Europa. Dependencia que se manifiesta todavía hoy cuando se pretende interpretar las dictaduras militares o ciertos regímenes nacional-populares como fascistas. S. Zermeño (en la *Revista Mexicana de Sociología;* cf. Bibl., III, 1) va, por el contrario, a lo esencial cuando recuerda que las categorías políticas dominan en América Latina sobre las categorías sociales: «Se puede hablar de una sobrepolitización, en el sentido de que todo pasa por el Estado (sin que éste se vea por ello reforzado), pero también de una desocialización de la dinámica histórica latinoamericana, en el sentido de que el enfrentamiento entre las clases o las fuerzas sociales es extremadamente débil y se transforma inmediatamente en presión política.» De igual modo, aunque definamos la política en términos de clase, en el caso chileno los actores de clase son definidos ellos mismos en términos políticos. Y E. Jelin (cf. Bibl., III, 3) concluye, en el caso argentino, que la palabra popular se define por la complementariedad de una situación económica y de la búsqueda del apoyo del Estado.

Deben evitarse, por tanto, dos errores opuestos. El primero consistiría en creer que los conflictos de intereses desaparecen en el unanimis-

mo populista. Nada de eso ocurre. Los obreros peronistas de Buenos Aires, por ejemplo, se refieren constantemente a sus intereses e incluso a su lucha de clase. Pero, a la inversa, el discurso nacional-popular no puede considerarse en modo alguno como la expresión de intereses sociales particulares. El discurso nacional-popular *no es un agente de representación social, sino un instrumento de participación política.* De ahí proceden la fuerza emocional de los discursos políticos y el carácter masivo de la movilización que se forma en el transcurso de las campañas, pero también la débil capacidad de resistencia del pueblo, en cuyo nombre hablan los populistas, a los golpes de Estado que destruyen los regímenes nacional-populares. Decididamente no es posible hablar de movimiento nacional-popular. Menos todavía identificar el populismo con intereses de clase, como hace E. Laclau, que opone un populismo de clase dominante a un populismo de clase dominada. No puede hablarse más que de política nacional-popular, definida como una forma de intervención del Estado. Esta política trata de incorporar fuerzas y demandas sociales al proyecto nacional de un Estado. Perón o Vargas, en Argentina y en Brasil, tomaron medidas favorables a los obreros y a los sindicatos, pero en el seno de un proyecto de extensión del control del Estado sobre la vida social. Las políticas nacional-populares son desarrollistas, pero no están al servicio de una burguesía nacional. La construcción de un Estado no a lo Bismarck, sino capaz de superar las contradicciones y los riesgos de estallidos de la sociedad, es el objetivo principal de la política nacional-popular que no separa ese desarrollo del Estado de la integración nacional y de la defensa de los intereses populares. En Brasil el Estado se ha afirmado frente a los poderes regionales; en Argentina, el peronismo ha querido dar una ciudadanía completa a los trabajadores; en México, el régimen creado por Cárdenas estableció un poder posrevolucionario. El predominio de los objetivos políticos nunca significa que no actúen grupos de intereses o incluso movimientos sociales, sino que éstos dependen siempre de la acción política. La política nacional-popular no es representativa y, por consiguiente, aunque a menudo cree una fuerte participación, no puede considerarse más que como democrática. Lo cual permite a menudo un paso más fácil de lo que podría esperarse del parlamentarismo a la dictadura.

Revolucionarios sin revolución

Ninguna palabra se ha empleado más en América Latina que la de revolución. Con razón, a primera vista, si se define una revolución como la combinación de una lucha social popular, de la destrucción de un «antiguo régimen» y de una movilización nacional. En este sentido, el mundo ha conocido una era de revoluciones, a partir de finales del siglo XVIII y hasta el nuestro. Los movimientos revolucionarios se han definido como progresistas, luchando contra el pasado al mismo tiempo

que como movimientos de clase dirigidos contra los dueños de la tierra, de las empresas y del Estado. Los movimientos revolucionarios han unificado, por tanto, lucha de clases, desarrollo económico y respeto de las libertades. De suerte que, en muchos países todavía dominados por una autocracia tradicional o un poder colonial, la revolución fue considerada como el punto de partida indispensable de la modernidad. Ése fue, en el siglo XVIII, el caso de Estados Unidos y de Francia y, a principios del siglo XX, el de Rusia, donde estalló la revolución soviética que ha dominado una gran parte de la historia política del siglo XX. Pero ¿no ha terminado esa era de las revoluciones? En particular, la revolución mexicana ¿no es el primer gran ejemplo de una perturbación social y política que ya no pertenece al mayor conjunto histórico que va de la Revolución francesa a la Revolución china? Desde luego, en parte fue una revolución progresista y condujo sobre todo a la formación de un Estado modernizador, pero fue también, y más todavía, el primer gran ejemplo de una resistencia a una modernización venida de arriba y de fuera y que perturbaba las estructuras sociales y culturales anteriores. En este sentido, la revolución mexicana es la primera de una larga serie donde se sitúan en particular las revoluciones argelina e iraní. Más que de revolución, hay que hablar aquí, por tanto, de populismo revolucionario, porque éste se orienta a un tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Es progresista y se opone a los obstáculos con la modernización económica y con la participación política, pero es también comunitario, porque quiere proteger la especificidad nacional contra todos los aspectos de la dependencia. En América Latina las revoluciones no miran ni hacia el futuro, como las revoluciones de tipo soviético, ni hacia el pasado, como la revolución iraní; miran, sobre todo, hacia el presente porque tratan de reconstruir la nación dividida y extender la participación política y social. Lo cual implica contradicciones visibles entre una inspiración revolucionaria, un movimiento de perturbación del orden establecido y un esfuerzo político e institucional para reforzar éste; se abren las puertas de la ciudad a los recién venidos al mismo tiempo que algunos se dedican a abatir sus muros.

El discurso populista

La unidad de los regímenes nacional-populares no estriba sólo en el sentido de su acción; se sitúa más todavía en el discurso populista, en nombre del principio anteriormente explicado de la desarticulación de la ideología y de la política en relación a la situación económica. El discurso populista no trata de ser representativo y el dirigente político no se dirige a una categoría o a una clase precisas. El líder se identifica a un conjunto, al pueblo, a la nación, a la patria, a la gran mayoría o a las multitudes anónimas, como decía Adhemar de Barros, alcalde y luego gobernador de São Paulo entre 1947 y 1964. El enemigo se define como

el anti-patria, el anti-pueblo, como hizo Perón en su campaña presidencial. Esta ausencia de referencia social se explica porque el líder populista cree que es la conciencia lo que determina las transformaciones sociales. M. Arraes, hombre de izquierdas, lo dice tan a menudo como C. Lacerda, hombre de derechas. Además, la conciencia lo mismo que la acción deben identificarse con un individuo. El discurso populista es personalista. S. Sigal y E. Verón han estudiado con mucho cuidado el discurso peronista. El exilio del líder, que duró diecisiete años, reforzó el tema de la personalización del actor político. Sólo el jefe político puede unir unos grupos sociales diversos y temas divergentes: la modernización y la igualdad, la defensa de la esencia nacional y la necesidad del cambio. Lo que permite al líder integrar todos estos temas en su discurso es su referencia constante a lo étnico; transforma los problemas políticos en opciones éticas; se identifica con el bien y condena a los defensores del mal. Este discurso globalizador, producido en el transcurso de campañas de masas, da una importancia central al Estado, instrumento de liberación y de lucha contra los enemigos del pueblo, pero que también puede caer en malas manos. Este Estado no es un conjunto de instituciones, sino la personificación de la nación, el pueblo, de suerte que el líder, identificado con el Estado, lo está también directamente con el pueblo y con la nación. G. Debert ha mostrado que estas características generales de la enunciación populista se encuentran de la misma forma en los discursos de A. de Barros, de M. Arraes, de C. Lacerda, gobernador UDN del estado de Guanabara, es decir, de Río, y de L. Brizola, gobernador PTB de Rio Grande do Sul y diputado federal de Río. Sus opiniones son extremadamente diversas, tanto como los apoyos electorales que reciben, pero en todos los casos el líder político aparece como un principio de unificación, como aquel que hace volver a entrar a los excluidos en la nación, que suprime la frontera que separa el campo de la ciudad o la tradición del futuro. Es el líder personalmente, y no el partido que ha creado o el debate parlamentario, quien puede resolver los grandes problemas del país. Si el nombre del líder populista se utiliza por un partido que apela a intereses precisos y a un análisis de la sociedad en términos de clase, que ataca en particular a enemigos bien determinados, la ruptura del discurso y de la acción populista es inmediata. Esta ruptura está amenazando constantemente y el líder debe mantener la unidad entre tendencias o fracciones contradictorias entre sus partidarios. El ejemplo más importante de ruptura del populismo se produjo en Argentina. L. de Riz ha mostrado que el proyecto de Perón, después de la vuelta del peronismo al poder en 1973, era construir, más allá de su carisma personal, un «orden legítimo y estable, capaz de constituirse en el espacio dejado libre por los conflictos de intereses entre las clases; un orden-arbitraje» (cf. Bibl., III, 1, *Retorno y Derrumbe,* pág. 11). Tras su muerte, el peronismo estalla y degenera en violencia de un lado, en corrupción y en caos de otro.

S. Sigal y E. Verón han llevado más lejos el análisis, a partir de este ejemplo: la razón del discurso populista es eliminar la *violencia* siempre presente en una sociedad de contrastes, de contradicciones y de conflictos. El triunfo del discurso y del sistema nacional-popular ha dado, durante decenios, un marco extraordinariamente pacífico a la política latinoamericana. Pero en el seno de ese régimen siempre vemos puestas en práctica las formas más brutales de explotación social, el desarraigo de millones de emigrantes, las formas violentas de resistencia de quienes se hallan desposeídos de su propiedad o de su trabajo. La violencia presente en la sociedad latinoamericana, que comporta un margen de exclusión tan amplio, no podía ser tratada por mecanismos institucionales que suponen que esta exclusión haya sido, en lo esencial, superada. Es la acción y los discursos nacional-populares los que han impuesto límites a la violencia, los que han creado una forma de participación, en parte artificial, pero que tuvo una gran realidad en un continente donde la política no es sólo cosa de interés y donde la ideología no traduce solamente los intereses de una clase. Cada vez que se rompe la unidad del discurso y de la acción nacional-populares, estalla de nuevo la violencia, en particular en forma de presiones populares, pero sobre todo de dictaduras antipopulares. La fuerza del discurso populista estriba en que no sólo es difundido por los dirigentes políticos; se reproduce en todos los planos de movilización política. Un estudio del lenguaje de los miembros populares del APRA en Perú ha mostrado la misma identificación, en todos los escalones de la sociedad, del líder y de la nación, del pueblo y de los valores morales, la misma alianza de las referencias a unos intereses sociales concretos y al tema central de la unidad nacional.

Es el predominio de las intervenciones sociales y políticas del Estado sobre las iniciativas de los actores sociales lo que caracteriza el modelo político central de la América Latina, la noción de *pueblo* o *povo* no es más que «el operador» de esa subordinación de todas las categorías sociales al proyecto del Estado nacional-popular. Por ello las organizaciones políticas y los poderes intermediarios son siempre débiles. Los lugares centrales de la política son los mítines de masa. La política peronista se hizo durante años en la Plaza de Mayo, donde Perón se dirigía a las multitudes reunidas. En el transcurso de los años ochenta, el pensamiento latinoamericano ha empezado a reconocer la importancia de los movimientos sociales. El tema es, en efecto, nuevo sobre el continente, no sólo porque en muchos países las dictaduras militares han destruido los regímenes nacional-populares, sino porque éstos constituían un obstáculo insuperable a la autonomía y al papel central de los movimientos sociales. Ha sido después de la destrucción de los regímenes nacional-populares y el derrumbamiento de las dictaduras antipopulares cuando se ha podido emprender el *paso de una política de participación a una política de representación,* cuando la referencia a intereses, conflictos y movimientos sociales puede adquirir importancia en países habituados a no

considerar más que los intereses globales de la nación o de un pueblo. Los regímenes nacional-populares constituyen un obstáculo a la formación de actores y de conflictos sociales independiente, y, en sentido más lato, a la separación de la sociedad civil y del Estado. Pero es la confusión de estos dos órdenes lo que constituye el aspecto más específico del modo de desarrollo latinoamericano en el curso de los últimos cincuenta años.

2.—Las luchas campesinas

UNIVERSIDAD DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

No todas las luchas campesinas constituyen movimientos sociales campesinos. Como hemos recordado, un movimiento social se define por la lucha de un actor social contra un adversario por el control de los principales recursos de una sociedad o por la dirección del proceso histórico de desarrollo. Un movimiento social combina, por tanto, eso que yo he llamado un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad, es decir, la definición de un envite. Las luchas sociales pueden implicar estos tres elementos, pero a menudo no implican más que dos. Ciertas luchas campesinas definen los intereses de los campesinos pero en la forma de una defensa comunitaria que se moviliza contra unos enemigos que pueden ser indeterminados. De manera casi opuesta, el mundo campesino puede ser comprometido en una lucha general contra un cambio, un proceso de desarrollo, que le parece completamente dominado por sus adversarios, lo cual conduce a menudo a rupturas sociales y políticas. Finalmente, existen luchas campesinas que se acercan a las del sindicalismo obrero, cuando los trabajadores agrícolas se organizan para defender sus salarios o sus condiciones de trabajo.

¿En qué caso pertenecen las luchas campesinas a uno de los tres tipos que acaban de ser rápidamente definidos o, por el contrario, poseen todos los elementos que constituyen un movimiento social? ¿En qué caso se puede hablar de movimiento campesino? La respuesta a esta cuestión es tanto más difícil de dar cuanto que acabamos de recordar que la América Latina está muy lejos, por regla general, de conocer movimientos

sociales independientes de las intervenciones del Estado. Este principio general ¿impide hablar de movimiento campesino y ha de impedirnos hablar, en un capítulo siguiente, de movimiento obrero? ¿Se puede, no obstante, definir unos casos precisos en los que se forme o tienda a formarse lo que hay que llamar un movimiento campesino o un movimiento obrero?

1. La comunidad en crisis

La importancia de las barreras que separan el campo de la ciudad explica que los efectos del desarrollo capitalista urbano sufridos por las gentes del campo no hayan sido vividos, en líneas generales, por ellos como los efectos de una nueva dominación social, sino más como la crisis de una comunidad. Muchos movimientos se han esforzado por reconstituir ésta, pero sin que, en numerosos casos, sea posible separar movimiento de reconstrucción comunitaria y lucha de defensa social contra un adversario que ya está presente aunque todavía no haya sido claramente nombrado. De ahí los largos debates, en las ciencias sociales latinoamericanas, sobre la interpretación, tanto de los movimientos mesiánicos brasileños como de movimientos sociales políticos y religiosos tan diversos como los Cristeros mexicanos, las Ligas Campesinas brasileñas o diferentes formas de movimientos indianistas.

Los mesianismos

La crisis de la sociedad rural parece endémica en el Nordeste *brasileño*. M. I. Pereira de Queiroz señala movimientos mesiánicos en esa región, al mismo tiempo que actos de bandidismo o de violencia colectiva, desde principios del siglo XIX. El *sebastianismo,* movimiento de reconstrucción comunitaria animado por la espera del regreso del rey portugués, lo predica José dos Santos en Pernambuco en 1817; el ejército reprime su movimiento. João Ferreira anima en el mismo estado, en 1835, un nuevo movimiento sebastianista que concluye más trágicamente todavía, porque la comunidad amenazada se entrega a sacrificios humanos masivos para acelerar el retorno del rey Sebastián. Otro movimiento mesiánico aparece en el estado de São Paulo, a partir de 1844, cuando comienza la predicación de João María Soracaba. Las sequías de finales del siglo XIX y de principios del XX, en 1877-1888, 1900-1915 y 1919, teniendo en cuenta la superpoblación relativa, agravan la crisis agraria en esta región. Pero es sobre todo el cambio de régimen social y político de Brasil en esa época, la abolición de la esclavitud y la caída consiguiente del régimen imperial, los que acentúan la crisis comunitaria y dan nacimiento al más importante movimiento mesiánico. Antõnio Maciel, llamado el Consejero, *O Conselheiro,* nacido en 1828 en el Ceará, tras un

largo período de predicación itinerante, crea la ciudad de Canudos, en el Sertão, junto a los límites del Sergipe y del estado de Bahía, ciudad que será destruida por el ejército tras varias campañas militares en 1897. El padre Cícero, cura de Joazeiro, en el estado de Ceará, a partir de 1870, logra evitar la represión e incluso más tarde se convierte en un jefe político local, hasta su muerte en 1934. En el estado de São Paulo, en 1910, José María se presenta como João María resucitado, y anuncia el fin del mundo, como lo había hecho el *Conselheiro.* Su comunidad es destruida en 1915, al final de la guerra del Contestado. Estos mesianismos ¿son movimientos religiosos o movimientos sociales? ¿Son una forma extrema de defensa de comunidades amenazadas por crisis internas y los efectos indirectos del desarrollo capitalista urbano, o llevan ya en ellos formas «primitivas», según la expresión de E. Hobsbawn, de defensa social? Debemos desechar, ante todo, una interpretación: estos movimientos no son revolucionarios, no apelan al derrocamiento del orden social; al contrario, con mucha frecuencia denuncian el orden social nuevo y sobre todo la república y apelan a la reconstrucción del orden social y político anterior.

Pero sería imprudente no ver en estos movimientos más que pura defensa del pasado. En una colonia alemana del sur del Brasil, João Maurer y su mujer Jacobina lanzaron en 1872 un movimiento que se oponía a la diferenciación social en el seno de la comunidad. Movimiento de fuerte contenido social, dirigido contra los ricos y contra la ruptura de la igualdad primitiva. Movimiento que posee, por tanto, un contenido a la vez comunitario y social, tanto más visible cuanto que incluso la comunidad amenazada conoció otro movimiento, más religioso y tradicionalista, que parece no haber tenido otra función que reconstruir la comunidad amenazada. ¿No se encuentran esos dos componentes en la acción del *Conselheiro?* Desde luego, Canudos es, ante todo, un esfuerzo de reconstrucción social, que se apoya en la unidad tradicional, es decir, la familia y no el individuo, y que se organiza en torno a valores y actividades religiosas, la principal de las cuales es la construcción de la Nueva Iglesia en la que el *Conselheiro* participa personalmente. En el Sertão, donde la sequía obliga con frecuencia a la población a migraciones desesperadas, Canudos, como Joazeiro, representa una contra-sociedad que restablece un orden social en una región que parece correr hacia su propia destrucción. Pero la oposición entre el *Conselheiro* y el padre Cícero, entre Canudos y Joazeiro, muestra que el tema de la defensa comunitaria no es sencillo. El padre Cícero se integra fácilmente en el sistema político local y nacional, mientras que la protesta profética del *Conselheiro* porta en sí la denuncia de un adversario lejano, imposible de definir, pero cuyos intereses se oponen a los del mundo rural. La Iglesia católica y las repúblicas florianistas no se engañaron y oyeron en la predicación del *Conselheiro* la denuncia del individualismo económico y jurídico de las clases medias en ascenso social. Los mesianismos son,

ante todo, movimientos de defensa comunitaria; a menudo son también formas indirectas de defensa social y, por esa razón, son objeto de una represión violenta. Lo que indica la presencia indirecta de un movimiento social en el mesianismo es la persona del mesías mismo. Por eso la comunidad no puede reconstruirse por sí misma, en su identidad y en su aislamiento: es indispensable el mesías, que manifiesta en su persona y en su discurso de denuncia la presencia de un enemigo lejano, invisible, pero amenazador. El *Conselheiro,* de un lado, organiza la vida económica de Canudos, desarrolla ahí el comercio de la leña y del cuero, y respeta la jerarquía social anterior eligiendo como apóstoles individuos ricos; pero al mismo tiempo, se identifica con los pobres y los marginados que afluyen de todas partes hacia la ciudad nueva. El discurso escatológico, la llamada a la reforma moral frente al inminente fin del mundo introducen un elemento dramático que no puede ser reducido a un objetivo de reconstrucción comunitaria. Lo cierto es que los mesianismos no constituyen una movilización propiamente social, que la población del Sertão no puede movilizarse directamente contra las fuerzas que la amenazan, salvo cuando éstas adoptan la forma de una expedición militar que acaba por destruir la nueva comunidad so pretexto de que está al servicio de conspiradores que pretenden restaurar el orden monárquico y social antiguo.

La resistencia de la sociedad local contra las fuerzas centrales de dominación política y económica puede, por lo demás, adoptar formas distintas al mesianismo. La resistencia de muchos caciques locales al poder central puede tener un sentido análogo. Así es como en la región de Nayarit, en *México,* a mediados del siglo XIX, Lozada, bandido y luego cacique, jugó un papel importante en la política nacional mexicana hasta su eliminación en 1873, porque su acción, apoyada en los campesinos, amenazaba la política liberal de desamortización de las tierras, favorable a los grandes propietarios.

Los Cristeros

La mezcolanza de temas religiosos y de temas sociales es más visible todavía en el movimiento de los Cristeros *mexicanos* al final de los años veinte. Estos campesinos católicos se sublevaron contra la política anticlerial de Calles y contra el cisma inspirado por los *callistas* y, sobre todo, por el líder sindical, Luis Morones. Esta resistencia comunitaria no fue completamente apoyada por los obispos, que deseaban llegar a un acuerdo con el Gobierno posrevolucionario, pero se generalizó en el centro y el sur del país hasta que un acuerdo, finalmente hallado, entre el Gobierno y la Iglesia, pone fin, a partir de 1934, a la vez al sublevamiento y a la persecución antirreligiosa. Fue un movimiento de pobres, en el que los ricos no participaron, y que fue animado por un espíritu de sacrificio y de martirio. Durante mucho tiempo, la historiografía oficial

mexicana ha considerado a los Cristeros como reaccionarios retrasados, de la misma manera que E. da Cunha, en su famoso reportaje *Os sertões,* veía en los habitantes de Canudos seres primitivos e irracionales. Pero ¿cómo no pensar aquí en el juicio sumario hecho durante tanto tiempo sobre el levantamiento de la Vendée a partir de 1793? También aquí ¿no hay que sustituir la idea de un movimiento de defensa de la aristocracia y del clero por la idea, muy diferente, de la defensa de una organización comunitaria contra un nuevo tipo de dominación social y política, contra el acaparamiento de tierras por parte de una nueva burguesía? El estudio de J. Meyer sobre los Cristeros ha mostrado con toda claridad la presencia, en este movimiento, no sólo de valores comunitarios, sino de una acción de defensa contra una nueva elite dirigente. Tampoco aquí se puede hablar de movimiento social, en sentido estricto, pero también aquí sería peligroso no ver más que un movimiento de defensa de un sistema social y cultural tradicional allí donde aparece ya una forma de levantamiento contra el asentamiento de una dominación económica y política.

Las Ligas Campesinas

Este contenido social aparece con mayor claridad en la acción de las Ligas Campesinas *(Ligas Camponesas)* brasileñas que se crean en 1945, en la periferia de Recife, primero bajo el control del Partido Comunista; luego se extienden rápidamente, a partir de la intervención del joven abogado Francisco Julião en el Engenho Galiléia. El movimiento se desarrolla con fuerza durante el período 1955-1959 en la Zona da Mata y en el Agreste, es decir, en las zonas rurales cercanas a la costa, y no en el interior, en el Sertão. A partir de 1960, el movimiento desborda la región donde ha tomado nacimiento y, en noviembre de 1961, organiza un primer congreso nacional de campesinos en Belo Horizonte, donde las Ligas Campesinas se oponen a la *União de Lavradores e Trabalhadores Agricolas,* controlada por el Partido Comunista. Julião crea en 1961 el *Movimento Revolucionário Tiradentes,* para coordinar la acción de las Ligas. Éstas no se apoyan en los asalariados agrícolas, como lo hacen en la misma época los sindicatos, sino sobre los pequeños propietarios, *minifundistas, precaristas.* Las Ligas no constituyen por ello un verdadero movimiento social. Estos pequeños campesinos no llegan a constituirse en actor social autónomo. Las Ligas constituyen ante todo una nueva forma de clientelismo, y Julião, elegido diputado federal en 1962, se transforma en dirigente político nacional, en ruptura con los comunistas, de un lado, y los janguistas, partidarios de João Goulart, de otro, lo que llevó a la decadencia de las Ligas, amenazadas por los progresos de los sindicatos cristianos y comunistas. Al mismo tiempo, las Ligas están vinculadas a una corriente política revolucionaria de apoyo a la revolución castrista; Clodomiro de Morais y el padre Alipio preparan una acción ar-

mada. Las Ligas estarán representadas en la Tricontinental, reunión de todos los movimientos pro castristas. Además la radicalización política de ciertos militantes de las Ligas, cada vez más decididos a dar prioridad a la lucha antiimperialista, y por tanto a organizar una guerrilla en el Nordeste brasileño, estuvo limitada por las buenas relaciones que João Goulart mantuvo con Cuba. Julião aparece de este modo como una mezcla inestable del padre Cícero y de Fidel Castro. Las Ligas se convierten en una base de maniobra utilizada en varias direcciones políticas a la vez, porque también obran en favor de la modernización del Nordeste, en un espíritu que prepara la acción de la SUDENE y de Celso Furtado. Pero la defensa de una categoría de campesinos se halla debilitada por las luchas políticas que dividen el movimiento y por el personalismo de Julião.

Indianidad e indianismo

La defensa comunitaria se vuelve la base de un movimiento social con más facilidad cuando la comunidad dominada amenazada tiene una identidad étnica, cuando la defensa comunitaria se convierte en un movimiento indígena que se opone a una dominación que es a la vez étnica, económica y política. Esta idea ha sido desechada durante mucho tiempo. De un lado, por los observadores liberales y modernistas, que considerarían el mundo indígena como arcaico y marginal. La economía de mercado, las luchas sindicales y los debates políticos nacionales debían eliminar rápidamente el mundo de las comunidades, vuelto hacia su propia integración y su propio equilibrio, y por eso mismo incapaz de responder a las transformaciones de su entorno. Evolucionismo bien representado por E. Redfield que no sólo opuso, como antropólogo, *folk society* y *urban society,* sino que afirmó que la primera no puede luchar contra su absorción progresiva por la segunda, que representa la modernidad. Del lado opuesto, los defensores más radicales de la teoría de la dependencia quisieron sustituir, en su definición de la condición india, la realidad étnica por una situación económica, considerada ella misma como un efecto de la dominación imperialista. El indio carece de identidad propia, no es más que un colonizado. Ésa es la posición de Henri Favre al estudiar a los mayas tzotzil y tzeltal del estado de Chiapas, en México, junto a la frontera con Guatemala. Critica la definición culturalista del indio y afirma que la realidad social y cultural de la vida india está erróneamente considerada como la herencia lejana del período colonial, cuando en realidad, en ciertos países, se organizó después de la independencia que provocó un proceso de regresión y de ruralización, reforzado, a finales del siglo XIX, cuando la extensión de las plantaciones agro-exportadoras y el triunfo de la economía liberal destruyeron las comunidades y encerraron a los indios en una marginalidad económica donde no eran más que una reserva de mano de obra estacionaria para

las plantaciones. Henri Favre y muchos otros creen posible la formación de movimientos de clase pero no de movimientos étnicos en las zonas pobladas por una mayoría de indígenas, en particular en Guatemala, donde una parte notable de la población habla una lengua indígena. Los movimientos campesinos que se formaron en el siglo XX tuvieron, en efecto, a menudo, objetivos más económicos que culturales y fueron ayudados o animados con mucha frecuencia por grupos extraños a la población indígena: Iglesias, protestante o católica, de un lado, intelectuales y políticos de la ciudad, de otro. En Guatemala, por ejemplo, tras el período contrarrevolucionario, a partir de 1964, se organizan cooperativas campesinas. Su principal meta no es la recuperación de las tierras comunitarias, sino la comercialización de los productos. Sin embargo, sectores de la Iglesia católica, y en particular los religiosos Maryknoll, procedentes de Estados Unidos, así como grupos protestantes e intelectuales de la ciudad, se esforzaron por dar también una dimensión étnica a esas reivindicaciones. La democracia cristiana sirvió de expresión política a este movimiento en el que participaron, en el plano local, más comerciantes que campesinos. Volvemos a encontrar esa dependencia en el *indigenismo* mexicano, que jugó un gran papel en la formación de una política de educación, de salud y de comunicación en favor de la población indígena, pero que fue creada por los intelectuales posrevolucionarios como parte de su esfuerzo por edificar una Nación y un Estado nacional y popular, expresión de la «raza cósmica», mezcolanza de aztecas y de españoles, evocada por J. Vasconcelos. Existió incluso un indigenismo conservador, ideología de la clase de los propietarios de bienes raíces, amenazados por el desarrollo del capitalismo urbano y vinculados a la defensa de un orden social tradicional en el que ellos ocupaban una posición dominante. De este modo, la defensa de las comunidades indígenas fue considerada generalmente como un fenómeno residual.

Esta posición, demasiado marcada por un evolucionismo ya sea liberal, ya sea marxista, no puede ser aceptada por entero. C. Smith, después de haber vivido más de cuatro años en Totonicapán, en el centro del Altiplano occidental guatemalteco, descubrió que la población india de esa comunidad, siendo como era mucho más diversificada socialmente de lo que decían los antropólogos, conservaba una fuerte conciencia de indianidad. Esos artesanos, comerciantes, campesinos o asalariados agrícolas de las comunidades centrales de esta región, Totonicapán, Quezaltenango y Chimaltenango, querían defender su sociedad local contra el mundo lejano y hostil de la costa, del Estado y del extranjero. Lo cual, sin embargo, no permite concluir en la existencia de movimientos indios, porque los indios no son directamente una clase explotada. Trabajadores agrícolas dependientes se hallan encerrados en la marginalidad de una comunidad en la que, por regla general, las tierras están individualizadas, de suerte que su conciencia se organiza, no en torno a una relación social de dominación, sino, por una parte, en torno a una

realidad étnica y, por otra, en torno a la experiencia de la represión militar, política y policial. De este modo el indio no se define ni por una cultura tradicional ni por una situación de clase. La oposición del indio y del blanco representa la dominación de la economía de mercado, y más todavía del poder político, sobre categorías excluidas y definidas por sus atributos étnicos más que por su papel económico. Así, realidad étnica y dominación político-militar están asociadas y determinan el campo de una acción que no es ni puramente defensiva ni únicamente económica. En este sentido, es peligroso caracterizar a los indígenas como una minoría o un grupo marginal. El hecho central es la naturaleza de la dominación que crea la figura del indio: es una dominación racista, es decir, que naturaliza lo dominado. Y no es por casualidad que el mundo dominante hable del indio como habla de la mujer: uno y otra son seres sin valor, emotivos. Y las historias que se cuentan difunden esa imagen del indio sexualmente pasivo, a menudo incluso homosexual. El pensamiento machista encierra a la vez a la mujer y al indio en una inferioridad natural. El carácter de esa dominación hace que la conciencia india no pueda ir más allá de esa representación de sí mismo como indio ni del rechazo de la conquista. La indianidad no puede transformarse en indianismo. Las comunidades indígenas llegan incluso a veces hasta insurrecciones locales; no llegan a organizarse en un movimiento integrado y de alcance nacional. Tanto en México y Guatemala como en Perú, la distancia entre la conciencia de indianidad y el movimiento indianista sigue siendo muy grande. En Perú, la conciencia de indianidad disminuye incluso en numerosas partes de la Sierra. La oposición *misti-indio* queda reemplazada por la oposición puramente económica del campesino o del comerciante rico y del campesino pobre. Los ricos propietarios, o *vecinos,* antes de la reforma agraria de 1969 abandonan la comunidad, por ejemplo en el caso de Yucay, estudiado por A. Molinié-Fioravanti, para vivir en el Cuzco como comerciantes y profesionales, lo cual aumenta la importancia de los *cholos,* indios separados de su comunidad y que van a buscar en la ciudad ocasiones de ganancias económicas y de satisfacciones sexuales. Individualistas y móviles, no son en ningún caso agentes de formación de un movimiento indio. Tanto en Yucay como en el valle de la Convención, a principios de los años setenta, casi nadie se reconoce como indio. Cuando se forma un movimiento indio, no puede apoyarse sobre la comunidad heredera del ayllu, que está disgregándose; proviene de la ciudad, de intelectuales y de grupos políticos.

El katarismo

Eso es lo que ha pasado en Bolivia, durante el gobierno de Banzer, mientras una urbanización acelerada provocaba una crisis del mundo campesino aymará. No son estos campesinos mismos, sino más bien intelectuales de La Paz, de origen aymará, los que redactan en 1973 el Ma-

nifiesto de Tiahuanaco. Su acción se produce en el momento en que los efectos de la revolución de 1952 llevan a un incremento rápido de la participación política y cultural de los indios. De 1950 a 1980, la proporción de niños de seis a catorce años no escolarizados cae del 85 por 100 al 20 por 100; la población de las ciudades aumenta rápidamente, la de Santa Cruz se multiplica por seis en treinta años, la de Cochabamba y la de La Paz por tres. La población de lengua española asciende, entre 1950 y 1976, del 36 al 53,7 por 100 y, sobre todo, aumenta fuertemente la proporción de bilingües: en el departamento de La Paz las tres cuartas partes de los habitantes pueden expresarse en español. Pero esa integración cultural va acompañada de una crisis económica. Son los funcionarios y los comerciantes quienes más aprovechan los cambios; el empleo agrícola disminuye. Ese mundo campesino, que participa más en la victoria nacional, pierde su base tradicional, y es hostil al Gobierno central, al de Banzer, que aplasta un movimiento campesino, pero también al Gobierno democrático de L. Gueiler. Esta situación de los indios de Bolivia, en particular la de la población rural aymará del departamento de La Paz, explica que aparezca aquí más que en otra parte una tentativa por crear un movimiento autónomo que integra las reivindicaciones étnicas con una acción sindical y política.

Ésa es, en efecto, la definición del movimiento Tupac Katari, creada por Genaro Flores, joven campesino, dirigente de su comunidad, que organiza la *Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupac Katari,* que se transforma en *Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (SUTCB) cuando se afilia a la central sindical la COB. Flores crea también el Movimiento Revolucionario Tupac Katari. Este movimiento es aparentemente un movimiento campesino, pero es un ejemplo típico de la desarticulación de la acción política e ideológica en relación a la situación económica. El katarismo está presente en las luchas campesinas y también en las luchas urbanas, en La Paz y especialmente en el barrio El Alto, donde vive una población pobre, ren gran parte aymará, pero se trata, ante todo, de un movimiento político, tan directamente comprometido en las luchas entre partidos que se divide él mismo entre los radicales de MITKA y los moderados del MRTK. Algunos observadores como S. Romero han considerado que el katarismo seguía estando al margen del movimiento campesino; por el contrario, F. Calderón ha concedido más importancia a la vinculación lograda por el katarismo entre los temas campesinos nacionales y culturales. De hecho, no ha sido sino en 1979-1981, cuando el katarismo se ha convertido en una fuerza autónoma de movilización campesina.

Frantz Fanon ha emitido, sobre todo en *Los condenados de la tierra* (1961), la idea de que la situación colonial alienaba más a los que se hallaban en contacto directo con los colonizadores y de ello ha concluido que la capacidad de lucha era mayor en las categorías más alejadas del

contacto con los amos, entre los campesinos, las mujeres, protegidas por el mundo de la casa, el pueblo en general. Esta idea de que las categorías menos «evolucionadas» tienen una mayor capacidad, a la vez defensiva y revolucionaria, para rechazar el sistema capitalista y la dominación imperialista, no se corresponde con los hechos observables en América Latina. Si las categorías más dominadas saben organizar una movilización defensiva, ésta no se transforma en acción autónoma ni llega a oponer su espontaneidad revolucionaria a la dominación extranjera. Las ideas de Fanon pueden verificarse en otras situaciones; el hecho de que no se correspondan con la sociedad latinoamericana subraya simplemente que la situación de América Latina no es la de una sociedad colonizada, sino la de una sociedad dependiente que conserva una autonomía interna, política y cultural mucho mayor que la de las sociedades colonizadas.

La conclusión general de la evocación de estos diversos tipos de defensa comunitaria es que ninguna de ellas logra unir la búsqueda de una identidad y la intervención en la política nacional. Movimientos como el de los Cristeros siguen encerrados en una defensa cultural y no tienen otra solución que la lucha armada. Los mesianismos superan la simple defensa comunitaria por la persona misma del profeta cuyo discurso vuelve sensible una amenaza que viene del exterior e introduce, por tanto, una dimensión política, pero ésta no puede transformarse en acción. Por último, los movimientos étnicos no participan en la política nacional más que de un modo: sirviendo de base a grupos políticos o culturales minoritarios en el sistema político nacional.

2. La defensa de la tierra

La historia del continente en el siglo XX está llena de luchas campesinas, mezcladas a veces a luchas étnicas, por ejemplo en las regiones más aisladas del Ecuador, el Chimborazo y el Cotopaxi, donde muchas de las sublevaciones campesinas son a un tiempo luchas contra los propietarios y contra los blancos. A veces, esas sublevaciones llevan en sí un modelo igualitario de contrasociedad. Tal fue el caso de la revuelta de los *llaneros* venezolanos, cuyas ideas se acercaban a las de los *levellers* ingleses del siglo XVII. Otras sublevaciones campesinas tienen una significación más política que social; es el caso de las *Montoneras* ecuatorianas, liberales o revolucionarias, que son utilizadas por caudillos que luchan por ampliar su poder. Antes del siglo XX, el movimiento campesino más importante es la guerra de las Castas (1847-1853), sublevación de las comunidades del Yucatán amenazadas por un capitalismo muy especulativo, guiado por la *sugar mentality*. Guerra que no concluyó por completo con la victoria de la clase social y étnicamente dominante y que se prolongó, en forma de lucha residual, hasta finales del siglo XIX. Estos diferentes

ejemplos indican ya que las luchas campesinas difícilmente logran ejercer efectos sobre la escena nacional, que la mayoría de las veces combinan una fuerte espontaneidad social y una neta dependencia política. Pero, en ciertos casos, el movimiento es lo bastante poderoso o la situación política lo bastante frágil para que se forme un movimiento campesino, e incluso un movimiento de clase, capaz de alcanzar importancia nacional. Se trata entonces, desde luego, de un *movimiento social* por el que los que trabajan la tierra se oponen a aquellos cuyos capitales se apoderan de ella poniendo en cuestión de esta forma el modo de desarrollo del país.

El zapatismo

El caso más célebre y más importante de movimiento social campesino sobre el continente es el zapatismo. Este movimiento, que nace en los inicios de la revolución *mexicana* en el estado de Morelos, no fue la única forma de lucha campesina, pero sí la que más se acercaba a un movimiento social, mientras los partidarios de Pancho Villa, en el Norte, y sobre todo los de Orozco, se identificaban menos claramente, bien por su base social, bien por sus metas, a un movimiento propiamente campesino. En el origen de la acción de Emiliano Zapata se halla la construcción del ferrocarril de Veracruz a México, que se concluye en 1873. De este modo se encuentran facilitadas la importación de máquinas y la exportación de grandes cantidades de azúcar, y por tanto el desarrollo rápido de un capitalismo agrario, en particular en el estado de Morelos; los grandes propietarios compran nuevas tierras y mejoran los rendimientos. Los campesinos de Morelos resisten a esa penetración capitalista y buscan el apoyo de los gobernadores, pero sin éxito. Muchas de las antiguas haciendas de los pequeños ranchos y de las aldeas desaparecen. Algunas familias logran compensar la falta de tierras con actividades comerciales. La familia de Zapata, por ejemplo, se consagró en parte al comercio de caballos. Otros pequeños propietarios se convirtieron en aparceros. Poco después del principio de la revolución, dirigida por Madero, a partir de 1910, Zapata, elegido alcalde de su pueblo de Anenecuilco, se transforma en líder de un movimiento a la vez social y político, y se convierte también en su jefe militar. Participa en la sublevación decidida en Ayala.

Lo que caracteriza el movimiento zapatista es su estrecho y constante vínculo con su base campesina. J. Womack, el historiador del movimiento, ha resumido así su análisis: «Lejos de ser una organización militar autónoma, como la de los vagabundos de Villa y de Orozco, el ejército revolucionario que toma forma en Morelos en 1913-1914 fue simplemente una liga armada de las comunas del Estado.» Los zapatistas organizan la defensa de los campesinos. No tratan de eliminar a todos los grandes propietarios sino que realizan una verdadera reforma agraria. Desde el

principio del período revolucionario, el plan de Ayala otorga la mayor importancia a la reforma agraria y, en 1914, el acuerdo de Aguascalientes, firmado por los partidarios de Carranza, por los de Villa y por los *zapatistas,* a pesar de las reticencias de aquéllos vuelve a adoptar los artículos del plan de Ayala sobre la reforma agraria. Este tema es tan central que del zapatismo saldrá el *Partido Agrarista.*

Pero, al mismo tiempo, el movimiento zapatista participa directamente en la historia política de la revolución. Primero, contribuyendo a elaborar la reforma agraria. Palafox, ministro de Agricultura directamente vinculado a Zapata, crea un Banco nacional de crédito rural, escuelas regionales de agricultura y una fábrica nacional de instrumentos agrícolas. Pero, sobre todo, los zapatistas participan en la acción militar. Habiéndose acercado a los villistas, entran con ellos en México en 1914. Transformaciones sociales y lucha militar nunca llegaron a integrarse por completo, y los jefes zapatistas siempre concedieron prioridad a la acción local. Pero el vínculo entre acción social y acción política fue lo bastante fuerte y directo para que podamos hablar aquí, más directamente que en cualquier otro caso, de un movimiento social campesino. Zapata, por otro lado, estuvo rodeado de intelectuales, en particular de enseñantes —pero no de estudiantes—, que trabajaron para reforzar los lazos entre la defensa campesina local y unas metas políticas e institucionales más generales. La oposición resulta nítida con Villa y Orozco, que reclutan sus tropas tanto entre el proletariado de las pequeñas ciudades, entre los artesanos y los comerciantes, como entre los pequeños propietarios y los obreros agrícolas. Influidos por el pensamiento anarquista de Flores Magón y de los *Industrial Workers of the World* norteamericanos, los partidarios de Orozco fueron los más radicales, los *red flaggers,* como decían los norteamericanos. Y estos grupos fueron más ejércitos que movimientos. Además, desde 1915, el ejército villista se descompuso y se transformó en gran parte en bandidismo. El ejército zapatista, por el contrario, fue el brazo armado de un verdadero movimiento campesino, que no pudo ni realizar una reforma agraria en todo el país ni impedir que la agricultura de exportación se mantuviera durante todo el período revolucionario, pero que aportó una componente social autónoma en un movimiento general de transformaciones políticas.

Los campesinos sin tierra

El zapatismo sólo consiguió tal importancia en una coyuntura revolucionaria. La mayor parte de las luchas sociales no se sitúan en un contexto semejante; sin embargo, a pesar de su debilidad, tienen las mismas características generales y forman verdaderos movimientos sociales.

El año 1932 estuvo marcado en El Salvador, en Perú y en Ecuador por sublevaciones campesinas. Fue en *El Salvador* donde hubo sobre todo un movimiento social, dirigido contra una oligarquía agraria muy

concentrada y poderosa, que la expresión «catorce familias» dirigentes del país evoca de manera desde luego inexacta, aunque tiene fuerza. Los campesinos invadieron las *haciendas* y las *pulperías*. La represión fue de una violencia excepcional: 30.000 campesinos resultaron víctimas de la matanza. En *Perú,* la sublevación campesina que acompañó la tentativa de sublevación aprista en Trujillo, en el norte del país, permaneció subordinada, por el contrario, a la acción política, pero la violencia de la represión indica que el ejército quiso aplastar un movimiento campesino, al mismo tiempo que al APRA. En *Ecuador,* la dependencia de la acción campesina fue mayor aún que en Perú; la sublevación campesina sirvió a los conservadores. Esta dependencia respecto a unas fuerzas políticas ya ha sido subrayada como uno de los aspectos más generales de los movimientos sociales en América Latina, pero no habría que deducir de ello que los campesinos carecen de capacidad de acción propia.

En *Brasil,* en particular, un gran número de luchas locales se muestran capaces de comprometerse en una acción política-militar. Ése fue el caso de la revuelta de *Dona Noca,* en el Maranão, en 1951. Este movimiento campesino, dirigido por una mujer, Juana da Rocha Santos, llamada *Dona Noca,* se asocia a una lucha política contra el gobernador, en la que también participan estudiantes dirigidos por un joven estudiante de derecho apodado *General Bastos.* Muy diferente es la creación del territorio libre de Formoza, en el estado de Goiás, por un grupo de *squatters* dirigidos por José Porfirio. Los campesinos se niegan a pagar el impuesto y, bajo la dirección del Partido Comunista, crean una república libre que evoca aquellas otras, más duraderas, creadas por el mismo partido en Colombia. Pero en el transcurso de ese período, los movimientos más importantes en Brasil son los de los *posseiros.* En Paraná, la presión por la tierra es constante desde el inicio de los años cuarenta, pero el Gobierno legaliza, de hecho, la posesión de muchas tierras. En otras regiones, la presión campesina adopta el aspecto de guerrillas, en ocasiones dirigidas por el Partido Comunista, por ejemplo en Porecatu, en 1950-1951. En los decenios siguientes, en la Amazonia, numerosos *posseiros,* procedentes del Norte y del Nordeste, tratan de apoderarse de tierras de las que son violentamente expulsados por los grupos capitalistas que se apoderan de esa región. Luchas complejas que no podemos reducir a luchas de clases defensivas, aunque a menudo tengan esa dimensión. En efecto, a veces los *posseiros* entran en lucha contra los indios y sus tierras tribales, pero la mayoría de las veces, se defienden contra los *paulistas* y contra las empresas multinacionales. En todos los frentes de pioneros, y en particular en el valle del Tocatins, múltiples luchas enfrentan a estos *posseiros* con los grandes propietarios, que a menudo se desembarazan de ellos mediante el asesinato.

La debilidad y la dispersión de estos *posseiros* se oponen a la fuerza tradicional de las *comunidades andinas* que luchan de la misma manera contra la extensión de los latifundios y contra la sustitución de la agricul-

tura de subsistencia por una ganadería extensiva. La serie de obras novelescas de Manuel Scorza, y sobre todo *Redoble por Rancas,* ha puesto de manifiesto de modo admirable la fuerza de las luchas comunitarias en *Perú* contra la poderosa empresa *Cerro de Pasco,* conflicto que culmina en mayo de 1960 y que se convierte en el símbolo de las luchas populares latinoamericanas contra una dominación a un tiempo capitalista y extranjera. Estas luchas campesinas son antiguas. Se encuentran sus huellas por lo menos desde el período de Leguía. En Huancavi en 1922, en Lamar en 1923, los campesinos invaden tierras y protestan contra los impuestos, lo cual da una dimensión política a esa lucha económica, como había ocurrido ya con las luchas de los campesinos franceses en el siglo XVII. Más importante es la lucha de los campesinos de Ica, en la costa peruana, porque ese conflicto de 1924 estuvo en el origen lejano de la primera gran organización campesina en Perú. También en este caso la lucha procedió ante todo de los pequeños propietarios más que de los colonos. Se unieron contra la utilización del sistema de regadío por los grandes propietarios, que lo empleaban en su solo provecho. Pero la fuerza de Juan Pevez, pequeño campesino de Parcona, estuvo en asociar esta lucha por el agua a la acción de los asalariados agrícolas por la ley de las ocho horas. La *Federación de Campesinos del Valle de Ica* se integró al conjunto de fuerzas que luchaban contra la oligarquía, los sindicatos obreros y las universidades populares en particular. Pevez tuvo incluso contactos con Mariátegui. Su acción fue defendida por Leguía, que quería aparecer como el defensor de los indios y llegó a reunir incluso un congreso indígena en 1921. La convergencia de estos temas sociales y étnicos, en particular en el comité Tahuantinsuyo, dio al movimiento del valle de Ica un fuerte contenido de clase. Pero el 18 de febrero de 1924, el alcalde de Parcona fue asesinado en el transcurso de un enfrentamiento con los habitantes que defendían la sede de su federación. La población fue arrasada; Pevez fue salvado de la muerte por Leguía, que ordenó encarcelarlo en la capital y luego lo deportó a una aldea lejana. Parcona no fue reconstruida sino a finales de los años treinta y Pevez volvió a encontrar un papel dirigente en 1947, como primer secretario de la *Confederación Campesina del Perú.* Pero en esa fecha, el movimiento campesino es más dependiente de los partidos políticos y no tiene ya la autonomía y la orientación de clase que había tenido en los años veinte.

La defensa campesina de la tierra también se encuentra en *América central,* frente al *boom* del algodón y del café, que implica un retraso creciente de la agricultura de subsistencia y una presión sobre las tierras, agravada por una tasa muy elevada de natalidad. El hambre de tierra conduce a invasiones, reprimidas por el ejército al servicio de los grandes propietarios (cfr. en particular, E. Torres-Rivas; Bibl., III, 2). En San Andrés Sajcabaja, en el Altiplano occidental guatemalteco, región donde los grandes dominios son poco numerosos y donde los pequeños campesinos dominan, Y. Le Bot ha estudiado las consecuencias de la

falta de tierra. Los trabajadores emigran de manera estacional hacia las plantaciones de las tierras bajas. Hasta una cuarta parte de los hombres participan en esas migraciones de *cuadrilleros,* organizadas por *contratistas,* empresarios de mano de obra. Paralelamente, la falta de tierra entraña un fuerte movimiento de colonización, en particular hacia las tierras vírgenes del Petén. A veces, esta presión por la tierra se transforma en sublevación, en particular en 1944 entre los habitantes de Papzicia. No es, sin embargo, en esta región donde se formaron las guerrillas de los años 1964-1966, que por el contrario se apoyaron en los pequeños propietarios de la parte oriental del país y en la pequeña clase media urbana. En este caso, la demanda de tierra no se transforma en un movimiento campesino, a la vez porque las emigraciones estacionales y los esfuerzos de colonización responden en parte a la presión social por la tierra, y porque las condiciones políticas no son favorables, al no realizarse la alianza con los elementos de la población urbana. Las luchas campesinas tienen, en efecto, las mayores dificultades para darse una expresión política autónoma, como había logrado hacerlo el zapatismo mexicano. Aisladas, la mayoría de las veces son aplastadas por el ejército; pero en otros casos son más bien utilizadas o dirigidas por un poder político de naturaleza nacional-popular.

Eso fue lo que ocurrió, en particular, en *México* durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976). El sindicalismo campesino oficial, la CNC, siempre constituyó en este país la barrera más fuerte contra los movimientos campesinos; no obstante, algunos movimientos regionales desbordaron ese sistema de control social y político. En Zacatecas, en 1976, el *Frente Popular* organiza grandes ocupaciones de tierras dirigidas por una asamblea permanente, que duró veinte días, y la plaza de armas de la capital fue ocupada durante diez. En Chiapas y en el estado de Oaxaca, los enfrentamientos fueron sangrientos. El Gobierno federal había apoyado la presión campesina, pero, en 1976, cambió de actitud y declaró que el estado de Oaxaca no tenía ya grandes propiedades, lo cual provocó una movilización masiva de los *comuneros* del Valle Nacional, que en gran parte eran indígenas, y actuaron a la vez para defender sus tierras, apelando a su carácter étnico chinanteco, para detener la disgregación de su comunidad campesina y para redistribuir las tierras de los grandes dominios mal explotados. La represión fue violenta: guardias blancos asesinaron a los dirigentes campesinos. Algunos años antes, en 1973-1974, en la Huasteca Potosina, el movimiento *Campamento, Tierra y Libertad,* había obtenido resultados más positivos porque el período era políticamente más favorable: había logrado ocupar grandes *haciendas* pertenecientes a norteamericanos. El movimiento creció incluso hasta adoptar iniciativas políticas, reuniendo un congreso de los pueblos indígenas con la ayuda de los estudiantes de San Luis Potosí. Este movimiento alcanzó el nivel del movimiento zapatista, al que se refirió abiertamente. Así, triunfen o fracasen, las luchas por la defensa de la tierra

constituyen un verdadero *movimiento social,* que opone a los campesinos libres o dependientes, que lucha por la tierra contra los grandes propietarios y conduce, en respuesta a la represión, a cuestionar la orientación política del país. Porque el hecho central es la represión y la alianza de los grandes propietarios, del poder político local o nacional y del ejército. R. Menchu, militante campesina guatemalteca cuyo testimonio ya hemos evocado, cuenta cómo su hermano menor y su madre fueron torturados y asesinados por el ejército y cómo su padre murió durante la ocupación de la Embajada de España. Describe el terror permanente que el ejército hace reinar sobre su pueblo, matando, violando, destruyendo las casas de los habitantes del Quiché. Con o sin dimensión étnica, estas luchas por la tierra son luchas de clase.

El valle de la Convención

Las relaciones entre defensa social y acción política no siempre son de complementariedad. La mayoría de las veces son de desfase. Eso fue lo que ocurrió con el movimiento del valle de la Convención, en el departamento del Cuzco, en el alto Perú, en 1961-1962. Un movimiento campesino fue dirigido parcialmente allí por un grupo político que, sin embargo, no tenía fuerte implantación en ese medio rural. La represión que se abatió sobre ese movimiento político destruyó también el movimiento campesino.

La situación económica del valle de la Convención era muy diferente de esas otras que acabamos de evocar. Aquí no se trata de la defensa de una comunidad amenazada por el desarrollo del capitalismo agrario. El valle mismo se hallaba en plena transformación. Los propietarios de las grandes *haciendas* se enriquecían gracias a la comercialización de los productos de la tierra, manteniendo al mismo tiempo relaciones tradicionales, no salariales, del trabajo, como observa E. Fioravanti. Esta transformación económica debilitó el control social de la tierra, que ya no eran los *gamonales* tradicionales. Tras ellos, unos colonos, los *arrendires,* se enriquecieron, gracias al desarrollo de los cultivos tropicales. Disponían de tierras abundantes, con una media de 23 hectáreas. Pero a su vez eran los empleadores de los *habilitados,* miembros, con frecuencia, de su familia, y que sólo disponían de unas pocas tierras, con una media de 1,5 hectáreas, lo cual, sin embargo, los situaba muy por encima de los *suballegados,* que no cultivaban, de media, más que 0,3 hectáreas. De este modo se había constituido toda una pirámide de formas de dependencia. A principios de los años sesenta, la introducción rápida del té y del café, el crecimiento de la coca y, de manera más limitada, del cacao, aceleraron esta transformación del valle. Los que cultivan la tierra se encuentran enfrentados a un capitalismo comercial en rápida expansión. En 1958 se forma la Federación Provincial de Campesinos de la Convención y Lares. En 1959 llega Hugo Blanco como *allegado,* es decir, *habili-*

tado, a una *hacienda.* Contribuye a la creación de la *Federación Departamental de Campesinos* en 1961, pero también, y más directamente, en diciembre de 1961, a la del *Frente de Izquierda Revolucionaria* (FIR). De este modo, desde el principio el conflicto es, a un tiempo, una acción de defensa campesina y una acción propiamente política. En 1962, a la vez que se multiplican las ocupaciones de tierras, el movimiento se transforma cada vez más nítidamente en la lucha armada contra la policía y el ejército. Hugo Blanco es hecho prisionero en mayo de 1963. El movimiento campesino se extiende, sin embargo, a todo el departamento del Cuzco, y, en diciembre de 1963, reúne en esa ciudad un gran mitin por la amnistía de los prisioneros políticos. Por otro lado, la lucha armada se desarrolla, el MIR abre varios *focos* de guerrilla en el departamento y, en febrero de 1964, el Cuzco pasa bajo control militar. Esta dualidad de la acción social y de la acción política opone el movimiento de la Convención al de los pequeños campesinos del estado de Morelos durante la revolución mexicana. Blanco es ante todo un militante político. Había nacido en el Cuzco, pero había hecho sus estudios en Argentina, donde se había convertido en miembro del POR, partido trotskista. Cuando vuelve a Perú en 1956, juega un papel en la lucha contra el Partido Comunista, muy poderoso en el Cuzco, y se esfuerza por crear un frente de fuerzas populares. No obstante, Blanco logra reunir acción política y lucha social mejor que lo hacía en esa misma época otro militante trotskista, Yon Sosa en Guatemala. La ideología de éste es ante todo política: «Nuestra revolución es demócrata, burguesa y socialista.» La creación del FIR en el Cuzco y la guerrilla dirigida por De la Puente tampoco tienen relaciones directas con el movimiento campesino, de modo especial cuando multiplican los ataques a los bancos para financiar su acción. El propio Hugo Blanco siente fuertemente la separación de la lucha social y de la acción política y se separó progresivamente de los trotskistas para identificarse con la lucha campesina. Pero, alejado de su grupo político de origen, rechazado por los comunistas, influyentes en esa provincia, se fue quedando cada vez más aislado hasta que, después de haber matado a un policía, fue detenido en mayo de 1963. El ejemplo de la Convención, el fracaso relativo de un movimiento cada vez más dominado por una acción política que le es extraña, indica *a contrario* que la base específica de formación de un movimiento campesino es la defensa de la tierra contra la penetración capitalista. En la Convención, por el contrario, los *arrendires* entran en la agricultura comercializada, mientras que los *habilitados* mantienen un comportamiento de defensa económica de tipo más sindical. La separación de estos dos niveles de lucha impide la formación de un movimiento social campesino y facilita la empresa de la acción de un grupo político sobre las luchas campesinas. La guerrilla de De la Puente no es apoyada de forma activa entre los campesinos, y los grupos políticos que dirigen esa acción no mantienen, por regla general, contactos directos con la Convención; dependen de forma más directa

del SLTAO, el secretariado latinoamericano del movimiento trotskista, que decide sobre la acción de Blanco y de Sosa, y sobre el apoyo que hay que dar a Julião. Por estos motivos, a pesar de su importancia, las luchas campesinas de la Convención siguen estando muy lejos de formar un verdadero movimiento campesino.

3. Un sindicalismo dependiente

Más lejos todavía de un movimiento social está el sindicalismo que se apoya en los asalariados agrícolas, uniéndose bien a partidos de oposición, bien al Estado, para obtener, mediante presiones sobre éste, mejores condiciones de trabajo. A veces, la acción del sindicalismo contribuye a desencadenar una reforma agraria; pero la politización del sindicalismo también es visible allí donde no aparece ninguna reforma. Este sindicalismo ejerce a menudo una gran influencia nacional, pero por regla general no alcanza más que un nivel muy reducido de movilización autónoma.

No obstante, el sindicalismo campesino tuvo al principio un contenido de clase. Con total claridad en *Colombia,* donde, a partir de 1917-1918, los sindicatos campesinos se organizaron en las plantaciones de la United Fruit. Su orientación era anarco-sindicalista. A partir de 1919, los trabajadores del café desencadenan huelgas y logran aumentos de salario al mismo tiempo que el derecho de huelga. Estas luchas campesinas colombianas culminan con la gran huelga de los trabajadores del plátano en 1928, cuya represión deja centenares de muertos. Pero a partir de 1930 se manifiesta en Colombia la misma evolución que en otros países: las luchas campesinas, en vez de transformarse en movimiento campesino, son absorbidas por el sistema político, a un tiempo porque en esa fecha se inicia en Colombia la acción de Gaitán y del UNIR, y porque el Partido Comunista, siguiendo la nueva orientación del Komintern, trata de crear un frente popular. En Colombia, la «revolución en marcha» del presidente López permite esa reincorporación del sindicato campesino a la acción del Partido Liberal. En muchos países se aplica el análisis presentado por A. Alcántara para el *Brasil:* «Mientras en el populismo ruso la *intelligentsia* trataba de preservar los valores tradicionales del mundo campesino y un tipo de vida identificada con un pasado ya remoto, el objetivo principal del populismo brasileño fue integrar a los campesinos al desarrollo y compartir con ellos las riquezas que se creaban. En oposición al populismo ruso, en lucha abierta con un Estado represivo al que combatía con la mayor de las energías, la movilización campesina en Brasil está vinculada a la apertura del sistema político y está apoyada por el Estado» (cfr. Bibl., III, 2, pág. 385). Cuando el apoyo no viene del Estado, viene de gran partido de oposición, como ocurrió en el Perú, donde las huelgas y las reivindicaciones de los colo-

nos y de los asalariados de las plantaciones de la costa del Norte fueron organizadas de modo constante por el APRA. En Brasil, tanto en el Nordeste como en el Río Grande do Sul, el sindicalismo campesino fue rápidamente incorporado al sistema político. Fue el Partido Comunista el que jugó ahí el papel principal. La *União de Lavradores y Trabalhadores Agricolas do Brasil* (ULTAB), que se creó en 1954 en São Paulo, estaba controlada por el PCB. La União se desarrolló con mayor rapidez que las Ligas Campesinas en el Nordeste. Su acción se radicalizó sobre todo en el sur de la Zona da Mata, zona costera del Nordeste dominada por las grandes *usinas* de azúcar, más capitalistas que los *engenhos* tradicionales, zona por tanto de fuerte proletarización. Estos sindicatos de orientación comunista tuvieron una influencia más amplia que los sindicatos cristianos, organizados en particular en la Confederación de Trabajadores Agrícolas de Pernambuco. La confederación campesina, la CONTAG, reconocida en enero de 1964, fue dominada por la ULTAB. A partir de 1962, a partir de la victoria de Arraes como gobernador de Pernambuco, y a partir del nombramiento de Amino Affonso como ministro de Trabajo en 1963, los sindicatos y las Ligas se fusionaron progresivamente en un conjunto de organizaciones de tipo populista, desarrollando una acción a la vez de defensa económica y de educación popular, animada por Paulo Freire. Se asiste a una sindicalización de las Ligas, al mismo tiempo que a una lucha cada vez más aguda entre comunistas, laboristas y cristianos por la dirección de los sindicatos. Celso Furtado ha explicado el triunfo de los sindicatos frente a las Ligas por razones económicas, en particular por la mejora de la coyuntura de la industria azucarera del Nordeste, beneficiaria del embargo americano sobre el azúcar cubano. Pero el análisis de A. Alcántara parece más completo, porque insiste también en la transformación de la situación política y en el incremento del control de los dirigentes regionales, como Arraes, o nacionales, como Goulart, sobre el sindicalismo campesino.

En el *Rio Grande do Sul,* el control político de los sindicatos es todavía más nítido. La tendencia principal es el populismo revolucionario de Brizola, que crea *Master,* organización cuya influencia supera la del *Frente Agrario Gaúcho,* de tendencia cristiana. De igual manera, a partir de 1963, el sindicato FETAG, dominado por los minifundistas, lleva contra la FARSUR, organización dominada por los grandes propietarios, una oposición de tipo sobre todo político. En el momento del golpe de Estado de 1964, en el conjunto del Brasil, las iniciativas del Estado, en particular las de la SUPRA, de tipo paternalista, y la huella de los grandes partidos políticos eran muy superiores a la capacidad de acción autónoma de los sindicatos.

La misma dependencia de los sindicatos se observa en *Colombia* a partir de los años sesenta. Entre 1966 y 1970, la confederación sindical campesina, la ANUC, está fuertemente incorporada al aparato político reformador de C. Lleras Restrepo. Lo cual la debilitó y, entre 1972 y

1978, la condujo a alejarse de los partidos gubernamentales y a multiplicar las ocupaciones de tierras. Pero esta aparente autonomización política significa mucho más la influencia creciente de los intelectuales revolucionarios, cuya acción produjo una crisis interna grave en el ANUC a partir de 1974. Los radicales de la línea Sincelejo se separan en 1972 de los moderados de la línea Armenia. Pero los grupos maoístas, queriendo organizar *focos* revolucionarios, terminan por debilitar el movimiento campesino, que choca también con las milicias armadas por los grandes propietarios, sobre todo en la costa atlántica. Esta división interna lleva a la eliminación de esos intelectuales y al acercamiento de las dos «líneas», pero también a una fuerte pérdida de influencia del sindicato. El ANUC retablece sus contactos con el Gobierno a partir de 1979, en el momento en que el Estado lanza el Plan Nacional de Rehabilitación, para buscar un acuerdo con los grupos guerrilleros, y lanza un plan nacional de colonización. Varios factores debilitan a lo largo de los años setenta el movimiento campesino. El INCORA distribuye tierras ocupadas o, más a menudo, inexplotadas a más de 160.000 familias entre 1970 y 1979, y los nuevos campesinos se emplean también como trabajadores temporeros en una agricultura capitalista en plena expansión; numerosos antiguos pequeños explotadores parten hacia las nuevas zonas de colonización o emigran a Venezuela; finalmente, otros se aprovechan del desarrollo rápido de la producción de marihuana. El mundo campesino se diversifica. El sindicalismo campesino se divide entre varias organizaciones (FANAL, vinculada a la Iglesia; FENSA, vinculada al Partido Comunista; ACC, cercana a los demócrata-cristianos). A pesar de la creación de una coordinación nacional en 1984, el sindicalismo campesino se debilitó bajo el efecto de luchas internas y resiste mal el clientelismo del Estado.

La dependencia política de los sindicatos es naturalmente mayor aún en *México*. Pero no sólo a través de la acción del sindicalismo oficial, la CNC. Las luchas campesinas ejercen una presión sobre el sistema político, en parte desde el exterior, pero en parte también desde el interior, como lo muestra el ejemplo de los productores de copra de la Costa Grande del estado de Guerrero, estudiado por R. Fernández. Los productores medios se organizan contra los grandes productores, vinculados al poder político. Pero esos adversarios obtienen del poder central la destrucción de la Unión Regional de Productores de Copra y de sus apoyos políticos regionales. Lo cual lleva a R. Fernández a concluir: «La fuerza de la acción de clase es insuficiente para dar al movimiento una influencia real en el sistema político. Para superar su propia debilidad, esa acción debe pasar a través del aparato del Estado» (cf. Bibl., III, 2, página 146). El sindicato entra, por tanto, en el CNC y busca apoyos en el Estado federal y, sobre todo, en el gobierno del estado de Guerrero, que pretendían, ambos, apoyos contra los caciques tradicionales de la costa. Alianza frágil, porque rápidamente los grandes productores vol-

vieron a su oposición a los pequeños y medios productores y obtuvieron de nuevo el apoyo del gobernador y del Estado federal, inquietos por la creciente autonomía que iban adquiriendo los pequeños empresarios agrícolas. Una nueva represión liquidó la influencia de esos pequeños productores.

La situción es muy distinta cuando el Estado es de orientación nacional-popular y quiere apoyar a los movimientos campesinos. Eso es lo que ocurrió en la época del presidente Echeverría. Pero la política neopopulista llevada por éste, aunque fue favorable al desarrollo de luchas campesinas, mostró con más claridad aún la subordinación de estas luchas a las iniciativas del Estado. Éste quiso renovar su viejo acuerdo con los campesinos: el pacto de Ocampo, firmado con las organizaciones campesinas independientes, marcó su voluntad de enderezar la situación de los trabajadores agrícolas. Lo cual alentó la acción de los obreros agrícolas privados de tierras en los estados del Norte, Sonora y Sinaloa en particular. Las tierras fueron ocupadas y en octubre de 1975 estallaron incidentes en el primero de esos estados. Los grandes agricultores que formaban una burguesía rural nueva, modernizadora, y no era ya una clase de latifundistas tradicionales, reaccionaron violentamente, en particular por la huelga de los trabajadores agrícolas, y se incorporaron a la coalición antiecheverrista que desencadenó una crisis financiera y política grave en 1976.

El término del sexenio de Echeverría puso fin a este neopopulismo y las distribuciones de tierras cesaron por completo; fueron sustituidas por el Sistema Alimentario Mexicano, destinado a llegar a la autosuficiencia alimentaria del país pero que fue mal acogido por los campesinos. La alianza del Estado y de la nueva burguesía agraria, cuyo enriquecimiento procedía en gran parte de los trabajos de regadío emprendidos por el Estado, dejó de reforzarse, mientras que cada vez aparecía más agotado el antiguo sistema político mexicano y su apoyo a los sindicatos campesinos y obreros controlados por él.

El movimiento de ocupación de tierras en el Norte, en 1976, no puede, por tanto, comprenderse como un verdadero movimiento social; es una coyuntura política mucho más que la capacidad de acción propia del mundo campesino, que fue, tanto en este caso como en los otros, el factor principal de la historia social de las campiñas mexicanas.

Una conclusión semejante se impone con más fuerza todavía en el caso de la lucha llevada a esa misma época en el Yucatán por el traslado de las fábricas de tratamiento de la pita *(desfibradoras)* de la empresa nacional Cordemex a los *ejidos,* comunidades campesinas productoras de pita de la provincia. Este movimiento fue dirigido, de hecho, menos por los campesinos mismos que por intelectuales y funcionarios, que representan el sector progresista de la CNC, y estuvo constantemente seguro del apoyo activo del neopopulismo del presidente. La movilización campesina siguió siendo débil y fracasó ante la alianza local de la CNC,

del gobernador y de los dirigentes económicos de la provincia. Tras el cambio de presidente, en 1976, Cordemex logró conservar la propiedad de las fábricas desfibradoras.

El sindicalismo campesino no es, por tanto, ni una organización de clase, ni un instrumento de pura defensa económica. Ante todo está integrado al sistema político. En este caso, más que en cualquier otro, se confirma el principio general de análisis indicado al principio: la subordinación de los actores sociales a los actores políticos. La idea de que un mundo campesino, dominado y explotado, representa un potencial revolucionario capaz de servir de base activa a movimientos a la vez anticapitalistas, antiimperialistas y comunitarios parece hallarse en contradicción con la gran mayoría de casos que acabamos de presentar, con la sola excepción posible de ciertos países de América central.

4. La modernización inducida

El Estado ha jugado a menudo un papel tan directo en la movilización campesina y en los programas de reforma agraria, que se habría podido situar a éstos en el capítulo consagrado al Estado nacional-popular más que en éste. El caso *mexicano* es particular, puesto que es en el clima posrevolucionario donde gobernadores como Felipe Carrillo Puerto en el Yucatán, Adalberto Tejada en Veracruz o Francisco Múgica en el Michoacán organizaron comités agrarios (Veracruz) o ligas agrarias (Yucatán). La Liga Nacional Campesina, creada en 1926, estuvo dominada por los comunistas. En esa época, a las luchas campesinas se mezclan, por tanto, la acción de grupos políticos de extrema izquierda y la defensa del poder regional contra el poder central, lo que da a estas luchas una gran importancia nacional. Pero pierden su autonomía a partir del momento en que Calles inicia la lucha contra la influencia de los comunistas en los gobiernos de los estados para reforzar el poder central. Cárdenas, aprovechando la nueva política del movimiento comunista internacional, crea la *Confederación Campesina Mexicana;* ésta se transforma en *Confederación Nacional Campesina* y se integra en el *Partido de la Revolución Mexicana.* La autonomía política del movimiento campesino no había durado mucho tiempo; se había terminado con la caída del Partido Agrarista, venido del zapatismo y apoyado por Obregón. Después de Cárdenas, algunos movimientos locales se esforzaron por recrear la autonomía perdida. Eso fue lo que ocurrió, en 1964-1965, en Chihuahua, donde la guerrilla rural del partido populista socialista, dirigido por maestros, se esforzó por reanimar las luchas precardenistas contra los grandes propietarios. La subordinación del sindicalismo campesino al partido-Estado no dejó de aumentar, hasta el punto de que, en el estado de Morelos, Rubén Jaramillo organizó una larga guerrilla (1943-

1962) para volver solamente a la política cardenista de formación de *ejidos*.

La intervención del Estado se explica con mayor facilidad dado que la oligarquía rural poseía un poder impresionante. En México, en 1910, menos del 3 por 100 de los propietarios rurales poseían más del 90 por 100 de las tierras, y en Bolivia, antes de la revolución de 1952, el 6 por 100 tenía el 92 por 100. En Perú, antes de 1968, el 2 por 100 de los propietarios dominaba el 69 por 100 de las tierras. En Cuba, antes de 1959, el 8 por 100 poseía el 71 por 100. Incluso aunque en ciertos países la concentración había disminuido antes de las reformas agrarias, sólo el Estado central podía emprender la gigantesca tarea de transformar el régimen de propiedad de la tierra.

Pero la acción del Estado no es siempre liberadora. En México, después de Cárdenas, la ayuda del Estado a la formación de un campesinado que se convertiría en el agente de su propia modernización es sustituida por un control creciente de la agricultura, subordinada al objetivo vuelto prioritario del desarrollo industrial y urbano. Incluso en la región de la Laguna, donde la reforma agraria se había apoyado en un fuerte movimiento campesino, F. Rello observa que Banrural, la banca de la agricultura, dirige completamente las actividades de los *ejidatarios,* que no disponen de ninguna autonomía financiera y están cada vez más sometidos a ese banco, cuyos gastos de intervención son cada vez más elevados que los beneficios de la cosecha. Esta empresa del Estado explica que en este país donde 1,8 millones de familias de *ejidatarios* han recibido en principio las ventajas de una amplia reforma agraria, se desarrollen movimientos campesinos dirigidos contra el Estado en el transcurso de los años setenta, en un período donde las condiciones de vida de ese campesinado dependiente del Estado se deterioran y donde aumenta la distancia entre esa agricultura administrada y el sector capitalista.

El mejor ejemplo de integración de la acción sindical y de la acción política es el de *Venezuela.* En este país, es el partido *Acción democrática,* que fue, sobre todo en 1945-1958, el actor central de la movilización campesina, porque los primeros sindicatos agrícolas habían sido creados y legalizados en 1936 gracias a los futuros creadores de ese partido. Durante su primer gobierno, AD lanzó una primera reforma agraria utilizando a los sindicatos como agentes de realización del proyecto estatal. Como indica Powell, los enormes medios dados por el Gobierno a los sindicatos aumentaron de forma considerable su influencia entre las comunidades campesinas. Las comisiones agrarias distribuyeron las tierras públicas y privadas, lo cual no impidió que se constituyera cierta movilización campesina, porque la sociedad urbana aún no tenía la capacidad de absorción que consiguió en el transcurso de los decenios siguientes. Pero, en el curso del segundo período de gobierno de AD, tras los diez años de dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958), la acción campesina fue dominada más estrechamente todavía por los partidos políticos. Fue

una decisión conjunta de los partidos AD, COPEI y URD, que aseguró esa integración de los campesinos en la acción de los partidos políticos. Los puestos de dirección de la confederación campesina FCV fueron distribuidos entre los partidos, siendo el presidente un diputado de AD. El sindicalismo fue más un agente de organización de la reforma agraria que un movimiento social independiente.

Esta observación es también cierta para el Perú, donde la reforma agraria fue decidida por el Gobierno militar de Velasco Alvarado como una respuesta a los movimientos, en particular el de la Convención, que habían permitido la intervención de grupos políticos revolucionarios y la formación de las guerrillas de Lobatón y de De la Puente.

Diferentes son los casos de Bolivia y de Chile, en los que la reforma agraria ha estado asociada a la acción de un movimiento campesino, de suerte que, al lado del movimiento de importancia central que fue el zapatismo, se puede ver en el movimiento boliviano, y de manera más limitada en el movimiento chileno, un segundo aspecto de un movimiento campesino del que nosotros, por el contrario, no hemos encontrado más que una expresión indirecta y limitada en el movimiento peruano de la Convención.

Bolivia

En Bolivia, las luchas campesinas no habían esperado la reforma agraria para desarrollarse. Al contrario, su historia parece casi independiente de la reforma agraria. Esas luchas se habían apoyado siempre en la defensa de las comunidades, creadas en gran parte por el poder colonial, pero que en el transcurso del siglo XIX fueron progresivamente destruidas. Desde la sublevación de Tupac Katari en 1781 hasta el movimiento de Pablo Zárate «Willca» en 1898-1899, movimiento que se extendió a todo el Altiplano y que se radicalizó hasta exigir la restitución de las tierras de las comunidades y un gobierno campesino, Bolivia ha conocido un gran número de movimientos de resistencia comunitaria que S. Romero denomina «arcaicas», porque estos movimientos estaban dirigidos por caciques carismáticos. Esa conciencia comunitaria no desapareció nunca. Se manifestó en el motín de Jesús de Machaca en 1921 y volvemos a encontrarla en el movimiento katarista actual. El movimiento campesino que precedió a la revolución de 1952 fue diferente; estuvo animado, sobre todo, por minifundistas en la región de Ucureña y de Zliza, en el valle de Cochabamba, región donde los grandes dominios eran raros. Estos pequeños campesinos fueron apoyados por maestros, como Toribio Claure, que desarrollaron su conciencia comunitaria y les ayudaron a establecer relaciones con el sindicato de mineros. Este sindicalismo campesino se organizó a partir de 1936 y desde 1942 se unió a grupos revolucionarios, sobre todo al PIR, al que pertenecía J. Guerra, el director de la escuela de Ucureña. Los grandes propietarios son ex-

pulsados del valle de Cochabamba antes incluso de la reforma agraria de 1952. Aunque ese movimiento campesino había podido apoyarse en ciertos gobiernos, como el de Villarroel, constituye claramente un movimiento campesino autónomo. En 1952 no hubo sublevación masiva en el valle, pero la acción anterior fue decisiva para conducir al presidente Paz Estenssoro a promulgar en agosto de 1953 una ley de reforma agraria, que, simbólicamente, fue a afirma a Ucureña. Los efectos de la reforma fueron inmensos: 6.500.000 hectáreas fueron divididas entre 17.000 familias. Pero esta reforma respondía a unos objetivos y tuvo secuelas netamente separadas del movimiento campesino. Aunque éste había sido potente en el valle de Cochabamba, es el Estado el que toma la iniciativa en el resto del país y el nuevo sindicalismo campesino queda totalmente controlado por el MNR y el Ministerio de Asuntos Campesinos. Lo cual llevó, tras 1952, a un rápido debilitamiento del sindicalismo campesino incorporado a la COB y por tanto a un sistema político y desgarrado por luchas partidarias. El presidente Siles Suazo (1956-1960) se apoyó en el sindicalismo campesino y sobre todo en José Rojas, dirigente de Ucureña, para limitar el poder de los mineros. Finalmente, el sindicalismo se dividió entre caciques que se combatieron entre sí, Toribio Salas, que controlaba la región de La Paz, en lucha contra José Rojas, jefe del valle de Cochabamba. Finalmente, el sindicalismo campesino se alejó de la COB hasta firmar el pacto campesino-militar y dar su apoyo al golpe de Estado del general Barrientos en 1964. Durante todo este período actúa en dos planos, que cada vez se separan más. En el plano local, sustituye al antiguo gran propietario o la comunidad, organiza la vida colectiva y sirve de intermediario con el Gobierno. En ese plano local, la conciencia étnica juega a veces un papel importante, en particular en el Altiplano aymará. En el plano nacional, el papel del sindicalismo es completamente diferente; es una fuerza política cuyas orientaciones son independientes de las demandas de los campesinos. Tras Barrientos, las organizaciones campesinas, marginalizadas por Ovando y Tores, que buscaban el apoyo de la COB, se lanzan contra contra Banzer, a una lucha abierta que es reprimida violentamente.

Eso nos lleva a una tercera etapa de esta historia. Después de Banzer, el sindicalismo campesino se reorganiza, pero más como fuerza política que como movimiento social autónomo. Por tanto, podemos, siguiendo a J.-P. Lavaud, distinguir tres períodos en la historia del movimiento campesino boliviano. Hasta 1952 es un movimiento social dirigido contra los *hacendados,* sus *mayordomos* y los comerciantes. Después de la revolución, está cruzado por las luchas políticas y se divide entre caciques. En el transcurso de una tercera fase, tras las dictaduras de Banzer y de García Meza, y sobre todo tras la creación de una confederación independiente por Genaro Flores, los sindicatos campesinos siguen una lógica más política que social. Esta dominación de los objetivos políticos queda reforzada por el debilitamiento de las luchas sociales

en la base, no solamente debido a la importancia de la reforma agraria realizada, sino también porque se abren nuevos frentes de colonización con el desarrollo de una agricultura capitalista en la región de Santa Cruz y con el desarrollo del cultivo de la coca en el Chapare. Después de la vuelta a un gobierno democrático, dirigido a partir de 1982 por H. Siles Suazo, el sindicalismo campesino intenta recuperar una acción autónoma, desarrollando en particular temas ecologistas entre los desechos industriales, pero su autonomía sigue siendo muy limitada. No se puede hablar, en esa fase, de un movimiento campesino; se trata, más bien, de una participación de las organizaciones campesinas en el sistema político. Por el contrario, las luchas campesinas que se organizan en el valle de Cochabamba y que desembocaron en la reforma agraria general de 1952 constituyen uno de los ejemplos más importantes de movimiento campesino. El sindicato de Ucureña, al contrario de la confederación sindical dirigida por Genaro Flores, actúa como un movimiento social autónomo, pero su acción reivindicativa estaba estrechamente asociada a una voluntad de transformación general del país. La evolución de las luchas campesinas en Bolivia parece, en resumidas cuentas, seguir un esquema general que se aplica al conjunto del continente: en una primera fase, las luchas campesinas son, al menos parcialmente, independientes o están ligadas a partidos de extrema izquierda. Es lo que ocurrió en la costa peruana a comienzos de los años veinte, lo mismo que en Bolivia en el valle de Cochabamba antes de 1952; pero en el transcurso de una segunda fase, la huella de los partidos políticos, incluso del Estado nacional-popular mismo, sobre la acción campesina se refuerza. La importancia de la tentativa de Genaro Flores consiste en haber pretendido reintroducir en esa acción política una componente de clase para hacer renacer un movimiento social. Pero en Bolivia, como en los demás países, las luchas sociales sólo encuentran una autonomía verdadera cuando entran en conflicto abierto con el Gobierno.

La reforma agraria chilena

El caso de Chile lleva a conclusiones opuestas a las que corresponden al caso boliviano. En Bolivia, el movimiento campesino había precedido netamente a la reforma agraria, al menos en el valle de Cochabamba, y había estado orientado por esa voluntad de apoderarse de las tierras que define la presencia de un movimiento social campesino. En Chile, por el contrario, no existía casi ninguna actividad sindical antes de 1954, salvo las organizaciones campesinas creadas por el padre Hurtado y la ASICH, activa en particular en los viñedos, y salvo la ocupación por campesinos del *fundo* Ranquil, que había dado lugar a una sangrienta represión. Las organizaciones campesinas no se desarrollaron rápidamente sino a partir de 1964, en el seno de la acción dirigida por el Estado y los partidos. Sólo en el transcurso de la etapa final de la reforma

agraria apareció una movilización campesina que desbordó la política del Gobierno pero que no llegó a constituirse en fuerza independiente. Es que la reforma agraria chilena, como indicaba su principal dirigente, Jacques Chonchol (en el libro *Chile hoy,* en 1970), tenía a un tiempo por una ideología de lucha social. De hecho, durante el Gobierno demócra- y desarrollar el mercado interno. Esta reforma agraria está vinculada, por tanto, a una política de integración social y nacional y se apoya más en la idea de la complementariedad de los intereses de la ciudad y del campo y en la confianza en la democratización modernizadora que en una ideología de lucha social. De hecho, durante el Gobierno demócrata-cristiano, entre 1964 y 1970, la producción agrícola aumenta y muchos propietarios modernizaron sus dominios para evitar la expropiación que se aplicaba a las tierras mal cultivadas. Durante el período de la Unidad Popular, la reforma se radicalizó y el Gobierno quiso superar las resistencias que oponían a una reforma agraria en profundidad ciertos organismos de Estado. Pero el sindicalismo campesino ese organizó por entero sobre líneas políticas: Libertad era el más conservador, Triunfo Campesino era demócrata-cristiano y se dividió en el momento de la creación del MAPU; Ranquil, sindicato socialista y comunista, se convirtió rápidamente en el más influyente. En 1972, cuando Libertad obtenía el 15 por 100 de los votos; Triunfo, el 20, y UOC, ligado al MAPU, el 17, Ranquil recogía el 45. Actuando a través de la CORA, el Estado organizó las nuevas colectividades agrícolas, los *asentamientos,* y decidió transformarlos en centros de reforma agraria en los que quería integrar unas categorías de trabajadores agrícolas distintas a los *inquilinos,* los colonos que trabajaban en los *fundos* expropiados. Es también el Estado el que jugó el papel principal en la creación de cooperativas y de empresas mixtas. Quiso crear una movilización campesina, como explica J. Chonchol *(Cuadernos del consejo de rectores,* núm. 1, 1973): «Creemos que es fundamental ir progresivamente hacia un cambio de la naturaleza del Estado para que el pueblo organizado obtenga una fuerte participación en él, un papel dirigente y un poder de decisión. Por eso, lo más importante para nosotros es lo que ha hecho el gobierno popular al establecer "consejos campesinos" en cada comuna y asociando a ellos, a la vez, a campesinos organizados y no organizados.» Esta participación directa, desarrollada por iniciativa del Gobierno, desbordó a veces la política de éste, en particular en la provincia de Cautín, donde el MIR conquistó una gran influencia. Pero sólo en la zona poblada por una fuerte proporción de indígenas, en el país mapuche, estuvo la movilización campesina cerca de convertirse en un movimiento social. Porque estas comunidades mapuches sufrían desde hacía tiempo una continua disminución de la superficie disponible por habitante y exigían que fuera reconocido el derecho específico de los indígenas a sus tierras, tras un largo período de represión y de marginalización. Elementos marxistas de la Unidad Popular y miristas contribuyeron a lanzar la idea del *poder campesino,* como

un aspecto particular del tema más general y muy revolucionario del poder popular. Pero poder campesino no quiere decir movimiento campesino, porque la expresión se refiere a una acción directamente política más que a una lucha social. En realidad, hubo a un tiempo intervención política y defensa de intereses económicos, sin que, a caballo sobre los dos, se constituyera un verdadero movimiento social. De hecho, y sobre todo, la acción política se desarrolló, en sus puntos esenciales, en el seno de las iniciativas del Estado.

Esta subordinación había sido todavía mayor en otros países, y en particular en *Guatemala*. Para realizar una reforma agraria, Arbenz no se había apoyado en un movimiento campesino, sino más bien en elementos de la clase media urbana: intelectuales, abogados, militares, opuestos a la dominación oligárquica, y era del Partido Comunista de donde habían salido una gran parte de los cuadros intermedios de su régimen. En este caso, la reforma agraria estaba destinada, más directamente que en ningún otro, a facilitar unas formas más capitalistas de explotación de la tierra, como lo indica el decreto 900, que proclama la reforma agraria, porque esa transformación capitalista de la agricultura era considerada por los consejeros «progresistas» del presidente como la condición previa para la industrialización del país. Esta extrema subordinación de la acción campesina a la intervención del Estado explica que, tras la contrarrevolución armada de Castillo Armas (1954-1957) y de Ydígoras Fuentes (1958-1963), haya disminuido con tanta fuerza la presión campesina, pero también que se haya visto reemplazada por la acción de grupos guerrilleros.

En líneas generales, el efecto principal de las reformas agrarias es dualizar la agricultura: un sector participa más en la economía mercantil, el otro acentúa su marginalización. Esta dualización domina hoy la situación de la agricultura en México y en Bolivia. En *Perú,* el Gobierno militar de Alvarado encontró uno de sus escasos apoyos entre las cooperativas campesinas formadas como consecuencia de la reforma agraria y que eran las que mejor se habían integrado a la economía mercantil. De forma paralela, la situación de los minifundistas y de las comunidades indígenas no salió mejorada por la reforma agraria y continuó degradándose.

Para integrar las comunidades, la reforma había creado unas sociedades agrícolas de interés social (SAIS), que asociaban las haciendas expropiadas y las comunidades. Pero, en el seno de las SAIS, muchos indios vivieron de las indemnizaciones, sin recuperar sus tierras. En la zona costera, los técnicos asumieron la dirección de los grandes dominios expropiados, cuya organización productiva trató de mantener el Gobierno. En resumidas cuentas, el objetivo de formación de un gran mercado interior predominó sobre la sed de tierra de los campesinos. Aunque se expropiaron diez millones de hectáreas, hecho que en principio aprovechó a un tercio de la población campesina, la crisis rural no desa-

pareció, como pocos años más tarde demostró la acción de *Sendero Luminoso,* y el efecto principal de la reforma probablemente fue reconvertir una parte del capital fijo en la agricultura hacia actividades urbanas.

J. Matos Mar y J. M. Mejía tienen, por tanto, razón cuando concluyen que la eliminación de la *hacienda* benefició más a los capitalistas urbanos y al Estado que a los campesinos. La dominación del campo por la ciudad, en lugar de disminuir, se acentúa, lo cual acelera la crisis de la sociedad rural y el movimiento de emigración hacia Lima. La capacidad de acción autónoma del campo disminuye, debido al hecho mismo de que la reforma agraria está dirigida por intelectuales de izquierda y funcionarios del poder central. Las iniciativas de las cooperativas creadas por la reforma y cuando el sindicalismo campesino, la CNA, trata de asumir su autonomía, es destruida por el Estado militar. Mientras en ciertas regiones se producen notables progresos económicos, por ejemplo en el valle sagrado de Cuzco, donde se desarrolla el cultivo del maíz blanco —pero donde son los comerciantes los que más beneficios sacan de la mejora de su precio internacional—, la producción por cabeza disminuye en el conjunto del país.

¿Pueden existir *movimientos campesinos* en un continente que se ve arrastrado a una urbanización rápida y cuya vida política se halla dividida entre regímenes nacional-populares que poseen una gran capacidad de integración política, y regímenes antipopulares que no dejan que se expresen las reivindicaciones? La respuesta está conforme con la hipótesis presentada en el inicio de esta tercera parte: los movimientos de clase no son importantes y autónomos más que en el inicio de la historia del desarrollo contemporáneo del continente, cuando la vida política todavía no se halla abierta y cuando el campo aún no está absorbido por la ciudad. Es en el México de la revolución o en el valle de Cochabamba, a finales de los años cuarenta, donde se forman los dos principales movimientos campesinos que ha conocido la América Latina; además, casi en todas partes las luchas campesinas se hallan subordinadas a intervenciones políticas. En ocasiones, un partido de oposición las utiliza para su estrategia; con mucha mayor frecuencia todavía es el partido dominante el que organiza la movilización social, y son muchos los casos en que es el propio Estado el que toma la iniciativa.

Esta constatación concuerda demasiado con el principio de la subordinación de los actores sociales a los actores políticos para poder ser desechada. Pero debemos completarla con una observación más precisa. Las luchas campesinas se acercan mucho a un movimiento campesino, es decir, movilizan una clase social contra la dominación que sufre en un combate cuyo envite es la orientación de toda la vida económica y social, cuando se reúnen dos condiciones: de un lado, la apertura del sistema político que entraña el debilitamiento del poder tradicional de los grandes propietarios; del otro, la dimensión *étnica* o comunitaria de luchas que entonces ya no son únicamente económicas y defensivas y que resis-

ten a su incorporación en el sistema político. Luchas semejantes cuestionan una dominación global que condena a la exclusión y a la inferiorización a una población campesina por razones que no son sólo económicas y que, por consiguiente, apelan a una resistencia global.

Estas dos condiciones se reunieron en México y en Bolivia, pero no en el valle de la Convención ni en el Nordeste brasileño. Los movimientos campesinos no ocupan en América Latina más que un lugar reducido, más reducido en cualquier caso que el que le atribuye el imaginario de los países industrializados, demasiado prestos a no ver en América Latina más que siervos miserables y a los *hacendados* o propietarios de *casa grande* que los dominan. La América Latina no ha sido ni será el continente de las revoluciones campesinas.

3.—¿Existen movimientos urbanos?

1. La ilusión revolucionaria

Las «clases peligrosas»

La importancia de las relaciones privadas y de las relaciones familiares es tan visible en la cima como en la base de la sociedad. Un economista norteamericano citado por Ph. Schmitter (cf. Bibl., I, 1) observa: «Al brasileño le resulta difícil cooperar, económicamente o de cualquier otra manera, con individuos que no pertenezcan a su familia.» La *parentela* ejerce una influencia que se traduce por el nepotismo. Esta importancia de las relaciones interpersonales en una sociedad de tipo brasileño elimina o reduce la influencia de la ideología. El papel muy visible de los intelectuales no debe enmascarar el hecho de que la penetración de las ideologías en la población es limitada, al margen de los medios universitarios. Pero de ello no debemos concluir en la incapacidad de las categorías más desfavorecidas para organizar una acción colectiva. Es más exacta la idea de una segmentación de la acción colectiva entre actos de defensa que se apoyan en una fuerte conciencia comunitaria y una capacidad de acción ofensiva que es débil. La defensa comunitaria se asocia a menudo a una capacidad de protesta a la vez indirecta y global, que difícilmente se transforma en acción autónoma. El estudio realizado por SUR en Santiago, bajo la dirección de E. Tironi, E. Valenzuela y F. Dubet (cuyos resultados se han publicado en 1988), ha mostrado con toda claridad la separación de dos niveles de acción y las características de cada uno de ellos: los *pobladores* del suburbio sur de Santiago, estudiados

por esos investigadores, son a la vez pobres y excluidos. En la medida en que son *pobres,* sufren una desorganización social que produce crisis familiar, alcoholismo, consumo de drogas, delincuencia, pero también suscita esfuerzos por reconstruir una vida comunitaria y, en particular, por asegurar la ayuda mutua sin la que resulta imposible la supervivencia de la mayoría de las familias. Se ponen en práctica iniciativas para conseguir agua, electricidad, para que las autoridades construyan escuelas, dispensarios, puestos de policía. De este modo, en ese primer nivel de las conductas, se combinan una acción de integración comunitaria y gestiones de carácter instrumental que entrañan cierta incorporación a un sistema político. Esas conductas ligadas a la pobreza no pueden conducir a un elevado nivel de acción colectiva. Es el tema de la *exclusión* lo que alimenta una acción de este tipo, pero bajo formas particulares. Aquí el grupo no se define ya por sus necesidades inmediatas de supervivencia; se considera víctima, pero también afirma su superioridad moral y defiende sus derechos que han sido atropellados. La conciencia comunitaria se vuelve entonces protestataria. Pero no presenta reivindicaciones profesionales o económicas; afirma el derecho de los *pobladores* a la *vida,* contra fuerzas adversas que no se identifican con el capitalismo ni con el poder político sino con las fuerzas de muerte. Esta conciencia protestataria se organiza en torno a líderes locales que a menudo son sacerdotes o personalidades religiosas. Pero también puede transformarse en violencia política e incluso revolucionaria, en nombre del hambre, de la injusticia y de la represión sufridas. La acción colectiva sigue estando dividida, por tanto, en dos elementos que casan mal entre sí: de un lado, ayuda mutua y negociaciones con las autoridades; del otro, protestas «ejemplares» y violencia política. En resumen, lo esencial no es la separación de los problemas privados, vividos en el barrio, y de los problemas políticos generales; al contrario, es la mezcla constante de todos los niveles de la experiencia, la presencia simultánea de la experiencia de la pobreza y de la experiencia de la exclusión. Sería igual de falso ver en estas situaciones el germen de una acción propiamente revolucionaria como ver ahí la simple expresión de conductas de desorganización social, incluso de delincuencia. ¿Cómo no ver en esos *pobladores* «miserables», en el sentido que Víctor Hugo dio a ese término, en un período en el que no existía separación clara entre lo que la primera mitad del siglo XIX francés llamaba las clases peligrosas y las clases trabajadoras? En América Latina, como en otro tiempo en Europa, una gran parte de las movilizaciones colectivas se forman y se han formado en torno a esa frontera incierta entre la reivindicación y la defensa contra la exclusión, entre la protesta y la delincuencia.

Los «campamentos»

La violencia política no se reduce, evidentemente, a la delincuencia, como si, por ejemplo, la revuelta urbana que siguió al asesinato de Gaitán

en Bogotá, en 1948, el *bogotazo,* no hubiera sido más que la marejada criminal de los barrios pobres del sur sobre los barrios ricos del norte de la ciudad. Pero es igualmente falso creer que sufrimientos extremos produzcan una extrema capacidad de acción. Durante los años sesenta y setenta, muchos investigadores adelantaron la idea de que los pobres formaban un hiper-proletariado capaz de una acción radical que combatiese todos los aspectos de su explotación. Fue sobre todo en Perú y en Chile donde esa idea ejerció un gran influjo. La importancia de la ocupación de terrenos urbanos libres para construir en ellos alojamientos de fortuna y la radicalización de muchos dirigentes comunitarios hicieron nacer la idea de que se formaban movimientos urbanos más duros que desbordaban a un sindicalismo apoyado sobre todo en categorías relativamente privilegiadas y, por tanto, reformista. Muchos vieron en estos movimientos urbanos el punto de partida de una acción revolucionaria. Los hechos conocidos no permiten aceptar semejante interpretación. En primer lugar, y ante todo, la radicalización de las *poblaciones* e incluso de los *campamentos* chilenos, es decir, ocupaciones de terrenos dirigidas por grupos políticos, no se produjo. Al contrario, lo que sorprende es la extrema dependencia de los más pobres respecto a todos los que tienen un acceso a la decisión política, bien sean de inspiración revolucionaria o estén, por el contrario, al servicio de un Estado autoritario. R. Baño ha opuesto claramente acción sindical y acción comunitaria. Esta última se define por la defensa de una identidad; insiste en la igualdad de los miembros de la comunidad, que son hermanos, pero no tiene una imagen clara del adversario y no controla sus instrumentos políticos de acción. El sindicalismo se apoya, por el contrario, en una definición clara del adversario y es capaz de buscar los apoyos políticos necesarios para lograr el éxito de sus reivindicaciones. Los *pobladores* viven como pobres o excluidos; los trabajadores sindicados como explotados. Lo cual permite a éstos establecer una relación directa entre intereses económicos y acción política, mientras que quienes se sienten al margen de la sociedad, encerrados en la lucha por la supervivencia, rechazan la política como algo que pertenece al sistema que los excluye. Por eso las tentativas de transformación de las luchas urbanas defensivas en acción revolucionaria han fracasado, en particular la del MIR chileno y la del político que estaba vinculado a él, Víctor Toro, en 1972-1973. M. Castells, cuyos importantes trabajos han sido frecuentemente invocados por los defensores de la tesis de la orientación revolucionaria de los *pobladores,* en realidad siempre presentó sus conclusiones de manera más prudente, observando que los movimientos políticos no ejercían influencia en las *poblaciones* salvo en el caso de que fueran capaces de resolver los problemas cotidianos de la comunidad y de negociar con el Estado. Pero más allá de esa prudencia hay que subrayar que las luchas de los *pobladores* nunca se han articulado fuertemente con las luchas políticas y M. Castells ha reconocido, en fecha

más reciente, con honestidad intelectual admirable, los errores de quienes creían en la capacidad revolucionaria de los excluidos. Entre la movilización revolucionaria esperada en Chile y la manipulación política ampliamente utilizada por el Gobierno militar de Velasco en los *pueblos jóvenes* de Perú, existen, de hecho, muchas formas de movilización política limitada. En Lima mismo, en los años recientes, acciones de asistencia social han podido entrañar cierta participación política autónoma y han contribuido a la conquista de la municipalidad por el líder de la izquierda unida, E. Barrantes. Pero nunca se ha abolido la discontinuidad entre la defensa comunitaria y la acción propiamente política. Ocurre que, en los barrios populares, se forman frentes de defensa o asambleas populares *(cabildos abiertos)* que reemplazan a las organizaciones de barrio y a las asambleas populares creadas por el *Gobierno,* pero esas organizaciones locales casi nunca han conseguido elevarse hasta una acción propiamente política. Los pobres de los suburbios son más dependientes que los demás de las decisiones y manipulaciones del poder central. Sobre ellos se han apoyado líderes populistas que defendían el orden establecido. Las *barriadas* de Lima votaron más por el general Odría que por Haya de la Torre, líder del APRA; en el mismo Chile, las *poblaciones* votaron por Ibáñez y su apoyo a la Unidad Popular no fue muy firme. Cierto que una *población* como Nueva Habana, *campamento* dirigido por el MIR, fue organizado y movilizado por éste, pero los *pobladores* dieron muestras en este caso de tanta dependencia, como, en otras circunstancias, la dieron de dependencia del Gobierno o de la municipalidad. Sin tener que utilizar el discutible término de lumpen-proletariado, hay que reconocer que la capacidad de resistencia popular es más fuerte cuando se apoya sobre un medio profesional y económicamente sólido.

Las luchas urbanas

En el extremo opuesto de las tesis sobre los movimientos urbanos revolucionarios se sitúa la idea de que las *poblaciones* son el lugar de la desorganización social y de la anomia. Idea reforzada cuando se designa en francés esos barrios como *bidonvilles* (chabolas), lo cual no corresponde sino sólo a una parte muy especial y cada vez más limitada de las *poblaciones.* Esta imagen de una población anómica tampoco ha sido verificada por las encuestas, que muestran, por el contrario, una fuerte capacidad de autoorganización, más fuerte por otro lado en favelas aisladas en medio de la ciudad que en los inmuebles nuevos construidos por las municipalidades de gran barrio para realojar a los habitantes de las favelas demolidas. Más interesante resulta la noción intermedia de *cultura de la pobreza,* ilustrada por los libros, tan conocidos, de Oscar Lewis sobre México y San Juan de Puerto Rico (cf. Bibl., I, 2). Lewis insiste en la importancia de los grupos primarios, familiares o de vecindad (las

vecindades de México) y la necesidad de vivir a corto plazo, de buscar satisfacciones económicas o sexuales inmediatas. Esta concepción se inscribe en la oposición demasiado clásica, heredada de Redfield, entre la sociedad rural *(folk society)* y la sociedad urbana: la cultura de la pobreza recibiría su identidad de su doble exclusión. Pero ¿no hay cierto artificio al considerar estables y coherentes tanto una sociedad rural como una sociedad urbana, tan poco integradas una y otra y en constante cambio? Aquí, las observaciones ya evocadas de J. Matos Mar sobre Lima parecen estar más cerca de la realidad.

Lo propio de las conductas marginales es no tener ningún principio central de unidad y repartirse, sobre todo, el espacio que separa la anomia y las conductas de crisis de las explosiones de violencia colectiva. La privación de renta y de trabajo puede manifestarse por el robo y la prostitución, que son formas de obtener bienes de consumo sin pasar por las vías normalmente reconocidas para adquirirlos; pero un cambio brusco de situación, el aumento del precio de los alimentos de base o de los transportes públicos pueden dar lugar, entre las *poblaciones,* a movimientos violentos, incluso a olas de pillaje, como ocurrió en Río y en São Paulo en 1984 en el momento en que se produjo un fuerte ascenso de los precios. Fue el caso de Río, donde muchas asociaciones, y en particular las escuelas de samba, están en manos de los *bicheiros,* dueños del *jogo do bicho,* de los juegos clandestinos.

En casos mucho más numerosos, las asociaciones de barrio se integran en la vida política y llegan a ejercer una gran influencia. Las *sociedades de amigos de bairros* apoyaron las campañas de Jânio Quadros a la municipalidad de São Paulo en 1953, luego al puesto de gobernador en 1954 y, finalmente, a la presidencia de Brasil en 1960. Al principio de los años ochenta, en Río, el gobernador Leonel Brizola logró extender su control sobre una gran parte de las asociaciones de barrio. En 1982, tales asociaciones organizaron en Buenos Aires un movimiento *fomentista* de construcción de viviendas populares y de protesta contra el aumento de los impuestos municipales.

Pero son raros los casos en que esa acción se integra en un movimiento de tipo revolucionario. El caso más claro es el de la *Federación Nacional de Pobladores del Ecuador,* que se integró en el FUT y jugó un papel importante, tras la caída del triunvirato militar a finales de los años setenta. Pero la acción de este frente de extrema izquierda se mostró pronto frágil. Además, las revueltas urbanas siempre son reprimidas con la mayor violencia. Indican menos la formación de un movimiento revolucionario que la crisis del control político de las masas y, por tanto, la descomposición de un régimen nacional popular. Es lo que ocurrió en la República Dominicana en 1984. El Partido Revolucionario Dominicano había perdido su orientación populista desde su primer éxito electoral en 1978 y, sobre todo, tras la elección de Jorge Blanco en 1982. Las masas urbanas ya no podían volverse hacia el PLD, creado por

J. Bosch, el antiguo dirigente del PRD, y que se dirigía sobre todo a las clases medias ilustradas; finalmente, la extrema izquierda estaba dividida en migajas. La inflación y el descenso del nivel de vida popular provocaron los graves motines de abril, que no fueron controlados por ningún partido político. Los comités de lucha popular no fueron organizados por la extrema izquierda hasta pasado abril. Sólo las comunidades eclesiales de base y la Iglesia popular apoyaron al pueblo sublevado, pero sin poder dirigir su acción. El fracaso de la sublevación implicó el retorno al poder de Balaguer en 1986. Tales sublevaciones comportan una dimensión de acción de clase y de movimiento social, pero no tienen capacidad para transformarse en actores sociales y políticos independientes, zozobran pronto en sus divisiones internas y resisten mal la represión que sobre ellas se abate.

No se puede hablar, por tanto, de *movimientos sociales urbanos,* como si, a partir de los barrios más desfavorecidos, se desarrollasen unas luchas sociales capaces de elevarse al plano político. Observamos más bien que, en ciertos barrios, se forman reivindicaciones que no logran encontrar expresión política autónoma, pero que pueden ser utilizadas por intermediarios para ejercer una presión sobre la municipalidad, los servicios públicos e incluso el Estado. Éstos, que no son directamente responsables de las malas condiciones de vida de los habitantes, transforman o tratan de transformar en clientela política a los grupos que presentan esas reivindicaciones. Lo cual está lejos de la idea de un movimiento autogestionario que asocie a su acción reivindicaciones sobre todos los aspectos de la vida, desde el trabajo a la vivienda, desde la escuela a la salud. Por eso es tan fácil a los demagogos vinculados a la oligarquía, o que tratan de constituir un poder personal, crearse una clientela y apoyos en los barrios populares. Ese fue el caso, en Lima, de Leguía tras la primera guerra mundial, y de Odría tras la segunda, o, en Bogotá, de Rojas Pinilla. Son raros los ejemplos de políticas locales democráticas apoyadas en un movimiento urbano. J. A. Moisés estudió bien la *prefeitura* democrática de Lages en el estado de Santa Catarina en Brasil, pero él mismo subraya que esta acción democrática no se formó más que en período de apertura política y gracias a alianzas que no dependían de ella. Las luchas urbanas no están completamente manipuladas por los demagogos; pero menos son todavía la base de movimientos sociales que desbordarían por arriba el juego demasiado limitado de los partidos políticos.

Defensa comunitaria y dependencia política

Sin embargo, no podemos reducir esta acción comunitaria a una acción infrapolítica. Al mismo tiempo desborda el nivel propiamente político de la acción y cuestiona el conjunto de un modo de desarrollo que excluye de la participación económica y social a una parte importante de

la población. En América Latina la política nunca se identifica con un sistema institucional ni con unos partidos políticos. Siempre está *a un tiempo más acá y más allá* de ese nivel demasiado clásico, al que con demasiada facilidad se atribuye una capacidad perfecta de representación de los intereses sociales. Del mismo modo que los marcos de la acción política son casi siempre predominantes en América Latina, tanto los intereses sociales como la acción política que se considera que representan siempre conservan cierta autonomía. Ésta debilita los esfuerzos de formación de una acción política representativa, pero permite a las protestas, a las acciones de solidaridad y a veces a sublevaciones poner en cuestión y mostrar los aspectos más profundos del modo de desarrollo latinoamericano. Estas formas de acción no pueden denominarse primitivas, como hizo E. Hobsbawn en su célebre libro *Los primitivos de la revuelta,* porque no se puede oponer a esas formas de defensa comunitaria una acción que sea más madura y más directamente política. La acción de los partidos de masa, como la de las vanguardias revolucionarias, es tan primitiva o está tan evolucionada como la defensa comunitaria. La acción colectiva no alcanza su nivel más elevado cuando se identifica con un principio general, la Razón o las leyes de la Historia, sino cuando une del mejor modo posible motivaciones y objetivos, experiencia y acción, cultura y política. En este sentido, la defensa comunitaria de grupos campesinos, indígenas o no, o de los pobres de la ciudad, indica la relación más fuerte que se puede observar en el continente entre el esfuerzo por participar en un proceso de modernización y la defensa de una identidad o de una comunidad amenazadas. De ahí la importancia del tema de la *pobreza,* más presente en las ciudades que en los campos, y que ha sido reinterpretada con mucha profundidad por los movimientos cristianos. No es el papel de los pobres como trabajadores, como ciudadanos, ni siquiera como miembros de una comunidad lo que presta su importancia a este tema; no es lo que hacen sino lo que sufren, no es lo que tienen sino aquello de lo que están privados; no es, por tanto, su identificación con una clase o con una nación lo que presta fuerza a su protesta; son su indigencia, la exclusión y la represión que sufren las que dan a su protesta un valor fundamental. Porque es entonces cuando los problemas de la vida privada y los de la vida pública se unen con mayor fuerza para dar nacimiento a una protesta cuyo objetivo único es la defensa de la vida. Por eso el personaje central de los movimientos comunitarios también es el que aparece, a un primer acercamiento, como el más alejado de la acción política, como el más encerrado en los problemas de la vida privada: la madre, porque la capacidad de acción colectiva depende, sobre todo, de la voluntad de defender la vida y, en primer lugar, para la madre, la de sus hijos. Motivaciones como éstas no se incorporan fácilmente al sistema político que, por eso mismo, sigue siendo demasiado instrumental y sigue estando demasiado alejado de las reacciones populares. Pero ¿cómo olvidar que,

tras la complejidad y a veces la corrupción del juego político, se deja oír casi constantemente una protesta más profunda que la reivindicación social y que la presión política, y cuyo zumbido nos recuerda que ese continente, cuya capacidad de crecimiento y de integración es tan grande, es también, de modo permanente, una tierra de exclusión?

Esta disociación entraña, a veces, la explosión de revueltas sociales; podría incluso conducir a situaciones revolucionarias si la influencia política estuviera reservada a la oligarquía. Pero su resultado principal es inverso: la subordinación de las fuerzas sociales a los aparatos políticos, personalizados o no. La capacidad de acción de los políticos conservadores es impresionante. En el mayor centro industrial del continente, São Paulo, se han sucedido demagogos conservadores, a veces vinculados directamente a los intereses económicos dominantes, y que han sabido conquistar importantes apoyos en los barrios más populares, de Adhemar de Barros a Jânio Quadros, que consiguió volver a la escena política ganando la elección a la alcaldía de São Paulo en 1985 frente al senador F. H. Cardoso, candidato del principal partido político del Brasil, el PMDB. De este modo aparece de nuevo ese predominio de las categorías políticas sobre las categorías sociales, cuyo reconocimiento corre, como un hilo de Ariadna, a través de todo este libro.

Estos movimientos de *pobladores* se han vuelto hacia el interior, hacia la defensa de la comunidad y la afirmación de los derechos de los pobres, en vez de constituir un movimiento propiamente político que participe en la búsqueda de una solución institucional. Movimiento de implosión más que de explosión y que culminó en Chile con la muerte de un sacerdote, André Jarland, matado por la policía en el curso de una operación represiva en la *población* La Victoria. La emoción popular provocada por ese asesinato se manifestó durante los actos religiosos y, sobre todo, en una procesión que acompañó el cuerpo del sacerdote muerto hasta la catedral, cruzando la zona sur de la capital. Jornada emocionante de afirmación del derecho a la vida, a la paz y a la libertad, que recogía los grandes temas celebrados pocas semanas antes por la «Jornada por la vida», cuando millares de participantes fueron a depositar velas encendidas y flores ante la catedral y a cantar el *Himno a la alegría* de Beethoven como una afirmación de la vida contra las fuerzas de muerte. Pero en las *poblaciones,* lo mismo que en el centro de Santiago, ese movimiento social y a veces religioso no constituye en modo alguno la «base» de un movimiento político. Estos movimientos de *pobladores* pueden transformarse con mayor facilidad en violencia política que en apoyo a unas iniciativas institucionales. Una población excluida expresa su dolor y su cólera de forma comunitaria, levantando barricadas y encendiendo hogueras que indican su resistencia a la entrada de elementos hostiles más que su voluntad de atacar los centros de poder. Forma de resistencia que se encuentra de modo más limitado, porque la resistencia a la dictadura fue más débil allí, en Brasil, e incluso en

Argentina, en el *movimentismo* basista, apoyado en comunidades de base, cristianas o no, y en grupos de barrio en el que las mujeres juegan un papel central. Por su parte, los intelectuales, insatisfechos de las formas de acción política anteriores y agentes principales de la protesta moral contra la dictadura, apoyan esos movimientos y los presentan como factores de rejuvenecimiento y de extensión de la democracia. La Iglesia, después de haberse alejado de la religión comunitaria tradicional y de haber acelerado su propia secularización para recuperar influencia en los sectores urbanos modernos, vuelve a un neo-comunitarismo que se halla menos orientado hacia la democratización que hacia la defensa de los pobres contra la riqueza y el poder. Todas estas razones explican el poder de movimientos locales o sectoriales independientes de los partidos y de las ideologías políticas, incluso cuando los partidos logran imponer su capacidad de organización a unas comunidades locales. Estas presiones populares no se transforman fácilmente en acción política autónoma; es incluso posible, como ya se ha indicado, que les sea más fácil negociar con la administración existente en ese momento que con los partidos. Recordemos aquí el análisis crítico de F. H. Cardoso (en el libro dirigido por N. Lechner; cf. Bibl., I, 1): «Puede ocurrir, y ya ocurre en América Latina, que el rechazo de la política, la apelación a una acción situada exclusivamente en el plano de la base social y de sus reivindicaciones concretas, y animada por unas asociaciones sociales y movimientos identificados con el pueblo (como las Iglesias o los grupos de acción popular directos), lleven a la población a reivindicar de forma autónoma sus derechos y los impulsen a exigir soluciones que, en una sociedad moderna, sólo pueden ser ofrecidos por los servicios gubernamentales. En este caso, el líder popular termina por dialogar a solas, es decir, sin apoyo político más amplio, con el funcionario del Estado, tecnócrata o no, que es el único capaz de ofrecer unas soluciones concretas. Sin quererlo y sin saberlo, el movimiento más puro y más autónomo hace entonces un pacto con el diablo.» Estudios publicados en São Paulo sobre los movimientos de base confirman el carácter infrapolítico de esos movimientos de resistencia a la dictadura y, por tanto, su impotencia para derrocarla.

2. ¿Nuevos movimientos sociales?

La caída de las dictaduras y la instalación de regímenes democráticos han sido acompañadas de movilizaciones sociales, en particular de categorías urbanas, pero también entre las mujeres, los estudiantes y otros grupos sociales. Estas movilizaciones fueron menos controladas por los partidos o el poder político que en otro tiempo, lo que ha llevado a muchos autores a hablar de nuevos movimientos sociales, estableciendo un paralelo con el conjunto de las acciones colectivas que se han desarrollado en los países industrializados occidentales a partir de los

años sesenta, y apoyándose a menudo en categorías sociales comparables. Dado que yo mismo introduje el tema de los nuevos movimientos sociales, y dado que les consagré en Francia una serie de análisis concretos, ¿cómo no había de compartir el interés por estas nuevas formas de acción colectiva de tantos investigadores latinoamericanos, a cuya cabeza figuran en particular F. Calderón, G. Campero, E. Jelin, S. Zermeño y E. Tironi? Pero la experiencia conseguida en Francia debe permitirnos evitar confusiones y no recurrir a nociones definidas de forma demasiado vaga.

El «movimentismo»

Muchos sociólogos latinoamericanos, siguiendo los hábitos dominantes en los Estados Unidos, llaman movimientos sociales a protestas que se quedan al margen del sistema político, pero que desbordan unos objetivos específicos y limitados como son los de los grupos de intereses. Cuanto a lo largo de este libro hemos dicho sobre el modelo nacional-popular y su gran capacidad de integración social, al mismo tiempo que sobre la existencia masiva y permanente de las categorías excluidas, indica la importancia de la franja que ya hemos llamado, siguiendo a los brasileños, *movimentista,* que rodea el sistema político formado por el poder del Estado, los partidos y los sindicatos. Pero la importancia de estos «movimientos» infra o parapolíticos no debe hacernos olvidar nunca que su existencia demuestra los límites o las crisis del sistema político y no la presencia de actores colectivos deseosos y capaces de poner en cuestión la organización social.

A finales de los años setenta y durante los ochenta, en casi todos los países proliferan unos movimientos urbanos. En Argentina, los movimientos de barrios desembocan en la gran sublevación del *vecinazo* de 1982. En Uruguay, los *Servicios de Salud Popular y Privada* (SSPP) y, sobre todo, el *Movimiento Pro Vida Decorosa,* llevan a cabo numerosas acciones, reforzadas por la participación de esos movimientos en la *Concertación Nacional Programática* (CONAPRO), junto a partidos y sindicatos. Bolivia ve formarse las *Juntas Vecinales,* y en Venezuela la *Federación de Asociaciones y Comunidades Urbanas* (FACUR) desencadena un amplio conflicto en Caracas en 1981. Pero hay que compartir las conclusiones prudentes e incluso críticas de F. H. y R. Cardoso: estos movimientos urbanos negocian con el Estado con mayor facilidad que movilizan una población para una lucha de alcance general.

En Chile, las *protestas,* que tuvieron una fuerte capacidad de movilización en 1983 y en 1984, han hecho creer, durante cierto tiempo, en el desarrollo de una acción de masas directa, al margen de los partidos. Algunos han apelado incluso a una sublevación popular para derrocar a la dictadura. El error de esos análisis quedó patente tres años más tarde. A lo que, desde 1981, asistimos es, ante todo, a la reconstitución de un sistema político. Éste, es cierto, no contiene todas las formas de acción

colectiva, en particular las revueltas de los jóvenes *pobladores*, pero de año en año la autonomía de los movimientos de base disminuye. La misma conclusión podemos aplicar, como se ha visto, a la creación de sindicatos independientes, en México o en Venezuela en particular. La mayoría de las veces se trata de obtener un acceso directo a los decisores políticos más que de crear un sindicalismo de clase comprometido en un enfrentamiento o en negociaciones directas con los empleadores.

El sistema político es, o se vuelve, tan poderoso y tan abierto que fácilmente aborda a una gran parte de los grupos de presión y de las reivindicaciones particulares. La vuelta a las elecciones refuerza la política incrementalista, en particular cuando se forman partidos «ómnibus» que saben responder a grupos de interés muy diversos. Por tanto es más peligroso que útil hablar aquí de movimientos sociales, porque los fenómenos que acabamos de evocar no son de la misma naturaleza que las luchas generales entre adversarios sociales, a las que casi siempre se reconoce el nombre de movimientos sociales. Aquí hablamos de movimientos de base, o incluso de sublevaciones, pero no de movimientos sociales.

La defensa de la identidad

Una parte de los movimientos de base, sin embargo, no se transforma en demandas al sistema político. Tal es el caso de muchas de las acciones llevadas a cabo por jóvenes, mujeres y minorías étnicas, es decir, por categorías definidas más cultural que socialmente. Pero también es el caso, como hemos visto, de una parte de los movimientos de defensa comunitaria que se forman en los barrios pobres. Esas acciones apuntan, sobre todo, a afirmar una identidad cultural. G. Campero tiene razón cuando opone esas acciones simbólico-expresivas a las acciones instrumental-políticas, a las que hemos hecho referencia en el apartado anterior. El desarrollo de las comunidades religiosas, católicas, protestantes o umbandistas, y de las manifestaciones de religiosidad que desbordan las prácticas y los ritos de Iglesias constituidas, no es más que un aspecto de un conjunto mucho más amplio de movimientos de defensa comunitaria cuya meta primera consiste en asegurar la supervivencia de sus miembros y en luchar contra la desorganización producida por una situación de crisis. Se ha recordado que muchas Iglesias evangélicas, muchos grupos umbandistas o asambleas carismáticas católicas tenían una orientación conservadora y estaban centradas en la conversión y la liberación individuales. Es suficiente para no hablar aquí de movimientos sociales, lo cual no debe hacernos dudar en modo alguno de la importancia de este fenómeno. Ciertas manifestaciones de jóvenes, como el *rock*, cuya importancia fue tan grande en Argentina en el momento de la guerra de las Malvinas, tampoco son movimientos sociales sino afirmaciones de identidad, cargadas la mayoría de las veces de protesta

social, pero que no definen de modo preciso ni su adversario ni el envite de su conflicto. Lo cual se traduce por una ausencia de movilización social efectiva, compensada por una influencia cultural profunda, como lo demuestra, desde hace tiempo, la existencia de tales grupos musicales, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos en particular.

Entre esas asociaciones de protesta y de presión y esos órganos de defensa comunitaria, ¿existen formas de acción colectiva de una naturaleza distinta y a las que se pueda reservar el nombre de *movimientos sociales,* es decir, unos actores colectivos comprometidos en un conflicto para la utilización social de los principales recursos de una cultura? Dicho con mayor precisión, ¿forman la caída de las dictaduras y la instalación de las democracias una coyuntura política favorable para la creación de movimientos sociales? Muchos observadores sienten la tentación de responder negativamente, de no ver nada entre las dos categorías de acción colectiva que acabo de oponer. Conclusión más sabia a todas luces que la que afirma el desarrollo de nuevos movimientos sociales mezclándose a realidades muy diferentes unas de otras, pero conclusión demasiado prudente: no puede vislumbrar la línea de fractura social donde se forman efectivamente nuevos movimientos sociales. Nosotros hemos aprendido a reconocer esa línea: es la que traza la dualización creciente de las sociedades en crisis, que incrementa las distancias sociales y culturales entre los ciudadanos y los excluidos. Los movimientos sociales se forman en nombre de la *unidad nacional y de la integración social* que hay que volver a crear y se oponen al optimismo de los dirigentes que anuncian que el crecimiento reconquistado difundirá poco a poco y de arriba abajo sus efectos felices por toda la sociedad.

El ejemplo más visible en muchos países es el del movimiento estudiantil. Oigamos a los estudiantes independientes que, contra toda esperanza, lograron la mayoría en las elecciones de la Universidad Central en Caracas en 1985: afirman que su movimiento es político, pero que no está ni afiliado a un partido ni es «sectario», es decir, identificado con una ideología; defiende el futuro de los estudiantes en una sociedad en crisis y que sacrifica el crecimiento económico y la integración social del país en beneficio de los más ricos y al milagro del petróleo. Son también los estudiantes quienes en Chile, a partir de 1984, llevan los combates de alcance general: luchan contra los rectores nombrados por la dictadura y obtienen, con el apoyo de los enseñantes, que los decanos sean elegidos, pero, sobre todo, se convierten en defensores de un desarrollo económico nacional cuya condición primera, para ellos, es la democracia. Los estudiantes uruguayos, al salir de la dictadura, critican el período de la Universidad Autónoma (1958-1973) y quieren actuar al mismo tiempo por su propio futuro y por el resurgimiento del país.

Junto a los estudiantes, las mujeres. El *Plenario de Mujeres Uruguayas* (PLEMUU) escribe: «Una vez abiertos de nuevo los canales de participación tradicionales, surgen como nuestra preocupación central los

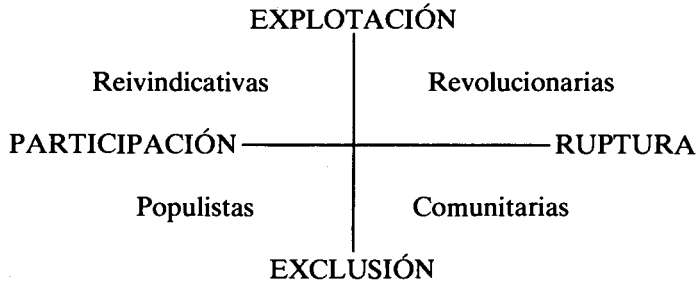
problemas específicos de las mujeres y se refuerza nuestra reflexión sobre la necesidad de un doble militantismo femenino: aquel que acompaña a las reivindicaciones generales de construcción de un país nuevo y aquel que se refiere específicamente a la condición de la mujer en este proyecto.» En revancha, no es bastante llamar movimiento social a la acción agitadora de las madres y luego abuelas de la Plaza de Mayo que, desde 1977, reclaman verdad y justicia para sus hijos y sus nietos desaparecidos y asesinados, porque en esta lucha por la vida hay mucho más que un envite social. Estos ejemplos son limitados. No hay por qué asombrarse, dado que los países de América Latina viven una crisis de extremada violencia y dado que algunos de ellos acaban de salir de una dictadura o están amenazados de descomposición. Indican, sin embargo, que se forma una capacidad de acción colectiva que puede calificarse de movimiento social, en un lugar que no está situado ya en el seno de las intervenciones de un Estado nacional-popular, y que tampoco es el de los conflictos del trabajo, como en las sociedades industriales propiamente dichas. Es falso representar a la América Latina como sublevada por movimientos de base que reinventarían la sociedad y la vida política; y a la inversa, no puede afirmarse que todas las formas de acción colectiva sean demandas sociales en búsqueda de una oferta política que antes o después encontrarán, o señales de un rechazo global de la sociedad. El concepto de movimiento social es de una importancia central, no porque describa realidades masivas, sino porque indica el lugar en que tienden a formarse los conflictos más centrales, donde la capacidad de los hombres para hacer su historia alcanza su nivel más elevado. América Latina no es un continente épico y es raro que se formen en ella poderosos movimientos sociales. Más raro todavía en la actualidad que en el pasado, porque el crecimiento es más favorable que la crisis a las movilizaciones. Pero, incluso aunque ese lugar central esté ocupado de forma débil, hay que reconocer su centralidad e identificar las fuerzas favorables o desfavorables para la formación de actores sociales centrales, sin cuya existencia no hay ni salida de la dependencia ni desarrollo.

La fuerza y la debilidad de los actores sociales políticos en América Latina son que esos actores penetran en el espacio político al mismo tiempo que defienden sus raíces culturales, y que son portadores de movimientos sociales. Son esa mezcolanza y esa amalgama de demandas culturales, sociales y políticas, las que subrayan, incluso aunque no siempre con buenos instrumentos de análisis, las que hablan de nuevos movimientos sociales.

3. Protesta moral y movimiento histórico

Estos elementos de movimientos sociales se apoyan en categorías —los estudiantes o las mujeres, éstas la mayoría de las veces de nivel universitario que afirman su participación activa en la moderniza-

ción de la sociedad y que, por tanto, están alejadas del mundo de los pobres, donde al principio hemos buscado —en vano— movimientos urbanos revolucionarios. Pero ahora hemos de volver hacia esos *pobladores,* de los que no sería suficiente decir que su acción no puede ir más allá de la ayuda mutua indispensable para la supervivencia o de una participación extremadamente dependiente de iniciativas políticas de tipo nacional-popular. Los sociólogos de SUR han mostrado el estallido de las conductas de los *pobladores* que han estudiado en Santiago. Han enfrentado cuatro tipos de conductas que se oponen unas a otras más de lo que se completan —reivindicativas, populistas, revolucionarias y comunitarias—, y que corresponden a las combinaciones creadas por el cruce de dos ejes: participación-ruptura y explotación-exclusión.



Lo que les lleva a afirmar la ausencia de un principio central de integración de las conductas y, por lo tanto, de un movimiento social propiamente dicho. Es cierto que las conductas observadas no revelan ningún principio de unidad y que fácilmente puede verse lo que opone a grupos vueltos hacia el interior, hacia la defensa comunitaria, y a otros grupos que están vueltos hacia el exterior, hacia la acción reivindicativa.

Pero ¿debemos considerar esta diversidad de las conductas colectivas como la consecuencia directa de una situación de exclusión y de impotencia o, por el contrario, no podemos ver ahí el estallido, la desintegración de un *movimiento social imposible* y que sólo se manifestaría al precio de la reconversión de temas sociales en temas morales o religiosos? Aquellos que no están definidos o se hallan situados sólo negativamente no pueden crear más que un *deseo de movimiento social,* corriendo el riesgo, incluso, de producir lo que yo denomino un antimovimiento social, es decir, una comunidad integrada y homogénea que lleva en sí misma lo contrario incluso del conflicto abierto que define un movimiento social.

Los pobres no pueden afirmarse como trabajadores o como ciudadanos; no pueden hacerlo más que afirmando su derecho a la existencia contra un orden social que los deja al margen o los excluye en todos los aspectos de su vida. Esta negación de la negación hace surgir la protesta

moral, porque sólo los derechos de la persona pueden defenderse aquí. De igual manera, no pueden designar un adversario preciso, como hacen los sindicalistas que atacan el capitalismo; se oponen a la sociedad, al orden social en general. Por último, no pueden situarse por relación a unos envites sociales y culturales bien definidos; no pueden apelar más que a la reconstitución de la sociedad o a la recreación de la comunidad, lo cual da a su acción un tono a la vez aparentemente moderado —abrir la sociedad más que cambiarla— y radical —transformarla por completo—. Los tres elementos constitutivos de un movimiento social —la definición del actor mismo, de su adversario y del envite de su conflicto— se encuentran de este modo separados a un tiempo unos de otros, *desintegrados* e *invertidos,* lo cual conduce a una acción más expresiva que instrumental, según el vocabulario clásico de la sociología. Fuertes exigencias llevan a una débil capacidad de acción y, sobre todo, a una tendencia irrepresible al estallido de las manifestaciones del movimiento social desintegrado: apelación a la comunidad, rechazo violento del orden social, afirmación de los derechos de la persona. Individualismo y comunitarismo, integración y ruptura se mezclan, se contradicen; pero ¿no es porque, como aquí vemos, se manifiesta un movimiento social imposible, que es más apelación a un movimiento social que conjunto de reivindicaciones integradas en una estrategia de acción? Corresponde al sociólogo extraer de estas contradicciones prácticas la unidad profunda de ese deseo de movimiento social. Y la mejor manera en que podemos hacerlo es escuchando a Luisa Riveros, habitante de la *población* Violeta Parra, que se dirigió al papa Juan Pablo II ante varios centenares de miles de *pobladores* reunidos en el barrio La Bandera, al sur de Santiago, en marzo de 1987, y cuyas palabras, que no habrían podido ser pronunciadas en otro momento en el transcurso de catorce años de dictadura, provocaron una profunda emoción en todo Chile. Le dijo al Papa lo que tenían que sufrir —hambre, injusticia, cárcel, violencia, exilio— quienes querían vivir dignamente, criar a sus hijos, comportarse según su fe cristiana, y afirmó el derecho de todos a una ciudadanía verdadera. Palabras cargadas, a un tiempo, de crítica social y de afirmación moral, cercanas a los discursos de los *beatos* del Sertão brasileño, pero que ya no están vueltas hacia la restauración de un orden tradicional, que apelan, por el contrario, a la creación de una nueva sociedad más solidaria, más abierta y más moderna.

El principio de unidad de este discurso no es una concepción de la sociedad o de la democracia, sino la afirmación de los derechos fundamentales de la persona humana y la denuncia de los golpes que les son propinados por un régimen político y una situación económica.

En mi espíritu hay una imagen que se superpone a la de Luisa Riveros, vislumbrada por encima del inmenso estadio donde ella estaba frente al Papa, protegida, legitimada por la presencia de éste. Tal vez porque ese papa es polaco, es la imagen de Lech Walesa, en los astilleros Lenin

de Gdansk y, más precisamente, ante el monumento a las víctimas de la represión de 1970 levantado por el sindicato libre Solidaridad. ¿No es la misma fusión de exigencias morales y de reivindicaciones sociales, la misma defensa de los derechos de la persona y de la ciudadanía?

En Chile o en otros países del continente, tanto como en Polonia, lo esencial no es la defensa de intereses económicos, menos todavía una conciencia de clase; es la voluntad de *ciudadanía.* Por eso no hay que seguir hablando de movimientos sociales, porque esa búsqueda de la comunidad es, más exactamente, un *movimiento histórico.* Los movimientos sociales oponen una categoría social a otra, una clase a otra, mientras que los movimientos históricos ponen en movimiento la conciencia nacional y, más ampliamente, la conciencia de pertenencia a una comunidad, de la familia a la nación, pasando por la etnia y la colectividad local. La elite que conduce el desarrollo y que dirige el Estado, agente central de ése, apela siempre a la construcción de la nación, a la formación del Estado nacional, incluso a la seguridad nacional, en el caso de las dictaduras militares recientes del continente. Los movimientos históricos popularizados dan de este envite común, la existencia como nación, una interpretación opuesta. Los marginados o excluidos apelan a la unidad de la sociedad contra el dualismo, las desigualdades o la segregación de la que son víctimas. Sentimiento muy fuerte en toda la América Latina, donde la independencia nacional está hace mucho tiempo adquirida y donde los regímenes nacional-populares le han dado un sentido político y social concreto.

Los «marginados», si no conquistan ninguna influencia, si se sienten completamente excluidos, pueden renunciar a su voluntad de reconstruir la nación, y oponer al orden social que los rechaza una contra-sociedad, una contra-cultura, una de cuyas manifestaciones es la búsqueda de una comunidad cerrada sobre sí misma. Si además el mundo de los excluidos está separado del mundo de los ciudadanos por una diferencia étnica, como ocurre en ciertos países andinos y en gran parte de la América central, puede aparecer un nacionalismo étnico, mucho más radical que el espíritu de comunidad de los barrios pobres de las grandes ciudades, como hemos visto al evocar el katarismo boliviano. Y a la inversa, para que el movimiento histórico estallado que hemos descrito pueda constituirse, es menester que se halle ligado a reivindicaciones sociales: es la defensa de intereses específicos, la lucha contra los empleadores o incluso contra la política urbana, las que impiden al espíritu comunitario encerrarse sobre sí mismo y le permiten contribuir a la formación de movimientos sociales. Pero los movimientos comunitarios que se forman en las ciudades, y cuya debilidad y estallido hay que subrayar, siguen estando, ante todo, en el dominio de los movimientos históricos, es decir, que su interlocutor es, más que una categoría social, el Estado, que es adversario y protector a un tiempo. La mayoría de las veces estos movimientos apuntan menos a la construcción de un conflicto que a una

integración social y política, lo cual explica su radicalismo conservador que mezcla los discursos más extremos con el clientelismo más utilitario. Nos han acostumbrado tanto dos siglos de historia europea a considerar que los conflictos modernos son de orden económico, que ponen en cuestión lo que cada uno posee o no posee, antes que lo que se es o las comunidades a las que se pertenece, que sentimos la tentación de creer que los conflictos de tipo nacional o comunitario pertenecen al pasado o son propios de las naciones nuevas: en Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no han ido perdiendo poco a poco su importancia en beneficio de los grupos de interés? Esta visión evolucionista debe ser abandonada: estos dos tipos de conflictos y de acción colectiva no se suceden; se cruzan y se mezclan. De igual forma que el sindicalismo no fue sólo portador del movimiento obrero que cuestionaba la utilización social del producto de la actividad industrial, sino que también estuvo asociado al desarrollo y, más concretamente, a «tomar el poder», así hoy los movimientos comunitarios que se apoyan en los pobres y los excluidos ponen en cuestión el modo de desarrollo que ha producido una sociedad dual y apuntan a la reintegración de los pobres en la nación.

La señal más visible de la importancia de estas luchas urbanas es el papel central de la ciudad en la política latinoamericana. No en el sentido en que el tema de la comuna fue central durante siglos, y, sobre todo, de 1793 a 1871 en la política parisina y francesa, porque los movimientos urbanos de entonces fueron movimientos sociales centrales que oponían directamente al artesano con el negociante en un marco local. En la América Latina actual, la política urbana no traduce relaciones de producción, sino más bien la distancia que separa a los ciudadanos de los excluidos, categorías definidas por su relación con el Estado más que con la riqueza o con la producción. Es difícil decir que Adhemar de Barros, C. Lacerda o M. Arraes, en São Paulo, en Río y en Recife, a principios de los años sesenta se apoyaban en el proletariado o en la clase media: en cambio, sus discursos trataban, de forma explícita, de tranquilizar a los ciudadanos o de dar esperanza a los excluidos.

¿Cómo no ver que estas protestas y estas rupturas están cerca de los discursos de los nuevos movimientos sociales que se forman en los países más industrializados, movimientos ecologistas o antinucleares, movimientos de mujeres o campañas contra la exclusión, la persecución y el totalitarismo? De ambos lados se opera una superación de las ilusiones economicistas de la primera mitad de este siglo y reaparecen temas y, sobre todo, un tono de los que se había dicho que habían desaparecido, y de los que la nueva importancia del discurso religioso es la manifestación más visible. Es que los problemas del devenir histórico, el miedo a la catástrofe, se trate de una explosión nuclear o del hambre que se difunde por el Tercer Mundo, parecen hoy más angustiosos que los de la propiedad y de la producción. Las luchas entre los que están

arriba y los que están abajo en una sociedad parecen menos dramáticas que las que oponen a los que están en la sociedad, incluso aunque estén abajo, y los que son rechazados fuera de esa sociedad, a la miseria, la guerra o el caos.

Ya no tenemos suficiente confianza en la solidez de nuestra sociedad, al menos desde el inicio de lo que se llama la crisis, para llevar nuestra mirada más que al interior de su organización económica y social; hoy entendemos mejor las protestas emitidas en nombre de la vida, de la seguridad y de los derechos del hombre que los ataques contra la explotación y los monopolios. El mundo de los pobres no ha producido en América Latina ni partidos ni movimientos organizados, pero su presencia define de modo más exacto el lugar de la política en América Latina que los discursos tomados en préstamo desde hace mucho tiempo a la historia social e intelectual de la Europa del siglo XX.

4.—El sindicalismo obrero

El predominio de la acción política sobre los movimientos sociales es un movimiento tan general y apoyado en tantas observaciones que la hipótesis que se impone al principio de un análisis del sindicalismo obrero es la misma que ha regido el estudio de las luchas campesinas: la dificultad de formación de un movimiento propiamente obrero, igual que de un movimiento campesino, la subordinación de la acción sindical a las intervenciones del Estado y de las fuerzas políticas nacional-populares.

Sin embargo, se introduce una pregunta nueva que apenas podía plantearse en el caso de las luchas campesinas: a medida que se eleva el nivel de industrialización, ¿no adquiere el sindicalismo una importancia creciente y, sobre todo, una independencia mayor? Tras un largo período durante el que la gestión del cambio histórico predomina sobre los conflictos estructurales de un tipo de sociedad, ¿no se ve a las fuerzas de clase, a los patronos por un lado, a los sindicatos de obreros y de empleados por el otro, convertirse en actores de una sociedad cada vez más definida por sus relaciones, sus conflictos y sus negociaciones? América Latina ¿no sale de unos regímenes nacional-populares para entrar en situaciones dominadas bien por movimientos obreros, socialistas y revolucionarios, bien, al contrario, por una forma u otra de social-democracia? ¿No hay que hablar de la madurez de una parte al menos del continente y encontrar en ciertos países una evolución análoga a la de la Europa occidental en el transcurso de la gran industrialización de la posguerra, cuando un sindicalismo subordinado durante mucho tiempo a unos pròyectos políticos, reformistas o revolucionarios, se

esforzó, sobre todo en Italia y en Francia, por volverse más independiente y por intervenir por sí mismo en las grandes decisiones económicas y sociales? Semejante pregunta no concierne sólo a la evolución del sindicalismo; implica una reflexión más general sobre el desarrollo: éste no es más que una etapa que prepara la entrada en un tipo «clásico» de sociedad, la sociedad industrial, de suerte que, como todos los ríos llevan al mar, las diferencias entre las vías y los modos de industrialización cederían, en un momento dado, su puesto a la comunidad de problemas de todos los países industriales. Esta idea, que se expresó muy a menudo para anunciar un acercamiento del Este y del Oeste, de los países capitalistas y de los países comunistas, ¿puede utilizarse de nuevo para anunciar un acercamiento de América Latina a Europa occidental o a los Estados Unidos? Anunciemos de entrada que semejante conclusión no puede aceptarse, que se apoya en una confusión peligrosa: es indispensable separar los problemas del desarrollo y los de un tipo societal, pero ningún país, *ninguna sociedad concreta se identifica nunca por entero ni con un tipo de sociedad ni con un proceso de desarrollo.* Y el error más grave del pensamiento sociológico ha sido haber confundido, en el momento de los triunfos orgullosos de la primera industrialización europea, los dos órdenes de fenómenos, como si la Europa moderna llevase en su modernidad misma, en su estructura social, la explicación de su propia modernización. Todos los países del mundo tienen *a la vez problemas estructurales y problemas de desarrollo:* por eso ningún país puede ser identificado ni con un modo de desarrollo ni con un tipo societal. Lo cual define, por otra parte, el papel del historiador que estudia conjuntos concretos, es decir, definidos por una modalidad siempre particular y constantemente cambiante de combinación entre un tipo de desarrollo y un tipo societal, una estructura social. La historia de la América Latina no es la prehistoria de una sociedad industrial en formación, es la *historia de un modo de desarrollo* que asocia de manera específica los problemas de la modernización o de la industrialización a los problemas, ante todo, de una sociedad mercantil y campesina y luego a los de una sociedad industrial. Buscar en América Latina un movimiento obrero que poco a poco se acerque a uno de los modelos que han triunfado en Europa o en América del Norte sería caer en el etnocentrismo y contribuir, por ello, a reforzar una dependencia cultural de América Latina que ha tenido para ella consecuencias tan negativas al menos como su dependencia económica o política.

1. Sindicalismo y políticas nacional-populares

Nudos y enclaves

Durante mucho tiempo se aceptó la idea de que el sindicalismo de América Latina había sido importado de Europa por emigrantes o, de los Estados Unidos, por el retorno de los emigrados mexicanos o

centroamericanos. De suerte que, durante un largo período, hasta 1930 aproximadamente, América Latina habría estado dominada por modelos directamente importados del extranjero. Es verdad que en la costa atlántica, a principios de siglo, los obreros son en gran mayoría de origen extranjero —hasta el 92 por 100 en São Paulo en 1900, de los cuales el 81 por 100 eran italianos. En Uruguay, a principios de siglo, el 37 por 100 de los obreros de la construcción son extranjeros, y esos españoles, italianos o portugueses importan las ideas anarquistas o anarcosindicalistas que ejercían una gran influencia en su país de origen. En la costa del Pacífico y, sobre todo, en la California mexicana, se deja sentir la influencia del sindicalismo revolucionario americano, la de los *Industrial Workers of the World* (IWW), cuyas ideas fueron difundidas en México por los hermanos Flores Magón. La influencia de los IWW penetra en Chile a partir de 1919 y lleva a una escisión de la que nace la *Federación Obrera Regional de Chile* (FORCH), en la que los albañiles, carpinteros, metalúrgicos, tipógrafos y pintores juegan el papel principal. Son también los anarquistas los que, superando la escisión de 1925, constituyen, a partir de los IWW y de la FORCH, la CGT, en 1931. En México, las ideas sindicalistas revolucionarias también conducen, después de la revolución, a la creación de una CGT, pero ésta es rápidamente dejada al margen por la CROM, subordinada al gobierno posrevolucionario y dirigida de manera autoritaria por Luis Morones.

No obstante, esta influencia del sindicalismo de acción directa ha sido mucho más limitada de lo que durante mucho tiempo se ha creído. M. Hall (cf. Bibl., III, 4) ha demostrado que esas organizaciones sindicales no habían correspondido más que a una escasa proporción de obreros, incluso entre los inmigrados. En Brasil, por ejemplo, la mayor parte de los recién venidos intentaron al principio encontrar trabajo en las plantaciones de café. Fue sólo después, tras un primer fracaso, cuando volvieron a las ciudades. La mayoría de ellos carecían de toda experiencia industrial anterior y no pensaban más que en su triunfo o en su supervivencia individual. Las ideas colectivistas o anarquistas no tenían sino escaso eco en este medio fuertemente individualizado y poco organizado. Hall ha demostrado incluso que la proporción de anarquistas no era más elevada entre los inmigrantes que entre los otros. Y es que esos inmigrantes estaban menos atraídos por Brasil de lo que eran rechazados de Italia por la miseria y la superpoblación. Muchos de ellos eran inestables, vagaban en busca de trabajo, y casi la mitad de ellos, el 45 por 100, volvían a Europa. Cierto que São Paulo conoció en 1907 una huelga general que nunca desapareció de la memoria colectiva, pero esa huelga fue excepcional, la única que se produjo durante ese primer período de la industrialización.

El caso argentino fue diferente del caso de Brasil porque las condiciones de vida eran mucho más favorables en Argentina: los inmigrantes

tenían expectativas más altas y trataron de instalarse de forma más sólida, lo que les permitió organizar más acciones colectivas. Pero los grupos anarcosindicalistas nunca ejercieron una influencia preponderante; rápidamente fueron dominados por organizaciones más potentes, bien de orientación moderada, como los *Knights of Labour,* fuertes entre los ferroviarios, bien de orientación socialista o incluso comunista. M. Murmis y J. C. Portantiero han demostrado que el sindicalismo argentino no pasó de pequeños grupos radicales a un sindicalismo de masa peronista. Antes del peronismo, en los años treinta, existía en Argentina un sindicalismo de masas, de orientación socialista, que se había desarrollado con el empleo industrial en Buenos Aires y que había tenido que luchar contra la caída de los salarios reales. Los países del cono sur conocieron de este modo y rápidamente fuertes organizaciones sindicales independientes, mientras que en Brasil, según recuerda A. Simão, los años veinte no conocieron ninguna gran huelga interprofesional, y cuando el desarrollo económico a partir de los años treinta desembocó en la llegada de inmigrantes del interior que, como hemos visto, debilitaron más que reforzaron la organización sindical. El sindicalismo independiente y militante se desarrolló sobre todo en los *enclaves mineros.* Es ahí, en Chile, en Bolivia y en Perú donde se formaron núcleos de acción radical que han constituido ejemplos de movimientos de clase, independientes de intervenciones políticas nacional-populares que apenas comenzaban a formarse. En *Chile,* el sindicalismo socialista y comunista se formó antes incluso de la creación de los IWW. La FOCH, creada en 1909, pero cuya orientación fue al principio mutualista, se transformó a partir de 1911, por la entrada de las *mancomunales* y la influencia de Recabarren, en una organización revolucionaria. Reorganizada en 1920, la FOCH se adhirió a la Internacional comunista en 1921. Luchó contra la CGT sindicalista revolucionaria, pero esa lucha debilitó al sindicalismo hasta que en 1935 la nueva política de la Internacional comunista, favorable a la formación de Frentes Populares, condujo a un congreso de unidad sindical, cuya obra fue completada por un segundo congreso que creó, en 1936, la CTCh, *Confederación de Trabajadores de Chile,* de la que sólo la CGT anarquista se mantuvo alejada. Este primer sindicalismo chileno estuvo dominado por los mineros. Más de la tercera parte de los miembros de la FOCH trabajaban en el carbón del Sur o en el salitre del Norte. Los mineros fueron constantemente un foco de radicalización cuya acción se extendió más allá de las minas, llegando a los campesinos de las regiones vecinas.

En *Bolivia* fueron también los mineros los que jugaron el papel principal, pero su sindicato estuvo dominado constantemente por luchas políticas entre el PIR, de orientación comunista, y el POR trotskista, antes de que se crease el MNR. Desde el principio, este sindicato jugó un papel nacional y no solamente sectorial, a la vez a causa de la importancia

de las minas, sobre todo las de estaño, en la economía boliviana y porque el sindicalismo de los mineros ayudó al movimiento campesino a constituirse.

En *Perú* ocurre lo mismo, en las minas y sobre todo en la de Cerro de Pasco: se constituyó un sindicalismo militante, también dividido por querellas políticas que, en este caso, tuvieron por protagonistas a comunistas y apristas.

«Pelegos» y «charros»

Muy diferente del sindicalismo socialista de masas de Buenos Aires y del radicalismo social y político de los enclaves mineros, el sindicalismo brasileño y mexicano fue dominado rápidamente por la empresa del Estado. Caso extremo de subordinación de un actor social a los actores políticos, y que subraya la debilidad general de los actores sociales en América Latina. Como escribe Leõncio Martins Rodrigues: «La debilidad del proletariado industrial corresponde a la debilidad de la burguesía industrial y, en líneas generales, a la debilidad de todas las clases económicas, tanto a los propietarios de bienes raíces como a los obreros agrícolas» (cf. Bibl., III, 4, pág. 105). Ese autor ha distinguido cuatro formas de subordinación del sindicalismo al poder político: la burocracia «asistencialista», el populismo, el nacionalismo desarrollista y el socialismo desarrollista. Del primero al último de estos tipos se refuerzan los vínculos del sindicalismo con los partidos políticos y se debilita su subordinación en relación al Estado. Pero los rasgos comunes de estos tipos son más importantes que lo que los separa. En todos los casos, la autonomía de la acción sindical es reducida.

En *Brasil,* durante los períodos getulistas (1930-1937, 1937-1945, 1950-1954) e incluso posgetulista y hasta el golpe de Estado de 1964, se aplica la fórmula de J. B. Lopes: los obreros no ven el sindicato «como algo hecho por ellos sino como algo hecho por otros para ellos». Si la tasa de sindicalización es aparentemente alta (del 35 al 40 por 100 a principios de los años sesenta en São Paulo), la participación en las elecciones sindicales es escasa y los asalariados esperan del sindicato, ante todo, servicios sociales. El sindicalismo está directamente subordinado al poder político, desde la Consolidación de las Leyes de Trabajo, promulgada por Getúlio Vargas en 1943, inspirándose en la *Carta del Lavoro* del fascismo italiano. La justicia del trabajo decide sobre los conflictos industriales; por lo tanto, la acción sindical está destinada a ejercer presión sobre ella antes que sobre las empresas, en las que la organización sindical es escasa o está ausente. No tiene en ellas ni delegados sindicales ni comités de empresa en Brasil.

Y es que el sindicalismo brasileño no fue creado por los obreros sino por el Estado. En muchos casos los asalariados pasaron directamente del patrimonialismo del jefe de empresa a la burocracia estatal, como ha

demostrado J. B. Lopes en su estudio de la formación de los sindicatos en dos centros textiles del estado de Minas Gerais, Leopoldina y Cataguazes. El sistema tradicional situaba a los obreros bajo la dependencia del patrón que creía en ellos, que se convertía en el padrino de sus hijos, que aseguraba la contratación por prioridad de los miembros de su familia, pero que también imponía, sin discusión, duras condiciones de trabajo. La crisis de la industria textil y el decreto sobre el salario mínimo provocaron la organización de los obreros, pero bajo control directo del Estado. La organización sindical progresó de hecho con mucha lentitud; el impuesto sindical, descontado de los salarios, no se crea hasta 1940, y en el momento del final de la guerra y del *Estado Novo,* régimen autoritario creado en 1937 por Vargas, el sindicalismo seguía siendo débil. Con el retorno a la democracia y la elección del presidente Dutra, hubiera podido desarrollarse rápidamente un sindicalismo independiente. El obstáculo decisivo para la formación de una política obrera radical, animada por un espíritu de lucha de clases, fue la posición del *partido comunista,* que siguió la política general de la Internacional comunista, dando prioridad a la alianza con el gobierno, en un espíritu de frente nacional. Aunque el partido comunista intentó en varias ocasiones crear una organización sindical autónoma, decidió, ante todo, participar en el movimiento *queremista,* movimiento populista de apoyo *(queremos)* al retorno de Getúlio Vargas, y combatir al partido de derecha UDN. Fase breve porque, a partir de 1947, el partido comunista es enviado de nuevo a la ilegalidad, lo cual elimina de paso a las organizaciones sindicales, como el MUT y la CGTB, que había creado y que controlaba. A partir de la segunda presidencia de Vargas, en 1950, el sindicalismo se reorganiza y lanza grandes huelgas, pero la acción sindical sigue estando subordinada a la acción del presidente. La gran huelga de São Paulo de 1953 está orientada hacia un modelo de desarrollo capitalista y, por consiguiente, hacia una forma de colaboración de clase. Tal vez porque deseaba ver constituirse un sindicalismo de clase, F. Weffort ha tratado de explicar esa ausencia de desarrollo de un sindicalismo militante y ha elaborado, en esta ocasión, uno de los análisis más profundos y más influyentes del sistema político-social latinoamericano. La reivindicación obrera se ha incorporado a la movilización populista que comportaba elementos antiimperialistas, en particular en el momento del suicidio de Vargas en agosto de 1954. Es después de la muerte de Vargas, durante la presidencia de Kubitschek, y la breve crisis que precedió al golpe de Estado en 1964, cuando el sindicalismo brasileño se diversifica e intenta, de varias maneras a la vez, conquistar cierta independencia.

Se ha resumido con demasiada frecuencia la historia social de este período como el ascenso progresivo de la influencia del partido comunista. Una encuesta hecha entre los dirigentes sindicales de la metalurgia ha mostrado, en efecto, la creciente influencia del partido comunista y, en 1962-1964, el *Comando Geral dos Trabalhadores* está bajo control

comunista, mientras que el mismo PTB, el partido populista animado por João Goulart desde el período getulista, se ve más penetrado cada vez por influencias comunistas; pero el CGT no dominó nunca por completo la vida sindical brasileña. Si en la región industrial de Santos el Forum sindical de debates, dominado al principio por los partidarios de Jânio Quadros, pasa a partir de 1962 bajo control comunista, el Pacto de unidad sindical que se desarrolla en São Paulo no se limitó nunca a ser el instrumento de un partido político. En particular, en 1957 logró lanzar una huelga de masas y, sobre todo, vinculó el sindicato a las asociaciones de barrio, las *sociedades de amigos de bairros,* cuya influencia era antigua y poderosa en las grandes ciudades brasileñas. La principal debilidad de la acción comunista fue que se concentró en la cima, para ejercer una influencia directa sobre el gobierno. De suerte que su capacidad de movilización en la base siguió siendo débil e incluso inexistente a menudo. Otras tendencias sindicales, opuestas a la influencia comunista, se esforzaron, por el contrario, en desarrollar un sindicalismo de presión y de negociación. Ése fue el caso de la *União Sindical de Trabalhadores,* fuerte entre los metalúrgicos de São Paulo, del *Conselho Sindical* de São Paulo y de la *Confederação Brasileira de Trabalhadores Cristãos.* La larguísima huelga de la fábrica de galletas Aymoré, que pertenecía al Molino inglés, fue el ejemplo más importante de una acción llevada en la base para mejorar, mediante la presión y la negociación, las condiciones de trabajo. De este modo, el sindicalismo brasileño, dividido entre la influencia predominante de los *pelegos,* es decir, de los dirigentes sometidos directamente al gobierno, la del partido comunista, y las tentativas de organización reformistas o simplemente reivindicativas, no llegó nunca a constituirse en un movimiento obrero, organizado en torno a una acción de clase y capaz de ejercer una influencia directa e independiente sobre las empresas y sobre el gobierno.

En *México,* el sindicalismo es tan dependiente del Estado como en Brasil, pero de manera diferente, porque está incorporado a un partido político en lugar de depender de los tribunales del trabajo, como en Brasil. Esta asociación del sindicalismo y de la acción política es antigua. Ya durante el período revolucionario, la *Casa del Obrero Mundial* había participado en las luchas internas de la revolución y sus «batallones rojos», formados por obreros de la capital, habían combatido contra los campesinos. La CROM primero, y la CTM luego, fueron elementos esenciales del sistema político mexicano y, más precisamente, del partido-Estado. Fidel Velázquez, que desde hace varios decenios ha dirigido la confederación sindical, ostenta en el seno del partido revolucionario institucional una influencia que le permite oponerse a medidas económicas, recurriendo incluso a la amenaza de huelga, como hizo contra el presidente De la Madrid. Esta incorporación entraña, como en Brasil, la formación de sindicatos en ruptura con la organización oficial. Pero incluso aunque esas rupturas, que estudiaremos más

adelante, han sido a veces importantes, la autonomía del sindicalismo en relación al PRI ha disminuido más que aumentado, si comparamos los años ochenta con el período cardenista, durante el que, desde luego, el presidente imponía su control a la CTM, pero dejaba mucha autonomía a Lombardo Toledano, que ponía en marcha un fuerte movimiento a la vez de clase y nacional. La confederación no es sólo un medio de control político de los sindicatos, como dicen demasiado rápidamente sus adversarios; es más un elemento importante del sistema político, y por eso mismo tiene una influencia mayor de lo que a menudo se dice, pero en detrimento de la capacidad de acción autónoma de los asalariados en el marco de sus empresas o de las ramas profesionales.

También en *Argentina,* en la época peronista, el sindicalismo dependió estrechamente del poder político. Dependencia más sorprendente porque antes de la llegada de Perón el sindicalismo era una fuerza poderosa. Tenía 370.000 miembros en 1939 y más de 440.000 en 1941. La fuerza de este sindicalismo peronista era tan grande que Murmis y Portantiero han tratado de demostrar que fueron los dirigentes sindicales tradicionales mismos los que habían apoyado a Perón, lo cual contradice la tesis de G. Germani, que presenta a Perón como la expresión de los nuevos obreros inmigrados, de los *cabecitas negras* o *descamisados.* Pero su tesis no parece corresponder a los hechos en que ellos se apoyan. Porque si es cierto que, entre 1941 y 1945, fecha de la llegada efectiva de Perón al poder, hubo un fuerte aumento de los efectivos sindicales, también se produjeron transformaciones internas en la organización sindical que entrañaron un cambio de su orientación política. Los sindicatos tradicionales del comercio, de los bancos y seguros, de la construcción y de la salud perdieron en unos pocos años la mayoría de sus miembros, mientras que el sindicato de la alimentación cuadruplicaba sus efectivos y la categoría «diversos» pasaba de 24.000 a 143.000, lo cual indica la aparición de una masa y, sobre todo, de dirigentes completamente nuevos. Es cierto que los viejos dirigentes se esforzaron por conservar el control del cambio político. La CGT 1 trataba de ser independiente de los partidos y la CGT 2 era más socialista, pero tanto una como otra se esforzaron por darse un instrumento político y crearon el *Partido Laborista,* que apoyó a Perón, apelando para ello a tesis a un tiempo nacionalistas, democráticas y antifascistas, con la idea de controlar de este modo a un dirigente nuevo que, en su opinión, carecía de fuerza y de apoyos. Fue Perón, en realidad, quien impuso sus miras a unos sindicalistas que no tuvieron capacidad para resistir ante él. Si algunos sindicatos socialistas, como el textil y el calzado, salieron de la CGT, ésta supo organizar sindicatos paralelos e incorporarse al aparato peronista con la gran mayoría de los asalariados. El movimiento peronista demostró su capacidad de movilizar a las masas, mientras que los aparatos sindicales no lograban oponer una lógica de acción autónoma. Murmis y Portantiero han tratado de mostrar que el sindicalismo argentino era, a

semejanza de muchos sindicalismos europeos, una fuerza de clase, de orientación reformista más que revolucionaria. Pero el fracaso relativo de su tentativa demuestra que la situación argentina pertenece al conjunto latinoamericano y se aleja del ejemplo europeo. En parte debido a la ausencia de una fuerte burguesía industrial en Argentina y por consiguiente debido al predominio de la relación con el Estado sobre la relación con la empresa en la acción sindical. No es exacto que se constituya un movimiento obrero autónomo capaz luego de negociar con el Estado y las empresas las condiciones de trabajo. El acceso de Perón al poder fue el resultado de una dinámica ante todo política, que arrastró en su oleaje a los actores propiamente sociales. G. Germani ha hecho bien insistiendo en el papel de una masa urbana aún poco integrada en los moldes sociales y culturales de la vida urbano-industrial, pero, aquí lo mismo que en Brasil, es F. Weffort quien ve con mayor justeza cuando busca la explicación de las conductas sindicales menos en las características de la clase obrera o del sindicalismo que en la naturaleza del poder político y de su huella sobre las fuerzas sociales. Cierto que en Argentina, como en Chile o en Uruguay, aparecen formas de acción sindical cercanas a la socialdemocracia de ciertos países europeos, pero esas tendencias siguen siendo secundarias en relación al hecho central: la subordinación del sindicalismo al poder político. Cuando, tras la caída de Perón en 1955 y la «revolución liberadora», los sindicatos vuelven a encontrarse en la oposición, parece que entonces se vuelven más autónomos. Pero eso nada significa, porque el sindicalismo, y sobre todo el grupo más peronista, el de los 62, se convierte primordialmente en un actor político, reemplazando al Partido Justicialista puesto fuera de la ley.

En *Venezuela,* el gobierno de *Acción Democrática* fue asociado estrechamente a la dirección de la confederación sindical. Ante todo porque el partido comunista había participado en la lucha armada y porque la derrota del PCV y del MIR dejó a AD un control total sobre el sindicalismo. Control tan grande que, cuando una parte de los dirigentes sindicales apoyaron en 1968 al *Movimiento Electoral del Pueblo* y se separaron de AD, se dieron cuenta al punto de su error: ningún movimiento autónomo se formó tras ellos, de suerte que rápidamente hubieron de integrarse en las filas de AD. El gobierno pagó bien este apoyo sindical, otorgando grandes privilegios a los sindicatos y a sus dirigentes. Creó en particular un Banco de los Trabajadores de Venezuela que pudo distribuir créditos en condiciones tan favorables que terminaron en un grave escándalo financiero. Todas las tentativas de radicalización sindical fueron combatidas con eficacia. Bajo el gobierno de Lusinchi, en 1983, el sistema venezolano evolucionó, bajo la influencia del DGB alemán, hacia una democracia industrial, fundada en un pacto social y la cogestión. La CONACOPRESA *(Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios)* fue la expresión principal de este pacto social, pero esa tentativa no tuvo futuro porque chocó con la oposición de la

organización patronal, la FEDECAMARA. Inversamente, esta comisión, en la que la confederación sindical ejercía una influencia predominante, fue bastante fuerte para resistir al intento de los planificadores de CORDIPLAN de crear nuevas formas de intervención económica y social del Estado, permitiendo mejorar el rendimiento de la máquina administrativa. CORDIPLAN hubo de abandonar sus proyectos por falta de apoyo de los sindicatos. La CTV no está, por tanto, del todo en la misma posición que la CUT chilena, capaz de mantener, incluso durante la Unidad Popular, la autonomía de su acción.

La dominación de un partido político sobre la acción sindical adoptó una forma más extrema todavía en *Guayana,* donde el *People's Progressive Party* de Cheddi Jagan se apoyó en el GAWU, sindicato de trabajadores agrícolas, y donde los sindicatos fueron lo bastante fuertes, en su oposición a un proyecto de control del Estado sobre sus actividades, para desencadenar, en 1963, una huelga política que decidió a Gran Bretaña a retrasar las elecciones y más tarde a organizar otras nuevas que permitieron a N. Burham llegar al poder. Pero a su vez Burham construyó un socialismo corporativista y nacionalizó la producción de bauxita así como otras compañías mineras, imponiendo su voluntad al sindicalismo. Y le resultó fácil porque en Guayana, como en los demás países del Caribe, la acción sindical se vio complicada por la defensa de grupos étnicos, indios o negros. En *Trinidad y Tobago,* el gobierno se apoyó en los obreros del azúcar contra los del petróleo, mientras que los obreros agrícolas, hindúes, combatían a los obreros urbanos divididos entre blancos y negros, pese a los esfuerzos del *United Labour Front,* en 1975, esfuerzos que secundaban los de E. Williams para crear una nación. En todos estos casos, el sindicalismo está subordinado a la vez a unos dirigentes políticos y a un grupo étnico. Un caso extremo de dominio de un líder político sobre el sindicalismo es el de *Jamaica,* donde el líder del *Jamaican Labour Party,* Alexander Bustamante, organizó las *Bustamante Industrial Trade Unions,* que jugaron un papel central en su victoria electoral de 1944 y se mantuvieron, durante los decenios siguientes, como una de las tres organizaciones sindicales de la isla. Sería excesivo hablar en tales casos de socialismo o de laborismo. En todos, el sindicalismo está subordinado a la acción, bien de un partido, bien de un dirigente político.

A estos grandes tipos de sindicalismos convendría añadir un tercero, el de Colombia, de Perú y en parte del Ecuador, donde el pluralismo sindical corresponde a un sindicalismo político y donde los sindicatos están directamente subordinados a la acción de los partidos. Pero en *Perú,* la influencia creciente del partido comunista ha favorecido el desarrollo de un sindicalismo de clase, acercándose al modelo boliviano y chileno.

La existencia de estos tres grandes tipos de sindicalismos no depende de las características de la clase obrera o de la organización sindical en sí misma, sino más bien de la *naturaleza del sistema político.* Allí donde

existe un Estado fuertemente intervencionista, como en Brasil, en México y en la Argentina peronista, los sindicatos, como las empresas mismas, se encuentran fuerte y directamente integrados en un proyecto y en una organización políticas. A la inversa, en países que siguen estando dominados por una oligarquía o un grupo civil, como en Colombia, y de forma más discontinua en Perú o en Ecuador, el sindicalismo participa en las luchas por el poder. Es en el caso intermedio, allí donde el Estado interviene de forma activa para realizar profundas transformaciones económicas y sociales, pero donde también existe una organización sindical unificada y radical, donde se forma un tipo de sindicalismo que puede calificarse de movimiento obrero.

Sindicalismo y gobiernos «populares»

Aunque la subordinación del sindicalismo parece demostrada en casos tan diversos y tan importantes como los de Brasil, México y Argentina, ¿no ocurre algo muy distinto cuando la acción sindical se desarrolla en sistemas políticos más abiertos o que reconocen una mayor autonomía a organizaciones sindicales que ya están fuertemente constituidas antes de la llegada de esos gobiernos al poder? ¿No es en esas situaciones cuando se acercan más a un modelo europeo y cuando vemos desarrollarse con más claridad un sindicalismo de clase, asociado al poder político como en los frentes populares europeos o como en los gobiernos de tipo laborista o socialdemócrata? El caso más antiguo y más original es el de *Uruguay*. El sindicalismo de este país tenía, a principios de siglo, una orientación de clase y se oponía a la participación política. Pero el gran presidente *colorado,* Battle y Ordóñez, intervino con motivo de una importante huelga de ferroviarios en favor de los huelguistas, e incluso apoyó, esta vez sin éxito, a los obreros del puerto en su combate contra las compañías. Battle introdujo a partir de 1907 leyes favorables a los sindicatos que consiguieron, entre 1914 y 1929, la prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, la jornada de ocho horas, la prohibición del trabajo de los menores, un sistema de retiro, permisos de maternidad, etc. Conjunto de medidas que hicieron de Uruguay una democracia social única en el continente e incluso en el mundo, modelo al que se acercaron más tarde los regímenes socialdemócratas de Escandinavia, de Alemania y de Austria. El sindicalismo no fue incorporado al *battlismo,* pero ejerció una gran influencia sobre ese régimen no sólo durante el gobierno de Battle mismo, sino también de nuevo después de 1947, durante el gobierno de Luis Battle R., sobrino y heredero de Battle y Ordóñez. En Uruguay, la independencia del sindicato, al mismo tiempo que la importancia de las reformas que obtuvo, permite hablar de un movimiento obrero.

En una situación profundamente diferente, el mismo juicio puede hacerse sobre el sindicalismo *boliviano*. A pesar de la división entre

ferroviarios, obreros de fábrica y mineros, y tal vez a causa del papel predominante de estos últimos, el sindicalismo jugó un papel decisivo en el éxito y la transformación de un levantamiento político en una revolución social y política en 1952. Hasta el golpe de Estado de Barrientos en 1946, el sindicato ejerce una influencia preponderante y no está subordinado al MNR. Pero tan falso es decir que la COB anima una acción de clase como decir que está incorporada al sistema político. Es, a la vez, la defensa de una colectividad obrera —la de los mineros— y una fuerza propiamente política. En este sentido, fracasa doblemente: no organiza una vasta acción de clase y no toma ya en consideración los problemas económicos generales del país. Se esfuerza, ante todo, por apoderarse del control de un sector económico, de imponer su poder a través de la cogestión de la empresa pública, la COMIBOL: la COB no tiene, por tanto, capacidad revolucionaria, puesto que, ante todo, trata de ejercer una parte del poder político, pero su acción desemboca en la división de la coalición llegada al poder en 1952. La COB está fundada en los mineros, pero también está dirigida por J. Lechín, que fue vicepresidente de la República durante la segunda presidencia de Paz Estenssoro, entre 1960 y 1964. Lechín siguió siendo constantemente un elemento central del sistema político, pero de un sistema político constantemente roto y en el que no servía a los intereses de nadie más que a los suyos y los de su confederación. Por eso el movimiento obrero boliviano se dividió tanto entre tendencias políticas, entre un sector estenssorista, un sector lechinista, un sector comunista que controlaba en particular las minas Catavi y Siglo XX y el *Partido Obrero Revolucionario* que preparaba una huelga general revolucionaria, sin olvidar a la *Falange Socialista Boliviana,* partido de derecha. El régimen posrevolucionario boliviano estuvo marcado, más que cualquier otro régimen nacional-popular del continente, por la fuerza de las organizaciones obreras y campesinas. No puede reducirse la acción sindical de ese país a un modelo de lucha de clases revolucionaria; no obstante, el sindicalismo boliviano, como el sindicalismo uruguayo de principios de siglo, es fuertemente un movimiento obrero que se apoya en una base social y cuya acción intenta transformar el conjunto de la sociedad. Su debilidad provino de sus divisiones internas. Cuando el presidente Siles Suazo, elegido en 1956, aceptó los planes económicos del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos, chocó con la oposición de Lechín y de la COB. Siles se apoyó entonces en el PIR, comunista, mientras Lechín buscaba el apoyo del POR, trotskista. El sindicato se agotó en esas luchas entre el bloque reestructurador compuesto por Siles y por el PIR, y la alianza de Lechín y los trotskistas. Las luchas intrasindicales llegaron incluso a enfrentamientos abiertos durante la huelga de los ferroviarios de 1958 y, sobre todo, cuando la lucha de las milicias comunistas de Catavi y de Siglo XX contra otros centros mineros terminaron en una matanza. Económicamente, esa situación desembocó

en una catástrofe, en una baja del 60 por 100 de la producción de estaño entre 1952 y 1959. Políticamente, llevó a la ruptura entre sindicatos obreros y sindicatos campesinos y a la evolución del MNR hacia posiciones antinacionalistas, *entreguistas.*

Un tercer ejemplo de movimiento obrero de clase es el del sindicalismo *chileno,* que conservó, más aún que el sindicalismo boliviano, su autonomía, porque la política chilena jamás se vio profundamente arrastrada por un movimiento nacional-popular. La combinación de una apertura creciente, pero limitada, del sistema político con una fuerte conciencia de identidad nacional y con el mantenimiento de una economía de enclave terminó dejando una fuerte autonomía a la lucha de clases en el proceso político que transformó el país a partir del Frente Popular de 1938 y, sobre todo, bajo las presidencias demócrata-cristiana de Frei (1964-1970) y de la Unidad Popular de Allende (1970-1973). La política de Frente Popular, anunciada por la formación de la CTCh en 1936, que se impone con la victoria de Pedro Aguirre Cerda en 1938, da una gran importancia al sindicalismo. Éste, debilitado después de 1947 por haber sido puesto fuera de la ley el partido comunista, y también por el segundo gobierno del general Ibáñez (1952-1958), vuelve a encontrar su independencia a partir de la creación de la CUT, de la confederación única, en 1953. La CUT juega un papel más central en el gobierno de Unidad Popular que la COB en cualquier otro gobierno boliviano. Como ha demostrado F. Zapata, el sindicalismo actúa, frente a políticas hiperrevolucionarias, como un factor de estabilidad política.

En estos tres casos, uruguayo, boliviano y chileno, profundamente distintos unos de otros, es posible hablar de *movimiento obrero,* mucho más que en Brasil, en México o en la Argentina peronista. Ante todo, porque la acción sindical, incluso aunque esté asociada a la acción política, sigue siendo, tanto en su organización como en sus objetivos, independiente, tanto del gobierno como de un partido de oposición.

2. ¿Hacia la independencia sindical?

Estados autoritarios y autonomía sindical

La contrapartida de estos primeros análisis ¿no es que la ruptura del sistema político nacional-popular y el triunfo de dictaduras militares han debido provocar, frente a un control estatal represivo, la formación de un sindicalismo independiente, reforzado también por la desorganización de las fuerzas políticas de oposición? Pero esta hipótesis choca, ante todo, con una objeción evidente. En muchos países, la represión antisindical o el control de los sindicatos por el Estado son demasiado fuertes para permitir la constitución de una organización independiente. Ése fue el caso, en particular, del *Paraguay.* La *Confederación Paraguaya de*

Trabajadores, creada en 1951, fue puesta bajo control *(intervenida)* tras la huelga general de 1958 y siguió estando bajo vigilancia política directa hasta 1973, fecha en la que el nuevo partido demócrata-cristiano trató, sin éxito, de crear una central cristiana de los trabajadores. Durante los años de fuerte crecimiento del producto nacional debido a la construcción de la presa de Itaipú en la frontera de Brasil, el control oficial se suavizó y el AFL-CIO de los Estados Unidos organizó algunos sindicatos de orientación más reivindicativa. Pero esta apertura relativa, que culminó en 1981, terminó con el *boom* mismo, y la CPT fue de nuevo controlada de forma muy directa por el poder político, lo cual contribuyó a mantener en Paraguay una tasa de sindicalización particularmente baja (8 por 100).

La situación fue muy diferente en los países más industrializados. La evolución del sindicalismo *argentino* fue la más compleja. La caída de Perón en 1955 entrañó una autonomización relativa del sindicalismo en relación con el partido justicialista. Por oposición a Framini, que quería mantener una línea directamente peronista, en particular gracias a la alianza de los peronistas y de Frondizi en 1958, y a Alonso, que mantuvo a la CGT en la misma línea, Vandor dio al sindicalismo una orientación más autónoma y trató de hacer «cooptar», según el término empleado por Cavarozzi, al sindicalismo peronista en interés de una alianza nacionalista de las fuerzas de la sociedad industrial contra la dominación del sector rural exportador. Con esa intención, Vandor apoyó al régimen militar de Onganía y la política de Krieger Vasena, apoyándose en los azules contra los colorados en el ejército. G. Ducatenzeiler (cf. Bigl., III, 4, pág. 146) define perfectamente el *vandorismo* por «su capacidad de negociación y el control que ejerce sobre la clase obrera y sobre la crisis hegemónica de la oligarquía forzada a aceptar a la CGT como interlocutor legítimo». Pero esta definición muestra hasta qué punto responde el vandorismo a la lógica de una fuerza política y no a la de un movimiento social.

Por tanto, ha sido en la oposición a esa línea donde se ha tratado de ver la formación de un movimiento social. Esa ruptura se manifestó, ante todo, mediante el *cordobazo* de 1969 y por aquellos que lo repitieron en el transcurso de los años siguientes. Córdoba era una ciudad tradicionalmente dominada por la oligarquía, pero donde se instalaron grandes empresas modernas como Renault-Ika o Fiat, donde se creó un sindicato autónomo de mecánicos, la SMATA. En algunas empresas, sobre todo en Sitrac-Sitram, ese sindicato adoptó posiciones revolucionarias. Esos militantes obreros revolucionarios se aliaron con estudiantes sin perspectivas profesionales, lo cual dio nacimiento a una sublevación que, según F. Delich, fue una mezcla de huelga obrera y de movimiento urbano, movimiento lo bastante poderoso para provocar, en 1970, la caída de Onganía. Pero ¿hemos de llegar por ello a concluir que se formó un movimiento sindical independiente? El *cordobazo* provocó, desde luego, la creación de una nueva central sindical, la *CGT de los*

Argentinos, dirigida por R. Ongaro, pero esta nueva central estuvo tan dominada como la antigua por unos objetivos políticos que, en esta ocasión, eran los de un populismo revolucionario.

Poco antes del *cordobazo* habían estallado en *Brasil,* también sometido a una dictadura militar, las huelgas de Osasco, cerca de São Paulo, y de Contagem, en la aglomeración de Belo Horizonte. A partir de 1962, en Osasco se había formado una corriente sindical autónoma, el FNT, a la vez reformador y cristiano, en cuyo seno actuaba una minoría de revolucionarios. En 1968, en empresas modernas a cuyo alrededor vivía una población obrera aislada, se formaron reivindicaciones y se organizaron huelgas que fueron apoyadas por los estudiantes y dirigidas por militantes obreros revolucionarios, entre los que Ibrahim jugó el papel principal en la COBRASMA. Este movimiento obrero alcanzó una dimensión política con la gran manifestación que se organizó en la plaza de la catedral de São Paulo el 1.º de mayo de 1968. En Contagem, el desarrollo del movimiento fue análogo. También ahí fue decisiva la alianza de los obreros y los estudiantes, como ocurrió en São Paulo y en Córdoba. El papel de éstos culminó en Río, como en muchas ciudades del mundo, y en parte bajo la influencia del Mayo francés, en el curso del año 1968. Así, en unos regímenes autoritarios se forma una acción independiente allí donde grupos obreros revolucionarios en ruptura con un sindicalismo controlado por el gobierno arrastran a una clase obrera a la vez moderna y aislada, se acercan a los estudiantes y a un movimiento político de oposición a la dictadura.

Las huelgas de 1968 en Brasil representan a buen seguro un esfuerzo importante por crear un sindicalismo independiente, a la vez revolucionario y capaz de negociación; pero aunque la acción de Ibrahim y de otros líderes, a su vez militantes políticos de extrema izquierda organizados, tuvo una importancia considerable —dado que se trataba de la primera acción realizada a plena luz contra el gobierno militar—, hay que reconocer que ni en Brasil ni en Argentina se desarrollaron posteriormente organizaciones obreras autónomas. En Brasil, el ejemplo de Osasco no tuvo continuidad hasta el inicio de la apertura política, y la dictadura mantuvo su control sobre el mundo obrero mediante la represión y, a un tiempo, por los efectos de un crecimiento económico particularmente rápido.

Es por tanto hacia México hacia donde se han vuelto quienes creían ver el nacimiento de un movimiento obrero independiente. Este país no estaba sometido a una dictadura militar sino a un régimen a la vez parcialmente autoritario y relativamente abierto. Sobre todo, había una tradición de oposición que ya se había manifestado mediante la creación de una *Confederación Única de Trabajadores* en 1948. El primer gran movimiento de ruptura con el sindicalismo oficial fue la huelga de los ferroviarios de 1958, dirigida por Demetrio Vallejo —que será uno de los héroes del movimiento estudiantil de 1968—, pero este movimiento se

dividió rápidamente entre una tendencia muy radical y la del mismo Vallejo, más moderada. La represión fue dura: nueve mil trabajadores fueron despedidos. La huelga de electricistas de 1968 estuvo más elaborada, permitió la creación de un sindicato independiente y reveló, sobre todo, la crisis del sistema político. La importancia de estos sindicatos independientes vino de que, formados sobre todo en sectores modernos, trataban de introducir la acción sindical en la empresa, cuestionando la organización del trabajo y apelando a una intervención directa de los trabajadores, mientras que los dirigentes sindicales oficiales no intervenían más que en un nivel muy central. Sin embargo, no podemos concluir en la descomposición del sindicalismo oficial ni en el triunfo progresivo de un movimiento obrero independiente. De un lado, en efecto, si la organización oficial se debilita, es sobre todo porque grandes sindicatos nacionales, por ejemplo el del acero o el del petróleo, establecen directamente lazos con el poder político, mientras que el *Congreso del Trabajo* sirve sobre todo de canal de influencia a los pequeños sindicatos. De otro lado, las tendencias antioficialistas no son completamente identificables con un sindicalismo de clase. Ocurre que grupos radicales, como *Línea Proletaria* en la siderurgia, son también muy corporativistas, de suerte que a veces la CTM parece más capaz que los grupos radicales de integrar las demandas de diversas categorías profesionales en una presión general sobre el poder político. La fuerza misma de la central sindical oficial reduce a menudo los movimientos radicales a una acción infrapolítica y a una tentativa de negociación aislada con una empresa en situación económica favorable, como en la siderurgia. La única excepción a esta conclusión reservada es la de los electricistas, porque la «Tendencia democrática» que conquistó el sindicato, el SUTERM, tenía un verdadero proyecto político, que fue apoyado incluso por el presidente Echeverría al inicio del conflicto y que encarnó en un grupo político tras la expulsión de los renovadores fuera de la empresa. En resumidas cuentas, el PRI fue capaz de recuperar ese neocardenismo y su nacionalismo revolucionario. El análisis de los movimientos de los ferroviarios, de los electricistas y también de obreros de las empresas de automóviles o de empresas textiles como Ayotla, Cadena y Morelos muestra a un tiempo la fuerza del sistema oficial y la existencia de un impulso frecuente hacia una acción de clase. La subordinación del sindicato a la intervención estatal no suprime, ni en México, ni en Argentina, ni en Brasil la presencia de una conciencia de clase fuerte, pero ésta no se transforma en acción de clase independiente más que en unas condiciones excepcionales. En el caso mexicano, las elecciones que siguieron a la reforma electoral permitieron verificar que la huella del PRI seguía siendo mucho más fuerte en los medios populares que la influencia de los diversos partidos de izquierda, porque ese partido-Estado, como otros regímenes nacional-populares, ha logrado aliar una política económica favorable a los medios dirigentes con una

acción de control y de manipulación política de las categorías populares, lo cual deja poco espacio para la creación de un sindicalismo independiente.

En *Chile* creyeron percibir, en los inicios de los años ochenta, la formación de un sindicalismo independiente. Tras el golpe de Estado de 1973, el sindicalismo había perdido pocos afiliados pero casi toda su capacidad de acción y de negociación, debido a la vez a la represión política y al paro, que siguió siendo superior al 15 por 100, antes de aumentar dramáticamente en 1982. Algunos dirigentes sindicales negociaron con el gobierno; éste aceptó de buen grado esos contactos que le prestaban una imagen social favorable y los desarrolló incluso durante el período en que Sergio Fernández ocupó el Ministerio de Trabajo (1976-1977). Pero, a partir sobre todo de 1970, se formó un movimiento sindical de oposición con la creación de la *Coordinadora Nacional Sindical* en 1978, el grupo de los Diez en 1977 y el *Frente Unitario de Trabajadores* en 1978. El gobierno, que reforzaba el *boom* económico de esos años, respondió elaborando un *Plan Laboral* en 1979, que volvía a definir las condiciones de las negociaciones colectivas limitándolas al plano de la empresa, por pequeña que fuera, y determinando de forma muy estricta las condiciones de legalidad de las huelgas. El decreto-ley de agosto de 1981, elaborado por el ministro Katz, dio su forma más definida a esta política liberal. Pero es difícil evaluar sus efectos porque la crisis económica, la caída de los salarios reales y el aumento del paro privaron de toda significación al primer ciclo de negociaciones que se desarrollaron en 1980-1981. El tema de la negociación directa dio, sin embargo, al sindicalismo, en ese período de debilitamiento de los partidos de oposición, un papel importante e incluso dominante. La oposición ganó casi todas las elecciones sindicales, salvo en la siderurgia, la televisión, el *Banco del Estado* e incluso en el cobre, donde los sindicalistas favorables al régimen conservaron cierta importancia. A partir de 1983, el *Comando Nacional de los Trabajadores,* apoyado sobre todo por el sindicato del cobre y dirigido por su líder, R. Seguel, tomó la iniciativa de las *protestas.* A la vez que jugaba un papel político, Seguel afirmaba su voluntad de crear un movimiento sindical independiente de los partidos. Esta tentativa no tuvo resultados más duraderos que en los demás países. El sindicalismo se dividió rápidamente en unas líneas políticas: los elementos moderados de *Unión Democrática de Trabajadores,* formada en 1981 a partir del grupo de los Diez, se opusieron a la entrada en la *Coordinadora* de los sindicatos dirigidos por comunistas. Al mismo tiempo, la elevada tasa de paro disminuía la capacidad de iniciativa sindical. Hay por tanto que responder negativamente a la cuestión planteada: frente a las dictaduras militares, frente a la represión antisindical y, por tanto, frente a la desaparición de los regímenes nacional-populares, no hemos visto formarse un movimiento obrero independiente, que combata a la vez la dictadura

militar y la antigua subordinación del sindicalismo a los políticos y a los partidos o a los líderes nacional-populares. Si acontecimientos como los de Córdoba o los de Osasco y, más aún, como la creación del SUTERM indican vigorosos intentos por crear una acción apoyada directamente en la movilización de una base obrera, el actor sindical no juega más que un papel limitado en el proceso de transformación política o de destrucción de la dictadura, salvo en Bolivia, donde, como hemos visto, la COB era por sí misma una fuerza política capaz de oponerse a unas dictaduras.

Los sindicatos y la democratización

Si la lucha contra las dictaduras militares ha implicado, en resumidas cuentas, bien un debilitamiento de los sindicatos, bien la prioridad dada por éstos a la lucha política, ¿qué ocurre en el momento en que la mayoría de los países vuelven a un régimen democrático, en que los sindicatos tienen, por consiguiente, capacidad de intervenir, de forma autónoma o no, en el campo de las decisiones políticas? La respuesta a esta pregunta es difícil porque en muchos casos el cambio de coyuntura política coincide con el retorno de la situación económica y el inicio de la crisis financiera de una extrema gravedad que domina los años ochenta. Pero, en ciertas situaciones al menos, podemos hablar de la maduración de un movimiento obrero, a la vez que reconocemos los límites de la autonomía sindical y el mantenimiento de una estrecha relación entre una acción propiamente política y unas luchas que merecen ser reconocidas como un movimiento social.

Es sobre todo en *Brasil* donde se forma un movimiento obrero. A partir de la huelga de los obreros metalúrgicos de São Bernardo, en la región metropolitana de São Paulo, huelga que fue dirigida por Luis Inácio da Silva, *Lula,* se forma un nuevo sindicalismo. Una serie de huelgas —las de los metalúrgicos de São Paulo en 1979, de São Bernardo en 1980, de los empleados de banca en 1985 y también la huelga general del 21 de julio de 1983— marcan las etapas de la formación de un verdadero movimiento sindical. Mientras que el sindicalismo *pelego* no era más que una organización de dirigentes, que negociaban con el Ministerio de Trabajo, vemos formarse comisiones de empresa a partir de diversos tipos de comités de base. Comités de huelga, formados en 1977-1978 y cuyas empresas habían logrado, a menudo, recuperar el control en el transcurso de los años siguientes, vuelven a encontrar ahora su independencia frente al sindicalismo oficial. De forma paralela, los comités de cogestión, organizados en algunas de las grandes empresas siguiendo el modelo alemán, se transforman en comisiones de empresa. En São Bernardo, todas las grandes empresas tienen unas comisiones como ésas, que combaten el sindicalismo oficial y logran a veces coordinar su acción. Tienen que luchar contra la hostilidad de las empresas, en ciertos casos, pero en otros encuentran con bastante facilidad interlocutores abiertos.

Así se forma un sindicalismo de base, capaz de organizar fuertes movilizaciones, al mismo tiempo que de negociar con las empresas o entrar en luchas de alcance general. Este sindicalismo penetra en las empresas públicas, chocando a veces con una fuerte resistencia del Estado, como en Correos, pero obteniendo a veces una representación sindical en el consejo de administración, según el modelo alemán, como en la banca del Estado de São Paulo, la BANESPA. Algunos, sobre todo entre los jefes de empresa, habían creído ver en el inicio de este movimiento el nacimiento de un *business unionism* de tipo norteamericano o de un sindicalismo a la alemana. Ciertos sociólogos llegaron a pensar incluso que esas huelgas indicaban la voluntad de una aristocracia obrera de utilizar su posición dominante en el mercado de trabajo para conquistar ventajas específicas. ¿Cómo no ver que ese movimiento, que se ha desarrollado sobre todo en empresas modernas y en primer lugar en la industria del automóvil, reproduce las condiciones generales de formación de una acción de clase que he analizado, a partir de datos franceses, en *La conscience ouvrière* (La conciencia obrera, 1966), y en fecha más reciente, con F. Dubet y M. Wieviorka, en *Le mouvement ouvrier* (El movimiento obrero, 1984). En este análisis del sindicalismo latinoamericano, hay que partir por primera vez no de una coyuntura política o incluso económica, sino de la experiencia del trabajo. Obreros cualificados defienden su autonomía profesional contra la organización del trabajo y se vinculan a obreros semicualificados o no cualificados, más sensibles a las reeivindicaciones económicas. El movimiento de los obreros paulistas se parece, en su experiencia de base, a la formación del CIO en los Estados Unidos en 1934-1937, o a las grandes huelgas de junio de 1936 que siguieron a la victoria del Frente Popular en Francia. Estos ejemplos recuerdan que un movimiento obrero se funda sobre una defensa del trabajo, como un movimiento campesino sobre la defensa de la tierra, pero proyecta sus reivindicaciones y sus demandas sobre el conjunto de la vida política del país. Lo nuevo en la región de São Paulo es que la lucha por el trabajo, en la empresa, movilizando al conjunto de los trabajadores, conduciendo a enfrentamientos y a negociaciones directas, lo que se convierte en la fuerza fundamental de un movimiento que, aliado o no a fuerzas políticas, adquiere rápidamente una importancia nacional. Las luchas obreras de la región paulista forman, por tanto, un movimiento de clase. Este movimiento obrero no es en sí mismo ni populista ni siquiera democratizante; es, a buen seguro, antiautoritario pero debe ser definido ante todo en sí mismo, es decir, como la creación de una mayor capacidad de acción colectiva de los trabajadores.

Sin embargo, esta primera conclusión debe ser completada por el reconocimiento de las opciones políticas que dirigen la evolución del sindicalismo. F. Weffort ha insistido en el papel de los trabajadores en la formación de una política democrática, mientras que L. M. Rodrigues

daba prioridad a la formación de un bloque democrático nacional, pero tanto uno como otro han mostrado el predominio de los objetivos políticos en la acción sindical. Es tan grande esa acción que entraña escisiones. A la tendencia *Unidade Sindical,* que se expresa en la CONCLAT y luego en la CGT, se opone el *Novo Sindicalismo* más radical de la CUT. Durante la campaña para las elecciones a la alcaldía de São Paulo en 1985, la CUT apoya al candidato del PT, mientras que la CGT es favorable al del PMDB. La CUT insiste más en la movilización de clase, lucha por la supresión del impuesto sindical, da una importancia central a las comisiones de empresa, se define como un agente de concienciación de los trabajadores y tiene una visión de clase de un gobierno que le parece vinculado al mundo de los jefes de empresa. La CGT, dirigida por Joaquim dos Santos Andrade, *Joaquinzão,* está más cerca de la actitud que había sido a la vez la de los líderes *pelegos* del partido comunista y del sindicalismo con posterioridad a 1945; insiste en el papel de los dirigentes sindicales y de las negociaciones con las empresas. Esta división de la acción sindical se ve agravada a su vez por la extrema heterogeneidad de la clase obrera. Una parte importante de los trabajadores pertenece ya a una sociedad industrial, pero a su lado sigue existiendo una zona marginal, dominada por el paro y el subempleo, más todavía que por malas condiciones de alojamiento. Es en esa amplia franja donde se forman grupos de base que dan más importancia a una defensa global de la comunidad que a luchas por intereses propiamente económicos. La oposición entre un sindicalismo de negociación y un sindicalismo de lucha de clases es en parte artificial, pero abarca una oposición más real entre categorías dominadas por su incorporación al sistema político y económico y otras marcadas sobre todo por su exclusión o su marginalidad. De suerte que vemos reaparecer cierta primacía de la situación política o social. La CGT actúa en el marco de un proyecto político a la vez democratizante y modernizador, proyecto que no dirige porque está influido con más fuerza por los jefes de empresa y las clases medias modernas; por su lado, la CUT expresa una oposición a la vez popular y obrera, apoyada, desde luego, en su núcleo original de la gran industria moderna pero que también se expresa por el PT y las comunidades eclesiales de base. Lo nuevo en este caso es que la conciencia de clase se vuelve capaz, a partir de entonces, de aparecer como el tronco común que une esa conciencia popular y comunitaria y esa conciencia reivindicativa y participacionista. Según las circunstancias, los elementos de unidad o los factores de división del movimiento obrero pueden prevalecer, pero hay que concluir en el mantenimiento de la doble naturaleza de las luchas obreras, luchas de clase aunque estén profundamente marcadas por los efectos de una situación política. No obstante, ¿cómo no llegar a la conclusión, en el caso brasileño, de que lo más importante es el progreso decisivo que, a finales de los años setenta, se opera en el ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano),

principal zona industrial de la metrópoli paulista: la formación de un movimiento obrero propiamente dicho, es decir, centrado en la voluntad de los trabajadores de controlar sus condiciones de trabajo, de defender su identidad de trabajadores y de ampliar sus luchas al conjunto de los aspectos de la vida económica, social y política? Ir más lejos, imaginar un puro movimiento de clase, independiente de la coyuntura económica y política, sería caer en el error denunciado al comenzar, porque no hay movimiento social que se constituya independientemente de una coyuntura histórica; pero nos hemos acostumbrado bastante a reconocer que las orientaciones de los actores políticos y del Estado se imponían a unos actores sociales reducidos a un papel secundario y heterónomo para subrayar aquí con fuerza la emergencia de un *movimiento obrero,* aspecto decisivo de la maduración de la sociedad industrial en Brasil.

La situación *argentina* es profundamente diferente. La CGT había sido el elemento principal del movimiento justicialista y sus dirigentes habían entrado profundamente en el juego político. Es contra esa subordinación a la acción política contra lo que se forman movimientos de renovación que, ante todo, quieren volver a dar al sindicalismo su autonomía. A partir de 1982, los ferroviarios, los trabajadores del Estado y de la Empresa Nacional de Comunicación, luchando por la recuperación de su nivel de vida, crean movimientos de base y, por lo menos en el caso de los trabajadores del Estado, eliminan a los antiguos dirigentes. En la Asociación Bancaria de la capital vence la lista de oposición a la antigua dirección sindical. El principal dirigente de esa tendencia renovadora, Alberto Piccinini, aunque procede de la izquierda socialista, es, ante todo, un *movimientista.* Comienza la lucha entre estos renovadores y los dirigentes tradicionales, Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias: lucha a la vez política y sindical, porque los renovadores apoyan la democratización mientras que los caudillos sindicales habían apoyado al régimen militar. La evolución del sindicalismo en Argentina es más limitada que en Brasil, de la misma manera que el grupo de empresarios industriales es mucho más débil en Argentina que en Brasil y, sobre todo, que en São Paulo. Cuando la CGT se reorganiza, el 17 de noviembre de 1986, la lucha interna entre los herederos de los 62, los renovadores y el grupo de Saúl Ubaldini, nuevo secretario general, sigue existiendo en el seno del justicialismo y es más política que sindical. Ese congreso no marca ningún progreso en la gestión sindical; todo se reduce a negociaciones en la cumbre, cuyos resultados el pueblo sindical espera pasivamente.

En Uruguay, la CNT reconstituida sigue ejerciendo una influencia sobre el sistema político por mediación del partido comunista. Es en *Bolivia* donde el conflicto entre el gobierno y la confederación sindical adopta su forma más extrema. Ese conflicto llevó, en 1985, a Siles Suazo a proceder a unas elecciones parlamentarias anticipadas, en una situación de extrema descomposición económica y política cuando el contrabando,

el tráfico de drogas y la hiperinflación hacían el país ingobernable. V. Paz Estenssoro, que volvió al poder con el apoyo en el Parlamento del antiguo dictador Banzer, impuso un plan de recuperación económica que provocó una verdadera sublevación sindical a la que el gobierno respondió mediante una fuerte represión. El enfrentamiento entre el gobierno y los mineros, cuando el sindicato dirigía la empresa minera, la COMIBOL, alcanzó la violencia de una *vendetta.* La caída de los precios mundiales del estaño, tanto como la voluntad de acabar con el doble poder *(poder dual)* sindical condujeron al gobierno a decidir la liquidación de la COMIBOL en 1986. Contra estas amenazas, los mineros lanzaron marchas de protesta sobre la capital, pero muchos, reducidos al paro y a la miseria, abandonaron el país. Los mineros no fueron capaces de desencadenar el apoyo masivo y duradero de otras categorías de asalariados, en una situación de extrema descomposición económica. En Bolivia el sindicalismo se aleja, como en muchas otras partes, de las tesis del socialismo revolucionario, pero no se sitúa, como ocurrió en Brasil y en una parte del sindicalismo argentino, en el seno de un proceso prioritario de democratización. Privado de este modo de todo objetivo general, ya no tiene como meta otra cosa que su propio poder, lo cual le lleva, de forma ineluctable, hacia tentativas de golpe de Estado sindical.

Éste es también el punto en el que desemboca el sindicalismo *ecuatoriano.* Dividido durante mucho tiempo entre la CTE, controlada por el partido comunista, el CEDOC, cristiano, pero que se radicaliza a partir de 1975, y el CEOSL, muy influido por el sindicalismo norteamericano, este sindicalismo se une en el *Frente Unido de los Trabajadores* (FUT), que organiza una serie de huelgas generales contra el gobierno democrático de Roldós y, a su muerte, de Hurtado. Estas huelgas que desencadena el FUT no se explican sólo por razones económicas —alza de precios del azúcar y de los transportes—. En octubre de 1982, el dirigente del FUT exige del presidente de la Cámara de Diputados que «respete sus compromisos con el pueblo», es decir, de hecho, que se asocie a un golpe de Estado. Como escribe L. Verdesoto: «A medida que empieza la penetración del Estado en la vida social, la idea de socialismo se debilita (...), pero no es reemplazada por la de democracia. Es tal vez el "poder sindical", la idea que cruza el movimiento, incluso sin ser formulada, y que entraña el crecimiento y la expresión de las reivindicaciones de otros sectores» (cf. Bibl., III, 1). Pero esta orientación «golpista», es decir, favorable al golpe de Estado, ¿no expresa el debilitamiento de la capacidad movilizadora de los sindicatos en un período de crisis económica? Porque cuanto más débil o difícil es la industrialización, más conocen un debilitamiento del sindicalismo los países latinoamericanos.

Es cierto, sobre todo, referido al *Perú,* donde al fuerte aumento de las luchas sindicales que siguen al retorno al poder de Belaúnde en 1980 le sucede una caída, a partir de 1983, de la capacidad de acción sindical. Lo

cual se explica en gran parte por el aumento masivo del paro y del subempleo, que alcanzan a más de la mitad de la población activa urbana; pero J. Parodi interpreta este retroceso, sobre todo, como el fracaso de una concepción de la acción sindical enteramente vuelta hacia la presión violenta sobre el gobierno y que desconfía tanto de la negociación con las empresas como de las vías legales de acción. Lo que se denomina sindicalismo de clase es, de hecho, la subordinación del movimiento obrero a un proyecto propiamente político. La crisis económica no hace sino revelar la debilidad del sindicalismo, incapaz, por ejemplo, de resistir el despido de cinco mil militantes en 1977. Los sectores más fuertes —empleados de banca o mineros— obtienen ciertas ventajas, pero la mayoría de las ramas sufre derrotas. La antigua alianza del sindicalismo y del APRA se ve sustituida por el papel predominante del partido comunista en el sindicalismo y por el aislamiento político de éste. En Perú, lo mismo que en Bolivia y en Ecuador, entra en declive un sindicalismo estrechamente asociado a una fuerza política y sobre todo un sindicalismo que sitúa su acción en la esfera del Estado antes que en el campo de la producción. La renovación, perceptible después de 1985, es todavía frágil.

3. La doble función del sindicalismo

Los modelos «clásicos» de acción sindical definen ésta por su papel en una sociedad industrial capitalista. El sindicalismo parece tanto más importante cuanto que es más capaz de movilizar una clase social, definida por su posición en la producción, bien por conflictos cara a cara con los dueños de la empresa y de la economía, bien por un programa político de acción revolucionaria, bien, todavía, por negociaciones colectivas que pueden llegar, incluso, a un pacto social. Estas tres formas de acción sindical tienen en común afirmar el papel de los asalariados como uno de los actores principales de la formación de las políticas económicas y sociales a través de sus conflictos directos con los jefes de empresa y por su acción sobre el Estado. Semejante definición «estructural» de los conflictos del trabajo se vuelve insuficiente cuando nos alejamos del centro de la sociedad industrial. Lo es ampliamente en los países latinoeuropeos; lo es más todavía en los países latinoamericanos, donde, ante los conflictos del trabajo y de la sociedad industrial, pasan a primer plano los problemas del desarrollo económico y social nacional. Los sindicatos se definen más por relación al Estado que por relación a la patronal y su acción está casi siempre subordinada a unos partidos políticos que no controlan. Al mismo tiempo, su acción queda debilitada por el peso de quienes no participan en la economía «formal» urbana, los excluidos, subempleados o parados. El sindicalismo tiene una doble

función con más nitidez que en Europa: actor de la sociedad industrial, es también un actor del desarrollo nacional. ¿Hay que concluir que, a lo largo de la evolución trazada, el papel de los conflictos estructurales de la economía industrial aumenta en detrimento del papel de las luchas por el desarrollo nacional? Sí, a condición de que no lleguemos a decir que la América Latina entra en la sociedad industrial liberándose poco a poco de los problemas vinculados a la industrialización. Tampoco sería exacto decir que el sindicalismo permanece subordinado constantemente a la acción política. Asistimos más bien al desarrollo conjunto, cargado de tensiones, de dos funciones del sindicalismo, lo cual entraña en muchos casos una tendencia a la escisión de las organizaciones sindicales, escisión realizada en Brasil, en Argentina y en Chile y que ha sido constante en Colombia e incluso en Perú.

De este modo se constituye una forma de acción sociopolítica característica de las sociedades latinoamericanas. Movimiento obrero pero también popular, que lleva a cabo una acción reivindicativa y también comunitaria, en la que la conciencia de clase se mezcla a una defensa ética, religiosa, de los pobres, y a un rechazo global de un orden social que se considera está al servicio de los intereses de los ricos y del extranjero. Estas dos tendencias pueden unirse de forma casi revolucionaria, como en Bolivia y en Ecuador, de manera más reivindicativa en el PR brasileño. Pero casi en todas partes, en lugar de observar el ascenso de los partidos obreros, de inspiración socialdemócrata o comunista, vemos que se refuerza la complementariedad de grandes partidos multiclasistas, que controlan un sector más o menos importante del sindicalismo, y de movimientos populares, a la vez comunitarios y sindicales, que pueden limitarse a defender intereses categoriales, pero que la mayoría de las veces desarrollan la imagen de una contra-sociedad y de una contra-cultura. Ése es el caso de Brasil, el país industrial más importante del continente, donde el sindicalismo está dividido entre la integración en el PMDB y la asociación con el PT. Sólo podemos prever cierto debilitamiento de las formas mixtas de acción sindical y de defensa comunitaria que han conocido su mayor desarrollo en ausencia de instituciones representativas.

En conclusión: si no podemos decir que el sindicalismo, en principio actor político dependiente, se ha vuelto un movimiento obrero, un actor social independiente, al menos podemos afirmar que, tras un largo período dominado por los problemas del desarrollo de la modernización y de la dependencia, el sindicalismo ha entrado en una nueva etapa, dominada a la vez por los problemas económicos internacionales y por los que son propios de una sociedad industrial. De este modo vemos constituirse, de manera limitada pero visible, un movimiento obrero sin que por ello desaparezca la participación dependiente del sindicalismo de políticas de desarrollo que se apoyan en una base multiclasista y que tienen objetivos nacionales más que objetivos de clase.

4. Las formas de acción sindical

Reivindicaciones y negociaciones

Ahora tenemos que transformar estas observaciones sobre la evolución histórica del sindicalismo en elementos de análisis concreto de la acción sindical, de su capacidad de organización y de movilización de los trabajadores y también de su papel como negociador y como agente político.

La dependencia y la heteronomía de la acción sindical parecen anunciar la debilidad de los efectivos sindicales; la realidad es muy diferente. El sindicalismo latinoamericano tiene amplias bases y sus efectivos se han incrementado rápidamente desde la segunda guerra mundial. Al principio de los años ochenta, 21 millones de los 60 de asalariados sindicalizables están efectivamente sindicalizados; 13 millones de ellos estaban vinculados, en el plano internacional, a la ORIT, de influencia norteamericana; 2 millones a la CPUSTAL y, a través de ella, a la FSM, de orientación comunista; 1 millón al CLAT y, por tanto, a la CMT, de orientación cristiana, mientras que 5 millones no estaban afiliados a ninguna confederación internacional. Esta tasa de sindicalización, ya muy elevada, lo es más todavía si consideramos el gran número de asalariados que trabajan en pequeñas empresas. En Perú, I. Yepes y J. Bermedo han mostrado que, de la población activa que se eleva a 6 millones, 2 millones son asalariados pero sólo 1,3 millones de ellos son sindicalizables, es decir, que trabajan en empresas de más de veinte asalariados. De ese número, 860.000 sindicalizables, es decir, los dos tercios, están sindicalizados. D. Sulmont ha reconstruido la historia de ese aumento del sindicalismo peruano. Aunque sólo la mitad tenga acceso a la negociación colectiva, esa proporción de sindicalizados es mucho más fuerte que la que se observa en los Estados Unidos, en Francia o en España. La progresión del sindicalismo ha sido a veces extremadamente rápida. En Argentina, los sindicados, apenas más de 500.000 en 1945, son 1.500.000 en 1947 y 3 millones en 1951, lo cual muestra la fuerza del encuadramiento peronista. En Brasil, los 180.000 sindicados de 1930 se han convertido en 1 millón en 1958 y casi en 2 millones en 1969.

Pero esta fuerza numérica no siempre indica una gran capacidad de movilización. A menudo, el sindicato actúa, sobre todo, como distribuidor de servicios sociales. Este *assistencialismo* está muy marcado en Brasil, donde el sindicato es más un agente de aplicación de las leyes del trabajo que un actor de las reivindicaciones y de las negociaciones. No obstante, esta imagen, ampliamente difundida por los estudios sobre ese país, está lejos de corresponder al conjunto del continente. De la misma forma que los efectivos sindicales son más importantes de lo que se esperaba, la capacidad de acción sindical en el plano de la empresa sorprende también por su amplitud. Incluso en el plano nacional, los

países de América Latina han conocido grandes huelgas, como las de 1953 en São Paulo, las de 1977-1978 en el ABC paulista (Santo André, São Bernardo, São Caetano), el plan de lucha de la CGT argentina en 1963, las huelgas chilenas de 1967, etc. México es una excepción, porque el control político muy estricto que se ejerce sobre los sindicatos los debilita mucho.

Pero numerosos estudios insisten en la separación entre dos niveles de acción sindical: el de la empresa y de la ciudad, donde la participación es fuerte, y el de las federaciones y sobre todo de las confederaciones, donde la acción sindical está fuertemente subordinada a la acción política, lo cual debilita la movilización propiamente sindical. En el Chile anterior a la dictadura, una encuesta que dirigí, y cuyos resultados fueron publicados en parte por V. Nazar, mostraba la nitidez de la separación de esos dos niveles en una CUT cuyos dirigentes no eran elegidos en esa época por los sindicatos de base, sino cooptados en función de un reparto de los puestos de dirección entre los partidos políticos. En el lugar de trabajo, los trabajadores se movilizaban para apoyar sus reivindicaciones *(pliego de peticiones)* anuales. Para obtener la renovación de un convenio colectivo, desencadenaban huelgas y ponían en práctica acciones tanto más vivas cuanto más elevada era la inflación y cuanto más riesgos corría, por tanto, el salario real. Esta acción reivindicativa se apoya a veces en la movilización de una ciudad o de un barrio: eso fue lo que ocurrió en Osasco, Brasil, y en Córdoba, Argentina. En este mismo país, la huelga de los obreros del azúcar de Tucumán había movilizado la ciudad e incluso la provincia. Pero es difícil organizar acciones más generales. Esa separación de dos niveles de acción se ha visto reforzada a veces por los propios gobiernos. En Chile, el *Plan Laboral* de la dictadura prohíbe las negociaciones en un nivel superior al de la empresa. La participación en las reivindicaciones se apoya, en la empresa, en el espíritu de comunidad. En ésta existe una solidaridad primaria, que entraña una relación muy directa entre los obreros y sus dirigentes sindicales. La fuerza de la comunidad de empresa tiene como contrapartida la debilidad de las huelgas de solidaridad. No hay paso de una huelga local a una acción nacional por extensión progresiva del movimiento original. Las huelgas nacionales responden a una crisis política más que a una generalización de reivindicaciones locales. Por eso el mundo obrero actúa raramente como clase obrera, y la mayoría de las veces lo hace como una serie de grupos o de comunidades obreras, al mismo tiempo que como una fuerza de presión orientada y utilizada por líderes y partidos políticos.

La reivindicación más importante se refiere a la estabilidad del empleo. Y se explica por el papel predominante de los gobiernos. Mientras que el nivel de los salarios depende, sobre todo, de la empresa, la estabilidad del empleo depende de las leyes. En Brasil, la primera ley de protección del empleo data de 1923: en 1930 se extendió al servicio

público, luego a los mineros, a los marinos y a los empleados de comercio y de banca. En muchos países, la estabilidad del empleo va acompañada del pago de una indemnización por despido o de final del trabajo, el *desahucio,* que a menudo se eleva a un mes de salario por cada año de antigüedad. Leyes muy favorables a los asalariados, cuyo estatuto está fuertemente garantizado, pero que también tiene efectos perversos, en particular en Brasil donde tradicionalmente la mayoría de los asalariados eran despedidos antes de haber alcanzado la antigüedad que les otorgaba, legalmente, derecho a una indemnización. De este modo el Estado interviene para garantizar los derechos de los trabajadores en la empresa, mucho menos para constituir un Estado-providencia. La protección de los asalariados frente al paro, a los accidentes, a la vejez, es extremadamente débil, salvo en Cuba y, en cierta medida, en Chile y en Uruguay. Es particularmente débil en México y en Brasil. La importancia de los discursos nacional-populares y de su apelación al apoyo de los trabajadores no ha entrañado la construcción de una política de protección social de los asalariados. Por el contrario, éstos viven en una extrema inseguridad que sólo queda compensada de manera parcial por medidas tomadas en la empresa.

Las políticas neoliberales se han visto forzadas incluso a reducir las medidas de protección del empleo. En Brasil, en 1968, Roberto Campos sustituye el derecho a la seguridad del empleo tras diez años de trabajo por el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS), alimentado por una contribución del 8 por 100 de los salarios pagado por las empresas. Lo cual propinaba un ataque directo a la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) del período getulista. Y a la inversa, en Perú, el nuevo gobierno reforzó en 1985 la Ley de Estabilidad del Trabajo, con el doble apoyo del APRA y de la Izquierda Unida.

La intervención directa del Estado en la gestión social de las empresas entraña una consecuencia análoga a la que se observa en los países de tipo socialdemócrata, como Suecia o Inglaterra, a saber: la formación de un contra-movimiento sindical que se esfuerza bien en desbordar las medidas acordadas por el Estado, bien en oponerse al control del sindicato por el poder político. Como hemos visto, en Brasil existe, entre 1945 y 1964, una tendencia casi permanente a la formación de un sindicalismo paralelo. O. Quamina ha descrito la situación de la compañía Demerata de bauxita, empresa nacionalizada, que representa el 40 por 100 de las exportaciones de la *Guayana.* El sindicato de esta empresa tiene un gran peso político pero se ha burocratizado y representa mal las reivindicaciones obreras. Los obreros, que reciben los mejores salarios del país, organizaron primero un movimiento nacionalista sobre una base étnica, luego formaron un sindicato disidente y, finalmente, apoyaron a los partidos de oposición. Desencadenaron una huelga salvaje que implicó una fuerte caída de la productividad. En el Chile del segundo período de la Unidad Popular, en 1972-1973, el movimiento de los

cordones industriales no sólo tuvo una significación política; también fue un conjunto de huelgas salvajes. Éstas son la respuesta de los obreros o de los empleados, en el plano de su empresa, a una extrema dependencia respecto del poder político y cuando la relación de fuerzas o la situación económica entrañan consecuencias negativas para los trabajadores.

El pacto social

La subordinación, tan frecuente, de las reivindicaciones a la acción política, impide sin embargo a los sindicatos encerrarse en la defensa de intereses sectoriales, incluso aunque tengan una orientación defensiva o corporativista. Están demasiado asociados a las luchas por el poder para no hablar también en nombre de los intereses generales de la economía. De ahí el constante éxito del tema del pacto social, lanzado, por ejemplo, en Argentina, durante el segundo régimen peronista en 1973.

La crisis económica y la caída de la mayor parte de las dictaduras militares a principios de los años ochenta ha acelerado la transformación de la acción sindical en el plano nacional. Frente a la crisis, los sindicatos aceptan participar en negociaciones. Es lo que ocurre en Perú o en Brasil y, sobre todo, en Venezuela, donde la CTV apoya la política de control de precios y salarios, que fracasa ante la oposición patronal. De igual manera, en Chile los sindicatos vinculados a la Alianza Democrática elaboran en 1983-1984 proyectos de pacto social. Tipo de acción en la que *Uruguay,* una vez más, se había adelantado con gran diferencia a los demás países, puesto que fue en 1944 cuando se crearon en ese país los primeros «consejos de salarios». En cada rama de la industria o del comercio, esos consejos reunían a tres representantes del poder ejecutivo, a dos de los patronos y a dos de los asalariados. Conservaron una gran influencia durante los años cincuenta y sólo la perdieron cuando la crisis estructural de la economía redujo, a partir del principio de los años sesenta, la capacidad de negociación de las empresas.

Este tema del pacto social aparece, así pues, como característica del nuevo sindicalismo. Indica, a un tiempo, la voluntad de las empresas y de los sindicatos de negociar directamente entre sí y la voluntad del Estado de intervenir, no ya como instrumento de integración sociopolítica y, por tanto, de control de los actores socioeconómicos mismos, sino como representante de los intereses fundamentales de la economía, que sólo pueden ser defendidos en caso de que los principales actores sociales acepten negociar en el marco de una política de recuperación de la producción y de control de la inflación. No obstante, esta visión optimista no resulta convincente. Un pacto social supone una integración social y política de la que todos los países de América Latina están todavía muy alejados, y un control de la vida económica que, en líneas generales, se les escapa. ¿Puede hablarse de pacto social y de negociación cuando la inflación se ha desencadenado y cuando todos los grupos sociales están

lanzados a una carrera acelerada para salvar su nivel de vida? ¿Qué pacto social puede proteger a la tercera parte o a la mitad de la población activa que se ve rechazada al sector informal? ¿Puede conservarse un pacto que acepta una desigualdad de rentas que continúa aumentando en muchos países? Lo que los suecos han hecho desde el acuerdo de Saltsjöbaden en 1938 y lo que la comisión Bullock recomendaba hacer a los ingleses, tras la firma del pacto social de 1977, está muy lejos de una sociedad latinoamericana donde los beneficios son rápidos, donde los salarios representan poco en la formación de los precios, donde la fuga de capitales equivale a una parte importante de la deuda exterior de muchos países.

El tema del pacto social no se corresponde con la práctica. Su importancia es muy distinta y casi inversa: subrayar la necesidad, frente a la crisis, de abandonar una política de redistribución estatal y de presiones sociales en una economía dominada durante mucho tiempo por la abundancia de los recursos externos y la amplitud de los beneficios y que bruscamente se encuentra al pie del muro, es decir, obligada a no contar más que con sus propias fuerzas. Necesidad tan urgente y tan evidente en los años ochenta que no puede hallar respuesta en el modelo de desarrollo dependiente del que forma parte el sindicalismo tradicional. Por tanto, será estudiando la crisis financiera y económica que puso fin a ese modelo y a sus consecuencias sociales y, sobre todo, políticas, como encontraremos de manera más realista, aunque también cuán frágil, la idea de un pacto social.

La orientación política

Si consideramos las prácticas sindicales de 1930 a 1980, ¿no debe haber una concepción completamente opuesta del sindicalismo, más sensible a una subordinación, en el plano nacional, de la acción sindical a una acción política que va mucho más allá de la manipulación al servicio de algunos dirigentes, y que se apoyaría en el *autoritarismo obrero,* analizado, siguiendo a S. M. Lipset, por tantos sociólogos? ¿No sería el obstáculo más poderoso para la formación de una acción de clase la orientación antidemocrática de los trabajadores mismos? Lipset ha afirmado que la orientación democrática siempre estaba vinculada a un nivel elevado de participación y de institucionalización de las demandas. Los obreros que, por razones profesionales, económicas y políticas, tienen un nivel bajo de participación, tenderían de forma natural a obrar de forma heterónoma y a apoyar a unos líderes autoritarios, sobre todo cuando éstos prometen romper las barreras edificadas por la oligarquía y las clases medias superiores. El ejemplo clásico que se evoca en apoyo de esta tesis es el del peronismo. El pensamiento de G. Germani, el primer gran representante de la sociología moderna en América Latina, se ha organizado en torno a esta observación: una democracia limitada fue

desbordada por la fuerte movilización del millón de nuevos trabajadores llegados al gran Buenos Aires entre 1935 y 1945. Estos recién venidos apoyaron una política autoritaria que les prometía un nivel más elevado de participación económica y política. Muchos estudios influidos por Germani pusieron en relación a los emigrantes con el autoritarismo, explicando en particular el apoyo dado por los barrios más pobres de las grandes ciudades, aquellos en que se amontonan los inmigrantes, a Pérez Jiménez en Venezuela, a Leguía y a Odría en Perú o a Rojas Pinilla en Colombia. De manera más directa, los estudios de Briones y de J. Mejía en Perú y de V. Nazar en Chile (cf. Bibl., III, 4) han mostrado que si los obreros más incorporados a la vida urbana votan la mayoría de las veces a la izquierda o a los independientes antes que a la derecha, una proporción importante de obreros prefiere un sistema político con un solo partido y no con varios. En Perú, el 43,2 por 100 de los obreros prefieren que no haya más que un partido, contra un 38,7 por 100 que prefiere que haya varios. En Chile, el 49 por 100 de los obreros cualificados, el 50 por 100 de los semicualificados y el 56 por 100 de los no cualificados prefieren que no exista más que un partido, frente al 45 por 100, al 44 por 100 y al 36 por 100 que prefieren el pluralismo (el 5,6 por 100 y el 6 por 100 prefieren que no exista ningún partido). En Perú, las respuestas en favor del partido único son más numerosas incluso entre los obreros que votan a la izquierda. En Chile, la mayoría de los consultados, de origen urbano tanto como rural, piensan que todos los políticos son ladrones. Una mayoría más fuerte todavía, el 63 por 100, piensa que el gobierno debería prohibir ciertos partidos políticos; la mitad de ellos aboga por que esa prohibición se aplique a los partidos socialista y comunista. Estos datos fueron recogidos en los años sesenta y su paralelismo es impresionante, cuando Chile tenía un régimen democrático y Perú vivía una crisis profunda que debía conducir a la llegada al poder de una junta militar.

Pero esos resultados ¿demuestran la tesis del autoritarismo de la clase obrera? En realidad muestran, como otros estudios, la debilidad general del tema de la *democracia* en el modelo sociopolítico latinoamericano. Entre los obreros, se observa una fuerte demanda en favor de un partido obrero, e incluso de un partido que ejerza una hegemonía política. Este apoyo dado a un partido, único o cuasiúnico, apoyado por los obreros, puede estar vinculado a una actitud democrática o antidemocrática según la naturaleza del sistema político. Los obreros tienen una meta constante: mantener un alto nivel de influencia política. Si el sistema político es relativamente abierto, ese objetivo incrementa su participación en el sistema político; si el sistema político es cerrado, apoyan de buen grado a unos líderes que prometen romper las barreras que se oponen a la influencia de los asalariados urbanos. Por tanto, hay que concluir que el mundo obrero en América Latina trata de utilizar el sistema político más de lo que se siente responsable de la democracia. Mientras que en Europa el vínculo de los sindicatos con los partidos de izquierda es constante,

tanto en el modelo socialdemócrata como en el modelo leninista, en América Latina la relación del sindicato y de un partido aparece como una condición de formación de un movimiento obrero. Es que los partidos no tienen función representativa y se definen más por su acceso al poder de Estado que por sus vínculos con unos intereses sociales. La vida política está dominada por la participación, no por la representación. La sumisión a un partido significa, por tanto, para un sindicato, la subordinación a un tipo de intervención estatal y no la capacidad de elaborar un proyecto de sociedad. Por eso, la autonomización de la acción sindical va acompañada, a menudo, de reacciones hostiles contra los partidos.

La distancia entre la clase política y los trabajadores pasa a través del sindicato mismo, cuyos dirigentes pertenecen más al mundo político que al mundo del trabajo. Más que representantes o delegados de los asalariados son, con mucha frecuencia, *caudillos,* sobre todo cuando el sindicato está incorporado al aparato de Estado, pero también cuando apelan a la lucha de clases. *Caudillos* paternalistas y autoritarios, como los describen los obreros peruanos a los que ha escuchado J. Parodi (1986). El sindicato no es un lugar donde se haga el aprendizaje de la democracia.

Esta disociación entre la defensa de intereses particulares y los principios políticos generales no concierne sólo a las instituciones políticas; el sindicalismo no juega ningún papel importante en los movimientos antiimperialistas. Una encuesta de CENDES en Venezuela muestra que la mayoría de los obreros son hostiles a la nacionalización del petróleo. En Chile, una fuerte proporción de obreros consideran que el capitalismo extranjero ha tenido efectos más positivos que negativos; en Colombia, D. Pécaut observa la misma debilidad del tema antiimperialista entre los obreros organizados, mientras que este tema tiene mucho peso en los movimientos urbanos. Estas reacciones pueden explicarse por la importancia de las empresas extranjeras, cuyo nivel de salarios es generalmente elevado, y que aceptan con mayor facilidad que otras negociar con los sindicatos; esto demuestra, sobre todo, la discontinuidad entre las reivindicaciones económicas y los temas de alcance global. En líneas generales, aunque la participación política de los sindicatos sea importante, la movilización política de los obreros organizados resulta débil: contrapartida de la dependencia de los sindicatos respecto de los partidos. En América Latina, *la participación dependiente de los sindicatos en la acción política es un obstáculo mayor para la acción revolucionaria* de una clase obrera. Ya durante la revolución *mexicana* los obreros habían permanecido en una posición de expectativa hasta que en 1914 Obregón se acerca a los dirigentes sindicales de Carranza. Pacto del 17 de febrero de 1915, que ya había marcado la subordinación del sindicalismo en relación a la acción política y había provocado la oposición de los anarquistas y de los ferroviarios afiliados a los IWW. Pero, rápidamente, esos antiguos dirigentes sindicales habían sido

anegados por la masa de los nuevos sindicalistas sin conciencia de clase. Desde 1923, la CROM se había asociado al poder político en su lucha contra la CGT y los IWW. En *Colombia,* la ausencia del poder nacional-popular y los lazos entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos podrían anunciar, por el contrario, la capacidad de los sindicatos para elevarse al nivel más elevado de los problemas sociopolíticos, como ocurre en Francia, donde la CGT y la CFDT, cada una a su manera, dan prioridad a la política general sobre las reivindicaciones sectoriales. La realidad va contra esa hipótesis. En Colombia existe una fuerte separación entre la defensa de los intereses particulares y una acción política de alcance general. El sindicalismo se sitúa en el interior del modelo liberal que rige las grandes empresas nacionales de Medellín o extranjeros de Cali, lo cual puede llegar incluso a la creación de sindicatos «amarillos». Los sindicatos participan muy activamente en las luchas políticas, pero esas luchas oponen partidos que pertenecen al mismo sistema, al mismo régimen, de suerte que los sindicatos no ponen en cuestión las formas políticas de la dominación oligárquica. D. Pécaut ha definido bien ese sindicalismo por su fuerte «disponibilidad política» y por su débil capacidad de movilización de clase. De suerte que es en los movimientos urbanos, cuya base social se halla muy diversificada, donde hay que buscar la expresión de las reivindicaciones y de las aspiraciones de clase.

Junto al sindicalismo se forma un movimiento más *popular* que obrero, mejor organizado en los barrios que en las empresas, a un tiempo más radical y más heterónomo. Nos acercamos constantemente al modelo definido, en una forma extrema, por Oscar Lewis en los barrios pobres de San Juan de Puerto Rico: la coexistencia de una acción comunitaria, que defiende los intereses locales inmediatos, y de una participación indirecta, clientelista, en el sistema político. La unión de temas de clase y de temas populistas revolucionarios aparece con mayor claridad en la acción del FUT ecuatoriano, entre 1981 y 1985. En ese movimiento encontramos el tema del poder popular, tan presente en Bolivia y en Chile en la época de Torres y de Allende. Ese tema combina la acción de la clase obrera, las reivindicaciones de consumidores alcanzados por la crisis económica y la defensa comunitaria de barrios o de comunidades populares contra los barrios ricos y los centros de decisión.

Pero estos movimientos populares están limitados, a su vez, por la gran capacidad que tiene el modelo latinoamericano de desarrollo para integrar unos sectores obreros en una clase media, definida por el acceso a la influencia política más que por un nivel de renta. La importancia de la pobreza rural y del sector informal urbano da a una gran parte de los obreros que disponen de un empleo estable en unas empresas relativamente importantes una especie de pertenencia a la clase media, que suscita movimientos más orientados, incluso cuando son violentos, hacia la integración social que hacia una contestación global del sistema político

y social. Muy a menudo se olvida que los países de América Latina o, por lo menos, la mayoría de ellos, comparados con los primeros países industriales como Gran Bretaña, han abierto desde hora temprana al mundo obrero un acceso a la influencia política. Los obreros latinoamericanos obtuvieron el derecho de voto en una etapa de la industrialización muy anterior a la que corresponde para Gran Bretaña a finales del siglo XIX, cuando el conjunto de los obreros terminó recibiendo el derecho de voto gracias a las reformas electorales de 1884-1885. El Estado ha intervenido muy a menudo para dar garantías legales y, por otro lado, al no hallarse ese Estado mismo separado de un sistema político complejo y relativamente abierto, no se puede decir en América Latina que la clase obrera acampe en la nación. Podría decirse que los campesinos pobres y los habitantes de las chabolas y de los suburbios, o también los que trabajan en el sector informal, acampan en la nación. Pero, comparados con esas categorías, los obreros que disponen de un empleo estable en una empresa de una productividad media o elevada, aparecen no como una categoría privilegiada, desde luego, sino como más cercanos a la pequeña clase urbana de empleados y de funcionarios que de los «marginados», de los que se sienten lejos. Por eso la acción política, que siempre moviliza ciertos intereses de clase, tiende a dividirse: de un lado, la presión hacia la integración social; del otro, las conductas de crisis y de ruptura. Las reivindicaciones y la conciencia de clase nunca están ausentes pero pasan a través de canales políticos diversificados; la acción política nunca se halla subordinada a la acción de clase.

CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE

1. No podemos contentarnos con definir el populismo o los regímenes nacional-populares como la apelación de dirigentes políticos a unas masas urbanas marginales que responden a móviles afectivos más que a intereses racionalmente definidos. Aún menos podemos llamar populismo a la simple demagogia o a las manipulaciones de la opinión pública al servicio de la defensa de los privilegios de la oligarquía. Incluso resulta imposible aceptar la noción de movimiento populista. De forma constante, en el curso de esta tercera parte, se ha reforzado la idea que existía de un modelo político dominante en América Latina, el modelo nacional-popular, en cuyo seno o por relación al cual se definen unos actores sociales que llevan a una acción autónoma menos de lo que responden a unas intervenciones del poder político. A pesar de las evidentes diferencias que separan a los países y a diversas coyunturas históricas, existe un modelo general latinoamericano, definido ante todo

por esa subordinación de los actores sociales al poder político, por la indiferenciación del Estado y del sistema político, por la coexistencia de objetivos modernizadores, económicos y nacionales en todas las formas de acción colectiva y por una fuerte desarticulación de la acción política y de las expresiones ideológicas en relación a los intereses económicos. Esta prioridad de lo político tiene como consecuencia principal la débil representatividad de las fuerzas políticas en relación a unos actores sociales. Nunca se puede definir una política o un Estado en términos de clases sociales.

Este modelo latinoamericano no corresponde a una situación o a una fase económica particular. Aunque muchos análisis muy útiles hayan mostrado las consecuencias políticas y sociales tanto de la sustitución de las importaciones o de la crisis de este proceso como de la intervención creciente de las empresas multinacionales, el modelo latinoamericano mantiene sus principios fundamentales a lo largo de medio siglo y, por lo tanto, a través de la sucesión de coyunturas económicas opuestas. Es que ese modelo manifiesta, ante todo, un modo de desarrollo que corresponde a la situación de sociedades *dependientes*. Por eso, hay que romper a un tiempo con un análisis puramente coyuntural y con todas las formas de determinismo económico y captar en su conjunto una situación de la que, de forma natural, la dependencia política y económica respecto a los centros de decisión exteriores es una dimensión fundamental. Contra la idea de que las transformaciones económicas determinan un cambio político, hay que afirmar que el conjunto de las transformaciones políticas, económicas y culturales se opera en el seno de un modo general de desarrollo. Este libro trata de reemplazar el estudio de los «efectos sociales y políticos» de situaciones económicas mediante la construcción de un *modelo de acción colectiva,* que determina a su vez la formación de las políticas económicas y sociales y las formas de organización social y cultural.

Este modelo latinoamericano es diferente de los otros. En Europa occidental y en América del Norte se ha manifestado de forma constante el carácter fundamental a un tiempo de la racionalización económica y social y de los conflictos o de los movimientos sociales. En el mundo comunista, el partido-Estado es el actor central, lo cual elimina cualquier separación entre lo social, lo político y lo estatal. En ciertas partes del mundo islámico, es un principio cultural de integración de la comunidad lo que domina el conjunto de las manifestaciones de la vida social y política. América Latina no conoce ni «factor dominante» ni voluntad totalizadora de la vida social. Se caracteriza por cierta interdependencia entre lo social, lo político y lo estatal, lo cual significa a la vez una autonomía relativa de cada sector de acción colectiva y la imposibilidad de definir uno de ellos con independencia de sus relaciones con los demás. Las luchas campesinas son las que más dependen de la intervención del Estado; el sindicalismo obrero muestra, en los últimos decenios, cierta tendencia a la autonomización, a medida que se organiza de manera más

coherente una sociedad industrial en ciertas partes del continente, pero sigue estando marcado por una participación dependiente del sistema político.

La idea de un modelo sociopolítico central en América Latina se ve reforzada, y no debilitada, por la observación de que existen zonas fronterizas entre este modelo y otros. En Chile, durante el período 1938-1973, aparecen formas de acción sindical y de representación política que se acercan al modelo europeo occidental: los actores sociales, y en particular el sindicalismo, son autónomos y los partidos se definen —al menos parcialmente— por sus relaciones con fuerzas sociales. En el Caribe, y a veces en ciertos países andinos, se forman movimientos de tipo comunitario, más cercanos al modelo africano e islámico que al modelo latinoamericano central. Por último, Cuba y Nicaragua pertenecen ante todo al modelo comunista. Pero incluso en estos casos marginales se perciben todavía los rasgos fundamentales del modelo nacional popular.

2. ¿Puede hablarse de *movimientos sociales* en el modelo nacional-popular? Si la expresión se reduce a su sentido más vago, si no indica otra cosa que la presencia de acciones colectivas al margen o fuera de los mecanismos políticos institucionales, la respuesta ha de ser positiva, pero corre el riesgo de arrastrarnos mucho más lejos de las búsquedas de este libro subrayando de manera demasiado simple el desbordamiento del análisis político por las demandas sociales, la importancia de la marginalidad y de la violencia frente a la capacidad de la acción reducida de los partidos y de los sindicatos. Razonamiento que amenaza con duplicar la exclusión social con una exclusión intelectual, como si los marginales no tuvieran acceso a la acción histórica o no pudieran hacer otra cosa que encerrarse en la defensa cotidiana y dejarse arrastrar a la violencia por el lumpen-proletariado o los demagogos. Rechacemos esa oposición peligrosa entre ciudadanos que construirían movimientos sociales y excluidos encerrados en su marginalidad, o, en sentido inverso, entre ciudadanos que no piensan más que en la integración y en excluidos que constituirían el ejército de reserva de la revolución.

La oposición de los ciudadanos y de los excluidos es central sólo porque la sociedad latinoamericana está hecha de su interdependencia y de su amalgama tanto como de su separación. El sistema social y político latinoamericano aspira y rechaza al mismo tiempo, separa y amalgama a la vez, de suerte que todos los actores sociales participan, pero sólo parcial y débilmente, en la transformación social por ella misma. Si, como pienso, un movimiento social es la participación conflictiva de una categoría social en la acción histórica, es decir, bien en el funcionamiento de una sociedad, bien en ese paso de un tipo de sociedad a otro que llamamos el desarrollo, lo propio de América Latina es que pocos actores tienen acceso a ese nivel de acción colectiva, que se vuelven portadores de un movimiento social. En América Latina apenas existe el equivalente del

movimiento obrero de los grandes países industriales apoyado en una elite de obreros cualificados, y tampoco el de los movimientos de liberación nacional de los países colonizados; Chile se acerca al primer modelo, Nicaragua al segundo, pero éstos no son sino casos límite. Casi por todas partes y siempre se mezclan tres niveles de conductas. En primer lugar, la defensa comunitaria, hecha a la vez de repliegue sobre la moralidad personal y las solidaridades primarias y de violencia o de desafío; luego, el impulso hacia la integración social, que se manifiesta de modo tan fuerte en la confianza casi ilimitada que América Latina tiene en la educación, pero que también puede alimentar la acción de los demagogos; por último, unos movimientos sociales propiamente dichos, pero más presentes en la conciencia que en la acción. Esta interdependencia de los niveles y de los campos de acción es tan central que lo propio de la América Latina es lo que se ha denominado *movimentismo* en Brasil o *movimientismo* en los países de lengua española, esfuerzo de unión o lugar de fusión entre la acción de los ciudadanos y la de los excluidos, entre las reivindicaciones del interior y las contestaciones del exterior. No hay populismo sin *movimentismo*. Lo encontramos tanto en Gaitán en Colombia como en la promoción popular de la Democracia Cristiana, tanto en el peronismo como en la Unidad Popular chilena, tanto en la Izquierda Unida peruana como en el Partido de los Trabajadores Brasileños, tanto en el sindicalismo campesino boliviano como en la acción de Cárdenas en México. La América Latina no es el continente de los movimientos sociales conscientes y organizados, de las luchas de clases o de los movimientos nacionalistas; es un continente ocupado por actores siempre divididos entre la integración y la violencia y cuyos miembros desunidos tratan de reformar el cuerpo de un movimiento. Ningún continente ha conocido más actores; ninguno los ha conocido más débiles. Pero dejemos a la arrogancia de los doctrinarios del Este y del Oeste la tarea de quejarse del exceso de subjetivismo y del poco realismo de la acción colectiva en América Latina. Sus críticas tienen probablemente razón cuando subrayan las debilidades de esa acción; hacen mucho peor cuando olvidan que el poder revolucionario socialista ha destruido movimientos sociales que sólo se reforman contra él y que las ilusiones nacionalistas de la modernidad y de la abundancia han transformado en puros problemas privados, en anomia y en angustia, lo que todavía sigue estando asociado en América Latina a una acción colectiva, cierto que en jirones, pero que nunca cesa de vivir. No pretendo aquí ni identificarme con el pensamiento nacional-popular ni rechazarlo por completo, porque me parece ilusorio defender una imagen de la democracia en ruptura completa con el populismo cuando el continente posee un grado todavía bajo de integración social y cuando el dualismo social y económico sigue siendo absolutamente real, en particular en Brasil donde el ascenso en poder del estado de São Paulo no ha eliminado la pobreza del Nordeste, o en México, donde la oposi-

ción del Norte capitalista y del Sur precapitalista no deja de reforzarse.

En los sistemas nacional-populares, veo más bien una forma desarticulada de sociedad, que lleva en sí misma los actores y los envites de una sociedad moderna, pero siempre doblada por actores y formas de acción quebradas, lo cual traduce los límites de la modernización económica y de la integración social. Cada actor, cada tema tiene dos caras: lo que por un lado son clases populares, obrera o campesina, es al mismo tiempo pueblo, definido por su unidad. Lo que es poder económico de la oligarquía es también dependencia respecto del capitalismo extranjero; el tema del desarrollo siempre está ligado al de la afirmación nacional, que también puede actuar como fuerza de resistencia a la modernización. Existe un sistema político, pero los actores sociales y el Estado mismo nunca se definen completamente por su participación en ese sistema. Con un pie dentro y otro fuera: *convivencia* y violencia, integración nacional y defensa comunitaria, no acabaríamos nunca de enumerar las parejas de oposición que definen la vida política y social de América Latina.

Reconozcamos incluso que si hubiéramos querido atenernos más de cerca a la observación, describir lo vivido antes que analizar un sistema social y político, no habríamos debido separar movimientos urbanos y movimiento obrero y habríamos tenido que evocar más bien un movimiento popular que moviliza a los consumidores tanto como a los productores, que protesta contra el alza de los transportes urbanos con más frecuencia que contra el agravamiento de las condiciones de trabajo, pero sobre todo que es más rico de conciencia de clase popular que de programa económico e incluso de acción política. Ya lo hemos dicho: la noción de *pueblo* no corresponde a la realidad de una sociedad dividida entre privilegiados, ciudadanos y excluidos, sino que define bien el máximum de conciencia y de acción posibles en una situación donde sólo una minoría es definida por su posición en unas relaciones sociales de producción. Situación tan extraña a la apelación leninista a las masas y a las vanguardias revolucionarias por encima de la acción reformista de la aristocracia obrera como al programa socialdemócrata de reconstrucción de la política a partir del movimiento obrero organizado. El movimiento popular es más fuerte que unos movimientos de masas manipulados por *caudillos* políticos y que un sindicalismo encerrado en la defensa de grupos limitados, cuando tampoco él está sometido a directrices que proceden de partidos que no controla. Esta conciencia de clase popular es fuerte en todas partes, tanto entre los mineros bolivianos o chilenos fuertemente organizados como entre los obreros mexicanos o brasileños sometidos a unos sindicalistas *charros* y *pelegos*. Pero esta subjetividad de clase, esta conciencia de los sufrimientos soportados y de la distancia con los ricos difícilmente se transforma en una conciencia elaborada de las relaciones sociales y de sus envites económicos culturales e internacionales. De ahí la distancia casi siempre infranqueable entre la

conciencia y la acción, entre los trabajadores y sus dirigentes. De ahí también la violencia de la experiencia vivida, de sus expresiones desviadas lejos del mundo del trabajo y de los trabajadores, cuando los chiquillos queman autobuses y cuando las muchedumbres saquean almacenes. He hablado suficiente de la debilidad del movimiento obrero en América Latina como para terminar subrayando la fuerza de la conciencia popular, llevada por las mujeres más que por los hombres, más visible en la calle que en los talleres, que asocia los problemas sociales a protestas morales antes que a programas económicos, pero, que nunca se reduce a las consecuencias del desarraigo, de la pobreza y de la marginalidad. Tomemos de nuevo, invirtiéndola, la fórmula que hemos enunciado: en América Latina la acción es rara y dependiente, pero los actores populares siempre están presentes y sus protestas, políticamente débiles, reclaman con fuerza, y de modo constante, la ciudadanía social.

Sería un error creer que la situación actual sólo corresponde a una enfermedad infantil del desarrollo y que llegará un día en que la integración sustituirá a la desarticulación y en que los conflictos sociales serán expresados y resueltos por entero por mecanismos institucionales. Puede definirse la modernidad en esos términos, pero ninguna sociedad se reduce a un nivel general de modernidad; todas se ven tan arrastradas por fuerzas de modernización que no dependen enteramente de la racionalidad de las conductas y de la diferenciación de las instituciones. La violencia de los *robber barons,* grandes financieros americanos, la de Bismarck o la del Imperio soviético, el nacionalismo de tantos nuevos dirigentes del Tercer Mundo ¿pertenecen a la modernidad más que los movimientos nacional-populares latinoamericanos? ¿Y no conviene que europeos y americanos del Norte adopten una visión más realista de su propia historia antes de dar lecciones a una América Latina acusada de confusión y de irracionalidad? En el capítulo siguiente veremos descomponerse el sistema nacional-popular y, al final de este libro, intentar construirse unas democracias; pero no veremos desaparecer del todo movimientos y formas de acción política que manifiestan a la vez el dualismo de las economías y la capacidad de integración social y de construcción nacional de los países de América Latina.

Cuarta parte

Las fronteras del sistema nacional-popular

INVESTIGACIONES
SOCIALES

Introducción a las partes cuarta y quinta

1. El análisis que hasta aquí hemos realizado se ha apoyado sobre todo en hechos referidos al período anterior a la instalación de dictaduras militares en una gran parte del continente. Ha tomado por referencias principales tanto el sistema mexicano posrevolucionario y el peronismo argentino como la acción del APRA en el Perú, de *Acción Democrática* en Venezuela, del MNR en Bolivia, de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular en Chile. Asimismo, ha considerado Brasil entre la caída del *Estado Novo* y el golpe de Estado de 1964. Ha llegado, por tanto, el momento de preguntarse si el modelo que hemos construido se desmorona, primero con la instalación de dictaduras militares y luego, y sobre todo, con la crisis financiera y económica que altera desde el inicio de los años ochenta las condiciones de existencia del continente. Dejamos las aguas tranquilas de la construcción de un modo de desarrollo para interrogarnos en primer lugar sobre sus límites, incluso en su período clásico, luego sobre sus formas de descomposición, de inversión o de transformación. La principal pregunta que ante nosotros se plantea es la siguiente: ¿no conduce la fragilidad de este modo de desarrollo, débilmente integrado, bien a una desintegración y a una crisis estructural, bien, a la inversa, a una unificación voluntarista del conjunto de los elementos del sistema social y político bajo la dominación de un Estado autoritario o bajo la hegemonía de una clase dirigente? Lo cual nos llevará, por último, a preguntarnos por la desaparición posible del modo latinoamericano de desarrollo, sobre la posible fragmentación del

continente entre nuevos países industriales que se acercan al tipo europeo o norteamericano, países que están vinculados al tipo soviético y países que se hunden en la crisis permanente de un subdesarrollo que puede ser dominado cada vez menos. Pero guardémonos ahora de conclusiones demasiado brutales. En páginas anteriores hemos hecho más de una referencia a la época más contemporánea, lo cual muestra suficientemente que en el corazón de la crisis o más allá de las dictaduras militares se mantienen, incluso aunque sea bajo una forma profundamente transformada, ciertos aspectos del sistema sociopolítico clásico. Las partes cuarta y quinta de este libro se orientarán hacia el estudio de los cambios e incluso de la descomposición del tipo clásico del que aquí, en el momento de dejar su análisis, conviene recordar su fuerza y su relativa permanencia. Resulta tanto más necesario cuanto que las dictaduras militares han impuesto a menudo la idea de un corte en la historia de América Latina y han tratado de interrumpir la memoria colectiva. La restauración del espacio democrático, tanto como la creación de nuevas políticas económicas, no son desde luego posibles sin grandes innovaciones políticas y sociales, pero también exigen que se restablezca cierta continuidad entre los regímenes nacional-populares y los regímenes más o menos democráticos que se esfuerzan por dominar una coyuntura eminentemente desfavorable y responder a nuevas expectativas políticas y sociales.

En cualquier caso sería falso creer que América Latina ha realizado su despegue y que, por tanto, debe ser analizada de forma puramente estructural como un ejemplo de sociedad industrial, como si su maduración le hubiera llevado paulatinamente al puerto de las sociedades de tipo que conocemos en el Oeste de Europa o en Norteamérica. Sería igual de falso creer que la América Latina, aplastada por la crisis, se ve arrastrada de forma inevitable hacia una crisis general o hacia una ruptura revolucionaria con los centros de decisión del mundo que puede denominarse capitalista u occidental. Reconoceremos que América Latina no puede mantener, en una situación profundamente transformada, su modo anterior de desarrollo y de funcionamiento, pero las nuevas formas de acción política y social que aparecen tampoco pueden ser comprendidas sin referirnos a la interdependencia de los actores sociales, de las fuerzas políticas y del Estado, del que ahora sabemos que es el corazón del modelo nacional-popular.

2. El sistema nacional-popular mezcla Estado, instituciones políticas y fuerzas sociales, sin que estas tres componentes estén sometidas a un actor hegemónico, del tipo de los partidos comunistas, por ejemplo. En ciertos países, el sistema político consigue dominar a los demás componentes hasta llegar a un parlamentarismo defensor en ocasiones de la oligarquía, en otras ocasiones, por el contrario, más abierto, pero en el que el sistema político parece imponer sus reglas de juego, en detrimento a un tiempo del Estado y de los actores sociales mismos. Y a la inversa, la

crisis más grave del sistema nacional-popular aparece cuando unos actores sociales se constituyen al margen del Estado y del sistema político y contra ellos, considerándolos incluso como *entreguistas,* como agentes de fortalecimiento de la dependencia, y se lanzan a una lucha armada o a movimientos de liberación nacional.

Cada una de estas dos tendencias opuestas puede llevar a la ruptura del sistema nacional-popular. Pero éste resiste ante esas amenazas con más vigor del que se esperaba. En Colombia o en Chile, los sistemas parlamentarios combinan el papel dominante de los partidos con el de los líderes nacional-populares, mientras que las luchas armadas, sobre todo en América del Sur, combinan un «foquismo» de inspiración leninista, y por tanto extraño a la política nacional-popular, con unos movimientos populistas revolucionarios. Las formas de acción social y de gobierno que parecen limitar la aplicación del tipo nacional-popular demuestran, por tanto, por su propia debilidad y sus propias tensiones internas, el papel central y la fuerza de ese modelo, incluso cuando está debilitado o es atacado.

Son las dictaduras militares —se apoderan de Brasil en 1964 y de Argentina en 1966, luego de Chile y de Uruguay en 1973, y otra vez de la Argentina en 1976, tras un breve intermedio peronista— las que derriban los regímenes nacional-populares. Su acción, combinada con la de la crisis económica que a principios de los años ochenta puso fin a medio siglo de crecimiento económico, no anuncia con claridad una nueva época en la historia de América Latina, sino que marca brutalmente el final de las políticas de integración social y política.

1.—Los límites del parlamentarismo

1. Una democracia limitada

Subdesarrollo y sobredesarrollo políticos

Aunque en las sociedades dependientes, a diferencia de las sociedades colonizadas, sigue existiendo un sistema político autónomo, la indiferenciación relativa del Estado, del sistema político y de las fuerzas sociales puede conducir, bien a un sobredesarrollo, bien a un subdesarrollo del sistema político, porque éste, aunque puede verse invadido a un tiempo por el Estado y por grupos de intereses, también puede a su vez invadir esos dos dominios.

El subdesarrollo político es evidente cuando el Estado es capaz de absorber o de controlar directamente unas demandas sociales. El signo de esa comunicación directa entre unos grupos de intereses y el Estado central es la existencia de partidos únicos o que se quieren únicos. Situación frecuente en América Latina. Incluso en *Chile,* país de pluralismo antes del golpe de Estado de 1973, A. Foxley y T. Moulian, al analizar el sistema político en la época de la Unidad Popular, observan que los partidos se consideraban portadores de un proyecto global de sociedad y tendían, por tanto, a eliminar a sus adversarios por razones doctrinales. Al estudiar el sistema político *colombiano,* aparentemente el más sólido de todos, J. Payne observa asimismo, en el período anterior al golpe de Estado de Rojas Pinilla, una tendencia, tanto de los liberales

como de los conservadores, a romper el sistema bipartidario y a imponerse como partido único, tendencia representada por Gaitán desde el lado liberal y por Gómez desde el lado de los conservadores. El pacto que se firmó entre los dos partidos para acabar con la dictadura de Rojas Pinilla y que fue respetado, debió su importancia a que puso fin a esa tendencia de cada uno de los dos partidos de apoderarse de la totalidad de los poderes, tendencia que había conducido a la violencia de los años 1948-1953. En *Argentina,* hasta 1983, y sin excluir los períodos en que estuvo proscrito, el Partido Justicialista actúa en función de su vocación por la hegemonía. Más simple todavía es el caso del MNR boliviano entre 1952 y 1964, y el del PRI mexicano desde su fundación. El APRA *peruano* es un caso casi excepcional de partido con vocación de partido único pero que nunca llegó al poder hasta la muerte de su líder, Haya de la Torre, y que no ha tenido siquiera el papel principal en sus alianzas con Prado y Odría.

El sobredesarrollo político puede aparecer, por el contrario, cuando los actores sociales están débilmente organizados y cuando el Estado se reduce a un mercado político. La política se vuelve entonces un sistema de consumo más que de producción y los líderes políticos tratan de constituirse *clientelas* antes que representar intereses o proyectos globales de sociedad. Situación que favorece el papel de sus dirigentes, capaces de modificar su estrategia y sus alianzas sin preocuparse ni de ideologías ni de representación de intereses de clase. Este sobredesarrollo del sistema político es un aspecto importante de la desarticulación, ya analizada en este libro, de la acción política en relación a los intereses económicos y sociales. Desarticulación que conduce a lo que D. Pécaut, en sus análisis del sistema político colombiano, ha llamado la *disponibilidad* política. En muchos países pueden producirse grandes cambios políticos sin que por ello éstos signifiquen transformaciones estructurales de la sociedad, porque la participación política es ampliamente autónoma en relación a la defensa de los intereses sociales. Observación que se une a la que hemos hecho sobre el Estado: éste puede modificar, extender la participación social y política de las clases medias o populares, sin por ello atentar contra el poder de la oligarquía. La importancia de esta disponibilidad subraya una vez más el error de los análisis de origen marxista que tratan de establecer un paralelismo directo entre cambio económico y cambio político. Frente a M. Peralta Ramos, que se esfuerza por explicar la sucesión de los gobiernos posperonistas por las fases de transformación del capitalismo argentino, G. O'Donnell se muestra mejor analista cuando define el sistema político argentino por la inestabilidad crónica de las alianzas que en él se forman. Esto significa, no que la política sea un juego sin relación con los intereses económicos o las ideologías, sino que la flexibilidad del sistema político es consecuencia directa de su desarticulación. Lo cual se traduce por el elevadísimo número, como observa C. W. Anderson, de los que esperan llegar al poder.

Las tres funciones de los partidos políticos

Los partidos políticos tienen cierta función de representación; al mismo tiempo pertenecen al sistema político y son, por tanto, agentes de movilización propiamente política; finalmente, pueden encerrar en sí un proyecto o al menos una voluntad de poder. La importancia de cada una de estas funciones depende de un aspecto particular de la situación nacional. En los países de enclave, aquellos cuya integración nacional es débil o está en crisis, la orientación doctrinaria es fuerte porque los partidos se presentan como los defensores de la nación contra un imperialismo amenazador. La función de movilización depende sobre todo de la autonomía del sistema político porque, si esa autonomía es débil, es el Estado mismo el que dirige y controla esa movilización. Finalmente, la función representativa es más importante cuando los actores de clase están mejor formados, en particular cuando existen unos sindicatos y unas asociaciones profesionales fuertes.

Estas observaciones pueden resumirse en el cuadro siguiente:

	Tipos de partidos políticos *Integración nacional*			
	+		−	
	Autonomía del sistema político		*Autonomía del sistema político*	
	+	−	+	−
Formación de las clases	1	2	3	4
	doctrinario −	doctrinario −	doctrinario +	doctrinario +
	movilizador +	movilizador −	movilizador +	movilizador −
	representativo +	representativo +	representativo +	representativo +
	5	6	7	8
	doctrinario −	doctrinario −	doctrinario +	doctrinario +
	movilizador +	movilizador −	movilizador +	movilizador −
	representativo −	representativo −	representativo −	representativo −

Los dos tipos extremos corresponden a partidos cuyas funciones todas son bien fuertes, bien débiles. El tipo 6 corresponde a países de fuerte integración nacional, de sistema político dependiente del Estado y con clases sociales organizadas de forma débil. Países de ese tipo tienen partidos políticos débiles y, sobre todo, poco autónomos. Tal es el caso del Brasil de antes de 1964 y de México, donde el nacionalismo del Estado tiene una fuerte capacidad de movilización o de manipulación social,

donde los partidos están ampliamente integrados en el Estado, en México más todavía que en Brasil, y donde las clases sociales, en parte debido a las migraciones y a la importancia mayor de la urbanización que de la industrialización, están débilmente constituidas. En el *Brasil* posgetulista, el PSD y el PTB son instrumentos de control político más que de movilización autónoma. Este análisis no se aplica ya al Brasil de los años ochenta, donde las clases sociales han madurado, donde en particular se ha desarrollado un sindicalismo más autónomo y donde el Estado posautoritario reconoce más autonomía al sistema político, lo cual podría dar particularmente al PMDB unas funciones de representación y de movilización importantes. Muy distinto es el tipo 3. Corresponde a países de débil integración nacional o dominados por una economía de enclave, pero donde el sistema político es muy autónomo en relación al Estado y donde las clases sociales se hallan fuertemente constituidas, lo cual, por lo que concierne al menos a la clase obrera, es frecuente en la situación de enclave. El ejemplo clásico de este tipo es *Chile,* país de enclave minero, pero con una larga tradición democrática y un movimiento obrero autónomo y fuerte. Los grandes partidos chilenos modernos —la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista— han sido y son a la vez doctrinarios, movilizadores y representativos, de suerte que la vida política de Chile durante medio siglo, de 1920 a 1973, con breves interrupciones, ha estado dominada más que la de cualquier otro país latinoamericano por las relaciones entre los partidos. *Uruguay* está igualmente cerca de ese tipo, dada la oposición de los asalariados de la ciudad y de los intereses rurales que corresponde en parte a la del partido *colorado* y del partido *blanco.*

Dos tipos intermedios se oponen con toda claridad uno a otro. *Colombia* no es un país de enclave y no tiene grandes problemas étnicos; sus clases sociales se hallan poco identificadas, pero el país ha conservado un sistema político extremadamente autónomo. Esto explica que sus partidos, liberal y conservador, sean ante todo agentes de movilización política, como los partidos norteamericanos, y, como ellos, no sean ni doctrinarios ni representativos. A la inversa, *Bolivia,* cuya integración nacional es débil, donde las clases sociales están fuertemente organizadas, pero donde el sistema político es poco autónomo en relación al Estado largo tiempo dominado por el MNR, tiene partidos a la vez representativos y doctrinarios pero que poseen escasa capacidad de movilización. En *Argentina,* país fuertemente integrado, donde se formó, antes que en cualquier otro país, un sindicalismo de masas, pero donde el sistema político es muy autónomo, tanto el Partido Radical como el Partido Justicialista, peronista, son a la vez representativos y movilizadores, y poco doctrinarios. Es su capacidad de movilización lo que más llama la atención, porque Argentina conoce una tasa excepcional de afiliación a partidos, que en la actualidad sólo alcanza Brasil con la transformación del PMDB en un partido de masas. La identificación del

justicialismo con la clase obrera y del radicalismo con la clase media fue asimismo muy fuerte. *Costa Rica* pertenece al mismo tipo: sus partidos son representativos y movilizadores pero poco doctrinarios. Una situación opuesta encontramos en los demás países de América central, países de enclaves cuyos partidos son, por tanto, doctrinarios y donde las clases sociales están débilmente constituidas, a la vez por la gran diversidad de las situaciones en el seno del mundo campesino y por la juventud y debilidad de las clases medias y obreras urbanas. De suerte que la vida política de estos países, cuando no es destruida por la represión, está dominada por choques doctrinarios.

Los dos últimos tipos están menos alejados uno del otro. Partidos a la vez doctrinarios y movilizadores pero débilmente representativos se forman en países de enclaves o de débil integración nacional como Venezuela, Perú y Ecuador, donde la política de masas juega un papel mayor que la política de clase y donde la relativa debilidad del Estado proporciona una gran autonomía al sistema político. Pero estos países mismos pueden pasar fácilmente al tipo opuesto, el tipo 2, cuando el Estado tiene una mayor capacidad movilizadora que los partidos y cuando el desarrollo económico entraña cierta organización de los intereses de clase.

Ejemplos nacionales de tipos de partidos			
1 Argentina Costa Rica	2 Ecuador Perú Venezuela	3 Chile	4 Bolivia
5 Colombia	6 Brasil México	7 Venezuela Perú Ecuador	8 América central

Este cuadro muestra que los regímenes nacional-populares son los más fuertes en las situaciones intermedias, donde los partidos políticos no son ni muy fuertes ni muy débiles. Un sistema de partidos fuertemente constituidos está en oposición a un sistema nacional-popular fuerte que tiende a establecer una comunicación directa, a menudo de tipo corporativo, entre las demandas sociales, incluso radicales, y el aparato del Estado. En el *Brasil* contemporáneo, por ejemplo, a pesar de la reconstrucción de los partidos políticos, F. H. Cardoso (cf. Bibl., V, 2) observa con razón la gran facilidad de relaciones directas entre unos grupos de base, que hablan en nombre de la democracia directa, y el

aparato del Estado, mientras que las relaciones entre esos grupos de base y los partidos democráticos resultan difíciles. De igual manera, en *México* se observa que, a pesar de la crisis económica actual, el partido-Estado, el PRI, conserva gran influencia en los barrios urbanos desfavorecidos, las *colonias proletarias,* mientras que los partidos de izquierda no logran poner en marcha una movilización política autónoma. La tendencia a la organización de un sistema político fuerte parece, por tanto, oponerse a la naturaleza de los regímenes nacional-populares. Además, muchos partidos, como hemos visto, pertenecen al sistema nacional-popular y no tratan de definirse por su sola función representativa; al contrario, tratan de identificarse con el Estado y con tendencias o con problemas generales. De igual modo que el nacionalismo del Estado no se encuentra en real ruptura con el régimen nacional-popular, tampoco los partidos políticos logran escapar al marco general de la vida social y política en América Latina que representa ese régimen.

Por eso el papel de los *Parlamentos* es limitado en la mayoría de los casos. Incluso en la Argentina democrática posterior a 1983, L. de Riz y sus colaboradores observan no sólo que una fuerte proporción de proyectos de ley adoptados es presentada por el poder ejecutivo —lo cual es mucho más cierto todavía en Gran Bretaña, en Suiza o en Alemania Federal—, sino, sobre todo, que el «rendimiento parlamentario» es muy débil. Esto se explica en parte en Argentina por el hecho de que el Partido Radical no posee la mayoría en el Senado (18 escaños de 46), pero sobre todo por el hecho de que es el poder ejecutivo, y por tanto el aparato del Estado, el que gestiona los problemas vitales: la negociación de la deuda, la adopción del plan Austral en 1985, y de que es él quien decidió someter a referéndum popular el acuerdo con Chile sobre el canal de Beagle. En muchos países, la situación es semejante a la de Argentina. A la inversa, cuando la política estaba dominada por esfuerzos conjuntos de industrialización y de redistribución social, como en el Chile de los años 1932-1973, el Parlamento jugaba un papel importante. Pero incluso en ese caso, su papel estaba limitado por el hecho de que los partidos se consideraban portadores de «programas globales», según la expresión del historiador M. Góngora, y no pretendían, por tanto, hacer del Parlamento un lugar de negociaciones y acuerdos entre los partidos. La ley de la mayoría se aplicaba con bastante amplitud para dar al partido vencedor un grandísimo dominio de los trabajos parlamentarios. Situación que parece familiar a los franceses, también acostumbrados a que los grandes partidos se consideren portadores de una visión general de la sociedad y apliquen estrictamente la disciplina de voto, lo cual limita mucho la autonomía y la importancia del Parlamento. Cogidos entre un poder ejecutivo fuerte, una oposición social, sindical y popular y una oligarquía cuyo poder no proviene de su representación en el Parlamento, éste no aparece ante la opinión como la expresión principal de la democracia.

2. Sistema político y fuerzas sociales

El hiperdesarrollo del sistema político resulta bien una debilidad del Estado, bien una fuerte organización de los actores de clase. Nuestro análisis ha considerado hasta aquí, sobre todo, las relaciones entre el sistema político y el Estado; volvámonos ahora hacia las situaciones sociales para definir diferentes relaciones entre sistema político y actores de clase.

La democracia oligárquica

Colombia es el ejemplo clásico de una situación en que el Estado no está separado de un sistema político que se sitúa en el interior de la dominación oligárquica. Este sistema de dos partidos, conservador y liberal, se organizó en Colombia a mediados del siglo XIX. Los partidos políticos lograron mantener su poder y dominar el ejército, cuya influencia siguió siendo débil, a diferencia de lo que se producía en Venezuela y en Ecuador. Estos partidos no son ni corrientes ideológicas ni los representantes de una elite cerrada. A. Angell ha mostrado que su capacidad movilizadora y su organización local alcanzan un nivel muy elevado para el continente latinoamericano. Del mismo modo que sería falso identificar a los conservadores con los propietarios de tierras y a los liberales con el capital mobiliario, también sería peligroso definir los partidos al margen de toda referencia a la organización social y política de Colombia. Lo propio de los partidos colombianos es tener estas dos funciones: ser unos elementos del juego oligárquico, al mismo tiempo que son los representantes de ciertas fuerzas sociales. Esta dualidad se traduce por la tendencia constante de cada uno de los dos partidos a dividirse. El Partido Conservador corresponde en el punto de partida al sistema de dominación tradicional que se apoya en los propietarios de bienes raíces y sobre todo en la Iglesia. El Partido Liberal se desarrolla con la urbanización y la secularización y las posibilidades de movilidad que se manifiestan con la «revolución en marcha» de Alfonso López. En el conjunto, las ciudades son más liberales, incluidas Bogotá, Cali, Cartagena e incluso Medellín, que, sin embargo, pertenece a Antioquia, tradicionalmente conservadora. Los partidos deben responder incluso a fuertes presiones populares que les obligan a cambiar de dirección, como el Partido Liberal en 1947, cuando Gaitán se puso al frente de ese partido.

Pero, por otra parte, los partidos son los actores de unas *conversaciones de caballeros,* que aseguran el mantenimiento de la dominación oligárquica a la vez que permiten importantísimas reformas: el apoyo a los sindicatos, la construcción de viviendas y la solución de un conjunto de problemas concretos que pueden ser tratados sin amenazar la dominación de la oligarquía. Según J. Payne, la combinación de estos dos aspectos de la acción de los partidos se vuelve posible por la dominación de la política

de «estatuto» sobre la política de «programa», tal como existe en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano son organizaciones fuertes que defienden unos programas económicos sociales e internacionales coherentes. Payne añade que Medellín, más moderna que Bogotá, está también más cerca que ella de una política de programa. En Colombia la política es estratégica y no doctrinaria. Por eso es altamente conflictiva pero con escasos riesgos de ruptura. Payne explica así esa fuerte conflictividad: «En una sociedad caracterizada por: 1) una fuerte conciencia de estatuto; 2) un alto valor de los puestos políticos principales en términos de estatuto; 3) un reclutamiento relativamente abierto para esos puestos; 4) débiles barreras a la movilidad social ascendente, es probable un conflicto político intenso» (cf. Bibl., IV, 1, pág. 68). Pero estos conflictos siguen siendo puramente políticos, al no asociarse sino de modo muy parcial a unos conflictos de clases, lo cual evita rupturas políticas. No se transforman ya en golpes de Estado militares. «En los países latinoamericanos cuya identificación del electorado con los partidos es fuerte —dice Payne— los golpes de Estado militares son poco frecuentes.»

El caso del *Ecuador* demuestra *a contrario* esa tesis, puesto que ese país corresponde a una situación opuesta a la de Colombia: los partidos políticos se hallan fuertemente personalizados ahí y tienen por tanto una capacidad de movilización débil; de ahí la frecuencia de los golpes de Estado en Ecuador: 1906, 1911, 1925, 1931, 1935, 1937, 1944, 1947, 1951, 1963, 1966, etc. Perú está más cerca de Ecuador que de Colombia y también ha conocido golpes de Estado militares, en 1914, 1919, 1930, 1931, 1938, 1962 y 1968. Pero lo esencial del sistema colombiano es que la debilidad de los riesgos de ruptura queda compensada por la permanencia y la gravedad de las crisis internas que amenazan a cada uno de los dos partidos. Por ambos lados, una tendencia negociadora se opone a otra que se identifica bien con la defensa del orden social tradicional, bien con su transformación. Gaitán se identificó con las demandas de las masas populares en rápido crecimiento, a la vez que actuaba constantemente en el seno del Partido Liberal. Por el contrario, en 1948, tras su muerte violenta, el nuevo jefe del Partido Liberal, Echandía, dio prioridad a la negociación con los conservadores, lo cual no impidió una ruptura en noviembre de 1949. Paralelamente, Ospina Pérez, negociador, fue desbordado en última instancia por Laureano Gómez, que impuso a Colombia un régimen autoritario tradicionalista. Payne define el conflicto entre los partidos como *defensive feud (ibíd.,* páginas 159-182): un partido recurre a la violencia cuando piensa que el otro busca la hegemonía política y puede alcanzarla. La ruptura entre los partidos interviene cuando «cada lado reconoce la existencia de una solución mutuamente aceptable y menos costosa que la lucha pero que no puede alcanzarse». Ruptura que se produjo tras el asesinato de Gaitán, cuando la violencia se desencadenó, rompió las conversaciones entre *caballeros* y

concluyó en la dictadura de Rojas Pinilla. La *violencia* fue en Colombia la contrapartida de la fuerza integradora del sistema político. No correspondió a conflictos de clases, sino que marcó más bien la regresión de conflictos propiamente políticos a un plano comunitario, cuando campesinos liberales y campesinos conservadores se mataron entre sí. La violencia que rodea el sistema político y que corresponde ante todo a la debilidad del Estado preserva al régimen al menos tanto como lo amenaza, por lo menos mientras éste conserve una fuerte capacidad de integración.

La fuerza del control de la oligarquía sobre la vida política quedó perfectamente demostrada cuando, tras el período de la violencia, el general Rojas Pinilla, que había llegado al poder por la fuerza, intentó constituir un partido populista y transformar el sistema político. Los dos grandes partidos se desembarazaron rápidamente de él y, gracias a un acuerdo de reparto de los cargos públicos entre ellos, volvieron sólidamente al poder. Y a la inversa: era improbable que el gobierno colombiano pudiese reintegrar a la vida política a los que salieron de ella y fueron excluidos por la represión militar. Lo hemos visto en 1984, cuando el acuerdo firmado por el presidente Betancur con las principales guerrillas desembocó rápidamente, a partir de 1985, en la ruptura con dos de los grupos más importantes, y también en el momento en que, a finales de 1985, un ataque de los guerrilleros contra el Palacio de Justicia concluyó en la matanza de altos magistrados en condiciones que cuestionaron directamente la responsabilidad del ejército. Las fuerzas de ruptura parecen de modo constante más poderosas que las fuerzas de reintegración de la oposición radical en el sistema político. A partir de 1986-1987, éste aparece incluso debilitado frente a la conjunción de la violencia política, de la criminalidad y de los efectos del tráfico ilegal de la droga.

Este modelo de democracia oligárquica se encuentra, bajo otras formas, en numerosos países, en la *República Velha* de Brasil lo mismo que en la democracia chilena, hasta mediados del siglo XX. Ese control oligárquico fue facilitado en todas partes por un acceso muy restringido a los derechos políticos, en particular por la eliminación de los analfabetos. T. Moulian ha podido definir al Estado *chileno* del siglo XIX como un Estado de compromiso oligárquico. No existe ruptura social o política desde el conservador Portales al liberal Manuel Montt. La diferencia entre Chile y Colombia es que en Chile se mantuvo el modelo de un Estado fuerte, el Estado *portaliano,* bien analizado por M. Góngora, que se apoyaba en una oligarquía vascoespañola reducida. Pero mientras Colombia conseguía mantener hasta el presente esa democracia oligárquica, en Chile el sistema oligárquico no resistió el ascenso de las clases medias urbanas ni la crisis económica que destruyó la industria del salitre tras la primera guerra mundial.

La política liberal y parlamentaria fue marginada con más brutalidad

en los países en que triunfaba lo que A. Arinos, preguntado por A. Camargo, denominó, para el *Brasil*, la democracia plebiscitaria militar, es decir, el bonapartismo. Porque aparecía demasiado directamente como la defensa de una elite dirigente que consideraba los asuntos de Estado como asuntos privados suyos y veía en el Parlamento un club de descendientes de las buenas familias donde los vínculos de parentesco y de amistad eran más importantes que la oposición de partidos que servían más para hacer funcionar el Parlamento que para representar intereses. Contrariamente a lo que piensa Arinos, Brasil, a pesar del peso de las tradiciones y del orden establecidos por el Imperio, no escapó a la crisis de la oligarquía ni al desbordamiento del parlamentarismo por un presidencialismo que iba de la democracia plebiscitaria al autoritarismo puro, pero preocupado casi siempre por organizar, controlándola, la incorporación al sistema político de las nuevas clases medias y de los nuevos elementos de las clases populares. De ahí la importancia limitada de los grandes parlamentarios e intelectuales liberales como el propio Arinos. El UDN, partido de la derecha liberal, tras el período getulista, se vio impulsado primero a apoyar la extraña candidatura de Jānio Quadros, «forma populista que no chocaba con la tradición antigetulista del UDN», antes de apoyar el golpe de Estado militar de 1964 para intentar, casi inmediatamente, con C. Lacerda, la imposible vuelta a un régimen democrático al que había contribuido mucho ella misma a destruir. Arinos, enemigo de Lacerda, no siguió un camino distinto al suyo: favorable a la llegada al poder de Castelo Branco, se opuso a la elección de Costa e Silva, pero su gesto no tuvo efectos. En realidad, sólo la débil integración de la política nacional y la importancia de los grandes notables regionales que se reunían en el plano internacional para gestionar problenas limitados dieron en Brasil, durante mucho tiempo, cierta importancia a ese liberalismo incapaz de responder activamente a las transformaciones de la sociedad. Los intelectuales y políticos de derecha viven una desarticulación tan grande como los de izquierda en relación a la realidad económica y social; pero es el lenguaje del derecho constitucional y no el de las doctrinas revolucionarias lo que manifiesta en ellos esa desarticulación.

La democracia antioligárquica

El caso de la *Argentina* se opone directamente al de Colombia. En ésta, el sistema político ha seguido estando controlado por la oligarquía. En Argentina, por el contrario, el sistema político está dominado por la oposición abierta de la oligarquía agroexportadora y de una política apoyada en los consumidores urbanos. Tras la difícil y tardía victoria de los unitarios de Buenos Aires contra los federalistas del interior, el país estuvo dominado de manera casi permanente por una oligarquía dinámica. Pero esa oligarquía no llegó nunca a imponer su hegemonía. La

gran burguesía se mantuvo en el poder al precio de alianzas cambiantes. En particular, el movimiento radical que se desarrolló en las ciudades y que, antes de 1916, recurrió a métodos violentos, no amenanzó la dominación oligárquica cuando llevó a Yrigoyen al poder; creó, sin embargo, ya que no un gobierno nacional-popular, al menos una mezcla de dominación oligárquica y de ampliación de la participación política. Pero este tipo de compromiso se hizo cada vez más difícil. La oligarquía siguió siendo más exportadora que industrializadora, necesitando por tanto una economía abierta, favorable a sus exportaciones, pero, al mismo tiempo, el desarrollo económico excepcional de la Argentina creaba en Buenos Aires una sociedad de consumidores que exigía alimentos baratos y empleos industriales o administrativos. Estos consumidores urbanos eran favorables a un cambio bajo, muy desfavorable para los exportadores, y que provocaba, con mayor o menor rapidez, una crisis de la balanza comercial que dependía, sobre todo, de los productos agrícolas. La política económica estuvo dominada por lo que O'Donnell denomina el dilema argentino y por una sucesión cada vez más rápida de coyunturas económicas y políticas opuestas. Los precios agrícolas variaron, en efecto, fuertemente en relación con los precios no agrícolas. Bajaron durante el período peronista, fueron más o menos comparables de 1959 a 1963, se elevaron por encima de ellos de 1964 a 1966, volvieron a su nivel entre 1967 y 1970, fueron de nuevo más altos de 1970 a 1973, descendieron muy por debajo durante el segundo gobierno peronista de 1974 a 1976, lo cual fue un factor importante del golpe de Estado militar de 1976. El sistema político no se unificó nunca. El único modo de superar esas contradicciones políticas era que el Estado se apropiase de una parte importante de los excedentes agrícolas para acelerar la industrialización. Es lo que intentó hacer Krieger Vasena en 1967 y en 1969, pero sin éxito. Frente a unos programas antioligárquicos cada vez más radicales, la oligarquía, incapaz de formar un gran partido político, se volvió hacia los militares. Pero los propios peronistas fueron incapaces de reunir intereses opuestos, hablaron de la alianza de los jefes de empresa que trabajaban para el mercado interior y los sindicatos, de la CGE y de la CGT, pero fueron incapaces de desarrollar suficientemente la industria y romper, por tanto, la dependencia del país respecto de las exportaciones agrícolas. De ahí la inestabilidad y la descomposición de un sistema político que, tras el gobierno peronista, llevó primero a un régimen civil debilitado por la proscripción del peronismo, luego a golpes de Estado militares, a partir de 1966, y de nuevo, tras la brutal descomposición del peronismo en el poder, al golpe de Estado de 1976.

El gobierno de las clases medias

Chile se sitúa a medio camino entre la política oligárquica de Colombia y las tendencias antioligárquicas de la política argentina. En

Chile la democracia se identifica, ante todo, con los intereses de la oligarquía, pero ésta se halla abierta progresivamente, y no sin crisis, a las clases medias. En 1891, la derrota de Balmaceda fue la del Estado autoritario e industrializador creado por Portales y modernizado por M. Montt. H. Ramírez Necochea se equivocó al ver en el presidente vencido el agente de una burguesía nacional incapaz de resistir al imperialismo. No existía burguesía nacional en una economía chilena dominada por la exportación del salitre y de la propiedad rural, y M. Baraona, en un trabajo inédito, ha demostrado que no había casi diferencias sociales entre balmacedistas y antibalmacedistas.

Tras la apertura hacia las clases medias realizada por A. Alessandri en 1920 y un período de revueltas y de intervenciones militares, y al menos durante el breve período que siguió a la inestabilidad de los años treinta, la ruptura del Frente Popular y el segundo gobierno de Ibáñez, y antes del golpe de Estado militar, es decir, de 1958 a 1973, Chile conoció una extrema autonomía del sistema político y logró reintegrar ciertos elementos del régimen nacional-popular en un régimen ante todo parlamentario. La clase media chilena deseaba combinar el Estado de derecho con más justicia social y se opuso al capitalismo, dice L. Ratinoff, por razones morales más que económicas y para desarrollar la educación más que la producción. Este triunfo del sistema político se explica por la debilidad a un tiempo del Estado y de la oligarquía. En Chile, los industriales representan a un sector relativamente débil de la burguesía y la oligarquía sigue estando dominada por los banqueros y sobre todo por la Sociedad Nacional de Agricultura. Sigue siendo ella la que constituye el ala en marcha de la derecha chilena en 1983-1988. El Estado hubo de sustituir a la burguesía industrial y crear, a través de la CORFO y luego de ODEPLAN, un capitalismo de Estado. Pero el Estado mismo, apartado de las principales decisiones económicas, que pertenecen al capital extranjero, ha actuado desde hace mucho tiempo como un instrumento de distribución de los provechos mineros y más precisamente de construcción de una clase media ampliada, aunque fuese al precio de la inflación, como ha mostrado A. Pinto. En Chile, la verdadera opción política se sitúa entre el fortalecimiento del sistema institucional y una acción de clase dominada por el sindicalismo. Pero esta segunda hipótesis es menos sólida de lo que parece. En Chile lo mismo que en Francia, el *Frente Popular* fue más un cambio político, favorecido por la nueva política internacional del movimiento comunista, que un movimiento social. La izquierda chilena estuvo casi constantemente dividida entre una extrema izquierda de la que el «grovismo» fue la primera expresión y que se mantuvo hasta la época de la Unidad Popular, cuando el secretario general, C. Altamirano, se opuso a la política de S. Allende, y una política de alianzas que trataba de conciliar el mantenimiento del sistema institucional con la persecución de objetivos de clase. Esta otra izquierda, tanto socialista como comunista, contribuyó

a orientar al conjunto de la izquierda hacia una política de alianzas que daban prioridad al fortalecimiento del sistema institucional sobre la persecución de objetivos de clase. S. Allende representó de modo constante esta política de izquierda opuesta al maximalismo de ciertos sectores del partido socialista. En resumidas cuentas, la asociación de cierto arcaísmo social y de un progresismo institucional terminó dando a las clases medias el control del sistema político. Por su lado, la Democracia Cristiana fue menos populista que conservadora modernizante, tratando de eliminar las formas más extremas de dependencia económica y de dominación social gracias a la «chilenización» del cobre y a la primera reforma agraria decidida por el presidente Frei. Esta democracia abierta y moderada fue siempre frágil; estaba amenazada, a la vez, por una derecha a la que su debilidad económica impulsaba a recurrir a soluciones autoritarias y por elementos de la izquierda y del sindicalismo orientados hacia una revolución social. El equilibrio del sistema parlamentario chileno duró menos que los seis años de la presidencia de Frei. Durante los dos últimos años de su mandato se desarrolló una oposición radical, marcada por graves incidentes sociales y alimentada por una extrema ideologización de los intelectuales, conquistados por las fórmulas más extremadas de la teoría de la dependencia.

Del populismo al parlamentarismo

Otra situación intermedia entre los casos extremos de Colombia y de Argentina es la de *Venezuela*, que, de 1945 a 1948, conoció un fuerte movimiento nacional-popular, dirigido por *Acción Democrática*, organizadora del sindicalismo rural y urbano. Pero después de 1958 y la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, Venezuela se acercó a Colombia. El acuerdo de Punto Fijo, entre AD, COPEI y URD, y al que se asociaron las fuerzas sindicales, creó un sistema político bastante sólido para resistir a las guerrillas urbanas y rurales inspiradas por Cuba. Tras la retirada de la URD, Venezuela entró en un régimen bipartidario que permitió a AD y a COPEI sucederse en el palacio presidencial. Venezuela es el caso más notable de consolidación de un régimen democrático en un país que había conocido primero la larga dictadura de Gómez, y luego la de Pérez Jiménez. Este fortalecimiento se explica, ante todo, por la preocupación de no caer en el error del período 1945-1948, durante el cual el poder absoluto de *Acción Democrática* había empujado a los demás partidos a brazos de los militares, luego por la fuerza del acuerdo de Punto Fijo y finalmente por la necesidad de resistir a las amenazas que pesaban contra la unidad del país, sin olvidar la importancia de los recursos de que disponía el sistema político para disminuir las tensiones. Las amenazas exteriores procedieron de las guerrillas; en cuanto a recursos, fueron proporcionados abundamente por el petróleo. El Estado dispuso de

inmensas posibilidades de integración, de distribución, de cooptación y de manipulación. La reunión de estas dos situaciones permitió a Venezuela a un tiempo abrir su sistema político y llevar una política de desarrollo. La contrapartida de esta consolidación democrática fue, como en Colombia, el mantenimiento de zonas de exclusión o de autoexclusión, en particular entre los intelectuales. La Universidad Central de Venezuela en Caracas se transformó en una base revolucionaria. La crisis del petróleo debilitó el sistema político, pero éste se hallaba lo bastante reforzado para resistir a presiones, reducidas ya éstas por la crisis de las ideologías revolucionarias.

La solidez de la democracia parlamentaria en Venezuela no debe dejar creer, sin embargo, que este país escapa al modelo *nacional-popular*. El sistema político no sólo descansa en el pacto político-sindical concluido antes en Punto Fijo, sino que la sucesión de los presidentes traduce, tanto en Venezuela como en México, la necesaria pero difícil combinación de los componentes del sistema nacional-popular. Fue Carlos Andrés Pérez quien puso el mayor vigor, y gracias al maná del petróleo, en el intento de salir de ese sistema y construir un capitalismo de Estado dando a éste un papel de productor más que de distribuidor; los principales beneficiarios de estas medidas fueron las categorías más favorecidas, lo que a su vez provocó la formación de movimientos independientes de los partidos e incluso de sindicatos libres. El presidente tuvo cierta dificultad para seguir adelante con dos políticas distintas, nacional-popular y modernizadora. El demócrata-cristiano Herrera Campins volvió, al menos de palabra, a un populismo más clásico, definiendo su gobierno como el de los pobres. De hecho, su presidencia conoció sobre todo un grave debilitamiento del Estado, la extensión de la corrupción y el desarrollo de los movimientos independientes, hasta que la crisis económica golpea violentamente a Venezuela. La historia de este país, de Leoni a Lusinchi, es más, por tanto, la historia de las tentativas de superación y de la crisis del régimen nacional-popular que la de un sistema parlamentario de tipo europeo.

El conjunto de estos casos nos lleva a concluir que los sistemas parlamentarios latinoamericanos no pueden oponerse a los regímenes nacional-populares. Al contrario, es la hiperautonomía, la desarticulación del sistema político lo que puede crear el espacio necesario a un sistema político dotado a un tiempo de una gran capacidad de cooptación y atravesado por unos debates ideológicos que indican la presencia mal controlada, débilmente integrada, de demandas sociales radicales. Es decir, que las democracias latinoamericanas han seguido siendo poco representativas porque la representatividad de partidos o de sistemas políticos supone la existencia de actores sociales fuertemente organizados. En América Latina, los actores sociales no tienen capacidad para ser representados; y al mismo tiempo, las fuerzas políticas responden mal a las demandas que frecuentemente se expresan por conductas de

ruptura con las instituciones políticas, por sublevaciones urbanas, movimientos revolucionarios o incluso por el apoyo a regímenes autoritarios. Este libro se escribe en el momento en que el problema central de América Latina, tras un largo período de dictaduras militares en muchos países, es saber si la democracia representativa logrará arraigar sólidamente en el continente. Pero sería un error presentar a las nuevas democracias como herederas de los regímenes parlamentarios anteriores. Del mismo modo que el sindicalismo obrero fue demasiado dependiente del Estado y de los partidos políticos para contribuir de manera importante a la fundación de las nuevas democracias, así el antiguo parlamentarismo está demasiado incorporado al régimen nacional-popular, dominado por una fuerte desarticulación de lo político en relación a la economía, para constituir la base de democracias representativas, es decir, definidas por su capacidad de representar intereses sociales organizados. Los regímenes parlamenarios no han tenido la capacidad de dirigir el proceso de separación del Estado, del sistema político y de los actores sociales; es más la debilidad relativa del Estado y de los actores sociales lo que ha dejado en ciertos casos una autonomía grandísima al sistema político, de igual modo que, en otros casos, la fuerza del Estado y de los actores sociales limitaba o destruía la autonomía del sistema político.

Este segundo caso es el más frecuente. En la mayoría de los países, la vida parlamentaria está rodeada de fuerzas poderosas que contribuyen no sólo a formar la opinión pública, sino también a influir, de manera decisiva, las decisiones políticas. Entre esas fuerzas, hay que contar el sindicalismo en Argentina durante el largo período de proscripción del Partido Justicialista, pero también en Uruguay y en Chile. Sobre todo el ejército y la Iglesia —hay que decir cada vez más las Iglesias para dar cuenta del crecimiento rápido de las Iglesias protestantes y de su papel en países tan diferentes como Colombia, Chile o Nicaragua— tienen una capacidad de intervención tan fuerte que a veces se enfrentan cuando el sistema político se desmorona o es destruido. De ahí la importancia de la fuerza tanto como la importancia de la convicción, de la apelación a la seguridad nacional tanto como a los valores morales, en una vida y un discurso político que raramente se reducen a un debate económico o a la búsqueda de compromisos y de reformas. Mientras que la actividad parlamentaria levanta pocas pasiones, los líderes autoritarios, el ejército o la Iglesia organizan movilizaciones de masas. Los ejemplos más espectaculares han sido las grandes concentraciones populares en torno a Juan Domingo Perón y a Fidel Castro y a las masas reunidas alrededor de Juan Pablo II durante sus viajes, en particular a Perú, México y Chile. La presencia de estas fuerzas militares y religiosas muestra la estrechez del espacio propiamente político. En el seno de éste, resulta difícil oponer el parlamentarismo al régimen nacional-popular, del que no es más que una *modalidad particular*, de la misma manera que el Estado nacionalista no

es más que la acentuación de ciertos aspectos del modelo nacional-popular.

Un caso excepcional de combinación del parlamentarismo y de la política nacional-popular es el de *Jamaica*. Este país al que Michel Manley había arrastrado a un nacionalismo revolucionario que cada vez se acercaba más a Cuba y a una grave crisis económica no ha destruido sus instituciones políticas de inspiración británica, que se basan en la alternancia en el poder de los dos partidos, el *Jamaican Labour Party*, dirigido en los años ochenta por Edward Ceaga y apoyado por las *Bustamante Industrial Trade Unions*, y el *Popular National Party*, de Manley, también apoyado en una organización sindical, la *National Workers' Union*. Cierto que cuando el primer ministro Ceaga, que estaba en el poder desde 1980, disolvió la Asamblea en 1983 del modo prescrito por la Constitución, como no había respetado un acuerdo político con su adversario, el PNP se negó a participar en las elecciones; el resultado fue una Asamblea monocolor, cuyo equilibrio se hallaba en un Senado en el que los dos partidos estaban representados. Pero el sistema bipartidario pervive. Ceaga aplica una política liberal, pero Manley, personalidad mucho más carismática, conserva una popularidad mayor y su partido ha ganado las elecciones municipales de 1986; podría volver al poder. La corriente populista se ha situado, por tanto, en Jamaica en el seno de las instituciones y de los ritos de una vida parlamentaria de tipo británico.

3. Rupturas del sistema político

Aunque el parlamentarismo es el envés del régimen nacional-popular, son causas opuestas las que llevan a la ruptura de uno o de otro.

La crisis del Estado de compromiso

Las causas de la crisis de 1964 en Brasil han sido dadas por A. Stepan: «1) el nivel creciente de las demandas políticas y económicas presentadas al gobierno; 2) la cantidad decreciente de recursos en manos del gobierno debida al hecho del debilitamiento del crecimiento económico; 3) una capacidad política decreciente para transformar las demandas en medidas políticas debidas al hecho de la fragmentación de los apoyos de que dispone el régimen; 4) una desaparición creciente del apoyo a ese régimen político» (cf. Bibl., IV, 3, 1973). Así, una crisis de participación se transforma en una crisis de representatividad que desemboca en una crisis de legitimidad. F. H. Cardoso (1972, páginas 92-103) añade a este análisis de una coyuntura la debilidad estructural del Estado planificador al modo de Furtado o de Vargas: «Ese Estado no tiene sustancia propia. De un lado, está vinculado a clientelas de las viejas clases agrarias y Getúlio supo siempre manejar —como

Kubitschek— las relaciones con esas clases dirigentes provinciales; de otro lado, está sometido a una presión creciente de los intereses populares; en tercer lugar, la burocracia es utilizada por la clase media para hacer que progresen sus intereses particulares.» La noción misma de Estado de compromiso indica la ausencia de un principio de control de poder y la débil capacidad de este régimen para resistir a una modificación brusca de los equilibrios en los que se basa. Sería insuficiente explicar la crisis de los regímenes nacional-populares por un desequilibrio entre las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder a ellas; la crisis proviene del sistema y se produce incluso cuando las presiones sociales son débiles, debilidad demostrada en el caso brasileño por la ausencia de resistencia popular al golpe de Estado de 1964. La crisis del régimen nacional-popular fue desencadenada por João Goulart mismo, que actuó no como responsable del sistema político, sino como agente de amplificación de la presión popular. Goulart habría podido apoyarse en los gobernadores, muchos de los cuales se preparaban para la próxima elección presidencial y estaban interesados en proteger el sistema político: Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, C. Lacerda, M. Arraes. Por su parte, los militares estaban divididos, pero Goulart anunció el 13 de marzo reformas fundamentales y un cambio constitucional que le permitirían, a él y a Brizola, ser candidatos a la elección presidencial. Además, apoyó a los marinos sublevados y atacó directamente a los jefes militares y a los parlamentarios. Es por tanto la debilidad e incluso el autodebilitamiento del sistema político lo que explica la crisis. Quienes pensaban que la presión popular podría salvar al régimen se engañaron. El *Comando Geral dos Trabalhadores* tenía menos capacidad movilizadora de lo que se pensaba; por otra parte, algunos gobernadores, Arraes por ejemplo, no estaban dispuestos a poner su capacidad de movilización al servicio de Goulart. El principio general según el cual, en los regímenes nacional-populares, los actores sociales están subordinados a las fuerzas políticas, lleva a decir que es el debilitamiento político del sistema más que la fuerza de las presiones sociales lo que explica la crisis, la caída y el golpe de Estado.

Esta conclusión puede aplicarse a otros regímenes nacional-populares, y en particular al caso de *Bolivia*. Es la crisis interna de la COB, la ruptura entre los campesinos y los obreros, la disgregación del sindicalismo campesino dividido por luchas entre caudillos como Toribio Salas y Rojas los que explican la pérdida de apoyo popular del régimen. Pero es sobre todo la crisis interna del MNR, dividida por un personalismo y un faccionalismo extremos, lo que explica su caída. El Estado nacional se descompone y las luchas regionales se desarrollan; en Santa Cruz, un movimiento separatista gana terreno. A partir de la alianza electoral de 1960 entre Paz Estenssoro y Lechín, los conflictos internos entre el gobierno y la COB terminan por debilitar al Estado. Los

dirigentes políticos dan prioridad a la reconstrucción económica del país con el apoyo de los Estados Unidos, mientras se desarrollan las luchas sindicales contra un gobierno que es en realidad un co-gobierno MNR-COB. El MNR se rompe: su ala derecha, con Guevara, se retira; Lechín crea el PRIN con la izquierda del partido, y Siles queda absorbido por su lucha contra Paz. El general Barrientos puede triunfar fácilmente en 1964.

La caída de la democracia *uruguaya* se pareció más a la caída de la Unidad Popular chilena, que evocaremos más adelante, que a la caída de la democracia de Bolivia, pero no ha conducido a una ruptura tan dramática como la que condujo a la muerte de Allende. La instalación del régimen autoritario de Pacheco Areco en 1968 y a la disolución del Parlamento por Bordaberry en 1973, aunque se produjeron en un clima de guerrillas urbanas, fueron sobre todo el acabamiento de un largo período de declive económico y de agotamiento del sistema político. A principios de siglo, Uruguay se había convertido en el país modelo que había querido Battle. Pero a partir de mediados de los años cincuenta, el estancamiento de la agricultura y de la ganadería y el final de la sustitución de las importaciones habían llevado a una disminución del PIB por cabeza y, sobre todo, a una baja acelerada de los salarios reales que continuó hasta los años ochenta. Uruguay intentó primero cambiar de modelo de desarrollo. La victoria del Partido Nacional en 1959 anunciaba una política en favor de la agricultura y el desmantelamiento del proteccionismo industrial. De hecho, tres años más tarde, no quedaba ya casi nada de ese programa. Y es que Uruguay ya no era capaz de elegir la política «ruralista» de Nardone ni de apoyar la industrialización exigida por L. Battle, sobrino del fundador del *battlismo*. El Estado se había convertido en su propio fin hinchando sus efectivos a medida que disminuían las posibilidades de inversiones productivas. El sistema político, aparentemente formado por dos partidos principales —el *colorado* y el *blanco* vuelto *nacional*—, no era de hecho más que un confuso conjunto de grupos muy feudales, que formaban las *sublemas*, es decir, las listas particulares cuyos resultados se sumaban para formar el voto del *lema* correspondiente a un partido. Este sistema no permitía ninguna solución gubernamental estable y favorecía las tendencias a una diferenciación extrema del medio político, tanto en el gobierno como en la oposición. La política de los sucesivos gobiernos no tuvo ningún carácter representativo a partir de ese momento; se redujo a un distributivismo elemental que, por su parte, apelaba a la integración neocorporativa de los intereses sociales en el aparato del Estado.

Este agotamiento del modelo uruguayo condujo, por un lado, al movimiento de los Tupamaros, y, por otro, más seguramente, a un régimen autoritario, instaurado en gran parte por los civiles mismos, mientras la población de emigración adquiría una importancia considerable, alcanzando a más de 60.000 personas en 1975.

Cuando los Tupamaros atacaron al ejército, éste empezó a intervenir. De manera suficientemente limitada como para que la central sindical, la CNT, dirigida por los comunistas, viese aspectos positivos, a la peruana, en esa intervención. Pero la verdadera orientación de los militares se manifestó en seguida, y la huelga desencadenada por la CNT tras la disolución del Parlamento, el 27 de junio de 1973, fue un fracaso. Sin embargo, se mantuvo un régimen mixto, civil y militar, y fue incluso el presidente civil, Bordaberry, quien más impulsó el fortalecimiento de la intervención militar, cuyo primer resultado fue su propia destitución, el 12 de junio de 1976. A partir de esa fecha, los militares están en todas partes y se desencadena la represión. Este lento agotamiento del régimen democrático tendrá consecuencias, porque el régimen militar se consolidará tan poco que perderá el referéndum que él mismo lanzó en 1980.

La destrucción de la democracia chilena

La explicación dada con mayor frecuencia de la caída de la Unidad Popular es el desbordamiento progresivo del gobierno de Salvador Allende por la presión obrera, las ocupaciones de fábricas, la extensión ilimitada del sector público, la formación de cordones y de comandos revolucionarios, y, finalmente, la desorganización de la distribución. Es cierto que las fuerzas revolucionarias, como el MIR y ciertos grupos de origen cristiano, supieron dramatizar la situación política, pero no amenanzaron directamente a la política moderada de la Unidad Popular. Discursos violentamente antiimperialistas florecieron en el Partido Socialista en el momento en que el gobierno chileno otorgó una acogida triunfal a Fidel Castro, pero fueron menos esas declaraciones que la nacionalización del cobre, que tuvo efectos decisivos en el plano internacional. Ciertos proyectos, como el de una Escuela Nacional Única (ENU), provocaron una viva hostilidad en las clases medias, vinculadas al pluralismo escolar, pero en resumidas cuentas, la movilización popular fue, durante el último período del gobierno Allende, relativamente débil. Tanto en Chile como en Brasil, la mejor prueba de ello fue la cuasiausencia de oposición organizada al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Hay, por tanto, que buscar la causa de la crisis de la democracia parlamentaria chilena en su propio funcionamiento, lo mismo que en el caso de regímenes propiamente nacional-populares. Más exactamente, en el desfase entre una política de cambios estructurales relativamente moderada y un discurso político e ideológico cuyo radicalismo enmascaraba la escasa capacidad movilizadora. Porque lo esencial fue la descomposición interna de la Unidad Popular, la lucha entre los partidos, y más todavía, tal vez, en el seno mismo del Partido Socialista. Desde su forma-

ción en 1933, ese partido estuvo dividido. Mientras la tendencia dirigida por Schnacke era favorable a la entrada del PC en el Frente Popular y a la candidatura de Pedro Aguirre Cerda en 1938, otra, más radical, era favorable a un Frente de trabajadores que se opusiera al Frente Popular en nombre de la lucha de clases. El PS abandonó el Frente Popular a partir de 1940 y se dividió en 1942 entre una fracción que apoyó la candidatura de Ríos y otra que presentó la de Grove, que había dirigido el efímero gobierno socialista de 1932. Una nueva escisión desembocó, en 1948, en la creación del *Partido Socialista Popular* que apoyó a Ibáñez, al menos al principio de su presidencia, mientras que el *Partido Socialista de Chile* buscaba una alianza de tipo Frente Popular con el Partido Comunista. La creación del FRAP en 1956, uniendo a los partidos socialistas y comunistas, el *Partido Democrático del Pueblo*, el *Partido Democrático de Chile* y el *Partido del Trabajo*, desembocó en un congreso de unidad en 1957. Pero, en realidad, las tres grandes orientaciones de la acción colectiva en América Latina están más yuxtapuestas que unificadas en el seno del Partido Socialista: la tendencia antiimperialista es la que triunfa en los congresos de Chillán y de La Serena; la tendencia clasista se manifiesta en la influencia de la ideología marxista; por último, la tendencia a la integración política se manifiesta por la búsqueda de alianzas con la pequeña burguesía o la construcción de un populismo nacionalista de tipo ibañista. El único principio de unidad del Partido Socialista y de la Unidad Popular fue la persona de Salvador Allende, que no siempre llegó a controlar el Partido Socialista en el que a menudo estuvo en minoría. Los partidos de izquierda de origen cristiano acentuaron la disgregación de la Unidad Popular adoptando posiciones doblemente opuestas a las del Partido Socialista: a la vez modernizadoras y basistas.

En mi libro *Vie et mort du Chili populaire* (Vida y muerte del Chile popular, 1973), indiqué que cada uno de los tres grandes componentes políticos de la mayoría del gobierno, los socialistas, los comunistas y los cristianos de izquierda, representaba un esfuerzo para unir cada vez dos de los tres temas fundamentales de la Unidad Popular. El Partido Comunista, apoyado en la central sindical, la CUT, dirigida por L. Figueroa, estuvo orientado a la vez por la acción de clase y por una voluntad de integración política; el PS fue a la vez antiimperialista y buscó la integración política; los partidos cristianos de izquierda fueron a la vez antiimperialistas y estuvieron comprometidos en una lucha de clases. De suerte que fue el PC y la CUT quienes representaron el ala moderada del régimen, mientras que los socialistas y los cristianos contribuían a su radicalización. Son, por tanto, los partidos y los grupos cuya base social procedía más de las clases medias o estaba menos claramente definida en términos de clases sociales, los que adoptaron las posiciones más radicales, lo cual manifestaba la extrema desarticulación de la acción sociopolítica. Así, mientras respetaba en general los principios de la

acción sociopolítica, la UP creó un clima de extrema radicalización a la que no correspondía una movilización poderosa. Los ataques contra el pequeño comercio, la propaganda ideológica, el sectarismo y la mala gestión de las empresas públicas, consideradas como recursos estratégicos para un partido más que como elementos de una política económica coherente, desembocaron en una radicalización de las luchas políticas —más que sociales— que entrañó una crisis general del sistema político. De la misma manera que en los países europeos socialdemócratas unas huelgas salvajes reaccionaron contra el papel negociador e incluso cogestionario de sindicatos reconocidos como interlocutores sociales, así en Chile y en otros países de América Latina se desarrolló un movimiento popular radical, ampliamente alentado por los intelectuales. La acción de clase, tal como la habían concebido los teóricos y los procuradores del movimiento obrero europeo, no se formó casi nunca; se descompuso entre, de un lado, una participación sociopolítica acelerada, y de otro, movimientos de base cuyo radicalismo ideológico no condujo a una movilización masiva de los trabajadores. N. Lechner expresa bien esta debilidad: «La UP oscila entre una estrategia de clase que busca la destrucción del aparato del Estado partiendo de abajo y un tipo de populismo que moviliza partiendo de arriba a las masas apoyo de la política gubernamental.» Mientras que ideólogos y grupúsculos repetían hasta la saciedad que la situación era revolucionaria y que había que evitar todo espíritu de reforma limitada, R. Debray (cf. Bibl., IV, 2, 1974, tomo I, pág. 315) recordó con buen sentido que la situación chilena no era revolucionaria ni en 1969 ni después de diciembre de 1970: «Una noche de elección no sustituye a una crisis nacional general.»

A partir de 1970 se desarrollaron de este modo en Chile, de manera simultánea pero ampliamente contradictoria, un proceso político democrático, unas formas particulares de política nacional-popular y, finalmente, presiones revolucionarias que provocaron a su vez reacciones contrarrevolucionarias, pronto apoyadas por una gran parte de la derecha y del centro y por el ejército. También aquí la caída vino más de la descomposición interna del régimen que de la fuerza de sus enemigos. Los políticos parlamentarios de inspiración nacional-popular no son capaces de asegurar la integración de objetivos muy diversos, cosa que sólo llega a hacer un líder. Salvador Allende fue ese líder, en la medida en que representaba a todas las tendencias de la Unidad Popular, pero el sistema parlamentario en que funcionaba Chile no le daba la fuerza integradora de un líder populista. La Constitución chilena de 1925 le había permitido incluso llegar al poder en unas condiciones de debilidad relativa, puesto que, como Alessandri en 1958, no había reunido más que una minoría de votos: el 36,3 por 100 frente a los 34,98 por 100 de Alessandri y el 27,8 por 100 de Tomic. La Unidad Popular sólo podía gobernar gracias a los acuerdos firmados con la Democracia Cristiana, pero no era capaz de mantenerse en el seno de esos acuerdos y, por tanto,

se encontraba desbordada por algunos de sus componentes. Pese a sus esfuerzos, Allende fue incapaz de limitar los empujes revolucionarios y de conciliar el aspecto nacional-popular de su política con las reglas del juego del Pacto institucional. Paralelamente, y de manera más decisiva, la Democracia Cristiana no fue ya capaz de combinar su voluntad de oposición a la política de la unidad nacional con la salvaguarda del sistema institucional. De suerte que la crisis desencadenada por la voluntad de ruptura de la Democracia Cristiana desembocó no sólo en el derrocamiento de la Unidad Popular, sino en la destrucción general de un sistema político al que la grave crisis económica había privado de todo apoyo popular. La crisis política no puede explicarse de otro modo que como la descomposición de elementos frágilmente asociados en un régimen nacional-popular, y, sobre todo, en la amalgama de política nacional-popular, de régimen parlamentario y de lucha de clases que caracterizaba a la vida política chilena.

Pero hay que remontarse más allá de 1970 para encontrar las causas más profundas de la crisis. En este país tan orgulloso de su tradición democrática, la democracia era más débil de lo que parecía, porque se reducía a un «consumo político», progresivamente ampliado, pero que casi nunca había llegado a transformarse en proceso endógeno de modernización. Aníbal Pinto, en un libro justamente célebre (cf. Bibl., I, 1, 1959), ha hablado de Chile como un caso de desarrollo frustrado. La extensión de la clase media e incluso la entrada en el sistema político de una parte importante de las clases populares urbanas siempre habían ido acompañadas en Chile de una debilidad de la burguesía industrial, que no compensaba suficientemente la voluntad industrializadora del Estado. El parlamentarismo chileno manifestaba menos el funcionamiento democrático de una sociedad que la fuerte desarticulación de un país donde la apertura de la vida política se acomodaba demasiado fácilmente a un débil desarrollo económico y donde los intelectuales daban expresión revolucionaria a lo que no era más que la extensión de la participación política.

Su amalgama de voluntad revolucionaria y de espíritu democrático sitúa a la Unidad Popular chilena en el meollo de la historia reciente de la América Latina, pero por razones inversas a las que evocaron entonces los actores principales de ese período. Pensaban que la democracia política debía desembocar en la revolución social y en la liberación nacional de un país sometido al imperialismo de los Estados Unidos y del conjunto del sistema capitalista mundial. El fracaso dramático de la Unidad Popular que condujo al golpe de Estado demostró, por el contrario, que unas transformaciones sociales profundas no podían llegar a buen término, en una situación que no podía ser la dictadura del proletariado, más que apoyándose en una amplia mayoría y, por lo tanto, reforzando la prioridad del tema de la democracia sobre el tema de la revolución. Lo cual suponía poner fin a la desarticulación de la vida

política y de la actividad ideológica en relación a la realidad económica y social. Fueron los comunistas italianos los que mejor sacaron la lección del golpe de Estado en Chile elaborando la estrategia del *compromiso histórico*, es decir, la construcción de un acuerdo ampliamente mayoritario con la Democracia Cristiana.

2.—De las guerrillas al poder revolucionario

1. La violencia política

No todo conflicto es violento; se vuelve violento cuando deja de ser negociable y se transforma en contradicción, en guerra. Un conflicto social supone que los adversarios enfrentados tengan en común ciertos valores culturales e incluso ciertas formas de regulación institucional de su conflicto. Si no es así, cada uno de los adversarios se siente amenazado, en su existencia misma, por un enemigo, venido de fuera, con el que no tiene nada en común. El enfrentamiento ya no puede ser más que un juego en el que lo que el uno gana es lo que el otro ha perdido, como en el caso de la guerra en que un territorio es conquistado por un campamento a expensas de otro. La violencia política aparece, por tanto, cuando unos actores sociales se transforman en cuasi-Estados, luchando contra otros Estados, e identificándose con valores que están directamente amenazados por un enemigo definido como el mal o la barbarie.

Los movimientos sociales pueden llevar en sí una violencia limitada en la medida en que desbordan las reglas institucionales establecidas para la solución de los conlictos, pero son, en su principio mismo, opuestos a la violencia, dado que se sitúan en el seno de ciertas orientaciones culturales, como los patronos y los obreros oponiéndose unos a otros por la dirección de la industrialización y el reparto de sus recursos. Los conflictos del trabajo han sido, en resumidas cuentas, poco violentos, al menos cuando el Estado no ha intervenido directamente, dado que

patronos y obreros, enfrentados unos a otros por sus intereses, estaban al mismo tiempo cerca unos de otros, porque eran los actores centrales de la industrialización. Los conflictos del trabajo no han creado por sí mismos ninguna guerra civil. La violencia destruye, por tanto, primero, los movimientos sociales y no es casualidad que los regímenes políticos nacidos de la violencia revolucionaria destruyan, ente todo, los movimientos sociales de los que han salido, como ha demostrado de manera repetida la historia de los regímenes de tipo soviético. Las acciones colectivas que llevan en sí la violencia son, por tanto, aquellas que, en lugar de referirse a un conflicto de intereses y a una comunidad de cultura, apelan a un tiempo a la defensa de una comunidad y a la lucha contra un enemigo definido como extranjero.

En las *sociedades dependientes*, de tipo latinoamericano, la violencia está constantemente presente, porque las luchas sociales no pueden desarrollarse contra un enemigo definido por entero en términos económicos e institucionales. La conversión de los movimientos sociales en violencia política es inevitable, dado que el poder económico es, en gran parte, extranjero y a menudo está mantenido por la intervención política y militar de una potencia extranjera. Contra esta dominación exterior, las luchas sociales se asocian a la defensa de la identidad nacional, de suerte que unos movimientos de liberación nacional son a la vez nacionales y sociales. Esta violencia política adopta una forma particularmente importante en los países en que la intervención extranjera es más directa, países colonizados o sometidos a la ocupación extranjera, como lo han sido tantos países de América central y del Caribe. En América del Sur, la violencia política trata de apoyarse a veces en la conciencia étnica de una población indígena dominada, otras veces en un nacionalismo exacerbado por una crisis nacional, económica o política.

Así, la violencia política aparece a un tiempo como lo contrario de los regímenes nacional-populares y como una de sus tendencias. De la misma manera que la economía latinoamericana aparece a la vez dotada de un gran poder de integración y como creadora de exclusión, la política latinoamericana está dominada conjuntamente por la *hiperparticipación política* y cultural de las masas urbanas y por una *violencia* que responde a la exclusión. Al distinguir diversas formas de violencia política, trataremos de ver, pues, en qué casos es disociable de los regímenes nacional-populares y en qué casos, por el contrario, se separa de ellos, de la misma forma que una sociedad colonial se distingue de una sociedad dependiente.

Pero antes de pasar revista a las diversas formas de acciones o de movimientos violentos que apelan a unas categorías populares, hay que recordar que la violencia está inscrita, ante todo, en la realidad latinoamericana por la *represión* a la vez social y política que sufren las categorías más pobres, sobre todo en el campo, donde los grandes

propietarios mantienen su poder absoluto, no sólo a través de las presiones económicas y de las manipulaciones culturales, sino ante todo a través de una represión brutal ejercida bien por policías privados, bien por el ejército nacional. A esa violencia ejercida por los dueños de la tierra se añade una violencia más directamente política, ejercida por grupos paramilitares que actúan sobre todo en el campo en América central, en El Salvador o en Guatemala, pero que también han actuado en las ciudades, como los «Escuadrones de la Muerte» brasileños y la Triple A en la Argentina de la dictadura militar. Toda la vida institucional de la América Latina está cercada por una inmensa zona de violencia cuyos actores son tanto *Sendero Luminoso* como el ejército en Perú, las FARC o el M 19 tanto también esta vez como el ejército en Colombia, la violencia de los Montoneros tanto como la de los organismos militares que, desde 1976, hicieron desaparecer millares de víctimas en Argentina. Sorprendentes son la permanencia y la amplitud de la violencia manifestada por las intervenciones militares del extranjero, de los Estados Unidos en particular, y por el robo de sus tierras a unas comunidades indígenas o a pequeños campesinos por grandes propiedades apoyadas por los poderes político y judicial, o por la represión sangrienta de huelgas como ocurrió, en particular, en los países de enclaves mineros, por ejemplo, a principios de siglo en Iquique, donde centenares de mineros fueron ametrallados por el ejército chileno. Pero más sorprendente todavía es la fuerza de los mecanismos de integración política, que vuelve difícil e incluso la mayoría de las veces imposible el paso de la protesta y de la lucha a la ruptura y a la violencia revolucionarias. Tan difícil es salir del régimen nacional-popular hacia la violencia como hacia la democracia representativa o hacia el Estado nacionalista autoritario. A pesar de la explotación y la dominación, el sistema político latinoamericano da testimonio de una extraordinaria capacidad de integración, de modo que son muy poco numerosos los casos en que la violencia social se ha transformado en revolución o en poder revolucionario.

2. Las guerras de liberación nacional

Por tanto hay que oponer dos tipos principales de violencia política organizada en nombre de la defensa de los intereses populares. De un lado, aquella que ya no pertenece al régimen nacional-popular y a la situación general de las sociedades dependientes, porque responde a una dominación de tipo colonial; de otro, la que permanece profundamente ligada a regímenes nacional-populares cuando éstos se hallan en crisis o en descomposición. La fuerza del modelo político latinoamericano hace que estas formas de descomposición, ese populismo y ese nacionalismo vueltos revolucionarios hayan tenido una importancia

más difusa y más constante sobre el conjunto del continente que los movimientos anticolonialistas de liberación nacional, porque éstos corresponden a una situación colonial que, en lo esencial, no es la de América Latina. Es sobre todo en América central y en el Caribe donde se han formado acciones violentas dirigidas por vanguardias revolucionarias que luchan contra el colonialismo, antes que movimientos sociales y nacionales apoyados en una amplia base popular. La importancia extrema del movimiento sandinista en Nicaragua, objeto de juicios contradictorios, procede de que es el único ejemplo de combinación de una movilización de masas y de instalación en el poder de una vanguardia política. El análisis de la revolución nicaragüense estará, por tanto, en el centro de este capítulo puesto que, más aún que una reflexión sobre Cuba o sobre la guerrilla del *Che* Guevara en Bolivia, es ella la que debe permitirnos llegar a conclusiones favorables a una tesis o a otra: la lógica dominante de la situación latinoamericana ¿conduce hacia una ruptura revolucionaria preparada por movimientos de liberación nacional y que desembocan en un poder capitalista y sobre todo antiimperialista, o la violencia política no es más que una forma particular de la crisis de los regímenes nacional-populares?

Cuando se habla de *guerra de liberación nacional* se quiere decir que los movimientos sociales populares se ven conducidos de forma natural a dar prioridad a la vez a la lucha contra un enemigo exterior, el imperialismo, y contra un poder político al servicio de esa dominación exterior. La guerra de liberación es siempre más nacional que social, lo cual supone que de las tres dimensiones de la acción colectiva —nacional, de clase y modernizadora— es la primera la que ocupa un lugar central, porque la acción de clase en un país subdesarrollado sólo puede ser débil y estar subordinada a un frente multiclasista de defensa de la independencia nacional, y que, por su parte, el tema de la modernización se halla pervertido porque es utilizado al servicio de la potencia colonial. Una guerra de liberación nacional es, por tanto, nacionalista, multiclasista y antimodernizadora, en el sentido en que Frantz Fanon apelaba, para dirigir la lucha de liberación nacional, a las fuerzas sociales más alejadas de la influencia del poder colonizador y de las alienaciones que crea.

Tradicionalmente, en América central un gran número de políticos y de intelectuales han definido la situación de la región en términos más geopolíticos que sociales. Por ese motivo José Martí es una figura importante en todo el continente, y en particular en toda la América central. Luchando por la independencia de *Cuba,* no se limitó a través de su largo exilio, a denunciar la dominación española y a escribir en 1895 con Maceo el Manifiesto de Montecristo: a partir de 1889 y 1891 profetizó que la intervención de los Estados Unidos crearía una nueva amenaza contra la independencia de su país. Durante el siglo XX, la presencia militar, política y económica de los Estados Unidos en el istmo y en países como Cuba, Haití y la República Dominicana ha creado una situación

propiamente colonial y ha impedido, por consiguiente, la integración nacional y social. La dominación de una clase de capitalistas agrícolas o industriales era menos importante que el peso de los grandes dominios mal explotados por un capitalismo especulador, el de la corrupción administrativa y moral, la importancia del paro y el subempleo, por ejemplo, en el caso de los trabajadores temporeros de la cosecha —de la zafra— en Cuba. Existen desde luego en esos países movimientos a la vez sociales y antiimperialistas. Eso fue lo que ocurrió, durante la dominación española, con la lucha de los *Trinitarios* en la *República Dominicana*, que se opusieron a la vez a la dominación extranjera y a la de los *hateros*, dueños de la ganadería intensiva. Ése fue también, más recientemente, el sentido de las sublevaciones populares urbanas y nacionalistas que se produjeron en ese país, en 1965, cuando jóvenes oficiales dirigidos por el coronel Caamaño se pusieron al frente de la resistencia ante la intervención militar de los Estados Unidos. Pero la asociación de temas sociales y nacionales no se realiza fácilmente, como muestran los casos opuestos de Guatemala y de Nicaragua.

Guatemala

En este país, las luchas políticas y las guerrillas no se han transformado en un movimiento revolucionario de liberación nacional. Por el contrario, constantemente se ha mantenido el estallido de las tres dimensiones —integración nacional, lucha de clases y acción antiimperialista— cuya interdependencia constituye la política nacional-popular. Cierto que cada una de esas orientaciones se ha radicalizado, pero ninguna de ellas ha logrado conquistar la hegemonía y ningún grupo dirigente, ninguna vanguardia revolucionaria ha conseguido imponerse a la cabeza de un movimiento unificado. Tras el fracaso de los programas de reforma lanzados por Arévalo en 1944 y Arbenz en 1950, con el apoyo de elementos de la clase media modeerna y, sobre todo, del Partido Comunista, y tras la invasión del país por Castillo Armas apoyado por la CIA, en 1954, se formó un movimiento nacionalista revolucionario que combatió a los dirigentes políticos reaccionarios y sumisos a los Estados Unidos. Jóvenes oficiales estuvieron implicados en este movimiento, que adoptó de forma simultánea varias direcciones opuestas. El nacionalismo antiimperialista fue representado por oficiales como Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima, que intentaron un golpe militar en 1960. El tema de la integración política y social siguió siendo constantemente central para el Partido Guatemalteco del Trabajo, partido comunista que había ejercido una gran influencia durante el gobierno de Arbenz. La revolución social permanente era el objetivo de los trotskistas que se esforzaron por organizar a los campesinos. Yon Sosa y su movimiento, el MP 13, pasaron bajo su influencia y en particular bajo la dirección política de Adolfo Gilly. Estas tres tendencias trataron de unirse. Un

dirigente comunista, Ricardo Ramírez *(Orlando)*, se declaró favorable a la lucha armada entre los campesinos. De este modo se organizó una guerra del pueblo, dirigida por la guerrilla Edgar Ibarra. El PGT creó las FAR, *Fuerzas Armadas Rebeldes*, cuyo jefe, L. A. Turcios, muy cercano al Partido Comunista, tenía al mismo tiempo un proyecto democrático y nacional. Pero esta alianza, buscada por algunos, nunca llegó a realizarse. El Partido Comunista volvió a su búsqueda de un frente nacional popular y apoyó la candidatura presidencial de Montenegro, mientras Sosa seguía aislado tras el fracaso de su encuentro con Turcios. Guatemala no logró integrar la acción de un partido y la de un foco de guerrilla, la lucha política y la lucha militar. Estos componentes de la acción, que a menudo se unen en una situación colonial, siguen separados en una situación de dependencia, lo cual muestra que Guatemala pertenece al modelo dominante en América Latina, el de las sociedades dependientes, antes que a la situación colonial. Pese a la importancia de la dominación americana, en Guatemala se mantiene un proceso político bastante autónomo para que el Partico Comunista intente concluir alianzas y organizar su frente de oposición. La lucha armada pierde entonces su carácter de guerra de liberación nacional y se reduce a una guerrilla local. Tras la muerte de Turcios, César Montez intenta de nuevo acercarse a Yon Sosa: ambos entran en las nuevas FAR, que rompen con el Partido Comunista. Pero la guerrilla se vuelve terrorista asesinando al embajador americano, lo cual desencadena una violenta represión y conduce a la desaparición progresiva de las FAR a partir de 1971. Entre la línea «china» de Yon Sosa, que busca la creación de un gobierno obrero y campesino en un territorio liberado, y la línea comunista oficial era imposible la unión: de ahí la separación del MP 13 de Yon Sosa y de las FAR de Turcios, que el Partido Comunista utiliza menos como instrumento de guerra de liberación nacional que como medio de presión para obtener un gobierno democrático. Ricardo Ramírez pensaba que las luchas agrarias y la lucha antiimperialista debían estar vinculadas a la construcción del socialismo, sin que por ello tuvieran que situarse por entero en el seno de una acción política dirigida por un partido revolucionario. Esta fórmula de integración limitada no fue posible siquiera y el propio Ramírez terminó por alejarse del Partido Comunista. El sueño de crear una guerra popular a la china o a la vietnamita fracasó, lo cual muestra hasta qué punto sigue inscribiéndose la violencia política en Guatemala en el seno del modelo nacional-popular.

La Nicaragua sandinista

Frente a la Guatemala dividida, desgarrada entre varios modelos de lucha popular, Nicaragua ha conocido luchas precoces de liberación nacional. La acción de Sandino, entre 1926 y 1933, fue ante todo nacionalista y antiimperialista: su objetivo era liberar Nicaragua de la ocupación

militar norteamericana. A pesar de la imagen de su acción que ahora construyen los sandinistas actuales, Sandino tuvo pocas preocupaciones sociales, entró en conflicto con la III Internacional, y se separó del marxista salvadoreño Farabundo Martí que había participado en la lucha. Su preocupación central fue oponerse al proyecto de canal interoceánico preparado por los norteamericanos y que debía cortar en dos Nicaragua. Su lucha armada se desarrolló sobre todo en Las Segovias, cerca de la frontera con Honduras, y concluyó el 2 de febrero de 1933 mediante un acuerdo con el nuevo presidente liberal, Sacasa, que dejó a Sandino sin fuerza militar y sin influencia política. Somoza, al frente de la Guardia Nacional, tras haber derribado a Sacasa, asesinó fácilmente a Sandino. Las guerrillas de los años sesenta en América central y del Sur no tuvieron influencia directa sobre la acción del movimiento sandinista. Y es que éste debía luchar contra una situación muy particular —la dictadura de la familia Somoza, que trataba de monopolizar los recursos del país— en el momento mismo en que un desarrollo económico ampliamente acelerado por el Mercado Común Centroamericano creaba nuevas categorías urbanas, empresarios, obreros y empleados. De suerte que el *Frente Sandinista de Liberación Nacional* no tuvo dificultad para evitar el conflicto entre nacionalismo y revolución social, puesto que los intereses de las nuevas categorías sociales coincidían fácilmente con el tema de la liberación nacional en una lucha común contra un régimen que ya no dejaba más espacio a una «burguesía nacional» que a unas reivindicaciones populares. A diferencia de El Salvador, Nicaragua no había conocido, durante el desarrollo del café, la creación de una fuerte burguesía agroexportadora. Solo el algodón, después de 1945, permitió cierto desarrollo económico. Lo cual explica la debilidad de los industriales y comerciantes que fueron eliminados por Somoza y su clan. Mientras que en Guatemala y en El Salvador el debate político central giraba en torno a las relaciones entre los nuevos capitalistas y la oligarquía agroexportadora y desembocaba, por regla general, en una alianza de estos dos grupos, a pesar de los esfuerzos reformadores de la democracia cristiana, en Nicaragua estos nuevos industriales y comerciantes, al no tener ningún espacio político propio, hubieron de alejarse de los partidos tradicionales, romper con Somoza e incluso, para algunos de ellos, participar en la lucha armada. En 1946 ya una fracción del *Partido Liberal Nacionalista*, el partido de Somoza, se había opuesto al dictador, formando el *Partido Liberal Independiente*, que reconoció en 1978 el papel central de la lucha armada; de igual modo en 1956, el *Partido Conservador Demócrata* se había separado del *Partido Conservador* e, incluso aunque se había negado a participar en la lucha armada, había ejercido en el campo una influencia antisomozista.

La lucha armada contra Somoza se alejó rápidamente de las guerrillas castristas, sobre todo después de que el principal dirigente de la guerrilla, Carlos Fonseca, fuera muerto en 1977. El movimiento incorporó

una estrategia política a su acción militar, lo cual desembocó en un estallido. Se separaron tres tendencias: la primera, llamada de la *guerra popular prolongada,* con T. Borge y B. Arce, representaba a la vieja guardia, cercana al modelo soviético; la tendencia *proletaria*, con J. Wheelock y C. Núñez, estaba influida por las teorías extremas de la dependencia y la experiencia de la Unidad Popular chilena; los *terceristas* intentaron superar esa oposición y conquistaron una gran influencia, sobre todo estableciendo alianzas con otras fuerzas antisomozistas, cristianos o conservadores radicalizados, como E. Pastora, y recibiendo el apoyo de socialdemócratas extranjeros, como Figueres, Palme o Willy Brandt; los hermanos Ortega fueron sus líderes. A partir del terremoto de 1972 y de las malversaciones de la familia Somoza, que se apoderó de los fondos enviados por los países extranjeros, el apoyo de la burguesía al régimen disminuyó. Desapareció cuando el dictador asesinó al director del periódico *La Prensa*, P. J. Chamorro, que también era un dirigente político importante. De suerte que en el momento de la victoria, el 19 de julio de 1979, tras el fracaso de una tentativa norteamericana para reemplazar a Somoza por uno de sus primos sin influencia, el *Frente Sandinista de Liberación Nacional* se apoyaba en una base muy amplia. El poder casi absoluto de los nueve comandantes no parecía estar en contradicción con la presencia en la junta de gobierno de miembros de la burguesía antisomozista o con el apoyo dado, pocos meses más tarde, por los siete obispos del país. La lucha armada de Nicaragua fue, por lo tanto, al menos a partir de 1974, mucho menos una guerrilla que una guerra de liberación nacional o incluso una guerra de creación nacional, dado que este país estaba débilmente integrado. La costa del Pacífico y la costa del Atlántico, separadas por la cordillera Central, no estaban prácticamente unidas: Nicaragua había estado sometida a una larga dominación norteamericana, desde la caída del liberal Zelaya en 1909 hasta poco antes de la muerte de Sandino, y finalmente había estado sometida durante largo tiempo a la dictadura corrompida, plebeya e ineficiente de la familia Somoza.

El régimen creado tras la caída de la dictadura de los Somoza es objeto de interpretaciones contradictorias. Muchos han tratado de ver en la Nicaragua revolucionaria una forma particular de régimen populista, un populismo y un nacionalismo revolucionarios. Los defensores de esta tesis han insistido, sobre todo, en el mantenimiento de cierto pluralismo político, de un sector privado de la economía y de una libertad de prensa al menos parcial. En efecto, incluso aunque esa apertura sea limitada y provisional, Nicaragua no ha conocido un control político tan concentrado y tan total como Cuba, conquistada por Fidel Castro. Algunos observadores han ido, incluso, mucho más lejos. Los trotskistas han atacado la composición «pequeño-burguesa» del grupo dirigente, y otro «izquierdista», J. Petras, en la *Monthly Review*, en octubre de 1979, anunció incluso de manera sorprendente que el régimen sandinista,

demasiado moderado y aislado de las masas, evolucionaría hacia la derecha siguiendo el ejemplo de Mario Soares en Portugal. Tales análisis han quedado rápidamente desmentidos por los hechos, porque tratan de aplicar el modelo que domina América Latina en un caso en que, precisamente, no se aplica. Desde el principio, el mexicano J. Castañeda había visto con toda precisión: había previsto la victoria de los revolucionarios. Es que, en efecto, el régimen sandinista está mandado por una lógica central, la de la *lucha antiimperialista*. Cierto que la unión de una parte de la burguesía a la lucha contra el dictador desembocó en 1979 en la creación de un frente antisomozista, que explica la apertura aparente del régimen al principio. Los hombres de negocios se esforzaron por mantener un sector privado de la economía; en el terreno de la prensa, los herederos de P. J. Chamorro se dividieron: dos de ellos crearon priódicos pro sandinistas, mientras que *La Prensa* continuó varios años su publicación, pero al servicio de una oposición que cada vez se hacía más difícil debido a la censura, antes de ser prohibida y luego autorizada de nuevo en 1987.

Antes y después de la caída del régimen somozista, el sandinismo parece vacilar entre la búsqueda de una coalición de las fuerzas de oposición y una toma directa del poder. Los elementos liberales que habían estado cerca del Frente Sandinista y que luego lo combatieron han tratado de mostrar las posibilidades reales de una política reformista. Pero resulta difícil seguir algunos análisis como los de A. Cruz. Los sandinistas habían combatido, desde antes de 1979, al *Frente Amplio Opositor* formando un *Frente Patriótico Nacional,* que correspondía a la fórmula clásica de los frentes nacionales creados en todas partes por los partidos comunistas en su estrategia de toma del poder. Los sandinistas reformaron muy pronto el Consejo de Estado para asegurarse en él la mayoría y reducir a sus compañeros-adversarios a la impotencia. Los *terceristas* se dividieron rápidamente: Humberto y Daniel Ortega se unieron a la voluntad de las otras dos tendencias de hacerse con el poder, mientras que el frente sur, con Pastora, se alejaba cada vez más del Frente Sandinista. Esta evolución política no fue determinada por la inversión de la política americana, cuando Reagan sustituyó a Carter. Incluso entonces Nicaragua recibía ayudas exteriores importantes, más de 1.500 millones de dólares, entre julio de 1979 y febrero de 1982, y el apoyo de los socialdemócratas europeos, del venezolano Carlos Andrés Pérez y del general Torrijos de Panamá. Es que los combatientes sandinistas no estaban movidos por concepciones sociales y políticas sino, ante todo, por la conciencia aguda, semejante a la de Fidel Castro, de la lucha inevitable con los Estados Unidos. No creían en la posibilidad de construir el socialismo en un solo país de América central y su pensamiento político estaba dominado por la oposición de los dos campos, el del imperialismo y el del socialismo. De ahí el régimen de movilización permanente al que ha estado sometida Nicaragua y que se ha

vuelto más duro cada vez a medida que se reforzaba la ayuda americana a los *contras* y aumentaban las dificultades económicas. No sólo es falso ver en la Nicaragua sandinista una especie de socialdemocracia revolucionaria, sino que además ese país no ha conocido el equivalente del largo período de voluntarismo que marcó a Cuba en la época de Guevara y hasta 1968. Nicaragua está dirigida por comandantes sandinistas que controlan un poder sin repartirlo con nadie. Pueden reforzar su control sobre el país o, por el contrario, dar al exterior la imagen de una democracia pluralista.

Las elecciones de 1984 permitieron una expresión limitada de las opiniones: el Frente Sandinista recogió el 66,97 por 100 de las opiniones, frente al 14,04 por 100 del PCD, el 9,61 por 100 del PMI y el 5,57 por 100 del PPSC, pero la política sandinista estaba y sigue estando dominada por la situación geopolítica del país y por la historia de la dominación sufrida. En la Conferencia Permanente de los partidos políticos de América Latina, en febrero de 1982, la delegación nicaragüense declaró que rechazaba el papel de «reserva política» que los Estados Unidos habían impuesto a su país. El sociólogo y viceministro M. D. Castilla, en una mesa redonda organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, declaró que no había solución intermedia entre la revolución de liberación nacional y la contrarrevolución dirigida por los Estados Unidos. La organización de los *contras*, a partir primero de elementos de la Guardia Nacional somozista y luego de manera cada vez más diversificada, creó una situación análoga a la de la Revolución francesa en 1793. Nicaragua se siente amenazada por los Estados Unidos, directamente a través del bloqueo económico y los planes de intervención armada, e indirectamente a través del apoyo económico y militar dado a los *contras*. Los nueve comandantes se pusieron al frente de una política dominada por esa conciencia de la guerra, presente o amenazadora, considerada por ellos como ineluctable. Puede creerse a Bayardo Arce, uno de los nueve y coordinador de la comisión política del Frente Sandinista que, hablando ante el comité político del pequeño Partido Socialista Nicaragüense, es decir, del partido comunista pro soviético, justificaba la necesidad de elecciones para obtener el apoyo de la comunidad internacional, y en particular de los socialdemócratas europeos y de los gobernantes latinoamericanos moderados, pero subrayando que esta táctica no debía debilitar la dictadura del proletariado. A partir de finales de 1985, el régimen, amenazado por la crisis económica y la acción de los *contras*, endurece su control político, proclama el estado de emergencia, suspende las libertades, entra en conflicto abierto con la Iglesia. Todas estas medidas son susceptibles de ser suavizadas o incluso abolidas durante un tiempo porque no tienen sólo un objetivo de control político; también son medidas de guerra. Pero lo esencial del régimen está constituido cada vez más por el sistema de control político de la población: 60.000 personas están organizadas en 15.000 comités de defensa

sandinistas. Hay comités locales que tienen cierta autonomía, pero sus secretarios son casi siempre militantes del Frente. El control sandinista sobre el sindicalismo es completo, a pesar de un aparente pluralismo. La organización de las mujeres, la AMSLAE, está estrechamente controlada por el Frente, como lo está el UNAG, organización de campesinos, y como lo están los CEP, grupos de educación popular. El régimen ha puesto en práctica un gran programa de defensa de la cultura nacional e incluso ha difundido ampliamente la obra «modernista» de Rubén Darío, pero siempre ha afirmado que no hay cultura independiente de las necesidades del pueblo. Sergio Ramírez ha dicho que los sandinistas nunca podrían admitir la existencia de una cultura aislada del proceso revolucionario. La editorial oficial, Nueva Nicaragua, está estrechamente sometida a la línea definida por el poder político.

Es en el seno de ese control político muy estricto, ejercido por unos dirigentes revolucionarios sobre una sociedad que ellos estiman en *guerra,* donde se mantienen ciertos elementos de *populismo revolucionario*, que constituyen la tendencia denominada «hegemonía popular», y que se apoyan en ciertas organizaciones de base. Lo que sucede es que el partido se alía con esas organizaciones contra la burocracia del Estado; la mayoría de las veces, el partido y la organización del Estado resisten a la presión de las organizaciones de base. Esta tendencia «hegemonía popular» se ve reforzada sobre todo por la acción de grupos cristianos revolucionarios. Pero la Iglesia del pueblo, en Nicaragua, es más visible en la cima que en la base de la sociedad. Aquí, a diferencia de Brasil, no son las comunidades de base las que juegan el papel principal, sino algunos sacerdotes y religiosos directamente comprometidos en la acción política, como Ernesto Cardenal, poeta y ministro de Cultura; su hermano Fernando, jesuita y ministro de Educación; Edgar Parrales, delegado en la OEA, y sobre todo Miguel de Escoto, sacerdote Maryknoll formado mayormente en los Estados Unidos y ministro de Asuntos Extranjeros. Este grupo de religiosos comprometidos con la revolución sandinista nunca obtuvo un apoyo popular masivo y desencadenó la hostilidad del Papa, que veía en la Iglesia popular un riesgo de cisma, semejante al que había afectado a la Iglesia en Francia durante la Revolución. Por tanto, aquí es la lógica de la instalación de un poder posrevolucionario absoluto, más que la presión de las demandas populares lo que marca la evolución del régimen. Monseñor Obando y Bravo, que nunca se había unido realmente a la revolución sandinista, dirige la acción contra el grupo de sacerdotes revolucionarios, pero sin intentar sublevar al mundo católico contra el régimen. En 1985-1986, la tensión entre la Iglesia y el poder disminuye en Nicaragua, lo mismo que en Cuba. Incluso se encarga al cardenal buscar un compromiso entre el gobierno y la *contra.*

En un país agrícola como Nicaragua, el mejor medio que tiene el poder revolucionario para revelar su naturaleza es su política en el campo. Los sandinistas habían anunciado medidas al servicio de las categorías

más pobres. En realidad, su acción tuvo dos aspectos, ninguno de los cuales aprovecha a éstas. El primero fue la toma de las posesiones personales de Somoza y de su clan, lo que permitió al sector público pasar del 15 al 41 por 100 del producto nacional entre 1977 y 1981. Por otro lado, y sobre todo, el régimen sandinista, presionado por las necesidades, dio rápidamente prioridad a la agricultura de exportación en un país cuya economía toda dependía del algodón y de otros cultivos de exportación. Al mismo tiempo, el régimen trataba de satisfacer a su base social más importante, el pequeño pueblo urbano, dándole alimentos a bajo precio. Los pequeños productores, independientes o dependientes, y los obreros agrícolas fueron los grandes sacrificados de esta política. Su nivel de vida bajó fuertemente a partir de 1979 y el campesinado pobre se atrincheró en una desconfianza hostil respecto al régimen. Para esos campesinos, la revolución no había marcado más que un cambio de amo. Este mundo campesino se unió a la Iglesia en su hostilidad respecto a un régimen cuya preocupación principal era establecer su propio poder. En cuanto al mundo obrero, demasiado débil para jugar un papel de vanguardia revolucionario, vio sus sindicatos subordinados al poder político y privados de su capacidad de negociación colectiva. También él se encerró en una oposición creciente.

Esta construcción de un poder revolucionario se realiza a través de estrategias a veces complejas que nunca cuestionan el monopolio de poder de los dirigentes del Frente, seguros del conflicto ineluctable con los Estados Unidos. El régimen sandinista empuja a una movilización política tanto más autoritaria cuanto que mayores son las amenazas exteriores e interiores. Obtiene de ello resultados; en particular, la juventud de las ciudades se moviliza en su favor, pero se trata de un apoyo no estructurado.

El poder absoluto de los dirigentes políticos quedó demostrado por su conducta respecto a los indios miskitos. Diversos grupos sociales y étnicos de la costa atlántica vivían de hecho fuera de Nicaragua, hablando una lengua anglo-criolla y no el español, pero sólo los miskitos habían creado un nacionalismo apoyado en la conciencia de su identidad étnica y en la influencia del protestantismo de la Iglesia morava, que se había identificado con este grupo étnico de 70.000 personas. La organización Misurasata, que se forma en 1981, no es en modo alguno tradicionalista sino, por el contrario, de un nacionalismo modernizador. Brooklin Olivera, miskito exiliado por los sandinistas en 1981, es un líder representativo de la nueva generación, que tiene una conciencia más nacional que étnica. El régimen responde con brutalidad mediante un desplazamiento forzoso de más de 8.000 personas a campos de reagrupamiento, lo cual provoca un exilio masivo de los miskitos hacia Honduras y la participación de algunos de ellos en la acción de los *contras*. T. Borge, uno de los principales dirigentes del Frente, reconoció los errores de la política oficial y, a partir de 1985, se abren negociaciones con Brooklin Olivera

para organizar un gobierno regional autónomo. Muchos indios deportados vuelven entonces a sus tierras. En 1987, Borge prepara un estatuto de autonomía para la región atlántica.

Cualquiera que sea el futuro del régimen, y en particular de sus relaciones con los Estados Unidos, Nicaragua no pertenece ya al conjunto del sistema nacional-popular. Su lógica es la de la lucha antiimperialista y, por consiguiente, del alineamiento con Cuba y la Unión Soviética, que son sus apoyos principales contra el bloqueo y la amenaza de invasión procedente de los Estados Unidos. El régimen no responde a demandas y a una organización populares, sino a la lógica del enfrentamiento. En El Salvador, los sandinistas apoyan a la guerrilla comunista del Frente Farabundo Martí; en otras partes, abandonan su apoyo a un expansionismo revolucionario de tipo guevarista, pero, en todos los frentes, Nicaragua persigue la creación de un poder centralizado, ampliamente militarizado, que responde a una amenaza exterior, y a su vez la incrementa, más que a una lógica interna de transformación social. Si el acuerdo firmado entre los jefes de los cinco Estados del istmo en agosto de 1987 va seguido de alguna consecuencia, la atenuación de las tensiones conducirá a una evolución de Nicaragua hacia una mayor eficacia económica antes que hacia la democracia. La influencia de Gorbachov parece aquí determinante.

Esta naturaleza del régimen sandinista explica su débil influencia en el continente. No se conoció nada comparable en 1980 a lo que pasó después de 1959 y la victoria de la revolución cubana. Y es que la mayor parte del continente está ocupada en defenderse contra la crisis económica y la descomposición de los regímenes nacional-populares y en construir democracias de nuevo tipo.

Lucha social revolucionaria en El Salvador

El carácter central de la lucha de liberación nacional de los sandinistas no se halla en la acción del *Frente Farabundo Martí* en El Salvador, porque, cuanto más ahogada había sido la vida política en la Nicaragua somozista, tanto más había quedado activa en El Salvador, a pesar del poder de los militares: se habían hecho elecciones y se desarrollaban movimientos de base. Igual que en la Guatemala de los años sesenta, en El Salvador no existía desde los años setenta frontera infranqueable entre el gobierno y las guerrillas. El movimiento nacional-revolucionario de Guillermo Ungo, de tendencia socialdemócrata, sirvió a veces de mediador o, al menos, de apoyo político a grupos guerrilleros. Pero El Salvador conoció sobre todo un desarrollo muy activo de los grupos de extrema izquierda que cuestionaban el modelo soviético y pretendían secundar la experiencia de China, de Cuba o de Albania. Fueron sin embargo los comunistas los que, teniendo una fuerza militar limitada, ejercieron la mayor influencia política. El *Ejército Revolucionario del*

Pueblo (ERP), pro chino y muy nacionalista, fue la principal fuerza militar durante un largo períodoo, pero se dividió entre los partidarios de Cayetano Carpio, muy hostil a toda negociación, y los de *Ana María.* Esta fue asesinada por el otro grupo, pero sus posturas resultaron dominantes en el ERP. Las *Fuerzas Populares de Liberación* (FPL), pro cubanas y cercanas a la tendencia representada por T. Borge en el Frente Sandinista, dieron más importancia a las luchas campesinas. Varias tentativas de integración de diversos grupos, militares y políticos, fracasaron, en particular en 1975; esta desaparición condujo al fracaso de la ofensiva «final» de 1981. Sin embargo, el *Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional* (FMLN), asociado al *Frente Democrático Revolucionario* (FDM), llegó a integrar todas las fuerzas militares y políticas revolucionarias. El Frente es abiertamente marxista-leninista y se apoya en un conjunto considerable de organizaciones de masas: sindicatos obreros o campesinos y organizaciones de enseñantes en particular. Pretende tener un millón de simpatizantes y tiene apoyos incluso en la clase política y en el ejército. La diversidad de sus corrientes no impide al Partido Comunista Salvadoreño haber sido constantemente la fuerza a cuyo alrededor o por relación a la cual se han situado casi todos estos componentes. El Frente, por tanto, es más una fuerza revolucionaria que el instrumento de una guerra de liberación nacional, orientación reforzada por el papel importante que juegan cristianos procedentes de las comunidades de base y que dan un tono mesiánico al movimiento. La guerrilla salvadoreña es más radical políticamente que la coalición que se formó alrededor del Frente Sandinista durante los últimos meses de la lucha contra Somoza y deja de este modo un espacio importante a las fuerzas moderadas que, con o sin alianza con una parte del ejército, buscan una solución no revolucionaria a la violencia política. Ha sido sobre todo la fuerza de N. Duarte quien llevó al Frente, a partir de 1981, a intentar, al menos de manera táctica, abrir negociaciones.

3. Fidel Castro y el foquismo

Fidel Castro y Régis Debray

Si en Nicaragua la destrucción de la dictadura fue lograda por una acción militar apoyada en una amplia participación social, en Cuba, veinte años antes, la acción dirigida por Fidel Castro mantuvo constantemente una gran distancia entre un movimiento urbano, casi de masas, y la acción de *guerrilla* que siempre conservó una importancia central. Castro subordinó un movimiento de liberación nacional-popular a la acción del foco revolucionario. Toda su acción política hasta 1959 y, en parte también, más tarde, estuvo dominada por su voluntad de romper con un movimiento democrático desarticulado, minado por la ideología, dividido

e incapaz de derrocar la dictadura de Batista, apoyada por los Estados Unidos. Desde su juventud, tras haber participado en la vida política activa que se desarrollaba en el seno del *campus* universitario de La Habana, decidió romper con sus declaraciones tan inflamadas como impotentes y organizar desde México una acción armada, el ataque de Moncada. Acto más que simbólico, que señalaba la prioridad que daba a la lucha militar contra un Estado dictatorial y corrompido. Más tarde, en Sierra Maestra, se opuso por los mismos motivos a la formación de bases fijas, mantuvo una acción móvil y exigió que las armas conseguidas fueran entregadas prioritariamente a la guerrilla de la sierra y no a la lucha urbana. Opción que fue reforzada por el fracaso de la huelga general lanzada en 1958 en La Habana. Frente a grupos venezolanos que, poco más tarde, subordinaron la guerrilla rural a una acción política dirigida desde la ciudad, Fidel Castro mantuvo constantemente su desconfianza respecto a la vida urbana, desfavorable, en su opinión, a una movilización total. Esta voluntad de ruptura define el *foco*. El castrismo no es un compromiso entre populismo y guerra de liberación nacional, como fueron las FAR guatemaltecas. Su acción fue constantemente antipopulista, orientada hacia la creación de una vanguardia revolucionaria, cuya tarea principal debía ser no la movilización popular, sino la ruptura con los Estados Unidos. Régis Debray, en *Révolution dans la révolution* (Revolución en la revolución), demostró claramente la posición entre el foquismo y otras estrategias revolucionarias. Critica violentamente la creación de zonas liberadas en Colombia y la acción de las «burocracias estalinianas» (cf. Bibl., IV, 2, pág. 29) de Bolivia. Se opone asimismo a la línea china de guerra popular. Interpretando la acción de Fidel Castro, afirma que «la revolución socialista es el resultado de una lucha armada contra el poder armado del Estado burgués», y añade: «Hoy, en América Latina, una línea política que no pueda expresarse por sus efectos en una línea militar coherente y precisa no puede ser considerada como revolucionaria». Este antipopulismo absoluto define la situación, en términos militares, como la dominación absoluta de la sociedad por un Estado dictatorial que se apoya también en el imperialismo. La importancia inmensa y sin igual del castrismo procedió, precisamente, de esta ruptura absoluta con el populismo y los regímenes nacional-populares. De una teoría extrema de la dependencia, saca la consecuencia lógica de que la acción no puede ser llevada por las masas, ni siquiera enmarcada por un partido; debe ser lanzada por un grupo restringido de revolucionarios cuyo objetivo no es movilizar al pueblo, sino destruir un Estado. Como todos los pensadores revolucionarios propiamente dichos, Régis Debray y los castristas dan prioridad absoluta al problema del Estado sobre los de la sociedad. Debray, mucho más tarde, en *La critique des armes* (La crítica de las armas), ha reintegrado su definición del foquismo: «El término foquismo nunca ha designado otra cosa que la elección de cierto método de

construcción del partido, o también la afirmación de que, en ciertas condiciones históricas particulares, una vanguardia militar puede dar nacimiento, a lo largo de una guerra de guerrillas prolongada, a una vanguardia política» (cf. Bibl., IV, 2, tomo II, pág. 253). El foquismo es, por tanto, una variante de la acción revolucionaria marxista-leninista, que aparece en situaciones donde no existe vanguardia política organizada y donde es la lucha armada, más que la acción de un partido revolucionario, lo que puede crear las condiciones para derrocar al Estado burgués apoyado en el imperialismo. Nada está más lejos del foquismo que la apelación a un movimiento social. Tras el triunfo de la revolución cubana, a principios de 1959, algunos, en particular en Europa, quisieron ver en la revolución cubana un movimiento de base, incluso un ejemplo de autogestión revolucionaria. Semejante contrasentido condena a los que no supieron ver la diferencia, sin embargo evidente, entre el populismo y la construcción de un poder revolucionario. Los dirigentes castristas nunca han alentado errores semejantes y siempre han subrayado el carácter antipopulista de su acción. Las sociedades dependientes y colonizadas viven una amalgama de problemas estructurales y de problemas ligados a su dependencia. El castrismo da prioridad absoluta a la ruptura con la dominación imperialista y a la construcción de una nación y de un régimen. Esta voluntad no puede existir salvo en el caso de que el pueblo no sea capaz, desde el inicio, de conducir y controlar el proceso de cambio que desembocará en su propia creación. Esta prioridad explica el conflicto de Fidel Castro con los partidos comunistas del continente, que se esforzaban por participar en el sistema político nacional-popular, tanto en Brasil como en Bolivia. La acción de un partido revolucionario debe apoyarse en las reivindicaciones económicas de masas, pero no puede haber continuidad entre esas reivindicaciones y la creación de un proyecto político. Sólo la vanguardia armada puede abatir el imperialismo y su representante, el Estado, cuya acción crea la miseria y la dependencia. El carácter específico del castrismo es, por tanto, haberse construido en *ruptura con la tentación nacional-popular* de las clases medias y populares urbanas. Las formas de movilización política y de participación social creadas por el régimen castrista fueron completamente diferentes de las que conocieron los regímenes más cercanos al populismo revolucionario, la Unidad Popular chilena, por ejemplo. Pero lo propio del régimen castrista fue también, por oposición al populismo, apelar a una movilización popular mucho más activa, al contrario de lo que se ve en los países de Europa central bajo régimen soviético.

El poder revolucionario cubano

Los análisis del régimen que se instala en Cuba a principios de 1959 se dividen en dos tesis opuestas. La primera subraya los resultados socia-

les espectaculares del régimen revolucionario: el analfabetismo fue eliminado de Cuba más rápida y completamente que en cualquier otro país del continente; pese a la emigración de la mitad de los médicos, Cuba tiene, veinte años después de la victoria de la revolución, la más alta proporción de médicos del continente y la mortalidad infantil se ha rebajado a un nivel comparable al de muchos países industrializados. Esta tesis subraya con toda justicia unos resultados concretos importantes, pero su error central es no reconocer el papel del poder revolucionario como eje del régimen cubano.

La otra interpretación insiste, sobre todo, en la subordinación creciente de Cuba a la Unión Soviética. También aquí los hechos evocados son indiscutibles. La economía cubana es casi totalmente dependiente de la economía soviética, respecto a la cual está fuertemente endeudada, y, en todos los aspectos de la vida social e intelectual, el modelo soviético no sólo ha penetrado sino que ha sido impuesto. Sin embargo, esta tesis no explica lo que fue la particularidad de Cuba, al menos entre 1960 y 1970, la tensión entre Fidel Castro y la Unión Soviética, y el predominio durante varios años del modelo mao-guevarista.

Hay que introducir, por tanto, otra hipótesis. La nuestra será que la evolución del régimen, hasta su estabilización producida alrededor de 1970, estuvo dominada, ante todo, por la conciencia del conflicto ineluctable, necesario, con los Estados Unidos y por un antipopulismo militante. Durante todo ese período, Cuba fue la *negación activa* del modelo nacional-popular, que tenía más razones para instalarse en Cuba que en muchos países del continente. La lógica foquista debía predominar sobre la lógica de la movilización de masas. Rápidamente, después de la victoria, el Movimiento del 26 de Julio, expresión de un movimiento urbano de liberación social y nacional, fue eliminado como fuerza política, mientras que muchos de sus dirigentes se habían incorporado al nuevo sistema de poder. En el campo, la política del régimen no se apoyó en una movilización colectiva. Aunque la primera reforma agraria, la de 1959, fue favorable a los *squatters*, única categoría campesina que había apoyado a la guerrilla en la provincia de Oriente, esa reforma tuvo pocas consecuencias para la gran mayoría de los asalariados agrícolas. La segunda reforma agraria, la de 1963, transformó los grandes dominios en *sovjoses,* en *granjas del pueblo,* tras una breve etapa de cooperativas de tipo koljosiano, pero esa transformación no estuvo apoyada en una movilización colectiva. Los campesinos acomodados del sur de la provincia de Matanzas se sublevaron en 1962-1963; por lo que se refiere a los pequeños campesinos, estrechamente controlados por el sistema del *acopio* —entregas cuya cantidad y cuyos precios son fijados por el gobierno—, pasaron años muy difíciles hasta que la crisis de aprovisionamiento de las ciudades en alimentos racionados les permitió mejorar su situación gracias al mercado negro. Podemos pensar que la mayoría de los obreros agrícolas, sobre todo los temporeros, que sufrían

un paro parcial importante, apoyan al régimen revolucionario. Pero en la isla no encontramos ningún movimiento campesino semejante al que sublevó a los campesinos del valle de Cochabamba en Bolivia. En Cuba, el cambio social siempre ha procedido de arriba.

El régimen castrista merece ser llamado revolucionario, porque su objetivo central es la construcción de un poder de Estado capaz de dirigir y de defender una transformación total de la sociedad. Como el poder destruido se apoyaba en la dominación extranjera, la acción revolucionaria debía ser movilización militar más que social. La naturaleza del régimen queda demostrada por la velocidad con que rompe con los Estados Unidos. La alianza con la burguesía cubana concluye pocas semanas más tarde de la entrada de los guerrilleros en La Habana, a partir de febrero de 1959. Y sobre todo, en abril, Fidel Castro viaja a los Estados Unidos y, cuando algunos esperaban que de ese viaje salieran negociaciones, Castro se sitúa, tanto en sus discursos como en su acción, de forma inmediata, en una lógica revolucionaria: para transformar la sociedad cubana, es menester ante todo romper con los Estados Unidos, con sus intereses y con su influencia. En mayo, la primera reforma agraria elimina una gran parte de los intereses norteamericanos, y, en junio, Ernesto Guevara establece relaciones con la Unión Soviética, tras la estatalización de las compañías petroleras norteamericanas. Entre julio y agosto, todos los bienes de los Estados Unidos quedan estatalizados. En febrero de 1960, Mikoyan llega a La Habana y, en mayo, se firman nuevos acuerdos con la Unión Soviética para el aprovisionamiento de la isla en petróleo ruso y para el apoyo soviético a la industrialización cubana. La ruptura con los Estados Unidos es ya prácticamente total en el momento del intento de invasión organizado por la CIA y que fracasa en Playa Girón, el 17 de abril de 1961. Tras esta agresión, el 1 de mayo de 1962 Fidel Castro proclama a Cuba república democrática y socialista. Para ese momento, la mayor parte de la economía se halla directamente en manos del Estado. Por último, el 2 de diciembre de 1962, Fidel declara: «Soy marxista-leninista.»

Durante esta primera fase, lo esencial, más aún que la ruptura con los Estados Unidos, es la formación de un poder revolucionario, fuertemente concentrado y personalizado. Todas las organizaciones de masas pierden su dinamismo y su autonomía; a veces desaparecen. Tal es el caso, sobre todo, de los sindicatos, controlados tan directamente por el partido que sus dirigentes se suceden rápidamente y aparecen tensiones con el mundo obrero, tensiones observadas por M. Zeitlin, sociólogo favorable a la revolución cubana. La Federación de las Mujeres Cubanas, dirigida por Vilma Espín, mujer de Raúl Castro, realiza grandes actividades sociales, con preferencia de alta calidad, pero carece de cualquier tipo de autonomía política o ideológica. No será hasta después de 1970 cuando las organizaciones de masas recuperen cierta actividad y organicen de nuevo congresos: la Asociación de Pequeños Campesinos se

reúne en 1971, el Congreso del Trabajo en 1973, la Federación de Mujeres en 1974. Durante la fase de construcción del poder centralizado, la Liga de Jóvenes Comunistas había sido controlada de forma particularmente estrecha y los Comités de Defensa de la Democracia, organizados en septiembre de 1960, tuvieron ante todo funciones represivas de «vigilancia revolucionaria». Las Organizaciones Revolucionarias Integras (ORI), creadas para incorporar el Movimiento del 26 de Julio y el Directorio Revolucionario con el antiguo partido comunista (PSO), se transforman primero, entre 1963 y 1965, en partido único de la revolución socialista, antes de convertirse en el partido comunista (POP), se transforman primero, entre 1963 y 1965, en su primer congreso hasta 1975, diez años después de su creación. En marzo de 1962, Fidel Castro elimina a Aníbal Escalante, antiguo dirigente comunista, que se esforzaba por controlar la nueva organización política. Cierto que los antiguos miembros del PSP representan casi la mitad de los dirigentes del nuevo partido comunista, pero es Fidel Castro quien dirige la amalgama y hace del nuevo partido el instrumento de su poder. Se forma en Cuba una elite, altamente concentrada, cuyos principales jefes acumulan las funciones dirigentes en el partido, el Estado y el ejército. Los tres principales dirigentes —Fidel, su hermano Raúl y Carlos Rafael Rodríguez, antiguo dirigente comunista y antiguo ministro de Batista— son, tras la nueva constitución, a finales de los años setenta, miembros a un tiempo del *buró* político y del secretariado del partido, del consejo ejecutivo del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado de la Asamblea Nacional. Además, Raúl dirige las fuerzas armadas, bajo la autoridad de su hermano. Antes de abandonar sus funciones oficiales en Cuba, Ernesto Guevara había sido partidario extremo de la movilización de la sociedad por el Estado. Mientras que un régimen nacional-popular mezcla actores sociales, fuerzas políticas y poder estatal, el régimen castrista priva de toda autonomía al sistema político, controla estrechamente la participación social y da prioridad exclusiva a una movilización íntegramente dirigida por el Estado.

El período más característico del régimen cubano, entre 1964 y 1968, se esfuerza por asociar la concentración del poder con una intensa movilización social, dirigida desde arriba, y con una política de expansionismo revolucionario. Los populistas revolucionarios de América del Sur y de otras partes han tomado a menudo al *Che* Guevara como héroe. Opción que se explica fácilmente por la intensidad revolucionaria de la personalidad de este médico argentino que había ido a combatir a Cuba y que se identifica con las revoluciones latinoamericanas. Pero eso puede llevarnos a un contrasentido, porque la política de Guevara fue antipopulista hasta el extremo. Su objetivismo revolucionario se opuso al determinismo económico de los partidos comunistas o socialdemócratas, pero su objetivo era la formación de una vanguardia revolucionaria, animada por motivaciones más políticas que económicas. Para él, el hom-

bre nuevo es el revolucionario que sacrifica su vida personal a la construcción de la sociedad nueva. Los regímenes latinoamericanos pueden ser llamados regímenes de consumo político; en sentido opuesto, el régimen mao-guevarista es un sistema de producción de la energía política que debe permitir la transformación de la sociedad privilegiando de modo absoluto la modernización voluntarista, una industrialización de tipo soviético, la ruptura con una economía dominada por la exportación de azúcar. Muy a menudo se ha considerado a Guevara como un rebelde, opuesto a la burocratización estaliniana. Como responsable de la reforma agraria y como ministro de Industria, representó, por el contrario, la tendencia más estatalista y centralizadora del régimen cubano.

La historia económica de los primeros años del régimen muestra una sucesión de fases y de tentativas opuestas. Tras una primera fase de diversificación de la economía, que desembocó en una disminución de la cosecha de azúcar y en una grave crisis económica, Cuba vuelve a la producción agroexportadora al mismo tiempo que a una planificación de tipo soviético. Viene luego una tercera fase, de grandes debates económicos, más una cuarta fase durante la que se trata de combinar reformas a lo Lieberman con el voluntarismo revolucionario de Guevara. Cuba se lanza a un salto hacia adelante, al modo chino. La economía cubana trata de pasar directamente al comunismo, eliminando el mercado, limitando el consumo privado, organizando distribuciones gratuitas y formas diversas de movilización colectiva. Este voluntarismo económico está asociado a una política internacional de apoyo directo a las guerrillas, en particular en Venezuela, adonde Cuba envía armas para Douglas Bravo. Esta internacionalización de la revolución cubana parece incluso de importancia central en el momento en que Guevara, tras haber abandonado el Ministerio de Industria en abril de 1965, deja Cuba y llega, en octubre de 1966, a Bolivia, donde intenta organizar una guerrilla y donde es muerto en octubre de 1967. Esta guerrilla tuvo más eco internacional que influencia sobre la política cubana. Durante este período, es en realidad el centralismo político y económico lo que domina la vida del país y el que desemboca en una liquidación casi completa de la autonomía de todas las fuerzas sociales y de organizaciones de masas. Los moderados, más cercanos al modelo soviético, como C. R. Rodríguez, ven disminuir su influencia. El control de los pequeños campesinos se hace más férreo. Todo el poder económico queda concentrado en el Banco Nacional, mientras el Ministerio de Hacienda desaparece y el JUCEPLAN, organismo de planificación, no es más que un organismo de estudio. El Estado no tiene ya presupuesto público y la universidad no acepta a casi ningún estudiante de economía y de gestión. El país queda sometido a un proceso intenso de acumulación del capital. La economía cubana se industrializa a marchas forzadas, lo cual implica grandes importaciones de equipamiento procedente de los países socialistas. El resultado de este período es una fuerte baja de la producción, del consumo y de la pro-

ductividad tanto del capital como del trabajo. Una gran parte de las máquinas importadas, mal adaptadas y mal conservadas, se echan a perder.

Cuba cambia entonces de política, pero sin romper con un voluntarismo extremo. Se vuelve a dar prioridad al azúcar, y se fija el objetivo de diez millones de toneladas para la cosecha de 1970. Ese objetivo no es alcanzado y el sistema de participación voluntaria en la cosecha desorganiza el resto de las actividades económicas. Economistas extranjeros favorables a la revolución cubana critican esta política, a un tiempo por su ineficacia económica y por la extrema concentración del poder a que conduce. C. Bettelheim denuncia el poder de la burguesía del Estado; P. Sweezy y L. Huberman, marxistas norteamericanos, presentan críticas semejantes. El agrónomo R. Dumont responde a su pregunta, *¿Es Cuba socialista?*, mediante comprobaciones decepcionadas, y K. S. Karol denuncia la transformación de los guerrilleros en elite de poder.

Pero no son la opinión de los economistas occidentales ni el descontento popular los que llevan a Cuba a cambiar de política. Es la hostilidad de la Unión Soviética, preocupada por la carga que para ella representaba la economía cubana e irritada por las críticas de los revolucionarios guevaristas al Partido Comunista durante el período de ruptura entre la Unión Soviética y China. La Unión Soviética se inquieta por la ideología de la Tricontinental (3-14 de enero de 1966) y de los organismos que nacen de esa reunión: el OSPAAAL, propiamente tricontinental, y sobre todo el OLAS, que coordina las guerrillas latinoamericanas y pretende representar una tercera tendencia, ni china ni soviética, lo cual amenaza el papel dirigente de la URSS. Fidel Castro debe inclinarse ante la voluntad del país que asegura la supervivencia de la economía cubana. Critica a China y aporta un apoyo espectacular, en 1968, a la invasión soviética de Checoslovaquia. El fracaso de la «cosecha del siglo», en 1970, marca el fin del período guevarista. Cuba se acerca cada vez más al modelo soviético. El partido es reorganizado y agrandado, de 55.000 miembros en 1969 a 203.000 en 1975. Las organizaciones de masas, sindicatos, organizaciones de mujeres, de pequeños campesinos y de jóvenes, aunque seguían estrechamente controlados, recuperan alguna actividad. La fuerte alza de los precios del azúcar en el mercado mundial, que pasa de 1,8 centavos por libra en 1966 a 29,60 en 1974 (!), permite un progreso económico rápido, ayudado por los créditos concedidos por diversos países occidentales. Cuba apoya militarmente la política internacional de la Unión Soviética, sobre todo en Angola, donde cerca de 30.000 soldados cubanos, representan la fuerza principal de defensa del régimen apoyado por la Unión Soviética. A pesar de una nueva bajada de los precios del azúcar a partir de 1976, Cuba, al final de los años setenta, parece estabilizada, completamente incorporada al sistema soviético, y tan alejada de la gran mayoría del continente que el régimen cubano ya no aparece ante los demás países como una amenaza. Dirigentes muy distintos, desde Velasco en Perú o Allende en Chile hasta

Andrés Pérez en Venezuela y Velasco Ibarra en Ecuador preparan la reincorporación de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Fidel Castro y su hermano, aunque siguen manteniendo un poder hegemónico, intervienen menos directamente en las decisiones. El sistema administrativo adquiere cierta autonomía frente al sistema político. La planificación reaparece al mismo tiempo que los estímulos económicos y los estadísticos. La nueva generación de dirigentes de empresa sale de la Facultad de Economía y de los institutos de gestión. La descentralización se apoya en la formación de grandes empresas —300 en lugar de 3.000—. Cuba, veinte años después de la victoria de los guerrilleros, se halla instalada en un sistema político tan diferente del modelo nacional-popular como los nuevos regímenes democráticos que se establecen en Brasil, en Argentina y en Uruguay.

Su particularidad tiene varios aspectos. Ante todo, en Cuba existe una participación política directa mucho más importante que en los demás países. Es la mayoría de los obreros los que participan, durante los años setenta, en los debates sindicales sobre la introducción de las primas de producción; los CDR, que agrupan a la gran mayoría de la población adulta, llevan a cabo campañas de salud pública y de represión de la criminalidad, al tiempo que aseguran un control político estrecho. Esta movilización no significa en modo alguno que existe un espacio libre para la crítica política, y bien limitado es aquel del que dispone la creación cultural. De ahí los conflictos entre el poder y los intelectuales, en particular los cineastas, hasta el encarcelamiento del poeta Padilla, que provoca la protesta de intelectuales occidentales y concluye con una autocrítica tan extrema de Padilla que muchos quedaron convencidos de que había sido obtenida por la presión o incluso por la tortura. Fidel Castro decía, desde 1961, que los intelectuales debían recibir «dentro de la revolución, todo; fuera, nada», y el partido, en 1971, condena la cultura apolítica.

La historia del régimen revolucionario es, por tanto, la sucesión de la liquidación de las formas populistas de movilización política, de una movilización político-militar según el modelo chino, y finalmente de una integración burocrática de la población en los objetivos fijados en el poder central. En el seno del mundo soviético, Cuba se caracteriza a un tiempo por una redistribución muy igualitaria de las rentas, un control político muy estrecho y una estructura del poder más concentrada y personalizada que en otras partes. El régimen quiere destruir las fuerzas y tendencias sociopolíticas que existían antes en el país, como en el resto del continente, y a menudo con más fuerza. Fidel Castro no dejó nunca de luchar contra el pluralismo político, los riesgos de democratización y la irresponsabilidad de los intelectuales. Visitando Chile invitado por Salvador Allende, en 1972, aprobó, cierto, el proceso no revolucionario de Chile, pero mantuvo que el pluralismo político, la libertad de prensa y, en general, los métodos democráticos eran peligrosos. Su opinión se vio reforzada por la rápida descomposición de la Unidad Popular y el golpe

de Estado de 1973. Cierto que el sistema nacional-popular es frágil, que resiste mal los golpes de sus enemigos y que depende mucho de una coyuntura económica favorable. El régimen cubano, por el contrario, es fuerte, en la medida, al menos, en que es directamente sostenido, económica y militarmente, por la Unión Soviética. Si el régimen cubano ha seguido siendo durante mucho tiempo, y aún hoy lo es, un foco de atracción para muchos jóvenes radicales latinoamericanos, ha sido porque Cuba aparece como la mejor defensa contra los regímenes contrarrevolucionarios. Pero esta fuerza de Cuba no se adquiere más que saliendo del «tercer mundo» para entrar en el «segundo mundo» y subordinar la sociedad a un modelo político dominado por los intereses internacionales de la Unión Soviética. El carácter represivo de un régimen que mantiene durante mucho tiempo en sus prisiones una proporción de prisioneros políticos mayor que cualquier otro país latinoamericano y recurrió ampliamente a la tortura, como sabemos a través de los testimonios de Valladares y de Golendorf, se explica por la voluntad de eliminar no sólo a los enemigos de la revolución, categoría demasiado vaga, sino sobre todo todas las formas de participación sociopolítica que son características del continente. El fracaso de las guerrillas pro cubanas y la constante disminución de la influencia del régimen en el continente son la secuela lógica de la voluntad cubana de salir del modelo latinoamericano. Política de la que podemos subrayar los aspectos positivos. Cuba resiste bien la crisis financiera y económica de los años ochenta. El consumo había aumentado poco en la isla y, en particular, la construcción de viviendas se había mantenido en un nivel bajo, pero este débil crecimiento había ido acompañado de una fuerte redistribución igualitaria de la renta. Cuba había ido, por tanto, al contrario de la tendencia general del continente, centrada en la concentración de la riqueza y en un desarrollo acelerado del consumo, apoyado en los créditos extranjeros.

Distribución de la renta			
Quintos	%	%	%
0-20	2,1	7,7	7,8
21-40	4,1	12,3	12,5
41-60	11,0	18,3	19,2
61-80	22,8	23,9	25,5
81-100	60,0	37,8	35,0

FUENTE: C. Mesa Lago, 1978.

Este igualitarismo será frenado al final de los años setenta, pero ello no impide una fuerte disminución relativa de los salarios de los técnicos y directores y la desaparición casi completa de las rentas de tipo comercial.

La construcción de la nueva sociedad cubana y, más tarde, de la Ni-

caragua sandinista se explica, ante todo, por la situación de países que, cualquiera que sea su nivel de desarrollo —mucho más elevado en Cuba que en Nicaragua—, se sentían tan directamente dependientes de los Estados Unidos que tenían una conciencia de país colonizado más que de país dependiente. En América central y en el Caribe, a finales del siglo XIX, la prioridad se da constantemente a la liberación nacional y a la lucha contra el panamericanismo, en el que José Martí veía un instrumento de hegemonía de los Estados Unidos. La lucha nacional predomina en esta región sobre la integración nacional y las luchas sociales. José Martí combate como guerrillero contra la dominación española y muere en la isla en 1895, pero después de haber denunciado el nuevo imperialismo norteamericano. Esta conciencia de estar colonizado aleja a esta región de la América del Sur. El antiamericanismo argentino o brasileño, lo mismo que la conciencia de dependencia que existe en Perú o en Chile, no impiden que esos países tengan, ante todo, una conciencia nacional positiva fuerte. México está más cerca de Cuba y de América central porque se siente «tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». Pero la política castrista fue la única que estuvo dominada por su voluntad de romper con el imperialismo y la colonización. Es, por tanto, una lógica de guerra internacional lo que domina la política cubana y lo que da una prioridad absoluta a la formación de un poder absoluto sobre el aumento de la capacidad de iniciativa económica y social.

Mientras la mayor parte del continente latinoamericano, a pesar de su dependencia y sus crisis, evoluciona hacia un grado más elevado de participación y de diferenciación políticas, Cuba elige un camino inverso. Acepta un grado excepcionalmente elevado de dependencia económica respecto a la Unión Soviética y su sistema político sigue completamente dominado por el enfrentamiento con los Estados Unidos. Cuba y Nicaragua ya no pertenecen a la categoría de sociedades dependientes; estos países se hallan más cerca de los que rompen con una dominación colonial y entran en un sistema voluntarista, autoritario y desarrollista, que puede estar integrado, o no estarlo, en el imperio soviético. En estos países, una elite política ostenta el monopolio del poder y controla estrechamente tanto la vida cultural como la vida económica. El poder absoluto pertenece a un partido que se identifica a un tiempo con el Estado, con la nación y con el pueblo. La evolución de Cuba y de Nicaragua se explica, al mismo tiempo que por su ruptura con los Estados Unidos, por su voluntad de eliminar todos los aspectos de los regímenes nacional-populares que dominan la mayor parte del continente.

Las guerrillas castristas

En América del Sur existen pocos ejemplos de *focos* revolucionarios que sigan el modelo castrista. Algunas guerrillas, que más adelante examinaremos, derivan más bien del populismo revolucionario. La guerrilla

venezolana fue un compromiso frágil e incluso contradictorio entre el foquismo y el populismo revolucionario que trata de movilizar unas masas campesinas o incluso obreras y sigue por tanto una lógica completamente opuesta. En Venezuela, la guerrilla urbana, dirigida por el Partido Comunista Venezolano, apoyada en una fuerte movilización de los estudiantes, fue aplastada. Pompeyo Márquez y otros dirigentes comunistas fueron detenidos, lo cual precipitó la división del movimiento. Los dirigentes encarcelados, formando el «*buró* de San Carlos», se pronunciaron en favor de una «paz democrática» mientras que el «*buró* de la calle», formado por los dirigentes en libertad, decidía continuar la guerrilla. Petkoff fue la figura más castrista del movimiento, pero Douglas Bravo fue el dirigente central porque se esforzó por encontrar una síntesis entre los dos tipos de acción.

Pero si la guerrilla resultó ante todo urbana, ello se debió a que también fue utilizada como medio de presión sobre las instituciones políticas. A pesar del desarrollo de las guerrillas rurales y del desembarco de voluntarios cubanos en 1966-1967, fue la tendencia a la participación en el sistema político lo que se impuso con la creación del MAS en 1970. Tendencia reforzada por la crisis que enfrentó al PCV con Cuba. En resumidas cuentas, por tanto, en Venezuela, la guerrilla, aunque comportaba elementos castristas, estuvo más cerca del populismo revolucionario que del modelo cubano. Sus primeros elementos fueron oficiales que habían organizado diversas sublevaciones en 1962 y estudiantes que habían abandonado *Acción Democrática* y creado el MIR. Pero la guerrilla de las FALN no encontró apoyos sólidos ni en los barrios populares de Caracas ni en el campo, y sucumbió a su incapacidad de elegir entre dos modelos políticos. La URD, uno de los tres partidos que habían firmado el acuerdo de Punto Fijo, abandonó ese acuerdo para no participar en la política anticubana del gobierno, pero el régimen democrático que se había constituido tras la caída de Pérez Jiménez mantuvo y amplió esa capacidad de integración política y social. La violencia política misma, apoyada por el ascenso del paro, que pasa del 9 por 100 en 1958 al 14,5 por 100 en 1963, no se transforman en acción revolucionaria y la guerrilla sigue alentada por elementos radicalizados de la clase media. La fuerza del sistema político queda demostrada por la importantísima participación —el 93 por 100— obtenida en las elecciones de 1963, en pleno período de guerrilla.

Después de 1965, ésta se reduce a una sublevación cuasipermanente de las universidades. Profesores como Humberto Cuenca proclaman que la autonomía universitaria debe ser defendida mediante las armas. Punto extremo de la desarticulación de la acción colectiva y de la ideología: el mundo universitario se separa completamente de un sistema político que no cesa de reforzarse. Entre estudiantes y masas urbanas o rurales, la distancia se vuelve infranqueable, lo cual entraña la caída de la insurrección urbana y el debilitamiento de las guerrillas rurales. Douglas Bravo

soñaba con una «insurrección combinada», pero la tentativa fracasa y en 1966 es excluido del *buró* político del Partido Comunista Venezolano. Tiene razón Régis Debray cuando piensa que el fracaso de la guerrilla venezolana procedió del esfuerzo constante de Bravo y otros por ejercer una presión sobre las instituciones políticas, en lugar de conceder prioridad absoluta a la lucha armada; pero puede pensarse que el sistema político venezolano era lo bastante sólido para marginar esa lucha armada.

La guerrilla del *Che* Guevara en *Bolivia* en 1967 se opuso en todos los puntos a la guerrilla venezolana. Si ésta había permanecido demasiado ligada al sistema político, la de Guevara se separó completamente de la acción política e ignoró de manera sorprendente las realidades económicas, sociales y políticas de Bolivia. Confusión tan evidente que el fracaso previsible, inevitable, da menos importancia al análisis de ese fracaso que a la siguiente pregunta: ¿cuál fue la intención del *Che*? El valor simbólico de la muerte del revolucionario fue tal vez mayor debido al hecho de que su aventura no tuvo en ningún momento la menor posibilidad de triunfar.

La guerrilla de Nancahuazú fue preparada personalmente por Guevara y un núcleo de militantes como Tania, comunista germano-argentina. Su plan estratégico parece haber sido más latinoamericano que boliviano, porque las guerrillas todavía parecían fuertes en diversos países como Colombia, Perú y Argentina. Incluso en Bolivia, las relaciones con el Partido Comunista dirigido por Monge, fueron muy pronto pésimas y el grupo de Guevara no estableció alianza ninguna con los mineros, ya debilitados por una represión que había comenzado mucho antes de la matanza de la noche de San Juan, en junio de 1965. La guerrilla se instaló en una región periférica, habitada por una población guaraní dispersada, y nunca tuvo medios para resistir a Barrientos, cuyo poder no era sólo militar y sostenido por los Estados Unidos, sino basado también en el apoyo de los sindicatos campesinos. En realidad, esa pequeña guerrilla no habría tenido sino una importancia muy limitada de no ser por la presencia del *Che* y de Régis Debray, que le prestó un valor simbólico. La muerte del *Che,* el 9 de octubre de 1967, la transformó en un símbolo revolucionario que atrajo a una juventud decepcionada por la confusión de los regímenes nacional-populares y vio en *Che* Guevara no el defensor de un voluntarismo leninista, sino la expresión de una voluntad revolucionaria de transformación de la sociedad y de rechazo de la dependencia exterior.

La boina negra del *Che* es la imagen más fuerte que la América Latina ha transmitido al mundo desde el sombrero inmenso de Zapata. Y la revolución cubana pareció más grande todavía al estar dominada por la doble figura de Fidel, fuerza vital, poder absoluto, aparato dominador, palabra abundante, y del *Che,* encontrando una muerte, que tal vez había buscado, en el corazón perdido del continente, solitario, apasionado,

en ruptura permanente, llamado por lo absoluto, incluido el absoluto de un orden nuevo riguroso. Unión estrecha y contradictoria del rojo de la fuerza y del negro de la revuelta.

Pero si la figura del *Che* vivo y muerto, matado por los soldados de Barrientos y sus «consejeros americanos», tuvo y sigue teniendo una excepcional fuerza de atracción, ¿no es porque la política latinoamericana en su conjunto ha sido siempre tan poco revolucionaria, tan poco radical, tan constantemente orientada hacia la integración y el compromiso, tan dependiente, sobre todo, de los créditos y de las decisiones procedentes del exterior? El *Che* fue el héroe de los excluidos, de los jóvenes parados o de los jóvenes estudiantes prometidos a oscuros empleos burocráticos alejados de sus sueños de juventud; pero, sobre todo, su culto esconde la mala conciencia de un continente que vuelve la espalda a la revolución y no emplea esa palabra demasiado pesada para otra cosa que para ampliar todavía un poco el espacio de participación, lenta y confusamente abierto por los regímenes nacional-populares. El culto del *Che* ha permitido a la América Latina proseguir con menos mala conciencia su marcha zigzagueante, más de una vez brutalmente interrumpida pero siempre reanudada, hacia una sociedad más abierta, porque ningún sentimiento tiene más fuerza en América Latina que la confianza, por naturaleza no revolucionaria, en las posibilidades personales y colectivas de un futuro mejor al alcance de la mano.

4. El comunitarismo revolucionario

Los ejemplos de Guatemala y de Venezuela, opuestos a los de Cuba y Nicaragua, ya han mostrado la distancia infranqueable que separaba los *focos* de las formas, incluso de las más radicales, de populismo y de nacionalismo revolucionario. Para unos, la lógica dominante es la de la lucha contra un enemigo exterior; para otros, es la apelación a una comunidad o a una nación que tratan de constituir, al mismo tiempo que de liberarse.

Colombia

En su *Révolution dans la révolution*, Régis Debray opone de manera radical el foquismo castrista a la política de las repúblicas comunistas libres en *Colombia*. Estas repúblicas fueron creadas a partir de 1930 en la región de Viola y en Marquetalia en 1949. Aunque valorizaron a guerrilleros como Manuel Marulanda, apodado *Tiro Fijo*, no desencadenaron una gran movilización política. Se mantuvieron al margen de la «violencia», y más todavía del sistema político. El Estado terminó por destruirlas entre 1961 y 1965. Su funcionamiento principal era reforzar la pre-

sión del partido comunista sobre el sistema político. Pero, en realidad, su papel fue el inverso, como ha demostrado bien D. Pécaut: controlar y marginar una parte de los sectores sociales y políticos que no eran integrables en el sistema político. La autodefensa fue, en resumidas cuentas, la automarginación y la autolimitación de un partido comunista que no era partidario de una acción revolucionaria.

Las guerrillas rurales de inspiración castrista, organizadas por el *Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos* (MOEC) y el *Frente Unido de Acción Revolucionaria* (FUAR) fueron, por el contrario, rápidamente destruidas. El *Ejército de Liberación Nacional*, formado en 1965 y dirigido por Flavio Vásquez, tuvo más importancia y su Manifiesto de Sinacota defendió unas ideas antiimperialistas cercanas al mensaje del *Che* a la Tricontinental, pero también fue fácilmente destruida. El sistema político colombiano, a un tiempo oligárquico, abierto y conservador, siempre fue capaz de combinar integración y represión.

Estos fracasos condujeron al sacerdote *Camilo Torres* a elaborar en 1965 una plataforma para un movimiento de unidad popular. Quería organizar, tras el ELN, un movimiento urbano de masas, con unos temas sociales y religiosos. Ejemplo típico de populismo radical que se transforma en comunitarismo revolucionario. Pero el fracaso del movimiento es rápido; Camilo Torres deja la ciudad y se incorpora a la guerrilla del ELN, donde encuentra la muerte el 25 de febrero de 1966. Un grupo de sacerdotes continuará su acción, tentativa frágil de populismo revolucionario y de defensa antiimperialista de la comunidad.

El *movimiento M 19*, por oposición a las FARC comunistas, se sitúa en la línea populista revolucionaria. Frente a un movimiento replegado sobre las zonas rurales, interviene en las ciudades, en particular en los barrios obreros, extiende su influencia entre los intelectuales y los estudiantes, lanza acciones espectaculares. No tiene ni mucha organización ni mucha homogeneidad política ni apoyo sindical y hace su recluta tanto entre los pequeños partidos de izquierda como entre los miembros radicalizados de los partidos tradicionales. Es un movimiento de insurrección, que espera de sus acciones que desencadenen una sublevación popular masiva. Porque el M 19 no apela a una clase sino a un pueblo y a su derecho a una verdadera ciudadanía, lo cual subraya su continuidad con la política nacional-popular que no ha podido desarrollarse en Colombia después del asesinato de Gaitán, el período de la *violencia* y de las negociaciones entre los dos partidos.

Las guerrillas colombianas son a un tiempo constantemente débiles y fuertes. Débiles porque no llegan a desequilibrar un sistema político que ha demostrado su solidez, desde que firmó el Pacto nacional entre conservadores y liberales en 1956. Fuertes porque se apoyan en la defensa de los campesinos en un país donde la integración social es más débil que la integración política. Tan fuertes incluso que el gobierno colombiano no consigue eliminarlas o incorporarlas. El presidente Betancur

impulsó esa tentativa más lejos que sus predecesores. Firmó un acuerdo con los principales grupos guerrilleros y obtuvo la transformación de una parte de los grupos armados comunistas, las FARC, en fuerzas políticas legales. Pero el movimiento M 19, de orientación populista revolucionaria, rompió el acuerdo. Por su parte, el ejército no lo respetó y puso en práctica una violenta represión contra los guerrilleros incluso cuando éstos habían depositado las armas. Esa violencia culminó con el ataque armado contra el Palacio de Justicia, a finales de 1985, que concluyó con la muerte de la mitad de los jueces de la Corte Suprema. Las investigaciones realizadas en 1986 demostraron que en esa matanza las responsabilidades estaban, cuando menos, repartidas, y que un gran número de magistrados no habían sido muertos por los guerrilleros.

La presencia de las guerrillas y de las contraguerrillas indica los límites de la política de integración social en un país donde el populismo nunca ha conseguido desbordar a la oligarquía. En torno a una democracia restringida, que se apoya en una débil participación electoral, existe una zona inmensa e incluso creciente ocupada por las guerrillas, por el ejército, por los traficantes de droga y por los delincuentes. La crisis económica, aunque es más limitada en Colombia que en otros países, reduce todavía más la capacidad de integración económica, social y política del sistema. De suerte que la marginalidad de las repúblicas libres comunistas, e incluso de las guerrillas, castristas o de otro tipo, podría ser reemplazada por una crisis general del sistema político, en un país en el que la mayoría de la población, en las grandes ciudades, no pertenece ya al sector «formal» de la producción. La fuerza renovada de las guerrillas procede del debilitamiento dramático de un sistema político todavía dominado por la oligarquía y que no ha pasado por la apertura nacional-popular.

Perú

En Perú, las guerrillas fueron organizadas ante todo por intelectuales que se separaron del APRA en octubre de 1959, creando el APRA rebelde que se transformó en MIR en 1961. Aunque Lobatón, De la Puente o Béjar se hayan referido constantemente a Fidel Castro, sus tentativas de sublevación del mundo campesino no son en el punto de partida de inspiración castrista. Sus guerrillas son ejemplos de *populismo revolucionario*, de orientación comunitaria, porque su acción se dirige menos contra el poder político que hacia las comunidades que se esfuerzan por animar y sublevar. El Manifiesto de Chiclayo dice: «La comunidad india es la piedra angular del proyecto de ley que discutimos. Partimos de la comunidad y esperamos llegar a la comunidad socialista moderna. Introducimos las formas indias tradicionales de organización para dar unas bases sólidas al futuro». ¿Existe alguna afirmación más clara de populismo? Pero todo esto no es más que un sueño y la práctica

se aleja de las intenciones. Si, como hemos visto, Hugo Blanco se incorpora a una comunidad campesina en el valle de la Convención, Lobatón da prioridad a la lucha armada y asume posiciones castristas y marxista-leninistas. El documento principal del MIR, *Nuestra posición frente a la revolución mundial*, se refiere directamente a la revolución cubana y da una importancia central a los conflictos entre colonizados y colonizadores. La lucha armada sustituye al populismo comunitario; tres grupos de guerrillas se forman: De la Puente en la región de Macchu Picchu, Lobatón cerca de Huancayo y Béjar en la región de Ayacucho. De la Puente es muerto el 23 de octubre de 1965 y Lobatón en enero de 1966. El ejército de liberación nacional de Béjar es vencido en diciembre de 1965 y su jefe es hecho prisionero. Más tarde se unirá a la política del gobierno militar de Velasco. Estas guerrillas aparecen, por tanto, y sobre todo, como formas radicalizadas de un movimiento populista, pero su fracaso rápido se debe a que no han encontrado base social en el campesinado y a que no han podido dotarse de una organización política. Su proyecto de crear unas bases fijas defensivas no pudo llevarse a la práctica. Ha sido después de su fracaso cuando el gobierno militar se ha esforzado por dar una forma no revolucionaria a los temas comunitarios.

Pero la debilidad y la caída del populismo revolucionario llevaron también a la aparición de una acción armada, siguiendo el modelo maoísta, que combinaba la lucha contra el Estado y la organización de un control político de las regiones liberadas. La acción de *Sendero Luminoso*, aunque se apoya en la región rural que aguanta las mayores crisis, no apela a una movilización popular. Se apoya en militantes revolucionarios armados y está dirigida por intelectuales de origen campesino, que vuelven desde las universidades provinciales a su región como militantes políticos, lanzados a una guerra revolucionaria y recurriendo a todas las formas de violencia. El movimiento se forma en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, a partir de 1952. Abimael Guzmán, militante del PCP, llega a Ayacucho en 1962 y se pone al frente de la línea «china» cuando el Partido Comunista se divide. Organiza un frente de defensa de Huamanga, encuentra aliados en la federación de barrios y en la universidad, dominada por los dirigentes estudiantiles de la tendencia *Bandera Roja*. Organiza el partido comunista peruano *Sendero Luminoso*, que en 1980 vuelve a bautizarse con el nombre de *Partido Comunista del Perú*. La teoría política de *Sendero, Puca Inti* (Sol Rojo), anuncia la guerra popular, y Guzmán organiza su partido de forma militarizada. En 1982, *Sendero* decide el cerco de las ciudades a partir del campo. No se trata, en este caso, de populismo revolucionario ni de foquismo. Los militantes, enseñantes o estudiantes en su mayor parte, establecen un nuevo régimen en los territorios liberados, matan o castigan a los campesinos ricos o a los que han ayudado al ejército. Pero, poco a poco, la acción de *Sendero Luminoso* se desplaza hacia Lima y otras ciudades, donde organizan

atentados. La capital conoce cortes de corriente eléctrica e incidentes violentos en las prisiones cuya organización interna controlan los *senderistas*. El ejército y la policía reaccionan con una violencia igual y cometen matanzas masivas en las cárceles. El sistema político peruano, en el momento en que Alan García intenta salvarlo del derrumbe, se halla amenazado conjuntamente por la violencia de los *senderistas* y por la de los militares. *Sendero Luminoso* señala la ruptura más extrema con el régimen nacional-popular que, directa o indirectamente, había dominado de forma casi constante la vida política del Perú. La debilidad del país, herido por la crisis económica y por el fracaso de la política de Belaúnde, da una importancia considerable a esta tentativa de construir un poder revolucionario en una amplia zona que escapa al control del poder central.

5. El nacionalismo revolucionario

Si las guerrillas rurales de Colombia y Perú aparecen, ante todo, como formas de descomposición o de debilidad del sistema político, las guerrillas urbanas de tipo uruguayo, argentino y, de manera más limitada, brasileño y chileno, marcan de forma más directa todavía la crisis de los regímenes nacional-populares.

Tupamaros y Montoneros

La situación de *Uruguay* en los años sesenta era dramáticamente contradictoria. Este país había logrado desde el período battlista una excepcional capacidad de integración social y política, pero, al mismo tiempo, y en parte como consecuencia de esa extremada integración, había entrado en una crisis profunda y un declive que parecía irreversible. Lo cual provocó la aparición del movimiento de los *Tupamaros*, que también se formó de manera contradictoria. De un lado, fue un nuevo populismo que combinaba en sí las tres dimensiones de la política nacional-popular: antiimperialismo, acción de clase y resistencia a la crisis nacional que amenazaba el porvenir del país. Los Tupamaros se referían a Artigas, héroe popular de la creación de la nación. Pero al mismo tiempo, frente a la crisis, fueron arrastrados hacia un nacionalismo radical antiimperialista. Su acción estuvo constantemente dominada por la contradicción entre estas dos líneas: de un lado actuaban como *foco* y daban prioridad a la acción armada; de otro, querían ser los agentes de formación de un movimiento de masas. Los partidarios de la acción armada querían un grupo proletarizado, anti-pequeñoburgués; la otra tendencia, alimentada en particular por la tradición pluralista y radical del partido *blanco,* desarrolló unos temas comunitarios e imaginó un tipo de acción semejante al de Martín Fierro, pero ante todo buscaron

alianzas políticas. Lo cual desembocó en la creación del *Frente Amplio* en 1971, con Liber Seregni, que obtuvo el segundo puesto en las elecciones de Montevideo. La otra tendencia concentró su acción en la capital y fue dirigida por estudiantes tan militarizados que se habló de tendencia samurai. Tendencia que eliminó el grupo de Sendic de la dirección del movimiento. Esta violencia política fue rechazada por la población, lo cual favoreció la represión militar. Esta forma de populismo revolucionario es un ejemplo extremo de desarticulación de la ideología en relación a la realidad económica y social. Unos estudiantes radicalizados se aíslan de las masas populares y no consiguen elegir entre una renovación de la política nacional-popular y la creación de un *foco* de lucha armada. Los Tupamaros fueron arrastrados hacia acciones cada vez más violentas. Es cierto que recibieron el apoyo de sectores intelectuales, y en particular de la revista *Marcha*, pero no obtuvieron el de los sindicatos. Pensaban que la lucha armada desarrollaría el movimiento de masas; de hecho, se encontraron aislados y divididos frente a la represión militar.

El estallido del populismo revolucionario fue todavía más visible en *Argentina*, donde aquellos que daban prioridad a la lucha armada de clases se unieron al ERP, de inspiración trotskista, mientras que los Montoneros eran nacionalistas peronistas. Muy diferentes de los Tupamaros, dado que se apoyaban en la tendencia política que durante mucho tiempo había sido mayoritaria en Argentina —el peronismo—, los Montoneros crearon un movimiento de masas que llegó a reunir hasta cien mil miembros. La campaña presidencial de Cámpora, en 1973, animada por la juventud peronista, transformó a los Montoneros en una corriente importante del peronismo, que se impuso sobre todo en la universidad, que fue reorganizada según cirterios partidarios y doctinarios; con ello se terminó por abatir esa institución ya violentamente atacada por las dictaduras militares. El retorno de Perón, el 20 de junio de 1973, marcado por la lucha armada entre las tendencias del peronismo que estalla en la carretera del aeropuerto, puso fin a la influencia de los Montoneros. Cámpora renunció a la presidencia en julio de 1973, y Perón, elegido con Isabel como vicepresidenta atacó a los Montoneros, sobre todo después del asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci. Los Montoneros se adentraron por el camino de la lucha armada, multiplicando los atentados y difundiendo textos de ideología confusa. Fueron, más que los portadores de un proyecto político, o incluso de una voluntad de lucha armada, la expresión de la descomposición acelerada de la política nacional-popular en Argentina.

La descomposición del populismo revolucionario

El estallido de los movimientos revolucionarios que se observa en Venezuela, en el MIR peruano y en los Tupamaros, adopta formas más extremas en otros países donde la lucha armada revolucionaria se des-

compone completamente entre unas tendencias y unos grupos, cada uno de los cuales representa una componente radicalizada del populismo revolucionario.

Ése fue, especialmente, el caso del *Brasil*, donde hemos visto formarse, contra la dictadura militar que se endureció en 1968, grupos opuestos unos a otros, algunos de inspiración foquista, luchando ante todo contra el imperialismo; otros que querían crear un partido revolucionario leninista al modo chino; por último, otros que apelaban a acciones de masas y donde se encontraban en particular los cristianos revolucionarios de A/cão Popular. Ninguna de estas tenencias —salvo, en parte, la tendencia china— consiguió organizarse sólidamente. El POLOP, marxista, creado en 1964, se dividió. Diversas tendencias revolucionarias se unieron en la *Vanguardía Popular Revolucionaria.* El Partido Comunista estalló y el ALN de Marighela, el *Partido Comunista Revolucionario Brasileiro* (PCRB) de Mário Alves, así como grupos más regionales, como el de W. Palmeira en Río, se separaron de él. A su vez, el partido comunista pro chino, el *PC do Brasil,* se dividió, participando uno de sus grupos en la creación del *Partido Revolucionário dos Trabalhadores* (PRT). Todos estos grupos manifestaron una descomposición del modelo nacional-popular más extrema que la que, entre 1961 y 1964, había conocido el movimiento sindical, dividido entre una tendencia dominada por los comunistas y los trabajadores; otra, por los líderes políticos populistas, y, por último, otra de inspiración más cercana a los sindicatos norteamericanos. Nunca existió línea política dominante en las guerillas brasileñas; siempre se esforzaron por combinar, de manera constantemente inestable, la creación de un partido revolucionario a partir de la lucha armada y la radicalización de una política nacional-popular en descomposición.

Aparentemente opuesta es la orientación del MIR chileno, dado que éste desarrolló su acción no contra una dictadura militar antipopular, sino en el seno de una democracia atravesada por tendencias nacional-populares. No obstante, en el seno del MIR volvemos a encontrar la misma línea de fractura que en la nebulosa de las guerrillas brasileñas. Los estudiantes de Concepción, núcleo formador del MIR, fueron ante todo antiimperialistas y lanzaron acciones armadas a las que también recurrieron grupos autónomos como el ELN y, sobre todo, la VOP, *Vanguardia Organizada del Pueblo.* Pero, del otro lado, V. Toro representa un populismo revolucionario apoyado en los suburbios populares de Santiago. Durante la Unidad Popular, el MIR, a la vez que combatía el reformismo de Allende, no rechazó su gobierno, encontrándose de este modo en la misma situación ambigua que la izquierda del Partido Socialista. Su lucha revolucionaria combinó de manera inestable una lucha armada antiimperialista y el apoyo a movimientos sociales, en particular entre los indios mapuches, al mismo tiempo que un esfuerzo de radicalización de las luchas de clase en los campos y en las fábricas. En Brasil y

en Chile, la acción armada se transformó, con tantas dificultades como en otros países, en *focos* de tipo castrista, es decir, en creación, mediante la lucha armada, de partidos revolucionarios marxista-leninistas. La significación principal de las guerrillas no fue preparar la construcción de partidos y de regímenes revolucionarios; fue manifestar la descomposición de los regímenes nacional-populares.

3.—El Estado antipopular

1. Dos falsas interpretaciones

Cada uno de los dos capítulos anteriores ha descrito una de las tendencias a la disociación de elementos cuya unión define los regímenes nacional-populares. A veces el sistema político tiende a prevalecer sobre el Estado y sobre los actores sociales; en otros casos, por el contrario, grupos sociales salen del sistema político, recurren a la violencia y entran en lucha abierta contra un Estado considerado como el eslabón más débil de la dominación extranjera.

En efecto, el régimen nacional-popular es, por sí mismo, débil, frágil, inestable. Al margen de la personalidad de un líder, ninguna fuerza es capaz de asegurar la integración del Estado, del sistema político y de los actores sociales o incluso la interpretación de los tres objetivos principales de la acción colectiva: modernización, defensa de intereses de clase y lucha antiimperialista.

La ruptura de estos regímenes, en particular en Guatemala en 1954, en 1964 en Brasil, en 1971 en Bolivia, en 1966 y en 1976 en Argentina, en 1973 en Chile y en Uruguay, se ha producido por regla general cuando se han acentuado las tendencias a la disociación entre crecimiento económico y demandas sociales. Cuando éstas se refuerzan, se vuelven más oprimentes, amenazan las ventajas conquistadas por la clase media y los privilegios de la oligarquía. Los medios dirigentes se libran entonces del Estado nacional-popular para rechazar por la fuerza las deman-

das populistas o revolucionarias; al mismo tiempo, en la mayoría de los países, se sienten atraídos por una incorporación más directa de su país al sistema económico internacional y por la búsqueda de las excesivamente famosas «ventajas comparativas». Tras un período de desarrollo vuelto hacia el interior pero que se agota, como en Brasil a partir de 1962, o conduce a fuertes presiones sociales, unos grupos dirigentes, militares y civiles, se vuelven de nuevo hacia el exterior para reemplazar una lógica política y social por una lógica propiamente económica que les permita liberarse de presiones sociales crecientes. Estos primeros juicios, que tendremos que completar y corregir, indican una convicción: la crisis de las democracias se explica, ante todo, por sus problemas internos, por las luchas entre intereses sociales y por la descomposición del sistema político. Para muchos, esas explicaciones resultan insuficientes: es la intervención de Estados Unidos lo que explica el éxito de las dictaduras militares, en particular en Brasil y en Chile. Afirmación que contiene una parte de verdad. Los especialistas pueden discutir sobre el grado de intervención directa del gobierno americano y en particular de la CIA en 1964 en Brasil o en 1973 en Chile; pero lo que parece estar fuera de duda es que los Estados Unidos han considerado de forma constante que tenían derecho a intervenir en el conjunto del continente. A veces, en la época de J. F. Kennedy y del lanzamiento de la Alianza para el Progreso, en Punta del Este, para ayudar al progreso económico y social; constantemente, aportando una parte importante de los recursos bancarios destinados a las inversiones económicas y sociales. A veces también, para formar parte de tropas contra las guerrillas en los campamentos de la zona del canal de Panamá y enseñar a los oficiales latinoamericanos la doctrina de la seguridad nacional y de la defensa de Occidente contra el comunismo; en otros casos, por último, para intervenir militarmente, como ocurrió desde principios de siglo en México, en Haití y en Nicaragua, por no citar más que unos pocos ejemplos, y más recientemente en Guatemala, en Cuba, en la República Dominicana, en Bolivia en el momento de la guerrilla de Guevara, en Granada. El continente vive a la sombra del Tío Sam, que sabe emplear tanto el palo como la zanahoria.

A estas intervenciones directas se añaden los efectos de la dependencia económica. Han sido bien analizados por Aníbal Pinto (cf. Bibl., I, 1, 1959) en el caso de Chile: la ampliación de la clase media se ha hecho, en ese país, mediante el crecimiento del presupuesto del Estado, al precio de un desequilibrio frecuente de los intercambios exteriores; los créditos extranjeros han permitido, a un tiempo, satisfacer las demandas de las clases medias y ricas y lanzar inversiones productivas. A esa dependencia financiera se añade una dependencia comercial, que alcanzaba un nivel excepcional en Cuba antes de la revolución. El bloqueo de la isla, como el bloqueo, más reciente, de Nicaragua, pero también las medidas adoptadas contra los exportadores de cobre chileno durante la Unidad Popular, han

demostrado la terrible eficacia de las presiones económicas ejercidas por los Estados Unidos. Cualquiera que sea el grado de intervención directa de este país en la vida política de tal o cual nación, la dependencia militar, política y económica del continente latinoamericano en relación al vecino y amo del Norte explica que la intervención americana haya sido considerada por la mayor parte de la opinión pública latinoamericana como una causa decisiva del derrocamiento de las democracias. Ese es el hecho sociológico principal. Mientras que el antiamericanismo alcanzaba una violencia extraordinaria en el período «civil» de América Latina, como lo demostraron, por ejemplo, las violentas manifestaciones que acogieron al vicepresidente Nixon en Perú y en Venezuela, y sobre todo entre los intelectuales, tanto en Argentina y en Chile como en México, las dictaduras recientes fueron apasionadamente pro americanas, políticas, económica e incluso culturalmente.

La dimensión intelectual de la caída de las democracias no puede, por tanto, subestimarse; desde luego, no ha sido subestimada por los interesados mismos. Pero sería inaceptable no ver en los países de América Latina de mediados del siglo XX otra cosa que «repúblicas bananeras» gobernadas por dictadores fantoches y sometidas a la buena voluntad de los intereses capitalistas americanos o europeos. Dependencia no es colonización y he escrito todo este libro para demostrar, por el contrario, la fuerza y la especificidad de los procesos internos, políticos y sociales que han transformado el continente. Es más fácil guardarse del error inverso, el que ve en los golpes de Estado militares el retorno a la tradición central del desarrollo político de América Latina, a un nacionalismo voluntarista. Como si Chile no hubiera hecho más que volver al Estado creado por Diego Portales y como si el modelo brasileño heredado de Getúlio Vargas se difundiese sobre una gran parte del continente. Esta interpretación no resiste el análisis, no sólo porque el Estado de Diego Portales aseguró a Chile el gobierno de los civiles, sino porque es imposible definir un proyecto societal como habría sido el de los regímenes militares. En Brasil, tanto los militares como los civiles que les precedieron, han mantenido, en efecto, una política desarrollista, cosa que no ocurrió en Argentina, en Uruguay y en Chile. En cambio, lo que define a la mayoría de las dictaduras militares recientes es haber sido o ser regímenes *antipopulares,* y, más precisamente, agentes de destrucción de regímenes *nacional-populares,* cuya debilidad y cuyas tendencias internas a la disgregación ya hemos comentado.

2. Las formas de la intervención militar

Las dictaduras militares no pueden ser identificadas con el conjunto de los regímenes militares; por lo tanto, hay que definir, en primer lugar, y analizar esta vasta categoría donde coexisten los regímenes más diversos.

La explicación más habitual de la frecuencia de los regímenes militares en América Latina empieza por la débil integración nacional de la mayoría de los países y la ausencia de partidos y de formas de movilización de masas; la debilidad de las instituciones dejaría campo libre a la fuerza de las armas. Y durante mucho tiempo se ha opuesto Uruguay, Chile o Costa Rica, países con una fuerte integración social y profundamente civiles, a Bolibia o a Guatemala, países tan poco integrados social como geográficamente. La debilidad teórica y práctica de esta explicación salta a la vista. Evita difícilmente la tautología aunque explica el poder militar por la debilidad de las instituciones civiles. Más concretamente, los ejemplos invocados han demostrado su fragilidad. En realidad, y casi sin paradoja, podría afirmarse que es en los países fuertemente integrados o en vías de integración social del Sur —en Argentina, luego en Uruguay y en Chile— donde se han instalado regímenes militares, mientras que México, Colombia y Venezuela, mucho menos integrados que los países del cono sur, conservaban regímenes democráticos. Una vez más, la tesis optimista de una modernización creando a la vez la riqueza, la urbanización y la democracia parece muy superficial. No es del todo falsa: puede admitirse que una extremada segmentación social es contraria a la formación de la institución democrática. De manera más precisa, puede decirse sobre todo que, en una economía dominada por la exportación y a veces incluso por enclaves agrícolas o mineros vueltos hacia el exterior, el proceso de construcción de un Estado nacional es difícil o incluso imposible. Pero el error consiste en creer que la intervención de los militares responde directamente a una situación económica y social, mientras que no se la puede comprender más que como una respuesta a un sistema político que debe ser definido, como hemos hecho en la tercera parte de este libro, por sus orientaciones y sus problemas internos y no sólo como la expresión de un nivel general de modernización y de desarrollo.

Esta crítica se dirige también a las explicaciones que parecen oponerse de forma más directa a la apelación a unas determinantes socioeconómicas, pero que, de hecho, las completan, porque hacen hincapié en la voluntad y la organización de los militares. En efecto, la fuerza de la organización militar y de los ejércitos, fuertemente profesionalizados desde finales del siglo XIX, sólo explica la llegada de los oficiales al poder si no existen fuerzas civiles suficientes de movilización y de control político, lo cual nos remite a la explicación anterior.

Añadamos, siguiendo al mejor analista de estos problemas, Alain Rouquié (1982), que a menudo se ha visto a generales cambiar de forma inesperada de posición: ¿no estaba considerado el ejército chileno como estrictamente profesional y subordinado al poder político? ¿Y sus principales jefes, el general Schneider, asesinado por la extrema derecha en 1970, y luego el general Prats, que también será asesinado, tras la caída de la democracia, no eran profundamente legalistas? En Brasil, el gene-

ral Abreu, jefe de una unidad de paracaidistas muy activa en la represión política, ¿no se volvió pocos años más tarde un crítico virulento del gobierno militar? En una situación completamente diferente, en Honduras, el general López Arellano, que había aplastado de forma brutal un movimiento popular en 1963, ¿no llega al poder en 1972 con el apoyo de fuerzas populares? En Bolivia, ¿no fue primero el general Ovando el segundo de Barrientos, antes de abrir el camino al general Torres y al doble poder de la Asamblea Popular? Esta complejidad y estos cambios súbitos nos obligan a abandonar la idea de una fuerza militar apoyada en la disciplina y las armas y capaz de imponerse a la sociedad civil cuando ésta se halla en crisis o enfrentada a unas amenazas interiores o exteriores. Desde luego, la ideología militar existe y el general Goes Monteiro la ha expresado en Brasil con gran fuerza: corresponde al ejército defender el Estado y la unidad nacional por encima de las fuerzas sociales y políticas y, si es menester, contra sus intereses y sus conflictos. Pero esta ideología no explica de forma más directa que el nivel de modernización la formación de los regímenes militares. No se puede hacer economía con un análisis del sistema político.

Antes de analizar las dictaduras antipopulistas que han dominado ampliamente la América del Sur durante los años setenta, hay que definir las principales situaciones en las que los militares han intervenido en la vida política.

La unidad nacional y la oligarquía

La forma más antigua de intervención militar es el poder de los *caudillos* en las jóvenes naciones a las que la independencia no dio una fuerza política y económica suficiente. Ciertas figuras de *caudillos* han quedado en la memoria y son célebres por su brutalidad sangrienta. Melgarejo llevó tan lejos en Bolivia la descomposición del Estado que en todo el continente se habló de *melgarejismo*. Pero los militares pronto son arrastrados en el gran movimiento de integración nacional cuya importancia recuerdan, con motivo, los teóricos de la modernización; ese movimiento se desarrolló en ocasiones contra ellos y al margen de ellos. Ése fue, sobre todo, el caso de Chile, donde los *pelucones* de Portales, al eliminar a los *pipiolos* liberales, establecieron con la Constitución de 1833 un régimen civil centralizado y autoritario. Ese Estado portaliano no será derrocado hasta la derrota militar del presidente Balmaceda en 1891. En Perú, mucho más tarde, fueron los civilistas, con Manuel Pardo que se convierte en presidente en 1872, y sobre todo con Piérola, quienes hacen avanzar la integración nacional contra los *caudillos*. Más extremo es el caso del Ecuador con García Moreno, que impone una teocracia para reducir el poder de los militares y consagra su país al Sagrado Corazón, en el momento en que la Francia versallesca edifica una

basílica al mismo Sagrado Corazón para borrar la mancha de la Comuna. Además se establece una alianza más directa entre la oligarquía nacional y el poder militar. Lo mismo ocurre, sobre todo, en Argentina, donde Rosas, gran propietario en la Pampa, se esfuerza por establecer el poder de la oligarquía de Buenos Aires sobre el conjunto de un territorio en desarrollo rápido.

Allí donde es fuerte el empuje de las clases medias y de ciertos sectores populares, esa alinza de la oligarquía y del ejército se vuelve más represiva, como en el Perú de Sánchez Cerro, cuando el ejército se lanza, sobre todo después de 1932, a una lucha directa contra el APRA.

El inmenso Brasil conoció varios levantamientos separatistas en Pernambuco en 1817, 1823, 1824, 1831, 1832 y 1848. La revolución Praieira de 1848 fue más social, dirigida al mismo tiempo contra el Estado y los comerciantes portugueses. De forma paralela, la revolución Farroupilha de 1835-1845, en Rio Grande do Sul, fue a un tiempo reacción contra los impuestos y un movimiento anticentralista dirigido por los grandes propietarios, los *estancieiros,* contra el poder central y contra los portugueses; fue apoyada en líneas generales por los gauchos, mientras que los colonos inmigrados sostenían al poder central. Ya hemos visto que a finales del siglo el ejército florianista brasileño había intervenido para destruir Canudos, la ciudad construida por Antonio *el Conselheiro,* donde veía una maniobra de la oligarquía de bahia contra la unidad de la república.

No es hasta finales del siglo XX cuando se organiza, en la mayoría de los países, un ejército profesional con el apoyo de misiones militares, alemanas o francesas. En Argentina se crea el *Colegio Militar* en 1870 y la Escuela Naval en 1872, mucho antes de que Roca llame a una misión alemana. También Chile llamó a instructores alemanes, mientras Perú recurría a los franceses al tiempo que los dos países europeos entraban en competencia para organizar el ejército brasileño.

La formación de ejércitos profesionales refuerza el nacionalismo militar. En particular en *Bolivia* tras la derrota del Chaco. Este país se hallaba dominado por lo que Patch ha llamado la «no-existencia de la nación», tan grandes eran las diferencias regionales y tanto predominaba el poder de los grandes propietarios. La intervención de jóvenes oficiales fue una de las raíces del movimiento nacional-popular que debía tomar el poder en 1952, pero éste fue también propiamente nacionalista, sensible incluso a los modelos alemán e italiano.

En Chile, el nacionalismo se formó durante la guerra del Pacífico y fue exaltado por grandes conquistas territoriales contra Perú y Bolivia y también por el sacrificio patriótico de Arturo Prat en Iquique. El nacionalismo chileno también se vio reforzado por las largas guerras interiores contra los mapuches, rechazados a sus reservas al sur del país. Este papel del ejército no se encuentra en todos los países. En Perú, a finales

del siglo XIX se impone la dominación de la oligarquía. En México, el triunfo de Juárez contra Maximiliano, apoyado por Napoleón III, no fue sólo militar; ante todo fue la victoria de los liberales contra los conservadores, de tal forma que el nacionalismo mexicano, siempre vivo, fue también antioligárquico.

El Estado patrimonial

La tesis sostenida por los teóricos extremos de la dependencia es que el Estado no es sino el eslabón central y más débil de la dominación extranjera. Tesis importante, puesto que ha empujado al desarrollo de las guerrillas a expensas de las acciones de masas, pero que está tan lejos de la realidad de América del Sur y de México que resulta comprensible el fracaso de esas guerrillas. En cambio, en el caso de ciertos países de América central y del Caribe, ataca con razón a unos Estados subordinados a intereses económicos, incluso políticos, definidos al margen de ellos. No obstante, el tipo de Estado que se opone al del Estado a la vez nacional-popular y nacionalista es menos un Estado fantoche al servicio del extranjero que un Estado patrimonial al servicio de sus dirigentes, apoyados además en los Estados Unidos.

Aunque la dominación americana se haya ejercido con demasiada frecuencia de la manera más directa, mediante la ocupación militar, los dictadores no fueron sólo instrumentos al servicio del colonialismo americano. Muy a menudo, se dieron incluso un tono, si no populista, al menos *plebeyo,* y encontraron apoyos en las categorías populares y en unas fuerzas políticas que hablaban en nombre suyo, en particular en el Partido Comunista. No hay que olvidar, por otro lado, que países como la Nicaragua de Somoza conocieron un largo período de crecimiento económico, durante el cual el Estado patrimonal confiscó, en provecho suyo, el enriquecimiento y utilizó la debilidad política de los grupos económicos dirigentes. Estos regímenes recurrieron a la represión sangrienta y a la corrupción en gran escala; pero todavía pertenecen al tipo nacional-popular, al menos como su caricatura.

El caso extremo es el de Somoza, que llegó al poder en *Nicaragua* a través de la lucha de la Guardia Nacional contra el nacionalista Sandino. Tacho Somoza, como sus sucesores, su hijo Luis a su muerte en 1956, y Tachito, que llegó al poder en 1973, acumularon una fortuna inmensa y gobernaron apoyándose en una Guardia Nacional encargada de la represión. Recurrieron a veces a cierto populismo e hicieron votar leyes sociales que no aplicaron. Los Somoza encontraron apoyos ante todo en función de sus intereses personales. Ése fue también el caso de Trujillo en la República Dominicana, que llevó al extremo la patrimonialización del país, apoderándose de una gran parte de las tierras buenas y apoyándose también en los Estados Unidos y en la represión política y social.

En *Cuba,* Batista se alejó de ese modelo simple, porque incorporó

más elementos nacional-populares a su régimen. Llegó al poder tras el período casi revolucionario que siguió a la caída de Machado, en 1933, apoyándose en los suboficiales mestizos y mulatos y aliándose con la *pentarquía* de Grau San Martín, de suerte que durante un año Cuba estuvo sometida a una mezcla de militarismo y de radicalismo civil. A partir de 1934, Batista fue el único jefe y el país se militarizó, sin que por ello podamos decir que el dictador perdió ciertos apoyos políticos, en particular el del Partido Comunista, que lo apoyó con firmeza, pensando ver en él el agente de uno de los frentes populares buscados por el Komintern, y que colocó varios ministros en el gobierno. Tras la vuelta de Grau San Martín al poder en 1944, pese al apoyo del PC a Batista, Cuba conoció una extrema descomposición política, desgarrada entre los «auténticos» de Prío Socarras y los «ortodoxos», cuyo líder, Eduardo Chibas, se suicidó casi públicamente. Batista volvió a asumir la dirección del país mediante un golpe de Estado en 1952, y durante este último período se apoyó cada vez más en la apelación a la cultura africana tradicional.

Así fue también como gobernó en *Haití* Duvalier, *Papá Doc,* llegado al poder en 1957, y que al principio defendió un nacionalismo negro contra la minoría mulata, protegiendo el vudú, entrando en conflicto con la Iglesia católica y transformando paulatinamente su dictadura en un régimen represivo y corrompido, apoyado en una temible policía política, los Tontons Macoutes. Duvalier fue protegido de modo intermitente por los Estados Unidos. Su hijo Jean-Claude, que le sucedió en 1971, tras un período de aparente liberalización, volvió a un régimen análogo, pero se acercó a la burguesía mulata. Hasta que los Estados Unidos, temiendo una sublevación popular que podría ser utilizada por Cuba, obligan al joven dictador a exiliarse en febrero de 1986, lo cual puso fin al poder arbitrario de los Tontons Macoutes.

La represión en América central

Los antiguos dictadores de *Guatemala,* y sobre todo Justo Rufino Barrios (1871-1885), querían modernizar de manera autoritaria su país en el momento de la gran expansión del café. E. Torres-Rivas opone incluso la dictadura plebeya, de tipo guatemalteco, a la república aristocrática de Costa Rica, dirigida en la misma época por las grandes familias del café. Con Jorge Ubico, que llega al poder en Guatemala en 1931, la voluntad autoritaria de modernización, que se traduce en particular por la creación de una red de carreteras hecha por los indios sometidos a trabajos forzados, se asocia más estrechamente a la influencia de las compañías americanas y sobre todo de la célebre United Fruit. Lo cual provoca en 1944 una gran sublevación interclasista que reproduce las luchas populares de 1920 contra la dictadura de Estrada Cabrera, que habían culminado con la «semana trágica» de abril durante la que fueron muertos ochocientos obreros y artesanos. El carácter violentamente an-

tipopular de las dictaduras guatemaltecas no cesa de adquirir importancia, mientras desaparece el espíritu modernizador de la dictadura plebeya. Esta política represiva encuentra en Guatemala su origen en el debilitamiento de la oligarquía tradicional desbordada por los efectos del rápido crecimiento económico, estimulado por la creación del Mercado Común Centroamericano. Sería un error creer que la represión está directamente al servicio de esa oligarquía. Ésta no tiene, de hecho, poder hegemónico, no se apoya en un gran partido, está debilitada por sus luchas intestinas. Pero las categorías nuevas —industriales, mercantiles y bancarias, profesiones liberales, funcionarios y obreros— están divididas. De ahí las tentativas civiles lanzadas, sobre todo, por la Democracia Cristiana e incluso, como hemos visto, las vacilaciones del Partido Comunista, cogido entre la guerrilla y el Gobierno civil de Méndez Montenegro. Incluso una parte del ejército apoya las tentativas de reforma. Pero el espacio político abierto por las nuevas categorías urbanas es frágil. Porque el mundo indio ha seguido excluido; eso provoca sublevaciones campesinas pero, sobre todo, arrastra a una parte de los estudiantes, de los intelectuales y de los políticos hacia un radicalismo cada vez más revolucionario; y también porque el sindicalismo es poderoso, como lo muestran la masiva marcha de los mineros en 1977 y la huelga general de 1978. Impulsos populares que, a cambio, provocan un acercamiento de los nuevos ricos y de los agroexportadores. Estos intereses heterogéneos no consiguen imponer un orden político antipopular; de ahí el deslizamiento rápido hacia la descomposición del Estado y su desbordamiento por una represión paramilitar. En 1974, el general Jell Laugerud elimina al general Ríos Montt, que había ganado las elecciones. Esa fecha señala el inicio de la disgregación del Estado militar que dominaba desde que, en 1963, el coronel Peralta se había apoderado directamente del poder impidiendo la elección de J. J. Arévalo tras haber sucedido él mismo a los gobiernos contrarrevolucionarios de Castillo Armas (1954-1957) y de Ydígoras Fuentes (1957-1963). Con Laugerud, luego con Lucas García (1978-1982) y, tras el fracaso de la nueva tentativa de gobierno moderada de Ríos Montt en 1982-1983 y de su programa *Fusiles y Frijoles,* el Estado se disuelve en su propia actividad represiva y Guatemala queda dominada por las luchas armadas. La fase central de la represión se abre el 29 de mayo de 1978 con la matanza de indios que se manifiestan en Panzos, y, en 1980, al mismo tiempo que aumentan los atentados, se acentúa la represión. Las ejecuciones y desapariciones, que habían variado de 135 a 342 casos por año entre 1972 y 1978, se elevan a 300 durante el primer semestre de 1979 y a 250-300 por mes en 1981. Una red de *comisionados militares* se extiende por los campos y hace reinar el terror de un verdadero bandidismo de Estado.

La descomposición del sistema político está menos acentuada en *El Salvador.* La militarización del poder, desde luego, es nítida a partir del golpe de Estado de 1961, y la coalición demócrata-cristiana, socialdemó-

crata y comunista que había ganado las elecciones de 1972, bajo la dirección de N. Duarte y G. Ungo, es apartada por la fuerza del poder. Pero el golpe de Estado militar de 1979 busca una alianza con los civiles y en particular con la Democracia Cristiana, y se proclaman reformas. Breve episodio, porque la represión hace subir el número de muertos en 1980 a 10.000, entre los que figura el arzobispo de El Salvador, monseñor Romero. Sin embargo, el debilitamiento de la guerrilla en la ciudad y las medidas de reforma agraria explican la victoria de N. Duarte en 1982 y la nueva tentativa de reconstitución de un espacio político; sin que por ello esta victoria ponga fin a la represión llevada por el ejército y los grupos paramilitares, apoyados en una extrema derecha movilizada por R. d'Aubuisson.

En Guatemala y en El Salvador, los regímenes militares entrañan la descomposición y no el fortalecimiento del Estado, según una lógica que es más la de los países colonizados que la de los países dependientes. Hay que reconocer que el istmo sigue dividido entre las dos lógicas, la que conduce a la represión contrarrevolucionaria o, al revés, en Nicaragua por lo menos, a la victoria de la guerra revolucionaria, y aquella que, pese a la extrema violencia de la represión y la fuerza de la guerrilla, no rompe por completo con la lógica nacional-popular, que sigue siendo predominante en Costa Rica y, bajo otras formas, en Panamá e incluso en parte de Honduras.

En el Caribe, por el contrario, ciertos regímenes autoritarios se sitúan tanto fuera del populismo como del antipopulismo; tal es el caso del régimen creado por Dersy Bouterse en *Surinam,* cinco años después de la independencia de ese país, en 1980. Régimen militar, bien acogido al principio por Amsterdam, pero dominado desde su creación por las luchas étnicas. La mayoría de los ciudadanos de origen indio habían partido ya hacia los Países Bajos desde la independencia, pero, sobre todo, contra la dictadura de Bouterse se formó una guerrilla apoyada en los «negros de la selva», descendientes de esclavos negros huidos. R. Brunswijk, que pertenece a esa población, cerca de la Guayana francesa, dirige esa guerrilla, mientras Surinam se hunde en la regresión económica y mientras Bouterse sólo se mantiene gracias al ejército hasta el momento en que pierde las elecciones en 1987.

3. Las dictaduras antipopulares

El ascenso de los regímenes nacional-populares desborda en seguida, en la mayoría de los países, una concepción oligárquica patrimonial de la unidad nacional, que estaba debilitada por la naturaleza misma de la oligarquía y de la economía dependiente. A partir de ese momento, las intervenciones militares dependen mucho menos de las iniciativas del ejército que de problemas internos de formación o de crisis y de descomposi-

ción de los regímenes nacional-populares. El carácter más importante de éstos, para comprender las intervenciones militares, es la interpenetración e incluso la confusión del Estado, del sistema político y de los actores sociales, porque define dos grandes tipos de intervención del ejército: cuando existen obstáculos importantes para la formación del sistema nacional-popular, el ejército interviene de manera populista (lo cual nos llevó, al principio de la tercera parte, a integrar numerosos regímenes militares en el conjunto de regímenes nacional-populares). Y a la inversa, cuando esos regímenes se descomponen y el elemento central, el sistema político, no consigue mantener bajo su control el Estado de un lado, los actores sociales del otro, y, sobre todo, cuando las fuerzas populares se radicalizan y salen de los límites fijados por el Estado de compromiso, el ejército interviene, a veces para salvar el sistema nacional-popular, la mayoría de las veces para luchar contra fuerzas revolucionarias, pero menos en nombre de la oligarquía que en nombre de un Estado que entonces se identifica con el ejército mismo, incluso con los intereses personales de una nueva burguesía militar.

Cuanto más fuerte es el impulso de los diversos grupos sociales, en detrimento a la vez del poder hegemónico de la oligarquía y de la eficacia de las instituciones representativas, tanto más se desarrolla el *pretorianismo,* definido por S. Huntington como la absorción, en la esfera política, de un gran número de grupos de interés. La inestabilidad política es tanto mayor cuanto más masiva es esa penetración, sobre todo cuando el crecimiento es débil, como en el caso de la Argentina.

Sin reducir esos regímenes a su sola acción represiva, hay que subrayar el papel central y muy autónomo de las fuerzas de *represión* propiamente política en unos países en que llegan a constituir un Estado en el Estado. Tal fue el caso, en particular, del *Brasil* donde el SNI fue el elemento central de la *Coalição Continuísta,* que se opuso a la *distensão* de 1974. Asimismo en *Chile,* la DINA, reemplazada en 1988 por el CNI, ha sido mucho más que una policía política. La importancia central de la represión antipopular es tan grande en esos regímenes militares que, a veces, éstos dejan de ser militaristas. G. Arriagada (1980) define el militarismo como la imposición de valores y de intereses militares al conjunto de la sociedad. A esta definición corresponden perfectamente lo que se ha denominado el militarismo alemán antes de la primera guerra mundial y todavía hoy un régimen como el de Gaddafi, dominado por la idea de guerra santa. En todos los casos en que se aplica la noción de militarismo, el Estado está comprometido en guerras o responde a amenazas de guerra que ponen en jaque la vida del país. La situación latinoamericana es diferente. La inmensa mayoría de los oficiales no tienen experiencia alguna de la guerra. El papel del ejército, por tanto, no es de movilización, sino de *contención* de la sociedad civil. De ahí el carácter paradójico del régimen *chileno:* es un gobierno militar que insiste en la profesionalización de su ejército, pero que sin embargo interviene de

manera propiamente política para llevar a cabo una acción antipopular. El régimen chileno es, efectivamente, un régimen militar, una dictadura que se apoya en un ejército respetado por su papel de construcción del Estado nacional y de conquista, pero su funcionamiento se apoya mucho menos en la disciplina que en la represión. No hay apenas militarización en las sociedades latinoamericanas, y a menudo sería mejor hablar de una *desmilitarización del ejército* y de su transformación, por un lado, en administración y, por otro, en policía. El ejército no sólo no es un grupo profesional ni una pura fuerza militar exterior al sistema político, sino que pertenece tan completamente a éste que sus divisiones se manifiestan en el seno de la institución militar. A. Rouquié ha podido hablar de «partidos militares» en Brasil y, en el libro que ha dirigido, A. C. Peixoto ha analizado las luchas políticas en el seno del club militar durante el período getulista y posgetulista. De igual manera, la oposición de los azules, nacionalistas, y de los colorados, liberales, en el ejército *argentino,* al principio de los años sesenta, es propiamente político. Salvo en ciertos casos extremos, es más justo hablar de politización del ejército que de militarización de la política, sobre todo en el momento del ascenso de los regímenes nacional-populares.

La América Latina conoció casos más extremos de desmilitarización del ejército. En *El Salvador* y, sobre todo en *Guatemala,* donde la oligarquía exportadora es más débil, el ejército se convierte en el elemento principal de una nueva burguesía más especulativa que productora, y que se enriquece también mediante el bandidismo. Ejemplo superado también por García Meza y otros jefes militares *bolivianos,* que pusieron su poder al servicio de los traficantes de droga. Punto extremo de la descomposición de los regímenes nacional-populares que, sin embargo, en unos países vecinos, como Panamá y Honduras, se han constituido por iniciativa de militares como Torrijos y López Arellano.

Leyendo rápidamente la impresionante lista de los gobiernos militares llegados al poder por una elección o un golpe de Estado, sentimos la tentación de decir que América Latina ha estado dominada por poderes militares, a los que pueden añadirse los regímenes autoritarios. ¿No son los regímenes militares excepciones o paréntesis en la historia reciente de Brasil o de la Argentina, lo mismo que de El Salvador o de Guatemala? Querría demostrar el error de esa representación. El modelo político central en América Latina es el régimen nacional-popular, y las intervenciones del ejército no se comprenden, en su frecuencia y su diversidad, más que como aspectos particulares de la formación y de la descomposición de esos regímenes. Pero esta hipótesis general no puede ser completamente demostrada salvo que se aplique con precisión a las dictaduras militares que se han impuesto, desde 1964, en los países del cono sur, algunos de los cuales, por lo menos, tenían las democracias más estables del continente. Estos regímenes militares, sin suprimir nunca del todo las instituciones políticas anteriores, han dado la impresión de crear

un orden nuevo, militarizado. ¿Hay que aceptar esa interpretación y reconocer la aparición de un tipo de regímenes definido por sus principios y sus proyectos propios, más allá de su obra de represión, o hay que mantener, por el contrario, que esos regímenes no han sido otra cosa que agentes de liquidación de un populismo debilitado por dificultades económicas o desbordado por un radicalismo revolucionario? La primera tesis es más atrayente, porque va más allá de condenaciones demasiado sumarias; sin embargo, nosotros nos orientaremos hacia la segunda.

Las teorías del Estado autoritario

El carácter dramático de la dominación hitleriana en Alemania y en otros países y la influencia del pensamiento europeo, sobre todo marxista, explican el frecuente uso de la noción de *fascismo* para definir las dictaduras militares antipopulistas en América Latina. Noción, por otro lado, poco precisa y que utiliza un término italiano para referirse a una realidad más bien alemana que jamás ha empleado el término fascista para llamarse a sí misma, sino más bien el de popular *(völkisch)*, como lo ha vuelto a llamar J. P. Faye en *Langages totalitaires* (Lenguajes totalitarios).

Las formas de control político empleadas en las dictaduras latinoamericanas han sido, de hecho, muy diferentes de aquellas a las que recurrieron los regímenes fascistas. Éstos habían lanzado una fuerte movilización ideológica, una militarización de la población asociada a temas antielitistas, antiintelectuales y, a menudo, de origen socialista. En América Latina, por el contrario, se observa una ausencia de movilización de la población por el Estado, una intervención de éste más represiva que ideológica y unas referencias constantes a valores tradicionales. Diferencias tan profundas que parece preferible descartar la noción de fascismo del análisis de las dictaduras militares latinoamericanas. Si la noción ha sido empleada, a pesar de su evidente inadecuación, lo ha sido, sobre todo, para defender la tesis de que las dictaduras latinoamericanas, como las de Europa, fueron instrumentos de defensa de un capitalismo en crisis y amenazado por la presión popular. En Europa, semejante interpretación definiendo la economía nazi como completamente capitalista no da más que una explicación muy insuficiente de la realidad. En América Latina, una explicación en términos de intereses de clase tiene un valor también limitado, puesto que hemos demostrado ampliamente la ausencia de capacidad hegemónica de lo que algunos llaman la burguesía nacional, en países donde el proceso de industrialización ha sido dirigido por el Estado y por capitalistas extranjeros antes que por grupos económicos privados nacionales. H. Jaguaribe, uno de los analistas más originales de la realidad latinoamericana, ha hablado de «fascismo colonial» para designar esos regímenes militares, pero tal expresión es inadecuada por dos motivos: porque la situación de depen-

dencia no puede ser reducida a una situación colonial, en particular en países con fuerte producción industrial, como Brasil o México, y porque el régimen militar que se hace con el poder en Brasil en 1964, incluso aunque durante un período haya sido violentamente represivo, jamás ha utilizado temas políticos e ideológicos de tipo fascista. Definir esos regímenes militares como fascistas puede ser, para ciertos intelectuales, una manera de hacer comprender su viva repugnancia respecto a los dictadores, pero no hace progresar el análisis.

G. O'Donnell ha elaborado, en cambio, una teoría original que ha ejercido una profunda influencia. Se apoya, ante todo, en la idea de un desequilibrio creciente entre una movilización social que se extiende y una oferta política y económica que decrece. O'Donnell define la movilización de manera precisa calculando la movilización, no del conjunto del país, sino de su centro, lo cual tiene una importancia particular en el caso de Brasil. Esta modernización entraña desigualdades sociales crecientes y un aumento del pluralismo político que aumenta la fuerza de las presiones. El sistema político no absorbe más que una parte de esas presiones; cuanto más desbordan las instituciones, más se transforman en pretorianismo militar. Es el desequilibrio creciente entre la demanda social y la oferta económica lo que conduce a un régimen autoritario y represivo. La oferta política y económica, por su parte, disminuye, dice O'Donnell, con el agotamiento de la sustitución de las importaciones. La importancia del mercado interno de bienes de consumo duraderos y no duraderos conduce a los dirigentes económicos a querer entrar en un proceso de *deepening,* a crear los *backward linkages* que permitan crear, a partir de industrias de consumo, industrias de bienes de equipamiento y de bienes de capital. O'Donnell critica por tanto la teoría de la modernización política presentada por Lipset en su libro clásico, *Political man,* que presupone un paralelismo entre modernización económica y democratización. Su análisis está más cerca del análisis de D. Easton al hablar de las demandas que se ejercen sobre el sistema político. O'Donnell concluye separando tres situaciones: alta, media y baja modernización del centro. Es en el primer caso donde la democratización queda reemplazada por un régimen de exclusión; en el segundo, la democracia puede mantenerse; en el tercero, la presión democrática no es lo bastante fuerte para derribar la dominación oligárquica. Su tipología queda resumida en el cuadro de la página siguiente.

Esta tipología, publicada en los inicios de los años setenta, puede examinarse a la luz de la experiencia histórica más reciente. La evolución de ciertos países, de un nivel bajo a un nivel medio de modernización, ha aumentado sus posibilidades de democratización. El caso del Ecuador es particularmente claro. En el de Bolivia, la inestabilidad política ha sido tran grande a partir de 1964 que resulta difícil establecer en este país una relación entre la evolución socioeconómica y el régimen político. La evolución de Chile y de Uruguay, que pasaron, poco des-

pués de la publicación de este libro, de la democracia al autoritarismo, debería ser explicada por un aumento rápido de la modernización de esos países. Pero tal explicación no es aceptable en el caso de Uruguay, estancado e incluso en decadencia económica, y en Chile los cambios políticos y sociales, entre 1964 y 1973, fueron más rápidos y más profundos que los cambios económicos. Semejante cuadro no ofrece tampoco explicación satisfactoria de la vuelta del peronismo al poder en 1973. No explica ya la vuelta progresiva del Brasil a la democracia, puesto que esa vuelta comenzó a mediados de los años setenta, en un período que no era de baja del nivel de modernización. El análisis de O'Donnell tiene el gran interés de ampliar el campo de análisis y de buscar unas relaciones entre cambios económicos, sociales y políticos. Pero se apoya en una explicación causal de los hechos políticos por los hechos económicos, explicación que conviene mal a la realidad latinoamericana, según ha demostrado este libro. Por otro lado, la situación social es analizada como un sistema social comparable a un mercado que sería controlado por una mano invisible. La idea de que un desequilibrio entre demandas sociales y ofertas políticas desemboca en un régimen autoritario de exclusión implica que el Estado, y en particular las fuerzas armadas, actúa como un árbitro, esforzándose por mantener la balanza política en equilibrio; esta imagen de la vida social y política está tan alejada de la realidad como la del mercado perfecto.

O'Donnell ha sido sensible, con justicia, a la debilidad de una interpretación demasiado global y ha dejado la puerta abierta a análisis más complejos, insistiendo en la dualidad de orientación de los regímenes autoritarios; pero se comprende mal cómo pueden combinarse análisis más diversificados con los principios generales de explicación que él mismo ha adelantado.

Nivel de modernización y régimen político

Dimensión socioeconómica	Democracia política	Régimen de exclusión	Régimen político
A. Fuerte modernización			
Argentina y Brasil	No	Sí	Burocracia autoritaria.
B. Modernización media			
1. Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela	Sí	No	Democracia popular.
2. Perú	No	No	Populismo autoritario.
C. Debil modernización			
1. Ecuador	No	No	Populismo autoritario
2. Bolivia	No	No	Fluctuación entre populismo y tradicionalismo autoritario.
3. Paraguay	No	Sí	Tradicionalismo autoritario.

FUENTE: G. O'Donnell, *Modernización y autoritarismo*, pág. 126.

¿Más allá de la represión?

G. O'Donnell ha definido las dictaduras militares como *burocrático-militares,* para insistir en la orientación antipopular y represiva de todos los regímenes dictatoriales, distinguiéndolos de las tiranías patrimoniales más tradicionales que se han encontrado en América central y a las que todavía se acerca en parte el Paraguay del general Stroessner. Pero ¿qué significa autoritarismo? La noción fue introducida por J. Linz y por Ph. Schmitter para diferenciar ciertas dictaduras del fascismo europeo. El mejor ejemplo de régimen autoritario, según Linz, fue la España de Franco. Un Estado dictatorial, tras una crisis social y económica fuerte, combina una política neotradicionalista y nacionalista, una fuerte represión de las reivindicaciones económicas y de las iniciativas políticas de los grupos populares, con el apoyo dado al desarrollo capitalista del país. Lo que separa con más claridad un régimen autoritario de un régimen fascista es la ausencia de totalitarismo y la sustitución de una movilización ideológica y militar por un control puramente represivo de la población.

Pero en América Latina es difícil demostrar la interdependencia de todos los elementos que entran en la definición de los regímenes autoritarios. No existe política económica común a todos los regímenes autoritarios. El único elemento común a todos fue la *represión antipopular.* Puede hablarse de un régimen e incluso de un proyecto nacional autoritario, mientras que la noción de gobierno antipopular, que me parece preferible, introduce una definición más limitada, más «reactiva» de la dictadura. La noción de autoritarismo supone la existencia de un Estado capaz de dirigir, por una especie de populismo al revés, el paso del pasado al futuro; la noción de régimen antipopular introduce la idea mucho más restrictiva de una reacción a un exceso de demandas de participación.

Esta política represiva no aparece directamente vinculada a un programa económico, y diversos regímenes autoritarios han podido cambiar de política económica sin modificar profundamente su naturaleza política. En Chile, el proyecto económico de los *Chicago boys* se aplicó a partir de 1975. Pero desde 1982, la crisis económica obliga a un cambio de política que conduce a las tentativas de Cáceres y Escobar en 1983 y 1984, antes del retorno a una política más ortodoxa en 1985. En Argentina, la continuidad de la represión no ha impedido bruscos cambios en la política económica. J. Serra (en Collier, cf. Bibl., I, 1) rechaza de forma más directa la idea de una determinación de la política del régimen militar brasileño por argumentos económicos.

Y es que la represión tiene su lógica propia. No consiste sólo en reprimir a unas fuerzas sociales, sino también en proteger un Estado amenazado. Objetivo que adopta un sentido dramático en Argentina y en Uruguay en la época de los Montoneros y de los Tupamaros, y asimismo

en la Bolivia de Banzer; menos dramática en Brasil en 1964 y en Chile en 1973, donde no existían luchas revolucionarias armadas. Esta represión adopta dos formas distintas. En Argentina corresponde a la debilidad del Estado, se halla poco centralizada y es dirigida por diversos centros de represión, oficiales y oficiosos, lo cual se traduce por un número elevado de víctimas desaparecidas. A una guerrilla contra el Estado responde una guerrilla antipopular, protegida por el Estado, pero que no se identifica del todo con el sistema oficial de poder. En Chile, por el contrario, tras un período de terror destinado a evitar una sublevación popular, la represión quedó fuertemente centralizada y organizada. El aspecto más común a todos estos regímenes represivos fue el papel central de la *tortura* y de una represión más intensiva que extensiva. El país en que el Estado era más fuerte, Brasil, fue aquel que organizó de la forma más burocrática la tortura y que enseñó sus técnicas a otras dictaduras. La importancia de la tortura, de los campos de concentración, de los desaparecidos y de los exiliados indican el carácter ante todo antipopular de esos regímenes, y la imposibilidad de aceptar su pretensión de defender valores cristianos.

La represión fue menos fuerte allí donde la presión popular misma era más limitada, en la Argentina de Onganía y en el Brasil de Castelo Branco. Uno y otro se esforzaron por mantener o restablecer ciertos procesos institucionales. En el caso argentino, el régimen fue influido por la presión popular, lo que explica en particular la sustitución de Onganía por Livingston después del *cordobazo*. De igual manera, en Bolivia, Ovando sucedió a Barrientos, que había mantenido vínculos con ciertas partes del sindicalismo campesino.

M. A. Garretón ha subrayado la dualidad de las orientaciones de los regímenes del cono sur, que define por una «combinación de dos dimensiones. La primera es de tipo reactivo o defensivo y su elemento central es la represión que se esfuerza por desarticular la sociedad precedente y en particular los modos de constitución de sujetos sociopolíticos en cada sociedad. La segunda es de tipo transformador o fundador, que aspira a la reorganización de la base material de la sociedad o de su estructura institucional y apunta a la creación de un nuevo orden sociopolítico a través de ciertas formas de capitalismo moderno y a la reinserción en el sistema internacional» (cf. Bibl., IV, 3, «Proyectos...», pág. 11). En Brasil, pocos meses más tarde, F. H. Cardoso, al analizar el modelo político autoritario, reconocía la misma dualidad entre un programa político-administrativo represivo y un programa de política económica dinámica. Tales concepciones tienen el mérito de rechazar la idea de un proyecto integrado, hegemónico. Es cierto que las dictaduras militares han elaborado a menudo una ideología de la seguridad nacional, primero en Brasil y luego en Chile, donde el general Pinochet había dirigido estudios geopolíticos. Sin embargo, el análisis de esta ideología, presentada por A. Varas y F. Agüero, muestra que se trata menos de una vi-

sión global de la sociedad nacional y de sus problemas internacionales que de una visión no social de la sociedad. Define el Estado como un organismo que responde a unas leyes biológicas, siguiendo sus intereses de defensa nacional, y que debe controlar y utilizar la sociedad concebida solamente como «la masa humana situada en el seno de los límites del Estado», según la expresión empleada por un texto militar chileno. En Brasil, el general Goes Monteiro, citado por Rouquié (1982), escribe: «El Estado debe tener el poder de intervenir para regular toda la vida colectiva y disciplinar la nación.» Semejante ideología es de uso interno; está difundida en los estados mayores, pero no sirve de instrumento de integración política puesto que es, por naturaleza, antiintegradora. La política social de las dictaduras se define mejor de manera negativa que positiva: su objetivo principal fue romper la política nacional-popular, es decir la indiferenciación del Estado, del sistema político y de los actores sociales. El Estado se afirma como principio de unidad opuesta al mundo sociopolítico, que es el de las divisiones destructoras. El Estado antipopular rechaza alianzas y compromisos; no es ni un Estado nacional-popular, ni el lugar de «conversaciones entre notables». Es un aparato represivo mucho más que de modernización. No trata de introducir un nuevo principio de legitimidad política o ideológica, ni siquiera cuando tiene amplios apoyos en la opinión pública.

En Brasil, la fórmula del general Geisel definiendo su objetivo como «el máximum de desarrollo posible con el mínimum de seguridad indispensable» traduce perfectamente la dualidad del sistema de gobierno. Delfim Neto, dueño omnipotente de la economía brasileña de 1967 a 1974, ha declarado: «Raramente hemos tenido un gobierno como éste en la historia de este país, sin compromiso de la naturaleza que sea con las clases sociales o los grupos económicos.» Es demasiado fácil responderle que esa política económica benefició a las clases dirigentes e incrementó las desigualdades sociales gracias a la represión que se ejercía sobre las clases populares y sus representantes. Nadie niega que la política económica de Brasil ha sido antipopular, pero también es cierto que esa política económica fue dirigida por el Estado sin que ni los militares ni los grupos privados asumieran su responsabilidad principal. Política económica del Estado, demandas de los industriales y preocupaciones de los militares se hallan constantemente disociadas en Brasil durante la dictadura. La represión, que alcanza su mayor violencia bajo Costa e Silva y Médici, no tiene nada que ver con el crecimiento de la economía brasileña, y, del otro lado, con posterioridad a 1974, se oye a los intereses privados, apoyados por la gran prensa de São Paulo y de Río, denunciar la estatalización de la economía.

El tema de los *anillos burocráticos* elaborado por F. H. Cardoso (1973) se opone precisamente a la imagen de una burguesía hegemónica; Cardoso ha querido mostrar que los lazos, a menudo muy estrechos, que unen unos sectores de gobierno con los medios de los negocios no se

transforman nunca en una integración de objetivos generales de la burguesía y del gobierno. Criticando a C. Lafer, que afirma la colaboración estrecha de los medios de los negocios y del gobierno, P. Faucher se une a las conclusiones de Cardoso.

A pesar de las apariencias, es en *Chile* donde los límites de la empresa del régimen militar sobre la sociedad son más visibles. Cierto que en este país la dictadura dio a los oficiales en activo o retirados la dirección tanto de empresas públicas como de universidades. Más cierto es todavía que los militares chilenos que, tras la dictadura de Ibáñez, es decir, a partir de 1932, fueron dejados al margen y casi desterrados de la sociedad, condenados en particular a bajos salarios, se toman tras 1973 su revancha. Los gastos militares, que alcanzan entre el 8 y el 9 por 100 del PIB, apenas han servido para modernizar el ejército chileno; en cambio, los salarios de los oficiales son considerablemente elevados y los militares de carrera disponen de un sistema de seguridad social muy privilegiado.

Este militarismo defiende sobre todo los intereses corporativos de los militares, que a su vez son los instrumentos del poder personal del general Pinochet. Éste hizo aprobar en 1980 una Constitución que, hecho excepcional, le da especialmente todos los poderes durante la fase transitoria que debe concluir en 1989 y multiplica los medios para permitirle prolongar ese poder hasta 1997, e incluso más allá. Pero no establece el control de los militares sobre la sociedad. Aunque el régimen militar emplea la violencia, mediante la muerte y la tortura, contra sus adversarios, no ha logrado dominar ni al sindicalismo ni al movimiento estudiantil, y los partidos tradicionales se han mantenido fácilmente o se han reconstituido después de 1973. Sobre todo, el Estado ha debilitado su propio control sobre la economía.

¿Un proyecto económico y social?

Frente a este papel central de destrucción del modelo nacional-popular, ¿han elaborado las dictaduras militares de los años setenta un proyecto económico y social? En realidad, las políticas económicas de estos regímenes tienen dos aspectos. De un lado, son la expresión económica de la orientación antipopular de esos regímenes y se encuentran, por tanto, en todas partes; de otro, se puede definir su proyecto industrializador, pero no está presente en todos los regímenes y, allí donde existe, continúa políticas desarrollistas *anteriores*. El aspecto económico de la acción represiva consiste en crear una economía sin sociedad, gobernada por una racionalidad exterior a los procesos socioeconómicos internos. El desarrollismo proteccionista había exagerado la capacidad de presión de muchas empresas improductivas, de sindicatos obreros, de la burocracia pública, disminuyendo la capacidad de inversión, estimulando la inflación, obstaculizando el necesario *deepening* de la economía. Conviene, por tanto, dicen los regímenes autoritarios, someter la vida económica a la lógica externa del mercado internacional para que el

país utilice mejor sus «ventajas relativas», reoriente sus inversiones, atraiga capitales extranjeros. Pero esta internacionalización de la economía no siempre conduce al desarrollo económico. Otros factores, otras tradiciones hacen que esta desocialización de la economía vaya asociada o no a una política desarrollista. La dualidad de la acción de las dictaduras militares no es, por tanto, la que suele mencionarse: no hay separación entre una orientación antipopular que tiene aspectos a la vez represivos, políticos y económicos, y una orientación desarrollista. Pero mientras que la primera está presente en todas las dictaduras, la segunda sólo lo está en algunas. Por ello, si tratamos de definir sus características centrales, esos regímenes no deben ser calificados de burocrático-autoritarios, como propone O'Donnell, sino de *dictaduras antipopulares.* Lo cual también excluye que los definamos por la naturaleza de los intereses económicos y sociales a los que servirían. T. Moulian y P. Vergara, en estudios muy elaborados y ampliamente utilizados por O'Donnell, han defendido la idea de que las dictaduras militares habían sido dominadas por el proyecto económico de tecnócratas que se identificaban con la burguesía financiera y que habían logrado marginar a los militares nacionalistas. La última parte de su tesis es justa. La tendencia nacionalista, a veces fascista, fue apartada, en efecto: Albuquerque Lima en Brasil, Leigh en Chile y Massera en Argentina no llegaron al poder. De igual modo, Franco había eliminado a la Falange desde el final de la guerra civil. Pero los regímenes militares no pueden ser llamados tecnocráticos o burocráticos. El aparato estatal argentino, ya débil, fue debilitado más aún por la política de la dictadura después de 1976. La destrucción de la CORFO en Chile y la creación de imperios especulativos por algunos representantes de viejas familias de la oligarquía fueron antitecnocráticos y antiburocráticos; siguieron normas financieras mucho más que industriales y se puede ver en ello una revancha de la oligarquía más que una nueva política nacional.

A finales de los años setenta, algunos de los países latinoamericanos dominados por regímenes autoritarios, Chile, Uruguay y Argentina, sufren las consecuencias de una política del dinero fácil, de la *plata dulce.* Esto no significa que no haya habido elementos de modernización industrial en algunos de esos regímenes, sino que su orientación principal, si puede hablarse de orientación, era reducir los actores sociales a los mecanismos del interés, bajo una forma tan elemental que se ve en ello de forma más fácil el aliento a la especulación que una política económica. Esa política era antipopular: no era la construcción de un proyecto hegemónico. En *Argentina,* donde la política de Martínez de Hoz se esforzó por restablecer la hegemonía de la oligarquía agroindustrial, los militares se opusieron incluso a un programa liberal extremo, para proteger parcialmente el mercado interior. Los *Chicago boys* chilenos impusieron una política de internacionalización de la economía, que se apoyó en una burguesía nacional fuerte, y que por lo tanto no llegó a transformar-

se en programa de desarrollo industrial. En Argentina, la política de Martínez de Hoz tenía más razones para apoyarse en una oligarquía que había dirigido durante mucho tiempo, mediante la exportación de productos agrícolas, el notable desarrollo de la economía. Sin embargo, el fracaso fue también grande en los dos países e implicó una verdadera desindustrialización, acompañada de una caída de los salarios reales. Frente a todo ello, el milagro económico *brasileño* fue el resultado de una política económica menos vinculada a la dictadura antipopular que al intervencionismo económico del Estado, que era tradicional en este país.

G. O'Donnell (en Collier; cf. Bibl., I, 1) ha mostrado que, aunque los regímenes militares aparezcan frente a las categorías sociales más subprivilegiadas como un «obstáculo» monolítico, son demasiado «permeables» a las presiones de los grupos dirigentes. La lógica dominante es la de la represión antipopular, que entraña una vuelta de influencia de los grupos económicos privilegiados; pero es sólo en ciertos países, en Brasil en particular, donde se puede hablar de un proyecto industrializador, y éste es menos invención de la dictadura que mantenimiento del papel desarrollista del Estado nacional.

Algunos economistas e ideólogos, entre los que figuran los *Chicago boys* chilenos en primera fila, parecen haber impuesto a su país un modelo nuevo de organización económica, social y política. Durante un breve período, entre 1978 y 1981, Chile ha visto nacer incluso un conjunto de instituciones nuevas y de decisiones, la más importante de las cuales fue el *Plan Laboral* de 1979. En este sentido puede hablarse de un proyecto de sociedad. Pero ¿cómo no ver que la realidad contradice ese proyecto liberal? Éste apuntaba a la formación de actores sociales y económicos concretos, conducidos por su interés y puestos frente a sus responsabilidades; ahora bien, en el caso chileno sobre todo, pero también en Argentina, hemos visto formarse una sociedad de masas, destructurada, dominada por la oposición del Estado centralizado y de excluidos o de marginales. Entre los dos, todos los actores sociales organizados quedaron debilitados: desde la clase obrera y desde los asalariados agrícolas cuyos efectivos disminuyeron masivamente hasta los empresarios privados afectados por la desindustrialización, antes de serlo por las consecuencias de un endeudamiento excesivo. E. Tironi tiene razón cuando subraya el incremento de las desigualdades sociales y de la segregación residencial y el debilitamiento de todos los cuerpos intermedios. Ve incluso en la descomposición de la sociedad una de las explicaciones principales del mantenimiento de la dictadura en Chile.

La lógica que ha dominado de forma constante la acción del general Pinochet no es de naturaleza económica y social sino más bien militar: luchar contra el marxismo, el comunismo y todos los adversarios que amenazan su régimen. Aunque ha sabido dar pruebas de flexibilidad táctica en el peor momento de la crisis, en 1982-1984, nunca ha buscado un compromiso con una oposición a la que considera como a un enemigo.

Una vez más, las explicaciones económicas de la política se revelan insuficientes. Es *la destrucción del modelo nacional-popular y no la creación de un nuevo tipo de sociedad o de economía lo que constituye el sentido principal de las dictaduras antipopulares.*

Vigilar y castigar

Puesto que no puede afirmarse que el principio central de acción de esos regímenes militares sea de tipo económico, ni que las dictaduras estén al servicio de una clase o de una fracción de clase social, incluso aunque sean utilizadas por ciertas categorías económicas y sobre todo por los intereses financieros, puede llevarse al extremo la idea de que la unidad de acción de esos regímenes es de naturaleza propiamente política. Lo ha hecho J. J. Brunner, cuyo análisis se vincula abiertamente a la corriente de pensamiento creada por Michel Foucault y por su idea de «microfísica del poder», es decir, de la difusión del control social y cultural en todas las partes de la sociedad, cuando en otro tiempo se hallaba concentrado en las manos de un Príncipe que tenía el monopolio del castigo. Brunner habla de una sociedad disciplinar, apoyada en una visión neoconservadora. Esta cultura autoritaria sirve, según él, de instrumento a la hegemonía de una clase dirigente a través del Estado. Pero ¿no sorprende, por el contrario, la competencia en estos regímenes, de dos ideologías, una liberal y otra nacionalista? Sobre todo, ¿cómo se manifiesta esa cultura disciplinar? Brunner menciona el caso de la educación. Pero las políticas de educación, mucho antes de los regímenes militares, habían tenido en lo esencial efectos antidemocráticos, como han demostrado A. Solari y G. Rama: los escalones superiores de la población recibían más que la parte que les correspondía de los gastos de educación, dado que la enseñanza secundaria y sobre todo superior se desarrollaba más de prisa que la enseñanza primaria. Y a la inversa, en el caso de Chile, mencionado por Brunner, la política educativa del régimen militar golpeó más a los estratos medios superiores, mientras que los estratos populares que no tenían acceso a la universidad no perdían terreno. Sobre todo, la huella ideológica sobre la juventud ha sido débil o nula.

En el dominio de la salud asistimos a un crecimiento de las desigualdades sociales, pero los regímenes políticos anteriores también habían dejado subsistir grandes diferencias entre los regímenes de seguridad social. En líneas más generales: en las dictaduras militares es imposible ver una política de control omnipresente de la población; vemos más bien desencadenarse la represión directa y el exilio. Tanto en el orden social y cultural como en el orden económico, los proyectos militares no tienen proyecto *hegemónico.* La política social del Gobierno militar chileno, por ejemplo, no responde a un proyecto coherente. De un lado, se ve una tendencia liberal que aumenta las desigualdades sociales ofreciendo unos servicios de salud o de educación al precio del mercado, pero al mismo

tiempo vemos que mantiene una tendencia «asistencialista». El empleo público en el sector social, según indica P. Vergara, no ha disminuido en total entre 1975 y 1979; en particular se ha mantenido en los sectores de la salud y de la educación. Incluso se han realizado progresos importantes contra la mortalidad infantil, que en Chile mantenía un nivel relativamente elevado y que, durante esos años, bajó hasta niveles muy próximos a los de los países más industrializados. Lo cual no debe hacernos olvidar el retroceso de los gastos sociales por habitante, debido sobre todo a una fuerte disminución de las subvenciones a la construcción. En Brasil, los gastos generales de salud e higiene bajan, de 1964 a 1983, del 4,1 al 1,85 por 100 del presupuesto. Política antisocial y antipopular, por tanto, pero el control político y cultural impuesto por los regímenes militares siguió siendo limitado; las prohibiciones fueron más numerosas que los actos de propaganda. Ciertos analistas han hablado de *apagón cultural*. Esta expresión no describe bien la realidad. Se observan, por el contrario, grandes cambios culturales, ligados a menudo a la influencia creciente de los Estados Unidos. El pensamiento social no se ha empobrecido, pese a la represión y el exilio, y nada ha detenido la «modernización» de las costumbres. Nada indica la presencia de un modelo de control cultural y político fuerte. Semejante control se observa mucho más en México, cuyo régimen, sin ser democrático, nunca fue de tipo propiamente autoritario. Mientras que en los países de tipo soviético existe hoy un fuerte control cultural y político, sin que por ello exista un nivel elevado de violencia política abierta, los regímenes militares antipopulares de América Latina están marcados por la importancia central de la violencia política oficial, de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones y por todas las formas de chantaje y de espanto, pero también por la debilidad de la propaganda ideológica. Ausente en Uruguay, se ha limitado en Chile a algunas expresiones demasiado elitistas para conquistar una amplia base de movilización social. La única fuerza de integración política que tuvo gran importancia fue el éxito temporal de las políticas económicas. Los años de los milagros y de los *booms* fueron también años de debilidad de la oposición y de refuerzo pasivo de los regímenes militares.

Lo cual, sin embargo, nunca condujo a éstos a abandonar la represión directa. Fue particularmente masiva en Bolivia, donde el régimen de Banzer chocó con movimientos organizados de resistencia entre los obreros de La Paz en 1972, los campesinos de Cochabamba en 1974, los mineros del Altiplano en 1976. A partir de 1972 en Brasil y de 1978 en Chile, los regímenes militares parecen fuertemente consolidados y las campañas nacionalistas tuvieron cierto éxito. Pero esa integración política era tan superficial como el *boom* económico de los países del cono sur. En ningún momento desearon los regímenes militares imponer un modo de conducta al conjunto de la sociedad. Por eso su papel represivo fue siempre el más importante.

Hay que situar completamente aparte la larga dictadura del coronel Stroessner en *Paraguay*. Como Bolivia, este país había conocido una profunda crisis política tras la guerra del Chaco. En 1936, el coronel Franco se hace con el poder y lanza reformas sociales asociadas a una orientación política fascistizante. De su acción sale el Partido *Febrerista*, que en marzo de 1947 dirige una sublevación. Tras seis meses de guerra civil, el Partido *Colorado* obtiene la victoria pero la anarquía se instaura pronto y Stroessner se hace con el poder en 1954, aplasta una sublevación de jóvenes oficiales al año siguiente y organiza un control muy estrico de la población a través de un Partido *Colorado* convertido en el instrumento de su poder absoluto. Su política económica, fiel a una larga tradición, se halla opuesta en todos los puntos a la de las dictaduras neoliberales del cono sur. El Estado siempre ha tenido un papel central en la vida de este país, que, después de haber vivido mucho tiempo replegado sobre sí mismo, había atravesado dos guerras de una violencia excepcional. Pero es durante los años cuarenta cuando comienza el gran movimiento de creación de empresas públicas que, a finales de ese decenio, da al Estado la propiedad del 30 por 100 del PIB. Entre 1973 y 1980, ese pequeño país se ha comprometido con Brasil en la construcción de la enorme presa de Itaipú. Esos trabajos, llevados bajo la dirección del Estado, provocan un vivo desarrollo económico que hizo incluso del Paraguay, durante algunos años, el campeón del crecimiento en el continente, pero volvió a caer con el fin de los trabajos. Ese Estado económicamente todopoderoso controla estrechamente la vida social, en particular directamente a través del Partido *Colorado* y de la policía. Paraguay es el único Estado sudamericano que puede calificarse de totalitario. El poder es en él tanto más absoluto y tanto menos contestado cuanto que la abundancia de tierras disponibles ha impedido durante mucho tiempo la formación de un movimiento campesino. El gobierno ha podido hacer que avance un frente de colonización al servicio de los pequeños explotadores e incluso apoyar la formación de grandes dominios, sobre todo para la exportación de la soja, sin que las dos políticas choquen. Sólo en 1984-1985 se desarrollan luchas por la tierra. El Estado reina sobre una clientela que controla por sí misma a la población. La oposición sigue siendo débil y el Estado recurre a la represión más brutal contra las tentativas de resistencia, en particular entre los estudiantes y los intelectuales.

Conclusiones

La represión antipopulista dirigida por las dictaduras militares y también por otros regímenes, puede conducir a dos situaciones opuestas. La primera es la descomposición o el derrocamiento del modelo nacional-popular clásico. Se forma entonces un sistema antinacional y antipopular, donde el tema de la independencia nacional es sustituido por el de

la internacionalización de la economía, donde la integración política es reemplazada por una segregación y desigualdades crecientes. La vida nacional no mantiene unidad sino de modo artificial a través de un control represivo y la sociedad nacional se descompone, se fragmenta. Los actores sociales no se definen ya por sus relaciones sociales y políticas y se encierran en la búsqueda de una identidad o en la defensa de sus intereses inmediatos. La vida pública está dominada por el miedo al caos o a la guerra civil. El Estado se transforma en un conjunto de feudalidades y, como en Bolivia, las regiones se oponen a la dominación de la capital. Esta descomposición del modelo nacional-popular es más fuerte y más probable cuando el Estado nacional es débil, las instituciones parlamentarias inestables o están ausentes y cuando los actores de clase están mal integrados.

Pero allí donde existe un Estado tradicionalmente fuerte y un sistema político relativamente abierto o que la dictadura no ha hecho desaparecer por completo, y allí donde la formación de los actores de clase se halla relativamente avanzada, la crisis y la destrucción del modelo nacional-popular pueden conducir a la creación de un nuevo modelo político. Éste no es el resultado de un proceso de modernización, como si la historia impusiera una tendencia a la racionalización, a la diferenciación de las instituciones y a la organización de relaciones políticas de tipo democrático. No hay sentido de la historia que conduzca a la democracia o a la abundancia. Pero es posible que las dictaduras militares logren dar al Estado una independencia y una conciencia de su identidad que no poseía con frecuencia antes, en particular en un país como Argentina. Entonces es posible que esa autonomía creciente del Estado entrañe la maduración de actores sociales que aprendan a definirse al margen del Estado, al mismo tiempo que la lucha contra las dictaduras militares vuelva a dar una importancia central a una democracia definida en adelante en términos institucionales más que en términos vagos o demasiado globales de participación.

Estas dos evoluciones, una regresiva, otra progresiva, están reforzadas por la inversión de coyuntura económica que se produce a partir de 1981. Es la crisis financiera y económica la que marca más profundamente el final del período de la historia latinoamericana que ha estado dominado por el modelo nacional-popular, cuyos rasgos generales ha definido este libro, cuyas manifestaciones principales hemos analizado, cuyos límites hemos observado y cuyas formas de descomposición hemos descrito. Por eso este libro no sitúa el corte principal en la transformación del modelo latinoamericano de desarrollo, entre los regímenes nacional-populares y las dictaduras antipopulares, sino entre el conjunto de formas de creación y de destrucción del modelo nacional-popular y los efectos políticos y sociales de la gran inversión producida por la crisis financiera y económica que perturba al continente desde principios de los años ochenta.

Quinta parte
Crisis y democratización

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

1.—La crisis financiera y económica

Introducción: frente a la crisis

Tras un largo período de fuerte crecimiento, el continente se hunde, a partir de 1981, en una crisis tan violenta que muchos países ven retroceder su nivel de vida quince o veinte años. Un cambio de coyuntura de semejante importancia obliga a reconsiderar los análisis anteriores: ¿no estaban demasiado vinculados a un período de crecimiento económico que permitía el ascenso de las expectativas, la apertura de procesos políticos y la posibilidad de combinar los intereses de diversos grupos sociales? Por su existencia misma ¿no demuestra la crisis el predominio de unos determinantes económicos externos sobre los proyectos y las relaciones de los actores sociales? ¿No sufren todos los países, incluido Cuba, a pesar de sus diferencias sociales y políticas, una deuda exterior que los ahoga? El aumento vertiginoso de esa deuda, a principios de los años ochenta, se explica en gran parte por el aumento de la tasa internacional de interés, que proviene ante todo del déficit fiscal norteamericano, por el deterioro de los términos del intercambio, por las restricciones aportadas por los países industriales a la entrada de los productos del Tercer Mundo y por la pérdida de poder de compra de esos países; ¿no es, por tanto, inevitable abandonar un análisis hecho en términos de actores y volver a una explicación más clásica de los procesos sociales y políticos latinoamericanos como expresión local de un sistema económico internacional? Las economías latinoamericanas ¿no aparecen determinadas des-

de el exterior en este período de crisis, más todavía que durante los períodos de sustitución de las importaciones, de penetración de las empresas multinacionales, de llegada masiva de eurodólares o de crisis petrolera? Reacciones tan normales que a partir del final de los años setenta, las ciencias sociales tienden a reducirse, por lo que a América Latina se refiere, al estudio económico de las consecuencias sociopolíticas de la crisis del sistema económico y financiero internacional.

Para este estudio de los actores y de los sistemas de acción en América Latina es, por tanto, un desafío mayor rechazar las ideas, aparentemente evidentes, que acaban de ser presentadas y demostrar que la crisis económica, al margen de sus causas exteriores y de sus aspectos generales, tiene causas y consecuencias muy diferentes según los países, según su política económica y su organización social, y que esa crisis exige también, para ser dominada, una intervención mayor de los actores sociales y políticos. Por ello, tras el presente capítulo, consagrado a las causas y consecuencias de la crisis, este libro concluirá con un estudio de las relaciones entre la crisis y la democratización.

Para empezar, hemos de subrayar la debilidad del análisis que hemos evocado. En realidad, la apertura política y la autonomía de los actores sociales y políticos no había aumentado durante el período de crecimiento económico fuerte; a la inversa, en muchos países, ese período había coincidido con el triunfo de regímenes autoritarios cuyo objetivo central era la destrucción de los actores políticos y sociales. Por el contrario, el proceso de democratización se realiza en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia durante un período de crisis económica. Paradoja sorprendente, que indica cuando menos el carácter superficial, y en realidad falso, del supuesto paralelismo entre crecimiento económico y liberalización política, como ya lo había subrayado O'Donnell.

1. Los factores externos

La transformación brusca de la situación económica internacional alza del precio del petróleo— desequilibra, a partir de 1981, la econotricción de las exportaciones latinoamericanas y, para muchos países, alza del precio del petróleo—, desequilibra, a partir de 1981, la economía de todos los países latinoamericanos y aumenta su endeudamiento exterior hasta un nivel que paraliza de forma duradera todos los esfuerzos de recuperación y entraña un aumento brutal del paro, así como una fuerte caída de las remuneraciones reales. A ojos de muchos, esta situación se ha visto agravada por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que sacrifica las economías nacionales al equilibrio de su balanza exterior, es decir, al pago de la deuda contraída con bancos privados y organizaciones financieras extranjeras o internacionales. Pero, aunque hay que otorgar la mayor importancia a los factores externos de

la crisis, hay que considerar también sus causas internas, en particular para evaluar la capacidad de respuesta política de los países en crisis.

La CEPAL ha escrito con mucha fuerza: «Si la relación de precios en los cambios exteriores de América Latina hubiera permanecido a un nivel semejante al de 1980 (el más elevado el 25 por 100) y si, al mismo tiempo, las tasas de interés reales hubieran seguido siendo idénticas a las de la época en que se acumuló la mayor parte de la deuda (tasa que era cuatro puntos menor), la región tendría veinticinco mil millones de dólares más, cantidad que sería suficiente para pagar los intereses de la deuda sin una compresión radical de las importaciones y, como secuela suya, del crecimiento económico» (cf. Bibl., V, 1, 1984, pág. 82). En efecto, el peso de la tasa de interés y del deterioro de los términos del cambio aumentó considerablemente a partir de 1980.

Los factores externos de la crisis

Años	Balance de las cuentas corrientes	Efectos de los términos del cambio	Efectos de la tasa de interés	Balance de las cuentas corrientes ajustadas
1975	– 10,6	– 3,6	0,1	– 7,1
1976	– 7,1	– 1,7	0,3	– 5,7
1977	– 5,4	0,9	0,5	– 7,0
1978	– 8,2	– 1,9	– 0,5	– 6,8
1979	– 14,3	– 4,7	– 0,5	– 9,1
1980	– 24,0	– 9,5	– 1,4	– 13,1
1981	– 28,1	– 15,8	– 4,6	– 7,7
1982	– 27,5	– 17,7	– 5,5	– 4,3
1983	– 15,5	– 15,6	– 3,1	3,2

FUENTE: C. Massad, *Financiamiento externo...*, CEPAL, 1984.

Las exportaciones se vieron afectadas a un tiempo por la caída de su valor unitario y, a partir de 1982, por el estancamiento de la demanda exterior.

Sin embargo, hay que relativizar estas cifras. La caída de muchos precios en 1980-1982 fue fuerte, pero su alza durante los años anteriores había sido asimismo importante. Además, el precio de las importaciones, que entre 1970 y 1981 había aumentado fuertemente, bajó luego algo (el 2,5 por 100 en 1982). Por lo que concierne al comercio internacional, hay que hablar por tanto de un *shock* en 1982 más que de una larga fase de cambios desfavorables.

A la evolución desfavorable de los precios se añade el *proteccionismo* creciente de los países industriales. Para mantener la renta de su producción agrícola, la Comunidad Económica Europea multiplica las subvenciones y aplica medidas aduaneras restrictivas; los países de la zona tem-

Poder de compra de las exportaciones de bienes (Porcentaje de cambio en relación al año anterior)		
1981	1982	1983
– 0,9	– 6,0	– 0,7

plada son los afectados más directamente por estas medidas proteccionistas. La importancia de los países de la CEE en las exportaciones del contienente cae del 26 por 100 al 17,5 por 100 de 1970 a 1981. Los productos industriales chocan igualmente con barreras aduaneras, más elevadas aún por la reducción de impuestos y por los créditos de tasa favorable de los que se benefician las empresas nacionales, así como por la manipulación de las tasas de cambio, la financiación pública de la investigación y, más directamente, los créditos a las exportaciones. Los países europeos, lo mismo que el Japón y de forma más limitada los Estados Unidos, tratan de resistir la fuerte transferencia negativa de recursos que representan los conflictos petroleros y luchan contra el estancamiento de su propia producción. Los países latinoamericanos deben buscar otros mercados para sus materias primas. Argentina consigue, mejor que Uruguay, reorientar sus exportaciones de carne y cereales.

Los efectos de la *subida de la tasa internacional de interés* fueron más duraderos. La tasa LIBOR a ciento ochenta días que, entre 1970 y 1978, había permanecido muy por debajo del 10 por 100 (salvo en 1974) se eleva a más del 16 por 100 en 1981, antes de volver a caer al 9,03 por 100 durante el primer semestre de 1985. Si corregimos esa tasa nominal por el índice de precios al consumidor en los países industrializados, las variaciones son más importantes. Hasta 1980, las tasas reales son inferiores, por regla general, al 2 por 100 e incluso son negativas entre 1974 y 1977, mientras que varían del 4 al 6,3 por 100 de 1981 a 1985. La única reserva que hay que introducir aquí es que, en muchos países —en Chile y en Argentina en particular—, las tasas nacionales de interés fueron muy superiores a las tasas internacionales.

El papel de la subida de las tasas de interés es central, porque revelan mejor el funcionamiento del sistema económico internacional. Esa subida fue, en efecto y ante todo, el resultado de la política de los Estados Unidos, que cubrieron su déficit presupuestario provocando la creación de un mercado no controlado de eurodólares que aportó, del conjunto del sistema económico occidental, recursos abundantes a la economía americana y le permitió cubrir su déficit sin aumento de impuestos y sin reducción de gastos. Esta prosperidad artificial condujo a la inflación y a la subida de las tasas de interés americanas y mundiales para contenerla.

Estos factores de crisis actuaron de la manera más directa sobre los

países del *Caribe,* los menos desarrollados y que dependían más directamente de uno o dos productos de exportación. El estancamiento económico europeo implicó la baja de las exportaciones de bauxita y de alúmina en Jamaica, en Guayana y en Surinam. Los acuerdos de Lomé, que se ampliaron a esa región, permitieron a pesar de todo mantener en líneas generales la producción de azúcar, pero la depreciación de las monedas europeas frente al dólar significó, pese a un ligero aumento del precio unitario del azúcar y del plátano, una disminución de las rentas provenientes de esas exportaciones agrícolas.

2. Los factores internos

La brutalidad de la crisis que estalla a partir de 1981 no puede explicarse sin tener en cuenta la creciente fragilidad de las economías latinoamericanas. Su factor más importante es el fuerte *deterioro de la balanza comercial de los productos agrícolas.* Disminución particularmente fuerte en los países más grandes y en Perú. El saldo positivo de los intercambios agrícolas, que representaba el 44 por 100 de las importaciones en 1963, desciende al 19 por 100 en 1971. Este retroceso proviene sobre todo de los cereales que, durante ese período, pasan de un excedente de importación de 6 millones de toneladas a un déficit de 4 millones. México, por ejemplo, pasa de un excedente de 2 millones de toneladas en 1965 a un déficit de 4 en 1975. Venezuela, asimismo, debe importar fuertes cantidades de productos agrícolas. La crisis agrícola proviene del abandono en muchos países, desde América central al Brasil, de los cultivos de subsistencia en favor de los cultivos de exportación —café, algodón, caña de azúcar— y de una ganadería extensiva que deja muchas tierras mal utilizadas. La fragilidad del comercio exterior del continente traduce la debilidad de un modo de desarrollo que sacrifica la capacidad de producción y la independencia económica nacionales a la atracción de mercados extranjeros o de producciones que permiten eliminar a los trabajadores agrícolas que, con fuerza cada vez más frecuente, reclaman una reforma agraria o un aumento de sus rentas.

El déficit comercial industrial, que aumenta de forma constante durante el período de industrialización de la posguerra, supera a partir de 1970 el excedente generado por el resto de la economía.

El déficit industrial aumenta

	1955	1960	1965	1973	1975
Déficit industrial	– 4.819	– 6.152	– 7.092	– 15.761	– 28.387
Excedente del resto de la economía	5.325	6.256	8.152	15.524	18.485

FUENTE: F. Fajnzylber, *La industrialización truncada.*

Este aumento del déficit industrial se explica en parte por las importaciones necesarias para el desarrollo de industrias nuevas, pero también por la constante insuficiencia de la producción de bienes de capital. El aumento del precio del petróleo favorece a países como México, Venezuela, Ecuador, Trinidad y Perú, pero pesa negativamente sobre la balanza comercial del resto del continente. No obstante, incluso en México, las rentas exteriores del petróleo alcanzan apenas, en 1978, la mitad del déficit de los intercambios industriales, lo cual indica la fragilidad de una industrialización parcial y que se apoya en una agricultura en crisis.

Recordemos aquí, de forma más amplia, las conclusiones de la primera parte de este libro. El capitalismo latinoamericano es poco innovador y la industrialización del continente sigue estando «truncada», según la expresión de F. Fajnzylber (cf. Bibl., I, 1, 1983). Este factor de debilidad pesa probablemente más todavía que la extremada concentración de las rentas y el papel predominante de las empresas públicas, con tanta frecuencia deficitarias. Porque la extremada concertación de las rentas, en particular en Brasil, quedó compensada, más de lo que se preveía, por la fuerte integración cultural de las masas urbanas, que ha permitido una difusión extremadamente rápida de la televisión y de otros equipamientos domésticos. El déficit del sector público y su importancia en el PIB representa un obstáculo importante, a largo plazo, para el desarrollo económico, pero explica muy poco la inflación. En Brasil, mientras el déficit disminuye con mucha fuerza entre 1982 y 1984, la inflación aumenta rápidamente.

R. Prebisch ha dado la explicación más profunda, a la vez sociológica y económica, de la *inflación* y subrayado la debilidad principal de las políticas latinoamericanas. Al consumo excesivo de las categorías más ricas, que disminuye la capacidad de inversión y de creación de empleos, se añade la intervención creciente del Estado, impulsado por las fuerzas sindicales. Pero este gasto público creciente no sustituye a los excesos del consumo suntuario, porque a todas las categorías sociales les resulta más fácil defender sus intereses que negociar con las otras en interés del desarrollo económico y social de la nación. Añadamos que al gasto público civil, ampliamente justificado por la voluntad de crear empleos productivos, se ha sumado el gasto militar, amplísimamente improductivo, y que en ciertos países ha alcanzado un nivel abrumador. La inflación es el resultado de la ausencia de política nacional y de la suma de las demandas o de los gastos sectoriales. La economía de los países latinoamericanos no constituye en buena medida un sistema económico, es más un conjunto *segmentado* de intereses que se suman más que combinarse.

En resumidas cuentas, la economía de numerosos países se ha visto debilitada por el fracaso o el agotamiento de dos políticas sucesivas. Ante todo del modelo de sustitución de las importaciones que había dominado el período de la gran crisis, de la guerra y de la posguerra. La protección de la industria nacional mediante fuertes barreras aduaneras

y por el mantenimiento de la tasa de cambio a un nivel anormalmente bajo llevó a mantener o a alentar producciones de débil productividad, creó un bies antiexportador y una diversificación excesiva de la producción, implicó la insuficiencia de *backwards linkages,* el progreso demasiado lento de la producción de bienes de capital. Esta crisis económica era visible mucho antes de la crisis financiera, que estalla a finales de los años setenta. Luego, unas políticas económicas que defendieron lo contrario del modelo de sustitución de las importaciones dando prioridad a la exportación y a la búsqueda de ventajas comparativas y que entrañaron, sobre todo en el cono sur pero también en Venezuela, una verdadera desindustrialización. Finalmente, a estos caracteres estructurales de crisis se añadieron factores *coyunturales.* La región no se adaptó rápidamente a la crisis del comercio exterior; continuó endeudándose y agotando sus reservas. Entre 1980 y 1982, su deuda aumenta casi un 50 por 100. Y la CEPAL añade que la abundancia de la financiación exterior fue utilizada directamente por los gobiernos para financiar un nivel excesivo de gastos públicos. Muchos estudios han demostrado también que una gran parte de los créditos extranjeros no fueron invertidos en actividades productivas. En muchos países sirvieron para comprar armas o dar ventajas materiales a los militares. En muchos países también, y en particular en Venezuela, en México y en Argentina, la fuga de capitales fue importante. Para el conjunto del continente se ha evaluado en ochenta mil millones de dólares en el momento en que la deuda exterior era del orden de doscientos mil millones. En Argentina, la evasión alcanzó la mitad de la deuda exterior, en México un tercio por lo menos. Por el contrario, en Chile, el nivel elevado de la tasa de interés y el triunfo de la especulación detuvieron esa fuga. (La evasión de capitales puede ser evaluada mejor a través de la rúbrica «transacciones no registradas» de las estadísticas financieras y comparando esas transacciones con la entrada efectiva de capitales.)

La importancia relativa de los factores de crisis depende del país considerado. En Brasil, el deterioro de la balanza de cuentas corrientes se explica en gran parte por el *shock* exterior, pero también, como en Colombia, por las importanciones vinculadas a la industrialización. En Chile, los efectos negativos de la política de cambio, pero también los efectos de la reactivación, explican una gran parte del desequilibrio. Por el contrario, en Argentina el *shock* exterior es un factor secundario de explicación. En México, la política de cambio y la racionalización insuficiente de la producción explican la pérdida de competitividad de la economía.

3. La deuda externa

La conclusión general de estos análisis es la debilidad del modelo latinoamericano de desarrollo. La presión de la demanda global, que entraña un déficit presupuestario elevado, se asoció a un capitalismo es-

peculador, que consumía una gran parte de los recursos en alojamientos de lujo y en cuentas bancarias en el extranjero, para volver débil un desarrollo económico que había sido facilitado, sobre todo, por la crisis del mercado mundial durante la gran crisis y la segunda guerra mundial, luego por la intervención de las empresas transnacionales y de los eurodólares. La economía latinoamericana tenía una débil capacidad de resistencia en el momento en que las crisis petroleras y el estancamiento debilitaron las economías centrales, limitando su capacidad de importación y sus inversiones, y donde la nueva política norteamericana, basada en un fuerte déficit comercial o presupuestario, hacía subir el dólar y la tasa internacional de interés y atraía los capitales del conjunto del mundo occidental.

Esta dependencia respecto al exterior contrasta fuertemente con la prioridad dada por Japón y Corea del Sur (hasta 1970) al mercado interior, a la elevación del nivel tecnológico de la producción y a la alianza del Estado y de las grandes empresas. El análisis de los factores de la crisis de los años ochenta nos remite, por tanto, al resultado del estudio del sistema político nacional-popular y a las razones que dieron tantas garantías a un capitalismo poco emprendedor. La crisis de los años ochenta es a un tiempo una crisis financiera, desencadenada en gran parte por factores exteriores, y la *crisis estructural de un modo de desarrollo* cuya fragilidad aumenta a medida que madura.

Esta crítica de las políticas y de los sistemas económicos del continente no disminuye la responsabilidad del sistema bancario y económico internacional. De la misma manera que los países latinoamericanos continuaron endeudándose hasta muy tarde, los bancos norteamericanos, más que los europeos o los japoneses, continuaron aumentando sus préstamos hasta 1982. Esos préstamos pasaron, para los bancos americanos, de 119,2 millones de dólares en 1978 a 256,6 en 1981, para alcanzar los 363,4 millones en 1982 y los 396 en 1983, mientras que la progresión de los créditos europeos no los hacía pasar más que de 611,4 millones en 1978 a 998,4 en 1981, 1.022,8 en 1982 y los 1.027,2 en 1983; los bancos japoneses y canadienses no hacían progresar sus préstamos más que de 56,1 millones en 1978 a los 122,8 en 1981, los 129,7 en 1982 y los 150,9 millones en 1983.

El resultado de este desarrollo excesivo de la demanda y de la oferta de los créditos exteriores fue un aumento brutal del endeudamiento del continente. De los 151.000 millones en 1978, pasa a 182.000 millones en 1979, 222.000 millones en 1980, 278.000 millones en 1981, 319.000 millones en 1982, 344.000 millones en 1983 y 360.000 millones en 1984. (Las cifras de 1983 y 1984 no son completamente comparables a las cifras anteriores porque incluyen la deuda de los bancos comerciales mexicanos.)

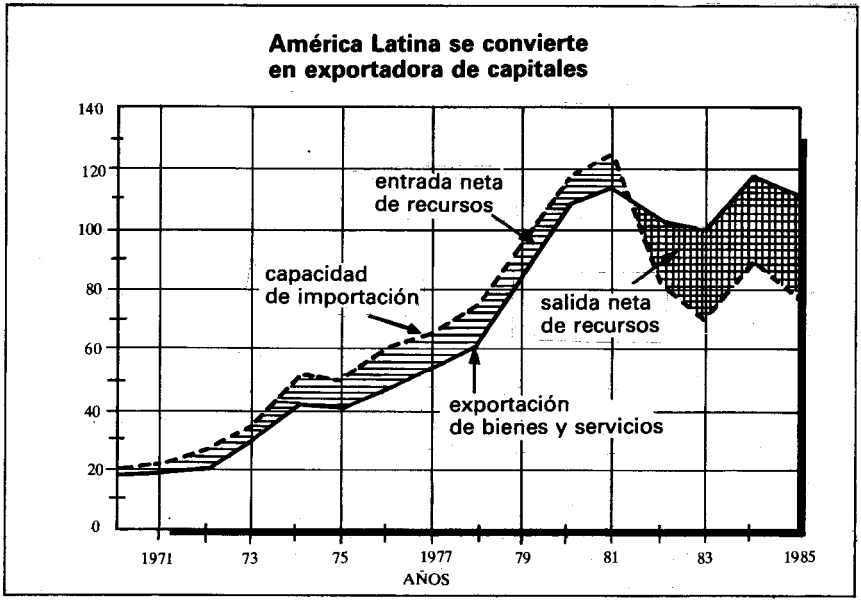
Son muchos los estudios que han demostrado el peso abrumador que semejante endeudamiento representaba para las economías del continente. Dos cuadros lo muestran:

Deuda exterior/PIB			
Años	América Latina %	Países exportadores de petróleo %	Países no exportadores de petróleo %
1978	31	33	29
1979	32	34	31
1980	34	36	33
1981	38	40	37
1982	42	43	41
1983	45	47	43
1984	44	45	43

FUENTE: R. Devlin y G. Mundt.

Porcentaje de los intereses de la deuda a corto y medio plazo sobre las exportaciones de bienes y servicios			
Años	América Latina %	Países exportadores de petróleo %	Países no exportadores de petróleo %
1978	16	16	15
1979	17	16	19
1980	20	17	23
1981	26	22	31
1982	39	32	47
1983	36	31	41
1984	35	33	37

FUENTE: *Ibíd.*



FUENTE: CEPAL, *Crisis y desarrollo: presente y futuro de América Latina y el Caribe,* mimeografiado, III, 1985.

Seis países en la crisis

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Argentina						
1. Balanza comercial	– 992	2.246	2.958	3.170	4.350	4.500
2. Pago neto de intereses y de beneficios	3.932	5.107	5.408	5.715	5.300	
3. Balanza de cuentas corrientes	– 4.712	– 2.447	– 2.436	– 2.542	– 950	– 2.400
4. Balanza de cuentas de capitales	1.519	1.809	– 13	2.686	3.600	2.400
5. Balanza global	– 3.193	– 668	– 2.449	144	2.650	
Brasil						
1. Balanza comercial	– 1.678	– 2.812	– 4.065	11.365	10.740	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	10.274	13.509	11.012	11.482	11.540	10.100
3. Balanza de cuentas corrientes	–11.760	–16.314	– 6.842	43	– 650	– 1.200
4. Balanza de cuentas de capitales	12.381	11.119	4.943	5.367	664	– 1.020
5. Balanza global	621	– 5.195	– 1.899	5.410	14	– 2.220
Chile						
1. Balanza comercial	– 3.389	498	538	– 203	504	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	1.595	2.035	1.703	1.955	1.873	1.810
3. Balanza de cuentas corrientes	– 4.817	– 2.378	– 1.116	– 2.118	– 1.322	– 1.150
4. Balanza de cuentas de capitales	4.952	1.038	600	2.210	1.219	1.220
5. Balanza global	` 136	1.340	– 516	92	– 103	70

Colombia						
1. Balanza comercial	− 1.712	− 2.512	1.990	− 930	− 445	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	404	878	1.176	1.269	1.323	1.580
3. Balanza de cuentas corrientes	− 1.895	− 3.196	− 3.022	− 2.020	− 1.364	− 190
4. Balanza de cuentas de capitales	2.328	2.222	1.180	741	1.687	1.190
5. Balanza global	433	− 974	− 1.842	− 1.279	323	1.000
México						
1. Balanza comercial	− 5.292	5.008	14.414	13.843	8.897	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	9.531	10.855	9.386	10.312	8.807	7.230
3. Balanza de cuentas corrientes	−14.074	− 5.316	5.151	3.704	298	− 3.500
4. Balanza de cuentas de capitales	14.775	2.431	− 3.118	− 1.570	− 2.722	4.000
5. Balanza global	700	− 2.885	2.033	2.134	− 2.424	500
Perú						
1. Balanza comercial	− 790	− 769	39	787	949	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	1.020	1.053	1.132	1.199	1.010	820
3. Balanza de cuentas corrientes	− 1.810	− 1.823	− 1.091	− 412	− 61	− 990
4. Balanza de cuentas de capitales	1.138	1.753	1,006	662	379	620
5. Balanza global	− 672	− 70	− 85	250	318	− 370

FUENTE: CEPAL

A título comparativo, recordemos que después de la primera guerra mundial, Alemania pagó menos del 25 por 100 de sus exportaciones por las reparaciones mientras que en 1982 América Latina llega al 40 por 100 y que, según las recomendaciones de una comisión internacional reunida en 1931, Alemania dejó de pagar desde el año siguiente el conjunto de las reparaciones, mientras que en 1982 América Latina llega al 40 por 100 que era una región fuertemente importadora de capitales, en zona exportadora.

Las cifras publicadas por las World Debt Tables y por la CEPAL indican la importancia de la transferencia de capitales fuera del continente, provocada por el paro casi total de la llegada de créditos privados. Citemos los de la CEPAL:

Balanzas exteriores

América Latina	1981	1982	1983	1984	1985	1986 [1]
1. Balanza comercial	−13.422	−3.631	26.189	33.286	30.662	
2. Pago neto de intereses y de beneficios	28.533	37.785	34.417	36.022	35.032	30.740
3. Balanza de cuentas corrientes			−7.626	−1.907	−3.191	−14.200
4. Balanza de cuentas de capitales (incluida fuga de capitales).....			3.219	10.206	6.030	8.550
5. Balanza global.....			−4.407	8.299	2.839	−5.650

1. Cifras provisionales

Estas cifras deben ser situadas en su contexto mundial. En 1984, el servicio de la deuda representa 92.000 millones de dólares y la llegada de capitales exteriores se mantiene en 85.000 millones, lo cual representa un déficit de 7.000 millones de dólares, que se explica en gran parte por el alza de la tasa de interés. En América Latina, el segundo ciclo de negociaciones en 1982 se realizó en condiciones menos favorables que el primero, en 1980-1981. El costo real del crédito pasó para la Argentina del 8,82 al 7,34 por 100; para Chile, del 6,02 al 7,32 por 100; para México, del 5,74 al 7,09 por 100, etc. Lo cual explica que los nueve principales bancos norteamericanos hayan obtenido beneficios extraordinarios en 1983 gracias a sus renegociaciones con los países del Tercer Mundo.

Presentamos la situación de algunos países para comprender las dificultades que encuentra la política de cada uno de ellos, de la misma manera que hemos recordado los aspectos de su política que han contribuido a la gravedad de la crisis que sufren.

El año 1982 pone fin a un largo período. Desde luego, durante los años cincuenta, el continente había sufrido un flujo negativo de capitales, pero durante esa época de sustitución de las importaciones los paí-

ses estaban adaptados, como observa R. Ffrench-Davis, a la debilidad de las importaciones. A finales de los años setenta, por el contrario, el continente depende mucho más de su comercio exterior, y la reducción de las importaciones tiene por lo tanto consecuencias económicas y sociales dramáticas. Cuando el flujo neto de capitales se vuelve negativo, a partir de 1982, ¿cuál es la capacidad de respuesta de las economías nacionales? La novedad de la situación económica parece disminuir la capacidad de iniciativa de los gobiernos y de los actores sociales. La escena latinoamericana, a mediados de los años ochenta, está dominada por las negociaciones paralelas de cada país con el Fondo Monetario Internacional. La autonomía de decisión nacional parece brutalmente reducida por las condiciones puestas por el Fondo a la negociación de la deuda y a la búsqueda de nuevos recursos financieros. De este modo el continente parece más dependiente que nunca y sus actores ven disminuir su capacidad de acción. Estas ideas casi evidentes dominan el panorama político e ideológico del continente desde el inicio de la crisis.

Aquí no trataremos de evaluar las responsabilidades que incumben al FMI, a la banca mundial y al sistema financiero internacional en relación a las que corresponden a los países mismos; son igualmente graves; en cambio, discutiremos la idea, aparentemente evidente, de que la crisis ha disminuido la capacidad de iniciativa de los actores sociales y políticos; defenderemos incluso una posición opuesta: tras un largo período de desarrollo dependiente, determinado en gran parte por la situación del mercado financiero y comercial internacional, y frente a dificultades aparentemente insuperables, los países latinoamericanos están condenados a aumentar su capacidad de iniciativa pública y privada. ¿Es una paradoja decir que la imposibilidad ante la que se encuentran estos países para pagar su deuda y soportar su peso durante largos años vuelve indispensable no sólo la búsqueda en el plano internacional de una solución política, sino también el aumento de la capacidad de decisión económica y política de cada país? Aumento tanto más indispensable cuanto que la crisis económica se ha transformado la mayoría de las veces en una crisis social agravada por la inflación, es decir, por la lucha entre los grupos sociales para transferir sobre los demás el peso de la deuda, y que amenaza con hacer bascular a los países en la hiperinflación y el caos. Digamos sin más que los países latinoamericanos, sin evitar conocer las consecuencias dramáticas de la crisis, han manifestado frente a ella una capacidad de acción poco común y que la mayoría de los observadores no habían previsto.

4. Los efectos de la crisis

El choque

Los efectos de la crisis financiera son brutales.

En %	1980	1981	1982	1983
PIB	5,9	1,5	− 1,0	− 3,3
Producto por habitante	3,4	− 0,9	− 3,3	− 5,6
Precios al consumo	52,8	60,8	85,6	130,4
Salarios industriales reales	− 0,4	1,9	− 1,0	− 5,7

FUENTE: CEPAL, *Informes económicos...*

De 1980 a 1984, la producción interior bruta por habitante disminuye un 11,8 por 100 en Argentina, un 24,6 por 100 en Bolivia, un 8,3 por 100 en Brasil, un 1,5 por 100 en Colombia, un 12,4 por 100 en Costa Rica, un 10,5 por 100 en Chile, un 6,5 por 100 en Ecuador, un 21,8 por 100 en El Salvador, un 15,4 por 100 en Guatemala, un 10,8 por 100 en Haití, un 11,3 por 100 en Honduras, un 5,2 por 100 en México, un 6,6 por 100 en Nicaragua, un 4,8 por 100 en Paraguay, un 13,3 por 100 en Perú y un 16,2 por 100 en Uruguay y en Venezuela. Las únicas excepciones son Panamá (+ 0,3 por 100), la República Dominicana (+ 0,7) y, excepción total, Cuba, donde el producto por habitante aumenta en un 30,4 por 100.

La parte del producto industrial en el producto total disminuye en muchos países, en Argentina entre 1970 y 1983 del 26,9 por 100 al 24 por 100, en Chile del 26 al 19,8 por 100, en Perú del 20,7 al 17,2 por 100. Disminución que, sin embargo, no es general y que no se produce o casi no se produce en Brasil, donde esa parte no baja más que del 27,4 al 26,3 por 100, en México, donde pasa del 22,9 al 22,1 por 100. En Colombia, se mantiene —16,8 y 16,9 por 100— y progresa incluso ligeramente en Venezuela, del 15,0 al 15,8 por 100.

La inversión baja de manera general y fuerte.

Esta caída no se debe a una baja del ahorro, que sigue siendo relativamente elevada, sino al pago de los intereses al exterior y a la importancia de la fuga de capitales (véase el cuadro siguiente).

Coeficiente de inversión bruto en relación al PIB

Países	1980	1983	Países	1980	1983
Argentina	22,9	14,9	El Salvador	13,8	13,6
Bolivia	22,3	4,2	Guatemala	12,2	9,8
Brasil	27,4	19,4	México	28,0	17,1
Colombia	19,4	21,2	Panamá	23,6	18,0
Costa Rica	29,0	18,1	Perú	15,1	11,6
Chile	16,8	6,5	Uruguay	19,7	11,1
Ecuador	20,9	11,7	Venezuela	29,5	17,1

FUENTE: N. García y V. Tokman, *Acumulación, empleo y crisis*, PREALC.

La mayoría de los países retroceden diez o veinte años; ese retroceso es particularmente fuerte en la agricultura; por lo que se refiere a la industria, la situación es mucho más grave. Venezuela y Chile retroceden más de veinte años, mientras que el sector comercial y financiero disminuye, en la mayor parte de los casos, relativamente poco.

La reducción de las inversiones y de la producción, que en gran parte resulta de la disminución forzada de las importaciones, implica directamente un fuerte aumento del paro y del subempleo y la baja de los salarios. Sin embargo, esa baja no es general, sobre todo si consideramos los salarios industriales, que constituye una primera indicación de la diversidad de respuestas a una crisis que es común a todos los países.

Evolución de las remuneraciones reales medias (1980 = 100)

Países	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Argentina	89,5	100,0	89,4	80,1	103,6	131,0	113,4
Brasil	95,0	100,0	105,5	113,3	101,9	103,0	109,7
Colombia.....	99,3	100,0	101,4	105,2	110,4	118,7	114,9
Costa Rica....	99,2	100,0	88,3	70,8	78,5	84,7	92,2
Chile.....	91,8	100,0	109,1	108,7	97,1	97,4	93,0
México.....	102,9	100,0	103,6	104,4	80,7	75,7	76,6
Nicaragua	122,7	100,0	101,3	91,8	84,5	75,8	60,4
Panamá	104,8	100,0	98,6	100,4	104,6	108,1	—
Paraguay	99,4	100,0	105,3	102,4	95,2	91,8	89,9
Perú	88,9	100,0	98,2	100,4	83,6	70,8	59,6
Uruguay	100,4	100,0	107,5	107,1	84,9	77,1	88,0

FUENTE: CEPAL, *Estudio económico*, 1985.

El aumento del *paro* alcanza a veces proporciones espectaculares. En Chile, el paro alcanzó el 35 por 100 si añadimos a los parados oficiales los trabajadores que reciben subvenciones a través del PEM y del POJH. En otros países es sobre todo el subempleo lo que aumenta. En Argentina, por ejemplo, el paro urbano es más bajo en 1983 que en 1981 (del 100 al 93,3 por 100), pero el empleo informal sube durante el mismo período un 25 por 100. Lo mismo ocurre en Brasil: el paro abierto disminuye más de un 10 por 100 y el empleo informal urbano aumenta en un 32 por 100. Uruguay, Venezuela, Paraguay y Colombia siguen el modelo chileno.

Finalmente, la llamada a la devaluación para reducir las importaciones implica un empuje *inflacionista,* reforzado por la rigidez de los precios anteriores y la existencia frecuente de escalas móviles. La inflación se mantiene también por las anticipaciones de los productores que fijan sus precios en función de la inflación esperada más que del aumento observado de los costos. La inflación alcanza cerca del 300 por 100 anual para el conjunto de la región en 1985 y del 20 al 30 por 100 por mes du-

rante el primer semestre de 1985 en Argentina, más del 16 por 100 en enero de 1986 en Brasil, el 14 por 100 al principio de 1985 en Perú, y se transforma en hiperinflación en Bolivia donde, en febrero de 1985, alcanza casi el 190 por 100. La violencia de la subida de los precios vuelve imposible la negociación colectiva y en pocos meses arruina a categorías sociales enteras, provocando verdaderas conmociones sociales y políticas.

Pero la disminución brutal de la demanda, con sus consecuencias sociales dramáticas, permite a muchos países enderezar de manera espectacular su balanza comercial, a la vez mediante una disminución masiva de las importaciones y por los esfuerzos hechos para desarrollar exportaciones nuevas. México pasa de un déficit de 13.900 millones de dólares en 1981 a un excedente de 5.300 millones en 1983; Venezuela pasa de un déficit de 3.400 millones en 1981 a un excedente de 5.000 millones en 1983. El caso más espectacular es el de Brasil, que alcanza un excedente de 15.000 millones en 1984 y de 12.000 millones en 1985, antes de que el plan Cruzado no entrañe un vivo deterioro del comercio exterior. Tras haber reducido fuertemente su déficit en 1983, Chile obtiene un excedente a partir de 1984 y 1985. Repitámoslo una vez más: frente a la idea superficial de que la crisis destruye toda posibilidad de iniciativa y de reacción de los países latinoamericanos, vemos que éstos, mediante sacrificios dramáticos para una gran parte de la población, reaccionan vigorosamente pero también de formas muy diversas que manifiestan la naturaleza de cada sistema político, económico y social de cada país.

Pero ante todo hemos de subrayar las consecuencias sociales de la crisis que sufren todos los países y que recuerdan lo que tienen en común. Los años de crisis han provocado casi en todas partes una redistribución *regresiva* de las rentas. El nivel de vida de los asalariados con débil remuneración y, naturalmente, de los parados ha bajado mucho más que la renta de los jefes de empresa y de los asalariados con alta remuneración. Tales consecuencias no pueden considerarse como un efecto mecánico de la crisis económica. Indican un aspecto común a la mayoría de los sistemas económicos, que funcionan en favor de los grupos de rentas más elevadas. La reducción de la demanda habría podido ser selectiva y tener en cuenta una demanda insuficiente en ciertos sectores. Por el contrario, ha golpeado sobre todo a los grupos de renta baja. Otra consecuencia general de la crisis es la disminución de los recursos *fiscales:* la inflación, en particular, entraña una baja importante de la tasa real de imposición, sobre todo para las rentas más elevadas, que recurren a procedimientos jurídicos para demorar el pago efectivo de sus impuestos, lo cual debilita la carga de la imposición cuando la inflación es rápida. Los esfuerzos exigidos por la crisis habrían debido apoyarse en una disminución brutal del consumo de lujo; la realidad fue muy diferente y la *desigualdad* social, en lugar de disminuir en una situación de urgencia nacional, ha sido considerablemente aumentada, por regla ge-

neral, por los efectos de la crisis, es decir, por la política económica y social seguida. No obstante, el peso de circunstancias generales desfavorables nunca suprime toda la capacidad de iniciativa de cada país, como lo demuestra la comparación de las diversas políticas de respuesta a la crisis y la evolución misma de las relaciones entre ciertos países y el FMI. ¿No ha conseguido México en 1986 que los problemas de la financiación exterior se planteen en el interior de su propio programa de desarrollo, en lugar de adaptarse a una oferta fija de las financiaciones exteriores?

La capacidad de respuesta

La integración nacional, el desarrollo económico y la modernización cultural se han realizado durante un largo período de recursos exteriores abundantes. ¿Qué ocurre cuando los flujos de capitales se invierten, cuando se vuelven negativos? Una situación de crisis disminuye la acción autónoma de los actores sociales: las empresas endeudadas quiebran o dependen del apoyo del Estado; los asalariados, golpeados por el paro, el subempleo o la caída de los salarios reales, tienen una capacidad debilitada de negociación y de presión, capacidad que desaparece casi por completo en los regímenes represivos. El caso chileno es extremo: tras un decenio de himno a la empresa privada y afirmación del papel subsidiario del Estado, la economía chilena conoce, a partir de 1983, un grado de estatalización superior al que había alcanzado durante la Unidad Popular, debido a que el Estado debe sustituir al sistema bancario en quiebra. Las empresas privadas, que no pueden asumir el peso de sus deudas, necesitan una ayuda del Estado. Esta socialización de las pérdidas priva de toda iniciativa a los dirigentes económicos.

En todas partes la crisis impone al Estado un aumento de sus responsabilidades. Puede ejercerlas no sólo mediante una política económica más o menos coherente y eficaz, sino también eligiendo cierta dirección social y política de acción u otra distinta. Elección que nunca se hace de forma arbitraria sino que se halla ampliamente orientada tanto por el vigor de la industrialización anterior como por la capacidad de presión de las diversas categorías sociales.

La solución que corresponde mejor a las tendencias anteriores a la crisis consiste en reducir la demanda de las categorías más numerosas, que son también las más pobres, y privilegiar los progresos de la exportación para restablecer los equilibrios exteriores, como lo exige el FMI. Pero también se puede intentar enderezar la producción compensando la baja de los salarios reales que se ha producido en la mayoría de los países, no mediante una política de aumento brutal, sino siguiendo los progresos de la productividad. La demanda de los grupos urbanos pobres tiene efectos particularmente favorables sobre la economía: se dirige hacia productos fabricados en su mayoría en la nación, y que requieren una mano de obra abundante y poca inversión, como ocurre con los produc-

tos alimentarios, la ropa y sobre todo la construcción. Con ese mismo espíritu podemos considerar como prioritarias la educación de base, la formación profesional y los gastos de salud e higiene pública, es decir, inversiones en el «capital humano».

Resulta difícil analizar las razones de la elección de una política. Pero se imponen dos observaciones generales. En primer lugar, la acción del Estado debe *romper con el modelo nacional-popular;* ya no puede hablar de participación social y de redistribución sin preocuparse de la producción y de los equilibrios exteriores. Lo cual contradice la desarticulación de la política y de la economía que nos han parecido una de las características centrales de los regímenes nacional-populares. En segundo lugar, la acción del Estado resulta, en gran parte, de las relaciones que existen entre los grupos sociales, de suerte que ya no se puede separar Estado y sociedad civil, lo mismo que no puede separarse política económica y política social. La eficacia del Estado no puede venir de su sola iniciativa; supone también la formación o el fortalecimiento de los actores sociales y la creación de un sistema de relaciones políticas más autónomas que en tiempos anteriores por relación a un Estado que sustituía a los actores sociales.

La crisis como mutación político-económica

Desde el inicio de los años ochenta el continente vive una mutación más todavía que una ruptura. Frente a una crisis profunda, a un retroceso económico de diez, veinte o treinta años, los países de América Latina habrían podido estrellarse, zozobrar en el caos y muy pronto en la dictadura. Frente a la gran crisis de los años treinta, los países de Europa conocieron conmociones dramáticas. América Latina, no nos cansaremos de repetirlo, ha hecho frente, con una determinación y una estabilidad extraordinarias, a los caos que la perturbaban. En pocos años, mediante sacrificios terribles, el continente ha restablecido su balanza comercial y algunos países han logrado incluso proseguir el camino del crecimiento. El costo social de estos años centrales de la crisis no se borrará en mucho tiempo, pero los nuevos regímenes democráticos no se han estrellado y, frente al incremento del paro y de la pobreza, apenas han visto sublevaciones, y menos todavía movimientos revolucionarios. Debido en gran parte a que, si los modelos políticos anteriores se hallaban agotados y si las masas urbanas no podían ya apelar a un Estado distribuidor, dado que éste ya no tenía nada que distribuir, las categorías populares no tenían capacidades de organización y de acción autónomas. La ausencia de una crisis mayor en el continente no debe por tanto considerarse, por entero, como un éxito, sino también como una señal de impotencia para inventar nuevas formas de participación política. En realidad, cuanto más capaz se ha mostrado el continente para resistir los embates, tanto más le ha costado, en líneas generales, enderezarse.

Antes de 1987, Brasil parecía la única excepción a esta observación general; el contraste era incluso tan nítido que podíamos preguntarnos si Brasil seguía formando parte del continente o si ya no era un subcontinente aparte, tan diferente del resto de América Latina como la India o China lo son del resto del Asia continental. Pero cuando le llegó el turno, tras el fracaso del plan Cruzado, Brasil conoció graves dificultades.

¿Cómo no pensar también que el entorno internacional será desfavorable, de forma duradera, para América Latina? Ante todo, porque los países industriales son dueños de nuevas tecnologías y sus gobiernos ayudan poderosamente a su desarrollo mediante subvenciones masivas a la investigación y al lanzamiento de proyectos industriales de interés nacional, militares o civiles. Luego, porque esos mismos países también protegen sus sectores tradicionales de producción agrícola o industrial, esforzándose por reducir las nuevas formas de división del trabajo en el mundo. Finalmente, porque los intercambios comerciales tienden a desarrollarse más en el interior del triángulo de los países desarrollados —América del Norte, Europa occidental, Japón y nuevos países industriales de la Asia del sudeste. América Latina no participa en ese gran juego de comercio mundial sino por los intercambios comerciales y financieros que se operan en el seno de empresas transnacionales, y sus exportaciones tradicionales se ven cada vez más amenazadas, bien por las tecnologías nuevas, bien por la transformación de la demanda de los consumidores. Finalmente, el principal obstáculo interior al resurgimiento duradero de las economías latinoamericanas reside, evidentemente, en el peso de la *deuda*. Durante algunos años se ha podido creer que los progresos del comercio exterior, conseguidos al precio de pesados sacrificios, permitirían soportar su peso. Hoy comprendemos mejor que el continente ha sido metido en un círculo vicioso. El ajuste recesivo, al debilitar la capacidad de inversión y de modernización y aumentar los riesgos de inestabilidad, desalienta las inversiones extranjeras y disminuye por tanto el producto sobre el que se descuenta el pago de la deuda. Hoy resulta evidente que el problema de la deuda no puede ser resuelto sólo por los países latinoamericanos. Sea disminuyendo los intereses, sea transformando el capital en buenos negocios en el mercado y que se depreciaría tanto más cuanto más débil sea la capacidad de pago del país, o sea transformando una parte de la deuda en fracciones del capital de empresa de los países endeudados, no se podrá escapar a un arreglo político de la deuda, posible, sobre todo, porque muchos bancos han recogido beneficios considerables de la deuda latinoamericana. Algunos ya han abandonado una parte de sus créditos.

Lo que aquí tratamos de saber es si los países industrializados del Norte —los Estados Unidos, Japón y Europa occidental— tendrán fuerza y voluntad suficientes para integrar a América Latina a su sistema económico; lo cual parece indispensable por razones geopolíticas y podría aportar una ayuda considerable al desarrollo de sus propias economías.

A pesar de sus valerosos esfuerzos de resurgimiento, la América Latina vive otra vez, desde 1986, dificultades desencadenadas por la crisis de los pagos exteriores porque, a pesar de la baja de las tasas de interés, del dólar y del petróleo —en el caso de los países no productores—, la amplitud de la economía internacional y la baja de muchas de las materias primas han impedido que se cree una coyuntura favorable al resurgimiento. Esta situación económica paraliza la democratización y, por tanto, la capacidad de elaborar una política de resurgimiento. En una economía dinámica, a las empresas y sindicatos les resulta más fácil discutir, directamente o a través del Estado, sobre el reparto del producto del crecimiento, mientras que una crisis profunda empuja a cada grupo social a defender sus intereses inmediatos; una fuerte inflación, en particular, impide cualquier tipo de negociación compleja al vincular los salarios y los beneficios con la producción y la productividad: a cada categoría social le es menester ir de prisa, para no perder en unos pocos meses una parte importante de su renta real.

En 1986-1987, la América Latina da la imagen de un continente que no llega ya a producir, porque ya no dispone de los recursos ni del tiempo necesarios para montar el complejo conjunto de medios técnicos y humanos, de mecanismos de estudios, de innovaciones, de inversiones, de organizaciones y de negociaciones que constituyen el aparato productivo. Los poseedores de capitales buscan beneficios inmediatos o incluso exportan sus capitales. El Estado, amenazado con ver estallar una crisis social grave, incapaz de corregir una distribución cada vez más desigual de la renta nacional, en vez de intervenir de manera nueva y más activa en el resurgimiento económico, da marcha atrás: a veces para mantener un régimen autoritario, a veces para echar mano de las viejas recetas nacional-populares. Si en los peores momentos de la crisis, en 1982-1984, era necesario admirar la capacidad de reacción de las economías latinoamericanas, en 1985-1987 aparecen de forma dramática las dificultades del resurgimiento.

¿Es posible éste todavía? Impone el desarrollo de nuevas exportaciones y un esfuerzo continuado para introducirse en el mercado de productos industriales complejos, pero también depende de la capacidad de cada país para desarrollar su mercado interior y, sobre todo, aumentar su capacidad para elaborar una política económica. Resulta manifiestamente falso pensar que los países de América Latina deben reducir el papel del Estado al de un gendarme y confiar en las negociaciones directas entre grupos económicos y sindicatos. Frente a la crisis, la necesidad más urgente que tienen todos los países es desarrollar la capacidad de acción del Estado, pero, cierto, de un Estado que no trate ya a las empresas, a los sindicatos y a los demás actores sociales y económicos como a su clientela, que cree, por el contrario, las condiciones de una *acción más autónoma de los principales actores sociales*. Lo cual define los dos papeles principales del Estado: defender el espacio nacional, la economía del

país, frente al peso insoportable de la deuda; por otro lado, luchar activamente contra una distribución desigualitaria de la renta nacional, agravada por las dictaduras militares, reforzada además por los años de crisis. Reintroducir en la producción moderna, con una productividad fuerte, una parte de los asalariados del sector informal, que se han convertido en mayoría en muchos países, es una tarea prioritaria que exige la puesta en práctica, no sólo de medidas económicas y fiscales directas, sino también de una política de educación y de medidas de seguridad nacional. Sólo en la medida en que el Estado conquiste una capacidad de acción suficiente podrán adquirir los actores sociales una autonomía creciente y desarrollar sus negociaciones directas.

Estas observaciones generales muestran que no es posible definir un modelo integrado de sociedad, que debería ser el objetivo común de todos los países latinoamericanos. Tanto los regímenes nacional-populares como los regímenes hiperliberales construidos por las dictaduras militares han creído en la existencia de un principio único: bien en la participación social y nacional, bien, por el contrario, en la racionalidad de las leyes del mercado internacional. Pero ¿cómo no ver que los países latinoamericamos deben realizar varias tareas que son complementarias antes que poner en conflicto a una con otra? Hay que desconfiar de los análisis, incluso los más inteligentes (como los de la CEPAL Técnica, 1985), que todavía creen en la posibilidad de definir un modelo integrado de desarrollo, inspirándose en el modelo europeo o norteamericano, hablando de una cultura modernizadora y racionalizadora asociada a la apertura del mercado y de las fronteras. Todo modelo eficaz de desarrollo debe combinar, en América Latina, unos factores de integración social y cultural con unos factores de conflicto social y político. Ante todo es menester que se constituyan unos *núcleos endógenos* de dinamización tecnológica, según la expresión de F. Fajnzylber, que no pueden constituirse más que por iniciativa del Estado, incluso aunque éste trate de darles la mayor autonomía posible. Tales núcleos representan una concentración de recursos en unas zonas ya desarrolladas, lo cual puede implicar un riesgo de agravación de las desigualdades interregionales. Reconocer la necesidad de tales núcleos es romper con la ilusión populista según la cual podemos pasar del mundo preindustrial al mundo industrial sin discontinuidad, sin desarraigo y sin conflicto.

Un segundo elemento indispensable para el desarrollo, y que puede entrar en conflicto con el anterior, es el crecimiento de los gastos públicos para la construcción de *servicios económicos y sociales de base,* sobre todo en la salud y la educación, y de infraestructuras, como las rutas y los puertos, que no exigen importación y crean numerosos empleos. Por tanto es menester que el Estado se libre de su alianza privilegiada con las clases medias y que sepa, al mismo tiempo, ayudar a la constitución de polos de desarrollo y de un espíritu industrial y conceder prioridad a los más desprovistos, para reintegrarlos al mercado nacional y dar a la

democracia una base popular extensa. Aumentar la capacidad directriz del Estado, reforzar la burguesía industrial, asegurar una redistribución de las rentas y la reintegración económica y social de los más pobres: he ahí tres objetivos que parecen más opuestos unos a otros que complementarios. Pero al definir un modelo de conflictos al mismo tiempo que de iniciativas, ¿no nos acercamos a los problemas centrales de los países latinoamericanos?

Una de las principales consecuencias de la crisis de los años ochenta es *incrementar la diferenciación interna* del continente. Es cierto que, después de la guerra, algunos países, los del cono sur y Venezuela, o incluso, de manera más artificial, Cuba, disponían de un avance notable sobre el resto del continente, pero luego, el desarrollo económico general ha reducido esas distancias, ha acercado en particular a Brasil y México a Chile e incluso a la Argentina. Pero hoy, las posibilidades de resurgimiento y de desarrollo se han vuelto muy desiguales. Algunos países como Bolivia, Perú y los países de América central luchan por su supervivencia. De manera inversa, Brasil es capaz de salir de la crisis, a pessar de las consecuencias negativas del plan Cruzado, gracias a su capacidad exportadora y al desarrollo de su producción y de su mercado interior.

México, que progresaba de manera paralela a Brasil, está paralizado por su sistema político y por la acción de un capitalismo privado más vuelto hacia el exterior que hacia el interior. Chile no consigue resurgir económicamente, tras una caída brutal, sin conservar un régimen autoritario que mantiene los salarios en un nivel bajo, a pesar de una tasa de beneficio en alza, mientras que Argentina, que reconstituye un Estado y construye una democracia, no ha logrado, hasta ahora, crear ni una burguesía industrial ni unos sindicatos reivindicadores. Cada país vive a su manera un drama, que no puede ser resuelto por ninguna fórmula mágica, ni la del liberalismo a la occidental, ni la del nacionalismo populista ni, al parecer, la fórmula de la planificación socialista. Pero podemos concluir de manera realista sobre el futuro de América Latina diciendo al menos que todos los caminos del pasado están cerrados, que las ventajas relativas de la dependencia han desaparecido, que está obligada a hacer frente a sus propios problemas mediante sus propios medios y que, en resumidas cuentas, ha hecho frente, sin mayores desastres, a las terribles consecuencias de la crisis. Casi en todas partes el Estado se refuerza y las presiones populares siguen siendo relativamente débiles. El obstáculo principal sigue siendo hoy la insuficiente formación, en la mayoría de los países, de una burguesía industrial y de una voluntad industrializadora. De ahí también la necesidad de una redistribución de las rentas y, sobre todo, de un cambio de política, que cese de alentar el consumo del lujo, el uso inmoderado del coche y la construcción de barrios residenciales cuyo lujo insulta a la miseria popular completamente cercana. También es preciso que la enseñanza primaria y secundaria re-

ciba la prioridad, mientras que la enseñanza universitaria ha gozado de privilegios excesivos y de un desarrollo demasiado rápido en relación a los demás órdenes de enseñanza. Para expresar de manera todavía más sucinta el razonamiento que acabamos de hacer, digamos que la América Latina debe dar prioridad, desde el fondo de su crisis, a la reconstrucción del Estado; que, en una segunda fase, debe reforzar su capacidad de iniciativa industrial y por tanto constituir núcleos de desarrollo y de una élite económica dirigente, y que luego se reforzará la presión popular para la redistribución de la renta y una participación política extensa. No hagamos de esta secuencia una regla, pero recordemos por lo menos, para subrayar la diferencia entre la situación presente y la del pasado, la indiferenciación del Estado, de las fuerzas políticas y de los actores sociales debe dejar paso a una diferenciación creciente del Estado, de las instituciones democráticas y de fuerzas socioeconómicas que deben ser capaces de entrar en relación, en conflicto y en negociación cada vez más directas unas con otras.

2.—La democratización

Introducción: una idea nueva

La idea de democracia es una idea nueva en América Latina desde los años ochenta. A partir de 1964, Brasil, Bolivia, luego Argentina y más tarde Uruguay y Chile, habían caído bajo la dominación de dictaduras militares. Paraguay estaba, desde hacía treinta años, bajo el Gobierno del general Stroessner y, de 1968 a 1970, Perú también había conocido un régimen militar, cierto que muy diferente. México estaba dominado por un partido cuasiúnico y Cuba por un partido único y por un grupo dirigente reducido que acumula todas las formas de poder civil y militar. Es en el momento en que se acaba la fase de gran crecimiento de la posguerra, de manera paradójica, cuando unos regímenes democráticos sustituyen a las dictaduras militares, sin alteraciones, de manera casi evidente, natural, de suerte que en 1987 sólo Paraguay y Chile están dominados todavía por regímenes dictatoriales. Incluso el régimen del general Pinochet aparece amenazado por sus propias posibilidades constitucionales. La vuelta a la democracia aparece en la mayoría de los países, a principios de los años ochenta, como la condición previa a la solución de todos los problemas, de la crisis económica a la pobreza, del desprecio de los derechos del hombre a la libertad sindical. Los regímenes militares, tras haber cumplido la tarea que se habían fijado —contener la presión popular—, no tenían ninguna solución que aportar a unos problemas, sobre todo económicos, que no eran aquellos para cuya solución se

habían hecho con el poder. Lo cual indica la debilidad tanto como la fuerza de la idea de democracia, porque es más exacto decir que las dictaduras militares han perdido el poder que afirmar que las fuerzas democráticas se han hecho con él.

La idea de democracia es nueva por otra razón además: desde principios de siglo, la palabra aparecía como sinónimo de conservadurismo, de mecanismos de defensa de una clase media limitada o incluso de una oligarquía. Para muchos, la democracia aparecía siempre como restringida, según la frase del presidente Betancur para Colombia, mientras que el tema de la *revolución* apelaba al país real, a las fuerzas sociales que estaban al margen del sistema político o se hallaban excluidas por éste. Revolución que, con su nombre, abarcaba tanto unos regímenes de inspiración castrista como unos movimientos populistas, tanto la acción de las guerrillas como los sindicatos de masa o las denuncias por parte de los intelectuales del orden establecido. En todas partes no se hablaba en los años sesenta más que de revolución.

En los años ochenta la idea de democracia surge, por tanto, en oposición tanto al poder de las dictaduras como a la esperanza puesta en las revoluciones. Así pues, la democracia se encuentra situada ante dos tareas conjuntas: poner fin a unos regímenes antipopulares y ampliar la capacidad de respuesta del sistema político a las demandas sociales. Y debe cumplir esas dos tareas en una coyuntura económica dramáticamente desfavorable, mientras que todo distributivismo se ha vuelto imposible por el endeudamiento exterior y la mayoría de las veces por una inflación galopante, por el paro y la baja del nivel de vida real. Desafío extraordinario: no debe asombrarnos que haya sido seguido, fuera del continente, con una atención más apasionada. Los países már ricos no ven en líneas generales en la América Latina de hoy más que un deudor insolvente, incluso un deudor de mala fe o de mala voluntad, y muchos gustan recordar que la América Latina es el continente de la inestabilidad política, de los golpes de Estado y de la retórica antes que de la acción responsable. ¡Qué ceguera! ¿Cómo no ver que la América Latina, en su conjunto, construye o reconstruye democracias, en unas condiciones económicas tan difíciles como las que implicaron, tras la primera guerra mundial, la destrucción de las democracias en la mayor parte de Europa? En el capítulo anterior acabamos de ver la extraordinaria capacidad de respuesta, de *ajuste,* a la crisis, por parte de países que han debido imponerse inmensos sacrificios. Ahora hay que añadir que esas pruebas dramáticas han sido vividas no sólo sin que retroceda la democracia, sino incluso en medio de un gran movimiento de retorno a la democracia, cuya potencia debería impresionar a los más escépticos. Por primera vez desde 1930, Argentina se ha dado un régimen democrático que no descansa en la proscripción de ningún partido. En noviembre de 1986, Brasil eligió en casi todos los Estados gobernadores del PMDB, el partido que se había identificado con la reconstrucción de la democracia.

Estos dos partidos son los más espectaculares, pero ¿no son bastante importantes por sí mismos para que miremos a la América Latina de hoy no sólo con confianza en cuanto a su capacidad de gestionar sus problemas y su futuro, sino con admiración? ¿No es América Latina, en un mundo alterado por las crisis económicas, los conflictos militares y los enfrentamientos entre las superpotencias, el continente que porta en sí, de la forma más activa, las posibilidades de extensión de la democracia?

Pero no sustituyamos una visión demasiado sumariamente negativa de la América Latina por una satisfacción demasiado superficial del retorno de las democracias. En 1987, la situación es ya más inquietante que tres años antes. Argentina ha debido hacer frente si no a un golpe, al menos a una rebelión parcial del ejército; frente a la agitación social, en Brasil el gobierno ha apelado de nuevo al ejército; en Perú, el empuje de *Sendero Luminoso* entraña, de rechazo, intervenciones brutales del Estado y el poder político está tan amenazado por éstas como por aquél. En Colombia es difícil separar la responsabilidad de las guerrillas y la del ejército en la prosecución de la violencia. En Guatemala, grupos armados mantenidos por el ejército hacen reinar todavía el terror, lo mismo que hacen los «Escuadrones de la Muerte» en El Salvador, y el presidente civil Cerezo parece retroceder en sus esfuerzos para limitar la violencia militar.

Son raros los países en que el Parlamento ha conseguido un papel central y se revela capaz de hacer frente a los graves problemas que imponen unos programas a largo plazo y decisiones valientes. No es éste, desde luego, el caso de Argentina, donde es el presidente Alfonsín y no el Parlamento quien representa la legitimidad democrática, mientras que Brasil ha conocido, en 1986-1987, un deslizamiento claro hacia un nuevo populismo, simbolizado por el plan Cruzado y donde el principal partido, el PMDB, decepciona las esperanzas puestas en él. La vuelta de la democracia a varios países no significa que éstos y el conjunto del continente conozcan un grado bastante elevado de integración social y política para que puedan hacerse las principales opciones políticas en el seno de límites constitucionales, de reglas del juego y de un consenso sólido sobre los principios de la organización económica y social. Las sociedades latinoamericanas siguen estando dominadas por la dualización e incluso, con frecuencia, por la acentuación de ésta y por el crecimiento del paro, del subempleo y de todas las formas de marginalidad y de desorganización social. Cuando vuelve a la democracia o cuando se mantiene en ella, la América Latina no sale de sus contradicciones como si la caída de los regímenes militares, desde Argentina a Guatemala, señalara un avance decisivo de la igualdad y el retroceso de la miseria y de la violencia. Ningún caso es en este punto más instructivo que el de Chile, donde las esperanzas de creación de un gran movimiento democrático y popular, nacidas en 1983, se desvanecieron pronto, y donde no cesa de aumentar la distancia entre la búsqueda de un camino de retorno a la lega-

lidad y las demandas de los *pobladores* aplastados por el paro y la pobreza. No cedamos al error que, como ya se ha repetido en el pasado, ha creído ver ingresar a ciertos países de América Latina, al menos los del cono sur, en los modelos políticos desarrollados en Europa o en América del Norte.

Nuestra reflexión debe partir, por tanto, de dos constataciones aparentemente opuestas y tratar de combinarlas: de un lado, frente a la crisis, los países de América Latina se vuelven hacia la democracia para organizar un resurgimiento que no puede venir más que del interior, de la capacidad de negociación entre los principales actores del sector dinámico de la economía; del otro, están enfrentados a una masa considerable de pobres, sin poder recurrir a las antiguas facilidades del populismo distributivista y sin poder tampoco mantener a esos pobres en la exclusión y en el empobrecimiento en que los habían encerrado las dictaduras antipopulares. Todavía nos separa un largo camino de la respuesta a la pregunta que en la actualidad nos obsesiona, al día siguiente de la caída de varias dictaduras: ¿cuáles son las posibilidades que la democracia tiene en América Latina?

1. La caída de las dictaduras

Las dictaduras militares recientes no han sido regímenes burocráticos autoritarios, basados en unas orientaciones positivas, a un tiempo políticas y económicas; ya hemos dicho que no habían sido otra cosa que dictaduras antipopulares, que no tenían en común más que la voluntad de expulsar a los actores sociales de la escena política y económica y sustituirlos por la lógica impersonal del mercado. Estos regímenes militares no tuvieron en común ningún proyecto fundador. En Brasil, Delfim Neto fue «desenvolvimentista», todo lo contrario que Martínez de la Hoz en Argentina o Sergio Castro en Chile. Esta política del Gobierno militar brasileño, como ha demostrado L. Martins (cf. Bibl., V, 1), se comprende mejor en la continuidad del getulismo, mientras que la política de la Argentina de Videla corresponde a una tendencia permanente de Argentina de dar o volver a dar un papel central al sector agroexportador, y mientras la política de los *Chicago boys* de Chile corresponde a la tendencia tradicional de la burguesía chilena de preferir la banca a la industria. Comprender la caída de las dictaduras militares no es analizar el vuelco de un proyecto global, sino solamente buscar las razones por las que el predominio de una política represiva, apoyada en una vaga ideología de la seguridad nacional, ha resultado incapaz de aportar respuestas a la nueva coyuntura económica e impotente, por consiguiente, para conservar ningún tipo de legitimidad.

Misión cumplida

Si las dictaduras militares cayeron con tanta facilidad en América Latina fue, ante todo, porque las razones que habían explicado su ascensión habían desaparecido y porque esas dictaduras no tenían ninguna respuesta a los problemas nuevos que se planteaban. Dado que su función central había consistido en eliminar las presiones populistas o las sublevaciones violentas, fueron incapaces de perpetuarse. Los gobiernos militares pierden su razón de ser cuando desaparece la amenaza política a la que han querido responder. Idea confirmada, *a contrario,* por las declaraciones del general Pinochet que justifica la perpetuación de su régimen por la presencia mantenida de la amenaza comunista y por el expansionismo político e ideológico de la Unión Soviética. Cuando se terminan los «milagros» y cuando el mercado internacional se carga de negros nubarrones, los regímenes militares son incapaces de aportar a la economía y a la sociedad la protección que éstas necesitan.

Pero el agotamiento de los regímenes militares no puede entrañar un retorno a los regímenes nacional-populares, que se basaban en la ampliación de la participación política, económica y cultural, dado que la crisis económica hace disminuir de forma brutal la capacidad de cooptación y de apertura de todos los países. El agotamiento de las dictaduras también señala, y con mayor amplitud, el final de un período más largo, el que se había abierto después de la primera guerra mundial, cuya descomposición han acelerado las recientes dictaduras militares. Esas dictaduras no fueron en modo alguno formas autoritarias de entrada en una nueva etapa del desarrollo económico; fueron el acompañamiento brutal de la descomposición de regímenes nacional-populares que no podían mantenerse salvo que aumentase su capacidad de distribución y, más todavía, salvo que la dependencia respecto del exterior tuviese unas consecuencias económicas en última instancia favorables, porque esa dependencia suscitaba un flujo claramente positivo de capitales.

De ahí el vacío político y la debilidad de la movilización social y política que caracterizan al continente en el momento en que sobre él se abate una crisis económica que entraña a un tiempo la caída de las dictaduras y el debilitamiento de todos los regímenes políticos.

Los mecanismos externos del derrocamiento de las dictaduras

Existen dos maneras de salir de una dictadura: por una presión exterior, política y social, nacional o internacional, o por una crisis interna, que puede ser desencadenada por el asesinato o la muerte del dictador, o también por la división de quienes ocupan el poder y por su decisión de entregárselo de nuevo a los civiles. Estos dos mecanismos tienen, por lo menos, un rasgo en común: no hay continuidad completa en el paso

de la dictadura a la democracia, ni siquiera cuando ese paso se opera lenta, pacíficamente, con la aquiescencia de los principales interesados, como en el caso brasileño.

Los mecanismos externos de derrocamiento de una dictadura son de tres tipos principales: políticos, sociales y morales. En el primero de estos casos, son los partidos y los sindicatos quienes toman la iniciativa; el segundo tipo está representado por una presión popular y, en particular, por huelgas, enfrentamientos, una desobediencia civil o militar. Por último, la protesta de grupos religiosos o laicos, intelectuales o políticos, contra los atentados a los derechos humanos o contra minorías constituye una tercera forma de combate contra las dictaduras.

Los *frentes o alianzas políticas* son las formas más clásicas de oposición política. Las hemos visto aparecer sobre todo en el inicio de los períodos de dictadura, pero han sido vistos como la defensa del sistema anterior, lo cual les ha quitado mucho de su fuerza. Ese fue el caso del *Frente Ampla* brasileño, que reunió a los dirigentes del antiguo régimen, como Kubitschek, y a adversarios de ese mismo régimen, como Lacerda. En la fase final de las dictaduras, esos frentes pueden organizar una oposición más activa, si ésta se apoya en una movilización social. Eso ocurrió con el MDB —convertido en el PMDB— brasileño, y sobre todo con la campaña alfonsinista que desbordó, en Argentina, ampliamente la influencia del Partido Radical. Estos frentes desempeñan un papel indispensable, pero les resulta difícil destruir por sí mismos a las dictaduras. Es menester que se reconstituya cierto espacio político, que quede iniciado el proceso de retorno a la democracia, para que pueda desenvolverse su acción. No puede decirse que unos partidos o frentes políticos hayan desempeñado un papel determinante, dejando a un lado el caso boliviano, en el retorno a la democracia. El ejemplo de *Chile,* en particular, muestra las divisiones que siguen existiendo en la oposición, porque les resulta imposible a unos partidos políticos, incluso cuando dirigen la lucha contra la dictadura, no pensar ante todo en el ejercicio futuro del poder y, por tanto, en los conflictos internos del mundo social y político. A. Varas (cf. Bibl., IV, 3) ha mostrado perfectamente el conflicto existente entre la estructura tradicional de los partidos y la formación de fuerzas políticas definidas, ante todo, como actores de la destrucción de la democracia.

Una variante muy particular de los frentes de oposición es el apoyo dado por los Estados Unidos a los adversarios de una dictadura. En *Haití,* J.-C. Duvalier fue derrocado gracias al apoyo de los Estados Unidos y a la acción de la Iglesia. En *Panamá,* el general Noriega, apoyado al principio por los Estados Unidos, parece haber perdido su apoyo en 1987.

La *presión popular* puede ser reforzada por la caída de los salarios reales, que fue fuerte en Argentina, en Chile y en Brasil, al menos por lo que se refiere a las categorías de baja cualificación. La convergencia

de una presión para la democracia y de una presión económica para la recuperación del nivel de vida anterior aparece como el mecanismo normal de reacción antidictatorial. No obstante, esa presión social no se organiza en todos los casos. En Argentina, el sindicalismo no estaba fuertemente ligado con las fuerzas democráticas, como lo había mostrado la historia del vandorismo. Únicamente en *Bolivia* el papel político central de la COB permitió la asociación de una presión social y una oposición política. En *México,* el sindicalismo obrero ha permanecido, por el contrario, fuertemente controlado por el partido-Estado y la caída del nivel de vida, motivada por la crisis de 1982 y los años siguientes, no ha provocado ningún movimiento huelguístico de gran amplitud. La movilización popular ha sido con frecuencia infrapolítica e, incluso a veces, antipolítica, además de no haber sido la base de la formación de una política democrática. El *Chile* de los años 1984-1985 es un ejemplo extremo de esta separación de la presión social y de la presión política. Mientras que la participación de los sindicalistas en las *protestas* ha estado limitada por el miedo al paro y a la represión, y mientras que los partidos políticos de oposición se agotan buscando fórmulas de sustitución de la democracia, entre los *pobladores* se forman movimientos de resistencia a los ataques y a las provocaciones de la policía y del ejército ya analizados en la tercera parte de este libro. Pero la noción de movimiento social no podemos aplicarla aquí más que en un sentido muy distinto del que le doy cuando defino los movimientos sociales como portadores de proyectos más globales que los partidos políticos, porque la acción de clase parece más fundamental que el juego político. Aquí, por el contrario, es el partido el que aparece como defensor de una estrategia global, mientras que los movimientos son percibidos como fuerzas de ruptura, de rechazo de la participación dependiente, de resistencia a la represión política y económica y de expresión de valores comunitarios o religiosos, más que como fuerzas de transformación del régimen político.

Ante esta gran debilidad de las fuerzas propiamente políticas y esta orientación de los movimientos comunitarios hacia una acción más defensiva que ofensiva, la protesta moral, los movimientos de defensa de los derechos del hombre y de condena de la tortura adquieren una importancia central. Las campañas contra las desapariciones adoptaron una gran amplitud en Argentina; las *madres de Mayo,* que se reunían en la Plaza de Mayo para exigir noticias de sus hijos desaparecidos, se hicieron oír del mundo entero. En Brasil, en Chile, en Uruguay, se lanzaron campañas de información y de protesta, con frecuencia a través de abogados. Estos movimientos tienen, naturalmente, una influencia limitada, porque sólo en un Estado de derecho puede ser eficaz la defensa de los derechos pisoteados por las fuerzas de lo arbitrario. No obstante, la importancia de esta protesta moral y política fue grande, porque opuso un principio de legitimidad a un régimen que, una vez desaparecidas las ilusiones del enriquecimiento fácil, ya no podía apoyarse en ninguna legiti-

mación. No obstante, también sobre este punto hay que llegar a la siguiente conclusión: esa fuerza de oposición no podía destruir por sí misma la dictadura. Conclusión que no subestima el papel de las fuerzas que unieron defensa comunitaria y protesta moral. La Iglesia católica, sobre todo, jugó un papel importante en la caída de las dictaduras, como lo había jugado en la caída de Perón en 1955. La ruptura entre la Iglesia y el régimen fue asimismo en Chile un factor de debilitamiento del general Pinochet. Sin embargo, ese ejemplo recuerda la fuerza limitada de esas presiones exteriores. Porque una de las ideas centrales de este libro es que la democracia fue de participación más que de representación en América Latina, lo cual no entrañó una fuerte expresión de las demandas sociales, sino también una capacidad limitada de movilización autónoma. Las masas puestas en movimiento se expresaban con más facilidad para aumentar su presión sobre los gobiernos que para resistir a sus adversarios, sobre todo cuando éstos se hallaban armados. ¿Cómo no oponer aquí la historia de Europa, llena de luchas sociales y políticas abiertas contra unos gobiernos autoritarios o conservadores, con una América Latina que conoció precozmente una gran apertura política, pero donde la capacidad de resistencia y de lucha armada fue mucho menos fuerte?

Todas las debilidades de la oposición política y social a la dictadura aparecen a plena luz en *Chile,* donde el régimen militar se mantiene desde 1973. Tras una fase de resistencia moral y tras el debilitamiento de las fuerzas de oposición durante los años del *boom* económico, la crisis ha provocado nuevas iniciativas contra el régimen. Pero de 1983 a 1987, el fracaso de las *protestas* y de la movilización sindical ha sido seguido por una serie de iniciativas destinadas, cada vez con mayor insistencia, a convencer a los jefes militares para que pongan fin en 1989 al poder del general Pinochet, y la oposición social misma se ha desplazado de las clases populares hacia la clase media, los *gremios* (asociaciones profesionales) y los estudiantes. Lo cual ha mostrado cuán difícil, imposible incluso, era combinar una resistencia popular, a la vez política y social, con la búsqueda de una salida de la dictadura, dado que toda solución debe ser aceptable para los dirigentes militares y sus amigos; es decir, debe estar muy lejos de la sublevación popular que deseaban animar el Partido Comunista y sus aliados del MDP.

Sin embargo, la oposición entre estas dos formas de combate contra la dictadura parece fácil de superar. Basta con dar como objetivo central a la movilización popular el retorno a la legalidad y a unas elecciones libres. Varias veces se han lanzado estas consignas y, a principios de 1987, un grupo de personalidades de orígenes diversos, reunido en torno a S. Molina, antiguo ministro demócrata-cristiano, lanzó de nuevo una campaña en favor de unas elecciones libres. Pero ¿cómo no reconocer la relativa debilidad de estas tentativas y la distancia cada vez más considerable que se ha establecido entre una *resistencia popular,* animada la

mayoría de las veces por los jovencísimos *pobladores* y presta a recurrir a una violencia segregada por la miseria y la represión, y unas *operaciones de estado mayor,* donde personalidades que progresivamente se han visto llevadas a situarse en el marco de la Constitución que habían denunciado y a aceptar el mantenimiento del general Pinochet hasta el plazo de 1989? El aumento masivo del paro y del subempleo ha dado una nueva fuerza a la parte de la oposición que conserva su inspiración revolucionaria, lo cual rechaza hacia la derecha, hacia combinaciones entre notables, la búsqueda de una salida negociada de la dictadura. Divergencia que priva de toda fuerza a las soluciones intermedias, propiamente democráticas, y permite a la dictadura mantenerse pese al apoyo fortísimamente mayoritario que recibe el conjunto de la oposición. El derrocamiento de la dictadura no puede ser obra de antiguas fuerzas sociales y políticas reorganizadas. Las dictaduras militares han marcado la caída no sólo de regímenes de izquierda, sino también del conjunto del sistema nacional-popular.

Los mecanismos internos

La acumulación de presiones sociales y políticas contra un régimen autoritario ha producido a menudo una revolución; pero, en América Latina, el proceso de salida de las dictaduras pospopulistas y antipopulares no fue, *no es revolucionaria.* Son, pues, mecanismos internos más que presiones externas, políticas, sociales o incluso morales, los que explican la caída de las dictaduras. Esos mecanismos son políticos y económicos. En efecto, la fuerza de las dictaduras antipopulares no puede proceder ni de su base jurídica ni de su capacidad para responder a unas demandas sociales; no puede apoyarse más que en el sentimiento nacional o en el éxito económico. El primero sigue teniendo fuerza, en Chile en particular y en Argentina, donde una fuerte campaña nacionalista, tras haber estado a punto de iniciar una guerra con Chile en 1978, terminó en la guerra de las Malvinas que recibió un fuerte apoyo en los países y en el continente. Como rechazo, la derrota fue decisiva en la caída de los dictadores argentinos. Más general fue el peso del fracaso económico, dado que casi en todas partes los regímenes dictatoriales habían ofrecido una mejora de la situación económica a cambio de la supresión de las libertades públicas. Porque, si el Estado no tiene ya recursos que distribuir, satisfacciones nacionalistas o económicas que ofrecer, está encerrado en una acción puramente represiva, que aumenta a su vez la violencia, en ausencia de mecanismos de regulación institucional de los conflictos. El régimen autoritario debe proponer entonces reformar, aceptar cierta apertura, pero, a medida que la opinión se convence de la posibilidad de obtener ciertos cambios, la presión política aumenta, entraña reivindicaciones sociales y da más influencia a la protesta moral. A medida que los problemas económicos y sociales adquieren más importancia, las

fuerzas armadas tienden a dividirse, y el sistema de partidos, suprimido en la sociedad misma, reaparece en la sociedad militar, a la que divide y debilita. En la mayoría de los países, esas divisiones internas del mundo militar son tanto más importantes cuanto que se había mantenido cierta fachada institucional, impidiendo que se instalara un poder personal dictatorial. En Brasil, el poder de los generales de alto rango fue tan real que los jefes de Estado fueron incapaces, en la mayoría de los casos, de controlar su propia sucesión. En Argentina, el poder estuvo siempre dividido entre los miembros de la Junta, y Viola representó una ruptura con el gobierno de Videla antes de ser eliminado él mismo en favor de Galtieri. El poder militar fue instaurado en Uruguay por civiles, y en Perú el Gobierno militar trató de darse una legitimidad popular. El caso chileno mismo fue siempre ambiguo. Si es cierto que el general Pinochet estableció rápidamente su poder personal, la Constitución de 1980 redefinió la Junta como poder legislativo. Durante largos años, los miembros de la Junta han aparecido como subordinados al general Pinochet, que ha podido reemplazar sin dificultades a los comandantes en jefe de la aviación y de la policía, como miembros de la Junta. Sin embargo, el papel de ésta podría ser importante en el proceso de entrada de la segunda fase de la Constitución e incluso de salida de la dictadura. Así, incluso en el país donde se ha constituido un verdadero poder personal, el dictador no controla por entero el sistema político. Sólo si nos referimos a Paraguay se ha podido hablar de un control absoluto del poder por el general Stroessner.

Parece difícil incluir a Guatemala y a El Salvador en los países en que la dictadura ha caído y ha sido reemplazada por la democracia. Sin embargo, el golpe de Estado de 1979 en El Salvador y el de 1982 en Guatemala, dirigido por los generales Ríos Montt y Mejía Victores, han dado un frenazo a la militarización de este país. Aunque al año siguiente otro golpe de Estado haya restablecido el poder de la jerarquía militar en Guatemala, el general Mejía Victores condujo el país hasta las elecciones de 1986 y el triunfo del demócrata-cristiano Cerezo. En ninguno de estos dos países ha cesado la represión paramilitar, pero no se puede negar la inversión, al menos provisional, de una tendencia, que parecía ser irreprimible, hacia la violencia. En *Guatemala,* en una primera etapa, el ejército sustituye una estrategia de pura represión que golpea a las aldeas por la creación de patrullas de autodefensa y de nuevas aldeas que forman polos de desarrollo. En una segunda etapa, permite el retorno a la democracia. Sobre todo porque, como los demás países, Guatemala se veía afectada por una crisis económica grave, acentuada por la fuga de capitales, y porque la represión se manifestaba cada vez más incapaz para detener la descomposición del país. La fuerza de la Democracia Cristiana ofrecía una solución política limitada, que no inquietaba a los militares, tanto más cuanto que la represión había desorganizado a la extrema izquierda. Los límites de esta democratización fueron pronto

evidentes, a pesar de la popularidad de Cerezo: la reforma agraria ha seguido siendo un tema prohibido y el movimiento que exige justicia para los desaparecidos ha chocado con el miedo del nuevo presidente a provocar una violenta reacción de los militares. Pero en Argentina nadie cuestiona la realidad de la democracia, aunque Alfonsín haya impuesto una ley sobre el *Punto Final* y haya debido, frente a una sublevación parcial del ejército, conceder la amnistía a un gran número de oficiales condenados. La debilidad de la nueva democracia guatemalteca no reside en sus límites sino más bien en el agotamiento de una población golpeada por la violencia y por el empobrecimiento, más hostil a la guerra —tanto a la guerrilla como al ejército— que activamente favorable a la democracia.

La debilidad de N. Duarte en *El Salvador* es más grande todavía, puesto que la guerrilla es mucho más fuerte en este país que en Guatemala, y puesto que las tentativas de negociación, llevadas bastante lejos, no han dado resultados, de suerte que la violencia continúa royendo el país, poniendo de hecho al presidente bajo la dependencia de un ejército que, no obstante, ya no se lanza a una represión tan masiva y ciega como la que llevó a cabo entre 1978 y 1982.

La evolución de estos dos países de América Latina pertenece por tanto al movimiento general de retorno hacia la democracia y se explica, sobre todo, por la impotencia de los regímenes militares para gestionar la crisis económica tanto como para reducir a la guerrilla. Sobre todo, Guatemala no se había hundido sino de forma progresiva en la represión militar y paramilitar; las categorías medias urbanas, en los dos países, habían tratado varias veces de establecer un régimen más democrático pero sin que sus esfuerzos sean capaces de abrir con fuerza suficiente el sistema político, lo cual había entrañado el doble desbordamiento de los gobiernos por la guerrilla y la violencia militar. El fracaso general de los gobiernos militarizados vuelve a darles una influencia mayor y ofrece posibilidades a una democratización limitada.

Más limitadas son todavía las posibilidades de la democracia en *Haití,* tras la eliminación de Duvalier. En este país, el más pobre de América Latina, el cambio político está disociado no sólo de las transformaciones sociales urgentes, sino también de la renovación del aparato de poder. El gobierno provisional dirigido por el general Namphy no ha eliminado por completo el poder de los Tontons Macoutes. Las huelgas que estallaron en la primavera de 1987 fueron reprimidas violentamente y la tensión política ha hecho aparecer una corriente pro castrista entre la juventud. Pero la desorganización política es tan grande como profunda la miseria del país. La caída de Duvalier, organizada por los Estados Unidos, significa el fin de una dictadura, pero no la formación de un régimen capaz de responder a las aspiraciones populares. Ahora bien, no hay democracia que pueda ser definida solamente en términos institucionales; la democracia sólo existe cuando es representativa, es decir, cuan-

do las decisiones políticas corresponden a las demandas del mayor número. Las elecciones del otoño del 1987 debieron se aplazadas. Las de enero de 1988 suscitaron una participación muy débil.

Los obstáculos a la democratización

No todos los factores de democratización conducen necesaria y casi naturalmente a la caída de la dictadura. El advenimiento de la democracia encuentra grandes obstáculos. En primer lugar, la conciencia nacional ha sido movilizada por los regímenes militares de manera tan constante que a la oposición democrática le resulta difícil hablar del Estado, del país, de la nación, sin dar la impresión de que está utilizando los mismos valores que el Gobierno militar. Los regímenes democráticos deben rebajar incluso los gastos militares, que se han vuelto insoportables en un período de crisis económica; por lo tanto, les resulta difícil apelar a la conciencia nacional. La principal excepción es la de Argentina, donde la razón más profunda del éxito de Alfonsín es que supo apelar a la voluntad de los argentinos para librarse de un régimen que los había conducido a la derrota y a la vergüenza.

Paralelamente, las reivindicaciones sociales se han debilitado debido a la crisis económica. La fuerte disminución del porcentaje de obreros entre la población activa en Argentina y en Chile, la elevación del paro que superó, en Chile, la tercera parte de los asalariados, han impedido a los sindicatos jugar un papel central en el proceso de democratización. De igual modo, las organizaciones patronales siguen siendo débiles y no logran constituirse como uno de los interlocutores sociales que un régimen democrático necesita para gobernar.

Las condiciones de la democratización están, por tanto, menos claramente presentes que las razones que llevan a la caída de las dictaduras. Existe el riesgo de que se materialicen unas instituciones democráticas que no tengan capacidad suficiente para integrar las relaciones y los conflictos sociales, lo cual crearía, a corto o medio plazo, un espacio libre para la intervención de un poder estatal no democrático, comunitario, revolucionario o autoritario. Podemos preguntarnos si las nuevas democracias no tendrán que apelar, más de lo que desearían, a los antiguos mecanismos nacional-populares, a la exaltación del jefe carismático en particular. En Perú, Alan García llegó al poder tras una campaña muy personalizada, pero con una nítida conciencia de la necesidad de salir de los límites y de los peligros del distributivismo nacional-popular. La violencia de las presiones a que están sometidos el régimen y el país ¿no obligan a este líder popular a concentrar en su persona todas las esperanzas y por lo tanto, tal vez, todos los poderes? La emoción de Brasil en el momento de la muerte de Tancredo Neves, y la popularidad de José Sarney, en el momento del plan Cruzado, ¿no indican el carácter todavía extremadamente personalizado del poder político, y la democracia

argentina no se apoya más en la personalidad de Alfonsín que en la reconstrucción del Estado y en su capacidad para negociar sus decisiones económicas con la patronal y los sindicatos? Hay que subrayar la *debilidad del proceso interno de democratización,* al menos para recordar que si la crisis financiera y económica actual ahoga la capacidad de reactivación económica y de decisión política de los países latinoamericanos, las democracias serán atacadas. Si, por el contrario, los países industriales democráticos consideran que la crisis internacional actual no puede resolverse sin una modificación profunda de las relaciones entre los países más industrializados y los países semiindustrializados, la América Latina conocerá un entorno favorable para el fortalecimiento de sus democracias.

Apertura y reacción autoritaria

Una dictadura militar no puede transformarse en un régimen conservador o nacionalista de tipo constitucional, pero un régimen militar puede controlar y preparar su propia desaparición. La expresión puede sorprender, pero la *distensão* y la *abertura,* tan características de Brasil y también de otros países, no fueron una estrategia discutida entre, de una parte, los militares, y de otra, unos dirigentes políticos de oposición. Por la sencilla razón de que no existía sistema político que integrase a los diversos actores. En Brasil, a partir de 1972, los dirigentes pidieron consejo a S. Huntington, para salir del régimen que habían creado. Pero esa salida voluntaria depende menos de las intenciones de los dirigentes que de la capacidad que tiene el sistema político para reconstituirse. Esta reconstitución supone, por un lado, la tolerancia del régimen militar y, de otro, la capacidad de las fuerzas políticas de oposición para contener las reivindicaciones sociales, de tal modo que se pueda dar prioridad a la reconstrucción de las instituciones políticas. De suerte que la instalación de la democracia no va fácilmente acompañada del retorno al reparto de la renta nacional que existía antes de los regímenes militares. La voluntad de un régimen militar de desencadenar un proceso de retorno a las instituciones democráticas se apoya al principio en la confianza que tiene en sus posibilidades de éxito. En Brasil, la *distensão,* que condujo a la derrota del gobierno en las elecciones de 1974, se explica ante todo porque el régimen confiaba en el partido ARENA que había creado. La dictadura se equivocó, pero sólo en parte. Pensaba que podría gestionar en geneficio propio la política clientelista que había dominado el período getulista y posgetulista. En realidad, los electores votaron contra el régimen militar y el clientelismo sirvió a los nuevos dirigentes políticos. De la misma manera, Banzer se esforzó por institucionalizar su dictadura pero también terminó en un fracaso en 1977. Más extraña fue la tentativa de Galtieri en 1982, en Argentina, para constituir una fuerza electoral de apoyo a un régimen militar que se endurecía tras el período de incer-

tidumbre y de vacilación de Viola. En Perú, la salida de la dictadura militar fue lenta, a través del Gobierno de Morales Bermúdez (1975-1980), porque los militares no llegaron a organizar una fuerza política.

La existencia de una fuerte presión social y de un sistema político débil puede conducir incluso al fortalecimiento de una tendencia dura en la dictadura. En Brasil la denominación *coalição continuísta.* En Chile, donde esta tendencia es más fuerte que en cualquier otra parte, está dirigida por el propio general Pinochet, que se apoya en los grupos políticos como la UDI, que en 1986 han formado el Partido de Renovación Nacional, y sobre todo en ministros como el secretario general del Gobierno hasta 1987, F. Cuadra, que dio una expresión coherente a partir de 1985 a esa política de reacción autoritaria opuesta a toda salida hacia la democracia en 1989 y *a fortiori* antes. La situación de Chile merece un comentario final puesto que el régimen chileno es el único que se mantiene en el cono sur, donde el régimen de Paraguay está más cerca del caudillismo tradicional. La resistencia de la dictadura chilena se explica a buen seguro, en primer lugar, por la concentración de poderes en las manos del general Pinochet. La firmeza y el talento de estratega del general Pinochet explican la fuerza de un poder centralizado, apoyado por la «verticalidad» del ejército. Pero ¿cómo olvidar, más allá de la fuerza propia de la dictadura, la debilidad de la oposición, la dificultad que encuentra para integrar la acción de los movimientos populares con la de los partidos políticos? A. Varas escribe: «Los partidos de la izquierda chilena tienden a constituirse como la expresión política de un sujeto histórico trascendente», y añade que sólo la autonomía de los movimientos sociales y una definición más propiamente política de los partidos podrían crear las condiciones de caída de la dictadura. Los partidos políticos, que en ocasiones aparecen dispuestos a lanzarse a un enfrentamiento directo con el régimen, siguen participando, al mismo tiempo, en un mundo político estrecho en el que las oposiciones muy reales coexisten con vínculos personales y sociales que resisten todas las pruebas. La oposición chilena vive también en el recuerdo de la época en que existía un *establishment* político, en que los líderes de la mayoría de los partidos se encontraban en el restaurante del Hotel Crillón. Tan difícil es para los partidos transformarse como para la democracia construirse sin volver a las facilidades de los regímenes nacional-populares. La oposición vive un vaivén constante entre la *conversación de caballeros* y la movilización de masas, entre la oposición abierta a la dictadura y la esperanza de que el régimen acepte una forma de negociación, entre un extremo juridismo y la conciencia de la arbitrariedad del régimen. Estas vacilaciones o estas contradicciones no corresponden a hombres o a grupos cuyos sentimientos democráticos están por encima de toda sospecha. En Chile la oposición debe responder simultáneamente a dos órdenes de demandas: las que vienen *de abajo* del sistema y las que vienen *de fuera.* Las primeras exigen, sobre todo, el relanzamiento del consumo interior y el respeto a

los derechos políticos. De fuera procede la demanda de una redistribución de las rentas tan fuerte como la que se operó en sentido inverso por el régimen militar, así como una exigencia moral de respeto a los derechos fundamentales del hombre. La oposición se moviliza a la vez por la esperanza de una solución concreta y por las exigencias éticas y políticas del rechazo de la dictadura y de la represión. ¿Cómo no había de pensar un francés en la dificultad con que se ha reconstruido el sistema político de su país tras la guerra y la ocupación? Tampoco en Francia fueron las fuerzas populares o la conciencia nacional las que fueron capaces de eliminar la dictadura; en lo esencial, Francia fue liberada por la derrota militar del Eje y la intervención de ejércitos extranjeros. Y al día siguiente de la Liberación, la reconstrucción de las instituciones entró en conflicto, a menudo, con una voluntad de transformación social.

A partir de 1983, la esperanza de una liberación dirigida por las fuerzas políticas y sindicales del país ha sido reemplazada progresivamente por la confianza puesta en la intervención de actores extraños al sistema político, en primer lugar la Iglesia y, luego, y cada vez más, los Estados Unidos, cuya acción en Filipinas y Haití hace pensar que podían encontrar ventajas en desembarazarse de un dictador para evitar una evolución política que, en última instancia, les sería desfavorable al incrementar la influencia de las fuerzas revolucionarias y, en particular, del Partido Comunista. Pero esta disociación del cambio político y de una transformación social puede anunciar días muy difíciles para un país que no saldría de la dictadura sino al precio de mantener una política económica y social que favorezca a los más afortunados. Vivas protestas sociales podrían desencadenar una inflación difícil de contener, y a la inversa, si las fuerzas populares se mostraran incapaces de acción autónoma, Chile se encontraría extrañamente retrotraído treinta años atrás, lo cual señalaría el fracaso final de sus tentativas anteriores de democratización.

Hay que concluir de este análisis de la caída de los dictadores que el agotamiento de esos regímenes no asegura por sí mismo la victoria de la democracia. No sólo porque los ejemplos de Chile y de Bolivia muestran que la capacidad de resistencia de los regímenes autoritarios puede ser considerable, sino también porque la caída de las dictaduras no entraña por sí misma la formación de un sistema político capaz de gestionar los problemas económicos y sociales creados por la crisis económica internacional y por la acción misma de las dictaduras militares.

En cambio, el retorno a la democracia señala una transformación profunda del sistema político: el final de la confusión de las demandas sociales y de los partidos políticos que caracterizaba a los regímenes nacional-populares. No hay, en este sentido, retorno a la democracia, sino más bien creación de una de las condiciones principales de la democracia: la autonomía del sistema político. Esta separación de las fuerzas sociales y de la acción política es incluso excesiva en Chile, donde los *pobladores* de un lado, los estudiantes y los *gremios* de otro, han jugado el

papel principal en la movilización social desde 1985, mientras que los partidos políticos se reorganizaban, sobre todo a la derecha, al margen de casi cualquier base social organizada. Ha adoptado formas asimismo dramáticas en Bolivia, donde se ha roto la alianza estrecha del Gobierno y de la COB, lo cual ha desembocado en la eliminación de Lechín por los comunistas. Es sensible también en Uruguay, donde el presidente democrático J. Sanguinetti reconoce como los obstáculos principales a su acción a los sindicatos, en particular los de enseñantes. Finalmente, el sindicalismo argentino, portador de forma tan constante de las esperanzas políticas de los peronistas, ¿no aprende, frente a Alfonsín, a desarrollar una acción más propiamente sindical?

Esta separación entraña la sustitución de unos gobiernos «populistas», preocupados sobre todo por dar respuesta a las demandas de participación, por otros dominados por la búsqueda de una solución a la crisis económica y, en particular, a la deuda exterior, y por consiguiente cercanos a los empresarios cuya acción dirige el resurgimiento de la producción y el crecimiento de las exportaciones. Por todas partes, desde México a la Argentina, el desarrollo de la industria nacional aparece como una prioridad. Puede decirse que las nuevas democracias están orientadas *a la derecha,* a condición de añadir que esta orientación es menos una opción duradera que una condición de salida de la dictadura. El fracaso de la Alianza Democrática en Chile, la del Gobierno de Siles Suazo en Bolivia, lo mismo que la evolución de la política brasileña tras los desequilibrios creados por el plan Cruzado de 1985, indican la extrema dificultad de mantener una política pro popular tras la doble destrucción de los regímenes militares y de los regímenes nacional-populares y frente a una crisis económica profunda.

La historia de un breve período no puede aportar, sin embargo, una respuesta suficiente a la cuestión planteada: ¿cuáles son las posibilidades que tiene la democracia en América Latina? Por tanto hay que tomar distancia y, considerando los rasgos generales de las sociedades y de los regímenes políticos en América Latina, tal como hasta aquí los hemos estudiado, buscar en ellos las razones profundas de la debilidad y, tal vez también, de la fuerza de las nuevas democracias.

2. Las posibilidades de la democracia en América Latina

¿Cómo entrar aquí en una reflexión general sobre la naturaleza de la democracia? Pero ¿cómo evitar, por el contrario, todo debate y dejar en la confusión o la oscuridad el tipo de régimen político sobre cuyas posibilidades nos preguntamos? Digamos al menos que si la democracia no es definida más que por el triunfo de los intereses de la mayoría o del pueblo, todos los excesos de lenguaje y de pensamiento están permitidos, porque ¿cómo definir los intereses del pueblo y cómo determinar-

los: a través de unas elecciones libres o gracias a unos indicadores socioeconómicos? Hay que salir, por tanto, de la confusión: la democracia no es un tipo de sociedad; es sólo un régimen político. Es la elección libre por los gobernados de unos gobernantes que los primeros reconocen como sus representantes legítimos. Semejante definición permite luchar contra la oposición arbitraria de una democracia formal o burguesa y de una democracia real, social o popular, pero también contra las limitaciones excesivas de una definición puramente institucional de la democracia. Es fácil de comprender que tras un largo período en que el análisis político estuvo enteramente subordinado al análisis social, y en que la democracia fue identificada con el reinado del pueblo, analistas como Adam Przeworski (en N. Lechner, cf. Bibl., I, 1) hayan defendido una definición propiamente institucional de la democracia. Acercándose a ideas expresadas por Claude Lefort, este politicólogo afirma que la democracia no es el poder del pueblo, la transferencia de la soberanía al pueblo, lo cual no sería más que un cambio de príncipe, sino la destrucción de todo príncipe, de todo principio de unidad, y defiende, por tanto, una visión pragmática del poder político como sistema de negociaciones y de equilibrios parciales e inestables entre intereses diferentes u opuestos. Concepción que se organiza en torno al respeto de la mayoría con la que nadie, ningún individuo, ninguna categoría social puede identificarse. Esta concepción tiene la gran ventaja de situar la noción de democracia en su propio terreno, pero le impone unos límites excesivos. La noción misma de la mayoría impone la existencia de un vínculo entre democracia política y democracia social: las instituciones democráticas no tienen fuerza movilizadora y no son percibidas como legítimas salvo en el caso en que las fuerzas políticas aparezcan como representativas, es decir, *transformen unas demandas sociales en decisiones políticas.*

Estas simples observaciones indican la presencia de cuatro condiciones al menos para que exista la democracia:

— La existencia de un *espacio político* específico. No puede existir democracia si no se reconoce la existencia de un sistema político y de ciudadanos, si éstos no son considerados más que como formas particulares de las relaciones y de los actores sociales, o también si los individuos no son identificados más que por su actividad profesional, su edad, su sexo, su grupo étnico, etc.

— La *separación de la sociedad política,* espacio de pluralismo y de diversidad de los intereses *y del Estado* que, por definición, es uno. Cuando los problemas internacionales, los de la paz y de la guerra, aventajan en la vida política a los que movilizan los intereses y las ideas, la democracia está debilitada porque lo propio de la guerra es oponer una nación considerada en su unidad a un enemigo exterior al que hay que expulsar y vencer, mientras que el debate social y político debe ser interior a la sociedad nacional.

— La presencia consciente de un *principio de igualdad* entre los indi-

viduos, que permite conceder a todos los mismos derechos, a pesar de las diferencias evidentes de capacidades y de recursos que separan a unos individuos de otros.

— La existencia de *grupos de intereses reconocidos* y organizados de manera autónoma, es decir, al margen de la intervención de los partidos políticos, de manera que las instituciones representativas correspondan a unos intereses *representables*. La democracia es lo contrario a una sociedad de masas.

La formación del espacio público

La teoría de la modernización ha querido demostrar el paralelismo entre la movilización social y la democratización política. Las democracias son los países más modernos, los más desarrollados, en los que la proporción más elevada de individuos y de grupos participa en la vida pública, mientras que las sociedades tradicionales están segmentadas y la mayor parte de sus miembros viven en la sumisión a sistemas de jerarquización y de reproducción sociales y culturales y de mantenimiento de una especificidad cultural. En las sociedades modernas, por el contrario, los individuos son definidos por su acción, por su trabajo, y no por sus características de origen. La solidaridad orgánica permite la formación de un sistema político autónomo que puede ser definido como el modo de gestión del cambio. En ese nivel muy elevado de generalidad, esta tesis, brillantemente ilustrada por S. M. Lipset, es un elemento importante del análisis de la democracia. La dependencia política personal, simbolizada por las relaciones sociales que se establecieron en las *encomiendas,* por las que el rey encargaba a un responsable español del control religioso y político, más aún que económico, de una población india, fue un obstáculo a la democracia. Más ampliamente, el patrimonialismo es antidemocrático porque no reconoce los procesos políticos. La miseria, de un lado, el mantenimiento de grupos dominantes que son más «estados» que clases, más oligarcas que capitalistas, de otro, explican en efecto la debilidad de la democracia en muchos países en los que parece identificada con las clases medias, muy minoritarias en relación a las categorías urbanas y rurales más pobres.

Pero estos análisis son tan generales que pueden entrar en contradicción con la realidad histórica. La subida del nazismo dejó desamparados a quienes consideraban que la modernidad de Alemania la protegía de los demonios autoritarios. En América Latina, G. Germani (cf. Bibl., I, 1), pionero de la sociología moderna, llegado a Argentina huido de su Italia natal sometida al fascismo, construyó su reflexión en torno a la paradoja de la caída de la democracia ante Perón, en un país arrastrado por un movimiento excepcional de modernidad y de lo que el mismo Germani y K. Deutsch han llamado «movilización». ¿No es la modernización, los progresos de la educación y de la urbanización en particular,

los que, elevando el nivel de expectativa provocaron un desbordamiento del sistema político que seguía vinculado a la defensa de categorías limitadas o que no disponían de recursos económicos suficientes para responder a esas crecientes expectativas?

Una movilización social rápida puede entrar en conflicto con un sistema político que sigue limitado. El mayor obstáculo a la democracia no fue el patrimonialismo tradicional de los *hacendados,* sino el personalismo de la vida política que se apoyaba en la referencia a una esencia, nacional, regional o incluso étnica. El personalismo, en efecto, está ligado a la movilidad y a la masificación. R. da Matta (cf. Bibl., II, 1) ha analizado en un texto famoso la expresión popular brasileña: *O senhor sabe con quem fala?* (¿Sabe usted con quién está hablando?), que indica la resistencia del individuo a la masificación y sus esfuerzos por salvar su identidad apoyándola en una referencia cada vez más vaga a su particularidad individual. Contra la masificación, ese personalismo se apoya en un equivalente a su vez masificado del honor aristocrático. Los dirigentes ya no atraen entonces por ser representativos, y menos todavía por tener competencias profesionales, sino en nombre de su atracción personal, porque juegan el papel de intermediarios entre «las gentes» y el mundo lejano, misterioso, hostil, del poder. Se ha hablado aquí de líderes *carismáticos,* pero esa expresión es poco adecuada. El carisma es la identificación de un líder o de un personaje con unos valores comunitarios, en particular religiosos. Por el contrario, el líder personalista es un intermediario entre unos individuos definidos en términos no sociales y políticos y el mundo de los privilegios y del poder. La fuerza de ese líder populista se apoya en la conciencia, compartida por la mayoría, de un conflicto infrapolítico que no opone grupos sociales o fuerzas políticas entre sí, sino el sistema al pueblo, definido a su vez como un conjunto de individuos.

La democracia está asimismo amenazada por la conciencia de que los intereses que hay que defender no son los de un grupo definido por unas relaciones sociales, sino los de una colectividad o de una *comunidad,* definida por unos valores o unas formas de organización y amenazada por enemigos que siempre proceden del exterior. Es esa imagen de la vida social la que impulsa a ver los acontecimientos políticos como catástrofes desencadenadas por el espíritu de conquista o de beneficio y a las que hay que resistir reconstruyendo la comunidad y su integración social y cultural. Los *populistas,* desde el populismo ruso del siglo XIX hasta los regímenes nacional-populares del siglo XX latinoamericano, no fueron demócratas defensores del pueblo; apelaron a *un* pueblo particular y su lucha contra enemigos exteriores. La política nacional-popular en América Latina no fue, en conjunto, de un nacionalismo agresivo, porque los pueblos se sentían atraídos por aquellos que al mismo tiempo suscitaban su odio: el imperialismo extranjero, el capitalismo urbano, los políticos; pero también tuvo orientaciones antidemocráticas. Estos regímenes na-

cional-populares fueron con frecuencia semejantes al bonapartismo y al boulangismo francés, que apelaban a un tiempo al pueblo contra minorías poderosas y a una ampliación de la vida política por encima de partidos identificados con una clase política restringida.

Más recientemente, la crítica de los temas desarrollistas ha sido asociada a menudo, en nombre de la defensa de la identidad y de la comunidad contra un universalismo de la razón que no sería más que el instrumento de una dominación colonial, con una orientación antidemocrática, porque la defensa comunitaria, la búsqueda de la homogeneidad cultural, la defensa contra unas instituciones y unos poderes que se suponen corrompidos por el extranjero contribuyen a destruir la autonomía del sistema político. La protesta comunitaria puede ser democratizante cuando se opone a la destrucción autoritaria de las instituciones, pero también lleva en sí misma una profunda desconfianza respecto al juego político y una definición del individuo como miembro de un grupo local, nacional y étnico, que resiste más a la intervención del sistema político central de lo que en él participa. En los países con fuerte población india, el indigenismo, que fue a veces un instrumento de democratización, fue también la afirmación de una especificidad cultural y una búsqueda de homogeneidad que hacía pasar a segundo plano la búsqueda de instituciones representativas. Fue presentado, a veces, incluso como la defensa, comunitaria y revolucionaria, de grupos dominados, contra una democracia identificada con los grupos dominantes y con su acción de desculturación.

La democracia no es, por tanto, el equivalente político del mercado; para que los diferentes grupos sociales la acepten, no basta con que encuentren en ella ventajas, ni que una oferta política suficiente responda a sus demandas sociales; es preciso que exista una conciencia propiamente política de ciudadanía, de pertenencia a una colectividad política.

No es exacto identificar la idea de democracia con las clases medias, con los grupos intermediarios que no pueden identificarse ni con el espíritu capitalista ni con la defensa comunitaria. Pero es cierto que son esas clases medias las que se han convertido en agentes y beneficiarios principales de los regímenes nacional-populares y que han afirmado con más fuerza la vinculación de la conciencia nacional y de la democratización. Esta conciencia de ciudadanía sólo se debilita cuando no puede ya defender más que los intereses de las clases medias y cuando ya no tiene capacidad para integrar intereses y demandas sociales opuestas. Por eso la apelación a la modernización ha sido entendida a menudo como una amenaza contra la democracia, porque daba prioridad al desarrollo económico sobre la justicia social y justificaba una extremada concentración de las rentas en manos de una elite restringida.

Contra esta imagen, el nacionalismo democrático ha defendido menos ciertas categorías sociales contra otras que la necesidad de dar al Estado, es decir, a los elegidos, la capacidad de resistir a las fuerzas centrí-

fugas y, en particular, a los efectos de la dependencia económica o política. En *Chile,* por ejemplo, donde el régimen militar ha desintegrado el país aumentando las distancias sociales, la oposición sólo ha podido desarrollarse dando la prioridad a la idea de reconstrucción de la ciudadanía y de la institucionalidad. En efecto, tras un largo período de régimen autoritario y en plena crisis económica, el objetivo social de la democratización es incierto; por tanto es el tema de la *institucionalidad* el que tiene la mayor importancia; la renovación de la conciencia nacional no es más que un aspecto particular. En *Chile,* cada uno es consciente de que la crisis económica y el régimen político han entrañado una profunda desorganización social que amenaza con crear, en el momento de la democratización, unas demandas sociales imposibles de satisfacer. Por tanto, ante todo, es el retorno a la ley lo que puede permitir negociaciones entre intereses económicos y sociales profundamente debilitados y amenazados todos ellos. La idea democrática ya no aparece entonces como un principio relativamente abstracto, sino, por el contrario, como el único medio de transformar una sociedad que se apoya en unas formas de organización antidemocráticas. M. Cavarozzi escribe a propósito de la *Argentina:* «La sociedad argentina estaba profundamente penetrada de valores y hábitos antidemocráticos: el culto a la violencia destruía los modelos de acuerdo implícitos que se habían formado entre 1955 y 1966 y se veía desaparecer la tolerancia para las conductas y las ideas disidentes o para el pensamiento crítico, al mismo tiempo que el desprecio por el consenso.» La descomposición del modelo nacional-popular ha llevado a una crisis de ingobernabilidad y al triunfo de regímenes autoritarios. A su vez, el fracaso de esos regímenes, al mismo tiempo que el fin de la confianza puesta en los factores externos de desarrollo, da una importancia central a la noción de ciudadanía, a la idea de que las luchas entre los grupos de intereses deben estar limitadas por la preocupación del interés nacional y, más concretamente, por el respeto de leyes que permiten a los individuos y a los grupos expresarse libremente y defender sus intereses.

La separación del Estado y del sistema político

Pero si la democracia descansa en la ciudadanía, supone en sentido inverso la autonomía del sistema político de representación de los grupos sociales en relación al Estado, principio de unidad. Resulta difícil, a veces, reconocer esa separación. Los gobiernos, sobre todo democráticos, se presentan como la expresión de la voluntad general, definiendo al Estado como la otra cara de la nación. Es sobre todo verdadero en Francia, donde se habla de mejor gana de república que de democracia, en una tradición que procede de Rousseau y de la Revolución francesa. El Estado aparece como que debe ser la expresión de la voluntad general, lo cual puede conducir fácilmente a una república más autoritaria

que democrática. Esta confusión del sistema político y del Estado se explica en países que están identificados con la modernidad y con sus grandes principios, la libertad en particular, y que han concebido su desarrollo como enteramente endógeno, fruto del triunfo de la razón sobre las tradiciones y los privilegios. Sin embargo, la experiencia histórica de Francia está muy lejos de esa ideología republicana. El país de Napoleón y de De Gaulle, al mismo tiempo que de varias revoluciones, sabe, en su práctica y en sus sentimientos constantes, que el Estado es un principio central de unidad y de continuidad de la nación, a la vez frente a sus asociados o enemigos exteriores y tanto frente a su pasado lejano como a su futuro distante. Un político puede ser a un tiempo representante del pueblo y hombre de Estado, y esas dos funciones nunca se confunden una con otra. La política es el lugar de la pluralidad, de la representación de intereses que son siempre, en cierto modo, sectoriales, mientras que el Estado es *el* soberano único, en el interior de fronteras políticas. En América Latina más todavía que en los países europeos, la separación del Estado y del sistema político fue difícil de concebir y de realizar. Lo vengo diciendo desde el inicio de este libro: en América Latina, actores sociales, fuerzas políticas y Estado se han confundido constantemente. El Estado parece ser otro nombre del sistema político o también el defensor de intereses sociales, sean éstos los de la oligarquía o los del pueblo. En realidad, existen grandes diferencias entre los países en cuanto a su concepción del Estado. Brasil ha recibido de Portugal la tradición de un Estado intervencionista, mercantilista, que sustituye a una burguesía débil, y ha reforzado esa tradición a través de la necesidad de defender y de reforzar la unidad nacional de un país inmenso y diversificado. De manera completamente distinta, Chile tiene una fuerte concepción del Estado, basada en el recuerdo y los resultados de la guerra del Pacífico. Pero dejando a un lado estos dos casos, la idea de Estado aparece por regla general débil, salvo en el Uruguay de principios del siglo XX, y en Paraguay, cuya existencia nacional fue puesta en cuestión por lo menos en dos ocasiones. En los demás países, ya se trate de México, de Venezuela o de Perú, el Estado está fuertemente identificado con las fuerzas políticas y los actores sociales. Colombia, y más todavía Argentina, son países donde la idea misma de Estado parece ausente; el Estado no aparece en ellos diferenciado de las fuerzas sociales y políticas, porque la oligarquía ha ejercido una larga hegemonía. Si el sistema político conquista de forma tan difícil y tan parcial su autonomía en América Latina, si el Estado predomina en los regímenes nacional-populares sobre los actores sociales, es porque los problemas de desarrollo casi siempre han predominado en importancia y en urgencia sobre los problemas de funcionamiento de un tipo de sociedad. Ahora bien, quien dice desarrollo dice Estado, porque el desarrollo es el paso de un tipo societal a otro, cuando los actores sociales y políticos gestionan los problemas de un tipo de sociedad. En la mayor parte del mundo, el siglo XX

es el siglo del desarrollo, y por tanto de la intervención a la vez desarrollista y autoritaria de los Estados, mientras que el siglo XIX estuvo dominado por el modelo capitalista del desarrollo endógeno, que identificaba los problemas de desarrollo con los problemas de funcionamiento de una sociedad definida como moderna o como industrial. Oposición que explica que el siglo XIX haya sido, al menos en los países capitalistas centrales, el siglo del triunfo de las democracias, mientras que el siglo XX es, sobre todo en los países que fueron dominados directa o indirectamente por los grandes países capitalistas, el siglo de los Estados modernizadores de tipo comunista o nacionalista, y asimismo de los Estados comunitarios o antimodernizadores. Los países latinoamericanos han conocido a veces Estados autoritarios modernizadores, en el Brasil de Getúlio Vargas o, de manera más limitada, en el México posrevolucionario; pero han conocido sobre todo una amalgama de sistemas políticos progresivamente ampliados y de Estados nacionales que tendían a reforzarse. No obstante, a medida que muchos países avanzaban en la vía de la industrialización, tras un largo período de sustitución de las importaciones, los problemas estructurales han adquirido una importancia creciente y la vida política se ha vuelto por tanto más autónoma en relación a la movilización nacional y económica dirigida por el Estado.

El signo más claro de esta creciente autonomía del sistema político es la transformación de los *partidos*. Durante un largo período fueron una mezcla de movimientos sociales y de cuasi-Estados. El PRI mexicano, la *Acción Democrática* venezolana, el APRA peruano o el Partido Liberal colombiano de López y de Gaitán, o incluso la Democracia Cristiana chilena y a buen seguro el Partido Justicialista argentino, fueron a la vez la expresión del pueblo y un instrumento de conquista y de gestión del Estado. Este tipo de partido se opone directamente a las máquinas electorales de tipo norteamericano. Pero esos partidos-movimientos-Estados son reemplazados progresivamente por partidos o frentes políticos, que son a la vez más independientes del Estado y de los actores sociales. F. H. Cardoso ha hablado de partido *ómnibus* para caracterizar al PMDB brasileño, pero también otros partidos como la Alianza Democrática Chilena o el «alfonsinismo» argentino. La victoria de Alan García no constituye una excepción a esta evolución, porque no es el APRA el que ha conquistado la presidencia de la República, sino el propio Alan García, que apenas si se ha sometido, como jefe del Estado, a la influencia de su partido. En México, por el contrario, la crisis económica ha retrasado la gran transformación del sistema político preparada por Echeverría y López Portillo, la separación creciente del Estado y del PRI, operación difícil que suponía la formación de grandes partidos de oposición, más visible a la derecha con el avance del PAN que a la izquierda, donde el PSUM no ha conseguido todavía sino resultados muy limitados, que no es seguro que mejore el reciente agrupamiento de partidos de izquierda.

La autonomía del sistema político ha sido reforzada también por el papel creciente de ciertas instituciones jurídicas, cortes supremas y tribunales constitucionales que han jugado en ocasiones un gran papel en el proceso de retorno a la institucionalidad. En Chile en particular, donde todavía en 1987 se mantiene una dictadura y donde la apelación a la autonomía del sistema político es reivindicada como el mejor medio para salir de una dictadura donde los oponentes están demasiado profundamente divididos para que uno u otro de ellos pueda derribar a su adversario común.

Un principio de igualdad

Las instituciones representativas no tienen fuerza si no se apoyan en un principio ético que afirme la igualdad de los individuos evidentemente separados unos de otros por grandes desigualdades económicas y culturales. Este principio de igualdad ha sido de dos tipos hasta ahora. En Inglaterra y en los Estados Unidos fue religioso: los hombres son iguales porque dependen igualmente de la gracia y de la voluntad divinas. Subevaluación de los «méritos» que, por una aparente paradoja, ha desempeñado el papel de un factor favorable a la formación de una política democrática y de una actividad económica modernizadora. En Francia, por el contrario, el tema ético dominante fue la idea rousseauniana del contrato social, de la voluntad sobre la que descansa la formación de las instituciones políticas. En América Latina, el espíritu republicano se ha desarrollado a partir de una visión racionalista y liberal de tipo europeo y norteamericano: a cada uno según sus méritos, lo cual permite combinar la igualdad política con la desigualdad social y económica. Pero el desarrollo de los conflictos de intereses propios de las sociedades capitalistas han quitado mucho de su eficacia a la referencia a los derechos naturales y a la igualdad de oportunidades. Frente a los regímenes autoritarios, es el principio religioso de igualdad el que se ha revelado más eficaz. La defensa de los derechos del hombre, proclamada por muchos, pero organizada la mayoría de las veces y más activamente por personalidades o instituciones religiosas, ha hecho de la Iglesia católica un agente central de la democratización, papel para el que su pasado no la preparaba particularmente. Este papel no es ni el único ni tal vez el más importante que juega la Iglesia; en ciertos países, sigue enmarcando la religión popular y, en otros, acompaña al proceso de secularización; pero frente a las dictaduras la Iglesia se ha comprometido cada vez con mayor nitidez. Ha constituido, incluso, en los regímenes antipopulares un verdadero contrasistema político en el que el cura reemplazaba al diputado y el obispo al senador. El hecho de que se haya apoyado en una concepción más comunitaria que liberal no impide que haya jugado un papel central en la reconstrucción del espacio político y la limitación del poder del Estado.

La autonomía de los actores sociales

Finalmente, contra una definición puramente institucional de la democracia, hay que recordar que no pueden existir instituciones representativas si no existen por encima de unos actores sociales *representables*. La democratización no puede definirse como el paso del caos a la ley o de la masa al gobierno. Supone la organización previa de demandas sociales y la autonomía de acción de asociaciones, de sindicatos o de otros grupos de interés. Supone también que se forme un debate anterior al que se forma en las instituciones políticas, debate cuyo lugar es la opinión pública. Si ésta se halla dominada por el enfrentamiento de los partidos, la democracia carece de base. Y a la inversa, si la Europa occidental y América del Norte han conocido durante tanto tiempo una democracia sólida ha sido porque el juego democrático ha opuesto ahí unas fuerzas políticas que representaban a clases sociales en conflicto y porque esas luchas sociales pudieron expresarse ante una opinión pública más amplia que los partidos políticos, y cuyos principales vectores fueron la prensa y las asociaciones. Cuando la vida política de los países industriales se ha alejado de esa función de representación, encerrándose en un juego político limitado o dejándose dominar por debates ideológicos, la democracia se ha debilitado, retrocediendo a la vez ante movimientos populares y ante fuerzas oligárquicas o antidemocráticas.

La principal debilidad de la democracia en América Latina es la ausencia de actores sociales que posean una autonomía de acción suficiente. Lo hemos visto en la tercera parte de este libro, en particular en el análisis del sindicalismo obrero. Los partidos políticos no pueden ser representativos si los actores sociales no se organizan más que bajo su control, como en Venezuela o en Colombia, o bajo el control del Estado, como en Brasil o en México. Esta dependencia de los actores sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos, se explica, como ya sabemos, por la dominación del modelo nacional-popular en el que los movimientos sociales son más respuestas a intervenciones del Estado que fuerzas autónomas. Tras medio siglo de industrialización y cinco años de crisis económica profunda, la autonomía de los actores sociales ¿está en aumento o disminuye? La situación de crisis produce, tanto en América Latina como en todas partes, una subordinación creciente de la acción social a las intervenciones del Estado y de las fuerzas políticas. De forma paralela, el proceso de caída de la dictadura o de apertura política ha dado una prioridad absoluta a los partidos, a unas instituciones y a unas personalidades identificadas con la lucha por la legalidad y los derechos del hombre, a unas personalidades religiosas o intelectuales en particular. De suerte que a finales de los años ochenta, los actores políticos dominan tanto que la democracia, en el momento en que se encuentra restablecida en numerosos países, se halla debilitada. El proceso democrático se desarrolla a menudo sin referencia a los problemas sociales más

urgentes. El resultado es que las esperanzas puestas en los nuevos gobiernos democráticos pueden sentirse pronto frustradas, lo cual vuelve a dar fuerza a campañas de tipo populista y a una política de masas peligrosa para la democracia. El caso de São Paulo muestra claramente ese peligro. Tras una elección triunfal, el Gobierno PMDB del Estado decepcionó a sus partidarios en una situación de grandes dificultades económicas, lo cual explica, en parte, el éxito de Jânio Quadros en la elección municipal del 15 de noviembre de 1985 y la derrota del candidato PMDB, amenazado del otro lado por el progreso del PT. Brasil conoce dos tendencias opuestas, la que favorece a partidos como el PDT de Leonel Brizola o el PT en São Paulo, y la que ha motivado en 1986 la victoria aplastante del PMDB, que ha conquistado casi todos los escaños de gobernadores. La vinculación entre la reconstrucción de la democracia y la defensa de las reivindicaciones sociales se realiza tan mal en Brasil como en los Estados Unidos, mucho peor, en cualquier caso, que en los países europeos de tradición socialdemócrata. ¡Qué estrecho es el camino entre la necesaria separación de lo social y de lo político y la superación del populismo, a un lado, y el mantenimiento o el fortalecimiento del carácter representativo de los partidos democráticos de otro! La separación de los que dan prioridad a la reconstrucción de las instituciones y de los que quieren expresar las demandas y las frustraciones populares explica en gran parte la debilidad de la oposición chilena frente al general Pinochet. En Argentina, por el contrario, la crisis del peronismo y la ausencia de un grupo fuerte de jefes de empresa han dado al proceso de democratización una importancia central. Pero lo que ha hecho la fuerza del presidente argentino constituye también la debilidad de su acción democrática. El sistema institucional argentino, a pesar del éxito de los peronistas renovadores, no ha llegado a integrar unas demandas sociales que por tanto tienden a expresarse al margen del sistema institucional.

Estas observaciones deben preservarnos de la ilusión de que América Latina se encamina necesaria y casi naturalmente hacia un régimen político de tipo europeo, o, mejor todavía, semejante al de los Estados Unidos. Nada autoriza a decir, ni siquiera las esperanzas puestas en las nuevas democracias, que los países de América Latina conozcan o vayan a conocer en breve plazo el desarrollo simultáneo e independiente de movimientos sociales independientes, de reglas institucionales respetadas y de Estados capaces de hacer frente a los graves problemas que amenazan la supervivencia y el desarrollo de la nación. De la misma forma que el sindicalismo obrero sigue ligado a la acción política, a la vez que conquista una autonomía mayor, las fuerzas políticas y el Estado siguen vinculadas en conjunto y con los actores sociales, pero de manera menos completa que en el régimen nacional-popular. Porque la crisis de los años ochenta muestra el agotamiento tanto de la política nacional-popular como de los regímenes militares y antipopulares. Lo cual quiere decir que el sistema político se define menos que antes en términos de partici-

pación o de exclusión, y que los actores sociales se constituyen menos para responder a las intervenciones del poder estatal. De manera limitada pero notable, una política de participación cede el puesto a una política de *representación.* Lo cual implica la separación de elementos fundidos juntos en la unidad compleja del sistema nacional-popular, y, por tanto, la formación de un Estado más estatal, de actores más sociales y de un sistema político más representativo. Es cierto que, frente a la crisis de pagos, la mayoría de los países dan una prioridad absoluta a sus negociaciones con el FMI, la Banca mundial y el Club de París, que las empresas parecen paralizadas por su endeudamiento y los sindicatos debilitados por las políticas de austeridad. Pero esa subordinación de la política económica y social a la política financiera y monetaria no puede ser duradera; constituye una de las consecuencias más peligrosas del endeudamiento masivo. Los países latinoamericanos necesitan ir más allá de una política defensiva, elaborar y aplicar unas políticas de resurgimiento, transformar su producción, crear nuevos mercados, modificar el reparto de las rentas. Y esto no es posible si los actores sociales no adquieren una capacidad mayor de acción autónoma, si el espíritu de empresa no se desarrolla, si las relaciones colectivas de trabajo no se organizan y si el estado de las fuerzas sociales no se traduce sobre la escena política. El Estado no puede organizar el desarrollo económico si permanece dominado por unas lógicas burocrática y clientelista.

América Latina siempre ha conocido, al mismo tiempo que un exceso de expresión social y política, un déficit de actores sociales. La llamada al *pueblo* (o al *povo)* ha definido, para muchos políticos un tipo de participación política que no está muy lejos de la política de masas, es decir, de la ausencia de formación de actores sociales. Aunque no se pase del pueblo o de la oligarquía a una clase capitalista o a una clase obrera, según un esquema que ha correspondido más a Europa que a la América Latina, los actores sociales conquistan progresivamente una mayor capacidad de intervención en muchos países y, en cualquier caso, puede afirmarse que, si esa capacidad no aumenta, las posibilidades que tiene un país para salir de la crisis son escasas. Esa crisis es más todavía la descomposición de un sistema político de participación y de exclusión que una crisis propiamente económica. La reconstrucción, no del sistema político anterior, sino de otros sistemas sociopolíticos, es una condición indispensable para la salida de la crisis económica. R. Mayorga ha identificado bien las raíces de la crisis *boliviana:* «La sociedad boliviana ha sido hasta aquí una sociedad cesariana en potencia, fragmentada en una pluralidad de centros de poder, sin posibilidad de articulación democrática, una sociedad dominada por un sistema político pobre e incapaz de establecer mediaciones institucionales entre las demandas sociales y un Estado suspendido en una vida hegemónica.» Los actores sociales tienen una «visión del poder como ocupación y control de espacios sociales y geográficos». Esta indiferenciación de los dominios del Esta-

do, del sistema político y de los actores sociales ha podido mantenerse mientras el Estado ha permanecido asociado, ante todo, a las clases medias urbanas. Pero conduce a la confusión y al caos cuando la movilización se extiende, cuando se diversifican los grupos de interés y las reivindicaciones. Esta descomposición del espacio público no corresponde a un país como Bolivia, golpeado por una crisis económica aguda. Su amenaza es sensible en todos los países, incluso en México, en Brasil y en Argentina. No todos los países pueden superarla de la misma manera, pero en todas partes aumenta la diferenciación del Estado, del sistema político y de los actores sociales, y, como la negociación de la deuda externa obliga al Estado a concentrarse en sus tareas propias, el problema prioritario es la autonomización creciente de los actores sociales y en particular una mayor actividad de la opinión pública, en la que los intelectuales y los profesionales de los *mass media* juegan un papel determinante.

La mayor parte de los observadores sensibles a la gravedad de la crisis económica emiten juicios dramáticos sobre la situación de América Latina. Los sociólogos deberían oponer a ese pesimismo cierto optimismo y, sobre todo, la afirmación de que la solución de la crisis es de orden menos económico que sociopolítico. Brasil, en particular, superará sus dificultades en la medida en que refuerce el triángulo modernizador formado por un Estado desarrollista, un capitalismo más industrial que financiero y unos sindicatos más orientados hacia la empresa que hacia el Estado. El Estado *mexicano* mismo es consciente de la necesidad de liberarse del papel totalizador que se le ha dado, incluso aunque le resulte muy difícil limitar y concentrar su propia acción, porque domina en alto grado y directamente a los actores sociales. Argentina y Perú se hallan en situaciones más difíciles todavía: en esos países sólo el Estado podría llegar a reconstituir unos actores sociales descompuestos. Lo mismo ocurre con *Venezuela,* donde las dificultades no son tan grandes, pero donde la vinculación fortísima de *Acción Democrática* y de la *Confederación de los Trabajadores Venezolanos* se opone a la autonomización de los diferentes componentes del sistema sociopolítico.

El futuro de la democracia

Sería fácil definir las condiciones de una política democrática si los cuatro elementos constitutivos de la democracia que acabamos de analizar actuaran de forma paralela e interdependiente. La realidad es muy distinta: la construcción de un espacio polídico entra en conflicto con la separación de la sociedad civil y del Estado. De igual manera, la subordinación de las fuerzas políticas a unos actores sociales se opone a la autonomía de las instituciones políticas e igualmente a la integración política, puesto que los intereses sociales siempre son particularistas. Lo cual demuestra los límites de una definición puramente interna de la demo-

cracia. En realidad, la fuerza de un régimen democrático consiste en combinar la pluralidad y la especificidad de los intereses sociales con la unidad de integración del Estado. Un país dominado por la multiplicidad de grupos de intereses no puede funcionar democráticamente, salvo en la situación extrema en que todos los intereses se definan por conflictos negociables, cosa que no ocurre siquiera en los países más industrializados y mejor integrados culturalmente. En América Latina, los límites de la institucionalización de los conflictos son estrechos: la clase dominante se interesa tanto por lo menos en la reproducción de sus privilegios como en su papel de empresario y los movimientos populares son en gran parte defensivos y comunitarios, de suerte que un enfrentamiento directo entre estos dos grupos sociales conduciría a la ruptura del sistema democrático. De manera inversa, el Estado se ha vuelto con frecuencia contra la democracia, cuando le parecía indispensable defender la seguridad nacional o rechazar las presiones populares. La democracia no puede vivir más que demostrando su capacidad de combinar los intereses del Estado con los de los grupos sociales. Las posibilidades actuales de la democracia han aumentado porque el Estado autoritario, tras haber aplastado las organizaciones populares o las guerrillas, se ha sentido impotente frente a la crisis económica, y porque esa misma crisis debilita la capacidad de presión de los grupos políticos más radicales. A buen seguro semejante situación puede conducir a la marginación política de ciertas categorías sociales, pero casi ningún grupo tiene capacidad para derrocar al poder político. A pesar de su potenciación, las guerrillas colombianas vacilan entre la negociación y el enfrentamiento; en Chile, el Partido Comunista conserva, desde 1980, un pie en el sistema, al mismo tiempo que apoya acciones violentas. De la misma manera, el PT brasileño y la *Izquierda Unida* peruana se apoyan en grupos comunitarios, pero participan a la vez en el sistema institucional. En resumidas cuentas, la situación de crisis es más favorable que desfavorable para la democracia, porque ni el Estado ni los actores sociales pueden imponer su lógica propia. Lo que deja al sistema político mismo un papel central de intermediario. Sobre todo, la necesidad de encontrar soluciones de resurgimiento económico impone una negociación entre las empresas, los sindicatos y el Estado. Los países latinoamericanos no pueden ni seguir una política impuesta por el peso de la deuda pública, ni responder de forma rápida a la pobreza que se ha extendido. Esta doble imposibilidad vuelve indispensable la negociación entre unos intereses específicos en el seno de los límites impuestos por las coacciones exteriores. Son estos *pactos* o compromisos sociales indispensables para negociar con el sistema financiero internacional los que deben convertirse en la base de reconstrucción de la democracia. La mejor posibilidad que ésta tiene consiste en que, en la actualidad, ni las estrategias monetarias ni los programas populistas permiten dominar la crisis.

Pero no olvidemos que América Latina no tiene tradición democráti-

ca, debido precisamente a su dependencia, que hace depender el desarrollo de factores externos antes que de los esfuerzos y de las relaciones de los actores sociales y que, a cambio, privilegia el espíritu de consumo —al menos para los «ciudadanos»— más que el espíritu de producción. Incluso en Chile, que conoció un régimen democrático sin fisuras entre 1932 y 1973 —no fue ese el caso de Francia—, la democracia ha tenido unas bases más frágiles de lo que se ha creído durante ese privilegiado período.

Si es cierto que la crisis económica ha puesto a todos los países ante sus responsabilidades y, por tanto, ha ejercido efectos favorables sobre la democratización, al prolongarse puede imponer un nuevo modo de desarrollo *hacia fuera,* hacia el exterior, a los países cuyo mercado interior es demasiado limitado o se halla demasiado deteriorado para servir de base a un relanzamiento de la economía. Situación que es la de Chile, donde el mantenimiento de la dictadura no se explica sólo por la habilidad y la resolución del general Pinochet o por las divisiones de la oposición, sino también por los éxitos de la política dirigida por H. Buchi; a la oposición le resulta difícil oponerle una política de estímulo de la demanda interior. El éxito del modelo chileno ¿no procede de que privilegia las exportaciones, de acuerdo con las recomendaciones del FMI, y mantiene por tanto los salarios reales a un nivel bajo, política antipopular que recuerda más a un gobierno autoritario y represivo que a un régimen democrático? Razones análogas explican el éxito electoral de Febres Cordero en Ecuador e incluso de Paz Estenssoro en Bolivia.

De manera más general, América Latina es todavía un continente «en desarrollo». Ahora bien, el enemigo principal de la democracia es la prioridad dada al desarrollo voluntario, dirigido por el Estado, bien en alianza con los intereses económicos extranjeros, bien contra ellos. La ingenuidad de la teoría de la modernización consiste en creer que un país entra en la democracia al mismo tiempo que en la modernidad. En realidad, ese paralelismo no existe más que en los casos límites en que la modernización es completamente endógena, como ocurrió en Gran Bretaña o, de forma más limitada, en los Estados Unidos. En todas partes, además, *la voluntad de desarrollo movilizado por el Estado conduce a unos regímenes autoritarios,* del bismarckismo al régimen soviético, del régimen posrevolucionario mexicano al de la Argelia independiente.

Mi optimismo procede de que América Latina, a pesar de la crisis actual, ha adquirido desde hace medio siglo una capacidad de desarrollo endógeno que va mucho más allá de la sustitución de las importaciones de los años 1930-1950. Lo cual explica los recientes éxitos de la democracia en el continente. Pero sería falso, tanto aquí como en el estudio de los movimientos sociales, creer que América Latina pasa de la dominación del Estado al triunfo de la sociedad civil y de un desarrollo en gran parte exógeno a un crecimiento endógeno. El peso de la deuda exterior y la necesidad de créditos de inversión extranjeros recuerdan a todos

que América Latina sigue siendo un continente dependiente. Por tanto, nuestro optimismo debe ser limitado, realista. Pero, frente a los sombríos pronósticos formulados desde todas partes, ¿cómo no reconocer que la democracia reconquista terreno, se vuelve un tema esencial para unos intelectuales que durante mucho tiempo la han despreciado como «burguesa», y aparece como una condición esencial del resurgimiento económico? Reconozcamos que este libro nos ha conducido simultáneamente por dos direcciones distintas: de un lado, el predominio de las políticas de participación sobre las políticas de representación indica una debilidad profunda de la democracia, puesto que entraña la supremacía del Estado y su capacidad para manipular las demandas sociales; del otro, el sistema nacional-popular, como las fuerzas que se organizan tras la caída de las dictaduras antipopulares manifiestan una tendencia permanente hacia la integración social y política, la lucha contra los privilegios y la exclusión, la revuelta contra la dependencia exterior, incluso en el caso de muchos países de América central, la dominación colonial. Es como si un sentimiento democrático, presente desde la independencia, estuviera transformado en una política que conduce bien al autoritarismo, bien a una separación reforzada de los ciudadanos y de los excluidos. La cuestión demasiado vaga planteada sobre el futuro de la democracia adopta así una forma más precisa. El continente es el teatro de un enfrentamiento entre dos regímenes: de una parte, aquel que expresa el inmenso movimiento de modernización, de integración social, de acceso a la influencia política que altera el continente en el siglo XX, destruye o amenaza los enclaves vinculados al extranjero —como el poder tradicional de los *gamonales,* de los grandes propietarios del interior, que también son jefes políticos—, y crea una política y una cultura de masas; de otra, el que corresponde a un continente dependiente, de industrialización limitada y de exclusión masiva y permanente. El futuro de la democracia no depende ni de las tradiciones de un continente ni de una cultura política, expresión que he hallado demasiado confusa para emplearla en este libro, sino de la influencia relativa de cada uno de los dos aspectos complementarios y opuestos de la situación latinoamericana.

3. La crisis y las transformaciones del sistema político

Entre dos aguas

Guardémonos de dos errores opuestos. Según el primero, la crisis financiera y económica que golpea violentamente al continente a partir de 1981 tiene consecuencias sociales que deben entrañar una grave crisis política. La reducción de las importaciones, consecuencia de la inversión del flujo de capitales, que se vuelve negativo, del ascenso brutal de las tasas de interés y de la baja de las exportaciones hacia Europa, entraña

una disminución del empleo, que se traduce mediante un aumento del paro y más todavía, en otros países, por un empuje del sector «informal». En ciudades como Lima, Bogotá y tal vez incluso México, el sector «formal» de empleo no corresponde más que a una minoría de la población virtualmente activa. Por otro lado, la inflación entraña una redistribución regresiva de las rentas. En ciertos países, la crisis entraña una verdadera descomposición de la economía nacional, en Bolivia en particular, que conoce en un momento, al mismo tiempo que una hiperinflación, un desarrollo del contrabando que supera en importancia al comercio exterior legal. El tráfico de drogas en ese país, pero también en Colombia y más recientemente en Perú, crea una economía paralela que disminuye dramáticamente la capacidad, ya reducida, de inversiones productivas. La baja de los salarios, sobre todo de los salarios mínimos y de los de la construcción, el aumento del paro y los efectos de la inflación, crean pobreza, miseria, inseguridad y violencia.

Puede esperarse que la crisis económica, al disminuir de forma brutal la capacidad redistribuidora del Estado, afecte a las políticas nacional-populares, al «consumo político». Y de hecho, muchos países están directamente amenazados por esta caída de su capacidad de integración. D. Pécaut (cf. Bibl., I, 1, 1987), que había analizado bien la función de las guerrillas y de las repúblicas libres en Colombia, que no amenazaban e incluso reforzaban indirectamente la política de integración limitada de la oligarquía, se ha interrogado recientemente sobre la posibilidad de un desbordamiento de ese sistema político que ha resistido de forma tan extraordinaria desde hace treinta años, salvo algunos incidentes, a las presiones sociales y políticas. Desbordamiento es también la palabra que emplea J. Matos Mar para describir la situación del Perú y más precisamente de Lima, y ese término parece adaptado a la situación de un país amenazado en ciertas zonas de la Sierra, y más cada vez en la zona metropolitana de Lima, por una acción revolucionaria armada. Incluso en un país más integrado tradicionalmente como Chile, los observadores han notado el corte creciente de la ciudad entre los barrios ricos en rápida expansión y las *poblaciones* donde vive una tercera parte de la población, la clase media que está debilitándose y dividiéndose, entrando por un lado en la clase rica y cayendo por otro en la pobreza o la semipobreza, sobre todo en el caso de los pequeños funcionarios, entre los que los enseñantes ocupan un lugar importante. En México, la violencia urbana, tanto como la respueta insuficiente del Estado a los problemas creados por el terremoto que afectó a la capital, revelan la degradación del funcionamiento de la sociedad.

Lo más lógico es, por tanto, anunciar que América Latina va a conocer o incluso conoce ya una grave crisis de la democracia y que, como la Europa de los años veinte y treinta, va a estar sometida a unos regímenes autoritarios, algunos dirían incluso que ya fascistas, imponiendo una política social represiva en nombre de las exigencias del resurgimiento

económico nacional. La evolución de Bolivia y del Ecuador, o incluso el mantenimiento, tan difícil de comprender aparentemente, de la dictadura militar en Chile, sirven de prueba inmediata a la tesis que acaba de formularse.

Pero ¿cómo no ver también que la realidad se aleja de ese esquema y, antes de proceder a un análisis serio, cómo no quedar impresionado por la aparente paradoja siguiente? En resumidas cuentas, durante un período de fuerte crecimiento económico América del Sur se ha cubierto de dictaduras; por el contrario, en el momento en que se anuncia y estalla la crisis económica es cuando reaparecen las democracias, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Y en el caso del mismo Chile, si el general Pinochet sigue en el poder, el apoyo de que dispone a mediados de los años ochenta, en plena crisis económica, es a buen seguro más débil que el apoyo que le permitió en 1980 hacer adoptar por referéndum su Constitución. La crisis financiera y económica ha destruido las políticas de participación, pero no lleva necesariamente al caos, a la reacción autoritaria o a la descomposición de sociedades políticas en las que los excluidos se vuelven más numerosos que los ciudadanos. Puede llevar también a la *sustitución del modelo político nacional-popular por un modelo más democrático, es decir, más representativo.* Puede forzar a los países latinoamericanos a poner fin a la desarticulación de la política y de la economía, que durante tanto tiempo los ha caracterizado. Esos países se ven obligados a elaborar de manera más responsable unas políticas económicas que sean más autónomas en relación a un mercado internacional convertido en fuente de coacciones y ya no de facilidades.

La política deja de ser populista o nacional-popular; debe definirse a la vez como lucha nacional contra la crisis, el paro y la inflación y como regulación institucional de las relaciones entre grupos socioeconómicos. Los mayores países del continente, Brasil, México y la Argentina, de formas muy diversas y, sobre todo, con resultados opuestos, luchan por reconstruir un sistema político, por *rearticular* la economía y la política, por hacer participar diferentes categorías sociales en una estrategia de desarrollo nacional apoyada en el desarrollo del mercado interior, destruido o reducido por el endeudamiento externo. Esa transformación profunda, decisiva incluso, del modelo de desarrollo, implica una *diferenciación* creciente del Estado, como agente central de desarrollo o de supervivencia de la nación, del sistema de representación política y de los actores sociales mismos. Éstos —empresas, sindicatos, grupos profesionales e intelectuales— luchan para volverse independientes del Estado. El sistema político, por su parte, da prioridad a la representación sobre la participación. Finalmente, el Estado tiende a separarse de las «fuerzas políticas y sociales» para identificarse con la nación, frente a las amenazas y a las presiones que proceden del exterior. Semejante transformación del sistema político no siempre desemboca en un triunfo, pero los fracasos y la crisis política y social aparecen siempre como crisis

de esa transformación, intentada por todas partes, y no como un efecto directo de crisis económica desorganizadora por sí misma.

A veces uno siente la tentación de pensar que el continente se divide en dos partes, una de las cuales subiría hacia el primer mundo, el de los países industrializados democráticos, mientras la otra caería en el cuarto mundo, el de los países en vías de subdesarrollo. Es más prudente sin embargo prever que, frente a la crisis, la mayoría de los países lograrán combinar los dos modelos extremos, elaborar unas políticas regidas por la dualización de la sociedad pero al mismo tiempo integradoras. América Latina no encontrará su equilibrio acercándose a tipos extremos: perseverará en su «mestizaje» político, en una amalgama de acción redistribuidora del Estado y de desarrollo de los sectores modernos.

¿Hacia unas políticas de clase?

El paso de una política de participación a una política de representación crea vínculos más directos entre intereses sociales y fuerzas políticas. Cierto que la desaparición y la caída, progresivas o brutales, de los regímenes militares, provocó la creación de frentes democráticos que se daban por principal tarea la creación de un nuevo sistema institucional. No obstante, los problemas políticos tampoco pueden separarse nítidamente de las relaciones entre los grupos sociales. En general, es difícil concebir una democracia que no sea representativa, donde las fuerzas políticas no representen a los actores sociales. Dicho de forma más concreta, los países latinoamericanos se encuentran ante dos problemas socioeconómicos mayores. Podemos definir el primero como una elección de prioridad entre los dos componentes necesarios del resurgimiento económico: el aliento de las exportaciones y el desarrollo, en el mercado interior, del consumo de bienes y de servicios que crean la mayor cantidad posible de empleos y necesitan la menor cantidad de exportaciones: vivienda, educación, salud, vías de comunicación, etc. La prioridad dada a uno u otro de estos dos elementos del resurgimiento tiene implicaciones sociales directas. El segundo problema mayor es el de la importancia relativa dada al nivel de los salarios o al empleo. ¿Conviene aumentar los salarios y los beneficios del sector moderno, que debe tener un efecto de incitación sobre el conjunto de la economía, o hay que dar prioridad al aumento de la población activa, incluso aunque ese aumento deba aprovechar sobre todo al sector informal de bajas rentas? Los países en que existe tradicionalmente un fuerte sector informal aceptan con mayor facilidad mantener una política dualizante, porque los subempleados del sector informal poseen escasa capacidad de presión política. Las respuestas aportadas a estos problemas favorecen a un grupo social o a otro. ¿Y cómo no ver que todo favorece a una política de ayuda a las empresas y a las exportaciones indispensables para el pago de la deuda antes que un programa de inspiración socialdemócrata que a duras penas

podría desmarcarse de un distributivismo vuelto imposible? Los políticos más moderados sólo expresan la convicción de que el resurgimiento económico únicamente es posible si se apoya en negociaciones con las principales categorías socioprofesionales. En este sentido, la idea de *pacto social* parece semejante a la de la *industrial democracy,* elaborada primero en Inglaterra a finales del siglo XIX.

Durante varios decenios, el tema central de la política fue la *revolución,* es decir, en tal caso un cambio rápido del nivel de participación social y política. Es notable que la misma palabra sirva para nombrar tanto unos movimientos populares, como el movimiento campesino zapatista o el de los mineros y campesinos bolivianos o incluso el sindicalismo obrero chileno, como la formación de una «burguesía de Estado». Entre estos dos extremos, la acción de gobiernos moderados, apoyados en la clase media, como el de la Democracia Cristiana chilena de Frei, elegido con el apoyo de los votos de la derecha, también se llamó revolucionario. El interés de este término es que indica una fusión extrema de los problemas sociales, de los problemas políticos y de los del Estado.

Fueron las dictaduras militares las que, al eliminar las instituciones representativas y castigando a los grupos populares, crearon de manera involuntaria una fuerte autonomía de los actores sociales, y, de otro lado, instituciones políticas. Durante el período posdictatorial, los grupos económicos dirigentes mismos, para sobrevivir a la dictadura a que estaban vinculados, hubieron de insistir en el carácter estrictamente económico de sus demandas.

¿Hemos de decir entonces que esta creciente diferenciación, aunque tardía, de los actores sociales, del sistema político y del Estado conduce a una situación de tipo europeo, pero igual de cercana a la situación del Japón o de Corea del Sur, y, más concretamente, a la llegada del poder de una burguesía capitalista que reemplace en el poder a un Estado absoluto? Semejante idea puede apoyarse en muchos ejemplos. La democracia más estable de América del Sur en el transcurso de los últimos años, ¿no es Colombia, país claramente dominado por los grupos económicos dirigentes que se reparten entre los dos partidos principales, conservador y liberal? En líneas muy generales, ¿no vemos que aumenta rápidamente el peso de los dirigentes industriales y financieros en los gobiernos posautoritarios? Tras el Gobierno nacional-popular de Roldós y de Hurtado, ¿no ha llevado al poder Ecuador a León Febres Cordero, dirigente económico de Guayaquil? ¿No aumenta de forma regular en Bolivia el peso del comité cívico de Santa Cruz, de igual manera que el de la FIESP, organización patronal de São Paulo, en Brasil? S. Zermeño ve en el acercamiento del Estado y de los grupos económicos dominantes el rasgo principal de la evolución política reciente de México. Incluso en Argentina, uno de los objetivos principales de la reforma económica consiste en dar por fin prioridad a la industrialización, es decir, al capitalismo industrial. La dificultad que experimenta Chile para salir de la dic-

tadura militar ¿no procede del hecho de que los grupos dirigentes financieros, agrarios e industriales, quieren estar seguros de imponer al país su política, que se apoya en el desarrollo de la exportación y el mantenimiento de un mercado interior deprimido, antes de buscar un sucesor al gobierno autoritario que ha asegurado una fuerte redistribución de la renta nacional en su favor? Mientras que a principios de los años sesenta los estudios clásicos sobre los dirigentes económicos demostraban que en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Chile era imposible hablar de una clase de jefes de empresa o de una clase capitalista organizada y consciente de sus intereses colectivos, se observa una transformación rapidísima de las representaciones y de la acción política en ese dominio. El retraso de la burguesía industrial en ciertos países, en particular del cono sur, cede el puesto a la formación, muy consciente, de una clase dirigente que identifica sus intereses con un modelo general de transformación del país y que interviene de manera global en la política nacional. El debate político central comienza por primera vez a organizarse en torno a la opción entre la inversión económica y la participación social, entre el desarrollo prioritario de las exportaciones o la reconstitución del mercado interior.

Pero esta idea de que los países adoptan una política propiamente capitalista no es aceptable, no se corresponde con los hechos. La crisis económica ha tenido como resultado principal debilitar la capacidad de iniciativa y de negociación de todos los grupos sociales y por consiguiente dar un papel central al Estado. Del mismo modo que en Francia las únicas grandes negociaciones colectivas han sido hechas, en 1936 o en 1968, por iniciativa y bajo la dirección directa del Estado, asimismo en América Latina es al Estado al que pertenece producir la sociedad civil y dar a los grupos de intereses socioeconómicos una autonomía y una capacidad de acción que les resulta difícil conquistar por ellos mismos. Es el Estado y no la patronal la que ha impuesto el plan Austral en Argentina y el plan Cruzado en Brasil. Paradójicamente, es incluso el Estado quien dirige, directa o indirectamente, casi toda la economía en Chile.

La resistencia del Estado nacional-popular

En muchos países, el modelo político tradicional se mantiene mejor todavía: las demandas sociales siguen integradas al Estado, lo cual constituye la forma latinoamericana del corporativismo. El caso *mexicano* es aquí de una importancia particular porque, aunque De la Madrid haya tratado de reaccionar contra el «echeverrismo» y de construir un aparato de Estado a la vez más fuerte y mejor asociado a los grupos económicos dirigentes, el Estado-PRI ha debido reforzar sus vínculos con el movimiento sindical y desarrollar su control político de los suburbios pobres, de las *colonias proletarias*. En resumidas cuentas, a pesar de su orientación favorable a los jefes de empresa, el Gobierno mexicano mantiene la

prioridad de una política de protección y de control social dirigida por el PRI y considera el mundo de las empresas menos como un interlocutor que como la expresión de la presencia inevitable de las leyes del mercado internacional, que no son detenidas por las fronteras del país con los Estados Unidos. El mundo de los empresarios ejerce una influencia segura, pero desde fuera, por ejemplo, a través de la fuga de capitales organizada en 1976, o igualmente a través de los *mass media* que controla. El sindicalismo de los grupos urbanos actúa, por el contrario, desde el interior del sistema. México conoce guerrillas burguesas, lo mismo que Colombia conoce guerrillas populares, lo cual indica que el régimen sigue estando dominado por la incorporación de los sindicatos y representantes de los grupos populares al aparato de Estado.

La misma observación vale para *Venezuela.* El pacto de Punto Fijo de octubre de 1958 entre *Acción Democrática,* COPEI y URD no fue sólo un acuerdo entre partidos; había preparado también la integración del sindicalismo en el sistema democrático. A pesar de las crisis económicas y la baja del petróleo, el Gobierno Lusinchi mantuvo la alianza de *Acción Democrática* y de la central sindical. En *Brasil* mismo, ¿no asistimos a un retorno del sistema político que Getúlio Vargas puso en práctica? José Sarney, ¿no ha llevado una campaña propiamente populista lanzando el plan Cruzado, que ha aumentado prodigiosamente su popularidad, puesto que bloqueaba los precios más que los salarios, provocando de esta forma un fuerte aumento de la demanda interior que no pudo mantenerse durante mucho tiempo porque implicó un aumento de las importaciones y, por lo tanto, una reducción masiva del excedente del comercio exterior, y, sobre todo, la desaparición de muchos productos cuyos precios no parecían suficientemente remuneradores para quienes los producían? El populismo del presidente se acentuó más todavía a principios de 1987, cuando, frente al deterioro del comercio exterior, decidió la moratoria de la deuda, proclamando su voluntad de dar pan al pueblo antes que pagar a los bancos extranjeros. El efímero plan económico de C. Bresser Pereira quiso detener esa política de facilidad. Paralelamente, el PMDB no es sino de forma muy parcial un partido nacional. El poder de los gobernadores y de los dirigentes regionales sigue siendo considerable, lo cual da al presidente un papel de arbitraje de tipo tradicional.

Más difícil todavía es la situación de la *Argentina,* donde todo descansa en el presidente Alfonsín y su equipo, mientras que las luchas entre militares y grupos de izquierda se exacerban en torno a la ley del *Punto Final,* que pone un término a las investigaciones judiciales contra los militares culpables de crímenes contra los derechos humanos. R. Alfonsín hubo de capitular en 1987 ante unas fuerzas militares sublevadas en Córdoba y en el Campo de Mayo, cerca de Buenos Aires, y conceder la amnistía a la mayor parte de los oficiales condenados, salvo a los comandantes en jefe. A pesar de la movilización popular en favor del pre-

sidente, la democracia argentina es débil, no sólo porque los militares han impuesto su voluntad, sino sobre todo porque la sociedad argentina sigue estando, como siempre, más preocupada por el consumo que por la producción. Los éxitos de la colaboración económica con Brasil no parecen suficientes, como tampoco el conjunto de la acción económica del ministro Sourrouille y de su equipo para transformar el comportamiento de actores sociales que esperan más del Estado que de ellos mismos.

Hay que ir más lejos. Los efectos internos de la crisis financiera y económica, multiplicados por los de la inflación, ¿no refuerzan la presión populista sobre los gobiernos? Cuando el mercado se desorganiza, cuando el nivel de vida retrocede y aumentan todas las formas de inseguridad, ¿existe otro recurso que el Estado? De ahí los nuevos brotes del populismo. En *Argentina,* la campaña presidencial de 1989 ha dado el triunfoal populista Menem frente al gobernador radical de Córdoba, Angeloz, que proclama abiertamente una política antipopulista. En *Brasil,* Leonel Brizola y Jânio Quadros hacen revivir, el primero en la izquierda y el segundo en la derecha, las formas más tradicionales de populismo. El éxito electoral de Cuauhtemoc Cárdenas, en *México,* en 1988, fue guiado por una corriente populista más que por la izquierda organizada. Pero ¿cómo puede encontrar América Latina una vía de futuro en el populismo, ahora que el Estado tiene los bolsillos vacíos porque el flujo de capitales hacia el exterior debilita la economía nacional y los recursos fiscales? Alan García intentó, en los inicios de su presidencia, superar el populismo; fue obligado a hundirse en él para resistir las presiones ejercidas sobre él desde todas partes, lo cual ha conducido a Perú al caos del que a duras penas podrá salir Barrantes, hacia quien se vuelve la opinión pública en 1989. La vía populista no puede llevar hoy sino al caos y, antes o después, a una reacción antipopulista, moderada como la que organiza M. Vargas Llosa en Perú, pero que la mayoría de las veces será autoritaria. ¿Entra de nuevo América Latina en el ciclo infernal de los desbordamientos populistas y de los golpes de Estado militares? La predicción del general Pinochet: «Después de haberme apartado y haber hecho la experiencia de la democracia y de su desorden, los chilenos volverán a llamarme», será verdad un día?

Pero no es sólo la vía del populismo la que está cerrada; es también la vía, directamente opuesta, de las políticas que se apoyan únicamente en los sectores modernizadores, y que demuestran a la vez el fracaso del alfonsinismo en Argentina y el de los modernizadores de izquierda del PMDB en São Paulo.

El desbordamiento sin revolución

¿No son estas conclusiones demasiado optimistas todavía si las aplicamos a ciertos países? Todas las formas de vida política a las que acaba-

mos de pasar revista, desde los sistemas de partidos que representan casi directamente categorías o clases sociales, hasta la combinación de partidos «ómnibus» o de movimientos basistas, representan diferentes modalidades de una autonomía creciente del sistema político, en relación con el Estado por un lado, con los actores sociales por otro. Pero en otros casos, la crisis económica destruye, por el contrario, esa autonomía, impide tanto toda política representativa como toda movilización social global, porque la sociedad nacional, rota por la crisis, se segmenta, lo cual amenaza con entrañar una desintegración política.

Este riesgo de descomposición existe, está presente. Amenaza incluso a ciertos países en otro tiempo fuertemente integrados como Chile, y más todavía Colombia. En 1986-1988, las fuerzas de descomposición parecen incluso prevalecer en muchos países sobre los esfuerzos de integración política. «El caos, que no sólo golpea a los países más débiles, sino que aparece haberse apoderado, en unos pocos años, de Brasil, hasta entonces tan seguro de sí y que, alrededor de 1985, había conseguido un resurgimiento económico impresionante, ¿no conduce fatalmente a la violencia, a la descomposición de la unidad nacional, y no substituye todas las variantes del populismo por el enfrentamiento directo de fuerzas revolucionarias y de intervenciones militares? ¿Existe todavía un Estado nacional en Bolivia y no se encamina hoy Perú hacia el agotamiento de sus fuerzas políticas y hacia el enfrentamiento directo de *Sendero Luminoso* y del ejército?»

Pero, durante estos años, es Colombia la que parece derivar de la manera más dramática hacia la descomposición política y acercarse a una situación de violencia incontrolada. Las guerrillas se desarrollan, mientras que grupos militares y paramilitares multiplican los asesinatos y el poder incontrolado de los traficantes de drogas alimenta todas las formas de descomposición.

No subestimo esas crisis a las que deberán prestar más atención los responsables políticos y económicos del mundo occidental; es cierto que vuelven frágiles todos los discursos demasiado tranquilizadores de principios de los años ochenta sobre el triunfo de la democracia en América Latina. El riesgo de caos y de descomposición existe; sólo digo que es más notable todavía que esa descomposición y esa ingobernabilidad no se hayan transformado hasta ahora en situaciones revolucionarias, no hayan puesto abiertamente todavía en peligro a las democracias, incluso aunque fueran recientes. Tal vez porque a una dictadura le resulta más fácil tomar y conservar el poder cuando posee los recursos necesarios para la manipulación de las demandas sociales por la cooptación y la corrupción; tal vez también porque una revolución sólo sale de una crisis cuando existen grupos dirigentes que tienen la capacidad de imponer una disciplina fuerte a las demandas sociales. Ahora bien, uno de los aspectos menos conocidos de la política nacional-popular es haber impedido la formación de vanguardias revolucionarias. Los grupos revoluciona-

rios, en general, se han automarginado, mientras que las masas populares han pedido constantemente una participación económica, social y política más fuerte, más integración social antes que una revolución. La probabilidad de la descomposición social y política de ciertos países es mucho mayor que la de una revolución, aunque existen numerosos grupos en los que se agravan la pobreza y la precariedad de condición.

Lo que mantiene una situación revolucionaria en América Latina es menos la evolución interna de la sociedad que la presencia constante de los Estados Unidos como potencia colonial que interviene directamente en la mayor parte de los países de esta región. Aunque el debilitamiento del presidente Reagan tras el «Irangate» ha alejado prácticamente toda amenaza directa contra Nicaragua, también ha dado lugar a la retirada de los dirigentes más moderados de los *contras*.

Cambio de modelo

El progreso de la democracia en América Latina no es irreversible. La crisis económica puede entrañar una disgregación social y política peligrosa. No obstante, si en general la crisis económica no ha tenido en América Latina consecuencias políticas dramáticamente negativas, comomo las había tenido la crisis de los años treinta en Europa, ha sido porque el efecto de la crisis fue *sustituir una política de participación por una política de representación,* cuyas diversas formas, todas imperfectas, se han esforzado por analizar. M. A. Garretón, en una comunicación presentada al primer congreso chileno de sociología en septiembre de 1984, ha hablado de cambio, en ese país, de «matriz constitutiva», es decir, de modelo sociopolítico. Lo cual subraya con razón que las nuevas democracias no salen sólo de dictaduras antipopulares, sino que casi todos los países de América Latina salen de un ciclo histórico mucho más largo y del modelo nacional-popular que ha dominado ampliamente el continente durante el último medio siglo. Las dictaduras han sido, sobre todo, los actores principales de la destrucción de ese modelo que se mantiene en países como México y Venezuela, que han escapado a la dictadura. Ese modelo, estrechamente vinculado a la dependencia económica, ha estado dominado por la desarticulación de la acción social, la autonomía excesiva de los procesos políticos e ideológicos en relación a las políticas económicas y una fuerte mezcla del Estado, del sistema político y de los actores sociales, en una situación en que las principales decisiones económicas se tomaban fuera del país y donde el conjunto del campo político se organizaba en torno a objetivos de distribución y de consumo. Este sistema ha permitido la integración político-cultural precoz de una gran parte de la población pero también ha conducido a una parálisis económica y a una crisis política. Después de haberse revelado los regímenes militares impotentes para hacer frente a la crisis económica, es el conjunto de regímenes nacional-populares y de dictaduras mili-

tares antipopulares los que se encuentran eliminados y los que deben ser sustituidos por una diferenciación más fuerte, aunque limitada, entre Estado, sistema político representativo y actores sociales. La imposibilidad de volver al modelo nacional-popular queda subrayada, más claramente que por cualquier otro signo, por la transformación del papel de los *intelectuales*. Tras haber sido potentes agentes del Estado nacional-popular y en particular de los populismos y de los nacionalismos revolucionarios, se han vuelto agentes fuertemente profesionalizados de la democratización, rompiendo con la desarticulación de su propio trabajo en relación a las realidades de su país y esforzándose por definir las relaciones posibles entre las políticas públicas y los interlocutores sociales.

La desorganización y el caos actuales pueden arrastrar a la América Latina a una crisis política que volvería insoluble la crisis económica. Pero empezaríamos a escapar a la faltalidad de la crisis en cuanto la considerásemos no como una descomposición, sino como el difícil paso de un modelo político a otro. Salir de la crisis es acelerar la formación de actores políticos que ya no son agentes de participación en el sistema estatal de distribución, sino representantes de intereses sociales y económicos definidos bien al modo europeo, bien, al menos, al modo norteamericano. También Francia ha conocido el agotamiento de una radición «republicana» que daba prioridad a la integración nacional sobre la representación de los intereses, agotamiento durane el que, a menudo, fue sensible a las tentaciones populistas. Y sólo muy recientemente se ha acercado al modelo socialdemócrata, que se ha instalado de pronto en España, pero que todavía no ha podido implantrarse en Italia. La particularidad de América Latina consiste en que, dado que su industrialización es limitada, no puede ver crearse partidos obreros y burgueses, al modo sueco. Por tanto es preciso que el paso de la participación populista a unos partidos representativos de intereses sociales particulares se opere mediante la creación de partidos-frentes en los que se alineen sectores «modernos» y sectores «marginados». Estos actores políticos mixtos pueden formarse «a derecha» o «a izquierda». La historia de México desde 1982 es la búsqueda de una alianza entre un populismo marcado a menudo por la izquierda y los empresarios industriales, por iniciativa de un Estado que intenta aumentar su libertad de iniciativas liberándose del control del PRI. En Chile de 1989, frente al Chile de 1979, que había favorecido a una oligarquía de especuladores, ha logrado incluso, aunque en un contexto autoritario y represivo, construir la alianza del Estado y de los empresarios.

En otros países, tales alianzas se forman en la izquierda. Es el caso de la *Izquierda Unida* peruana, lo mismo que el del *Partido de los Trabajadores* brasileños y, más particularmente, el paulista, donde Lula, antiguo dirigente sindical, representa la componente más moderna, y Erundina, nueva alcaldesa de São Paulo, trabajadora social procedente del Noreste y apoyada por la Iglesia, la implantación en el mundo de los pobres.

El destino de América Latina depende, ante todo, de su capacidad de inventar unos actores políticos nuevos que no sean ni movimientos populistas ni partidos de clase, sino que faciliten la transición de una configuración populista a otra, más cerca de aquella en que se sitúan las social-democracias europeas o, incluso, la oposición entre republicanos y demócratas en Estados Unidos.

El paso a la democracia es el proceso que actualmente domina la vida de América Latina. Pero una concepción limitada, puramente institucional, de la democracia, no sólo ocultaría la defensa de intereses más bien tradicionales, sino que provocaría también reacciones opuestas, de defensa comunitaria o de agresión violenta, entre los excluidos, sobre todo los pobres de la ciudad. Estas categorías desconfían de los partidos políticos y de la democracia misma y se adhieren a lo que S. Zermeño ha llamado, para México, un *sans-culottisme* espontáneo. Creer que la democracia puede reducirse a la sustitución de las dictaduras por unos regímenes fundados en la ley sería un error tan grave que rápidamente conduciría a una crisis de régimen. La situación chilena muestra que los *pobladores* siguen siendo extraños a las tentativas dirigidas por las clases medias de reemplazar la dictadura por la democracia. No son, sin embargo, favorables a esa dictadura; afirman más bien la prioridad de los problemas sociales y económicos y se sienten mejor representados por unos sacerdotes que defienden su barrio que por los lejanos jefes de los partidos políticos. La reconstrucción de la democracia supone el resurgimiento de la capacidad de producción, pero también de una transformación profunda del *reparto de la renta nacional,* que también se ha vuelto más injusto durante los años de dictadura militar. La idea de reconciliación, como la idea de retorno a la legalidad, comprende, para una gran parte de la población, la demanda acuciante de una disminución de las desigualdades y de las injusticias y de acciones urgentes contra la miseria. En América Latina, lo mismo que en Francia, los excesos ideológicos de los partidarios de las democracias «reales» o «populares» conducen en la actualidad a una vuelta a una visión puramente institucional de la democracia. Esa reacción es comprensible; pero no es menester sucumbir a ella. La democracia no existe ni es fuerte más que si es representativa, si permite no sólo la expresión sino la satisfacción de las demandas sociales más urgentes. Este error de análisis se apoya en una concepción falsa de la evolución del continente. Hay que rechazar absolutamente la idea de que América Latina, tras haber sido definida por su proceso de desarrollo, se vuelve una sociedad industrial enteramente dominada por sus procesos internos.

Las antiguas categorías sociopolíticas, definidas por su puesto en el proceso de desarrollo dependiente, no son reemplazadas por clases sociales o grupos de intereses característicos de una sociedad industrial «madura». En todas partes y siempre existe una *combinación de los problemas de la sociedad industrial y de los problemas de la industrializa-*

ción, de los problemas propios de una estructura social y de los problemas de desarrollo. Pero los problemas del desarrollo dependiente han dominado la historia de la América Latina durante un largo período, y la transformación que nosotros hemos observado puede ser definida como la importancia creciente de los problemas *estructurales* y, por consiguiente, como la formación de modelos específicos de mezcla entre los problemas de funcionamiento de una sociedad industrial y los de su desarrollo.

Conclusión

¿Puede desarrollarse la América Latina?

Si este título y la noción de desarrollo suscitan todavía reticencias, volvamos a formular nuestra pregunta en la forma que impone una actualidad dramática: ¿puede dejar de retroceder América Latina? De 1981 a 1985 su producto interior bruto por habitante ha disminuido un 9 por 100 en términos reales; en ciertos países, la caída ha sido de cerca del 20 por 100; la parte del continente en el comercio internacional, que había aumentado lentamente, disminuye. El peso de la deuda es aplastante: tras un vigoroso esfuerzo de resurgimiento, que había impuesto un retroceso de las importaciones y de la producción, y por lo tanto un fuerte aumento del paro, América Latina se agota de nuevo a partir de 1986. Bolivia ya había suspendido sus pagos; Perú limita los suyos; México conocía en 1986 una nueva crisis mayor que pone en peligro el sistema financiero internacional; Brasil, hasta entonces el primero de la clase, suspende sus pagos a principios de 1987; representaban en 1985 el 4,5 por 100 de su producto nacional bruto. Para responder a tales cargas, los gobiernos orientan la economía decididamente hacia la exportación, limitando el mercado interior, es decir, bajando el nivel de vida, lo cual apela a un régimen autoritario, como demuestra el ejemplo de Chile que sigue con cierto éxito esa política a un tiempo financieramente eficaz y

antipopular. La crisis actual no sólo aumenta las desigualdades sociales, ya considerables, sino que la sociedad se disgrega. La inseguridad aumenta en las ciudades y la economía se agota, los capitales huyen o se lanzan a la especulación antes que a la inversión.

América Latina se había acercado a los países industrializados desde hora temprana; en la actualidad se aleja de ellos porque éstos, amenazados por los nuevos países industriales, han dado un salto hacia adelante gracias a las tecnologías nuevas desarrolladas por los financiamientos públicos. Las exportaciones tradicionales de la América Latina están amenazadas; la caída de los precios del estaño, privando a Bolivia de su principal recurso de exportación, es más que una advertencia. La cuestión se plantea hoy así: el crecimiento del último siglo ¿ha sido algo más que una ilusión, un desarrollo demasiado fácil? El barco que parecía haberse hecho a la mar en plena calma ¿no zozobra desde el momento en que entra en la zona de tempestades?

Estas preguntas exigen dos respuestas distintas, porque las economías periféricas dependen a un tiempo de las políticas elegidas por sus países y de las medidas tomadas en los países centrales para el conjunto del sistema internacional. Estos países saben que América Latina no puede pagar la totalidad de una deuda convertida en una roca de Sísifo. Los pagos efectuados a partir de 1981 se elevan ya a la mitad de la suma debida en esa fecha, y sin embargo el monto global de la deuda continúa aumentado, más despacio, cierto, que en el transcurso de los años precedentes. Es menester que la carga de la deuda se reparta entre los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos de los países industriales y los bancos de esos países, y que cuanto antes se busquen medidas positivas que favorezcan la recuperación de la inversión productiva y combatan los peligros del proteccionismo.

Pero no puede esperarse una solución sólo de esas medidas. La América Latina no puede probablemente salir de su crisis por sí misma, pero sucumbirá a buen seguro si no es capaz de luchar eficazmente contra sus propias debilidades y movilizar sus recursos, no sólo económicos, sino también políticos y humanos, para un nuevo crecimiento.

Esta afirmación nos lleva a la pregunta central: ¿es capaz América Latina de desarrollarse ella misma? Una vez desaparecido el crecimiento fácil producido, en primer lugar, por la crisis de las exportaciones europeas y norteamericanas, luego por la crisis de los años treinta hasta la guerra de Corea, más tarde por la llegada masiva de capitales extranjeros, ¿es capaz América Latina de innovaciones tecnológicas, de inversiones productivas, de un ensanchamiento de su mercado interior y de exportaciones competitivas?

Esta pregunta suscita la mayoría de las veces una respuesta brutal: el desarrollo no es otra cosa que la racionalización; la sociedad moderna, la que produce su propia modernización permanente, se apoya en la aplicación de la razón a las actividades económicas y a la organización

administrativa. Mientras América Latina siga siendo una sociedad tradicional donde el parecer cuenta más que el hacer y las relaciones personales más que el cálculo racional, donde los privilegios condenen a los intereses, donde las desigualdades y el consumo ostentatorio disminuyan la inversión productiva en provecho de gastos de lujo improductivos, no tendrán opción más que entre el subdesarrollo global y una dualización creciente, habiéndose incorporado algunos sectores al mundo desarrollado por mediación de empresas nacionales o gracias a la modernización introducida por grandes empresas públicas.

Recordemos, ante todo, los argumentos en favor de esa posición. Casi ningun país de América Latina, salvo la excepción parcial de Brasil, ha demostrado su capacidad de innovación técnica. El continente importa de forma masiva tecnologías nuevas; exporta muy pocas. Incluso un país tan importante como México vende al extranjero pocos productos industriales complejos, y Argentina o Chile, que poseen centros científicos de alta calidad, poseen una escasa capacidad de innovación técnica. Más importante todavía: uno de los temas centrales de este libro ha sido la debilidad de los actores sociales. Los dirigentes económicos son raramente gerentes y los sindicatos son más a menudo instrumentos de influencia política que organizaciones de defensa de los trabajadores. América Latina es un continente de actores sin acción. Los defensores del racionalismo industrial, occidental o soviético, acusan a la América Latina de dejar demasiado espacio a la expresión de los actores sociales, incluso a sus gesticulaciones, y de hacer poco caso de la búsqueda de soluciones racionales; los sociólogos quedan más sorprendidos todavía por la heteronomía de los actores sociales subordinados bien a un Estado de tipo nacional-popular, bien a las decisiones económicas tomadas al margen del continente. Lo que he denominado desarticulación de la acción colectiva indica que el exceso de autonomía de las ideologías e incluso la acción política en relación a la realidad económica entraña una movilización social y política más ficticia que real, más teatral que eficaz. Lo cual conduce a una constatación que no nos sorprende: América Latina sólo parcialmente es moderna; tiene una capacidad insuficiente de acción técnica, económica, social y política. Sin un aumento rápido y fuerte de esa capacidad, sucumbirá en una competencia internacional en la que entran nuevos países industriales que tienen una capacidad de inversión y de innovación más fuerte, una aptitud para movilizar sus recursos sociales más potente.

Pero ¿qué conclusión sacar de estas constataciones, que por otro lado hemos de moderar, dado que durante varios decenios la tasa de crecimiento de la América Latina ha sido superior a la de Europa occidental y más todavía a la de los Estados Unidos?

El error consistiría en creer que la América Latina despegaría antes si seguía bien el modelo capitalista, bien el modelo socialista, si durante una o varias generaciones sacrificaba el bienestar de la mayoría a la

construcción de una infraestructura moderna. El modelo capitalista liberal está lejos de la realidad latinoamericana por dos razones opuestas: primero, porque raramente existe sobre el continente una clase dirigente industrializadora y porque los dirigentes económicos forman más una oligarquía de privilegios que un grupo de empresarios, y segundo, porque la América Latina nacional-popular ha ofrecido a las clases medias y a una parte de los obreros urbanos un nivel de participación económica, política y cultural muy superior, en términos relativos, al que han conocido los obreros europeos encerrados durante largo tiempo en una proletarización brutal o las masas soviéticas durante los primeros planes quinquienales. Que ese distributivismo haya disminuido la capacidad de inversión se admite fácilmente, sobre todo por lo que se refiere a los países del cono sur —Uruguay, Argentina y Chile—, pero ¿no se hundiría el continente en la crisis si todavía se pretende estrechar su mercado interior? Argumentos paralelos se aplican contra el modo socialista de industrialización: debilidad de las vanguardias revolucionarias cuando los dirigentes sindicales y laborales están absorbidos por el aparato de poder; dificultad de imponer sacrificios duraderos a la población.

Tal vez la industrialización de América Latina haya sido demasiado *blanda* —salvo para los excluidos, que son legión—, pero esa blandura misma ha vuelto imposible el recurso a soluciones «duras», socialistas o capitalistas. No recomendamos a la América Latina que se entregue a un solo dueño, sea éste el beneficio de las grandes empresas o el poder político absoluto. Como hemos visto desde el principio, su especificidad es combinar factores económicos y factores sociales de desarrollo; América Latina está condenada a un desarrollo «abierto» donde crecimiento económico, conflictos sociales e intervenciones del Estado se combinen sin que ninguna fuerza se vuelva hegemónica. Su debilidad ha sido privilegiar la redistribución al servicio de las categorías medias y ricas antes que la potenciación del aparato de producción, y haber contado con la aportación de capitales extranjeros antes que con sus propias inversiones. Por tanto, hoy que el modelo nacional-popular está agotado, debe imaginar otra combinación de factores sociales y de factores económicos de desarrollo pero sin entregarse ni a los mecanismos del mercado ni al poder absoluto de un partido. Lo que no puede ya aceptar es una industrialización y una participación tan limitadas. Es lo que piensan quienes, como F. Fajnzylber (cf. Bibl., I, 1), proponen a la América Latina que imite ciertos aspectos del desarrollo de los países industriales de Asia y sobre todo del Japón. América Latina sólo puede desarrollarse si, una vez aligerado el peso de su deuda, aumenta su esfuerzo de inversión productiva, lo cual impone reducir la construcción de lujo y los gastos suntuarios, y si, al mismo tiempo, da una forma nueva, más concreta, a su voluntad con tanta frecuencia proclamada de incrementar la participación popular. Los dos temas se unen: menos desigualdades, más integración y cohesión social, e inversiones puestas al servicio de la mayoría,

sea que permitan aumentar las exportaciones y por tanto la importación de equipamientos, sea que mejoren los servicios de base, hospitales y escuelas, puertos, rutas y viviendas populares.

La tendencia más fuerte para los tiempos inmediatos empuja al acercamiento del Estado y de dirigentes económicos, formados a menudo por iniciativa del Estado, incluso en el sector público como Brasil, México o Venezuela, a veces, por el contrario, violentamente opuestos a un Estado a sus ojos demasiado distributivista, como en Bolivia, Chile o en Ecuador. En Argentina, Alfonsín se esfuerza por crear un Estado gestionario y por dar más dinamismo a un capitalismo industrial todavía dominado por el capital financiero. El éxito de este desarrollo capitalista dirige en gran parte la formación de un sindicalismo a la vez independiente del Estado, negociador, y capaz de participar en un pacto social necesario para el resurgimiento del país.

Pero la prioridad que hay que dar a los actores de la sociedad industrial no quiere decir que América Latina vaya a revivir el modo de industrialización de Europa occidental o el de los Estados Unidos. Sigue estando, está incluso cada vez más dominada por el dualismo, por la importancia del subempleo y del paro urbano, así como por un fuerte corte entre la ciudad y el campo. Lo cual da al Estado un papel de integración nacional que el Estado nacional-popular ha privilegiado demasiado exclusivamente pero que no puede desaparecer. El debate brasileño de 1987 entre el parlamentarismo y el régimen presidencial no tiene solución simple: probablemente hay que dar prioridad al primero,es decir, a la representación de los actores sociales y económicos, pero imposible prescindir de un Estado que sea un agente poderoso de unidad nacional y de integración social.

En resumen, el resurgimiento de América Latina depende, sobre todo, de dos condiciones. Ante todo es preciso que se constituyan fuertemente los actores de una sociedad industrial: empresarios, sindicatos, administradores públicos, profesionales e intelectuales. La fuerza de Brasil, más allá de sus dificultades actuales, consiste en que ese país posee los actores necesarios para su desarrollo. El espíritu de empresas se ha difundido en él, en gran parte gracias a las empresas públicas; desde 1977 se han constituido verdaderos sindicatos en la ciudad, pero también en el campo; la Administración sigue siendo de buena calidad y los intelectuales son, desde hace tiempo, de notable importancia. La debilidad de Argentina, que dispone desde hace un siglo de recursos humanos y económicos de un nivel excepcionalmente elevado, consiste en que jamás ha salido del vaivén inestable entre una política económica agroexportadora y el empuje de los consumidores urbanos; no se ha dotado ni de empresas competitivas ni de sindicatos negociadores ni de una administración pública competente, pese a los esfuerzos recientes, ni de intelectuales profesionales, porque su sistema universitario está arruinado desde hace veinte años. Si Chile parece hallarse hoy cerca del

desarrollo, ¿no es porque la reforma agraria ha permitido, al destruir el antiguo sistema de *fundos,* la creación de una clase activa de empresarios agrarios, y porque el sistema de educación del país no ha dejado nunca de proporcionarle las competencias que necesita?

La segunda condición, la que exige las decisiones más urgentes, es la lucha contra la desigualdad. En la actualidad, Brasil es uno de los países de nivel intermedio de desarrollo donde las desigualdades son mayores, y en muchos países la distancia entre ricos y pobres sigue aumentando. La extrema concentración de las rentas ha podido ser, en un momento, favorable a la implantación de empresas que producen bienes duraderos costosos, mientras que lo propio de América Latina es la fotísima difusión de los nuevos modos de consumo. Pero hoy es escenario, al mismo tiempo que se favorecen las exportaciones, que se desarrollen actividades que exigen pocos bienes, importados: educación, comunicación, vivienda popular, cuidados médicos. Es preciso que crezca el mercado interior, cuando el peso de la deuda exterior y de sus efectos negativos sobre la economía ha sido soportado casi exclusivamente por los pobres, lo cual ha creado en todas partes una inmensa «deuda social», según la exactísima expresión de los investigadores de PREALC. La acción política en América Latina debe tener un objetivo prioritario: disminuir las desigualdades. Debería inspirarse en el ejemplo de los países escandinavos, como Suecia y Noruega, durante los treinta, cuando la socialdemocracia permitió a esos países, hasta encontes relativamente subdesarrollados, entrar de golpe en el lote de los países más modernos gracias a la imposición de un igualitarismo extremo. Nadie puede creer en el resugimiento del continente si éste no es capaz de imponer una redistribución masiva de las rentas que obligará a los ricos a no contar ya más que con sus cualidades de empresarios, y que sustituirá la oposición actual de los privilegiados y de los subprivilegiados por la oposición entre empresarios y asalariados, que es característica de todas las sociedades industriales. Sólo la lucha victoriosa contra extremas desigualdades puede volver a dar fuerza a la conciencia nacional, porque ¿se conocen muchos ejemplos de desarrollo económico logrado que no estén apoyados en una fuerte conciencia nacional?

El continente seguirá, por tanto, avanzando de manera aparentemente vacilante, tironeado entre una sociedad civil reforzada y un Estado intervencionista. Cada país combinará a su manera y según las circunstancias esas dos lógicas divergentes. El peligro no está en esa dualidad de orientaciones; está en la pérdida de capacidad de actuar, en la descomposición interna y, sobre todo, en la sumisión pasiva a las crisis inevitables del sistema mundial donde los recursos financieros no corresponden a la actividad económica, donde los Estados Unidos, lo mismo que América Latina, están fuertemente endeudados, mientras Japón y Alemania Federal acumulan excedentes comerciales que no se atreven a poner al servicio del relanzamiento. La América Latina, como los países

industrializados desde hora temprana, Gran Bretaña y Francia, necesita por encima de todo pensar de nuevo en términos de desarrollo, aumentar su capacidad de actuar, tomar conciencia de sus posibilidades más aún que de sus dificultades, luchar por la inversión productiva y contra las desigualdades sociales.

Si consigue transformar su modo de desarrollo mostrará al mundo que es posible salir del dilema en que hoy parece ese mundo estar encerrado: ¿hay que escoger la civilización de los países ricos, que consumen y derrochan locamente, cuyo poder crea desigualdades crecientes en el plano mundial y que hacen pesar sobre el planeta la amenaza de conflictos devastadores, o hay que encerrarse en la defensa de la identidad cultural de los países pobres, que conduce a dictaduras nacionalistas o teocráticas, cuando no lleva a la descomposición de naciones débilmente integradas?

Tanto en sus debilidades como en sus fuerzas, América Latina siempre ha buscado una tercera vía, la que combina crecimiento económico y participación social. En el transcurso del último medio siglo, lo ha conseguido parcialmente, pero dejando subsistir inmensas zonas de exclusión y aceptando una dependencia demasiado grande respecto a inversiones extranjeras. La crisis ha destrozado ese edificio más brillante que sólido. Pero ¿no hay que continuar negando la opción devastadora entre el crecimiento económico y la participación social?

Entre el orgullo occidental, convencido de ser depositario del único modelo de modernización, y el culturalismo del ex Tercer Mundo encerrado en la búsqueda de una especificidad nacional más ideológica que real, América Latina ha intentado construir un modelo de desarrollo que combina el universalismo de la razón con la especificidad de las culturas. De manera, desde luego, menos eficaz que varios países asiáticos —y una gran parte de este libro ha estado consagrada al estudio de las debilidades del modo latinoamericano de desarrollo—, pero nada permite afirmar que acercándose bien al racionalismo capitalista o socialista, bien a un culturalismo esencialista, América Latina escapará a sus debilidades, saldrá de la espiral del subdesarrollo y volverá a encontrar el camino del crecimiento por el que durante tanto tiempo había avanzado con buen paso.

Un ejemplo muestra que existen soluciones democráticas, no autoritarias, para la crisis económica y política actual: el de Uruguay. Tras haber conocido una larga y dramática decadencia y haber pasado por varias formas sucesivas de violencia política, ese país ha resurgido económicamente, ha logrado establecer negociaciones entre los sindicatos, las empresas y el Estado, y ha puesto de manifiesto, en 1989, su madurez democrática entregándose durante meses a un debate público sobre su pasado y la mejor forma de superarlo, en el que, después de 1945, habrían podido inspirarse muchos países europeos. ¿No es alentador que ese país, que había abierto la vía, desde principios de siglo, a los regíme-

nes nacional-populares y a la extensión de los derechos sociales, muestre hoy de nuevo que la democracia puede ser el mejor instrumento político del desarrollo económico?

Por eso, este estudio de más de medio siglo de historia de América Latina no ha querido comprender solamente las condiciones sociales, políticas y culturales de la modernización del continente; ha querido contribuir a un análisis más abierto del desarrollo, que toma en cuenta, en el análisis de cada país o región, la manera en que se combinan las exigencias generales de la modernidad y la particularidad de cada modo de desarrollo. Ha querido también, al mismo tiempo que analizaba el éxito y los fracasos de la América Latina, y que intentaba comprender su vida política, interrogar las imágenes que nos hacemos del desarrollo, del subdesarrollo y del Tercer Mundo, que se forman y se transforman más directamente en función de nuestra propia situación que de la coyuntura económica y de la política social de los países considerados.

Recordemos esta historia caótica. Primero, los intelectuales de los países occidentales, marcados por la colonización, se han sentido arrastrados por un movimiento que parecía asociar, al día siguiente de la guerra y en la mayor parte del mundo, liberación nacional, modernización económica y democratización. Si Alfred Sauvy llamó a los países pobres el Tercer Mundo, fue para desearles el mismo éxito que al tercer estado, actor central de la Revolución francesa. Emergiendo de una dominación colonial apoyada en estructuras tradicionales de dominación, ¿estos países no iban a apelar a la ciencia y a la tecnología para desarrollarse, al mismo tiempo que iban a abrirse a la democracia? Ese entusiasmo culminó con la conferencia de Bandung. Se pensaba que los nuevos países iban a librarnos mediante su no alineamiento de las cargas que sobre el mundo hacía pesar la guerra fría. En América Latina, la CEPAL, creada y animada por latinoamericanos, dio un sentido concreto a esa esperanza a la vez modernizadora y democrática. Ese optimismo que veía las Luces, encendidas en Occidente, iluminar el mundo entero, fue de corta duración. Primero porque el agotamiento del colonialismo europeo no puso fin a la dominación de las grandes potencias, dominación económica neocolonialista pero también conquista militar y hegemonía política: los Estados Unidos se comprometieron masivamente en Vietnam e intervinieron brutalmente en América central y menos directamente en América del Sur; la Unión Soviética, apoyada por Cuba, extendió su presencia militar en África y en el Caribe antes de invadir Afganistán; Francia mantuvo su presencia militar en África. Luego, y sobre todo, porque muchos nuevos países, en lucha con la debilidad de su Estado, su falta de integración social y su subdesarrollo económico, pasaron bajo el control de regímenes autoritarios, civiles o militares. La llamada leninista a la alianza de las luchas de clase anticapitalistas y de las luchas nacionales antiimperialistas se rompió pronto y el nacionalismo de Estado aventajó casi en todas partes a la acción de las clases populares, dema-

siado débiles y sometidas a la intervención del poder político. Durante un largo período, dominado por la guerra en Vietnam, el apoyo al Tercer Mundo se radicalizó y se volvió un tercermundismo olvidado de las exigencias de la modernización que sólo hacia hincapié en la construcción de un poder político revolucionario o en la reconstrucción de una identidad cultural nacional o regional. La revolución cultural china dio ocasión a algunos intelectuales no sólo a mostrar su ignorancia, sino también a condenar de manera irresponsable las instituciones de la democracia burguesa. Cierto que ese movimiento de ideas se dirigió más hacia Asia y África que hacia la América Latina, pero, en este continente, alimentó un entusiasmo por las guerrillas que contribuyó a debilitar la participación política y la democracia. Hoy los errores de una representación que había falseado gravemente la realidad y había conducido a errores políticos dramáticos, han relanzado el péndulo en una dirección opuesta. ¡Amparo para el tercermundismo! Ya no se habla más que de progreso de las intituciones democráticas. Los actores sociales, peligrosamente identificados por los ideólogos del período precedente con dirigentes políticos o creencias religiosas, son rechazados, olvidados. Inversión de ideología que alcanza al Tercer Mundo tanto como a nuestra sociedad.

Después de la sucesión de estas figuras del Tercer Mundo, en primer lugar nueva modernidad, luego víctima del imperialismo, y, por último, terreno de creación de nuevas democracias, ¿dónde estamos hoy? Los análisis que he realizado a lo largo de este libro están lejos del tercermundismo doctrinario y de las formas excesivas de la teoría de la dependencia. Les reprochan ocultar los procesos políticos y sociales internos de las sociedades dependientes para explicar todo desde el exterior, por un imperialismo que se convierte en un *deus ex machina* cuya acción siempre fulminante sacan a escena algunos intelectuales. Pero se resisten en igual medida a reducir los problemas sociales del desarrollo a la formación del mercado y de instituciones representativas, porque el campo de acción del uno y de los otros está limitado por la importancia tanto de los marginados y de los excluidos como de los privilegiados y por la potencia de las fuerzas económicas transnacionales y de todos los factores de dependencia económica y política. La experiencia de la América Latina debe renovar el pensamiento social y guardarla de todas las ideologías que traten de eliminar a los hombres, sus proyectos y sus conflictos de una historia que se haría al margen de ellos.

No habiendo cedido en ningún instante a la ilusión de una visión épica de la historia latinoamericana, no habiendo mostrado nunca al pueblo, a las masas, a los campesinos o el proletariado industrial subiendo victoriosamente al asalto del poder, habiendo subrayado muchas veces la extraña debilidad de los movimientos y de los partidos revolucionarios y la dependencia de los actores sociales respecto a las intervenciones del Estado, me siento libre para recordar que la heteronomía de los actores

sociales no significa su ausencia y no nos autoriza a elevar, entre demandas sociales y ofertas políticas, la separación que introducen quienes ven la política como un mercado donde el poder juega el papel del dinero. El actor social «consciente y organizado» apenas existe en América Latina, pero el actor social mezclado a las fuerzas políticas y a las protestas morales está presente en todas partes. Neoliberales que no hablan más que de instituciones y radicales que no hablan más que de imperialismo participan en la misma caza de los actores sociales que, desde hace treinta años, es el gran juego de las ciencias sociales. Y sin embargo esos actores están ahí, encerrados a veces en la defensa comunitaria y la expresión religiosa, manipulados en otras ocasiones por los aparatos o los líderes políticos, pero bastante presentes para que podamos separar los mecanismos políticos de los problemas, de las reivindicaciones y de los movimientos sociales. Quienes oponen los movimientos sociales a la democracia están ciegos y preparan la destrucción de los primeros por un poder autoritario; pero los que no hablan más que de instituciones y de reglas de juego construyen sobre la arena. El futuro de la América Latina depende, desde luego, en parte del futuro de la economía mundial y en parte de su propia capacidad de construir democracias representativas, pero depende sobre todo de la transformación de las demandas sociales en acción política, de las protestas morales en reformas, de la conciencia nacional en voluntad de modernización. Incluso aunque los actores sean débiles, estén ausentes o desarticulados, siempre es en términos de actores y de capacidad de acción como se plantean los problemas de América Latina. En ese punto su estudio puede ayudarnos a nosotros mismos a redescubrir que entre la lógica implacable del control social y la libertad salvaje del beneficio, lo esencial de la vida social está hecho de relaciones entre actores y sólo la combinación de sus esperanzas y de sus combates puede producir lo que nosotros llamamos el desarrollo, es decir, una capacidad de acción más fuerte de la sociedad sobre ella misma y, por consiguiente, a un tiempo, el triunfo económico y una mayor participación social y política.

Referencias cronológicas

ARGENTINA	CHILE	URUGUAY/PARAGUAY
1912. Sufragio universal secreto.	1879-83. Guerra del Pacífico.	1903. U. Elección de J. Battle y Ordóñez.
1916-22. H. Yrigoyen, presidente.	1920. A. Alessandri, presidente.	
1918. Reforma universitaria de Córdoba.	1924-25. Golpes de Estado militares.	1907. U. Ley sobre el divorcio.
1930. Golpe de Estado del general Uriburu.	1925. Nueva Constitución.	1909. U. Ley sobre la enseñanza laica obligatoria.
	1927-31. Presidencia del general Ibáñez.	1932-35. P. Guerra victoriosa del Chaco.
	1932. República socialista dirigida por Grove, luego por Dávila.	1933. U. Dictadura de G. Terra.
		1934. U. Nueva Constitución.
1933. Pacto Roca-Runciman.	1932-38. Segundo gobierno de A. Alessandri.	1936. P. Gobierno militar del coronel Franco.
	1938. Matanza de jóvenes nazis. Victoria del Frente Popular. P. Aguirre Cerda, presidente.	
1943. Alzamiento militar.	1939. Gran terremoto.	1939. P. Restauración liberal. Mariscal Estigarribia.
1945. Eliminación, luego regreso triunfal de Perón al Gobierno tras la manifestación del 17 de octubre.	1942-46. J. A. Ríos, presidente.	1947. U. L. Battle y Ordóñez, presidente.
	1946-52. G. González Videla, presidente.	1947. P. Levantamiento militar liberal, *febrerista* y comunista.
1946. Elección de Perón.	1947. Ley de defensa de la democracia.	
1953. Muerte de Eva Perón.	1952-58. Segunda presidencia del general Ibáñez.	1948. P. R. González, *colorado*, presidente.
1955. Golpe de Estado militar, Perón exiliado. Lonardi-Aramburu.	1953. Fundación de la CUT.	1952. U. Reforma de la Cons-

1957. Escisión del Partido Radical, los votos en blanco (peronistas) los más numerosos.
1962. Frondizi elegido presidente con el apoyo de los peronistas.
Victoria peronista en las elecciones de gobernador.
Golpe de Estado militar.
1962-63. Presidencia de Guido.
1963. Elección presidencial del radical Ilía, el peronismo fuera de la ley.

1957. Revueltas urbanas en Santiago.

1958-1964. J. Alessandri, presidente.

titución, vuelta a un ejecutivo colegiado.
1954. P. Golpe de Estado del general Stroessner, que se somete al Partido *Colorado*.
1958. U. Victoria del Partido Blanco. Nardone, presidente.

1964. Fracaso de una tentativa de regreso de Perón.
1966. Golpe de Estado del general Onganía.
A. Kriegger Vasena, ministro de Economía.

1964-70. E. Frei, demócrata-cristiano, presidente.
Reforma agraria y desarrollo del sindicalismo agrícola.

1966. U. Victoria de los *colorados*.
Gestido, presidente.
Creación de la CNT.

1967. Crisis universitaria.
Creación del MIR.

1967. U. Nueva Constitución.
1968. U. Pacheco Areco, presidente.

1969. *Cordobazo*.
1970. Asesinato del general Aramburu, inicio de la acción de los *montoneros*.

1969. Sangrienta expulsión de ocupantes ilegales de tierras en Puerto Montt.

1969. La Iglesia rompe con el régimen.

1970-71. El general Levingston sustituye a Onganía.

1970. Elección de S. Allende, candidato de la Unidad Popular.
Asesinato del general Schneider.
Asesinato del dirigente demócrata-cristiano Pérez Zujovich.

1970-72. U. Acciones violentas de los *tupamaros*.

1971-73. El general Lanusse, presidente de la junta militar.

1971. Congreso del PS en La Serena.
1972. Huelga de transportistas y comerciantes.
Nuevo gobierno dirigido por el general Prats (octubre).

1971. U. Formación del *Frente Amplio*.
Elección de J. M. Bordaberry.

1973. Éxito electoral de los peronistas, H. Cámpora, presidente.
Retorno de Perón, que sustituye a Cámpora.

1973. Éxito de la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias.
11 de septiembre: golpe de Estado militar, junta presidida por el general Pinochet.

1973. U. Bordaberry disuelve el Parlamento.
1973. P. Inicio de la construcción de la presa de Itaipú.

1974. Muerte de Perón. Le sustituye Isabel, su mujer. Influencia de López Rega.

1974. El general Pinochet, jefe supremo de la nación.

1975. Devaluación brutal, aumento de la inflación, exilio de López Rega.
1976. Golpe de Estado, junta presidida por el general Videla.
Martínez de Hoz, ministro de Economía.

1975. «Choque» económico, J. Cauas.

1977. Sustitución de la DINA por el CNI.
1978. Éxito del referendo.
Eliminación del general Leigh.

1976. U. Los militares eliminan a Bordaberry.

Inicio de la represión violenta.	1979. Plan Laboral. 1980. Referendo aprobando la nueva Constitución.	1980. U. Fracaso del referendo. 1980. P. Fin de los trabajos y de la prosperidad.
1981. El general Viola sustituye al general Videla (marzo). El general Galtieri sustituye al general Viola (diciembre).	1981. Inicio de la crisis financiera económica.	1981. U. El general Álvarez sucede al general Mendes.
1982. Ocupación de las islas Malvinas, guerra con Gran Bretaña, capitulación argentina (14 de junio). Dimisión de Galtieri, disolución de la junta, el general Bignone, presidente.		
1983. Elecciones libres, R. Alfonsín, presidente.	1983. Primera *protesta.* Creación de la Alianza Democrática. O. Jarpa, ministro del Interior.	1983. U. *Protesta* nacional. 1984. U. Elecciones libres. J. Sanguinetti, *colorado,* presidente.
1985. Plan Austral (14 de julio), éxito radical en las elecciones parlamentarias.	1984. Acuerdo nacional. Cambio de política económica.	
	1985. Asesinato de tres dirigentes comunistas.	1984-95. P. Ocupación de tierras.
1986. Condena de dirigentes militares. Ley del *Punto Final.*	1986. *Demanda de Chile.* Atentado contra el general Pinochet.	
1987. Presión militar por la amnistía. Victoria peronista en las elecciones.	1987. Llamada de personalidades a elecciones libres. Viaje del papa Juan Pablo II.	
1989. Menem triunfa en las elecciones presidenciales de mayo.	1989. Victoria dc la oposición democrática en el plebiscito previsto por la Constitución.	1989. Derrocamiento del general Stroessner. 1989. Referéndum nacional para el mantenimiento de la amnistía.

PERÚ	BOLIVIA	ECUADOR
1895-99. Dictadura de N. Piérola.	1781. Levantamiento de Tupac Katari.	1895-1911. Presidencia del general Alfaro.
1919-30. Presidencia de A. Leguía.	1883. Bolivia cede a Chile su acceso al mar.	1925. Revolución de julio.
1924. Fundación del APRA.		
1930. Sánchez Cerro derroca a Leguía.	1932-35. Derrota del Chaco.	1933-35. Primera presidencia de J. M. Velasco Ibarra.
1931. Sánchez Cerro, asesinado por un aprista.		
1932. Levantamiento aprista y represión en Trujillo.		
1933-39. Presidencia de O. Benavides.	1936-40. Gobierno del coronel Busch.	1941. Guerra fronteriza con el Perú.
1939-45. Presidencia de Manuel Prado.	1942. Huelga de mineros en Catavi, sangrienta represión.	

1945. Elección de J. L. Bustamante con el apoyo del APRA.

1947. Asesinato del director de *La Prensa*.

1948. Golpe de Estado del general Odría.
Revolución restauradora.

1950. Odría, presidente constitucional.
Persecuciones contra el APRA.

1956. Elección de M. Prado, *convivencia* con el APRA.

1959-61. Pedro Beltrán, primer ministro.

1962-63. Movimiento campesino del valle de la Convención.

1962. Golpe de Estado militar para impedir la elección de Haya de la Torre.

1963. Elección de F. Belaúnde Terry, de *Acción Popular*.

1964. Reforma agraria.

1965. Guerrilla de De la Puente, Lobatón y Béjar.

1968. Golpe de Estado del general Velasco Alvarado.

1969. Reforma agraria.

1975. El general Morales Bermúdez sustituye al general Velasco.

1980. Segunda elección de Belaúnde.
Inicio de la gran ofensiva de *Sendero Luminoso*.

1983. A. Barrantes, de *Izquierda Unida*, elegido alcalde de Lima.

1944. Gobierno nacionalista de Villarroel.

1952. Revolución dirigida por el MNR.
Reforma agraria, nacionalización del estaño.
V. Paz Estenssoro, presidente.

1956-60. H. Siles Suazo, presidente.

1960-64. Segunda presidencia de V. Paz. E. J. Lechín, vicepresidente.

1964. Golpe de Estado del general Barrientos.

1965. Huelga de mineros.

1967. Encarcelamiento de R. Debray.
Muerte de E. Guevara (9 de octubre).

1969. El general Ovando, presidente.

1970. Golpe de Estado del general Torres.

1971. Asamblea popular.
Golpe de Estado del general Banzer (agosto).

1973. Manifiesto de Tiahuanaco.

1978. Caída del general Banzer.
Formación del movimiento katarista.

1979. Resistencia popular al golpe de Estado de Natusch (noviembre). Gobierno de L. Gueiler.

1980. Golpe de Estado del general García Meza.

1982. Elección de H. Siles Suazo.

1983. La COB asegura la cogestión de la COMIBOL.

1944-47. Segunda presidencia de Velasco Ibarra.

1947. Elección de Galo Plaza.

1952-56. Tercera presidencia de Velasco Ibarra.

1956-60. Presidencia de Camilo Ponce.

1960. Cuarta presidencia de Velasco Ibarra.

1961. Golpe de Estado militar. Arosemena, de Guayaquil, presidente.

1963. Golpe de Estado militar.

1964. Reforma agraria.

1965. Manifestación popular y caída de la junta.

1968. Quinta presidencia de Velasco Ibarra.

1970. Velasco Ibarra toma poderes dictatoriales.

1972. Golpe de Estado del general Rodríguez Lara.

1973. Entrada en la OPEP.
Reforma agraria.

1976. Triunvirato militar.

1979. Elección de J. Roldós.

1979-82. Varias huelgas generales dirigidas por el FUT.

1981. Muerte del presidente Roldós, sustituido por O. Hurtado.

1983. Elección de L. Febres Cordero.

1985. Elección de Alan García (agosto).
1986. El APRA conquista la alcaldía de Lima.
Matanza de prisioneros políticos.

1984. Bolivia suspende el pago de sus deudas.
1985. Huelga general de dieciséis días.
Elección de V. Paz Estenssoro.
1987. Reforma monetaria.

1986. Victoria del no en el referendo.

1987. L. Febres secuestrado por el ejército.
Terremoto.
1988. Elección de Rodrigo Borja (socialdemócrata).

BRASIL

1926-1927. Sublevación de los *tenentes,* columna Prestes.
1930. Golpe de Estado de G. Vargas.
1932. Sublevación de São Paulo.
1935. Sublevación de L. Prestes.
1937. *Estado Novo.*
1938. Tentativa de golpe de Estado integralista.
1945-51. Presidencia del mariscal Dutra.
1951. Elección de G. Vargas.
1953. Creación de Petrobrás.
Gran huelga en São Paulo.
1954. Suicidio de Vargas.
1955-59. *Ligas Camponesas.*
1955. Elección de J. Kubitschek.
1959. Creación de la SUDENE.
1960. Creación de Brasilia.
1960. Elección de J. Quadros.
1961. Dimisión de Quadros, sustituido por J. Goulart tras la instalación del régimen parlamentario.
1962. M. Arraes, elegido en Recife.
1963. Vuelta al régimen presidencial.
1963. Creación de la CONTAG.
1964. Golpe de Estado del mariscal Castelo Branco.
1965. Éxitos electorales de la oposición.
1967. Creación de los dos partidos, RENA y MDB.

COLOMBIA

1034-38. Alfonso López, presidente.
1938-42. E. Santos, presidente.
1942. Segunda elección de López.
1946. Victoria del conservador moderado Ospina Pérez.
1948. Asesinato de J. E. Gaitán (9 de abril).
Bogotazo.
1949. Laureano Gómez, presidente.
1949-53. Período central de la violencia.
1953. Golpe de Estado del general Rojas Pinilla.
1956. Frente nacional entre liberales y conservadores.
1957. Rojas Pinillas, depuesto.
1958. A. Lleras Camargo, liberal, presidente.
1961. El ejército destruye Marquetalia.
1962. León Valencia, conservador, elegido presidente.
1965. Creación del ELN de Flavio Vásquez.

VENEZUELA

1908-35. Dictadura del general Gómez.
1918. Inicio de la explotación del petróleo.
1928. Manifestaciones estudiantiles.
1935. Creación del partido Acción Democrática por R. Betancourt.
1947. Creación del COPEI por R. Caldera.
Nueva Constitución.
Rómulo Gallegos, presidente.
1948. Golpe de Estado.
1952. Golpe de Estado de Pérez Jiménez.
1958. Golpe de Estado e insurrección, junta de gobierno presidida por el almirante Larrazábal.
Elección presidencial de R. Betancourt.
1960. Reforma agraria.
1961. Acuerdo de Punto Fijo, Nueva Constitución.
1962. Comienzo de la guerrilla pro castrista.
1963. Formación de las FALN.
1963-68. R. Leoni, presidente.
1966. El ejército ocupa la universidad.

1967. Costa e Silva, presidente.
1967-74. Delfim Neto, ministro de Finanzas.
1968. Huelga en Osasco y Contagem.
Sublevación estudiantil.
Golpe de fuerza contra el Congreso.
Acta institucional número 5 (13 de diciembre).
1970-74. Presidencia del general Médici.
1974-79. Presidencia del general Geisel.
1974. Victoria electoral del MDB.
1979-84. Presidencia del general Figueiredo.
1979. Amnistía.
1982. Victoria de la oposición en las elecciones.
1983. Revueltas en São Paulo.
1984. Elección a la presidencia de T. Neves, que muere antes de asumir sus funciones.
El vicepresidente Sarney le sustituye.
1985. Elección municipal. Victoria de J. Quadros en São Paulo.
1986. Plan Cruzado.
Aplastante victoria del PMDB en las elecciones a gobernador y a la Asamblea legislativa-constituyente.
Nuevas medidas económicas.
1987. Brasil suspende el pago de los intereses de su deuda.
Plan económico Bresser Pereira.
1988. Voto de la Constitución, división del PMDB, victoria del PT en la elección municipal de São Paulo.

1966. Muerte de C. Torres.
Creación de la ANAPO.
Elección del liberal C. Lleras Restrepo.
1970. Elección del conservador M. Pastrana.
1974. Elección del liberal López Michelsen.
1978. Elección del liberal J. C. Turbay.
1981. El M-19 toma diplomáticos como rehenes.
1982. Elección del conservador P. Betancur.
Plan de pacificación.
1985. Toma del palacio de Justicia por un comando del M-19.

1968-73. Presidencia de R. Caldera.
1970. Creación del MAS.
1973-78. Presidencia de Carlos Andrés Pérez.
1976. Nacionalización de las compañías petroleras americanas.
1978-83. Presidencia de R. Herrera Campins.
1983. Devaluación.
Elección de J. Lusinchi.
1989. Elección de C. Andrés Pérez. Violentos motines urbanos.

MÉXICO

1876-1910. Presidencia de Porfirio Díaz.
1910. Sublevación de Madero e inicio de la revolución.
1911. Entrada de Madero en México, inicio del movimiento campesino de E. Zapata.

GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA

1909. N. Dimisión del presidente liberal Zelaya.
1910. N. Guerra civil. Desembarco de las tropas americanas.

COSTA RICA, PANAMÁ, HONDURAS, PUERTO RICO

1898. PR. España renuncia a la isla.
1903. P. Secesión de Colombia.
1907. H. Intervención militar estadounidense.
1912. P. Intervención militar estadounidense.

1913. Semana trágica, asesinato de Madero por Huerta. Carranza lanza el plan de Guadalupe.
1914. Congreso de Aguascalientes.
1917. Constitución.
1919. Asesinato de Zapata.
1920-24. Presidencia de A. Obregón.
1921. Vasconcelos, ministro de Educación.
1924-28. Presidencia de Plutarco Calles.
1926-29. Movimientos de los Cristeros.
1928. Reelección y asesinato de Obregón.
1934-40. Presidencia de L. Cárdenas.
Reforma agraria.
Ruptura con Calles.
1936. Creación de la CTM (Lombardo Toledano).
1936. Nacionalización del petróleo.
1940. Elección de M. Ávila Camacho.
1945. Transformación del PRM en PRI.
1946. Elección de M. Alemán. Desarrollo de la Universidad de México.

1952. Elección de A. Ruiz Cortínez.

1958. Sindicato independiente de los ferroviarios.
D. Vallejo.
Elección de A. López Matos.

1964. Elección de C. Díaz Ordaz.

1968. Sindicato independiente de los electricistas.

1925-33. N. Ocupación militar americana.
1928. N. Sandino estable su cuartel general en las Segovias.
1931-44. G. Dictadura de J. Ubico.
1931-44. S. Dictadura del general M. Hernández Martínez.
1932. S. Sublevación campesina y represión sangrienta.
1933. N. Sacasa, presidente. Sandino firma un tratado con él.
1934. N. Asesinato de Sandino.
1936. N. Golpe de Estado de Somoza.
1944. G. Sublevación popular.
1944. S. Huelga general y golpe de Estado.
1945. G. Elección de J. J. Arévalo, medidas sociales y nacionalistas.
1950. S. Victoria electoral del Partido Revolucionario de Unificación Democrática de Osorio.

1950. G. J. Arbenz, presidente.
1953. G. Reforma agraria.
1954. G. Golpe de Estado de Castillo Armas apoyado por los Estados Unidos.
1957. N. Muerte de Anastasio Somoza, sustituido por su hijo Luis.
1958. G. M. Ydígoras, presidente.
1960. G. Fracaso del *putsch* Turcios-Sosa.
1960-61. G. Golpes de Estado.
1962. G. Fuerte actividad de la guerrilla.
1963. G. Golpe de Estado del coronel Peralta.
1966. G. Elección de J. C. Méndez Montenegro.
1968. G. Asesinato de consejeros militares y del

1914. P. Inauguración del canal.

1933. H. Dictadura de Carias apoyada por la United Fruit.

1940. PR. Creación y victoria del Partido Popular Democrático de L. Muñoz Marín.

1948. CR. Guerra civil, J. Figueres y la *Legión del Caribe* entran en San José.
PR. Muñoz Marín, elegido gobernador.
1949. CR. Nueva Constitución.
1952. PR. Estado libre asociado a los Estados Unidos.
1953-57. CR. Presidencia de J. Figueres.
1952. H. Huelga de los obreros del plátano.
1956. H. Sangriento golpe de Estado.

1963. H. Golpe de Estado del general López Arellano.
1965. H. Elección de López Arellano como presidente.
PR. Victoria de los par-

Movimiento estudiantil y matanza de Tlatelolco (2 de octubre).	embajador americano por la guerrilla.	tidarios del Estado libre asociado.
	1969. S. Guerra del fútbol Honduras-El Salvador.	1968-69. P. Crisis política y golpe de Estado del general Torrijos.
1970. Elección de L. Echeverría.	1970. G. Muerte de Yon Sosa.	PR. Victoria electoral de los integracionistas.
	1972. N. Destrucción de Managua por un terremoto.	
1973. Asesinato de E. Garza Sada, de Monterrey	1972. S. N. Duarte, vencedor de las elecciones pero impedido de ocupar el puesto por un golpe de Estado.	1970-74. CR. Segunda presidencia de J. Figueres.
		1972. H. Golpe de Estado del general López Arellano.
1976. Grave crisis financiera y política.	1974. N. División del Frente Sandinista.	1977. P. Torrijos asume los plenos poderes. Acuerdo con los Estados Unidos sobre el canal.
Inicio de la gran producción de petróleo.	1978. N. Reunificación del Frente Sandinista.	
Elección de López Portillo.	Asesinato de P. J. Chamorro.	1981. PR. Muerte de Torrijos.
1977. Ley de reforma política.	1979. N. Entrada de los sandinistas en Managua (19 de julio).	
	S. Elección de N. Duarte.	
	1980. S. Asesinato del arzobispo Romero.	
1982. Gran crisis financiera (agosto).	1982. N. Deportación de los miskitos.	1982-86. CR. Presidencia de Monge.
Nacionalización de los bancos.	1983. N. Incidentes durante la visita del Papa.	
Elección de M. de la Madrid (diciembre).	1984. N. La oposición no participa en las elecciones.	
	S. Reelección de Napoleón Duarte.	
1985. Terremoto en México (septiembre).	1985. N. D. Ortega se convierte en presidente. Estado de sitio.	1986-90. CR. Presidencia de Arias Sánchez.
1986. Grave crisis financiera, doble devaluación.	1986. G. El demócrata cristiano Cerezo, presidente.	1986. P. Manifestación contra el general Noriega.
1987. Manifestaciones estudiantiles y populares.	1987. N. El Congreso americano vota una ayuda a los *contras*.	Acuerdo entre cinco países centroamericanos.
	Irangate.	El presidente Arias, de Costa Rica, recibe el premio Nobel de la Paz.
1988. Difícil elección para la presidencia de C. Salinas ante C. Cárdenas.	1988. La extrema derecha gana las elecciones.	1988-89. El general Noriega se mantiene en el poder pese a la oposición de los Estados Unidos. Las elecciones de mayo de 1989 tienen que ser anuladas por el Gobierno del general Noriega para no admitir su derrota y frenar las protestas contra el fraude electoral.

CUBA	REPÚBLICA DOMINICANA, HAITÍ, JAMAICA, GUAYANA, ANTILLAS	GENERALIDADES
1898. Tratado de París, España renuncia a Cuba.		
1906-13. Intervención militar de los EE.UU.		
1917 y 1919. Nuevas intervenciones militares de los EE.UU.	1916-24. RD. Ocupación militar de los EE.UU.	
1925-33. Gobierno del general Machado.	1930. RD. Trujillo toma el poder.	
1933. Sublevación popular, Grau San Martín, presidente.		
1934. Golpe de Estado de F. Batista.	1937. RD. Asesinato de trabajadores temporeros haitianos.	
1940-44. Presidencia de F. Batista.		
1944-48. Nueva presidencia de Grau San Martín.		
1948-52. Presidencia de C. Prío Socarras.		1947. Doctrina Truman.
		1948. Creación de la OEA.
1951. Golpe de Estado de Batista.		1958. Manifestaciones anti-Nixon.
1953. Fidel Castro ataca el cuartel de la Moncada (26 de julio).	1950-56. H. Gobierno Magloire.	
1956. Desembarco de F. Castro en la provincia de Oriente, inicio de la guerrilla en Sierra Maestra.	1957. H. Duvalier toma el poder.	
1959. Entrada victoriosa de Fidel Castro en La Habana. Primera reforma agraria.		
		1960. Mercado Común Centroamericano.
1960. Ruptura económica con los Estados Unidos, acuerdo económico con la URSS.		1960. Elección de J. F. Kennedy. Tratado de Montevideo: ALALC.
1961. Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. Desembarco americano en Playa Girón (17-19 de abril).	1961. RD. Asesinato de Trujillo.	1961. Reunión de Punta del Este. Alianza para el Progreso.
	1961. G. Victoria de C. H. Jagan.	
	1962. Independencia de Trinidad y Tobago.	1962. Cuba excluida de la OEA.
1962. La OEA rompe con Cuba. Crisis de los misiles. Creación de los ORI. Eliminación de A. Escalante.	1963. RD. J. Bosch, elegido presidente y derribado por un golpe de Estado.	
	1964. H. Duvalier, nombrado dictador vitalicio.	1964. Caída de Kruschev.
	1964. G. Victoria de Burnham.	1968. Reunión del episcopado latinoamericano en Medellín.
1963. Segunda reforma agraria.	1965. RD. Movimiento popular, desembarco americano, resistencia dirigida por el coronel Caamaño.	
1965. Guevara deja el Ministerio de Industria. Creación del PC cubano. Cuba no toma partido entre la URSS y China.	1966. G. Independencia.	
	1966-67. RD. Balaguer, presidente.	
1966. Conferencia Tricontinental de La Habana.		

Creación de la OLAS.
1967. Muerte de E. Guevara en Bolivia.
1968. F. Castro aprueba la intervención soviética en Checoslovaquia.
1970. Fracaso de la cosecha de los diez millones de toneladas de caña de azúcar.
1976. Nueva Constitución. Apoyo militar de Cuba en Angola.
1980. Éxodo de numerosos cubanos hacia los Estados Unidos.

1989. Fidel Castro critica la *perestroika.*

1971. H. J.-C. Duvalier sucede a su padre.
1973. RD. Muerte de Caamaño en una tentativa guerrillera.
1975. Surinam. Independencia.
1979. Granada. Golpe de Estado de Maurice Bishop.
1980. Surinam. Instauración de una dictadura militar.
1982. RD. Victoria del PRD.
1983. Granada. Asesinato de M. Bishop, desembarco de los EE.UU.
1984. RD. Motines urbanos.
1986. H. Caída y exilio de Duvalier.
1986. RD. Nueva elección de Balaguer.
1986. Surinam. Sublevación contra D. Bouterse.
1986. Trinidad y Tobago. El movimiento nacional popular pierde el poder que ostentaba desde hacía veinte años.

1969. Primera conferencia económica latinoamericana organizada por la CEPAL.

1975. La OEA levanta la cuarentena contra Cuba. Creación del SELA.
1978. Elección del papa Juan Pablo II.
1979. Conferencia episcopal de Puebla.

1984. Plan de paz del grupo Contadora. Declaración de Cartagena sobre la deuda externa.

Bibliografía

PRIMERA PARTE

I.1. El desarrollo de la América Latina

AHUMADA (J.): *En vez de la miseria,* Santiago, Ed. del Pacífico, 1968.

ALEXANDER (R. J.): *Labour Relations in Argentina, Brazil and Chile,* Nueva York, Mac Graw Hill, 1972.

ALTIMIR (O.): *La Dimensión de la pobreza en América Latina,* Santiago, CEPAL, 1978.

AMIN (S.): *Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique,* París, Minuit, 1973.

— «Acumulation on a World Scale», en *Monthly Review Press,* Nueva York, 1974.

APTER (D.): *The Politics of Modernization,* University of Chicago Press, 1965.

BARRIOS (A.): *La Construcción social de una disciplina: el caso de la sociología en Chile,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1986.

BASADRE (J.): *Historia de la República del Perú,* Lima, 6.ª edición, 1968.

BETANCOURT (R.): *Venezuela. Política y petróleo,* México, FCE, 1956.

BEYHAUT (G. y H.): *América Latina,* tomo III, *De la independencia a la segunda guerra mundial,* México, Siglo XXI, 1986 (edición revisada de un libro publicado en alemán en 1965).

BID: *Tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo de América Latina,* Washington, 1979.

— *Informe sobre el desarrollo económico-social de la América Latina,* Washington, 1981.

BOURRICAUD (F.): *Pouvoir et Société dans le Pérou contemporain,* París, FNSP, 1967.
CARDOSO (F. H.) y FALETTO (E.): *Dependencia y desarrollo en América Latina,* México, Siglo XXI, 1969.
— *Sociologie du développement en Amerique Latine,* París, Anthropos, 1969.
— *Politique et développement dans les sociétés dépendantes,* París, Anthropos, 1971.
— *Empresário industrial e Desenvolvimento econômico no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1972.
— *Autoritarismo e Democratização,* Río, Paz e Terra, 1975.
— *Post-scriptum* a *Dependencia y desarrollo en América Latina,* en *Desarrollo Económico,* Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social, julio-septiembre de 1977, págs. 273-299.
— *Les idées à leur place,* París, A.-M. Métaillié, 1984 (1.ª ed. en 1980).
CARDOSO (F. H.) y REYNA (J. L.): *Industrialización, estructura ocupacional y estratificación social en América Latina,* Santiago, ILPES, 1966.
CARDOSO (F. H.) y WEFFORT (F.) (bajo la dirección de): *América Latina. Ensayos de interpretación sociológico-política,* Santiago, ILPES, 1966.
CARMAGNANI (M.): *Storia dell'America Latina,* Florencia, Nueva Italia, 1979.
CEPAL, *El proceso de industrialización en América Latina,* Nueva York, 1965.
— *Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina. Una interpretación global,* Santiago, CEPAL-PNUMA, 1979.
CIDA, *La Tenencia de la tierra en América Latina,* México, 1967.
COLLIER (D.) (bajo la dirección de): *The New Authoritarianism in Latin America,* Princeton, Princeton University Press, 1979.
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN UNIVERSITARIA: *Modernización y democratización en la universidad latinoamericana,* Santiago, CPU, 1971.
CUEVA (A.): *El desarrollo del capitalismo en América Latina,* México, 1977.
DAHSE (F.): *Mapa de la extrema riqueza,* Santiago, Aconcagua, 1979.
DEAN (W.): *The Industrialization of São Paulo, 1880-1945,* Texas University Press, 1969.
DELICH (F.): *Crisis y protesta social,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.
DE RIZ (L.): *Sociedad y política en Chile. De Portales a Pinochet,* México, UNAM, 1979.
DESAL: *Marginalidad en América Latina: un ensayo de diagnóstico,* Barcelona, Herder, 1969.
DI TELLA (T.): *El sistema político argentino y la clase obrera,* Buenos Aires, Eudeba, 1960.
— «Partidos del pueblo en América Latina. Revisión teórica y reseña de tendencias históricas», en *Desarrollo Económico,* Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social, enero-marzo de 1983, páginas 451-483.
DOS SANTOS (T.): *Dependencia y cambio social,* Santiago, CESO, 1970.
FAJNZYLBER (F.): «Intervención, autodeterminación e industrialización en América Latina», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1983.
— *La industrialización trunca de América Latina,* México, Nueva Imagen, 1983.
FALETTO (E.): *Movimiento laboral y comportamiento político,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1977.
— *Estilos alternativos de desarrollo y opciones políticas,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1980.

— *Opciones políticas en América Latina. Comentario crítico a la propuesta del Dr. Presbisch,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1981.

FALETTO (E.), RUIZ (E.) y ZEMELMAN (H.): *Génesis histórica del proceso político chileno,* Santiago, Quimantú, 1971.

FARÍA (V.): *Occupational Marginality, Employement and Poverty in Urban Brazil,* Cambridge, Harvard University Press, 1976.

FERNANDES (F.): *Sociedade de classes e subdesenvolvimento,* Río, Zahar, 1968.

— *A Revolução burguêsa no Brasil,* Río, Zahar, 1975.

FERRER (A.): *La economía argentina,* México-Buenos Aires, FCE, 1.ª ed., 1963.

FFRENCH DAVIS (R.): «Inestabilidad externa en América Latina», en *Estudios CIEPLAN,* núm. 6, 1981 (reúne datos generales sobre las inversiones extranjeras).

FILGUEIRA (C.): *Transformaciones recientes en los países de la costa atlántica,* Santiago, CEPAL, mimeografiado, 1982.

FILGUEIRA (C.) y GENELETTI (C.): *Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina,* Santiago, CEPAL, serie «Cuadernos de la CEPAL», 1981.

FLASCO (San José de Costa Rica): *América Latina: ideología y cultura,* 1982.

FOXLEY (A.): «Inflación con recesión: las experiencias de Brasil y Chile», en *Estudios CIEPLAN,* julio de 1979, págs. 7-61.

— «Experimentos neoliberales en América Latina», en *Estudios CIEPLAN,* núm. 7, 1982.

FURTADO (C.): *A Economia brasileira,* Río, 1954.

— *Politique économique de l'Amerique Latine,* París, Sirey, 1970.

— *Formação econômica do Brasil,* 7.ª edición, São Paulo, Ed. Nacional, 1957.

— *Desenvolvimento e subdesenvolvimento,* Río, Fundo de Cultura, 1961.

— *Um projeto para o Brasil,* Río, Sage, 1968.

— *Teoria e Política do desenvolvimento econômico,* 3.ª edición revisada, Sao Paulo, Ed. Nacional, 1969.

— *A Economia latino-americana,* Río, 1969.

— *O mito do desenvolvimento econômico,* Río, Paz e Terra, 1974.

— *A fantasia organizada* (autobiografía), Río, Paz e Terra, 1980.

— *O Brasil pós-milagre,* Río, Paz e Terra, 1982 [trad. francesa: *Le Brésil après le miracle,* París, MSH, 1987; comprende extractos de otros libros].

— *A nova dependência,* Río, Paz e Terra, 1983.

GARCÍA (N.): *Absorción creciente con subempleo persistente. América Latina, 1950-1980,* Santiago, PREALC, serie «Trabajos ocasionales», 48, 1982.

— *Industria manufacturera y empleo. América Latina, 1950-1980,* Santiago, PREALC, serie «Trabajos ocasionales», 49, 1982.

GARCÍA (N.) y TOKMAN (V.): *Acumulación, emplo y crisis,* Santiago, PREALC, 1982.

GARRETÓN (M. A.): *El proceso político chileno,* Santiago, FLACSO, 1983.

GARRETÓN (M. A.) y MOULIÁN (T.): *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile,* Santiago, MINGA, 1983.

GERMANI (G.): *Política y Sociedad en una época de transición,* Buenos Aires, Eudeba, 1962.

— *Politique, société et modernisation,* Gembloux, Duculot, 1972 (extracto del libro citado anteriormente y de otras dos obras).

GERSCHENKRON (A.): *Economic Backwardness in Historical Perspective,* Cambridge, Harvard University Press, 1962.

GONZÁLEZ CASANOVA (P.): *La democracia en México,* México, Era, 1965. [La *Revista Mexicana de Sociología* ha publicado un número especial en enero-marzo de 1985 para celebrar el 20 aniversario de este libro.]
— (bajo la dirección de): *Imperialismo y liberación en América Latina,* México, 1978.
GRACIARENA (J.): *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina,* Buenos Aires, Paidos, 1967.
— «Tipos de concentración del ingreso y estilos políticos en América Latina», en *Revista de la CEPAL,* Santiago, 2.º trimestre de 1976.
GUNDER FRANK (A.): *Le développement du sous-développement. L'Amérique Latine,* trad. francesa, París, Maspero, 1964.
HALPERIN DONGHI (T.): *Histoire contemporaine de l'Amérique Latine,* traducción francesa, París, Payot, 1972.
HEINTZ (P.): *The Future of Development,* Berna, Hans Huber, 1973.
HIRSCHMAN (A.): *The Strategy of Economic Development,* New Haven, Yale University Press, 1958.
— *Journeys toward Progress,* Nueva York, Twentieth Century Fund, 1963.
— *A Bias for Hope. Essays on Development,* Yale University Press, 1971.
— *Essays in Trespassing,* Cambridge University Press, 1981.
HUNTINGTON (S.): *Political Order in Changing Societies,* Nueva York, Yale University Press, 1968.
IGLESIAS (E.): «Reflexiones sobre la economía latino-americana durante 1982», en *Revista de la CEPAL,* abril de 1983, págs. 7-51.
Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM: *Las clases sociales en América Latina,* México, Siglo XXI, 1973.
— *Clases sociales y crisis políticas en América Latina,* México, Siglo XXI, 1977.
JAGUARIBE (H.) y otros: *Problemas de desenvolvimiento latino-americano,* Río, Civilização Brasileira, 1967.
— *Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político,* Río, Fundo de Cultura, 1962; Paz e Terra, 1972.
— *La dependencia político-económica de América Latina,* México, Siglo XXI, 5.ª edición, 1973.
JELIN (E.): *La protesta obrera,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1974.
JOHNSON (J.): *Political Change in Latin America. The Emergence of the Middle Sectors,* Standford, Standford University Press, 1958.
— (bajo la dirección de): *Continuity and Change in Latin America,* Standford, Standford University Press, 1958.
KALMANOVITZ (S.): *Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo dependiente,* Bogotá, Pluma, 1972.
KAZTMAN (R.) y REYNA (J. L.) (bajo la dirección de): *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina,* México, El Colegio de México, 1979.
KERR (C.) y otros: *Industrialism and Industrial Man,* Cambridge, Harvard University Press, 1960.
KLEIN (E.) (bajo la dirección de): *Economía campesina y empleo,* PREALC, 1981.
KOWARICK (L.): *Capitalismo e marginalidade na América Latina,* Río, Paz e Terra, 1975.
KUZNETS (S.): «Quantitative Aspects of the Economic Growth of nations: Industrial Distribution of National product and Labour Forece», en *Economic*

Development and Cultural Change, suplemento al volumen V, julio de 1957.

LAGOS (R.): *La concentración del poder económico. Su teoría. Realidad chilena,* Santiago, Ed. del Pacífico, 1960.

— *La industria en Chile: Antecedentes estructurales,* Santiago, Universidad de Chile, 1966.

LAGOS (R.) y TOKMAN (V.): *Monetarismo global, empleo y estratificación social,* Santiago, PREALC, 1982.

— «Le secteur émergent de la bourgeoisie», en *Amérique Latine* (París), núm. 16, 1981.

LAMBERT (J.): *Amérique Latine. Structures sociales et institutions politiques,* París, PUF, 1963, 2.ª ed., 1968.

— *Os dois Brasis,* São Paulo, Ed. Nacional, 8.ª ed., 1973.

LAMBERT (J. D.) y MARTIN (J. M.): *L'Amérique Latine. Économies et sociétés,* París, Colin, 1971.

LECHNER (N.) (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* México, Siglo XXI, 1981.

LIPSET (S. M.) y SOLARI (A.), editores: *Elites in Latin America,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.

LYNN SMITH (T.): *Studies of Latin-American Societies,* Nueva York, Doubleday Anchor Books, 1980.

MANIGAT (L.): *L'Amérique Latine au XXe siècle, 1889-1929,* Université Paris I, París, Imprimerie Nationale, 1972.

MARIÁTEGUI (J. C.): *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* Lima, Amantu, 7.ª ed., 1965 (aparecido en 1928) [trad. francesa, París, Maspero, 1968].

MARTINS (L.) (bajo la dirección de): *L'Amérique Latine. Crise et dépendance,* París, Anthropos, 1972.

— *Pouvoir et développement économique au Brésil. 1930-1964,* París, Anthropos, 1976.

MEDINA ECHAVARRÍA (J.) e HIGGINS (B.) (bajo la dirección de): *Aspectos sociales del desarrollo económico de América Latina,* París, UNESCO, 1963.

MELLER (P.): *El patrón de concentración industrial de América Latina y de Europa occidental,* Santiago, CIEPLAN, 1978.

MELLER (P.), CORTÁZAR (R.) y MARSHALL (J.): «La evolución del empleo en Chile, 1974-1978», en *Estudios CIEPLAN,* Santiago, diciembre de 1979, págs. 141-158.

MENDES (C.) (bajo la dirección de): *Le mythe du développement,* París, Le Seuil, 1977.

MEYER (J.): *La révolution mexicaine, 1909-1940,* París, Calmann-Lévy, 1972.

MOLINA (S.): «La pobreza. Descripción y análisis de políticas para superarla», en *Revista de la CEPAL,* diciembre de 1982.

MOULIÁN (T.) y VERGARA (P.): *Estado, ideología y políticas económicas en Chile, 1973-1978,* Santiago, CIEPLAN, 1979.

MUÑOZ (H.) (bajo la dirección de): *Crisis y desarrollo alternativo en Latinoamérica,* Santiago, Aconcagua, CERC-ICI, 1985.

MUÑOZ (O.): *Chile y su industrialización,* Santiago, CIEPLAN, 1986.

MURMIS (M.) y PORTANTIERO (J. C.): *Estudios sobre los orígenes del peronismo,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

NIEDERGANG (M.): *Les Vingt Amériques Latines,* París, Plon, 1962, 2.ª ed., Seuil, 1969.

NUN (J.): «Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal», en *Revista Latinoamericana de Sociología,* Buenos Aires, volumen V (2), 1969.

— «Marginalidad y otras cuestiones», en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,* diciembre de 1972, págs. 97-128.

O'DONNELL (G.): *Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado,* Buenos Aires, CEDES, doc. núm. 2, 1975.

— «State and Alliances in Argentina, 1956-1976», en *Journal of Development Studies,* octubre de 1978, págs. 3-33.

OLIVEIRA (F. de): «A economia brasileira: crítica a razão dualista», en *Studios CEBRAP,* São Paulo, núm. 2, 1972, y en *Seleções CEBRAP,* ed. Brasiliense, 1975, págs. 5-78.

Ouvriers et Syndicats en Amérique Latine, núm. especial, *Sociologie du travail,* 1961, núm. 4.

PAZ (O.): *El laberinto de la soledad* [1.ª edición, 1950] (trad. francesa, París, Payot, 1959).

PÉCAUT (D.): *Política y sindicalismo en Colombia,* Bogotá, La Carreta, 1973.

— *L'ordre et la violence,* París, EHESS, 1987 (1.ª ed., tesis, 3 vols., París, 1978).

PINTO (A.): *Chile. Un caso de desarrollo frustrado,* Santiago, Ed. Universitaria, 1959.

— «Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1965.

— «Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de la América Latina», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1970.

— *Desarrollo económico y Relaciones sociales en Chile,* Buenos Aires, Solar, 1971.

PREALC: *El problema del empleo en América Latina: situación, perspectivas y políticas,* Santiago, 1976.

— *Employment in Latin America,* Nueva York, Praeger, 1978.

— *Necesidades esenciales y política de empleo en América Latna,* Ginebra, OIT, 1980.

— «Dinámica del subempleo en América Latina», en *Estudios e Informes de la CEPAL,* núm. 10, 1981.

— *Informes de la CEPAL,* núm. 10, 1981.

— *Sector informal: funcionamiento y políticas,* Santiago, PREALC, 1981.

— *Capitalismo periférico: crisis y transformación,* México, FCE, 1981.

— *Empleo y Salarios,* Santiago, 1983.

— *Modernización del mercado de trabajo y crisis en el istmo centroamericano,* octubre de 1985.

— *Buscando la equidad,* Santiago, 1986.

— *Ajuste y deuda social,* Santiago, 1987.

— *La deuda social,* Santiago, 1988.

PREBISCH (R.): *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano,* México, FCE, 1963.

— «Crítica al capitalismo periférico», en *Revista de la CEPAL,* primer semestre de 1976.

— «Estructura socioeconómica y crisis del sistema», en *Revista de la CEPAL,* 2.° trimestre de 1978.

— *Capitalismo periférico. Crisis y transformación,* México, FCE, 1981.
— «La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo», en *Revista de la CEPAL,* abril de 1981.
— «Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo», en *El Trimestre Económico,* abril-junio de 1983, págs. 1977-1093.
QUIJANO (A.): *Redefinición de la dependencia y proceso de la marginalización en América Latina,* Santiago, ILPES, 1971.
RAMA (G.) (bajo la dirección de): *Educación y sociedad en América Latina y el Caribe,* Santiago, UNICEF, 1980.
RANGEL (I.): *El tercermundismo,* Caracas, Monte Ávila, 1982.
RIBEIRO (D.): *El dilema de América Latina. Estructura de poder y fuerzas insurgentes,* México, Siglo XXI, 1971.
RODRIGUES (L. M.): *Conflito industrial e sindicalismo no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1966.
— *Industrialização e atitudes operárias,* São Paulo, Brasiliense, 1970.
ROUQUIÉ (A.): *L'État militaire en Amérique Latine,* París, Seuil, 1982.
— *Amérique Latine. Introduction à l'Extrême-Occident,* París, Seuil, 1987.
SCHMITTER (Ph.): *Interest Conflict and Political change in Brazil,* Standford, Standford University Press, 1971.
SCHVARZER (J.): *Martínez de Hoz. La lógica política de la política económica,* Buenos Aires, CISEN, 1983.
SCHWARTZMAN (J.): *São Paulo e o Estado Nacional,* São Paulo, DIFEL, 1975.
SERRA (J.) (bajo la dirección de): *Desarrollo latinoamericano. Ensayos críticos,* México, FCE, 1974.
— *América Latina. Ensaios de interpretação econômica,* Río, Paz e Terra (1976) (con ensayos de C. Furtado, F. H. Cardoso, M. C. Tavares, A. Pinto, F. Fajnzylber, etc.).
— *Ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira do após-guerra,* México, Cecade, julio de 1981.
SERRA (J.) y CARDOSO (F. H.): «Las desventuras de la dialéctica de la dependencia», en *Revista Mexicana de Sociología,* número especial, 1978, págs. 9-55.
SKIDMORE (Th.): *Politics in Brazil (1930-1964). An Experiment in Democracy,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.
SILVERT (K.): *The Conflict Society. Reaction and Revolution in Latin America,* Nueva York, 1966.
— *Expectant Peoples. Nationalism and Development,* Nueva York, Random House, 1968.
SOLARI (A.), FRANCO (R.) y LUTKOWITZ (J.): *Teoría, acción social y desarrollo,* ILPES, Siglo XXI, 1973.
STAVENHAGEN (R.): *Sept Thèses erronées sur l'Amérique Latine,* traducción francesa, París, Anthropos, 1973.
SULMONT (D.): *Boom chimbote* (tesis), París, 1969.
SUNKEL (O.): *Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América Latina,* Buenos Aires, Nueva Visión, primera edición, 1971.
SUNKEL (O.) y GLIGO (N.) (bajo la dirección de): *Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina,* México, FCE, 1981.
SUNKEL (O.) y PAZ (P.): *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del subdesarrollo,* México, Siglo XXI, 1970.

SUNKEL (O.) y otros: *Transnacionalización y dependencia,* Madrid, Cultura Hispánica, 1980.
TAVARES (M. C.) y SERRA (J.): «Más allá del estancamiento», en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,* junio-diciembre de 1971.
TOKMAN (V. E.): «Concentration of Economic Power in Argentina», en *World Development,* octubre de 1973, págs. 33-41.
— *Desarrollo desigual y absorción de empleo. América Latina, 1950-1980,* Santiago, PREALC, 1982, serie «Trabajos ocasionales», 44.
— «Monetarismo global y destrucción industrial», en Cortázar (R.), Foxley (A.) y Tokman (V. E.): *Argentina y Chile: legados del monetarismo,* Santiago, PREALC, 1983.
TOKMAN (V. E.) y KLEIN (E.) (bajo la dirección de): *El subempleo en América Latina,* Buenos Aires, FLACSO, 1979.
TOURAINE (A.): *Vie et mort du Chili populaire,* París, Seuil, 1973.
— *Les sociétés dépendantes,* París, Gembloux-Duculot, 1976.
— *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina,* Santiago, PREALC, 1987.
VELLINGA (M.): *Industrialización, burguesía y clase obrera en México,* México, Siglo XXI, 1981.
WOLFE (M.): *Desenvolvimiento para que e para quem?,* Río, Paz e Terra, 1975.
WORSLEY (P.): *The Third World,* Londres, Widenfeld and Nicholson, 1964.

I. 2. ¿Existen clases sociales en América Latina?

ALCÁNTARA DE CAMARGO (A.): *Brésil Nord-Est: mouvements paysans et crise populiste,* París, EHESS, 1973.
ALTIMIR (O.): «La pobreza en América Latina», en *Revista de la CEPAL,* abril de 1981, págs. 89-90.
ARELLANO (J. P.): «El gasto público y sus beneficiarios», en *Estudios CIEPLAN,* 6, 1981, págs. 149-173.
ARIZPE (L.): «La migración por relevos, la familia campesina y la reproducción social del campesinado», en *Economía campesina y empleo,* Santiago, PREALC, 1981, págs. 121-143.
ASTIZ (C. A.): *Pressure Groups and Powert Elite in Peruvian Politics,* Cornell, University Press, 1969.
BARTRA (R.): *Estructura agraria y clases sociales en México,* México, ERA, 1974.
— *El poder despótico burgués,* Barcelona, Península, 1977.
BASTOS (M. I. DE): «Expulsión de pequeños propietarios y proletarización en el estado de Paraná», en PREALC, *Economía campesina y empleo,* págs. 211-238.
BENAVENTE (D.): *A medio morir cantando. Trece testimonios de cesantes,* Santiago, PREALC, 1985.
BENNHOLDT-THOMSEN (V.): «Marginalidad en América Latina. Una crítica de la teoría», en *Revista Mexicana de Sociología,* 1981, número 4, págs. 1505-1545.
BERLINCK (M. T.): *Marginalidade social e relacões de classes em São Paulo,* Petrópolis, Vozes, 1975.

BERNARD (C.): *La solitude des renaissants,* París, Presses de la Renaissance, 1987.

BIZBERG (I.): *La clase obrera mexicana,* México, SEP, 1986.

BOURDÉ (G.): *Urbanisation et immigration en Amérique Latine,* París, Aubier, 1974.

BOURRICAUD (F.): *Pouvoir et société dans le Pérou contemporain,* París, Colin, 1967.

CANDIDO (A.): *Os parceiros de Rio Bonito,* SÃo Paulo, Livraria Martins, 1964.

CARDOSO (F. H.): *Empresario industrial e desenvolvimento econõmico no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1964.

CAVAROZZI (M.): «Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico», en *Revista Mexicana de Sociología,* 1978, núm. 4, páginas 1327-1352.

CEBRAP: *Bahia de todos os pobres* (prefacio de F. de Oliveira), 1980.

CORREIA DE ANDRADE (M.): *A Terra e o Homen no Nordeste,* São Paulo, Brasiliense, 1973.

COSTA PINTO (L. A.): *Estructura de clases y cambio social,* Buenos Aires, Paidos, 1964.

CHONCHOL (J.): *Paysans à venir. Les sociétés rurales du tiers monde,* París, La Découverte, 1986 (capítulo V sobre América Latina).

DE SOTO (H.): *El otro sendero* (sobre la marginalidad), Lima, El Barronio, 1986.

DINIZ (E.) y BOSCHI (R. R.): *Empresariado nacional e Estado no Brasil,* Río, Ed. Forense Universitaria, 1978.

ECHEVERRÍA (R.): *Empleo público en América Latina,* Santiago, PREALC, 1985.

ELWEST (G.), EVERS (H. D.) y WILKERS (W.): «En busca de seguridad: modos combinados de producción en el llamado "sector informal"», en *El Trimestre Económico,* julio-septiembre de 1986, páginas 477-504.

Estudos CEBRAP: *Trabalho e dominação,* São Paulo, 1980.

FALS BORDA (O.): *El hombre y la tierra en Boyacá,* Bogotá, 1957.

— *Campesinos de los Andes. Estudio sociológico de Saucío,* Bogotá, Facultad de Sociología, 1961.

FAORO (R.): *Os Donos do poder,* Río, 1958.

FERNER (A.): «The dominant class and industrial development in Peru», en *Journal of Development Studies,* julio de 1969, págs. 266-288.

FILGUEIRA (C.) y GENELETTI (C.): «Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina», en *Cuadernos de la CEPAL,* Santiago, 39, 1981.

FLACSO: *Espacio y poder. Los pobladores,* Santiago, FLACSO, 1987.

FORACHI (A. M.): *O estudiante e a transformação da sociedade brasileira,* São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965.

GENOVESE (E.): *The Political Economy os Slavery,* Nueva York, Pantheon Books.

GERMANI (G.): *Política y sociedad en una época de transición,* Buenos Aires, Eudeba, 1960.

— *Política e massa,* Faculdade de Direito, Belo Horizonte, 1960.

GILHODES (P.): *La question agraire en Colombie,* París, FNSP, 1974.

GROMPONE (R.): *Talleristas y vendedores ambulantes en Lima,* Lima, Desco, 1983.

GUEVARA (E.): *Écrits militaires,* París, Maspero, 1971.

HOUDART-MORIZOT (M. F.): *Dynamique du système social à Cuenca, communauté andine* (tesis), París, EHESS, 1975.

HUMPHREY (J.): *Fazendo o «milagre». Controle capitalista e luta operária na indústria automobilística,* São Paulo, Vozes-CEBRAP, 1982.

HUTCHINSON (B.) (bajo la dirección de): *Mobilidade e trabalho, um estudo na cidade de São Paulo,* Río de Janeiro, 1960.

IHEAL-CNRS: *Les problèmes agraires des Amériques Latines,* París, 1967 (coloquio, 1965).

IMAZ (J. L. DE): *Los que mandan,* Buenos Aires, Eudeba, 1968.

JAURETCHE (A.): *El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una sociología nacional,* Buenos Aires, Peña Lillo, 1966.

JELIN (E.) y VILA (P.): *Podría ser yo. Los sectores populares en imagen y palabra,* Buenos Aires, CEDES, Ed. de la Flor, 1987.

KAHL (J.): *The Measure of Modernism,* Texas, University of Texas Press, 1968.

KLEIN (E.): «Diferenciación social: tendencias del empleo y los ingresos agrícolas», en PREALC, *Economía campesina y empleo,* Santiago, 1981.

KOWARICK (L.): *Capitalismo e marginalidade na América Latina,* Río, Paz e Terra, 1975.

LAGOS (R.): *La industria en Chile: Antecedentes estructurales,* Santiago, Universidad de Chile, 1966.

LANDSBERGER (H.), BARRERA (M.) y TORO (A.): «The Chilean Labour union Leaders: A Preliminary Report on their Background and Attitudes», en *Industrial and Labour Relations Review,* núm. 17-3, páginas 399-420.

LEWIS (O.): *Los hijos de Sánchez,* trad. fr. *Les enfants de Sánchez,* París, Gallimard, 1963. (Describe la vida de una familia en una *vecindad* de México. La noción de una cultura de la pobreza ha sido criticada, como si implicase que la pobreza sea estudiada sin referencia al sistema económico y social; crítica en gran parte superficial. Otro libro de Lewis, *La vida,* analiza de forma más directa la cultura de la pobreza como la de los dominados, incorporados a la organización económica y social al mismo tiempo que están excluidos de los canales de participación autónoma.)

— *La vida. Une famille portoricaine dans une culture de pauvreté,* tr. fr., París, Gallimard, 1969.

LÓPEZ (J. R. B.): *Desenvolvimento en mudança social,* São Paulo, Ed. Nacional, 1968; reedición 1978 (cfr. también artículo en el libro de B. Hutchinson).

LLAMBI (L.): «Tipos y fuentes de la mano de obra en la agricultura empresarial venezolana», en PREALC, *Economía campesina y empleo,* Santiago, 1981.

MARTÍNEZ (J.) y TIRONI (E.): *Las clases sociales en Chile,* Santiago, SUR, 1985.

MARTINS (C. E.): *Estado e capitalismo no Brasil,* São Paulo, CEBRAP, 1977.

MARTINS (L.): *Industrialisação. Burguesia nacional e desenvolvimento,* Río, Saga, 1968.

MATOS MAR (J.) (bajo la dirección de): *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú,* Lima, IEP, 1976.

MUSGRAVE (P.): *Consumer Behaviour in Latin America,* Washington, Brookings Institution, 1978.

NUN (J.): «Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal», en *Revista Latinoamericana de Sociología,* Buenos Aires, vol. V (2), 1969.

— «Marginalidad y otras cuestiones», en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,* diciembre de 1972, págs. 97-128.

O'DONNELL (G.): «State and Alliances in Argentina, 1956-1976», en *Journal of Development Studies,* octubre de 1978, págs. 3-33.

PACHANO (S.): *La tierra, las calles y los camiones,* Quito, CIESE, 1984.

PALMEIRA (M.): *Latifundium et capitalisme au Brésil: lecture critique d'un débat,* París, mimeografiado, 1971.

PARODI (J.): *Ser obrero es algo relativo...,* Lima, IEP, 1986.

PEREIRA DE QUEIROZ (M. I.): *O Campesinato brasileiro,* Petrópolis, Vozes, 1973.

POWELL (J. D.): *Political Mobilisation of the Venezuelan Peasants,* Harvard, Harvard University Press, 1971.

PREALC: *Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica,* Santiago, 1986.

RAMOS (S.): *Las relaciones de parentesco y la ayuda mutua en los sectores populares urbanos,* Buenos Aires, CEDES, 1984.

RIBEIRO (A. C. T.): *Trabalho urbano: biscate e biscateiros,* Río, Tesis IUPERJ, 1977.

RODRIGUES (L. M..): *Conflito industrial e sindicalismo no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1966.

— *Industrialização e atidudes operárias,* São Paulo, Brasiliense, 1970.

SÁBATO (J. F.): *Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna (1880-1914),* Buenos Aires, mimeografiado, CISEA, 1979.

SÁBATO (J. F.) y SCHVARZER (J.): «Fonctionnement économique et pouvoir politique en Argentine», en ROUQUIÉ (A.) (bajo la dirección de): *La démocratie ou l'apprentissage de la vertu,* París, A.-M. Métaillié, 1985.

SACHS (C.): *Évolution et Limites de la promotion publique de logements populaires à São Paulo, 1964-1985* (tesis), Université Paris, XII, 1987.

SIGAL (S.): «Crisis y conciencia obrera. La industria azucarera tucumana», en *Revista Latinoamericana de Sociología,* 1970, págs. 70-71.

SIMÃO (A.): «O voto operário em São Paulo», en *Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia,* 1954, págs. 202-214.

SINGER (P.): *Desenvolvimento económico e evolução urbana,* São Paulo, Ed. Nacional, 1974.

SOLARI (A.) y LIPSET (S. M.): *Elites en América Latina,* Buenos Aires, 1967.

— *Política e desenvolvimento em sociedades dependentes: ideologia do empresariado industrial argentino e brasileiro,* Río de Janeiro, Zahar, 1971 (ed. española, Siglo XXI, 1971).

STAVENHAGEN (R.): *El campesinado y las estrategias de desarrollo rural,* México, Cuadernos del CES, 1977.

STAVENHAGEN (R.) y ZAPATA (F.): *Sistemas de relaciones obrero-patronales en América Latina,* Colegio de México, 1974.

SULMONT (D.): *Boom chimbote* (tesis), París, 1969.

TELLA (T. DI), TOURAINE (A.), REYNAUD (J. D.) y BRAMS (L.): *Estructura social de dos industrias chilenas,* Buenos Aires, Instituto Di Tella, 1.ª ed. (trad. fr. TOURAINE (A.) y otros: *Huachipato et Lota,* París, CNRS, 1966).

TOKMAN (V.): «Concentration of Economic Power in Argentina», en *World Development,* octubre de 1973, págs. 33-41.

TORRES-RIVAS (E.): «El proceso de desintegración de la sociedad campesina»,

en RAMA (G.) (bajo la dirección de): *Educación y sociedad en América Latina y el Caribe,* UNICEF, 1980, págs. 143-155.
TOURAINE (A.): «Industrialisation et conscience ouvrière à São Paulo», en *Sociologie du Travail,* 1961-1964, págs. 77-95.
— «La marginalité sociale», en *Les sociétés dépendantes,* París-Gembloux, Duculot, 1976.
WELLS (J.): «Industrial Accumulation and Living Standards in the Long-Run: The São Paulo Industrial Working Class (1930-1977)», en *The Journal of Development Studies,* 1.ª parte, enero de 1983, págs. 145-169; 2.ª parte, abril de 1983, págs. 297-328.

SEGUNDA PARTE

II. 1. Vida privada, vida pública

ARIZPE (L.): «La migración por relevos, la familia campesina y la reproducción social del campesinado», en *Economía campesina y empleo,* Santiago, PREALC, 1981, págs. 121-143.
BOFF (L.): *Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia,* Santander, Sal Terrae, 1980.
— *E a Igreja se fêz povo,* Petrópolis, Vozes, 1986.
CELAM: *Iglesia y Religiosidad popular en América Latina,* Bogotá, 1977.
CEPAL (Revista de la): número especial 29 sobre la juventud, agosto de 1986.
FAVRE (H.): *Changement et continuité chez les Mayas du Mexique,* París, Anthropos, 1971.
GURRIERI (A.) (bajo la dirección de): *Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana,* México, Siglo XXI, 1971.
GUTIÉRREZ (G.): *Teología de la liberación,* Lima, CEP, 1971.
— *La fuerza histórica de los pobres,* Lima, CEP 1979.
GUZMÁN-BÖCKLER (C.) y HERBERT (J. L.): *Guatemala: una interpretación histórico-social,* México, Siglo XXI, 1.ª edición, 1970.
HERNÁNDEZ (Z.): *El movimiento social de mujeres en la actual coyuntura de crisis económica.* Lima, miemografiado, s.d.
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM: Caciquismo y poder político en el México rural (R. BARTRA, L. PARÉ y otros), México, Siglo XXI, 1975.
IRELAND (R.): *Catholic Base Communities, Spiritist Groups and the Deepening of Democracy in Brazil,* Washington, Wilson Center, memeografiado, 1983.
JELIN (E.): *Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada,* Buenos Aires, CEDES, 1983.
— (bajo la dirección de): *Ciudadanía e identidad* (sobre las mujeres en los movimientos sociales), Ginebra, UNRISD, 1987.
JOBERT (B.): *Clientelismo, patronazgo y participación popular,* Ginebra, UNRISD, 1973.
KIRKWOOD (J.): *Ser política en Chile,* Santiago, FLACSO, 1986.
LAGOS (H.): *Sectas religiosas en Chile,* Santiago, PRESOR, 1981.
LAGOS (H.) y CHACÓN (A.): *Las Evangélicas en Chile. Una lectura sociológica,* Santiago, LAR-PRESOR, 1987.

LALIVE D'ÉPINAY (C
tisme en Argentin
LEÓN (M.) (bajo la
Caribe, tomo I:
tomo III: *Sociedad*
LOYOLA (A.): *Os s*
1974).
MATTA (R. de): *Car*
MATTELART (A.): *L*
Siglo XXI, 1973.
naire au Chile (19
MEILLASSOUX (C.):
francés).
MOLINA (N.): *Lo fe*
tor, 1986.
MOLINIÉ-FIORAVANT
du Yucay (tesis,
MOLINO (R.): «Barri
fuerza de trabajo
Potosí», en PREA
MUÑOZ (A.): *Fuerza*
tor, 1987.
MORANDÉ (P.): *Cult*
dad Católica, 198
NUNES LEAL (V.): *C*
Nueva Sociedad, núm
de 1985.
O'BRIEN (C.): «God
de 1986, págs. 50
ORTIZ (R.): *A Mor*
religião numa so
POBLETE (R.) y GA
dios populares, S
PARÉ (L.): «Diseño
ta Mexicana de S
PROCÓPIO FERREIRA
polis, Vozes, 197
RACZYNSKI (D.) y
Santiago, CIEPL
RICHARD (P.): *Los*
tro-Americano,
ROMANO DA SILVA
dans le Brésil ce
SAFFIOTI (H. I. B.)
1969.
SCHMITTER (P.): *I*
Standford Univ
SOLARI (A.): *Estu*
1968.

LALIVE D'ÉPINAY (C.): *Religion, dynamique sociale et dépendance: le protestantisme en Argentine et au Chili,* París, La Haya, Mouton, 1975.

LEÓN (M.) (bajo la dirección de): *Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe,* tomo I: *La realidad colombiana;* tomo II: *Los trabajadores del agro;* tomo III: *Sociedad, subordinación y feminismo,* Bogotá, ACEP, 1982.

LOYOLA (A.): *Os sindicatos e o PTB,* Petrópolis, Vozes, 1980 (tesis, París, 1974).

MATTA (R. de): *Carnavals, bandits et héros,* 1978, trad. fr., París, Seuil, 1978.

MATTELART (A.): *La comunicación masiva en el proceso de liberación,* México, Siglo XXI, 1973. (Tr. fr.: *Mass media, idéologies et mouvement révolutionnaire au Chile (1970-1973),* París, Anthropos, 1974.)

MEILLASSOUX (C.): *Mujeres, graneros y capital,* México, Siglo XXI (trad. del francés).

MOLINA (N.): *Lo femenino y lo democrático en el Chile de hoy,* Santiago, Vector, 1986.

MOLINIÉ-FIORAVANTI (A.): *Influences urbaines et société rurale au Pérou. Le cas du Yucay* (tesis, 2. vols., París, EHESS, 1972).

MOLINO (R.): «Barrios, economía campesina y migración: la venta estacional de fuerza de trabajo en el contorno rural de los centros mineros del norte de Potosí», en PREALC, *Economía campesina y empleo,* págs. 147-163.

MUÑOZ (A.): *Fuerza feminista y democracia. Utopía a realizar,* Santiago, Vector, 1987.

MORANDÉ (P.): *Cultura y modernización en América Latina,* Santiago, Universidad Católica, 1987.

NUNES LEAL (V.): *Coronelismo, enxada e voto,* Río, Livraia Forense, 1949.

Nueva Sociedad, núm. especial: *Las mujeres: la mayoría marginada,* julio-agosto de 1985.

O'BRIEN (C.): «God and Men in Nicaragua», en *The Atlantic Monthly,* agosto de 1986, págs. 50-71.

ORTIZ (R.): *A Morte branca do feiticeiro negro-umbanda. Integração de uma religião numa sociedade de classes,* Petrópolis, Vozes, 1978.

POBLETE (R.) y GALILEA (C.): *Movimiento pentecostal e Iglesia católica en medios populares,* Santiago, Centro Bellarmino, 1984.

PARÉ (L.): «Diseño teórico para el estudio del caciquismo en México», en *Revista Mexicana de Sociología,* abril-junio de 1972.

PROCÓPIO FERREIRA DE CAMARGO (C.): *Católicos, protestantes, espíritas,* Petrópolis, Vozes, 1973.

RACZYNSKI (D.) y SERRANO (C.): *Vivir la pobreza. Testimonios de mujeres,* Santiago, CIEPLAN, 1985.

RICHARD (P.): *Los cristianos revolucionarios,* Managua, Instituto Histórico Centro-Americano, 1980.

ROMANO DA SILVA (R.): *Le signe et la doctrine. Prismes du discour théologique dans le Brésil contemporain* (tesis), París, ECHESS, 1978.

SAFFIOTI (H. I. B.): *A mulher na sociedade de classes,* São Paulo, Quatro Artes, 1969.

SCHMITTER (P.): *Interest Conflict and Political change in Brazil,* Standford, Standford University Press, 1971.

SOLARI (A.): *Estudiantes y política en América Latina,* Caracas, Monte Ávila, 1968.

— «Desigualdad educacional en América Latina», en *Planificación social en América Latina y el Caribe,* Santiago, ILPES, UNICEF, 1981, págs. 395-438.
SUNKEL (G.): *Razón y pasión en la prensa popular,* Santiago, ILET, 1985.
SUNKEL (O.): «La dependencia y la heterogeneidad estructural», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1978, págs. 3-20.
URZÚA (R.) y DOONER (P.) (bajo la dirección de): *La opción preferencial por los pobres,* Santiago, CISOC-Bellarmino, 1987.
VALDÉS (T.): *Mujer popular: matrimonio, hijos y proyecto,* Santiago, FLACSO, 1985.
VALENZUELA (E.): *La rebelión de los jóvenes,* Santiago, SUR, 1984.
VALLIER (I.): *Catholicism, Social Control and Modernization in Latin America,* Prentice Hall, 1970.
VELIZ (C.) (bajo la dirección de): *Obstacles to Change in Latin America,* Oxford, Oxford University Press, 1965.

II. 2. De las demandas sociales a la acción política

ALCÁNTARA DE CAMARGO (A.): *O intelectual e a política. Encontros com Alfonso Arinos,* Brasilia, Fundação Getúlio Vargas, 1983.
AROCENA (J.): *L'Université au Río de la Plata* (tesis), París, EHESS, 1980.
BRUNNER (J. J.): *El movimiento estudiantil ha muerto; nacen los movimientos de estudiantes,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1985.
BRUNNER (J. J.) y CATALÁN (G.): *Cinco estudios sobre cultura y sociedad,* Santiago, FLACSO, 1985.
CASTILLO (F.), TIRONI (A.) y VALENZUELA (E.): *La Fech de los años 30,* documentos SUR, 1982.
FALETTO (E.): «La juventud como movimiento social en América Latina», en *Revista de la CEPAL,* núm. 29, 1986, págs. 185-191.
GARRETÓN (M. A.) y MARTÍNEZ (J.) (bajo la dirección de): *Universidades chilenas: historia, reforma e intervención,* 5 vols., Santiago, SUR, 1985.
GUZMÁN (Monseñor) y otros: *La violencia en Colombia,* Bogotá, colección Tercer Mundo, 2 vols., 1962.
LANDI (O.): «Lenguajes, identidad y ciudadanía», en LECHNER (N.) (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* Siglo XXI, 1980.
MALLOY (J.): *Bolivia. The Umcompleted Revolution,* Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1970.
MICELI (S.): *Les intellectuels et le pouvoir au Brésil (1920-1945),* París, MSH, 1981.
PÉCAUT (D.): *Política y sindicalismo en Colombia,* Bogotá, La Carreta, 1973.
— *L'ordre et la violence,* París, EHESS, 1987 (1.ª ed., tesis, 3 vols. París, 1978).
RAMA (G.) (bajo la dirección de): *Educación y sociedad en América Latina y el Caribe,* Santiago, UNICEF, 1980.
— (bajo la dirección de): *Universidad, clases sociales y poder,* Caracas, El Ateneo, 1982.
ROUQUIÉ (A.): «Hegemonía militar. Estado y dominación social», en *Argentina hoy,* 1982, págs. 11-50.
SHILS (E.): «The Intellectuals in the Political Development of the New States», en *World Politics,* XII, 3, abril, 1960, págs. 329-368.

SIGAL (S.): *Intellectuels et politiques en Argentine,* París, CEMS, 1986.
SILVA MICHELENA (A.): *Conflict and consensus in Venezuela* (tesis), MIT, mimeografiado, 1968.
SOARES (M. S. A) (bajo la dirección de): *Os intelectuais nos processos políticos da América Latina,* Porto Alegre, Universidade de Porto Alegre, 1985.
SPOERER (S.): *El consuelo y el éxtasis,* Santiago, ILET, 1986.
TAVARES DE ALMEIDA (M. H.): «O sindicato no Brasil. Novos problemas, velhas estructuras», en *Debate e Crítica,* 6, 1975.
VALENZUELA (E.) y WEINSTEIN (J.): *La Fech de los años 20,* documentos SUR, 1980.
WEFFORT (F.): «State and Mass in Brazil», en HOROWITZ (L.), ed., *Masses in Latin America,* Oxford University Press, 1970.
— *Sindicato e política,* São Paulo, mimeografiado, s. d.

TERCERA PARTE

III. 1. Las políticas nacional-populares

ALCÁNTARA DE CAMARGO (A.): *Autoritarismo e populismo,* INDIPO-CPDOC, 1974.
ALEXANDER (R.): *The Bolivian National Revolution,* New Brunswick, Rutgers University Press, 1958.
— *The Venezuelan Democratic Revolution,* New Brunswick, Rutgers University Press, 1964.
ANTEZANA (L. H.): «Sistema y el proceso ideológico», en *Bolivia hoy,* México, Siglo XXI, 1983.
ARRAES (M.): *Le Brésil, le peuple et le pouvoir* (trad. fr.), París, Maspero, 1969.
ASTIZ (C. A.): *Pressure Groups and Powert Elite in Peruvian Politics,* Cornell University Press, 1969.
BARAONA (M.): *Le nationalisme chilien du XIXe siècle. Quelques réflexions sur la nature du balmacédisme,* París, EHESS, mimeografiado, 1975.
BÉARN (G.): *La décade péroniste,* París, Gallimard-Julliard, 1971.
BELL (J. P.): *Guerra civil en Costa Rica. Los sucesos políticos de 1948* (trad. esp.), San José, Educación, 1983.
BONILLA (F.): *The Politics of Change in Venezuela,* tomo II: *The Failure of Elites,* Cambridge, MIT Press, 1970 (el tomo I es una obra colectiva).
BOURRICAUD (F.): *Ideología y desarrollo: el caso del partido aprista peruano,* México, Colegio de México, 1966.
BRESSER PEREIRA (L. C.): *A sociedade estatal e a tecnoburocracia,* Sao Paulo, Brasiliense, 1981.
CALDERÓN (F.): *La política en las calles,* Cochabamba, CERES, 1982.
CALDERÓN (F.) y LASERNA (R.): *Nación, Estado y movimientos sociales regionales en Bolivia, 1971-1983,* mimeografiado, 1983.
CARDOSO (F.): *Mudanças sociais na América Latina,* São Paulo, DIFEL, 1969.
CENDES (Cuadernos del): *Estado y procesos sociopolíticos en Venezuela,* Caracas, septiembre-diciembre de 1984.
COLLIER (D.): *Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rules and Policy Changes in Peru,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1976.

CÓRDOVA (A.): *La política de masas del cardenismo,* México, ERA, 1974.
COSÍO VILLEGAS (D.): *El sistema político mexicano,* México, JM, 1972.
COTLER (J.): *Crisis política y populismo militar en el Perú,* Lima, IEP, 1969.
— *Clases, Estado y nación en el Perú,* Lima, IEP, 1978.
CUEVA (A.): *El proceso de dominación en Ecuador,* Quito, 1974.
— «Ecuador, 1925-1979», en GONZÁLEZ C. (P.) (bajo la dirección de): *América Latina: historia de medio siglo,* México, UNAM, 1977.
— *El populismo como problema teórico y político,* Quito, 1981.
DEBERT (G.): *Ideologia e populismo,* São Paulo, Teo, 1979.
DI TELLA (T.): *El sistema político argentino y la clase obrera,* Buenos Aires, Eudeba, 1960.
— *Clases sociales y estructuras políticas,* Buenos Aires, Paidos, 1974.
FAUSTO (B.): *A revolução de 1930,* São Paulo, Brasiliense, 1970.
FERNANDES (F.): *A revolução burguesa no Brasil,* Río, Zahar, 1975.
FITZGERALD (E. V. K.): *La economía política del Perú, 1956-1978,* Lima, IEP, 1981 (trad. del inglés, Cambridge, 1979).
FREIRE (P.): *Educação como a prática da liberdade,* Río, Paz e Terra, 1980.
FURTADO (C.): *Le Brésil à l'heure du choix,* trad. fr., París, Plon, 1964.
GERMANI (G.): *Política y sociedad en una época de transición,* Buenos Aires, Paidos, 1962.
— *Autoritarianism, National Populism and Fascim,* New Brunswick, Transaction Books, 1977.
GILHODES (P.): *Paysans de Panama,* París, FNSP, 1978.
GUILHON ALBUQUERQUE (J. A.) (bajo la dirección de): *Classes médias e política no Brasil,* Río, Paz e Terra, 1977.
GÓNGORA (M.): *Ensayo histórico sobre la noción del Estado de Chile en los siglos XIX y XX,* Santiago, La Ciudad, 1981.
GONZÁLEZ CASANOVA (P.): *La democracia en México,* México, ERA, 1965.
— *El Estado y los partidos políticos en México,* México, ERA, 1981.
GRACIARENA (J.): *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina,* Buenos Aires, Paidos, 1967.
HAYA DE LA TORRE (V. R.): *El antiimperialismo y el APRA,* Lima, Amauta, Cuarta, 1972.
HURTADO (O.): *El poder político en el Ecuador,* Quito, Universidad Católica, 1977.
IANNI (O.): *Industrialização e desenvolvimento social no Brasil,* Río, Civilização Brasileira, 1963.
— *Estado e capitalismo,* Río, Civilização Brasileira, 1965.
— *O colapso do populismo no Brasil,* Río, Civilização Brasileira, 1968.
— *A formação do Estado populista na América Latina,* Río, Civilização Brasileira, 1975.
Instituto de Estudios Peruanos: *El gobierno militar. Una experiencia peruana, 1968-1980,* Lima, 1985 (ed. inglesa publicada por Princeton University Press, 1983).
IONESCU (R.) y GELLNER (E.): *Populismo. Sus significados y características nacionales* (trad. española), Buenos Aires, Amorrortu, 1969.
KANTOR (H.): *The Ideology and Program of the Aprista Movement,* Berkeley, University of California Press, 1953.

KAPLAN (M.): *Formación del Estado nacional en América Latina,* Santiago, Ed. Universitaria, 1969.
— *Estado y Sociedad,* México, UNAM, 1978.
— «La teoría del Estado en la América Latina contemporánea: el caso del marxismo», en *El Trimestre Económico,* abril-junio de 1983, páginas 677-711.
LABASTIDA DEL CAMPO (J.): «Los grupos dominantes frente a las alternativas de cambio», en *Perfil de México,* México, FCE, 1973, tomo III, págs. 101-163.
LACLAU (E.): *Política e ideología en la teoría marxista,* Madrid, Siglo XXI, 1978.
LINZ (J.) y STEPAN (A.): *The Breakdown of Democratic Regimes,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978.
LOWENTHAL (A.) (bajo la dirección de): *The Peruvian Experiment: Continuity and Change Under Military Rule,* Princeton, Princeton University Press, 1975.
MARIÁTEGUI (J. C.): *Siete ensayos de interpretación de la realiad peruana,* Lima, Amantu, 7.ª ed., 1965.
MARTÍNEZ ASSAD (C.): *El laboratorio de la revolución. El Tabasco garridista,* México, Siglo XXI, 1979.
MARTINS (L.): *Politique et Développement économique. Structures de pouvoir et systèmes de décision au Brésil, 1930-1964* (tesis), París, Anthropos, 1977.
MENDES (C.): *Nacionalismo e desenvolvimento,* Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos, 1963.
— *Après le populisme. Contestation et développement en Amérique Latine* (trad. española), México, FCE, 1974.
MITCHELL (C.): *The Legacy of Populism,* Nueva York, New York University Press, 1980.
NEIRA (H.): *Minorités politiques et Lutte pour le pouvoir dans les premières décennies du Pérou contemporain* (tesis), París, 1986.
NUN (J.): *Averiguación sobre algunos significados del peronismo,* Buenos Aires, mimeografiado, 1983.
O'DONNELL (G.): «Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976», en *Desarrollo Económico,* enero-marzo, 1977.
— «Apuntes para una teoría del Estado», en *Revista Mexicana de Sociología,* 1978, núm. 4, págs. 1157-1199.
PINHEIRO (P. S.) (bajo la dirección de): *O Estado na América Latina,* São Paulo, CEDEC-Paz e Terra-RIAL, 1977 (textos de G. O'Donnell, E. Torres Rivas, F. H. Cardoso).
PINTO (A.): «Desarrollo económico y relaciones sociales», en *Chile hoy,* México, Siglo XXI, 1970, págs. 5-52.
— *Perú 1968-1977. La política económica en un proceso de cambio global,* Santiago, Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 2, 1981.
PORTANTIERO (J. C.): «Lo nacional-popular y la alternativa democrática en América Latina», en *América Latina 1980. Democracia y movimientos populares,* Lima, DESCO, 1981.
PRADO (C.), Jr: *Formação do Brasil contemporâneo,* São Paulo, Brasiliense, 1942.
— *A revolução brasileira,* São Paulo, Brasiliense, 1966.
QUINTERO LÓPEZ (R.): *El mito del populismo en el Ecuador,* Quito, Universidad Central del Ecuador, 1983.
RAMA (G. W.): *La democracia en Uruguay,* Buenos Aires, RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, 1987.

RAMÍREZ NECOCHEA (H.): *Balmaceda y la contrarrevolución del 1891,* Santiago, Ed. Universitaria, 2.ª ed., 1969.

Revista Mexicana de Sociología, Estado y proceso político en América Latina, tomo I, 1977, núm. 1 (O'Donnell, Zermeño, Cavarozzi, Labastida); tomo II, 1977, núm. 2 (Cardoso, Furtado, Lechner, De Riz, Cinta y estudios de casos nacionales).

— *Estado y clases sociales en América Latina,* núm. especial, 1978-4.

REYNA (J. L.): «Movilización y participación políticas: discusión de algunas hipótesis para el caso mexicano», en *Perfil de México en 1890,* tomo III, México, Siglo XXI, 1972.

RIZ (L. DE): *Sociedad y política en Chile, de Portales a Pinochet,* México, 1979.

— *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista,* Buenos Aires, Folios, 1981.

ROUQUIÉ (A.): *Le mouvement Frondizi et le radicalisme argentine,* París, FNSP, 1967.

SIGAL (S.) y VERON (E.): *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista,* Buenos Aires, Legasa, 1985.

SKIDMORE (T.): *Politics in Brazil (1930-1964). An Experiment in Democracy,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.

SNOW (P. G.) (bajo la dirección de): *Government and Politics in Latin America,* New York Hall, Rinehart and Winston, 1967.

SOUZA (M. DO CARMEN DE): *Estado e sistema partidário no Brasil, 1945-1964* (tesis), São Paulo, 1972.

STEPAN (A.): *The State and Society. Peru in Comparative Perspective,* Princeton, Princeton University Press, 1978.

TORRES-RIVAS (E.) (bajo la dirección de): *Centroamérica hoy,* México, Siglo XXI, 1975.

TOVAR (T.): *Velasquismo y movimiento popular,* Lima, DESCO, 1985.

VALENZUELA (A.): *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978.

VEGA CENTEANO (I.): *Ideología y cultura en el aprismo popular,* Lima, Tarea, 1986.

VERDESOTO CUSTODE (L.): *El sistema de partidos políticos y la sociedad civil en el Ecuador,* Quito, mimeografiado, 1985.

VERNON (R.): *La dilemme du Méxique. Les rôles du secteur public et du secteur privé dans le développement,* trad. fr., París, 1966.

VIANNA (L. W.): *Liberalismo e sindicato no Brasil,* Río, Paz e Terra, 2.ª ed., 1978.

WEFFORT (F.): *Classes populares e desenvolvimento social,* ILPES, mimeografiado, 1968.

— *O populismo na política brasileira,* Río, Paz e Terra, 1978.

WEFFORT (F.) y QUIJANO (A.) (bajo la dirección de): *Populismo, marginalidad y dependencia,* San José, Ed. Universidad Centroamericana.

WILDE (A.): *Conversaciones de caballeros. La quiebra de la democracia en Colombia,* Bogotá, Tercer Mundo, 1982.

ZAVALETA M. (R.): *El poder dual en América Latina,* México, Siglo XXI, 1974.

ZERMEÑO (S.): «Estado, clases y masas», en *Revista Mexicana de Sociología,* 1978, núm. 4, págs. 1283-1325.

— «Las fracturas del Estado en América Latina», en LECHNER (R.) (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* México, Siglo XXI, 1981.

III. 2. Las luchas campesinas

AFFONSO (A.), KLEIN (E.), RAMÍREZ (P.) y GÓMEZ (S.): *Movimiento campesino chileno,* Santiago, ICIRA, mimeografiado, 1968.

ALCÁNTARA (A.): *Mouvements paysans et crise populiste* (tesis), París, 1973.

Cahiers des Amériques latines, número especial, 23, *Ethnosociologie du refus,* París, 1981.

CALDERÓN (F.): *Urbanización y etnicidad: el caso de La Paz,* La Paz, CERES, 1984.

CALDERÓN (F.) y DANDLER (J.): *Movimientos campesinos y etnicidad,* La Paz, CERES, 1983.

— (bajo la dirección de): *Bolivia: la fuerza histórica del Campesinado,* La Paz, UNRISD-CERES, 1984.

CANABAL CRISTIANI (B.): *Hoy luchamos por la tierra,* México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1984.

CNRS: *Indianité, ethnocide, indigénisme en Amérique Latine,* París, 1981.

CHONCHOL (J.), en *Chile hoy,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1970.

DANDLER (J.): *El sindicalismo campesino en Bolivia,* México, Instituto Indigenista Interamericano, 19609.

— *Campesinado y reforma agraria en Cochabamba (1952-1953). Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia,* La Paz, CIPCA, 1975.

FALS BORDA (O.): *Peasant Society in the Colombian Andes: a Sociological Study of Saucío,* Gainesville, University of Florida Press, 1955.

— *Historia de la cuestión agraria en Colombia,* Bogotá, Rosca, 1975.

FAVRE (H.): *Changement et continuité chez les Mayas du Mexique,* París, Anthropos, 1971.

FERNÁNDEZ (R.): *Jeu politique et guérilla rurale au Mexique* (tesis), París, 1980.

FIORAVANTI (E.): *Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú,* Lima, IEP, 1974.

GILHODES (P. J.): *Politique et violence: la quiestion agraire en Colombie,* París, Colin, 1974.

GROS (C.) y LE BOT (Y.): *L'idéologie politique latino-américaine et la question indienne,* París, ERSIPAL, mimeografiado, 1982.

GROS (C.) (bajo la dirección de): «Mouvements indiens paysans aux XVIII, XIX et XX siècles», en *Actes du XLII congrès international des americanistes,* tomo III, París, Société des américanistes, 1978.

GUERRERO (A.): *Hacienda, capital y lucha de clases andina,* Quito, El Conejo, 1983.

HERBERT (J. L), GUZMÁN BÖCKLER (C.) y QUAN (J.): *Indianité et luttes de classes,* París, «09/18», 1972.

HUIZER (G.): *La lucha campesina en México,* México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970.

— *Peasant Rebellion in Latin America,* Londres, Penguin, 1973.

IANNI (V.): *El territorio de las masas. Espacios y movimientos sociales en República Dominicana,* abril de 1984-abril de 1986, Santo Domingo, Editorial Universitaria, 1987.

IEP: *El campesino en el Perú,* Lima, 1970.

IZQUIERDO MALDONADO (G.): *Peasant's Popular Participation: Rise and Fall of the Peasant's Movement in Manati,* UNRISD, mimeografiado, 1983.

KAPSOLI (W.) y REATEGUY (W.): «El campesino peruano 1919-1930», en *Trabajos de San Marcos,* mimeografiado, 1972.

LANDSBERGER (H. A.): *Peasant's Movement in Latin America,* Cornell University Press, 1969.
LAVAUD (J.-P.): *Identité et politique: le courant Tupac Katari en Bolivie,* París, ERSIPAL, mimeografiado, 1982.
LE BOT (Y.): *Les paysans, la terre, le pouvoir (étude sur l'Altiplano guatemaltèque)* (tesis), París, 1977.
LEHMAN (D.): *El campesinado: clase y conciencia de clase,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1972.
MATOS MAR (J.) y MEJÍA (J. M.): *Reforma agraria: logros y contradicciones, 1969-1979,* Lima, IEP, 1980.
MENÉNDEZ (I.): *Lutte sociale et système politique au Yucatán* (tesis), París, 1980.
MEYER (J.): *Apocalypse et révolution au Mexique,* París, Gallimard-Julliard, 1974.
— *L'Église, l'État et le peuple dans la révolution mexicaine, 1926-1929,* París, Payot, 1975 (edición resumida de *La Cristiada,* México, Siglo XXI, 1973).
— *Esperando a Lozada,* México, El Colegio de Michoacán-CONACYT, 1984.
MOLINIÉ-FIORAVANTI (A.): *La vallée sacrée es Andes,* París, Société d'Ethnographie, 1982.
NEIRA (H.): *Cuzco: tierra y muerte,* Lima, Los problemas de hoy, 1964.
NOGUEIRA (A.): *Antônio Conselheiro e Canudos,* São Paulo, Companhia Editoria Nacional, 1974 (documentos).
ORE (T.): *Memorias de un viejo luchador campesino: Juan H. Pevez,* Lima, Tarea, 1983.
PARÉ (L.): «Movimiento campesino y política agraria en México, 1978-1982», en *Revista Mexicana de Sociología,* octubre-diciembre de 1985, págs. 85-111.
PARRENIN (G.): *Les mouvements sociaux paysans indiens et le système politique dans la société bolivienne (1936-1953)* (tesis), París, 1982.
PATCH (R. W.): «Peasantry and national Revolution in Bolivia», en *Latin America,* Nueva York, Borzoi Books on Latin America, 1971.
PEREIRA DE QUEIROZ (M. I.): *O messianismo no Brasil e no mundo,* São Paulo, Dominus, 1965.
— *Réformes et révolutions dans les sociétés traditionnelles,* París, Anthropos, 1968.
PETRAS (J.) y ZEMELMAN (H.): *Peasants in revolt,* Austin, University of Texas, 1972.
QUIJANO (A.): *Problemas agrarios y movimiento campesino,* Lima, Mosca Azul, 1979.
RELLO (F.): *State and Peasantry en Mexico: a Case Study of Rural Credit in La Laguna,* Ginebra, UNRISD, 1987.
— *Burguesía, campesinos y Estado en México: el conflicto agrario de 1976,* Ginebra, UNRISD, 1987.
RIVERA CUSICANQUI (S.): *Politics and Ideology in the Colombian Peasant Movement. The Case of ANUC,* UNRISD, 1983 (ed. española, 1987).
— *Oprimidos pero no vencidos. Lucha del campesinado aymara y quechua en Bolivia, 1900-1980,* Ginebra, UNRISD, 1986.
ROMERO (S.): *Les mouvements sociaux paysans en Bolivie* (tesis), París, 1973.
SANDERSON (E.): «La lucha agraria en Sonora, 1970-1976», en *Revista Mexicana de Sociología,* 1979, núm. 4, págs. 1181-1232.
SCHERER (I.): *Les syndicats et le changement de la société agraire dans le Rio Grande do Sul* (tesis), París, 1973.

SILVA HERZOG (J.): *El agrarismo mexicano y la reforma agraria,* México, FCE, 1950.
SMITH (C. A.): *Indian Class and Class-Consciousness in Pre-Revolutionary Guatemala,* Washington, Wilson Center, Working-Paper, núm. 162, 1984.
SOUZA MARTINS (J. DE): *Os camponeses e a Política no Brasil,* Petrópolis, Vozes, 1981.
STAVENHAGEN (R.) (bajo la dirección de): *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America,* Nueva York, Anchor Books, 1970.
TORRES-RIVAS (E.): *Interpretación del desarrollo social centroamericano,* Costa Rica, Educa, 1971.
— «Derrota oligárquica, crisis burguesa, revolución popular», en *El Trimestre Económico,* abril-junio de 1983, págs. 981-1018.
WARMAN (A.): *Ensayo sobre el campesinado en México,* México, Nueva Imagen, 1980.
WOLF (E.): *Las luchas campesinas del siglo XX* (traducción del inglés), México, Siglo XXI, 1973.
WOMACK (J.), JR.: *Zapata y la revolución mexicana* (edición española), México, Fondo de Cultura Económica, 1969 (trad. francesa, París, Maspero, 1969).
ZAMOSC (L.): *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, 1967-1981,* Ginebra, UNRISD, 1986.

III. 3. ¿Existen movimientos urbanos?

BAÑO (R.): *Lo social y lo político: consideraciones acerca del movimiento popular urbano,* Santiago, FLACSO, 1984.
BORJA (J.): *Movimientos sociales urbanos,* Buenos Aires, SIAP, 1975.
BOSCHI (R.) (bajo la dirección de): *Violência e cidade,* Río, Zahar, 1982.
— *Movimentos coletivos no Brasil urbano,* Río, Zahar, 1982.
CALDERÓN (F.): *La política en las calles,* La Paz, CERES, 1982.
CARDOSO (R.): «Movimentos sociais urbanos: balançá crítico», en SORJ (B.) y TAVARES DE ALMEIDA (M. H.) (bajo la dirección de): *Sociedade e política no Brasil pós-64,* São Paulo, Brasiliense, 1983.
CASTELLS (M.): *Luchas de clases en Chile. Estructura de clases y políticas urbanas en América Latina,* Santiago, CIDU, 1973, y Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.
— *Movimientos sociales urbanos,* México, Siglo XXI, 1974.
— *Crisis urbana y cambio social,* México, Siglo XXI, 1981.
— *The Citizen and the Grass-Roots,* Londres, Arnold, 1983 (presentado como tesis de doctorado en París en 1983).
CEDEC: *Contradições urbanas e movimentos sociais,* Río, Paz e Terra, 1977.
— *Cidade, povo e poder,* Río, Paz e Terra, 1982.
FERREIRA DOS SANTOS (C. N.): *Movimentos urbanos no Rio de Janeiro,* Río, Zahar, 1981.
HANDELMAN (H.): «The Plitical Mobilization of Urban Squatter Settlements», en *Latin American Research Review,* XII, 1975, págs. 35-72.
HENRY (E.): *Urbanisation dépendante et Mouvements sociaux urbains* (tesis), París, 1974.

IANNI (V.): *Masas y revuelta. Singularidad de la crisis. República Dominicana, 1984,* Santo Domingo, 1985.
JELIN (E.) (bajo la dirección de): *Los nuevos movimietos sociales,* 2 vols., Buenos Aires, CEAL, 1985.
KOWARICK (L.): *A espoliação urbana,* Río, Paz e Terra, 1970.
— *Movimientos populares urbanos y proceso de democratización en Brasil. Un balance crítico de la literatura,* Santiago, mimeografiado, Seminario SUR-CADIS, 1987.
MAIWARING (S.) y VIOLA (E.): «Los nuevos movimientos sociales, las culturas políticas y la democracia: Brasil y Argentina en la década de los ochenta», en *Revista Mexicana de Sociología,* octubre-diciembre de 1985, págs. 35-78.
MATOS MAR (J.): *Desborde popular y crisis del Estado,* Lima, IEP, 1984.
MOISÉS (J. A.) y otros: *Cidade, povo e poder,* Río, CEDEC, Paz e Terra, 1982.
PIRES DO RIO CALEIRA (T.): *A política dos outros,* São Paulo, Brasiliense, 1984.
Revista Mexicana de Sociología, número especial, 1977, núm. 4: *Marginalidad, urbanización y empleo en América Latina.*
— número especial octubre-diciembre de 1984: *Temas urbanos y movimientos sociales urbanos.*
SCHEIER (G.) y SIGAL (S.): *Marginalité spatiale et revendications urbaines: le cas des villes latino-américaines,* París, CIRED, 1980.
SINGER (P.): *Economia política da urbanização,* São Paulo, CEBRAP, Brasiliense, 1973.
SINGER (P.) y BRANT (V. C.) (bajo la dirección de): *São Paulo: o povo em movimento,* Petrópolis, Vozes, 1980.
SLATER (D.) (bajo la dirección de): *New Social Movements and the State in Latin America,* Amsterdam, París, 1985.
SUR: «Marginalidad, movimientos sociales y democracia», en *Proposiciones 14,* 1988.
TIRONI (E.), VALENZUELA (E.) y otros: *Documentos de trabajo 44-48,* Santiago, SUR, 1985 (encuesta realizada entre *pobladores* de Santiago).
TOVAR S. (T.): *Vecinos y pobladores en la crisis 1980-1984,* Lima, mimeografiado, 1981.
VELLINGA (M.): «Los pequeños márgenes de desarrollo autónomo: cooptación y control de los movimientos sociales urbanos en Monterrey, México», en *Revista Paraguaya de Sociología,* septiembre-diciembre de 1985, págs. 27-48.

III. 4. El sindicalismo obrero

ALEXANDER (R.): *Organizaded Labor in Latin America,* Nueva York, 1965.
ALONSO JIMÉNEZ (A.): *El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-1959,* México, Era, 1972.
BALVE (B.), MARÍN (J. C.) y MURMIS (M.): *Lucha de calle, lucha de clases. Elementos para su análisis, 1961-1969,* Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973.

BALLÓN (E.) (bajo la dirección de): *Movimientos sociales y crisis. El caso peruano,* Lima, DESCO, 1986.
BARRERA (M.) y otros: *Sindicatos y Estado en el Chile actual,* Ginebra, UNRISD, 1983, traducción francesa, 1985.
BIZBERG (I.): *La acción obrera en Las Truchas,* México, Colegio de México, 1982.
— *La clase obrera mexicana,* México, SEP, 1985.
— *Syndicalisme et État au Mexique* (tesis), París, EHESS, 1988.
BRIONES (C.) y MEJÍA (J.): *El obrero industrial,* Lima, 1964.
CALDERÓN (F.) (bajo la dirección de): *Los movimientos sociales ante la crisis,* CLACSO-UNU-IISUNAM, 1986.
CAMPERO (G.) y VALENZUELA (J.): *El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981,* Santiago, ILET, 1984.
CAVAROZZI (M.): *Unions and politics in Argentina, 1955-1962,* Wilson Center, mimeografiado, 1979.
CEDEC: *Sindicatos em uma época de crise,* Petrópolis, Vozes, 1984.
CLACSO: *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta,* Santiago, 1986.
CLACSO-ILET: *Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile,* Santiago, 1985.
CÓRDOVA PÉREZ (F.): *Le mouvement anarchiste au Mexique (1910-1930)* (tesis), París, 1986.
COSSE (G.): *Clase obrera, democracia y autoritarismo,* Montevideo, CIESU, mimeografiado, 1985.
Crítica y utopía, número especial, núm. 6, Buenos Aires, 1982.
CROES (H.): *El movimiento obrero venezolano,* Caracas, Ed. Movimiento Obrero, 1973.
CUEVA (A.): *Sindicato e potere nell'America Latina,* Roma, Ed. Lavoro, 1985.
DELICH (F.): *Crisis y protesta social,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2.ª ed. aumentada, 1974.
DI TELLA (T.): *El sistema político argentino y la clase obrera,* Buenos Aires, Eudeba, 1964.
DUCATENZEILER (G.): *Syndicat et politique en Argentine (1955-1973)* (tesis, París), Presses de l'Université de Montréal, 1980.
ERICKSON (K. P.): *Labour in the Political Process in Brazil. Corporatism in a Modernizing Nation* (tesis), Columbia University, 1970.
FALETTO (E.): *Movimiento laboral y comportamiento político,* Santiago, FLACSO, mimeografiado, 1977.
GARCÍA (A.): *Estructura social y desarrollo económico,* Santiago, ICIRA, 1969.
GONZÁLVEZ (F. L.): *Duas Vertentes e dois projectos no sindicalismo brasileiro,* São Paulo, Cadernos CEDEC, 1985.
HALL (M.): *Immigration and the Early São Paulo Working Class,* São Paulo, 1975.
HUMPHREY (J.): *Fazendo o «milagre». Controle capitalista e luta operária na indústria automobilística* (traducción del inglés), São Paulo, Vozes-CEBRAP, 1982.
HUTCHINSON (B.) (bajo la dirección de): *Mobilidade e trabalho,* São Paulo, 1960.
IBRAHIM (J.) y otros: «Experiencia en Osasco», en *Pueblo/poder,* suplemento especial, Santiago, octubre de 1972.

JELIN (E.): *La protesta obrera,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1974.
— «Espontaneidad y organización en el movimiento obrero», en *Revista Latinoamericana de Sociología,* 1977-1978.
KATZMAN (R.) y REYNA (J. L.) (bajo la dirección de): *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina,* México, Colegio de México, 1979.
LANDER (E.) y ARCONADA (S.): *La Confederación de Trabajadores en Venezuela ante la crisis,* Caracas, mimeografiado, 1985.
LANDSBERGER (H.): «La elite obrera en América Latina y la revolución», en SOLARI (A.) y LIPSET (S. M.): *Elites in Latin America,* Oxford University Press, 1967.
LAS CASAS (R.): *Le comportement ouvrier au Chili* (tesis), París, EPHE, 1975.
LEHMBRUCH (C.) y SCHMITTER (Ph.): *Patterns of Corporatist Policy-Making,* Londres, Sage, 1982.
LEÓN (J.) y PÉREZ SAINS (J. P.): *Crisis y movimiento sindical en Ecuador. Las huelgas nacionales del FUT 1981-1985,* Quito, mimeografiado, 1985.
LÓPEZ (J. B.): *Sociedade industrial no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1964.
LOWY (M.) y CHUCID (S.): «Opinioes e atitudes de líderes sindicais metalúrgicos», en *Revista Brasileira de Estudos Políticos,* 1962, páginas 132-164.
LOYO (A.): *La sorprendente estabilidad de una burocracia sindical. La CTM, 1941-1981,* México, 1982.
LOYOLA (A.): *Les ouvriers et le populisme: les attitudes ouvrières à Juiz de Fora* (tesis); París, EHESS, 1973.
MOISÉS (J. A.): *Lições da liberdade e de opressão. O novo sindicalismo e a política,* Río, Paz e Terra, 1982.
MURMIS (M.) y PORTANTIERO (J. C.): *Estudios sobre los orígenes del peronismo,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
NAZAR (V.): «El autoritarismo de la clase obrera chilena y el proceso de cambio en las relaciones sociales de producción», en *Cuadernos de la Realidad Nacional,* julio de 1972, págs. 22-36.
Nueva Sociedad, número especial: *El sindicalismo hoy,* Caracas, 1984.
— número especial: *La clase trabajadora: 100 años de lucha,* Caracas, 1986.
PALOMINO (H.): *El movimiento de democratización sindical,* Buenos Aires, mimeografiado, 1985.
PARODI (J.): *La desmovilización del sindicalismo peruano,* Lima, IEP, 1985.
— *Ser obrero es algo relativo...,* Lima, IEP, 1986.
PAYNE (J.): *Labour and Politics in Peru. The System of Political Bargaining,* Yale University Press, 1985.
PÉCAUT (D.): *Política y sindicalismo en Colombia,* Bogotá, La Carreta, 1973.
PEREIRA (L.): *Trabalho e desenvolvimento no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1965.
PÉREZ SAINZ (J. P.): *Clase obrera y democracia en El Ecuador,* Quito, El Conejo, 1985.
PETRAS (J.) y ZEITLIN (M.): *El radicalismo político de la clase trabajadora chilena,* Buenos Aires, CEAL, 1969.
PIERRE-CHARLES (G.): *El Caribe contemporáneo,* México, Siglo XXI, 1981.
QUAMINA (O.): *Cries from the Workplace. The Making of a Third World Working-Class,* UNRISD, mimeografiado, 1983.
RAMOS (V.): *Action syndicale et système politique au Mexique,* París, mimeografiado, 1985.
Revista Mexicana de Sociología, número especial, 1978, núm. 2: *La situación*

laboral en América Latina (Sigal, Jelin, M. H. de Almeida, Moisés, Zavaleta, Barrera, Sulmont).

REYNA (J. L.), ZAPATA (F.) y otros: *Tres estudios sobre el movimiento obrero en México,* México, Colegio de México, 1976.

RODRIGUES (J. A.): *Sindicato e desenvolvimento no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1968.

RODRIGUES (L. M.): *Conflito industrial e sindicalismo no Brasil,* São Paulo, DIFEL, 1966.

— (bajo la dirección de): *Sindicalismo e sociedade,* São Paulo, DIFEL, 1968.

— *Industrialização e atitudes operárias,* São Paulo, Brasiliense, 1970.

— *Trabalhadores, sindicatos e industrialização,* São Paulo, Brasiliense, 1974.

— «Tendências futuras do sindicalismo brasileiro», en RATTNER (H.) (bajo la dirección de): *Brasil 1990,* São Paulo, 1979.

ROJAS F. (J.): *El sindicalismo y el Estado en Chile (1924-1936),* Santiago, J. Rojas, 1986.

SIMÃO (A.): *Sindicatos e Estado,* São Paulo, Dominus Editora, 1966; Atica, 1981.

SPALDING (H.): *Organizad labour in Latin America,* Nueva York, New York University Press, 1977.

SULMONT (D.): *Historia del movimiento obrero peruano, 1890-1980,* Lima, Tarea, 1977.

TAVARES DE ALMEIDA (M. H.): «O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança», en SORJ (B.) y TAVARES DE ALMEIDA (M. H.) (bajo la dirección de): *Sociedade e Política no Brasil pós-64,* São Paulo, Brasiliense, 1983, págs. 191-214.

— «Novas demandas, novos direitos: experiências do sindicalismo paulista na última década», en *Dados,* 3-26, 1983, págs. 265-290.

TOURAINE (A.): «Mobilité sociale et conscience ouvrière à São Paulo», en *Sociologie du Travail,* número 1, 1961.

TOURAINE (A.), DI TELLA (T.), REYNAUD (J.-D.) y BRAMS (L.): *Huachipato et Lota,* Prís, CNRS, 1961.

VELLINGA (M.): *Industrialización, burguesía y clase obrera en México,* México, Siglo XXI, 1979.

VERDESOTO (L.): *Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en Ecuador,* Quito, mimeografiado, 1985.

VIANNA WERNECK (L.): *Liberalismo e sindicalismo no Brasil,* Río, Paz e Terra, 1978.

WEFFORT (F.): *Sindicatos e política* (tesis), São Paulo, 2 vols., 1971.

— *Participação e conflito industrial. Contagem e Osasco,* São Paulo, CEBRAP, mimeografiado, 1972.

YEPES DEL CASTILLO (Y.) y BERNEDO (J. A.): *La sindicalización en el Perú,* Lima, Pontificia Universidad Católica, 1985.

ZAPATA (F.): *La stabilité politique du Chili. Quelques hypothèses sur le rôle du mouvement ouvrier* (tesis), París, EPHE, 1970.

— *Los mineros de Chuquicamata: ¿productores o proletarios?* México, Colegio de México, cuaderno 13, 1975.

— *Mineros y militares en la coyuntura actual de Bolivia, Chile y Perú,* México, Colegio de México, 1979.

ZAVALETA (R.): *El poder dual en América Latina,* México, Siglo XXI, 1974.

— *Las masas en noviembre,* La Paz, Juventud, 1983.

CUARTA PARTE

IV. 1. Los límites del parlamentarismo

AGUIAR (C.), TERRA (J. P.), WONSEWER (I.) y SARACHAGA (D.): *Escenarios políticos y sociales del desarrollo latinoamericano* (capítulo IV, 3, 4, 5), Buenos Aires, Eudeba (sobre Uruguay).

ANDERSON (C. W): *Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of Restless Nations,* Nueva York, Van Nostrand, 1967.

ANGELL (A.): «Populism and Political Change. The Case o Colombia», en *Sociological Review,* monografía, 2, febrero de 1967, págs. 79-91.

ARELLANO (J. P.): *Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984,* Santiago, CIEPLAM, 1985.

BITAR (S.): *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena,* México, Siglo XXI, 1979.

BONILLA (F.): *Politics of Change in Venezuela,* tomo II: *The Failure of Elites,* Cambridge, MIT Press, 1979.

BOURRICAUD (F.): *Pouvoir et société dans le Pérou contemporain,* París, Colin, 1965.

CAMARGO (A.): *O intelectual e a política: encontros com Afonso Arinos,* Brasilia, Dom Quixote, 1983.

CARDOSO (F. H.): *O modelo político brasileiro,* 1972.

CARDOSO (F. H.) y WEFFORT (F.) (bajo la dirección de): *América Latina. Ensayos de interpretación,* Santiago, Ed. Universitaria, 1970.

COLLIER (J.): *Clases, estado y nación en el Perú,* Lima, IEP, 1978.

DEBRAY (R.): *Entretiens avec Allende sur la situation au Chili,* París, Maspero, 1971.

DE RIZ (L.): *Sociedad y política en Chile; de Portales a Pinochet* (tesis, París), México, UNAM, 1979.

DE RIZ (L.) y otros: *El Parlamento hoy,* Buenos Aires, CEDES, 1986.

DOS SANTOS (T.): *Impasse and Crisis in Brazilian Politics* (tesis), Stanford, Stanford University Press, 1972.

FALETTO (E.), RUIZ (E.) y ZEMELMAN (H.): *Génesis histórica del proceso político chileno,* Quimantú, 1971.

FILGUEIRA (C.): *Burocracia y clientela. Una política de absorción de tensiones,* Montevideo, Cuadernos del Instituto de Ciencias Sociales, 1970.

FLACSO: *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina,* San José, 1982.

— *Partidos y democracia,* Santiago, 1985.

FOXLEY (A.): *Para una democracia estable,* Santiago, CIEPLAN-Aconcagua, 1985.

GARCÉS (J. E.): *La pugna política por la presencia en Chile,* Santiago, Ed. Universitaria, 1971.

— *El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende,* Madrid, Siglo XXI, 1974.

GARRETÓN (M. A.) y MOULIÁN (T.): *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile,* Santiago, Minga, 1983.

HUNTINGTON (S.): *Political Order in Changing Societies,* Yale University Press, 1978.

JAGUARIBE (H.H.): *Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político,* Río.

JOXE (A.): *Le Chili sous Allende,* París, Gallimard-Julliard, 1974.

KANTOR (H.): *The Ideology and Program of the Peruvian Aprista Movement,* Berkeley, University of California Press, 1953.

KAUFMAN PURCELL (S.): *The Mexican Profit-Sharing Decision. Politics in an Authoritarian Regimen,* Berkley, University of California Press, 1965.

KLING (M.): «Hacia una teoría del poder y de la inestabilidad política en América Latina», en PETRAS (J.) y ZEITLIN (M.): *América Latina, ¿reforma o revolución?,* Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

LABASTIDA (J.): «Proceso político e independencia en México, 1970-1976», en *Revista Mexicana de Sociología,* enero-marzo de 1977.

LAFER (C.): *O sistema político brasileiro,* São Paulo, Perspectivas, 1975.

LECHNER (N.) (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* México, Siglo XXI, 1981.

LINZ (J.) y STEPAN (A.) (bajo la dirección de): *The Breakdown of Democratic Regimes in Latin America,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978.

LIPSET (S. M.) y SOLARI (A.), editores: *Elites in Latin America,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.

MARTZ (J. D.): *Acción Democrática. Evolution of a Modern Political Party in Venezuela,* Princeton University Press, 1966.

MENDES DE ALMEYDA (C.): «Sistema político e modelo de poder no Brasil», en *Dados,* núm. 1, 1966, págs. 7-41.

MOULIÁN (T.): *Los frentes populares y el desarrollo político de la década de los 60,* FLACSO, 1983.

NEEDLER (M.) (bajo la dirección de): *Political Systems in Latin America,* Nueva York, Van Nostrand, 1970.

O'DONNELL (G.): *Estado y alianzas de clases en Argentina, 1956-1976,* Buenos Aires, CEDES, mimeografiado, 1976.

PAYNE (J.): *Labor and Politics in Peru. The System of Political Bargaining,* Yale University Press, 1965.

— *Patterns of Conflict in Colombia,* Yale University Press, 1968.

PÉCAUT (D.): *L'ordre et la violence,* París, EHESS, 1987 (1.ª ed., tesis, 3 vols., París, 1978).

PERALTA RAMOS (M.): *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (1930-1970),* Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

RAMÍREZ NECOCHEA (H.): *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891,* Santiago, 2.ª ed., 1969.

RATINOFF (L.): «Los nuevos grupos urbanos. Las clases medias», en SOLARI (A.) y LIPSET (S. M.), *op. cit.,* págs. 71-102.

REAL DE AZÚA (C.): *Uruguay, ¿una sociedad amortiguadora?,* Montevideo, CIESU, 1985.

SCHMITTER (Ph.): *Interest Conflict and Political change in Brazil,* Stanford, Stanford University Press, 1971.

SKIDMORE (T.): *Politics in Brazil (1930-1964). An Experiment in Democracy,* Nueva York, Oxford University Press, 1967.

SOLARI (A.): *Estudios sobre la sociedad uruguaya,* 2 vols., Montevideo, Arca, 1964.

SOURROUILLE (J.) y MALLON (R.): *Economic Policy Making in a Conflict Society. The Case of Argentina,* Harvard University Press, 1974.

STALLINGS (B.): *Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958-1972,* Stanford, Stanford University Press, 1978.
TIRONI (E.): *Pinochet et la dictadure libérale,* París, CETRAL-L'Harmattan, 1987.
TOURAINE (A.): *Vie et mort du Chili populaire,* París, Seuil, 1973.
VALENZUELA (A.): *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978.
WILDE (A. W.): «Conversations among Gentlemen: Oligarchies and Democracy in Colombia», en LINZ (J.) y STEPAN (A.), ed.: *The Breakdown of Democratic Regimes in Latin America,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978, págs. 28-81.
ZAVALETA (R.): *El poder dual en América Latina,* México, Siglo XXI, 1974.

IV. 2. De las guerrillas al poder revolucionario

BAMBIRRA (V.): *La revolución cubana. Una reinterpretación,* Santiago, CESO, 1973.
BÉJAR (H.): *Perú, 1965. Una experiencia libertadora en América Latina,* México, Siglo XXI, 1969.
BURGOS (E.): *Moi, Rigoberta Menchu,* París, Gallimard, 1983 (sobre la vida y las luchas de una campesina del Quiché en Guatemala).
CABARRÚS (C.): *Génesis de una revolución,* México, La Casachata, 1983.
CASTAÑEDA (J.): *Nicaragua. Contradicciones en la revolución,* México, Tiempo Extra, 1980.
CASTRO (F.): *La Historia me absolverá,* La Habana, 1967.
— *Fidel Castro parle,* París, Maspero, 1961.
COLBURN (F. D.): *Post-Revolutionary Nicaragua. State, Class and Dilemmas of Agrarian Policy,* University of California Press, 1986.
CORRAGGIO (J. L.): *Movimientos sociales y revolución. El caso de Nicaragua,* mimeografiado, 1983.
CRUZ (A.) y VELÁZQUEZ (J. L.) (bajo la dirección de): *Nicaragua: regresión en la revolución,* Costa Rica, Libro Libre, 1986.
DEBRAY (R.): «Revolución en la revolución», en *Cuadernos de la Revista Casa de las Américas,* La Habana, 1961 (trad. francesa, París, Maspero).
— *La critique des armes,* 2 vols., París, Seuil, 1974.
— *La guérilla du Che,* París, Seuil, 1974.
DEGREGORI (C.): *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros,* Lima, IEP, mimeografiado, 1985.
DOMÍNGUEZ (J.): *Cuba: Order and Revolution,* Cambridge, Harvard University Press, 1978.
DUFLO (M.) y RUELLAN (F.) (bajo la dirección de): *Le volcan nicaraguayen,* París, La Découverte, 1985.
DUMONT (R.): *Cuba, socialisme et développement,* París, Seuil, 1964.
— *Cuba est-il socialiste?,* París, Seuil, 1970.
FALS BORDA (O.): *La subversión en Colombia,* Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1967.
FERNANDES (F.): *Da guerrilha ao socialismo: a revolução cubann,* São Paulo, BAO, 1980.

GABEIRA (F.): *Les guérilleros sont fatigués,* París, A. M. Métailié, 1980 (traducción francesa de *O qué é isso companheiro,* 1979).
GOTT (R.): *Rural Guerrillas in Latin America,* Londres, Penguin Books, 1973.
GROS (C.): «Guérillas et mouvements indiens paysans dans les années soixante», en *Cahiers des Amériques Latines,* núm. 23, 1980.
GUEVARA (E.): *Oeuvres révolutionnaires, 1959-1967,* París, Maspero, 1968.
— *Textes politiques,* París, Maspero, 1965-1968.
— *Journal de Bolivie,* París, Maspero, 1968.
KAROL (K. S.): *Guerrilleros in Power,* Nueva York, 1970.
LABROUSSE (A.): *Les tupamaros: guérilla urbaine en Uruguay,* París, Seuil, 1971.
LEIKEN (R.) (bajo la dirección de): *Central America. Anatomy of Conflict,* Pergamon Press, 1984.
MARIGHELA (C.): *La guerrilla en Brasil,* Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971.
MARTZ (J. D.): *Central America. The Crisis and the Challenge,* Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1959.
MESA LAGO (C.): *The Economy of Socialist Cuba,* University of New Mexico Press, 1961.
— *Revolutionary Change in Cuba,* University of Pittsburgh Press, 1971.
— *Cuba in the 1970s. Pragmatism and Institutionalization* (segunda edición), University of New Mexico, 1978.
PETRAS (J.) y ZEITLIN (M.): *América Latina, ¿reforma o revolución?,* 2 vols. 1970.
PORTOCARRERO (F.): *Le mouvement étudiant péruvien* (tesis), París, 1975.
RAMÍREZ (R.): *Lettres du Front guatemaltèque,* París, Maspero, 1970.
Revista Mexicana de Sociología, número especial: *Centroamérica y el nuevo imperialismo,* julio-septiebre de 1984.
SEERS (D.) (bajo la dirección de): *Cuba. The Economic and Social Revolution,* University of North Carolina Press, 1964.
SILVA MICHELENA (J. A.): *Conflict and Consensus in Venezuela* (tesis), MIT, mimeografiado, 1968.
THOMAS (H.): *La lucha por la libertad,* tomo III: 1959-1970, México, 1974.
TORRES (C.): *Écrits et paroles,* París, Seuil, 1968.
TORRES-RIVAS (E.): *Crisis del poder en Centroamérica,* Editorial Universidad Centroamericana, 1981.
VAMBIRRA (V.): *Diez años de insurrección en América Latina,* 2 vols., Santiago, PLA, 1971.
VARGAS LLOSA (M.): *Historia de Mayta,* Barcelona, Seix Barral, 1984.
WHEELOCK R. (J.): *Imperialismo y dictadura. Crisis de una formación social,* México, Siglo XXI, 1975.
ZEITLIN (M.): *Revolutionary Politics of the Cuban Working-Class,* Princeton University Press, 1967.

IV. 3. El Estado antipopular

ARRIAGADA (G.): *El pensamiento político de los militares,* Santiago, CISEC, 1980.

— *La política militar de Pinochet,* Santiago, sin editor, 1985.
BONASSO (M.): *L'Aquarium,* traducción francesa, París, Orban, 1986.
BRUNNER (J. J.): *La cultura autoritaria en Chile,* FLACSO, 1981.
CAMPOS COELHO (E.): *Em busca da identidade: o exército e a política na sociedade brasileira,* Río, Forense Universitária, 1976.
CARDOSO (F. H.): *Estado y sociedad en América Latina,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1972.
— *O modelo político basileiro,* São Paulo, DIFEL, 1973.
— *Autoritarismo e democratização,* Río, Paz e Terra, 1975.
CAVAROZZI (M.): *Autoritarismo y democracia, 1955-1983,* Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
COLEGIO DE MÉXICO, *Centroamérica en crisis,* México, 1980.
COLLIER (D.) (bajo la dirección de): *The New Authoritarianism in Latin America,* Princeton University Press, 1979.
COMBLIN (J.): *Le pouvoir militaire en Amérique Latine: l'idéologie de la securité nationale,* París, Delaye, 1977.
COTLER (J.): *El populismo militar peruano. Un modelo,* Lima, IEP, 1969.
— *Intervenciones militares y «transferencia del poder a la civilidad» en el Perú,* Wilson Center, mimeografiado, Working-84, pág. 1980.
Crítica y Utopía, núm. 5: *Dictaduras y dictadores,* Buenos Aires, 1981.
DE ATAÏDE CASTRO (C. E.): *Régime autoritaire et entreprise publique au Brésil* (tesis), París, EHESS, 1986.
DOS SANTOS (W.): *Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira,* Río, Campus, 1979.
EASTON (D.): *A System Analysis of Political Life,* Nueva York, Wiley, 1965.
ECHEVERRÍA (R.): *La política educacional y las transformaciones del sistema de educación en Chile a partir de 1973,* Wilson Center, mimeografiado, 1980.
FAUCHER (P.): *Le Brésil des militaires,* Presses de l'Université de Montréal, 1981.
GARRETÓN (M. A.): *El proceso político chileno,* Santiago, FLACSO, 1983.
— *Dictaduras y democratización,* Santiago, FLACSO, 1984.
— «Proyectos, trayectorias y fracasos de los regímenes militares del cono sur, un balance», en *Alternativas,* Santiago, CERC, núm. 7, enero-abril de 1984.
GOES (W. de) y CAMARGO (A.): *O drama da sucessão,* Río, Nova Fronteira, 1984.
IANNI (O.): *O colapso do populismo no Brasil,* São Paulo, Civilização Brasileira, 1968.
JAGUARIBE (H.): *Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político,* Río, PAIDOS, 1972.
JOHNSON (J.): *The Military and Society in Latin America,* Stanford, Stanford University Press, 1965.
LABASTIDA DEL CAMPO (J.) (bajo la dirección de): *Dictadores y dictaduras,* México, Siglo XXI, 1986.
LAMOUNIER (B.): *Ideology and Authoritarian Regimes. Theoretical Perspectives and Study of the Brasilian Case* (tesis), UCLA, 1974.
LE BOT (Y.): «La contestation antiétatique en Bolivie», en *Les Frontières du pouvoir en Amérique Latine,* Toulouse, 1983.
LECHNER (N.): *La crisis del Estado en América Latina,* Caracas, El Cid, 1977.
— (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* México, Siglo XXI, 1981.

LEIKEN (R.) (bajo la dirección de): *Central America. Anatomy of Conflict,* Nueva York, Pergamon Press.

LIEUWEN (E.): *Arms and Politics in Latin America,* Nueva York, Praeger, 1961.

LINZ (J.): «Totalitarian and Authoritarian Regimes», en Greenstein and Polsby, editores, *Handbook of Political Science,* vol. III, Addison Westley, 1975.

LINZ (J.) y STEPAN (A.): *The Breakdown of Democratic Regimes,* Baltimore, John Hopkins University Press, 1978.

LIPSET (S. M.): *L'homme et la politique,* París, Seuil, 1963 (traducción francesa de *Political Man,* 1960).

LOWENTHAL (A.) (bajo la dirección de): *Armies and Politics in Latin America,* Nueva York, Holmes and Mayer, 1976.

— *The Peruvian Experiment. Continuities and Changes and the Military Rule,* Princeton University Press, 1983.

MALLOY (J.) (bajo la dirección de): *Authoritarianism and Corporatism in Latin America,* Univesity of Pittsburgh, 1977.

MOULIÁN (T.) y VERGARA (P.): *Estado, ideología y políticas económicas en Chile, 1973-1978,* Santiago, CIEPLAN, 1979.

NUN (J.): *Latin America: the Hegemonic Crisis and the Military Group,* Berkeley, Institute of International Studies, 1979.

O'DONNELL (G.): *Modernización y autoritarismo,* Buenos Aires, Paidos, 1972.

— «Tensiones en el Estado burocrático autoritario y la cuestión de la democracia», en COLLIER (D.): *op. cit.,* Buenos Aires, CEDES, 1978.

— *El Estado burocrático autoritario. Triunfo, derrotas y crisis,* Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982.

OSZLAK (O.): *Public Policies and Political Regimes in Latin America,* Wilson Center, mimeografiado, 1984.

PINHEIRO (P. S.) (bajo la dirección de): *Estado autoritário e movimentos populares,* Río, Paz e Terra, 1979.

POLITZER (P.): *Miedo en Chile,* Santiago, CESOC. Ed. Chile y América, 1985.

PRADO SALMÓN (F., general): *Poder y fuerzas armadas, 1949-1982),* La Paz, Los Amigos del Libro, 1984.

PRATS (C. general): *Memorias. Testimonio de un soldado,* Santiago, Pehuén, 1985.

REYNA (J. L.) y WEINER (R.): *Authoritarianism in Mexico,* Philadelphia Institute for Studies of Human Issues, 1972.

ROJAS (F.) (bajo la dirección de): *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina,* San José de Costa Rica, FLACSO, 1982.

ROUQUIÉ (A.): *Pouvoir militaire et société politique en république Argentine,* París, FNSP, 1978.

— (bajo la dirección de): *Les partis militaires au Brésil,* París, FNSP, 1980.

— *L'État militaire en Amérique Latine,* París, Seuil, 1982.

— (bajo la dirección de): *Argentina hoy,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1982.

SCHMITTER (Ph.) (bajo la dirección de): *Military Rule in Latin America. Functions, Consequences and Perspectives,* Beverly Hills, Sage, 1973.

SORJ (B.) y TAVARES DE ALMEIDA (M. H.) (bajo la dirección de): *Sociedade e política no Brasil pós-64,* São Paulo, Brasiliense, 1983.

STEPAN (A.): *The Military in Politics. Changing Patterns in Brazil,* Princeton University Press, 1971.

— (bajo la dirección de): *Authoritarian Brazil: Origins, Policies and Future,* Yale University Press, 1973.

— *The State in Society. Peru in Comparative Perspective,* Princeton University Press, 1978.
SWEEZY (P.) y HUBERMAN (L.): *Socialism in Cuba,* Monthly Labour Press, 1969.
TIRONI (E.): *Pinochet, la dictadure libérale,* París, CETRAL-L'Harmattan, 1987.
TORRES RIVAS (E.) y otros: *Centroamérica hoy,* México, Siglo XXI, 1975.
— «Derrota oligárquica, crisis burguesa, revolución popular», en *El Trimestre Económico,* abril-junio de 1983, págs. 991-1018.
— Crisis del poder en Centroamérica, San José, Educa, 2.ª ed., 1983.
TRINDADE (H.): *Integralismo,* Sąo Paulo, DIFEL, 1974 (traducción francesa en prensa).
VARAS (A.) y AGÜERO (F.): *El proyecto político militar,* Santiago, FLACSO, 1984.
VARAS (A.), AGÜERO (F.) y BUSTAMANTE (F.): *Chile, democracia, fuerzas armadas,* Santiago, FLACSO, 1980.
VERGARA (P.): *La transformación del Estado chileno bajo el régimen militar,* CIEPLAN, marzo de 1980.
— *Auge y caída del neoliberalismo en Chile,* Santiago, FLACSO, 1985.

QUINTA PARTE

V. 1. La crisis financiera y económica

ALEJO (F. J.): «Crecimiento, estabilidad y distribución: los tres grandes problemas del desarrollo: el caso de México», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1983, págs. 33-72.
BACHA (E.): *Latin America Debt: A Reform Proposal,* CEPAL, mimeografiado, 1985.
BELLUZZO (L. G. M.) y COUTINHO (R.) (bajo la dirección de): *Desenvolvimento capitalista no Brasil. Ensayos sobre crise* (artículos de M. C. Tavares, J. Serra, etc.), Sąo Paulo, Brasiliense, vol. I, 1984.
BOYER (R.) (bajo la dirección de): *Capitalismes fin de siècle,* París, PUF, 1986 (capítulo sobre Chile y Venezuela).
CANITROT (A.): *Orden social y monetarismo,* Buenos Aires, CEDES, 1983.
CEPAL: *Estudio económico de América Latina y Caribe,* informes anuales.
— *La crisis en América Central,* 1983.
— «Política de ajuste y renegociación de la deuda externa en América Latina», en *Cuadernos de la CEPAL 48,* diciembre de 1984.
— *Crisis y desarrollo: presente y futuro de América Latina y el Caribe* (documento de síntesis de una reunión de trabajo organizada por la «CEPAL Técnica»); 3 volúmenes, mimeografiado, mayo de 1985. (Hay que leer el conjunto de los trabajos presentados en ese simposio.)
— *La crisis en América Latina, su evolución y perspectivas,* Estudios e Informes de la CEPAL 46, 1985.
— *Desarrollo económico: una evaluación y proyecciones 1985-1995,* marzo de 1986.

— *El desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requisitos y opciones* (informe para la conferencia de México), 19-23 de enero de 1987.

CIEPLAN: *Modelo económico chileno. Trayectoria de una crítica,* Santiago, Aconcagua, 1982 (textos de Arellano, Cortázar, Flaño, Ffrench-Davis, Foxley, Meller, Muñoz, Tironi).

CORDERA (R.) (bajo la dirección de): *Desarrollo y crisis de la economía mexicana,* México, FCE, 1981.

CORNELIUS (W.): «Economía política de México en el régimen de De la Madrid», en *Investigación Económica,* abril-junio de 1985, páginas 331-379.

CORTÁZAR (R.) (bajo la dirección de): *Políticas macro-económicas. Una perspectiva latinoamericana,* Santiago, CIEPLAN, 1986.

DEVLIN (R.) y MUNDT (G.): *Indicadores del endeudamiento externo* (revisión de junio de 1985), CEPAL, 1985. (Este documento presenta los datos más elaborados disponibles a finales de 1985.)

— *América Latina, renegociación de la deuda externa. Dos documentos,* CEPAL, 10-9-1985.

FAJNZYLBER (F.): *La industrialización trunca de América Latina,* México, Nueva Imagen, 1983.

FFRENCH-DAVIS (R.): «El experimento monetarista en Chile», en *Estudios CIEPLAN,* número 9, diciembre de 1982.

FRENKEL (R.) y DAMILL (M.): *Política económica de emergencia y tentativa de concertación,* Santiago, PREALC, mimeografiado, 1986.

FOXLEY (A.): «Toward a Free Market Economy. Chile 1974-1979», en *Wilson Center,* Working Paper número 72, 1980.

— *Para una democracia estable,* Aconcagua, CIEPLAN, 1985.

FURTADO (C.): *A nova dependência,* Río, Paz e Terra, 5.ª edición, 1983.

— *O Brasil pós milagre,* Río, Paz e Terra, 8.ª edición, 1983.

GARCÍA (N.) y TOKMAN (V. E.): *Acumulación, empleo y crisis,* Santiago, PREALC, 1985.

GELLER (L.) y TOKMAN (V. E.): «Del ajuste recesivo al ajuste estructural», en *Revista de la CEPAL,* número 30, diciembre de 1986, páginas 37-53.

HODARA (J.): «La condición latinoamericana: perspectivas socio-económicas», en *Comercio Exterior,* septiembre de 1983, págs. 1123-1130.

KIM (K. S.): *Industrialization in Mexico: Issues and Strategies,* University of Notre Dame, Kellogg Institute, Working Papers, número 67.

KRISCHKE (P.) (bajo la dirección de): *Brasil: do milagre a «abertura»,* São Paulo, Cortes, 1983.

LAMBERT (B. C.): *19 Amériques Latines. Déclins et décollages,* París, Économica, 1984.

MARTINS (L.): *Estado capitalista e burocracia no Brasil pós-64,* Río, Paz e Terra, 1985.

MASSAD (C.): *Financiamiento externo de América Latina. Hechos, problemas y opciones,* CEPAL, mimeografiado, 1984.

MASSAD (G.) y ZAHLER (R.): *The Adjustment Process in the Eighties, the Need for a Global Approach,* CEPAL, mimeografiado, 1984.

MEDEIROS (C. A. DE): *Os impactos sociais da crise econômica, políticas sociais e transição democrática,* CEPAL, mimeografiado, 1986.

PREALC: *Más allá de la crisis,* Santiago, 1985.

— *Reindustrialización: una condición para el desarrollo,* Santiago, mimeografiado, 1985.

PREBISCH (R.): «Exposición en el vigésimo primer período de sesiones de la CEPAL», en *Revista de la CEPAL,* número 29, agosto de 1986, págs. 13-16.

RAMA (G.) y FALETTO (E.): *Transición estructural y procesos políticos sociales en América Latina, 1950-1980,* 2 volúmenes, CEPAL, mimeografiado, 1984.

— *Sociedades dependientes y crisis en América Latina. Los desafíos de la transformación político-social,* CEPAL, mimeografiado, 1984.

RAMOS (J.): *Estabilización y liberalización económica en el Cono Sur,* Estudios e Informes de la CEPAL, Santiago, 1984.

RATTNER (H.) (bajo la dirección de): *Brasil 1990. Caminhos alternativos ão desenvolvimento,* São Paulo, Brasiliense, 1979.

SCHVAZER (J.): *Martínez de Hoz. La lógica política de la política económica,* Buenos Aires, CISEA, 1983.

SERRA (J.): *Brasil: ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira do apósguerra,* São Paulo, CEBRAP, mimeografiado, 1984.

SOURROUILLE (J.): *Política económica y proceso de desarrollo. La experiencia argentina entre 1976 y 1981,* Estudios e Informes de la CEPAL, número 27, Santiago, 1983.

SUNKEL (O.): *América Latina y la crisis económica internacional: ocho tesis y una propuesta,* Buenos Aires, GEL, Cuadernos del RIAL, 1985.

TAVARES (M. C.) y DE ASSIS (J. C.): *O grande salto para o caos. A economia política e a política econômica do regime autoritário,* Río, Zahar, 1985.

Tiers Monde, número especial dirigido por M. Ikonikoff y P. Salama: *Les politiques d'ajustement: orthodoxie ou hétérodoxie,* enero-marzo de 1987.

TOKMAN (V.): «Crisis, ajuste económico y costo social», en *El Trimestre Económico,* enero-marzo de 1986, págs. 3-34.

WELLS (J.): *Empleo en América Latina: una búsqueda de opciones,* Santiago, PREALC, 1987.

WHITEHEAD (L.): «Mexico from Bust to Boom: a Political Evaluation of the 1976-1979 Stabilization Program», en *Wilson Center,* Working Paper número 44, 1970.

WILSON CENTER: Taller sobre los programas de estabilización económica en América Latina; véase en particular Charlon (M.), Riner (D.): *Political Dimension of Economic Stabilization Programs in Latin America: A Rapporteur's Report* (documento número 56); Skidmore (Th.): *The Politics of Economic Stabilization in Latin America* (documento número 53).

WORLD DEBT TABLES: *Tables 1984-1988* (los datos proceden en general del Banco Mundial), mimeografiado, 1985.

WURGAFT (J.): *Política de estabilización y empleo en América Latina,* Santiago, PREALC, 1982.

ZAHLER (R.): *Las tasas de interés en Chile, 1975-1982,* PNUD-CEPAL, mimeografiado, 1985.

V. 2. La democratización

BALLÓN (E.): *Movimientos sociales y crisis: el caso peruano,* Lima, DESCO, 1986.

BARRERA (M.): *La demanda democrática de los trabajadores chilenos,* Santiago, CES, mimeografiado, 1984.
BOSCHI (R. B.): *Elites industriais e democracia,* Río, Graal, 1979.
BRUNNER (J. J.): *Notas para la discusión,* Santiago, mimeografiado, 1986.
CALDERÓN (F.) (bajo la dirección de): *Los movimientos sociales ante la crisis,* Buenos Aires, CLACSO-UNU-IISUNAM, 1986.
CALDERÓN (F.), DOS SANTOS (M.) (bajo la dirección de): *Latinoamérica. Lo político y lo social en la crisis,* CLACSO, 1983.
— *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden,* CLACSO, 1987.
CALLA ORTEGA (R.): *La encrucijada de la COB,* La Paz, mimeografiado, 1985.
CARDOSO (F. H.): *Perspectivas,* Río, Paz e Terra, 1983.
— *A democracia necessária,* São Paulo, Papirus, 1985.
CAVAROZZI (M.): *Autoritarismo y democracia (1955-1983),* Buenos Aires, CEAL, 1983.
CEPEDA ULLOA (F.) (bajo la dirección de): *Democracia y desarrollo en América Latina,* Buenos Aires, GEL, 1985.
CIEPLAN: *Democracia en Chile. Doce conferencias,* Santiago, 1986.
CLACSO-UNU: *Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile,* Santiago, 1985.
Crítica y Utopía, núms. 10-11: *La Argentina en transición,* Buenos Aires, 1983.
CUEVA (A.): *Democrazia e sviluppo. Problemi del consolidamento democratico en América Latina,* Roma, Ed. Lavoro, 1986.
CHAUI (M.): *Cultura e democracia,* São Paulo, Editora Moderna, 1981.
DEBRUN (M.): *A conciliação e outras estratégias,* São Paulo, Brasiliense, 1983.
DEUTSCH (K.): «Social Mobilization and Political Development», en *American Political Science Review,* septiembre de 1961, págs. 493-514.
DOS SANTOS (M. R.) (bajo la dirección de): *Concertación político-social y democratización,* Buenos Aires, CLACSO, 1987.
DUPAS: *Crise econômica e transição democrática,* São Paulo, Klaxon, 1983.
EVERS (T.): «Identidade: a face oculta dos novos movimentos sociais», en *Novos Estudos,* II, 4, 1984, págs. 11-23.
FERREIRA DOS SANTOS (C. N.): *Movimentos urbanos no Rio de Janeiro,* Río, Zahar, 1981.
FLACSO: *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina,* Santiago, 1986.
FLISFISCH (A.): *Problemas de la democracia y la política democrática en América Latina,* Santiago, CEPAL, mimeografiado, 1985.
FOXLEY (A.): *Para una democracia estable,* Santiago, CIEPLAN-Aconcagua, 1985.
GARRETÓN (M. A.): *Actores socio-políticos y democratización. Hipótesis preliminares,* FLACSO, mimeografiado, 1984.
— *Escenarios e itinerarios para la transición,* Santiago, Cuadernos ESIN, 4, 1985.
— *Sociedade e política,* Río, Zahar, 1985.
JAGUARIBE (H.) y otros: *Brasil, sociedade democrática,* Río, José Olympio, 1985.
JAGUARIBE (H.): *Brasil, crise e alternativas,* Río, Zahar, 1974.
JELIN (E.) (bajo la dirección de): *Los nuevos movimientos sociales,* 2 vols.,Buenos Aires, CEAL, 1985.

LASERNA (R.): *La acción social en la coyuntura democrática,* Cochabamba, mimeografiado, 1985.
LECHNER (N.) (bajo la dirección de): *Estado y política en América Latina,* México, Siglo XXI, 1980.
— «Cultura y democratización», en *David y Goliat,* enero-diciembre de 1984.
LEFORT (C.): *Essais sur la politique,* París, Seuil, 1986.
MANZINI COVRE (M. de L.): *A Cidadana que não temos,* São Paulo, Brasiliense, 1986.
MAYORGA (R.) (bajo la dirección de): *Democracia a la deriva,* CLACSO-CERES, 1981 (sobre Bolivia).
— *Movimiento social y sistema político. La crisis del sistema democrático y la COB,* La Paz, mimeografiado, 1985.
MUÑOZ (H.) (bajo la dirección de): *Crisis y desarrollo alternativo en Latinoamérica,* Santiago, Aconcagua, CERC-ICI, 1985.
NUN (J.): «La rebelión del coro», en *Punto de Vista,* mayo de 1984.
O'DONNELL (G.) y SCHMITTER (Ph.): *Political Life after Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Positions,* mimeografiado, s. d.
OLIVEIRA (F. DE): «Réflexions hétérodoxes sur la transition au Brésil», en *Cahiers des Amériques Latines,* primavera de 1985, págs. 5-26.
OSZLAK (O.) (bajo la dirección de): *Proceso, crisis y transición democrática,* Buenos Aires, CEAL, 1984.
PÉCAUT (D.): «Guérillas et violence. Le cas de la Colombie», en *Sociologie du Travail,* 1986, 4, págs. 484-505.
PORTANTIERO (J. C.): *La democratización del Estado,* Buenos Aires, CETIPAL, 1984.
PREBISCH (R.): «La periferia latinoamericana en la crisis global del capitalismo», en *Revista de la CEPAL,* número 26, 1985.
RAMA (G.) (bajo la dirección de): *Escenarios políticos y sociales del desarrollo latinoamericano,* Buenos Aires, Eudeba, 1986.
— *La democracia en Uruguay,* Cuadernos del RIAL, Buenos Aires, GEL, 1987.
Revista Mexicana de Sociología, número especial sobre *Uruguay en la transición,* abril-junio de 1985.
RIZ (L. DE): *Argentina: conjeturas sobre el difícil camino a la democracia,* Buenos Aires, CEDES, 1983.
ROUQUIÉ (A.) (bajo la dirección de): *Argentina hoy,* México, Siglo XXI, 1982.
— (bajo la dirección de): *La démocratie ou l'apprentissage de la vertu,* París, A.-M. Métailié, 1985.
SADER (E.) (bajo la dirección de): *Constituinte e democracia no Brasil hoje,* São Paulo, Brasiliense, 1985.
SINGER (P.) y BRANT (V. C.): *São Paulo. O Povo em movimento,* Río, Vozes, 1980.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: *Simpósio sobre a transição política,* informe de síntesis, julio de 1987, reseña de los debates, agosto de 1987.
WEFFORT (F.): *¿Porque democracia?,* São Paulo, Brasiliense, 1984.
WOLFE (M.): *Toward Democratic Alternatives,* Santiago, CEPAL, mimeografiado, 1984.
ZERMEÑO (S.): «De Echeverría a De la Madrid, hacia un régimen democrático autoritario», en *Revista Mexicana de Sociología,* abril-junio de 1983.

Índice alfabético

(Los nombres en negrita son los nombres de autores citados en el texto).

Abdel-Malek, A.:19.
Ação Popular: 350.
Acción Democrática: 107, 180, 225, 259, 291, 307, 342, 438.
Adhemar de Barros: 240, 249, 311.
Affonso, A.: 221.
Aguascalientes: 214, 460.
Aguirre Cerda, P.: 263.
Ahumada, J.: 101.
Alcántara, A., Camargo: 188, 220, 221.
Alemán, M.: 187.
Alessandri, A.: 21, 306, 455, 456.
Alfaro general: 79, 139.
Alfonsín, R.: 412, 417, 438.
Allende, S.: 22, 132, 195, 263, 282, 307, 312, 313, 315, 316, 350.
Altamirano, C.: 132, 306.
Alves, M.: 350.
ANAPO (Colombia): 459.
Anderson, C. W.: 296.
Angeloz, gobernador: 439.
Angell, A.: 301.
Antuñano, E. de: 80.
ANUC (Colombia): 142, 221, 222.
APRA (Perú): 21, 110, 142, 171, 172, 184, 191, 195, 291, 296, 346.
Arbenz J.: 150, 181, 230, 322.
Arce, B.: 325, 327.
Arenas, A.: 146.
Arévalo, J. J.: 21, 181, 322.
Arizpe, L.: 59.
Armas, C.: 230, 322.
Arns, E.: 110.1
Arraes, M.: 115, 174, 200, 221, 249, 311.
Arriagada, C.: 362.
Arroyo, G.: 110.
Asamblea Popular (Bolivia): 168.
Ávila Camacho, N.: 186.
Aymoré, fábrica: 257.

Balaguer, J.: 175, 238.
Balmaceda, J. M.: 306, 356.
Baño, R.: 235.
Banzer, H.: 80, 173, 210, 227, 272, 374.
Baraona, M.: 306.
Barrantes, A.: 116, 439.
Bartra, R.: 58, 100.
Barrios, R.: 359.
Barrientos, R.: 173, 227, 262, 343.
Barros, A. de: 199.
Bastos, general: 215.
Batallones rojos: 257.
Batista, F.: 144, 332, 358, 359.
Battle y Ordóñez, J.: 178, 261.
Battle R., L.: 261, 312.

Béjar, H.: 346.
Belaúnde, F.: 272.
Belaúnde, V. A.: 142.
Bermedo, J. 275.
Betancourt, R.: 175, 181.
Betancur, B.: 303, 345.
Bettelheim, C.: 338.
Bishop, M.: 175.
Blanco, H. (Perú): 60, 218, 219, 347.
Bloch. E.: 112.
Boff, L.: 112, 113.
Bogotazo: 170, 235.
Bordaberry, J. M.: 312, 313.
Borge, T.: 325, 329, 330.
Bosch, J.: 175, 238.
Bourdé, C.: 61.
Bourricaud, F.: 77, 80, 182.
Bouterse, D.: 361.
Branco, Castelo, general: 304.
Brandt, W.: 325.
Brandao Lopes, J. R.: 73, 255, 256.
Brant, V.: 115.
Bravo, D.: 342, 343.
Briones, C.: 280.
Brizola, L.: 174, 221, 237, 439.
Brooklin Olivera: 329.
Brown, D.: 110.
Brunner, J. J.: 147, 373.
Brunswijk, R.: 361.
Buchi, H.: 431.
Burgos, E.: 149.
Burnham, N.: 260.
Busch Becerra, G.: 183.
Bustamante, A.: 260.
Bustamante, J. L.: 457.
Bustamante Industrial Trade Union: 260.

Caamaño, F.: 175, 322.
Calderón, F.: 211, 242.
Calles, P. E.: 100, 186, 206.
Camacho, A.: 100.
Câmara, Hélder: 114.
Campero, G.: 242.
Cámpora, H. J.: 179, 349.
Campos, R.: 277.
Canudos: 205-207.
Cardenal, E.: 113, 328.
Cardenal, F.: 113, 328.
Cardenas, F.: 100, 101, 131, 182, 186, 187, 198, 286.
Cardoso, F. H.: 50, 76, 77, 79, 241, 242, 299, 310, 368-370.
Cardoso, R.: 242.
Carranza, B.: 153, 214, 281.
Carrillo Puerto, F.: 224.
Castañeda, J.: 326.
Castells, M.: 235.
Castilla, M. D.: 327.
Castillo Armas, C.: 150, 181, 360.
Castro, F.: 133, 144, 180, 309, 313, 344.
Castro, R.: 336.
Catavi: 262.
Cavarozzi, M.: 264, 422.
CEPAL: 35, 36, 42, 57, 68, 110, 147,. 381, 385, 389, 390, 392, 452.
Cerro de Pasco: 171, 255.
CFP (Ecuador): 176.
CGT (Argentina): 179, 258, 264, 271.
CGT (Brasil): 177, 257, 311.
CGT (Chile): 253, 254.
Cícero, padre: 205.
CNC (México): 217, 222, 223.
CNT (Uruguay): 271.
CNT (Chile): 267.
COB (Bolivia): 173, 194, 211, 227, 263, 268, 311, 312.
Cochabamba: 211, 227, 335.
Comblin, J.: 111.
COMIBOL (Bolivia): 272, 458.
CONCLAT (Brasil): 270.
Conselheiro, A.: 204, 357.
CONTAG (Brasil): 459.
CONTAGEM: 265.
Contestado: 205.
Convención (valle de la): 210, 218.
COPEI (Venezuela): 107, 459.
CORDEMEX (México): 223.
Córdoba: 143, 265, 268, 276.
Cordobazo: 456.
CORFO (Chile): 80, 306, 371.
CPT (Paraguay): 263, 264.
Cristeros: 206, 207.
CROM (México): 186, 253, 257, 282.
Cruz, A.: 326.
CT (México): 266.
CTM (México): 186, 257, 258, 266.
CTV (Venezuela): 260, 278.
Cuadra, F. J.: 415.
Cuenca, H.: 342.
CUT (Chile): 263.
CUT (Brasil): 270.
CUT (México): 265.
Chaco: 21, 183, 357.
Chamorro, P. J.: 325, 326.
Chevalier, F.: 80, 106.
Chicago Boys: 367, 371, 372.
Chonchol, J.: 229.

Da Cunha, E.: 207.
Da Matta, R.: 420.
Darío, R.: 138.
Debert, G.: 200.
Debray, R.: 315, 331, 332, 344.
De Castro, S.: 405.
De la Madrid, M.: 188.
De la Puente: 219, 226, 346.
Delfim Neto: 369.
Delumeau, J.: 107.
Devlin, R.: 387.
Díaz, P.: 80, 86, 191.
Di Tella, T.: 78.
Dona Noca: 215.
Dos Santos, J.: 204, 270.
Duarte, N.: 331, 361, 412.
Dubet, F.: 109, 233, 269.
Dubois, padre: 117.
Ducatenzeiler, G.: 264.
Dumont. R.: 338.
Durkheim, L.: 120.
Dutra, E. G.: 256.
Duvallier, F.: 359.
Duvallier, J. C.: 359, 407.

Echandía: 302.
Echeverría, L.: 187, 217, 223.
ELN (Colombia): 345.
Engels, F.: 166.
Escalante, A.: 336.
Escoto, M. de: 113, 328.
Espín, V.: 335.
Estado Novo: 138, 190, 256, 291.

Fajnzylber, F.: 28, 283, 399, 448.
Faletto, E.: 77, 140.
Fanon, F.: 75, 211, 321.
FAR (Guatemala): 323, 332.
Farabundo Martí, Frente (El Salvador): 324, 330.
FARC (Colombia): 345.
Faria, V.: 57.
Fausto, B.: 189.
Favre, H.: 208.
Faye, J. P.: 364.
Febres Cordero, L.: 176.
Fernández, R.: 153, 222.
Fernández, S.: 267.
Ferner, A.: 80.
Ferreira, J.: 204.
Ffrench Davies, R.: 391.
Fierro, M.: 349.
Figueres, J.: 175, 179, 180.
Figueroa, L.: 314.
Filgueira, C.: 57.
Fioravanti, E.: 218.
Flores, G.: 211, 227, 228.
Flores Magón, R.: 214, 253.
FMI: 82, 391, 395.
FOCH (Chile): 254.
Fonseca, C.: 324.
FORCH (Chile): 253.
Foucault, M.: 373.
Foxley, A.: 295.
Frei, E.: 110, 180, 197, 263, 436.
Freire, G.: 57.
Freire, P.: 110, 115, 174, 221.
Frente Sandinista de Liberación Nacional: 324, 325.
Fresno, cardenal: 118.
Fromm, E.: 111.
Frondizi, A.: 145, 171, 264.
FTR (Chile): 72.
Fuentes, Y.: 230.
Furtado, C.: 78, 139, 189, 208, 221, 310.
FUT (Ecuador): 176, 272, 282.

Gaitán, J. E.: 151, 169-171, 220, 234, 286, 296, 302.
Galtieri, L.: 411.
García, A.: 35, 173, 413, 424, 439.
García Moreno, G.: 356.
García, N.: 34, 38, 39, 41, 64, 392.
García Meza, general: 227, 363.
Garretón, M. A.: 368, 441.
Garrido, T.: 106, 142.
GAWU (Guayana): 260.
Geisel, E.: 369.
Germani, G.: 73, 196, 258, 279, 419.
Gilly, A.: 322.
Goes Monteiro, general: 369.
Golendorf: 340.
Gómez, J. V.: 192, 307.
Gómez, L.: 151, 170, 302.
Gómez Millas, J.: 146.
Góngora, M.: 300, 303.
González Casanova, P.: 186, 188.
González Videla, G.: 177.
Goulart, J.: 174, 207, 311.
Gramsci, A.: 167.
Grau San Martín, R.: 359.
Grompone, R.: 68.
Grove, M.: 314.
Gueiler, L.: 211.
Guerra, J.: 226.
Guerreiro Ramos: 144.

Guerra de las Castas: 212.
Guevara, E.: 77, 111, 173, 336-338, 343, 344.
Gunder Frank, A.: 148.
Gutiérrez, G.: 110-112, 116.
Guzmán, A.: 347.
Guzmán Böckler, C.: 75, 76.

Hall, M.: 253.
Haya de la Torre, V. R.: 133, 142, 171, 172, 192, 296.
Herbert, J. L.: 75, 76.
Herrera Campins, L.: 308.
Hidalgo y Costilla, M.: 107.
Hirschman, A.: 137, 197.
Hobsbawm, E.: 205, 239.
Houdart-Morizot, M. F.: 59.
Huachipato: 72.
Huberman, L.: 338.
Huerta, general: 153.
Humphrey, J.: 71.
Huntington, S.: 362, 414.
Hurtado, O: 100, 180, 272.
Hurtado, padre: 107.
Hutchinson, R.: 73.

Ianni, O.: 196.
Ibáñez, general: 182, 263, 306.
Ibarra, E.: 323.
Ibrahim: 265.
Iglesias, H.: 271.
ISEB (Brasil): 141, 144.
Izquierda Unida: 430, 443.

Jagan, Ch.: 260.
Jaguaribe, H.: 140, 144, 171, 364.
Jaramillo, R.: 224.
Jarland, A.: 109, 240.
Jelin, E.: 105, 197, 242.
JEWEL (Granada): 175.
Joaquinzão: 270.
Joazeiro: 205.
José María: 205.
Juan Pablo II: 119, 309.
Juiz de Fora: 189.
Julião, F. (Brasil): 59, 207, 208, 220.

Karol, K. S.: 338.
Katz, J.: 267.
Kirkwood, J.: 103.
Klein, E.: 57, 58, 60.
Krieger Vasena, A.: 264, 305.
Kubitschek, J.: 40, 171, 189, 407.

Lacerda, C.: 200, 249, 304, 311.
Laclau, E.: 198.
Lagos, R.: 28, 78, 81.
Lalive d'Épinay, C.: 108.
Lavaud, J. P.: 227.
Laugerud, K. E.: 360.
Leal, N.: 100.
Le Bot, Y.: 216.
Lechín, J.: 50, 168, 173, 262.
Lechner, N.: 241, 315.
Lefort, C.: 418.
Leguía, A. B.: 172, 191, 192, 216, 280.
Lewis, O.: 236, 282.
Lieberman: 337.
Ligas Camponesas (Brasil): 207, 208.
Lima, A.: 371.
Linz, J.: 367.
Lipset, S. M.: 78, 279, 365, 419.
Lobatón: 346.
López, A. (Colombia): 21, 151, 169, 30
López Arellano, O.: 185, 363.
López Portillo J. (México): 188.
Lora, G.: 167.
Lorscheider, cardenal: 116.
Lota: 72.
Lozada: 206.
Lucas García, general: 360.
Lula: 268, 443.

Llambi, L.: 58.

Maceo: 321.
Maciel, A.: 204.
Madero, E.: 132, 153, 213.
Magalhães Pinto: 311.
Manley, M.: 310.
MAPU (Chile): 229, 456.
Mariátegui, J. C.: 133, 191.
Marighela: 350.
Márquez, P.: 342.
Martí, J.: 321, 341.
Martínez de Hoz, J.: 81, 371.
Martins, L.: 73, 78, 189.
Massera, almirante: 371.
Marulanda *(Tiro Fijo):* 344.
Matos Mar, J.: 65, 231, 237, 433.
Maurer, J. y J.: 205.
MAS (Venezuela): 342.
Da Matta, R.: 420.

BIBLIOTECA

Mattelart, A.: 126.
Mayorga, R.: 428.
Medellín: 110, 114, 151, 282, 302.
Meillassoux, C.: 58.
Mejía, J.: 280.
Melgarejo, M.: 356.
Mejía Victores, O. H.: 411.
Menchu, R.: 149, 218.
Mendes, C.: 144.
Méndez Montenegro, J. C.: 323, 360.
Meyer, J.: 207.
Michelet, J.: 75.
Miguel, L.: 271.
Mikoyan, A.: 335.
MIR (Chile): 72, 142, 313, 350.
MIR (Perú): 219, 346.
Miranda: 168.
Miskitos: 329.
MNR (Bolivia): 132, 145, 168, 173, 194, 227, 262, 296, 298.
Moisés, J. A.: 238.
Molinié-Fioravanti, A.: 59, 60, 210.
Monge, C. T.: 343.
Monterrey: 187.
Montevideo: 146.
Montez, C.: 323.
Montoneros: 145, 179, 212, 348.
Montt, M.: 303.
De Morais, C.: 207.
Morales Bermúdez, general: 183, 415.
Morandé, P.: 118.
Morones, L.: 186, 206, 253.
Moulian, T.: 295, 303, 371.
Múgica, F.: 224.
Mundt, G.: 387.
Murmis, M.: 196, 254, 258.

Nacional Financiera: 187.
Nazar, V.: 276, 280.
Neira, H.: 172, 191.
Neto, D.: 405.
Neves, T.: 413.
Nordeste, región (Brasil): 55, 57, 58, 75, 174, 204.
Nun, J.: 193.
Núñez, C.: 325.

Obando y Bravo, monseñor: 113, 328.
Obregón, general: 224, 281.
O'Donnell, G.: 79, 296, 305, 365-367, 371, 372.
Odría, general: 171, 184, 296.
OLAS: 338, 463.
Onganía, general: 264.
Osasco: 265, 268, 276.
Ospina Pérez, M.: 302.
Ovando, general: 173, 227, 368.

Pachano, S.: 101.
Pacheco Areco, J.: 312.
Pacto Nacional (Colombia): 345.
Palafox, M.: 214.
Palme, O: 325.
Palmeira, W.: 350.
PAN (México): 79.
Paré, L.: 100.
Parodi, J.: 273, 281.
Parrales, E.: 328.
Pascualini: 174.
Pastora, E.: 325.
Payne, J.: 295, 302.
Paz, O: 22, 137.
Paz Estenssoro, V.: 145, 173, 227, 262, 272.
Pécaut, D.: 167, 158, 281, 282, 296, 345, 433.
Peralta Ramos, M.: 296.
Pereira de Queiroz, M. I.: 57, 204.
Pérez, C. A.: 308, 326, 339.
Pérez Godoy, general: 183.
Pérez Jiménez, general: 181, 192, 225, 280, 307.
Perón, E.: 178, 179.
Perón, I.: 179.
Perón, J. D.: 161, 171, 178, 179, 182, 195, 201, 258, 259, 309, 349.
Petras: 325.
Pevez, J.: 216.
Piccinini, A.: 271.
Piérola, N.: 77.
Pinochet, A.: 22, 177, 368, 415, 439.
Pinto, A.: 42, 306, 316, 353.
PIR (Bolivia): 254, 262.
PLEMUU (Uruguay): 244.
PMDB (Brasil): 81, 177, 274, 298, 403, 439.
POLOP (Brasil): 350.
POR (Bolivia): 167, 173, 254, 262.
Portales, D.: 303, 306, 354, 356.
Portantiero, J. C.: 167, 196, 254, 258.
Powell, J. D.: 225.
Prado, C.: 189.
Prado, P. N.: 171, 184, 296.
Prats, general: 356.
PRD (Rep. Dominicana): 175.
PREALC: 28, 38, 56, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 75.
Prebisch, R.: 42, 139, 384.
Prestes, L. C.: 177, 182.

BIBLIOTEC

PRI (México): 82, 86, 186-188, 258, 266, 296, 300.
Proudhon, P. I.: 50.
Pro Vida Decorosa (Uruguay): 242.
Punto Fijo: 307, 342, 438, 459.
Przeworski, A.: 418.
PSD (Brasil): 174, 190, 298.
PT (Brasil): 274, 427.
PTB (Brasil): 174, 177, 190, 200, 298.

Quadros, J.: 240, 257, 304, 439.
Quamina, O.: 277.
Quintero, R.: 192.

Raczynski, D.: 104.
Rama, G.: 147, 178, 373.
Ramírez, H.: 306.
Ramírez *(Orlando):* 323.
Ramírez, S.: 328.
Rancas: 216.
Rangel, I.: 144.
Ratinoff, L.: 306.
Recife: 22, 105, 114, 115.
Redfield, R.: 237.
República Velha (Brasil): 21, 100, 190, 303.
Richard, P.: 112.
Río Grande do Sul: 174.
Ríos Loyola, A.: 73.
Río Montt, E.: 360, 411.
Riveros, L.: 247.
Riz, L. de: 200, 300.
Rodríguez, L. M.: 255, 269.
Rodríguez, C. R.: 336, 337.
Rodríguez Lara, general: 180, 184.
Rojas, J.: 227.
Rojas Pinilla, general: 238, 280, 295, 303.
Roldós, J.: 176, 180, 272.
Romero, monseñor: 122, 361.
Rouquié, A.: 79, 145, 150, 355, 363, 369.
Rucci: J.: 349.

Sacasa, J. B.: 324.
Saffiotti, H.: 103.
Salas, T.: 227, 311.
Salazar, general: 151.
Salgado, P.: 193.
Sampaio, C.: 174.
Sandino, C. A.: 324, 325, 358.
Sanguinetti, J.: 417.
Santa Cruz: 80, 194.
São Bernardo: 268.
Sarney, J.: 413, 438.
Schmitter, Ph.: 233, 367.
Schnacke, O.: 314.
Schneider, general: 355.
Schwartzman, S.: 100.
Scorza, M.: 78, 216.
Seguel, R.: 267.
Sendero Luminoso: 153, 231, 320, 347, 348, 404, 440.
Sendic, R.: 349.
Seregni, L.: 349.
Serra, J.: 71, 197, 367.
Serrano, C.: 104.
Sigal, S.: 74, 200.
Siglo XX: 262.
Siles Suazo, H.: 173, 228, 262.
Silva Henríquez, R.: 110, 117.
Silva Michelena, J. A.: 139.
Simão, A.: 73, 254.
SINAMOS: 139, 183.
Smith, C.: 209.
Soares, M.: 326.
Solari, A.: 78, 85, 373.
Somoza, familia: 179, 324-326, 358.
Sosa, Y.: 219, 220, 322.
Sourrouille, J.: 439.
Stavenhagen, R.: 58, 74.
Stepan, A.: 310.
Stroessner, A.: 367, 375.
SUDENE: 208, 459.
Sulmont, D.: 275.
Sunkel, G.: 126.
SUTCB (Bolivia): 211.
SUTERM (México): 266, 268.
Sweezy, P.: 338.

Tania: 343.
Tavares, M. C.: 71.
Tedesco, C.: 147.
Tejeda, A.: 224.
Terra, G.: 146.
Tiahuanaco: 211.
Tironi, E.: 233, 242, 372.
Tokman, V.: 28, 38, 39, 41, 64, 78, 392.
Toledano, L.: 186, 258.
Tomic, R.: 136.
Tönnies, F.: 120.
Tontons Macoutes: 412.
Toro, T.: 235, 350.
Torres, general: 168, 173, 282.
Torres, Camilo: 345.
Torres-Rivas, E.: 216, 359.
Torrijos, O.: 184, 185, 326.
Touraine, A.: 314.
Trindade, H.: 193.
Trinitarios: 322.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Trujillo: 172, 175.
Tucumán (Argentina): 276.
Tupac Katari: 211, 226.
Tupamaros: 145, 312, 313, 348, 349.
Turcios, L. A.: 322, 323.

Ubico, J.: 359.
UNAM: 82.
Ungo, G.: 330, 361.
Universidad de Buenos Aires: 147.
Universidad de Chile: 146.
Universidad de São Paulo: 146.
Uriburu, J. F.: 170.

Valenzuela, E.: 124, 233.
Valladares, A.: 340.
Vallejo, D.: 265.
Vandor, A.: 264.
Varas, A.: 368, 407, 415.
Vargas, G.: 21, 161, 174, 189, 190, 197, 255, 256, 310, 354.
Vargas Llosa, M.: 22, 439.
Vasconcelos, J.: 144, 209.
Vásquez, F.: 345.
Vekemans, R.: 62.
Velasco Alvarado, general: 80, 139, 161, 183, 184, 226.
Velasco Ibarra, J. M.: 136, 176, 192, 197.
Velázquez, F.: 257.
Verdesoto, L.: 272.
Vergara, P.: 371, 374.
Verón, E.: 200.
Vianna, L. W.: 189.
Vial (Chile): 81.
Videla, J. R.: 411.
Vieira Pinto: 144.
Vila, P.: 105.
Villa, Pancho: 153, 213, 214.
Villarroel, G.: 183, 227.
Viola, general: 411.
Vives, padre: 107.

Weber, M.: 120, 155.
Weffort, F.: 74, 166, 167, 176, 190, 259, 269.
Wessin y Wessin, general: 175.
Wheelock, J.: 325.
Wieviorka, M.: 269.
Williams, E.: 260.
Womack, J.: 213.

Ydígoras Fuentes, M.: 360.
Yepes, I.: 275.
Yrigoyen, H.: 21, 170, 305.
Yucatán: 212, 224.

Zapata, E.: 107, 213, 214.
Zapata, F.: 74, 263.
Zárate «Wilca», P.: 226.
Zavaleta, R.: 144, 145, 167.
Zelaya, J. S.: 325.
Zeitlin, M.: 335.
Zermeño, S.: 197, 242, 436, 443.

Índice temático

Agro-exportadores: 76, 77, 79, 81, 82, 304, 305, 405.
Allegados: 218.
Anarquismo: 253.
Anillos burocráticos (Brasil): 50, 369.
Anticlericalismo: 86, 106, 107.
Arielismo: 143.
Arrendires (Perú): 60, 219.
Autoritarismo: 197, 279-281, 302, 364-366.

Bacharéis (Brasil): 84, 138.
Bairros (Brasil): 58, 257.
Barriadas, véase Poblaciones.
Bismarckismo: 47.
Boías frias (Brasil): 56.
Burguesía: 79.
Burguesía nacional: 78, 324.

Caciquismo: 99-102.
Café: 82, 151, 324.
Campamentos: 234-236.
Campesinos: 39, 101, 151, 152.
Canutos: 108.
Capitalismo: 34, 384, 448.
Carisma: 420.
Caudillismo: 281, 356.
Científicos (México): 80.
Ciudadanía: 87, 88, 248.
Civilismo: 77.
Clase media: 83-88, 305-307, 316.
Clases: 49, 50, 54-89, 130-133, 151, 197, 198, 209, 435.
Clientelismo: 99, 296.
Colonialismo: 48, 150, 211, 212.
Colonos: 54, 64, 65.
Compromiso, Estado de: 166, 190, 310-313.
Comunidades: 59, 60, 101, 155, 209, 210, 215, 230, 231.
Comunidades de base: 112-116, 270.
Comunista, Partido: 70, 116, 177, 180-182, 224, 229, 230, 256, 257, 260, 262, 326, 330, 336, 343, 359.
Comunitaria, Defensa: 113, 114, 120, 121, 207, 212, 216, 226, 420, 421.
Consumo ostentatorio: 36.
Contras (Nicaragua): 327.
Conventillos (Chile, Argentina): 61.
Convivencia (Perú): 153, 184.
Cordones industriales (Chile): 278.
Coronelismo (Brasil): 100.
Corporativismo: 161.
Costa (Perú, Ecuador): 55.
Crecimiento: 37-39, 392.
Crisis: 26, 27, 38, 379-401.

Cristeros (México): 206, 207.
Cultura: 152, 374.
Charros (México): 287.
Chicha, cultura: 65.
Cholos (Perú): 65, 73, 210.

Democracia: 280, 417-432.
Democracia Cristiana: 180, 360, 411.
Democratización: 269, 270, 402-444.
Dependencia: 33, 42, 48, 49, 69, 150, 353.
Desarticulación: 134-149, 160, 199, 200, 314.
Desarrollismo: 110, 140, 148, 421.
Descamisados (Argentina): 258.
Desigualdades: 33-37, 393-395, 418.
Deuda exterior: 385-391, 397.
Dictadura: 191, 192, 292, 293, 361-371, 405-417.
Disponibilidad política: 282, 296.
Distensão (Brasil): 414.
Doble poder (Bolivia): 162, 167, 272.
Droga: 125, 222, 228, 303.
Dualismo: 37, 60, 69, 70, 87, 88.

Educación: 84, 85, 115, 116, 123, 124, 373, 374.
Ejército de reserva: 57, 58.
Ejidos (México): 60, 223, 225.
Elite: 45, 46.
Empleados: 88.
Enclaves: 252.
Engenhos (Brasil): 59.
Enseñantes: 88.
Empresarios, jefes de empresa: 75, 89-82, 89, 189, 437.
Escuela: 85, 86.
Estado: 45, 46, 74, 129, 130, 185-190, 273, 301, 309, 358, 375, 376, 400, 40, 418, 422-424, 429, 430.
Estratificación: 88-90.
Estudiantes: 115, 123, 124, 142-144, 146, 147, 244, 416.
Exclusión: 50, 87, 88, 125, 234, 285.

Familia: 103, 104, 124, 233.
Fascismo: 193.
Favelas, *véase Poblaciones.*
Fazenda, *véase Hacienda.*
Feminismo: 102-104.
Foquismo: 111, 219, 222, 331-333, 341, 342, 348.
Francmasonería: 86.
Frente Popular: 306.
Fuga de capitales: 385.
Funcionarios: 84, 87, 88.

Gamonales (Perú): 75, 77, 432.
Ganadería: 55, 56.
Golpe de Estado: 132, 306, 354-361.
Gremios: 49, 416, 417.
Guadalupismo: 107.
Guerrillas: 153, 175, 318-351, 360, 361, 440.

Hacienda: 54, 55, 59, 60, 218, 219, 231.
Hegemonía: 82, 89, 167, 373.
Heterogeneidad estructural: 42, 70, 88.
Huasipongo (Ecuador): 55.
Huelga: 73, 74, 264-266, 268, 269, 412.

Ideología: 137-140.
Iglesia: 106-122, 206, 409.
Imperialismo: 326, 332, 341.
Indianismo: 208-212, 226, 227.
Indigencia: 63.
Indios: 208-210, 226, 227, 229, 230, 329, 343, 361.
Industrias: 39, 69.
Inflación: 393.
Informal, sector: 64-69, 433.
Inquilinos (Chile): 49, 55.
Integración: 131, 243-245, 297, 433, 448.
Integralismo (Brasil): 193.
Intelectuales: 111, 137-148, 177, 346, 453.
Inversión: 40, 41, 392.

Justicialismo (Argentina): 178, 179, 200, 201, 264, 296.
Juventud: 105, 106, 123-125.

Katarismo (Bolivia): 210-212.

Ladinos: 75, 76.
Lemas (Uruguay): 312.
Liberación nacionnal: 131, 320-331.
Liberalismo: 370-372.
Licenciados: 84, 138.

Maquilladores (México): 187.
Marginalidad: 61-69, 89, 126.

BIBLIOTECA

Marxismo: 111, 112, 130-134, 141, 148, 335, 347, 351.
Mass media: 104, 126-128.
Mesianismo, milenarismo: 109, 204-206, 247.
Migraciones, emigrantes: 64, 69, 73, 252, 253.
Militares (ejército): 182-185, 322, 356-358, 361-366, 410-412, 415.
Minas, mineros: 72, 73, 254, 255, 262, 374.
Minifundios: 57-60, 207, 208.
Modernidad, modernización: 18, 19, 115.
Monetarismo: 367, 371, 372, 405.
Montoneras: 212.
Moral: 245-247.
Mortalidad infantil: 40, 61.
Movilidad social: 50, 51, 73, 74, 79, 123, 124.
Movimentismo (Brasil): 241-243, 286.
Mujeres: 102-106, 244, 245.

Nación, nacionalismo: 130, 133, 140, 141, 166-168, 189, 368, 369.
Nacional-popular (política): 163-202, 283-288, 307-313, 421, 422, 437-439, 449.
Natalidad: 40.
Núcleos endógenos de desarrollo: 399, 448.

Obreros, clase obrera: 69-75, 167, 168.
Oligarquía: 75-83, 89, 151, 188, 191, 192, 196, 301-306, 360, 423.
Opinión pública: 126-128.

Pacto social: 259, 278, 279, 430, 436.
Padrinazgo: 99, 105, 124.
Parlamento: 300, 315, 316.
Paro: 63, 89.
Participación: 136.
Partidos políticos: 136, 185, 186, 280, 295-300, 424, 426, 427.
Patrimonialismo: 175, 358, 359.
Pelegos: (Brasil): 255-257, 268, 270, 287.
Peones: 61.
Personalización del poder: 172, 173, 195, 413, 414, 420.
Plantaciones: 55.
Poblaciones, pobladores: 62, 63, 65, 104-106, 109, 114, 117, 119, 122, 124, 125, 152, 233-250, 300, 405, 416, 433. 443.
Pobreza: 35, 36, 90, 125, 234, 236.
Poder dual (Bolivia): 162, 167, 272.
Poder popular (Bolivia, Chile): 282.
Populismo: 20, 127, 153, 163-169, 174, 178-187, 196-201, 220, 221, 304, 405, 417, 420.
Populismo revolucionario: 182, 328, 336, 346, 349-351.
Posseiros (Brasil): 215.
Prensa: 126.
Privilegios: 88, 89.
Prostitución: 125.
Protestantes: 108-110.
Protestas (Chile: 242, 267, 408, 409.
Pueblo: 74, 89, 164, 167, 168, 172, 287, 428.
Pueblos jóvenes (Perú), *véase Poblaciones.*

Radicalismo (Argentina): 170, 171.
Reforma agraria: 185, 214, 224-232, 334.
Reforma universitaria: 51.
Regionales, movimientos: 193, 194.
Relevos (México): 59.
Religión: 106-122, 243.
Representatividad: 136, 201, 310, 428, 441.
Represión: 240, 319, 320, 339, 358, 364, 367, 368, 374.
Revolución: 19, 111, 122, 140, 144, 145, 173, 198, 199, 233, 234, 281, 315, 316, 333-341, 410, 436, 440, 441.
Rosca (Bolivia): 173.

Salarios: 71, 72, 75, 393.
Sebastianismo (Brasil): 204.
Segmentación: 42, 384.
Sertão (Brasil): 22.
Siderurgia: 72, 266.
Sierra (Perú, Ecuador): 55, 131, 192.
Sindicalismo campesino: 142, 211, 220-224, 227, 311.
Sindicalismo obrero: 69-72, 167, 168, 179, 186, 251-183, 314, 360, 408.
Sitiantes (Brasil): 58.
Socialismo, Socialista, Partido: 132, 251, 272, 313, 314, 338, 448.
Sub-empleo: 63, 64.

Tasa de interés: 380-382.
Tecnología: 447.
Televisión: 127.
Tenentes (Brasil): 182.
Teología de la liberación: 110-119.
Terceristas: 326.
Términos del cambio: 380-382.
Tortura: 368.

Tridimensionalidad de la acción colectiva: 129-134.
Trotskismo: 219, 254, 262, 322.
Tugurios: 61, 62.

Umbanda (Brasil): 110.
Universidades: 82, 85, 86, 117, 142-148, 342.
Urbanización: 38, 39.
Usinas (Brasil): 59.

Vandorismo (Argentina): 264.
Violencia: 107, 149-154, 201, 234, 303, 318-320, 404.

Yanaconaje (Perú): 56.

Zapatismo: 213, 214, 224.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Índice de países

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Argentina: 21, 23, 35, 36, 38-41, 43, 50, 56, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 75-78, 84-86, 104, 126, 127, 131, 132, 137, 138, 143, 145, 147-149, 154, 161, 170, 171, 176, 178, 185, 186, 198, 200, 241-243, 253, 254, 258, 259, 261, 263-266, 271, 274-276, 278, 293, 296, 298-300, 304, 305, 307, 309, 320, 339, 343, 349, 349, 352, 354, 355, 357, 362, 363, 366-368, 371, 372, 376, 380, 282, 388, 390, 392, 394, 400, 402-405, 407, 408, 410-414, 417, 419, 422, 423, 427, 429, 434, 436-439, 447-449.

Bolivia: 19, 21, 35, 39, 41, 56, 66, 70, 73, 80, 82, 85, 88, 117, 143, 148, 149, 152, 162, 167, 168, 173, 174, 176, 182, 183, 194, 210, 211, 225-228, 230, 232, 242, 254, 261-263, 268, 271-274, 282, 291, 298, 299, 311, 312, 332, 333, 335, 343, 352, 353, 355-357, 365, 366, 368, 374, 376, 380, 392, 394, 400, 402, 408, 416, 417, 428, 429, 431, 433, 434, 436, 440, 445, 446, 449.

Brasil: 21, 34-36, 38-41, 49, 50, 54, 56-58, 60, 63, 66, 70, 71, 73, 75, 78-82, 84, 85, 87, 88, 100, 103, 104, 107, 110, 112, 114-117, 123, 126, 132, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 148-150, 152, 154, 171, 174, 177, 182, 183, 185-190, 193, 197, 198, 204, 205, 207, 215, 220, 220, 221, 237, 238, 240, 253-257, 259, 261, 263-266, 268-272, 274-278, 286, 291, 293, 297-299, 303, 304, 310, 313, 328, 333, 339, 350-354, 356, 357, 362, 363, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 380, 383, 385, 388, 392-394, 396, 397, 400, 402-405, 407, 408, 411, 413-415, 423, 424, 426, 427, 429, 434, 436-440, 445, 449, 450.

Colombia: 21, 36, 39-41, 50, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 70, 71, 75, 79, 84-86, 88, 126, 132, 137, 151, 153, 154, 169, 171, 173, 220, 221, 260, 261, 274, 280-282, 293, 298, 299, 301-305, 307, 309, 320, 343-346, 348, 355, 366, 385, 389, 392, 393, 403, 404, 423, 426, 433, 436, 438, 440.

Costa Rica: 36, 38-41, 56, 58, 66, 71, 76, 83, 85, 143, 175, 179, 190, 299, 355, 361, 392, 393.

Cuba: 19, 20, 35, 40, 63, 133, 134, 140, 144, 150, 153, 183, 225, 277, 285, 307, 310, 321, 322, 325, 327, 328, 330, 331, 333-344, 358, 359, 379, 392, 400, 402, 452.

Chile: 21, 23, 25, 36, 39-41, 49, 50, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 70-72, 74, 75, 77, 80-82, 84, 86, 103, 104, 107, 108, 110, 114, 117, 118, 120, 126, 131-133, 137, 138, 141-143, 145, 146, 149, 150, 152,

154, 162, 168, 177, 180, 182, 183, 185, 186, 190, 193, 195, 197, 226, 228, 229, 235, 236, 240, 242, 244, 247, 248, 253, 259, 263, 267, 274, 276-278, 280-282, 285, 286, 291, 293, 295, 298-300, 303, 305, 306, 309, 313-317, 338, 339, 341, 351-357, 362, 365-368, 370-374, 382, 385, 388, 390, 392-394, 400, 402, 404, 405, 407-410, 413, 417, 415-417, 422, 423, 425, 430, 431, 433, 434, 436, 437, 440, 442, 445, 447, 449.

Ecuador: 37-41, 56, 58, 60, 66, 70, 79, 82, 100, 110, 131, 139, 143, 176, 180, 184, 185, 192, 197, 212, 214, 215, 237, 260, 261, 272-274, 299, 301, 339, 356, 384, 392, 431, 434, 436, 449.

El Salvador: 21, 39, 41, 56, 57, 66, 76, 122, 143, 149, 185, 214, 320, 324, 331, 360, 361, 363, 392, 404, 411, 412.

Granada: 175, 353.

Guatemala: 21, 39-41, 56, 58, 67, 76, 77, 83, 149, 150, 153, 176, 181, 208-210, 216, 219, 230, 320, 322-324, 330, 344, 352, 353, 355, 359-361, 363, 392, 404, 411, 412.

Guayana: 260, 277, 383.

Haití: 35, 39, 40, 58, 63, 117, 150, 321, 353, 359, 392, 407, 412, 416.

Honduras: 35, 36, 39, 56, 63, 84, 185, 324, 329, 356, 361, 363, 392.

Jamaica: 58, 181, 260, 310, 383.

México: 19, 20, 23, 34-36, 41, 49, 55, 56, 58, 60, 63, 66, 700-72, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 100-103, 106, 107, 111, 119, 127, 131, 142, 144, 147, 148, 152-154, 161, 177, 182, 183, 185-188, 191, 198, 206, 210, 213, 214, 217, 222-225, 230-232, 236, 237, 243, 253, 257, 261, 263, 265, 266, 276, 277, 286, 287, 297-300, 308, 309, 341, 353-355, 358, 365, 374, 383-385, 389, 390, 392-395, 500, 402, 408, 417, 423, 424, 426, 429, 433, 434, 436, 438, 439, 441-443, 445, 447, 449.

Nicaragua: 19, 20, 39, 40, 56, 58, 112, 113, 120, 133, 134, 143, 150, 153, 285, 286, 309, 312-331, 341, 344, 353, 358, 392, 393, 441.

Panamá: 39-41, 56, 58, 66, 70, 85, 143, 184, 185, 326, 361, 363, 392, 393, 407.

Paraguay: 39, 56, 183, 263, 264, 366, 367, 375, 392, 393, 402, 411, 415, 423.

Perú: 21, 34-37, 39-41, 55, 56, 58-60, 60, 62, 63, 65, 67, 77, 80, 85, 88, 103, 107, 110, 116, 117, 119, 126, 127, 131-133, 139, 142, 143, 149, 153, 154, 161, 176, 182-185, 191, 197, 210, 214, 216, 218, 220, 225, 226, 230, 235, 236, 254, 255, 260, 261, 272-275, 277, 278, 280, 291, 299, 309, 320, 338, 341, 343, 346-348, 354, 356, 357, 366, 383, 389, 392-394, 400, 402, 404, 411, 413, 415, 423, 429, 433, 439, 440, 445.

República Dominicana: 39, 40, 56, 58, 70, 143, 150, 175, 237, 321, 322, 353, 358, 392.

Surinam: 361, 383.

Trinidad y Tobago: 125, 260, 384.

Uruguay: 21, 36, 39-41, 56, 58, 63, 67, 77, 85, 86, 131, 143, 145, 154, 178, 242, 244, 253, 259, 261, 263, 271, 277, 278, 293, 298, 398, 312, 339, 348, 352, 354, 355, 365, 366, 371, 374, 380, 392, 393, 402, 408, 411, 417, 423, 434, 448, 451.

Venezuela: 21, 36, 38, 40, 41, 56, 58, 62, 63, 66, 70, 71, 84, 85, 101, 107, 114, 132, 137, 139, 143, 153, 173, 175, 181, 186, 192, 222, 225, 242, 243, 259, 278, 280, 281, 291, 299, 301, 307, 308, 337, 339, 342, 344, 349, 354, 355, 366, 383-385, 392-394, 400, 423, 426, 429, 438, 441, 449.

DE MEXICO
INVESTIGACIONES SOCIALES

Espasa Calpe

Este libro podría titularse América Latina en movimento. No se encontrará en él ninguna referencia al alma latinoamericana o a los efectos de la colonización española. Los dramas que aquí se evocan no son tanto los de una miseria intemporal como los de los actores de una historia acelerada, cruzada por migraciones masivas, sublevaciones populares, represiones sangrientas, debates intelectuales, el paso de la esperanza revolucionaria al poder militar y a la idea democrática.

Comprender ese continente aún mal conocido, evaluar sus posibilidades de libertad y de crecimiento es, en la actualidad, una imperiosa necesidad a la que responde la obra de Alain Touraine, síntesis a un tiempo clara y exhaustiva sobre un mundo fascinante por su diversidad y su riqueza, por sus contrastes y su unidad profunda. Un mundo donde el debate político y la acción violenta se enfrentan y combinan sobre un escenario en constante cambio donde el primer puesto corresponde a los actores sociales y no a los sistemas políticos.